

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

INE/CG395/2017

**ACATAMIENTO
SECCIÓN DE EJECUCIÓN SUP-RAP-
124/2013 Y OTROS.**

**SENTENCIAS VINCULADAS SUP-RAP-
118/2013; SUP-RAP-119/2013; SUP-RAP-
120/2013; SUP-RAP-121/2013; SUP-RAP-
122/2013 y SUP-RAP-123/2013
ACUMULADOS; SUP-RAP-124/2013; SUP-
RAP-162/2013; SUP-RAP-164/2013; SUP-
RAP-166/2013; SUP-RAP-168/2013; SUP-
RAP-171/2013; SUP-RAP-32/2014; SUP-
RAP-33/2014 y SUP-RAP-35/2014
ACUMULADOS.**

RECURRENTES: PARTIDOS
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL
TRABAJO Y MOVIMIENTO CIUDADANO.

**ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A DIVERSAS
SENTENCIAS DE LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN CUMPLIMIENTO A LA SECCIÓN
DE EJECUCIÓN RELACIONADA CON EL RECURSO DE APELACIÓN SUP-
RAP-124/2013 Y OTROS, INTERPUESTOS EN CONTRA DE LAS
RESOLUCIONES CG190/2013 Y CG242/2013 RESPECTO DE LAS
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE
LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA
DE LOS CANDIDATOS DE LOS PARTIDOS Y COALICIONES
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012; ASÍ
COMO EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES
ANUALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
NACIONALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL DOCE**

Índice

ANTECEDENTES

- I. Proceso Electoral Federal 2011-2012.
- II. Marco Legal vigente en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 en materia de fiscalización.
- III. Actos materia de Impugnación.
- IV. Medios de Impugnación.
- V. Reforma Constitucional en materia político-electoral 2014.
- VI. Resoluciones de los recursos de apelación.
- VII. Sección de Ejecución.
- VIII. Acatamiento.

CONSIDERANDO

- 1. Competencia.
- 2. Normatividad aplicable.
- 3. Unidad de Medida y Aplicación
- 4. Efectos de la Sección de ejecución.
- 5. Efectos de las sentencias.
- 6. Metodología para el cumplimiento de las ejecutorias en relación a la Sección de Ejecución
- 7. Modificaciones PRI, Dictamen, CG190/2013.
- 8. Modificaciones PRI, Resolución, CG190/2013.
- 9. Modificaciones otrora coalición Compromiso por México, Dictamen, CG190/2013.
- 10. Modificaciones otrora coalición Compromiso por México, Resolución CG190/2013.
- 11. Modificaciones otrora coalición Movimiento Progresista, Dictamen, CG190/2013 y CG242/2013.
- 12. Modificaciones otrora coalición Movimiento Progresista, Resolución, CG190/2013.
- 13. Modificaciones PRI, Dictamen, CG242/2013.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

14. Modificaciones PRI, Resolución, CG242/2013.
15. Comparativo de sanciones PRI, campaña.
16. Comparativo de sanciones otrora coalición Compromiso por México, campaña.
17. Comparativo de sanciones otrora coalición Movimiento Progresista, campaña.
18. Comparativo de sanciones PRI, anuales 2012.
19. Determinación de sanciones PRI, CG190/2013.
20. Determinación de sanciones otrora coalición Compromiso por México, CG190/2013.
21. Determinación de sanciones otrora coalición Movimiento Progresista, CG190/2013.
22. Determinación de sanciones PRI, CG242/2013.

PUNTOS DE ACUERDO.

ANTECEDENTES

I. Proceso Electoral Federal 2011-2012.

- **Inicio del proceso electoral.** El siete de octubre de dos mil once, dio inicio el Proceso Electoral Federal 2011-2012, para la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los integrantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.
- **Coaliciones.** En sesión extraordinaria celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil once, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, aprobó la Resolución **CG391/2011** respecto del convenio de coalición total para postular candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como candidatos a Senadores y Diputados por el principio de mayoría relativa, presentado por los partidos políticos nacionales de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, para contender en el Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalición denominada “**Movimiento Progresista**”.

CONSEJO GENERAL SUP-RAP-124/2013 Y OTROS

En la misma sesión extraordinaria el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, aprobó la Resolución **CG390/2011**, respecto del convenio de coalición parcial para postular a candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como veinte fórmulas de candidatos a Senadores y ciento veinticinco fórmulas de candidatos a Diputados, por el principio de mayoría relativa, presentado por los partidos políticos nacionales Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, para contender en el Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalición denominada Compromiso por México.

Cabe señalar que en sesión extraordinaria celebrada el ocho de febrero de dos mil doce, el Consejo General en comento aprobó la Resolución **CG73/2012**, relativa a la modificación del convenio de coalición parcial aprobado en la Resolución CG390/2011, por el que se modificaron las cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, CUARTA, QUINTA, SEXTA, SÉPTIMA, NOVENA,, DÉCIMO SEGUNDA, DÉCIMO TERCERA y DÉCIMA QUINTA del convenio de la coalición parcial denominada Compromiso por México, a efecto de que la misma se conformara por los partidos políticos nacionales Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

- **Tope máximo de gastos de campaña.** En sesión extraordinaria celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil once, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdos **CG432/2011** y **CG433/2011**, respectivamente, aprobó el tope máximo de gastos de campaña para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, en el marco del proceso electoral referido.

II. Marco Legal vigente en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 en materia de fiscalización.

De conformidad con la reforma constitucional y legal publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete y catorce de enero de dos mil ocho, la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** estableció en el artículo 41, base V, décimo párrafo, que la fiscalización de las finanzas se encontraba a cargo de un órgano técnico del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, dotado de autonomía de gestión.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Consecuente con lo anterior, la reforma legal definió que la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos fuera la encargada de la revisión de los informes que los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales presentaran sobre el origen y destino de los recursos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento; así como la práctica de auditorías, situación contable y financiera de los entes en comento, la cual no estaría limitada por los secretos bancario, fiscal o fiduciario.

Al respecto, el régimen de fiscalización establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en el Reglamento de Fiscalización¹ fijaron los derechos y obligaciones en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos cuyo origen derivara de cualquier tipo de financiamiento, relacionados con su gasto ordinario y de campaña.

En este contexto, los partidos políticos nacionales y en su caso las coaliciones tenían la obligación de presentar diversos informes a la autoridad electoral, relacionados con los ingresos y gastos, entre ellos informes anuales, de precampaña y campaña²; por lo que hace a este último informe la autoridad administrativa electoral realizaba una fiscalización *a posteriori*, esto es, en un periodo posterior al proceso electoral.

Bajo esta tesitura, los informes de campaña se presentaban sesenta días posteriores a la celebración de la jornada electoral, para que la Unidad de Fiscalización de los recursos de los partidos políticos (en adelante Unidad de Fiscalización) revisara en un plazo de ciento veinte días los informes correspondientes, si de la revisión la autoridad advertía la existencia de errores y omisiones técnicas notificaba al ente político para que en un plazo de diez días contados a partir de la notificación presentaran las aclaraciones o rectificaciones pertinentes; existiendo la obligación de la autoridad de notificar si las aclaraciones o rectificaciones presentadas subsanaban las observaciones realizadas, lo anterior en un plazo improrrogable de cinco días.

Vencido el plazo precedente la Unidad de Fiscalización con veinte días para la elaboración del Dictamen Consolidado y Resolución respectiva para que en los tres días siguientes fuera presentado y sometido a consideración del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral.

¹¹ En sesión extraordinaria celebrada el cuatro de julio de dos mil once, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo CG201/2011

² Artículo 83, numeral 1, incisos b); inciso c) e inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente en dos mil doce.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Por lo que hace a los informes anuales, la obligación de presentarlos se realizaba sesenta días hábiles posteriores a la conclusión del ejercicio, mismo plazo con el que contaba la Unidad de Fiscalización para revisar los informes. Respecto de la existencia de errores y omisiones técnicas, aclaraciones y rectificaciones; así como la elaboración del Dictamen Consolidado y Resolución correspondiente, la Unidad de Fiscalización contaba con los mismos plazos señalados en el párrafo precedente.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 84 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 276, numeral 1 del Reglamento de fiscalización aplicables en dos mil doce.

Finalmente, el régimen de fiscalización contemplaba la competencia y facultad de investigación de la Unidad de Fiscalización para tramitar, sustanciar y formular los proyectos de resolución relacionados con los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.³

Fiscalización anticipada. En sesión extraordinaria celebrada el dieciséis de mayo de dos mil doce, el Consejo General aprobó el Acuerdo **CG301/2012**, relativo a la aprobación del programa de fiscalización de los partidos políticos y coaliciones propuesto por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, respecto de los ingresos y gastos de campaña de los candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos para el proceso electoral federal 2011-2012; así como la presentación anticipada del dictamen consolidado y proyecto de resolución de la misma elección, el cual debía presentarse a más tardar el treinta de enero de dos mil trece.⁴

Consecuente con lo anterior se sometió a consideración del Consejo General en comento, el Dictamen Consolidado de la revisión anticipada de los informes de ingresos y gastos de campaña relativos a los candidatos presidenciales en el Proceso Electoral Federal 2011-2012.

³ Procedimiento que se rigió de conformidad con el Capítulo Quinto, Del procedimiento en materia de quejas sobre el financiamiento y gasto de los partidos políticos, en relación al artículo 81, numeral 1, inciso n) y o); así como el Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización.

⁴ El treinta de enero de dos mil trece, el Consejo General determinó aplazar el análisis, discusión y resolución del dictamen consolidado relativo a la revisión anticipada del informe de gastos de campaña de los candidatos a la Presidencia de la República por un plazo de siete días.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Al respecto, en dicha sesión el Consejo General aprobó el Acuerdo **CG49/2013**, mediante el cual determinó no aprobar el Dictamen Consolidado de la revisión anticipada, a efecto de que elaborara uno nuevo y considerara de manera integral y consolidada, los informes de ingresos y gastos de las campañas de los candidatos a los cargos de Senadores y Diputados Federales.

III. Actos materia de Impugnación.

- En sesión extraordinaria celebrada el quince de julio de dos mil trece, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral aprobó la Resolución **CG190/2013** respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de los candidatos de los partidos políticos y coaliciones correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012.
- En sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil trece, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral aprobó la Resolución **CG242/2013** respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los Informes Anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales correspondientes al ejercicio dos mil doce.
- En sesión extraordinaria celebrada el nueve de octubre de dos mil trece, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral aprobó la Resolución **CG270/2013** respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, instaurado en contra de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano como integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista, identificado como P-UFRPP 29/13
- En sesión extraordinaria celebrada el nueve de octubre de dos mil trece, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral aprobó la Resolución **CG271/2013** respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, instaurado en contra de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano como integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista, identificado como P-UFRPP 33/13

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- En sesión ordinaria celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil catorce, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral aprobó la Resolución **CG103/2014** respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, instaurado en contra de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano como integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista, identificado como P-UFRPP 08/13

IV. Medios de Impugnación. Inconformes con las resoluciones referidas en el antecedente que precede, diversos institutos políticos interpusieron recursos de apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los términos establecidos en la Ley General de Medios de Impugnación en materia Electoral, en atención a la temporalidad del acto recurrido.

A continuación se presentan los casos en comento

Resolución impugnada	Partido recurrente	Número de Recurso de Apelación
CG190/2013 Informes de Campaña PEF 2011-2012	Movimiento Ciudadano	SUP-RAP-118/2013
	Partido Verde Ecologista de México	SUP-RAP-119/2013
	Partido del Trabajo	SUP-RAP-120/2013
	Partido Revolucionario Institucional	SUP-RAP-121/2013
	Partido Acción Nacional	SUP-RAP-122/2013 Y SUP-RAP-123/2013 acumulados
	Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo	SUP-RAP-124/2013
CG242/2013 Informes Anuales 2012	Partido Revolucionario Institucional	SUP-RAP-162/2013
	Partido de la Revolución Democrática	SUP-RAP-164/2013
	Movimiento Ciudadano	SUP-RAP-166/2013
	Partido del Trabajo	SUP-RAP-168/2013
CG 270/2013	Partido de la Revolución Democrática	SUP-RAP-172/2013

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Resolución impugnada	Partido recurrente	Número de Recurso de Apelación
Procedimiento Oficioso P-UFRPP-29/13	Movimiento Ciudadano	SUP-RAP-174/2013
	Partido del Trabajo	SUP-RAP-178/2013
CG271/2013 Procedimiento Oficioso P-UFRPP-33/13	Partido de la Revolución Democrática	SUP-RAP-173/2013
	Movimiento Ciudadano	SUP-RAP-175/2013
	Partido del Trabajo	SUP-RAP-177/2013
	Partido Verde Ecologista de México	SUP-RAP-171/2013
CG103/2014 Procedimiento Oficioso P-UFRPP 08/13	Partido de la Revolución Democrática	SUP-RAP-32/2014
	Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo	SUP-RAP-33/2014 y SUP-RAP-35/2014 acumulados

V. Reforma Constitucional en materia político-electoral 2014.

El proceso de transición a la democracia en México se ha realizado, mediante modificaciones a las normas e instituciones electorales, tanto constitucionales como legales, teniendo objetivos específicos que, en términos generales, tendieron a reforzar los cambios que previamente se habían impulsado, o bien a introducir nuevas transformaciones que venían a sumarse al mejoramiento del sistema electoral mexicano.

Así pues, en 1993 el sistema electoral cambió las atribuciones que tenía el Instituto Federal Electoral, dotándolo de nuevas y muy importantes facultades, entre ellas la función de fiscalizar los recursos de los partidos políticos, así como verificar que éstos cumplieran con las disposiciones en materia de financiamiento, tanto por lo que hacía al destino de sus recursos, como a los recién introducidos límites y prohibiciones en el origen de los recursos de tipo privado que obtenían y, en caso contrario, aplicar las sanciones correspondientes.

Si bien la capacidad fiscalizadora del Instituto Federal Electoral era limitada, permitió conocer por medio de la revisión de los informes anuales y de campaña de los partidos políticos, las dimensiones de los recursos (públicos y privados) que fueron utilizados, así como la desigualdad de la capacidad de gasto que prevalecía en ese entonces.

CONSEJO GENERAL SUP-RAP-124/2013 Y OTROS

En 1996, se reforzaron las atribuciones de fiscalización y control de recursos del Instituto, al facultarlo para la realización de auditorías, visitas de verificación, así como, para sustanciar procedimientos administrativos en contra de los partidos.

Asimismo, en 2007, se modificaron de forma sustancial las reglas que regulaban el financiamiento público, robusteciendo el actuar de la autoridad a efecto de verificar que los recursos partidistas tuvieran un origen lícito y se destinaran a los fines y actividades políticas que estos persiguen, a través de una Unidad de Fiscalización perteneciente al Consejo General del Instituto, que contaba con autonomía técnica, la cual proponía las sanciones correspondientes a las irregularidades encontradas.

Precisado lo anterior, debe señalarse que la reforma constitucional en materia electoral del año 2014, transformó las instituciones y las reglas electorales que rigen los procesos democráticos en México, fortaleciendo a la autoridad electoral, transformando su carácter de federal a nacional, generando así una nueva coordinación entre ésta y los organismos locales; en virtud de lo anterior, se transformó al Instituto Federal Electoral (IFE) en un nuevo organismo público autónomo de carácter nacional llamado Instituto Nacional Electoral (INE).

En este sentido, el Instituto Nacional Electoral fue dotado de nuevas atribuciones de carácter nacional, tales como organizar la elección de los dirigentes de los partidos políticos, garantizar que los candidatos independientes tengan acceso a tiempos en radio y televisión, organizar las consultas populares, entre otras; además de estas funciones, cuenta con las siguientes facultades exclusivas en las elecciones locales:

- La capacitación electoral, la ubicación de casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas.
- La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales.
- El padrón y la lista de electores.
- La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.

Adicionalmente, se le facultó para expedir lineamientos o normatividad en las siguientes materias en el ámbito local:

- Programas de resultados preliminares.
- Encuestas o sondeos de opinión.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- Observación electoral.
- Conteos rápidos.
- Impresión y producción de materiales electorales.

En cumplimiento a esta reforma, el veintitrés de mayo de dos mil catorce fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los decretos que expiden las leyes generales de Delitos Electorales, de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos, así como las modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Este conjunto de ordenamientos modifica la relación entre Poderes y entre éstos y los ciudadanos en dos grandes aspectos:

- a) Se modernizan las instituciones del régimen político para fomentar un mayor equilibrio entre Poderes, facilitar el diálogo y los acuerdos, así como para consolidar una democracia de resultados.
- b) Se transforman las instituciones y las reglas de la competencia electoral para fortalecer la participación ciudadana y brindar mayor certidumbre a los comicios tanto locales como federales.

Al mismo tiempo, se creó un nuevo sistema de fiscalización de carácter nacional con la finalidad de que el manejo de los recursos utilizados por los diversos entes políticos fuera más transparente, que comprende las elecciones federales y locales, a los partidos políticos nacionales y locales, aspirantes y a los candidatos independientes. Asimismo, la Unidad de Fiscalización se transformó en un órgano técnico, dotado de autonomía de gestión, dependiente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General.

Además, se establecieron reglas de coordinación entre el Instituto y las autoridades de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para informar sobre operaciones que sean objeto de observación respecto de su origen, así como de aquellas disposiciones en efectivo relevantes o inusuales.

Se estableció que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a través de su Comisión de Fiscalización es quien ejerce las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico de la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas, mediante la Unidad Técnica de Fiscalización, misma que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

los sujetos obligados respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como la sustanciación de las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los entes fiscalizables.

Al respecto, es dable señalar que el nueve de julio de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo CG93/2014 por el cual se determinaron las normas de transición en materia de fiscalización, en el cual por lo que hace al órgano competente de la fiscalización en materia electoral, se estableció en el Punto SEGUNDO, inciso a), fracción IV, que cualquier referencia a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos deberá entenderse dirigida a la Unidad Técnica de Fiscalización, independientemente de la temporalidad.

En virtud de lo anterior, a fin de otorgar certeza a los sujetos obligados respecto de la transición que generó la reforma electoral, en relación a quien es la autoridad sustituta para conocer y resolver los asuntos y/o procedimientos que quedaron pendientes al momento de la emisión de la Reforma Constitucional en materia de fiscalización, se señala que lo es el Instituto Nacional Electoral, en conjunto con la Comisión de Fiscalización y su Unidad Técnica.

VI. Resoluciones de los recursos de apelación. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió los recursos de apelación referidos, determinando lo siguiente:

Resolución impugnada	Número de Recurso de Apelación	Aprobación/Sentido
CG190/2013 Informes de Campaña PEF 2011-2012	SUP-RAP-118/2013	Aprobada en Sesión pública el 25 de febrero de 2015. Sentido: <i>"ÚNICO.- Se revoca la imposición de la sanción y su correspondiente individualización, en términos de lo expuesto en los Considerandos Séptimo y Octavo de esta sentencia."</i>
	SUP-RAP-119/2013	Aprobada en Sesión pública el 25 de febrero de 2015. Sentido: <i>"ÚNICO.- Se declara infundada la pretensión del Partido Verde Ecologista de México en el presente recurso de apelación."</i>

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Resolución impugnada	Número de Recurso de Apelación	Aprobación/Sentido
	SUP-RAP-120/2013	<p>Aprobada en Sesión pública el 25 de febrero de 2015.</p> <p>Sentido:</p> <p><i>“ÚNICO. Se revoca la imposición de la sanción y su correspondiente individualización, en términos de lo expuesto en la parte final del Considerando Cuarto y el Considerando Quinto de esta sentencia.”</i></p>
	SUP-RAP-121/2013	<p>Aprobada en Sesión pública el 25 de febrero de 2015.</p> <p>Sentido:</p> <p><i>“ÚNICO. Se revoca la resolución CG190/2013 dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, autoridad sustituida por el Instituto Nacional Electoral, para los efectos que se precisan en el considerando SÉPTIMO de la presente resolución.”</i></p>
	SUP-RAP-122/2013 Y SUP-RAP-123/2013 acumulados	<p>Aprobada en Sesión pública el 25 de febrero de 2015.</p> <p>Sentido:</p> <p>PRIMERO.- Se acumula el recurso de apelación SUP-RAP-123/2013, al diverso SUP-RAP-122/2013, por ser éste el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, en consecuencia glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos del recurso acumulado.</p> <p>SEGUNDO.- Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, la resolución CG190/2013, de fecha quince de julio de dos mil trece, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el “DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA DE LOS CANDIDATOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012.”</p>
	SUP-RAP-124/2013	<p>Aprobada en Sesión pública el 6 de mayo de 2015.</p> <p>Sentido:</p> <p>ÚNICO.- Se MODIFICA, para los efectos precisados en el considerado 7 de la sentencia, la resolución CG190/2013 dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, autoridad sustituida por el Instituto Nacional Electoral.</p>

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Resolución impugnada	Número de Recurso de Apelación	Aprobación/Sentido
CG242/2013 Informes Anuales 2012	SUP-RAP-162/2013	<p>Aprobada en Sesión pública el 12 de mayo de 2015.</p> <p>Sentido:</p> <p>PRIMERO. Se DEJA INTOCADA, en los puntos precisados en este fallo, la resolución CG242/2013 emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, autoridad sustituida por el Instituto Nacional Electoral.</p> <p>SEGUNDO. Se REVOCA, la imposición de la sanción y su correspondiente individualización, en términos de lo expuesto en esta ejecutoria.</p>
	SUP-RAP-164/2013	<p>Aprobada en Sesión pública el 25 de febrero de 2015.</p> <p>Sentido:</p> <p>PRIMERO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, la resolución CG242/2013, del Consejo General del Instituto Federal Electoral autoridad sustituida por el Consejo General del Instituto Nacional, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio dos mil doce.</p> <p>SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Federal Electoral autoridad sustituida por el Consejo General del Instituto Nacional para que, con independencia de lo que se resuelva en el recurso de apelación SUP-RAP-124/2013, sume a los gastos de campaña de dos mil doce, el gasto determinado en la Conclusión 73 de la resolución impugnada.</p> <p>TERCERO. Para los efectos a que haya lugar, tómesese en cuenta lo dispuesto en la última parte del considerando SEXTO de la presente ejecutoria.</p>
	SUP-RAP-166/2013	<p>Aprobada en Sesión pública el 25 de febrero de 2015.</p> <p>Sentido:</p> <p>ÚNICO. Se revoca, en la materia de la impugnación, el acuerdo reclamado, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria.</p>
	SUP-RAP-168/2013	<p>Aprobada en Sesión pública el 25 de febrero de 2015.</p> <p>Sentido:</p> <p>ÚNICO. Se revoca la imposición de la sanción y su correspondiente individualización, relativa a la conclusión 33, conforme a lo resuelto en el</p>

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Resolución impugnada	Número de Recurso de Apelación	Aprobación/Sentido
		apartado B, del considerando quinto, para los efectos precisados en la presente ejecutoria.
CG 270/2013 Procedimiento Oficioso P-UFRPP-29/13	SUP-RAP-172/2013	<p>Aprobada en Sesión pública el 25 de febrero de 2015.</p> <p>Sentido:</p> <p>PRIMERO. Se confirma, por cuanto hace a los gastos motivo de controversia, la determinación contenida en la resolución identificada con la clave CG270/2013, para que sean cuantificados en su totalidad, para verificar el tope de gastos de campaña del candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, postulado por la Coalición "Movimiento Progresista".</p> <p>SEGUNDO. Se revoca la imposición de la sanción y su correspondiente individualización, en términos de lo expuesto en el considerando QUINTO, para los efectos precisados en los considerandos SEXTO y SÉPTIMO, de esta sentencia.</p>
	SUP-RAP-174/2013	<p>Aprobada en Sesión pública el 25 de febrero de 2015.</p> <p>Sentido:</p> <p>ÚNICO. Se revoca la imposición de la sanción y su correspondiente individualización, en términos de lo expuesto en el considerando conducente por lo que hace a Movimiento Ciudadano, la resolución CG270/2013.</p>
	SUP-RAP-178/2013	<p>Aprobada en Sesión pública el 25 de febrero de 2015.</p> <p>Sentido:</p> <p>ÚNICO. Se revoca el acuerdo CG270/2013, de nueve de octubre de dos mil trece, relativo a la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, INSTAURADO EN CONTRA DE LOS PARTIDOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO Y MOVIMIENTO CIUDADANO, COMO INTEGRANTES DE LA OTRORA COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA, IDENTIFICADO COMO P-UFRPP 29/13, por las razones expuestas en la última parte del considerando quinto de esta ejecutoria, en cuanto a la individualización de la sanción impuesta al Partido del Trabajo.</p>

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Resolución impugnada	Número de Recurso de Apelación	Aprobación/Sentido
CG271/2013 Procedimiento Oficioso P-UFRPP-33/13	SUP-RAP-173/2013	<p>Aprobada en Sesión pública el 25 de febrero de 2015.</p> <p>Sentido:</p> <p>ÚNICO. Se revoca la resolución CG271/2013, de fecha nueve de octubre de dos mil trece, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, autoridad sustituida por el Instituto Nacional Electoral, respecto de la imposición de la sanción económica y su correspondiente individualización, en términos de lo expuesto en el considerando OCTAVO, para los efectos precisados en los considerandos NOVENO y DÉCIMO, de esta sentencia.</p>
	SUP-RAP-175/2013	<p>Aprobada en Sesión pública el 25 de febrero de 2015.</p> <p>Sentido:</p> <p>ÚNICO. Se revoca la imposición de la sanción y su correspondiente individualización, en términos de lo expuesto en la parte final del Considerando Tercero y el Considerando Cuarto de esta sentencia.</p>
	SUP-RAP-177/2013	<p>Aprobada en Sesión pública el 25 de febrero de 2015.</p> <p>Sentido:</p> <p>ÚNICO. Se revoca la resolución CG271/2013, del Consejo General del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, instaurado en contra de la otrora Coalición “Movimiento Progresista”, integrada por el recurrente y los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, identificado con la clave P-UFRPP 33/13, para el efecto de que el Instituto Nacional Electoral proceda a emitir una nueva, atendiendo a las consideraciones expuestas en el apartado B del considerando SEXTO, y de conformidad con lo señalado en los considerandos SÉPTIMO y OCTAVO de la presente ejecutoria.</p>
	SUP-RAP-171/2013	<p>Aprobada en Sesión pública el 25 de febrero de 2015.</p> <p>Sentido:</p> <p>ÚNICO. En la materia de impugnación, se confirma la resolución la resolución CG271/2013, emitida el nueve de octubre de</p>

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Resolución impugnada	Número de Recurso de Apelación	Aprobación/Sentido
		dos mil trece por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales P-UFRPP 33/13.
CG103/2014 Procedimiento Oficioso P-UFRPP 08/13	SUP-RAP-32/2014	<p>Aprobada en Sesión pública el 25 de febrero de 2015.</p> <p>Sentido:</p> <p>ÚNICO. Se revoca la "Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral) respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, instaurado en contra de la otrora Coalición Movimiento Progresista, integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, identificado como P-UFRPP 08/13" de veinticuatro de febrero de dos mil catorce, identificada con el número CG103/2014, para el efecto de que el Instituto Nacional Electoral proceda a emitir una nueva, atendiendo a las consideraciones expuestas en el considerando QUINTO de la presente ejecutoria.</p>
	SUP-RAP-33/2014 y SUP-RAP-35/2014 acumulados	<p>Aprobada en Sesión pública el 25 de febrero de 2015.</p> <p>Sentido:</p> <p>PRIMERO. Se ordena la acumulación de los expedientes SUP-RAP-35/2014, al diverso expediente SUP-RAP-33/2014. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos a los expedientes acumulados.</p> <p>SEGUNDO. Se revoca, en la materia de la impugnación, el acuerdo reclamado, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria.</p>

Es importante señalar que la autoridad jurisdiccional al resolver los recursos de apelación referidos, determinó abrir una **sección de ejecución** al advertir identidad en algunas temáticas expuestas en los agravios hechos valer por los recurrentes en los medios de impugnación interpuestos, en los cuales se realizaron interpretaciones de la normatividad aplicable a los procedimientos de fiscalización, los cuales generan efectos que repercuten en varias de las resoluciones emitidas por la autoridad responsable.

Consecuentemente, en las sentencias de mérito la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisó que se debían tomar en consideración todas las resoluciones que incidieran en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, para la revisión tanto de **gastos de campaña** en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012; así como los **Informes Anuales** de los ingresos y gastos relativos al ejercicio dos mil doce.

Por lo que en las ejecutorias se estableció que la sección de ejecución se abriría una vez resuelto con el último recurso de apelación, en este caso, de acuerdo con lo referido en el cuadro en párrafos precedentes, esto es la sentencia identificada con el número **SUP-RAP-124/2013**, por tanto, la sección de ejecución se identificará con este último expediente.

VII. Sección de Ejecución. El dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó al ahora Instituto Nacional Electoral autoridad sustituta del entonces Instituto Federal Electoral, la Sección de Ejecución relativa a los recursos de apelación citados en el **antecedente IV** del presente acatamiento.

Al respecto, determinó lo siguiente:

“(…)

En efecto, la ejecución constituye el acto a través del cual se culmina la actividad jurisdiccional y se materializa lo resuelto en una sentencia. Con ella se asegura la estabilidad en la aplicación de la justicia y se garantiza el reconocimiento de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones determinados en la decisión judicial. Por ende, es al órgano jurisdiccional que dictó la sentencia definitiva y firme al cual le corresponde realizar los actos necesarios para llevar a cabo dicha ejecución.

Existen supuestos en los que la materia de impugnación expuesta en sendos medios de defensa puede estar vinculada con diversos actos, sin que exista una conexidad en la causa que exija su acumulación desde el inicio del proceso. En esos casos, lo resuelto en las respectivas sentencias genera un procedimiento complejo para su ejecución, por lo cual, con la finalidad de armonizar y facilitar el cumplimiento de esos fallos, el órgano jurisdiccional requiere implementar una sección específica para lograr la ejecución.

*En materia electoral, lo ordinario es que la Sala que resuelve un juicio o recurso haga del conocimiento de las autoridades u órganos responsables los actos que deben realizar para la ejecución de la sentencia; sin embargo, la ley adjetiva reconoce la posibilidad de que las Salas del Tribunal ordenen **la apertura de una sección de ejecución**, con la finalidad de concentrar los efectos determinados en cada una de las sentencias para su debida ejecución.⁵*

Si bien la apertura de una sección de ejecución se encuentra en el Título Cuarto de la ley referida, en el cual se regula lo relativo al juicio de inconformidad, es jurídicamente válido que dicha sección se implemente en los demás medios de impugnación en materia electoral, porque constituye un instrumento procesal a través del cual las Salas del Tribunal Electoral cumplen con su deber de vigilar y proveer lo necesario para que se lleve a cabo la plena ejecución de sus resoluciones, a fin de garantizar el derecho de tutela judicial efectiva.

Conforme con lo anterior es que se considera que a esta Sala Superior le competen conocer la presente sección de ejecución, al haber sido la que emitió las sentencias en los recursos de apelación en los cuales se conoció y resolvió lo inherente a la fiscalización gastos de campaña del proceso electoral dos mil once – dos mil doce (2011-2012) y de los informes anuales de ingresos y egresos del ejercicio dos mil doce (2012), en las cuales se ordenó la apertura de una sección específica a fin de precisar los alcances de los efectos emitidos en cada una de esas sentencias.

2. Precisiones respecto de los efectos de ejecución de los recursos de apelación al rubro citados. *En las sentencias se ordenó la integración de la sección de ejecución de los recursos citados al rubro, con la finalidad de precisar los efectos de los fallos. Si bien en dichas sentencias se señaló que en la sección debían integrarse todas las sentencias relacionadas con la fiscalización tanto de gasto ordinario 2012, como de campaña para el procedimiento federal electoral 2011-2012, para los efectos de la presente sección de ejecución, **no se integrarán las resoluciones emitidas en los expedientes SUP-RAP-119/2013, SUP-RAP-122/2013 y SUP-RAP-123/2013 acumulados, y SUP-RAP-171/2013, porque no produjeron algún efecto** que, en su*

⁵ Artículo 57, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

caso, debiera tomarse en consideración o pudiera impactar en las decisiones y criterios tomados en las otras resoluciones, ya que, como puede advertirse en las sentencias respectivas, esta Sala Superior determinó confirmar en sus términos las resoluciones impugnadas correspondientes, al declarar infundados los agravios expuestos por los respectivos accionantes.

Por tanto, las sentencias radicadas con los siguientes expedientes son las que integrarán la sección de ejecución:

Resolución del IFE impugnada	Partido recurrente	Número de Recurso de Apelación	Fecha de resolución del Recurso de Apelación
CG190/2013	<i>Movimiento Ciudadano</i>	<i>SUP-RAP118/2013</i>	<i>25 de febrero de 2015</i>
	<i>Partido del Trabajo</i>	<i>SUP-RAP-120/2013</i>	<i>25 de febrero de 2015</i>
	<i>Partido Revolucionario Institucional</i>	<i>SUP-RAP-121/2013</i>	<i>25 de febrero de 2015</i>
	<i>Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo</i>	<i>SUP-RAP-124/2013</i>	<i>6 de mayo de 2015</i>
CG242/2013	<i>Partido Revolucionario Institucional</i>	<i>SUP-RAP-162/2013</i>	<i>12 de marzo de 2015</i>
	<i>Partido de la Revolución Democrática</i>	<i>SUP-RAP-164/2013</i>	<i>25 de febrero de 2015</i>
	<i>Movimiento Ciudadano</i>	<i>SUP-RAP-166/2013</i>	<i>25 de febrero de 2015</i>
	<i>Partido del Trabajo</i>	<i>SUP-RAP-168/2013</i>	<i>25 de febrero de 2015</i>
CG270/2013	<i>Partido de la Revolución Democrática</i>	<i>SUP-RAP-172/2013</i>	<i>25 de febrero de 2015</i>
	<i>Movimiento Ciudadano</i>	<i>SUP-RAP-174/2013</i>	<i>25 de febrero de 2015</i>
	<i>Partido del Trabajo</i>	<i>SUP-RAP-178/2013</i>	<i>25 de febrero de 2015</i>

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

<i>Resolución del IFE impugnada</i>	<i>Partido recurrente</i>	<i>Número de Recurso de Apelación</i>	<i>Fecha de resolución del Recurso de Apelación</i>
CG271/2013	<i>Partido de la Revolución Democrática</i>	<i>SUP-RAP-173/2013</i>	<i>25 de febrero de 2015</i>
	<i>Movimiento Ciudadano</i>	<i>SUP-RAP-175/2013</i>	<i>25 de febrero de 2015</i>
	<i>Partido del Trabajo</i>	<i>SUP-RAP-177/2013</i>	<i>25 de febrero de 2015</i>
CG103/2014	<i>Partido de la Revolución Democrática</i>	<i>SUP-RAP-32/2014</i>	<i>25 de febrero de 2015</i>
	<i>Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo</i>	<i>SUP-RAP-33/2014 y SUP-RAP-35/2014 acumulados</i>	<i>25 de febrero de 2015</i>

[Énfasis añadido]

VIII. Acatamiento. En cumplimiento a lo precedente, de conformidad con lo establecido en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c) y d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables.

Consecuentemente la Unidad Técnica de Fiscalización somete a consideración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el proyecto de acuerdo que acata a cabalidad lo determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 numeral 1, inciso aa), 377, 380, numeral 1, incisos a) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por

violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios en materia de fiscalización.

2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones al Reglamento de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, mediante Acuerdo **INE/CG875/2016**^[1], respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.

Al respecto, el artículo **TERCERO** transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece de manera expresa que:

“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.”

Aunado a ello, el Acuerdo **INE/CG93/2014** del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se determinan normas de transición en materia de fiscalización, establece en el Punto de Acuerdo **SEGUNDO**, inciso b), fracción I, lo siguiente:

*“**SEGUNDO.-** Se aprueban las normas de transición en materia de fiscalización en los términos siguientes:*

(...)

b) Por lo que hace a las normas de transición competenciales.

I.- Los procedimientos administrativos de fiscalización en trámite y pendientes de resolución a cargo de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos se transmiten a la Unidad Técnica de Fiscalización. Dichos asuntos serán tramitados y resueltos de conformidad con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento de Fiscalización, en la parte sustantiva. Por lo que respecta a la parte

^[1] Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante Acuerdo INE/CG263/2014 y modificado a través de los Acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015 e INE/CG320/2016.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

procedimental, se aplicará la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.”

En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron las observaciones que dieron origen a las Resoluciones respecto de las irregularidades encontradas en los Dictámenes Consolidados de la revisión de los Informes de Campaña y Anuales de los partidos políticos nacionales correspondientes al año dos mil doce, materia del presente, por lo que deberá aplicarse lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente al veintitrés de mayo de dos mil catorce, así como al Acuerdo CG201/2011, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de julio de dos mil once, mediante el cual se expidió el Reglamento de Fiscalización y se abrogaron diversos reglamentos.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes relevantes, identificada con el rubro: “*RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL*”, no existe retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la resolución de mérito, se aplicará la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

3. Unidad de Medida y Actualización. Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país⁶, mismo que para el ejercicio 2016, corresponde a \$73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N.).

Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo,

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

publicada en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece *“A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.”*

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización.

Bajo esta tesitura, las multas que se actualicen en el presente acatamiento **(Faltas formales y sustanciales)** originalmente se calculan con base en el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en el ejercicio **dos mil doce**, en atención al año en que sucedieron los hechos investigados, equivalente a **\$62.33 (sesenta y dos pesos 33/100 M.N.)**, no obstante los días de salario mínimo resultantes se convertirán a Unidad de Medida y Actualización vigente en 2017, equivalente a **\$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.)** en la individualización e imposición de la sanción que en derecho corresponda.

Sirve de apoyo a la referida conversión, la Tesis **LXXVII/2016** emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el rubro **MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.**

4. Efectos de la Sección de Ejecución. Que el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, notificó al Instituto Nacional Electoral la Sección de Ejecución relacionada con el recurso de apelación **SUP-RAP-124/2013**; así como con diversos recursos vinculados al mismo.

En este sentido, al advertirse la existencia de efectos que deben aplicarse en varios apartados de las resoluciones materia de acatamiento, así como efectos que únicamente inciden en un partido político, esta autoridad responsable con la finalidad de atender a cabalidad lo ordenado por la autoridad jurisdiccional estará a los efectos establecidos en la sección de ejecución en concordancia con el

análisis de fondo y los efectos respectivos de las ejecutorias correspondientes las cuales serán materia de estudio en considerandos posteriores. A continuación se transcribe la parte conducente a propósito de los efectos de la sección de ejecución y las temáticas involucradas.

“(…)

A. Sentencias con efectos en más de una resolución:

Tema 1. Reclasificación de gastos ordinarios a erogaciones de campaña

*Con motivo del análisis que hizo esta Sala Superior a la resolución CG242/2013, relativo a los informes anuales de ingresos y egresos del ejercicio dos mil doce (2012) e impugnado por el Partido de la Revolución Democrática y radicado con el expediente número SUP-RAP-164/2013; en dicha sentencia se advirtió que la autoridad responsable en dicho informe anual, detectó que los integrantes de la otrora coalición "Movimiento Progresista", integrada por los partidos políticos Movimiento Ciudadano, del Trabajo y el recurrente, **registraron gastos que debían ser cuantificados como gastos de campaña y no como ordinarios**, de ahí que la responsable determinara en la Conclusión 73⁷ de la resolución impugnada un incremento en el rebase de topes de gastos de campaña.*

Con base en dicha detección de registro equivocado de los gastos citados, en la sentencia en comento se ordenó al Instituto Nacional Electoral:

“[...]

*No pasa inadvertido que la autoridad responsable, al resolver sobre el **informe de gastos ordinarios 2012** detectó gastos que no correspondían a actividades ordinarias, sino que debían computarse como gastos de campaña, situación que llevó a determinar un gasto excedente al tope de gastos de campaña por un monto de \$2,309,711.79 atribuibles a doce candidatos a distintos cargos de elección popular.*

*Sobre el particular, se tiene que el gasto de campaña detectado en el **informe de gastos ordinarios 2012** tiene una estrecha relación con el monto encontrado en el **informe de gastos de campaña 2012**.*

⁷ La autoridad responsable estableció en la resolución CG242/2013, conclusión 73, en la que determinó que: “Los partidos integrantes de la otrora Coalición Total ‘Movimiento Progresista’ reportaron gastos de campaña en la revisión del Informe Anual 2012, mismos que al ser aplicados a los entonces candidatos de dicha coalición, se determinó un incremento en el rebase del tope de gastos de campaña de 12 candidatos a puestos de elección popular, por un excedente de \$2’309,711.79.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

*En ese orden de ideas, dado el gasto de campaña se encuentra pendiente de resolver en el recurso de apelación SUP-RAP-124/2013; esta Sala Superior **ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que, con independencia de las modificaciones que realice al informe de gastos de campaña 2012 (con motivo de lo que se resuelva en el recurso de apelación SUP-RAP-124/2013) las cantidades determinadas en la Conclusión 73 de la resolución CG242/2013 relativa al Informe de gastos ordinarios 2012 como gastos de campaña, deberán ser tomadas en cuenta por la autoridad responsable en la resolución CG190/2013 relativa al Informe de gastos de campaña 2012. [...]**.*

Por tanto, la responsable deberá proceder a:

- a) **Reclasificar** las cantidades de la conclusión 73 a **gastos de campaña**; y
- b) Sumar el gasto, al gasto de campaña reportado y, en su caso, determinar lo que en Derecho proceda respecto del tope de gastos de campaña.

Tema 2. Aplicaciones de recursos de campañas coaligadas a campañas no coaligadas e incongruencias en la determinación del costo promedio en gastos no reportados.

En el recurso de apelación identificado con el número SUP-RAP-124/2013, en el cual se impugnó la resolución CG190/2013, relativa a irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña, por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, este órgano jurisdiccional determinó que los recurrentes tenían razón, en particular, respecto de:

*** Procedencia de aplicaciones de recursos de campañas coaligadas a campañas individuales**

En relación a este tema, se estimó que la responsable no analizó si constituía una conducta que ameritara sanción, al aplicar recursos económicos de las campañas de la coalición a campañas que no formaron parte del convenio de coalición (artículos 98, párrafo 2, del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 125, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización).

Al respecto, la Sala Superior determinó que: "[...] a) En lo concerniente al subtema "III. Tope de gastos de campaña y prorratio a candidatos no coaligados", se ha considerado fundado el punto 4 de la síntesis de agravios

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

relacionados, en el que los apelantes alegaron violación a lo dispuesto en los artículos 98, párrafo 2, del Código y 125, párrafo 1, del Reglamento.

En consecuencia, la autoridad responsable deberá analizar si la conducta consistente en aplicar recursos económicos de las campañas de candidatos propuestos por la coalición "Compromiso por México", a campañas de candidatos que no formaron parte del convenio de coalición, vulneró lo dispuesto en los artículos 98, párrafo 2 y 125, párrafo 1 citados y, a partir de la conclusión a la que arribe, actúe en consecuencia. [...]"

*** Incongruencia en el trato de gastos no reportados**

*La Sala Superior determinó que la responsable había aplicado un tratamiento y consecuencias jurídicas distintas a situaciones similares en gastos no reportados, respecto de la conclusión 42-2⁸, ya que en un caso similar había procedido de diversa manera, por lo que esta Sala Superior estimó ordenar al Instituto Federal Electoral, lo siguiente: "[...] b) En lo concerniente a la **conclusión 42-2** (Monitoreo en el Estado de Tabasco) del dictamen consolidado, en relación con la conclusión 119-1 respecto de la coalición Movimiento Progresista, el agravio hecho valer ha sido declarado fundado, en el sentido de que la autoridad responsable dio un trato distinto a situaciones similares. En consecuencia, **se revoca la multa** impuesta sobre la base de la conclusión 42-2 y se ordena a la autoridad responsable, que inicie un procedimiento oficioso, a efecto de determinar y, en su caso **cuantificar el gasto de campaña no reportado precisado en dicha conclusión**, tal como lo hizo respecto de la conclusión 119-1. [...]"*

*** Incongruencias en la determinación del costo promedio**

Respecto de este tema, la Sala Superior consideró que la responsable infringió el principio de objetividad que deben observar los actos y resoluciones electorales, ya que realizó una diferenciación de apreciación del método aplicado para determinar el promedio del costo de bardas en lo concerniente a gastos no reportados por concepto de bardas, cuando lo conducente sea que la determinación del costo por barda sea uno por cada partido político o coalición, de acuerdo con lo reportado en su informe pormenorizado.

⁸ La conclusión 42-2, determinada en la resolución CG190/2013, la autoridad responsable estableció que: "El Instituto Electoral de Tabasco proporcionó el monitoreo realizado en el ámbito local que benefició al candidato a la Presidencia de la República y a candidatos locales, de los cuales 6 mantas y una marquesina no fueron reportados en la contabilidad local ni federal; por lo cual, la coalición no reportó el beneficio obtenido y su consecuente parte proporcional que le corresponde a las campaña (sic) federal de Presidente de la República por \$703.53".

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

De ahí, que se haya estimado que la autoridad deberá realizar la determinación del costo de bardas de manera diferenciada, con base exclusivamente en el promedio de gasto realizado por cada fuerza política en lo individual.

Por tanto, al declarar fundadas esas alegaciones, esta Sala Superior ordenó al Instituto Nacional Electoral, lo siguiente:

[...]

c) En lo concerniente a gastos no reportados por concepto de bardas, la autoridad deberá realizar la determinación del costo de bardas de manera diferenciada, con base exclusivamente en el promedio de gasto realizado por cada fuerza política en lo individual, que de acuerdo con la ‘Metodología utilizada para cuantificar gastos no reportados’ es como sigue:

PARTIDO/COALICION	COSTO DETERMINADO POR BARDAS
<i>Compromiso Por México</i>	<i>\$1,080.00</i>
<i>Movimiento Progresista</i>	<i>403.00</i>
<i>Partido Acción Nacional</i>	<i>440.00</i>
<i>Nueva Alianza</i>	<i>500.00</i>

El resultado de esta nueva determinación de costos de bardas deberá impactar en el nuevo cálculo que la autoridad haga para determinar las cifras que sirvan de base en relación con el rebase de topes de gastos de campaña.

También se deberá reflejar el nuevo costo en la individualización de las sanciones por rebase de tope de gastos de campaña en los casos en que ese problema subsista.

[...]

*En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral deberá proceder conforme a lo previsto en dichas determinaciones, para que, de ser el caso, **realice los ajustes en relación con los gastos de campaña y sus consecuencias jurídicas respectivas.***

Tema 3. Individualización de la sanción a los partidos políticos que integraron la coalición ‘Movimiento Progresista’.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En las sentencias que se especifican en el cuadro que posteriormente se insertan emitidas por esta Sala Superior, se advirtió que la autoridad responsable determinó sancionar a la coalición "Movimiento Progresista" por el rebase de topes de gastos de campaña, en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y que al respecto, sancionó con multa a sus integrantes, con base en la interpretación que realizó de la palabra "equivalentes", prevista en el párrafo 3 del artículo 279 del Reglamento de Fiscalización, al considerar que la imposición de la multa resultaba de dividir entre el número de integrantes de la coalición, la cantidad ejercida en exceso en los topes de gastos de campaña, en la que se fijaría una multa igualitaria para dichos integrantes.

Sin embargo, este órgano jurisdiccional arribó a la conclusión de que la responsable había realizado una interpretación indebida, en virtud de que el significado de la palabra "equivalentes" debía definirse, para la imposición de la sanción a integrantes de una coalición por rebase en topes de gastos de campaña, en el contexto que regulan todas las normas y los principios que forman parte del sistema al que pertenecen. En este sentido, estimó que al imponerles la sanción debió considerar la calidad y características del sujeto infractor, las circunstancias particulares del caso concreto y las condiciones específicas de cada partido político integrante previstas en el convenio de coalición, esto es, la sanción debía justificarse en relación a las particularidades de cada uno de los partidos políticos.

Por tanto, al acreditarse que la responsable había realizado una incorrecta interpretación del artículo 279, párrafo 3, del Reglamento de Fiscalización, ordenó a la autoridad responsable que realizara nuevamente la individualización de la sanción de cada uno de los integrantes de la coalición "Movimiento Progresista", tomando en consideración el criterio referido y determinado en relación a las consideraciones expuestas en las siguientes resoluciones:

Sentencia	Partido recurrente	Acuerdo del INE
SUP-RAP-118/2013	Movimiento Ciudadano	CG190/2013
SUP-RAP-120/2013	Partido del Trabajo	CG190/2013
SUP-RAP-166/2013	Movimiento Ciudadano	CG242/2013
SUP-RAP-168/2013	Partido del Trabajo	CG242/2013
SUP-RAP-172/2013	Partido de la Revolución Democrática	CG270/2013

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Sentencia	Partido recurrente	Acuerdo del INE
SUP-RAP-174/2013	Movimiento Ciudadano	CG270/2013
SUP-RAP-178/2013	Partido del Trabajo	CG270/2013
SUP-RAP-173/2013	Partido de la Revolución Democrática	CG271/2013
SUP-RAP-175/2013	Movimiento Ciudadano	CG271/2013
SUP-RAP-177/2013	Partido del Trabajo	CG271/2013
SUP-RAP-32/2014	Partido de la Revolución Democrática	CG103/2014
SUP-RAP-33/2014 y SUP-RAP-35/2014 acumulados	Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo	CG103/2014

*Para tales efectos, la autoridad responsable, acorde con lo establecido en las ejecutorias referidas, **en el supuesto de que se determine rebase de topes de gastos de campaña**, debe individualizar la sanción considerando (de manera descriptiva), además de la cantidad ejercida en exceso y la reincidencia; el porcentaje aportado por cada uno de los partidos políticos en términos del convenio de coalición; la gravedad de la conducta en atención al bien jurídico tutelado; distinguiendo, en su caso, el grado de participación de cada uno de los integrantes, y de manera particular, la actividad de quien operó como responsable del órgano de finanzas al administrar los recursos de la coalición; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; así como las condiciones socioeconómicas del infractor (particularmente el financiamiento ordinario que reciben).*

En ese sentido, la autoridad responsable debe, en primer término, señalar de manera clara y precisa los elementos que va a tomar en cuenta para realizar la individualización de la sanción, en segundo lugar, determinar la forma en que los aplicará y, finalmente, establecer de manera fundada y motivada, la imposición de la sanción en cada caso concreto.

B. Sentencias con efectos que sólo aplican, en particular, para el Partido Revolucionario Institucional. *Diversos partidos políticos controvirtieron las resoluciones CG190/2013 y CG242/2013, en los cuales se declararon fundadas diversas alegaciones, por lo que a continuación se precisan los efectos determinados en los recursos de apelación correspondientes:*

- SUP-RAP-121/2013: *en dicha resolución se controvirtió el acuerdo CG190/2013; en la que se ordenó al Instituto Nacional Federal Electoral:*

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

[...]

* ... tomar en cuenta los gastos accesorios generados con motivo de la contratación de las tarjetas Monex, **como gastos de campaña** en términos de lo expuesto en el considerando DÉCIMO CUARTO del recurso de apelación SUP-RAP-5/2013 y sus acumulados.

* Se revocan las conclusiones 77 y 78, para el efecto de que se hagan las precisiones de los documentos y muestras, respectivamente, que se omitieron presentar.

* Se **revocan** las conclusiones 80, 82 y 88, para el efecto de que se tomen en consideración los documentos que fueron presentados de manera oportuna.

* Se **revocan**, en la parte conducente, las conclusiones marcadas con los números 29, 72, 76, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 143, 151, 154 y 190, para el efecto de que la autoridad **cuantifique de nueva cuenta el monto total que corresponda**, descontando las cantidades que en cada caso se hayan determinado.

* En su oportunidad, se fije una nueva sanción por la comisión de faltas formales (omisión).

* Se revocan las multas impuestas en las conclusiones 23, 92, 121, y 159, dado que indebidamente se consideraron como faltas sustanciales, por lo que deberán ser sancionadas dentro del bloque de faltas formales.

* Se ordena reindividualizar las multas aplicables a las conclusiones 61, 100, 158, 199 y 201 porque indebidamente se tomó como agravante la "pluralidad de conductas".

* Se ordena reindividualizar la sanción impuesta por la conclusión 32, a fin de no considerar los promocionales RV01093-12 y RV00473-12.

* Se ordena reindividualizar la sanción impuesta al grupo de las faltas formales, tomando en cuenta que ese grupo pasó de 137 a 141 faltas formales; que debe exponer objetivamente cómo influye cada elemento en la determinación de la sanción a imponer, debiendo ser la nueva reindividualización congruente con la sanción que se impuso al Partido Revolucionario Institucional en el considerando 9.2 de la resolución impugnada.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

** Se revocan las consideraciones que integran la conclusión 45, a fin de que la autoridad responsable, en el ámbito de sus atribuciones:*

a) Valore pormenorizadamente la documentación que mediante oficio CAPC/033/13, la otrora coalición presentó al Director General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a fin de aclarar el contenido del oficio UF-DA/4666/13 de quince de mayo de dos mil trece, y

*b) Funde y motive su decisión respecto a la **cuantificación del gasto presumiblemente no reportado**, respecto a los eventos 10, 11, 12, 23, 33, 43, 44 y 47 que desplegó la coalición "Compromiso por México".*

** Se revocan las conclusiones 133, 173 y 175, a fin de la autoridad responsable realice un nuevo análisis de dichos apartados, sin que contabilice la documentación que ha quedado evidenciada como duplicada, para que luego, reinvidualice la sanción y emita la determinación que en derecho proceda. [...]'.*

SUP-RAP-162/2013: en esta sentencia se combatió el acuerdo CG242/2013, en donde se determinó:

[...]

- Se deja intocada la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondiente al ejercicio dos mil doce, emitida en sesión extraordinaria de veintiséis de septiembre de dos mil trece, identificada con la clave CG242/2013, en la parte impugnada, respecto de las conclusiones 41 y 79, respectivamente:

a) Porque en la irregularidad relacionada con el servicio de arrendamiento de vehículos cuyo importe fue de \$58,000.00 (cincuenta y ocho mil pesos M.N. 00/100), no se justificó su objeto partidista.

b) Porque lo relativo a que la irregularidad vinculada con el gasto contratado con el proveedor Edgar Jesús Batres Jonguitud por un monto de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), no fue subsanada.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- Se revoca la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondiente al ejercicio dos mil doce", emitida en sesión extraordinaria de veintiséis de septiembre del año dos mil trece, identificada con la clave CG242/2013, para el efecto de que se emita una nueva considerando que:

a) Respecto a la conclusión 41, relativa al gasto por concepto 'Servicio de desayunos', establezca que sí está justificado el objeto partidista por un importe de \$22,968.00 (veintidós mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.

b) En lo tocante a la conclusión 41, la autoridad responsable deberá considerar para la individualización de la sanción correspondiente, que el Partido Revolucionario Institucional no es reincidente, de acuerdo a lo expuesto en el apartado 3.2.3.

c) Concerniente a la conclusión 79, se deja sin efectos la sanción impuesta, respecto de las once irregularidades señaladas en los apartados 3.3.1 y 3.3.2, cuyo monto en su conjunto asciende a la cantidad de \$1,760,817.12 (un millón setecientos sesenta mil ochocientos diecisiete pesos 12/100 M.N.), por ende, la autoridad responsable deberá de emitir una nueva resolución tomando en consideración que el partido político recurrente, únicamente no subsanó la irregularidad sobre un monto equivalente a \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), en el entendido de que se debe realizar una nueva individualización de la sanción en torno a ella solamente.

d) Por lo que hace a la conclusión 77, la responsable determinará que la existencia de una doble factura, se debió a un error en la captura del domicilio fiscal del partido impugnante, aspecto que al no haberse aclarado oportunamente, amerita se considere como una omisión que para efectos de individualización de la sanción, tendrá que calificarse como una falta formal, cuya sanción que proceda conforme a derecho deberá imponer la responsable.

[...]

En este sentido, de lo expuesto con anterioridad, la autoridad responsable deberá realizar los ajustes correspondientes con base en las precisiones destacadas en la presente sección de ejecución, de acuerdo con las consideraciones de derecho mencionadas en las resoluciones controvertidas, con motivo de los informes en relación a la fiscalización de los gastos de campaña del procedimiento electoral dos mil once – dos mil doce (2011-2012)

y de los informes de ingresos y egresos del ejercicio dos mil doce (2012). Asimismo, deberá hacer los ajustes que correspondan y, en su caso, deberá tomar en consideración las cantidades correspondientes para verificar los límites a los topos de gastos de campaña.

5. Efectos de las sentencias. Que en razón de cada uno de los considerandos relativos a los estudios de fondo y efectos de las sentencias que forman parte de la sección de ejecución, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que se transcribe a continuación:

Recursos de apelación que impugnaron la resolución CG190/2013

SUP-RAP-118/2013

(...)

SÉPTIMO.- Resumen de agravios y estudio de fondo.- *Del escrito de demanda se desprende que, sustancialmente, el recurrente hace valer los siguientes motivos de inconformidad:*

(...)

Agravio tercero.- Inconstitucionalidad, solicitud de inaplicación e indebida interpretación del artículo 279, párrafo 3, del Reglamento de Fiscalización.

Esta Sala Superior estima parcialmente fundados los planteamientos esgrimidos por el partido político recurrente, por lo siguiente:

En el examen habrá que verificar si el precepto analizado faculta a la autoridad, al momento de establecer la cuantía de la multa, a tomar en cuenta la gravedad de la infracción, el valor jurídico lesionado, la capacidad económica del sujeto responsable, la reincidencia, o cualquier otro elemento conducente para la individualización correspondiente.

Igualmente, se tendrá que analizar si es factible sancionar a los partidos coaligados a virtud de la falta cometida por la coalición, teniendo en cuenta, para tal fin, que la norma constitucional delega a la ley, la facultad de regular la forma de participación de los partidos políticos en las elecciones, como pueden ser, entre otros aspectos, si deciden contender de manera individual o en forma coaligada, y en este último caso, las reglas a las que queda sujeta la coalición; la obligación que tienen tanto los institutos políticos como las coaliciones de sujetarse a los topos de campaña, etcétera.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Además, deberá tenerse en consideración que de conformidad con los artículos 95, párrafo 1 y 98, párrafo 2, del abrogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales¹, los partidos políticos tienen derecho a formar coaliciones para participar en las elecciones; con la obligación, en su caso, de manifestar en el convenio de coalición que se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido.

De igual manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes.

En el orden jurídico nacional electoral se prevé un catálogo de derechos en favor de los partidos políticos para el cumplimiento de sus finalidades constitucionales y legales, que van desde acceder a radio y televisión, recibir financiamiento público y otras prerrogativas a fin de llevar a cabo sus actividades, hasta aquéllos relacionados directamente con su participación en los procesos electorales para la integración de los órganos de representación política.

En lo tocante a este segundo supuesto, el artículo 93, párrafo 2, del abrogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales², preveía el derecho de los partidos políticos nacionales de formar coaliciones con fines electorales.

La Sala Superior ha sostenido en forma reiterada que la coalición se constituye mediante la unión de dos o más partidos políticos con el fin de postular a los mismos candidatos a los cargos de elección popular y que el objetivo de esa unión se dirige de manera directa, concreta e inmediata a participar conjuntamente en la contienda electoral.

En la tesis número XXVII, publicada con el rubro: 'COALICIONES. SÓLO SURTEN EFECTOS ELECTORALES', se precisa, que una vez concluido el proceso electoral, la coalición se disuelve aunque sus obligaciones subsisten y recaen en los partidos políticos que la integraron.

Para la participación de las coaliciones en los comicios, el citado código electoral federal preveía ciertas modalidades a efecto de posibilitar su objetivo electoral, entre las que destacan: el derecho a interponer los medios de impugnación legales por quien ostente la representación de ese ente; así como el cumplimiento de algunas obligaciones, tales como el sostenimiento de la plataforma electoral de acuerdo con la declaración de principios, programa de acción y estatutos adoptados por esa unión.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En la referida tesis también se puntualiza, que lo anterior bajo ningún concepto significa que los partidos políticos integrantes de una coalición queden inertes o en suspenso y dejen de ser sujetos de derechos y obligaciones durante el proceso electoral, ya que como institutos políticos continúan con las actividades que ordinariamente les encomiendan la Constitución y la ley.

En el mencionado criterio se agrega que dichos entes serán los que continúen existiendo después del proceso comicial, no así la propia coalición, la cual, según se indicó, una vez terminado el proceso electoral se extingue en el mundo jurídico.

La circunstancia atinente a que el abrogado código electoral federal estableciera determinados derechos para los partidos políticos coaligados, son aspectos relacionados con la forma en que participan en un proceso electoral, tales como: aparecer en las boletas electorales con su emblema [artículo 252, párrafo 2, inciso c)]; registrar listas propias de candidatos a diputados y senadores por el principio de representación proporcional [artículo 96, párrafo 7, inciso d)], conservar su representación específica en los Consejos General, Locales y Distritales del otrora Instituto Federal Electoral (según el caso) y ante las mesas directivas de casilla [artículo 97].

Las cuestiones aludidas devienen ajenas para determinar la responsabilidad de la entidad coaligada en caso de que a través de alguno de sus miembros incurra en alguna falta, hecho irregular o transgresión a la normatividad electoral.

De ahí que, no sea una eximente de responsabilidad, el hecho de que la administración de los recursos de la coalición haya quedado a cargo de uno de los partidos políticos, máxime cuando la decisión del nombramiento del administrador se lleva a cabo por los propios institutos políticos que se coaligan.

De esta manera, las violaciones cometidas al orden jurídico electoral por la coalición, necesariamente y por ficción de la ley son atribuibles a ésta, ya sea que la falta la cometa uno o varios de los institutos políticos que la conforman, en tanto la infracción se refracta a cada uno de sus integrantes, puesto que no puede señalarse como responsable directo sólo a uno de ellos, ya que la conformación del ente jurídico colectivo admite esa forma de intervención conjunta y este hecho presupone un marco punitivo específico o particular por voluntad del legislador.

En lo que respecta a esto último, la Sala Superior en forma reiterada ha sostenido que el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral,

en la aplicación de sanciones derivadas de infracciones a la normatividad electoral, debía considerar la calidad y características del sujeto infractor, las circunstancias particulares del caso concreto y las condiciones específicas de cada partido político integrante de la coalición.

Cierto, con independencia de la falta cometida y de su gravedad o levedad, así como de la responsabilidad que asume la coalición como persona jurídica, para efectos de la sanción que corresponda imponer, por una ficción de la ley, quienes afrontan tal consecuencia —la sanción— son todos los partidos que la integran.

De ese modo por disposición normativa, a cada uno de los miembros de la coalición, es imputable la conducta irregular como presupuesto de la sanción, y no como forma de intervención punible referida expresamente a la participación individual de los partidos políticos coaligados.

Empero, para fijar la sanción a los miembros de la coalición, la autoridad administrativa electoral debe atender a los principios del derecho sancionador de índole garantista como los de proporcionalidad, racionalidad y equidad, conforme a los cuales se han de ponderar tanto los aspectos objetivos como subjetivos, a fin de que la sanción resulte acorde y congruente al caso concreto, para así cumplir justificadamente con el propósito perseguido con la pena: castigar, reprimir e inhibir conductas que atenten contra los principios, bases y orden jurídico que rigen los procesos electorales en una sociedad democrática.

En suma, en el derecho administrativo sancionador, el legislador ha dispuesto que deben tenerse en cuenta esas características particulares, que derivan en un tratamiento individualizado.

Una interpretación contraria, traería como consecuencia la inobservancia de los mencionados principios en el ejercicio de las facultades punitivas que legalmente se han conferido a la autoridad electoral.

Lo expuesto en modo alguno se desvirtúa por el hecho de que el artículo 279, párrafo 3, del entonces Reglamento de Fiscalización, en relación con la multa a imponer, preveía que cuando se tratara de transgresiones al tope fijado para los gastos de campaña cometidas por la coalición se impondría a sus miembros sanciones ‘equivalentes’.

Al respecto y con la finalidad de orientar el alcance del adjetivo ‘equivalentes’ en el texto del precepto reglamentario, es menester obtener su significado.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española “equivalente”, significa lo que equivale a otra cosa, y por “equivaler” se entiende “ser igual a otra en la estimación, valor, potencia o eficacia”.

Como el significado gramatical no clarifica el tipo de igualdad a que se refiere la norma al utilizar la locución sanciones “equivalentes”, entonces, se debe acudir a su interpretación, en función del sistema regulador del ejercicio de la facultad punitiva de la autoridad electoral administrativa, particularmente de las normas que aluden expresamente al rebase de topes de gastos de campaña.

El parámetro para calcular la sanción se preveía en el artículo 354, párrafo 1, inciso a), fracción II, del anterior Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual eliminaba el margen de discrecionalidad en el ejercicio de la potestad sancionadora de la autoridad electoral administrativa (circunstancias y condiciones individuales de cada integrante de la coalición) al establecer que en caso de infringir el tope a los gastos de campaña se debía imponer un tanto igual al del monto ejercido en exceso.

Debe anotarse, que si bien la intención del legislador ordinario fue sancionar la violación al rebase de los topes de gastos de campaña, con un monto igual al ejercido en exceso, la sanción que para esa cantidad se aplicará a los integrantes de una coalición deberá atender necesariamente a los lineamientos previstos en el artículo 355, párrafo 5, para fijar la sanción de manera individualizada a cada uno de los institutos políticos coaligados.

Ahora bien, para determinar el alcance y significado de la disposición reglamentaria en estudio, debe tomarse en consideración el precepto en su integridad y el sistema normativo en que está inserto; ya que no puede interpretarse de manera sesgada y/o aislada, por el contrario, su sentido debe definirse en el contexto que regulan todas las normas y los principios que forman parte del sistema a que pertenece.

De ese modo resulta imprescindible tener en cuenta que las disposiciones reglamentarias deben ser entendidas a la luz de los preceptos que desarrollan, en los cuales encuentran su límite y sentido, por ende, deviene inaceptable una interpretación en la que se deje de lado la norma que desglosa y el sistema jurídico a que pertenece, así como aquélla que soslaye los límites impuestos a la facultad reglamentaria.

Así, la expresión ‘equivalentes’ contenida en la norma cuestionada, a la luz de una interpretación sistemática con los artículos 342, 354 y 355, del anterior Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de los párrafos 1 y 2, del propio artículo 279, del supracitado reglamento,

permite concluir que la locución de mérito no puede entenderse como igualdad o paridad.

Por el contrario, debe considerarse vinculada directamente con las condiciones particulares de cada partido político integrante de la coalición; es decir, la responsabilidad del sujeto y su situación específica, las condiciones objetivas y subjetivas de la conducta sancionada y del sujeto infractor.

Las normas del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales referidas, en lo que interesa disponían:

'Artículo 342.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código:

(...)

c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y topes que en materia de

Código;

(...)

f) Exceder los topes de gastos de campaña;

(...)

Artículo 354.

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

a) Respecto de los partidos políticos:

(...)

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

(...)

Artículo 355.

(...)

5. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:*

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;*
 - b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;*
 - c) Las condiciones socioeconómicas del infractor;*
 - d) Las condiciones externas y los medios de ejecución;*
 - e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y*
 - f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.*
- 6. Se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el presente Código incurra nuevamente en la misma conducta infractora al presente ordenamiento legal.*
- (...)*

*[*Libro Séptimo “de los regímenes sancionador electoral y disciplinario interno”]*

Por su parte el Reglamento de Fiscalización establece:

‘Artículo 279.

1. El Consejo General impondrá, en su caso, las sanciones correspondientes previstas en el Código. Para fijar la sanción se tendrán en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, entendiéndose por circunstancias el tiempo, modo y lugar en que se produjo la falta, y para determinar la gravedad de la falta se deberán analizar la trascendencia de la norma transgredida y los efectos que produce la trasgresión respecto de los objetivos y los intereses jurídicos tutelados por el derecho. En caso de reincidencia, se aplicará una sanción más severa.

2. Si se trata de infracciones cometidas por dos o más partidos que integran o integraron una coalición, deberán ser sancionados de manera individual, atendiendo al grado de responsabilidad de cada uno de dichos entes políticos y a sus respectivas circunstancias y condiciones.

En su caso, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición.

3. Si se trata de infracciones relacionadas con la violación a los topes de gasto de campaña, se impondrán sanciones equivalentes a todos los partidos integrantes de la coalición.”

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

De los parámetros dados por la normatividad electoral es factible advertir, se insiste, que la responsabilidad por exceso a los topes de gastos de campaña se imputa a la coalición, aun cuando la sanción se impone a los partidos políticos coaligados, según se asentó en párrafos precedentes.

Por tanto, la individualización de la sanción debe justificarse respecto de cada uno de los partidos políticos integrantes de la coalición, atendiendo a los lineamientos que se desarrollan en los artículos 354 y 355, del propio Libro Séptimo, del invocado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Sobre esa base, los elementos que deben considerarse al momento de fijar la sanción y su concreta graduación respecto de cada partido político que conforma una coalición, además de los bienes jurídicos y valores que protegen las normas vulneradas; la naturaleza de los sujetos infractores, sus funciones encomendadas constitucionalmente; así como los fines persuasivos de las sanciones administrativas; para la individualización de la pena se deben ponderar las circunstancias particulares de cada uno de sus integrantes.

De acuerdo a lo razonado, el párrafo 3, del artículo 279, del Reglamento de Fiscalización, debe interpretarse de forma sistemática, a diferencia de lo que hizo incorrectamente la autoridad responsable para fijar la sanción, al considerar en forma sesgada, aislada y fuera de contexto, que la frase alusiva a la imposición de sanciones “equivalentes”, significaba dividir entre el número de integrantes de la coalición, la cantidad ejercida en exceso (punto fundamental de la multa impuesta).

Sobre ese particular es de resaltar que el mencionado numeral Reglamentario correspondía al Título III ‘rendición de cuentas’, Capítulo II “de los informes”, Sección III ‘del dictamen y proyecto de resolución’.

Lo expuesto revela que el artículo 279 se ajusta a las disposiciones que regulan lo atinente al dictamen y proyecto de resolución que presentó la anterior Unidad de Fiscalización al entonces Consejo General del Instituto Federal Electoral, relativo, entre otros, al informe de gastos de campaña y aplicación de sanciones con motivo del rebase de tope de gastos de esa naturaleza.

En tal sentido, tanto la porción normativa analizada como los demás párrafos del artículo 279, comprendidos en forma integral, se dirigen a hacer efectiva la aplicación del sistema de individualización de sanciones, particularmente, por lo que hace a la infracción del rebase al tope de gastos de campaña.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

*Esto es así, porque el contenido integral del artículo 279 en análisis es acorde con los lineamientos que se prevén en los artículos 354 y 355, del abrogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en tanto, se reitera, para fijar la sanción **deben tenerse en cuenta, entre otros aspectos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el interés jurídico tutelado por el derecho; además de señalar expresamente que si se trata de integrantes de una coalición se debe sancionar de manera individual a cada instituto político en atención, al porcentaje aportado por cada uno de los partidos políticos en términos del convenio de coalición; sus respectivas condiciones; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; así como la solvencia socioeconómica del infractor.***

Lo anterior conduce a establecer, que el sentido y alcance de la expresión sanciones “equivalentes” que se contempla en el párrafo 3, del artículo 279, conforme a la cual para imponer una multa se debe atender a las condiciones particulares de cada uno de los partidos que integran una coalición, se corrobora con la sistemática de lo previsto en los otros dos párrafos del citado artículo, así como con las disposiciones legales que regulan las sanciones y su individualización.

*Estas directrices son concordantes con los criterios de este órgano jurisdiccional, respecto a que el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral en la aplicación de sanciones derivadas de infracciones a la normatividad electoral, necesariamente debía tomar en cuenta las circunstancias particulares de cada caso concreto, **y para cada partido político de modo proporcional y no igualitario.***

A lo anterior cabe agregar, que puede haber circunstancias agravantes o atenuantes en la ejecución de la infracción que determinan un mayor o menor grado de culpabilidad sobre alguno de los partidos integrantes de la coalición, por lo que para sancionar la conducta se deben desterrar aspectos arbitrarios o caprichosos, lo cual obliga a la autoridad a exponer los acontecimientos particulares que en cada supuesto específico se suscitan, así como los razonamientos lógicos, motivos y fundamentos en que se apoya.

Por tanto, el vocablo ‘equivalentes’ debe interpretarse en congruencia con el sistema descrito, a fin de que el significado que se le atribuya encuentre concordancia con los lineamientos previstos en los multicitados artículos del abrogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como con los principios de proporcionalidad, racionalidad y equidad que rigen la aplicación de sanciones.

Así, opuestamente a lo estimado por la responsable, para imponer la sanción no basta considerar el elemento objetivo consistente en la cantidad ejercida

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

en exceso y dividirla entre los integrantes de la coalición, para que el resultado sea la base inicial de la multa a imponerse, ya que se reitera, debe ser proporcional a las características específicas de cada miembro de la coalición.

*De esta manera, devienen **infundados** los motivos de disenso relativos a la aducida irregularidad constitucional del precepto normativo bajo estudio, así como lo relacionado con la solicitud de inaplicación del aludido dispositivo reglamentario, sin embargo esta Sala Superior estima que por las razones expuestas en párrafos precedentes resulta **fundado** el motivo de inconformidad por cuanto hace a la indebida interpretación de la mencionada porción normativa, ello porque la autoridad responsable impuso una multa igual a partidos que tienen condiciones disímiles, por lo que en esa tesitura lo conducente es revocar por cuanto hace a la imposición e individualización de la sanción correspondiente a Movimiento Ciudadano con motivo del rebase de topes de gastos de campaña, para el efecto de que el Instituto Nacional Electoral individualice de nueva cuenta la sanción atendiendo a las circunstancias particulares del mencionado instituto político, conforme a lo razonado en párrafos precedentes.*

*Al efecto son aplicables las tesis emitidas por esta Sala Superior de rubros: **SANCIONES. EN SU DETERMINACIÓN, LAS AGRAVANTES O ATENUANTES DERIVADAS DE UNA CONDUCTA IMPUTABLE A UN PARTIDO POLÍTICO, NO PUEDEN AFECTAR LA ESFERA JURÍDICA DE OTROS SUJETOS O ENTES DISTINTOS A AQUÉL, AUN CUANDO INTEGREN UNA COALICIÓN.***

COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE.
(...)"

[Énfasis añadido]

Efectos de la Sentencia

(...)Conforme a lo expuesto, lo procedente es revocar la determinación impugnada, a fin de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral analice nuevamente la infracción e individualice la sanción correspondiente, partiendo de que en la aplicación del artículo 279, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización, no basta considerar el elemento objetivo consistente en la cantidad ejercida en exceso y dividirla entre los integrantes de la coalición.

*Para dar eficacia al sistema de individualización de sanciones, respecto al rebase de topes de gastos de campaña, **con base en ese numeral reglamentario, además de la cantidad ejercida en exceso y la reincidencia, deben considerarse (de manera descriptiva no limitativa) el porcentaje aportado por cada uno de los partidos políticos en términos del convenio de coalición; la gravedad de la conducta en atención al bien jurídico tutelado; distinguiendo, en su caso, el grado de participación de cada uno de los integrantes, y de manera particular, la actividad de quien operó como responsable del órgano de finanzas al administrar directamente los recursos de la coalición; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; así como las condiciones socioeconómicas del infractor (particularmente el financiamiento ordinario que reciben).***

De esta manera el significado de equivalente debe corresponder a la ponderación de los factores que haga la autoridad administrativa electoral respecto de los lineamientos descritos.

Agravio cuarto.- Falta de fundamentación y motivación de la sanción impuesta, respecto del rebase de topes de gastos de campaña de la elección presidencial.

*Al respecto, esta Sala Superior considera que el planteamiento descrito por el recurrente deviene sustancialmente **fundado**.*

Lo anterior es así, pues como se expuso al analizar el agravio precedente, la autoridad responsable realizó una indebida interpretación del numeral 279, párrafo 3, del Reglamento de Fiscalización controvertido, al pronunciarse sobre la individualización de la sanción aplicable a los integrantes de la otrora coalición “Movimiento Progresista”, por el rebase de tope de gastos de campaña correspondiente a la última elección presidencial, de ahí que como lo aduce el recurrente, la resolución impugnada carezca de fundamentación y motivación por cuanto hace a la individualización de la sanción impuesta.

SUP-RAP-120/2013

“(…)

II. 3. Indebida interpretación del artículo 279, párrafo 3 del Reglamento de Fiscalización.

El partido recurrente pretende evidenciar que es incorrecta la interpretación que hace la autoridad responsable con relación al vocablo equivalentes, al asignarle significado de iguales, y por tanto, aplicar montos idénticos a cada uno de los tres integrantes de la Coalición Movimiento Progresista.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Al respecto se alega, que la autoridad responsable debió interpretar esa disposición conforme a la normativa en materia electoral para adecuar el sentido de la norma.

Se agrega, que para determinar la sanción aplicable debió atenderse a las circunstancias particulares de cada uno de los integrantes de la coalición por cuanto hace, por ejemplo, a la responsabilidad particular de cada uno de los partidos políticos coaligados respecto al rebase de topes de gastos de campaña (conforme al convenio, el representante del Partido de la Revolución Democrática era el encargado del órgano de finanzas de la coalición); porcentaje de participación en la coalición; consideración de sanciones diversas a las que tomó en cuenta la autoridad responsable, pues el partido recurrente menciona que en la propia resolución impugnada se le aplican otras sanciones por un monto de \$38'770,049.22 (treinta y ocho millones setecientos setenta mil cuarenta y nueve pesos 22/100 M.N.).

*Los agravios son esencialmente **fundados**.*

Esto es así, porque por un lado, en los apartados de las conclusiones 157, 277 y 378, la autoridad responsable no produce consideraciones para justificar, porqué otorga al vocablo equivalentes el significado de iguales, para arribar a la conclusión de que la cantidad que excede al tope de gastos de campaña, debe dividirse en partes iguales entre los integrantes de la coalición, a efecto de que el resultado de esa operación, sea la cantidad que, en principio, sirva de base para multar a cada uno de los partidos políticos coaligados.

(...)

Lo anterior conduce a establecer, que el sentido y alcance de la expresión sanciones “equivalentes” que se contempla en el párrafo 3, del artículo 279, conforme a la cual para imponer una multa se debe atender a las condiciones particulares de cada uno de los partidos que integran una coalición, se corrobora con la sistemática de lo previsto en los otros dos párrafos del citado artículo, así como con las disposiciones legales que regulan las sanciones y su individualización.

Estas directrices son concordantes con los criterios de este órgano jurisdiccional, respecto a que el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral en la aplicación de sanciones derivadas de infracciones a la normatividad electoral, necesariamente debía tomar en cuenta las circunstancias particulares de cada caso concreto, y para cada partido político de modo proporcional y no igualitario.

(...)

Así, opuestamente a lo estimado por la responsable, para imponer la sanción no basta considerar el elemento objetivo consistente en la cantidad ejercida en exceso y dividirla entre los integrantes de la coalición, para que el resultado sea la base inicial de la multa a imponerse, ya que se reitera, debe ser proporcional a las características específicas de cada miembro de la coalición.

De esta manera, lo fundado del agravio en examen reside en que la responsable impuso una multa igual a partidos que tienen condiciones disímiles, por lo que en esa tesitura lo conducente es revocar la sanción impuesta al Partido del Trabajo con motivo del rebase de topes de gastos de campaña, para el efecto de que el Instituto Nacional Electoral individualice de nueva cuenta la sanción atendiendo a las circunstancias particulares de los mencionados institutos políticos, conforme a lo razonado en párrafos precedentes.

(...)

Efectos de la sentencia.

“(...) Conforme a lo expuesto, lo procedente es revocar la determinación impugnada, a fin de que el Consejo General analice nuevamente la infracción e individualice la sanción correspondiente, partiendo de que en la aplicación del artículo 279, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización, no basta considerar el elemento objetivo consistente en la cantidad ejercida en exceso y dividirla entre los integrantes de la coalición.

Para dar eficacia al sistema de individualización de sanciones, respecto al rebase de topes de gastos de campaña, con base en ese numeral reglamentario, además de la cantidad ejercida en exceso y la reincidencia, deben considerarse (de manera descriptiva no limitativa) el porcentaje aportado por cada uno de los partidos políticos en términos del convenio de coalición; la gravedad de la conducta en atención al bien jurídico tutelado; distinguiendo, en su caso, el grado de participación de cada uno de los integrantes, y de manera particular, la actividad de quien operó como responsable del órgano de finanzas al administrar directamente los recursos de la coalición; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; así como las condiciones socioeconómicas del infractor (particularmente el financiamiento ordinario que reciben).

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

De esta manera el significado de equivalente debe corresponder a la ponderación de los factores que haga la autoridad administrativa electoral respecto de los lineamientos descritos.

*Se vincula a la autoridad responsable para que, al momento de aplicar la sanción, tome en cuenta la capacidad económica del partido actor, incluido el total de pasivos o egresos que tuvo derivado de las sanciones económicas vinculadas con el proceso electoral federal 2011-2012.
(...)”*

SUP-RAP-121/2013

SEXTO. Estudio de fondo. *El análisis que se realiza de los agravios planteados por el apelante es el siguiente:*

AGRAVIO PRIMERO

Asegura que la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral le causa agravio, pues carece de la debida motivación y fundamentación, en virtud de que la responsable violentó los principios de legalidad y congruencia que debe observar toda autoridad al emitir sus resoluciones.

(...)

B. *Asimismo, el actor señala que los gastos que le son cuestionados a su representado fueron erogados para el pago de la estructura partidista de quienes fungieron como representantes generales y de casilla del Partido Revolucionario Institucional en el marco de la pasada elección federal, así como para el pago de enlaces estatales, distritales y coordinadores territoriales, que tenían como función principal el diseño y operación de dicha estructura de representación partidista, por lo que debe tenerse presente que dicha actividad no tiene como finalidad la obtención del voto ciudadano, pues se trata de actividades de representación partidista y de vigilancia, en términos de lo establecido por la legislación electoral.*

Subraya que las tareas que tienen encomendadas los representantes generales y los representantes de casilla no se encuentran vinculadas con el desarrollo de las campañas electorales y resultan completamente ajenas a aquellas tendentes a la obtención del voto, la presentación de candidaturas o la exposición de plataformas electorales, por lo que tales gastos sólo pueden ser considerados como gastos ordinarios del Partido Revolucionario Institucional.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Por lo tanto, el actor considera que lo que corresponde para reestablecer el orden jurídico vulnerado es que se revoque la inclusión de las erogaciones realizadas a través de las tarjetas Monex como gastos de campaña y que, en consecuencia, se reste a cada una de las campañas federales la cantidad que se hubiere agregado por parte de la Unidad de Fiscalización y como consecuencia de los anterior, se reindividualice la multa determinada por la autoridad responsable en el apartado de rebase de topes de gastos de campaña, en caso de subsistir hipótesis distintas a las analizadas.

*A juicio de esta Sala Superior, lo argumentado por el partido político actor resulta **inoperante** con base en las siguientes consideraciones.*

En primer lugar conviene destacar que los gastos a que se refiere el Partido Revolucionario Institucional en el presente apartado, fueron erogados durante el desarrollo de la campaña electoral correspondiente al proceso del dos mil doce, tal y como el propio actor lo reconoce, y como se desprende de las constancias que obran en los autos del expediente en que se actúa.

Señalado lo anterior, es necesario establecer que es un hecho notorio, el cual se invoca en términos del artículo 15 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que el pasado diecinueve de febrero de dos mil quince, esta Sala Superior resolvió los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-5/2013 y sus acumulados, en cuyo considerando OCTAVO se resolvió el agravio formulado por el Partido Revolucionario Institucional, relativo a la clasificación de gastos erogados con motivo de la dispersión de las tarjetas de prepago y su distribución entre los funcionarios que actuaron como representantes generales, de casilla, coordinadores territoriales, enlaces distritales, en el proceso electoral de dos mil doce.

Al respecto, la sentencia referida. Señaló que los referidos gastos debían comprenderse dentro del concepto de “gastos operativos de campaña” en términos de lo dispuesto por los artículos 229, párrafo 2, inciso b) del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 190, párrafo 1, inciso b) del entonces vigente Reglamento de Fiscalización.

En ese sentido se señaló que aun cuando resultara cierto que los funcionarios partidistas limitaron su actividad a reclutar y capacitar a personas que participarían como representantes generales, y de casilla, o bien coordinadores territoriales y enlaces estatales y distritales -como afirmó el Partido Revolucionario Institucional- lo cierto es que los gastos erogados son de naturaleza operativa desarrollados en el contexto temporal y material de la

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

campaña política y, por ende, no podrían considerarse bajo una categoría distinta a la de gastos de campaña.

Incluso, se señaló que en términos similares, aunque analizando un contexto normativo posterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumulados, así como la diversa identificada con el número 42/2014 y sus acumulados, señaló que los artículos 72, párrafo 2, inciso b) y f); así como 76, párrafo 3; ambos de la Ley General de Partidos Políticos, así como 130, párrafo primero, incisos a) y f) del Código Electoral del Estado de Michoacán, distorsionaban la naturaleza de los gastos operativos de campaña efectuados en procesos electorales, para catalogarlos como gastos ordinarios permanentes, como si estos gastos de campaña se realizaran todos los años y durante todo el año.

Consecuentemente, en la resolución del recurso de apelación SUP-RAP-5/2013 y sus acumulados se llegó a la conclusión de que el otrora Instituto Federal Electoral actuó conforme a Derecho al determinar que los gastos erogados por el Partido Revolucionario Institucional, a través de las tarjetas Monex deben ser considerados como gastos operativos de campaña y, en consecuencia, deben considerarse como erogaciones de los candidatos del referido partido político beneficiado con los referidos gastos.

Concluido lo anterior, es importante destacar que en la resolución de esta Sala Superior antes referida, en el Considerando DÉCIMO CUARTO, se abrió un apartado dedicado a establecer cómo se deben computar los gastos accesorios derivados del contrato entre el Partido Revolucionario Institucional y Alkino, Servicios y Calidad, sociedad anónima de capital variable.

Al respecto, se estableció que al haberse acreditado que los recursos dispersados por conducto de las tarjetas Monex constituyen un gasto de campaña, consecuentemente, los gastos accesorios que realizó el Partido Revolucionario Institucional para contratar el servicio de las señaladas tarjetas de prepago, también deben considerarse como gastos de campaña.

*Con base en lo anteriormente expuesto, esta Sala Superior estima que el agravio formulado por el Partido Revolucionario Institucional en el presente recurso de apelación es **inoperante**, en tanto que al haber quedado confirmado el criterio cuestionado, sus alegaciones devienen ineficaces.*

En ese estado de cosas, toda vez que en el expediente quedó demostrada la celebración de un contrato entre “Alkino, Calidad y Servicios, S.A. de C.V” y el Partido Revolucionario Institucional por la adquisición de 7,851 tarjetas Monex y, derivado de ese contrato surgieron erogaciones accesorias que cubrió el

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

instituto político, en esa misma lógica, esos gastos accesorios deben computarse como gastos de campaña.

Efectos.

*Consecuentemente, toda vez que lo resuelto en el recurso de apelación SUP-RAP-5/2013 y sus acumulados guardan una intrínseca relación con lo resuelto por el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral en la resolución CG190/2013, impugnada en el presente recurso de apelación; **se ordena** a la autoridad responsable que los gastos accesorios generados con motivo de la contratación de las tarjetas Monex, sean considerados como gastos de campaña en términos de lo expuesto en el considerando DÉCIMO CUARTO “Los gastos accesorios derivados del contrato entre el Partido Revolucionario Institucional y Alkino, Servicios y Calidad, S.S.de C.V.” contenido en el recurso de apelación SUP-RAP-5/2013 y sus acumulados.*

(...)

AGRAVIO TERCERO

De la síntesis de agravios reseñada en forma previa, se observa que el Partido Revolucionario Institucional, de manera sustancial, alega que la resolución impugnada carece de la debida fundamentación y motivación, ya que en su concepto, las sanciones impuestas respecto de faltas formales (omisión de remitir documentación) que relaciona con veintiséis conclusiones (18, 29, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 86, 88, 124, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 143, 145, 151, 154, 190, 191 y 195), no existe, pues la documentación que le fue solicitada fue presentada oportunamente; por lo que indebidamente se le impuso una sanción pecuniaria por esas supuestas omisiones. Derivado de lo anterior, alega que la autoridad incurrió en una omisión al debido proceso, pues le fueron expuestas pruebas suficientes y bastantes para que las observaciones realizadas en un primer momento, fueran solventadas y no ser objeto de una sanción; no se realizó una revisión exhaustiva de todo lo entregado y de las respuestas emitidas, y con ello, se vulneraron en perjuicio del apelante los principios de legalidad, certeza, objetividad, congruencia y exhaustividad, y por consiguiente, el de seguridad jurídica.

Esta Sala Superior procederá al estudio de los planteamientos formulados por la parte actora, para lo cual, se procederá al estudio individualizado, en orden progresivo, de cada una de las veintiséis conclusiones que se controvierten.

I. Estudio individualizado de las conclusiones cuestionadas

(..)

2. Conclusión 29

En su escrito de demanda, la parte recurrente expone:

[Cuadro]

Con relación a dicha observación, cabe señalar lo siguiente:

En el apartado 77 del Oficio UF-DA/3699/13 (“Primera Vuelta de Errores y Omisiones de Egresos”), que notificó la Unidad de Fiscalización a la Secretaría de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, el dieciocho de abril de dos mil trece, se hace referencia a lo siguiente:

‘77. De la revisión a la cuenta “Gastos de Propaganda”, subcuenta “Bardas”, se localizaron pólizas con documentación soporte consistente en facturas, copias de cheque nominativo, contratos de prestación de servicios y relación de pinta de bardas; sin embargo, no fueron localizadas las muestras fotográficas de las bardas que soportan el concepto del gasto. Los casos en comento se señalan a continuación:

(...)

En consecuencia, se le solicita presentar lo siguiente:

Las muestras fotográficas de cada una de la publicidad utilizada en bardas, en las cuales se deberá especificar su ubicación exacta, anexas a sus respectivas pólizas.

(...)

Al considerarse insatisfactoria la respuesta dada por el partido político actor, mediante oficio UF-DA/4908/13, la Unidad de Fiscalización solicitó, entre otras cuestiones ‘Las pólizas de origen del gasto con su respectivo soporte documental, así como las muestras respectivas.’, lo que fue hecho del conocimiento del ahora apelante, el veinticuatro de mayo de dos mil trece.

En respuesta a lo anterior, la Secretaría de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional hizo del conocimiento, en la parte que interesa del oficio SF/323/13 (página 5 de 19), lo siguiente:

[...] TLAXCALA

*[...] En carpeta 4, **Fórmula 2** se presenta póliza PE-06/04-12 con su respectiva documentación soporte consistente en copia de cheque, factura, contrato relación de bardas, permiso de pintas de barda y muestras.
[...]*

Los documentos antes señalados se tienen a la vista en la Caja 41 del expediente que se resuelve.

*Esta Sala considera **fundado** el planteamiento de la parte actora.*

Al respecto, cabe señalar que la ‘fotografía’ es el arte y la técnica para obtener imágenes duraderas debidas a la acción de la luz.

La aplicación de esta técnica permite la recreación de una imagen que se caracteriza por ser la representación de alguna figura u objeto, por la combinación de rayos que proceden de él, que al registrar sus propiedades lumínicas generadas de manera única e inequívoca, reproducen la realidad física del referente en un momento determinado. A diferencia de otros tipos de representación de imágenes, como lo es la pintura o el dibujo, la fotografía no se somete a un proceso de representación mental.

Por otro lado, cabe señalar que de conformidad con lo previsto en el artículo 181, párrafos 1, inciso c), fracción vii); 3, inciso j); y 5; así como en los diversos 182 y 322, párrafos 1, inciso e), fracción vii); y 2, inciso a), del Reglamento de Fiscalización, se advierte que los partidos políticos y las coaliciones, al presentar sus informes de gastos de campaña, deben acompañar diversa documentación, como son “fotografías”, que se adjuntan a sus informes pormenorizados y las relaciones de publicidad en hojas membretadas, o bien, que se conservan y presentan, sobre la publicidad utilizada en anuncios espectaculares y en bardas.

Sin embargo, la norma reglamentaria de referencia no establece el mecanismo (cámara oscura, película sensible, imagen digital, etc.) para la obtención de la fotografía, ni el modo (proceso químico, digital, impresión, fotocopia, etc.) y la forma (banco y negro o a color) en que debe ser exhibida.

Por lo tanto, de la interpretación sistemática de lo previsto en el artículo 181, párrafos 1, inciso c), fracción vii); 3, inciso j); y 5; así como en los diversos 182 y 322, párrafos 1, inciso e), fracción vii); y 2, inciso a), del Reglamento de Fiscalización, se desprende que se tendrá por satisfecha la obligación de los

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

partidos políticos y las coaliciones al presentar sus informes de gastos de campaña, consistente en acompañar “fotografías” en sus informes pormenorizados y las relaciones de publicidad en hojas membretadas, o bien, de presentarlas cuando se le soliciten y versen sobre la publicidad utilizada en anuncios espectaculares y en bardas; en tanto la imagen exhibida recree alguna figura u objeto, que se caracterice por registrar las propiedades lumínicas generadas de manera única e inequívoca a partir de la combinación de la luz que proceda del referente o modelo, y reproducir su realidad física en un momento determinado; sin que al respecto sea exigible el empleo de algún mecanismo para la obtención de las fotografías (cámara oscura, película sensible, imagen digital, etc.), ni el modo (proceso químico, digital, impresión, fotocopia, etc.) o la forma (banco y negro o a color) en que se exhiban, dado que al respecto, la normativa aplicable es omisa y sólo alude el concepto de que se trata de manera general.

En la página 1185 de la resolución CG190/2013, se observa que con relación a la conclusión que se examina, la autoridad responsable consideró que, al omitir presentar anexo a sus respectivas pólizas 11 muestras fotográficas por concepto de pinta de bardas, el partido incumplió con lo establecido en el artículo 182 del Reglamento de Fiscalización. Dicho precepto señala:

*‘1. Los partidos y coaliciones llevarán una relación que detalle la ubicación y las medidas exactas de las bardas utilizadas en cada campaña para la pinta de propaganda electoral, especificando los datos de la autorización para su fijación en inmuebles de propiedad privada o lugares de uso común, la descripción de los costos, el detalle de los materiales y mano de obra utilizados, la identificación del candidato, y la fórmula o campaña beneficiada con este tipo de propaganda, debiendo cumplir, en su caso, con lo dispuesto en este Reglamento respecto de los criterios de prorrateo. Dicha relación deberá conservarse anexa a las pólizas y documentación soporte correspondiente. El partido deberá conservar y **presentar fotografías de la publicidad utilizada en bardas**, indicando su ubicación exacta.’*

Ahora bien, como se advierte de los requerimientos formulados en su oportunidad, se solicitó al Partido Revolucionario Institucional la exhibición de ‘muestras fotográficas’ de la ‘publicidad utilizada en bardas’, relacionada con la Fórmula 2 de los candidatos al cargo de Senadores en el Estado de Tlaxcala.

De la revisión de la documentación relacionada con ‘CAMPAÑA SENADOR TLAXCALA 02’, que corre agregada a la ‘Carpeta 4’: ‘RESPUESTA AL OFICIO UF-DA/4908/13 – TLAXCALA – MONITOREO ESPECTACULARES Y PRENSA’, misma que se tiene a la vista en la Caja 36 del expediente que se

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

resuelve, y a la cual se le confiere valor probatorio de conformidad con lo previsto en los artículos 14, párrafo 1, inciso b); y 16, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta autoridad jurisdiccional observa que, con relación a la pinta de 268 bardas localizadas en diversos municipios del Estado de Tlaxcala, el partido político actor exhibió la factura 816, el informe a detalle en hoja membretada por la empresa ‘LETICIA DOMÍNGUEZ MIRANDA’, respecto de la pinta de 268 bardas, y en forma adjunta a los permisos para pinta de bardas respectivos (que detallan la ubicación y medidas de cada una de las pintas), 268 muestras fotográficas en blanco y negro, impresas en cada uno de los documentos, en las cuales se aprecia la publicidad que fue utilizada.

Bajo estas condiciones, esta autoridad considera que el Partido Revolucionario Institucional no incurrió en la omisión que se le reprocha, dado que esta autoridad ha podido corroborar la existencia de 268 imágenes (muestras fotográficas), que dicha cantidad corresponde a la que se refiere en el informe a detalle presentado por la empresa, y asimismo, que respecto de cada imagen existe una referencia que permite conocer el lugar exacto en el que se realizó la pinta de la barda que muestra la imagen.

No se pasa por alto, que en el Capítulo ‘I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO’ (fojas 1182 a 1185) de la resolución CG190/2013, se expone lo siguiente:

‘Conclusión 29

De la revisión a la cuenta “Gastos de Propaganda”, subcuenta “Bardas”, se localizaron pólizas con documentación soporte consistente en facturas, copias de cheque nominativo, contratos de prestación de servicios y relación de pinta de bardas; sin embargo, no fueron localizadas las muestras fotográficas de las bardas que soportaban el concepto del gasto. Los casos en comento, se detallan a continuación:

(...)

ENTIDAD	FÓRMULA	REFERENCIA CONTABLE	DATOS DEL COMPROBANTE					REF
			NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	
Tlaxcala	F-2	PE-6/04-12	FA 816	30-04-12	Leticia Domínguez Miranda	6,163 Mts. de pintado de bardas, No. de aprobación: 392414; año de aprobación 2010	89,375.01	(2)

(...)

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UFDA/3699/13, del 18 de abril de 2013, recibido por el partido el mismo día.

(...)

La respuesta del partido se consideró insatisfactoria, toda vez que aun cuando manifestó que daría respuesta y proporcionaría la documentación mediante un escrito de alcance, a la fecha de elaboración del oficio UFDA/5285/13, la Unidad de Fiscalización no recibió documentación y/o aclaración alguna al respecto.

En consecuencia, se le solicitó nuevamente presentar lo siguiente:

- *Las muestras fotográficas de cada una de la publicidad utilizada en bardas, en las cuales se debería especificar su ubicación exacta, anexas a sus respectivas pólizas.*

(...)

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UFDA/5285/13, del 24 de mayo de 2013, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SAF/324/13, del 31 de mayo de 2013, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

Por lo que respecta al estado de Chihuahua, fórmula 2, se presenta en Apartado 68 la póliza PE-11/05-12, la cual contiene las muestras fotográficas de bardas y las autorizaciones para la fijación de las mismas.

De igual forma se hace entrega respecto de Chihuahua fórmula 1 de la póliza PE-16/05-12 que contiene las muestras fotográficas de bardas y sus respectivos permisos solicitados por la autoridad electoral.'

De la revisión a la documentación presentada por el partido, se determinó lo que se detalla a continuación:

En cuanto a los importes marcados con (2), en la columna "REF DICTAMEN", del cuadro que antecede, el partido omitió presentar nuevamente como anexo a sus respectivas pólizas 11 muestras fotográficas de la pinta de bardas, por tal motivo, la observación quedó no subsanada por \$970,775.01.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En consecuencia, al omitir presentar anexo a sus respectivas pólizas 11 muestras fotográficas por concepto de pinta de bardas, el partido incumplió con lo establecido en el artículo 182 del Reglamento de Fiscalización.'

Como se observa, la autoridad señalada como responsable hace referencia al oficio de requerimiento UF-DA/5285/13 y al escrito de respuesta SAF/324/13; sin embargo, como ya se examinó, el Partido Revolucionario Institucional presentó el escrito SAF/323/13, al cual adjuntó documentación que contiene las muestras fotográficas de la Fórmula 2 de Senadores para el Estado de Tlaxcala, las cuales le fueron solicitadas mediante oficio UF-DA/4908/13.

En este orden de ideas, esta Sala Superior considera que el actuar de la autoridad responsable fue indebido, dado que tuvo por demostrada una omisión, sin haber examinado la documentación que para el caso, había presentado el Partido Revolucionario Institucional.

De ahí, que no existe sustento para considerar la cantidad de \$89,375.01 (OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.), como monto involucrado en una falta formal que ha sido desvirtuada.

*En consecuencia, al quedar en relieve que la resolución impugnada, en la parte que ha sido materia de análisis, no se encuentra debidamente motivada, esta Sala Superior considera que ha lugar a **dejar sin efecto** la parte que ha sido materia de estudio de la conclusión 29 relativa al Partido Revolucionario Institucional, contenida en la resolución CG190/2013.*

3. Conclusión 72

En la parte conducente del escrito de impugnación, el partido político actor señala lo siguiente:

[Cuadro]

En la parte conducente de la resolución CG190/2013 (páginas 1274 a 1276), se expone lo siguiente:

'(...)

Al respecto, con escrito SF/324/13, del 31 de mayo de 2013, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

(...)

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

‘TLAXCALA

Por lo que respecta al estado de Tlaxcala se presentan las pólizas correspondientes a los distritos 2 (PE-07/06-12) y distrito 3 (PE- 02/04-12, PE-02/05-12) las cuales contienen los informes pormenorizados y hojas membretadas observadas’.

De la revisión a la documentación presentada por el partido se determinó lo que se detalla a continuación:

*En cuanto a las pólizas señaladas con (2) en la columna “REF DICTAMEN” del **Anexo 18**, del Dictamen Consolidado, el partido presentó las relaciones; sin embargo omitió presentar el informe pormenorizado de 11 Anuncios Espectaculares colocados en la Vía Pública en forma impresa y en medio magnético, por tal motivo, la observación quedó no subsanada por \$353,979.25.*

(...)

*Relativo a las pólizas señalada con (4) en la columna “REF DICTAMEN” del **Anexo 18**, del Dictamen Consolidado, el partido omitió presentar anexo a sus respectivas pólizas 38 relaciones y el informe pormenorizado de prestación de servicios, motivo por el cual, la observación quedó no subsanada por \$820,813.72.*

En consecuencia, al omitir presentar como anexo a sus respectivas pólizas 39 relaciones de anuncios espectaculares, y 49 informes pormenorizados, por \$1, 215,443.71, el partido incumplió con lo establecido en el artículo 181, numerales 1 inciso c); y 3 del Reglamento de Fiscalización.”

Con relación al anexo 18 que se indica, para el caso que interesa, se reproduce la parte conducente, que es del tenor siguiente:

ENTIDAD	DTTO	REFERENCIA CONTABLE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	REF DICTAMEN
Tlaxcala	D-2	PE-7/06-12	11	11-06-12	José Gregorio Quirino Mendieta Cuapio	2 Rentas de unidades vehiculares con vallas publicitarias y perifoneo del periodo del 29 de mayo al 27 de junio del 2012 con una duración de 8 horas diarias. En beneficio de la campaña del candidato a diputado federal por el Distrito 2 del estado de Tlaxcala Lic. Enrique Padilla Sánchez.	30,000.00	(4)
Tlaxcala	D-3	PE-2/05-12	1814	23-05-12	Ch-6 Erick Cortes Pérez F-1814	1 espectacular, impresión con medida 12”x3.6 m	4,431.20	(2)

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Con relación a los casos que controvierte el partido recurrente, cabe precisar que, de acuerdo a lo expuesto por la autoridad señalada como responsable, se advierte que:

- *En el informe de la campaña de Diputado Federal del Distrito 2 del Estado de Tlaxcala, la omisión consistió en presentar, anexo a la pólizas, la relación a detalle, en hoja membretada por la empresa que expidió la factura 11, de la publicidad colocada en dos unidades con vallas publicitarias, así como el informe pormenorizado; y*
- *En el informe de la campaña de Diputado Federal del Distrito 3 del Estado de Tlaxcala, la omisión consistió en presentar el informe pormenorizado, en forma impresa y en medio magnético, de un anuncio espectacular con una medida por 12x3.6 m., relacionada con la factura 1814.*

a. Diputado Federal del Distrito 2 del Estado de Tlaxcala

*Esta Sala Superior considera **fundado** el agravio de la parte recurrente.*

Del análisis de la documentación relacionada con la póliza “CAMPAÑA DIPUTADO TLAXCALA DISTRITO 02”, adjunta la “Carpeta 3/9”: “RESPUESTA AL OFICIO UF-DA/5285/13 “EGRESOS”, la cual se tiene a la vista en la Caja 39 del expediente que se resuelve, y misma a la que se le confiere valor probatorio de conformidad con lo previsto en los artículos 14, párrafo 1, inciso b); y 16, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que con relación a la Factura 011, expedida por la empresa “PUBLIMEJ vallas móviles”, relacionada con la renta de dos unidades vehiculares; se exhibió:

- I. *En hoja que contiene el membrete de la compañía, el informe a detalle de la publicidad que se expuso del veintisiete de mayo al veintisiete de junio de dos mil trece, debiéndose destacar que por tratarse de publicidad móvil, como lo señala dicho informe, de ello se desprende que la misma no estuvo colocada ni exhibida en un sitio específico;*
- II. *Una muestra fotográfica en la que se observa una unidad con la publicidad que exhibe; y*
- III. *Un informe pormenorizado escrito relacionado con dicha publicidad.*

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Por lo tanto, es de concluirse que, en el caso que se examina, el partido político actor no incurrió en la omisión de presentar la relación a detalle ni el informe pormenorizado a que se alude en la resolución, y derivado de ello, no resulta apegado a derecho considerar la cantidad de \$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), amparada en la Factura 011 expedida por “PUBLIMEJ vallas móviles”, como monto involucrado, al haber quedado desvirtuada la falta formal considerada por la autoridad responsable.

*Con apoyo en lo antes expuesto, esta Sala Superior considera que con relación a la conclusión 72, ha lugar a **dejar sin efecto** la parte que ha sido materia de estudio.*

(...)

4. Conclusión 76

Respecto de la “CONCLUSIÓN 76”, se señala que, de la revisión a la cuenta “Gastos en Espectaculares Colocados en la Vía Pública”, se localizaron pólizas las cuales presentaron como soporte documental contratos de prestación de servicios; sin embargo, estos carecían de la totalidad de las hojas. Tales casos se precisan en un cuadro, que a continuación se reproduce:

ENTIDAD	DISTRITO/ FORMULA	REFERENCIA CONTABLE	FACTURA					
			NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	HOJA FALTANTE DEL CONTRATO
Tabasco	F-1	P.E.-2/04-12	ENAA 257	23-04-12	Cia. Periodística El Heraldo de Tabasco S. A. de C. V.	1.-Transmisión de spots durante 30 días en las pantallas de Av. Universidad, Pages Llergo y paseo Tabasco del 13 de abril al 12 de mayo de 2012, del candidato al senado 'Lic. Humberto Mayans Canabal'.	\$35,496.00	7, 8 y 9
Tabasco	F-1	P.E.-2/06-12	ENAA 304	21-06-12	Cia. Periodística El Heraldo de Tabasco S. A. de C. V.	1 Transmisión de spots durante 16 días en las pantallas de paseo Tabasco Av. Universidad, Pages Llergo del 12 al 27 de junio de 2012, del candidato al senado 'Lic. Humberto Mayans Canabal'.	\$18,931.20	7, 8 y 9
Tabasco	F-1	P.E.-6/06-12	A0186	25-06-12	Graciela Esteban Bocanegra	Factura A 0186, 01 lona de espectacular de 10.00 x 4.00 mt., 01 lona de espectacular de 3.00 x 4.00 mt., 01 lona espectacular de 4.50 x 2.50 mt., Exhibidas el 02 de abril al 27 de junio de 2012.	197,304.40	7, 8 y 9

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

ENTIDAD	DISTRITO/ FORMULA	REFERENCIA CONTABLE	FACTURA					
			NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	HOJA FALTANTE DEL CONTRATO
Tabasco	F-1	P.E.-6/06-12	A0187	25-06-12	Graciela Esteban Bocanegra	Factura A 0187 01 lona de espectacular de 7.20 x 3.60 mt., 01 lona de espectacular de 3.00 x 3.00 mt., 01 lona de espectacular de 6.10 x 1.90 mt., Exhibidas el 02 de abril al 27 de junio de 2012.		
Tabasco	F-1	P.E.-6/06-12	A0188	25-06-12	Graciela Esteban Bocanegra	Factura A 0188 01 lona de espectacular de 6.10 x 1.90 mt., 02 lona de espectacular de 6.00 x 4.50 mt., 01 lona de espectacular de 10.00 x 4.20 mt., exhibidas del 02 de abril al 27 de junio de 2012.		
Tabasco	F-1	P.E.-6/06-12	A0189	25-06-12	Graciela Esteban Bocanegra	Factura A 0189, 02 lona de espectacular de 2.60 x 3.85 mt., 01 lona de espectacular de 6.00 x 4.00 mt.		
TOTAL							\$251,731.60	

Como consecuencia de las observaciones precisadas en el cuadro que antecede, en la resolución cuestionada se señala que se solicitó a la otrora coalición presentar lo siguiente:

- *Los contratos de prestación de servicios celebrados con los proveedores en comento, debidamente firmados, en los cuales se detallaran los servicios presentados, duración, el periodo, las condiciones, vigencia, términos pactados, monto total del servicio y formas de pago, en original y con la totalidad de las páginas que los ampararon, anexos a su póliza de registro.*
- *Las aclaraciones que a su derecho convinieran*

La autoridad responsable señala que tal solicitud se fundamentó en lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 149, numeral 1; 198 y 339, del Reglamento de Fiscalización.

De igual forma, en la resolución se señala que tal solicitud fue notificada a la otrora coalición, mediante oficio UFDA/3701/13 del dieciocho de abril de dos mil trece, en la misma fecha.

En respuesta a la solicitud antes precisada, la otrora coalición, mediante escrito CACP/007/13, del trece de mayo de dos mil trece, manifestó lo siguiente:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

*Se está en proceso de análisis e integración.
(...).*

Al respecto, la autoridad responsable señala, en la resolución ahora impugnada, que la respuesta de la otrora coalición se consideró insatisfactoria, toda vez que, a pesar de que manifestó que estaba en proceso de análisis e integración de la documentación solicitada, la misma no había sido presentada.

Como consecuencia de lo anterior, se solicitó a la otrora coalición nuevamente lo siguiente:

- Los contratos de prestación de servicios celebrado con los proveedores en comento, debidamente firmados, en los cuales se detallen los servicios prestados, duración, el periodo, las condiciones, vigencia, términos pactados, monto total del servicio y formas de pago, en original y con la totalidad de las páginas que los ampararon, anexos a su póliza de registro.*
- Las aclaraciones que a su derecho convinieran.*

Lo anterior, se fundamentó nuevamente en las disposiciones normativas antes precisadas.

En la resolución impugnada, se precisa que la solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5289/13, del veinticuatro de mayo de dos mil trece, recibido por la otrora coalición en la misma fecha.

Mediante escrito CACP/026/13, del treinta y uno de mayo de dos mil trece, la otrora coalición dio respuesta a la solicitud antes precisada, manifestando lo siguiente:

*Respecto al candidato a Senador de la fórmula 1 del Estado de Tabasco, y a efecto de dar respuesta a la presente observación, se presenta en **Apartado EVP17** las pólizas PE-02/04-12, PE-02/06-12 y PE-06/06-12, las cuales contienen los contratos de prestación de servicios observados, con la totalidad de hojas que integran cada uno de ellos.*

Sin embargo, la autoridad responsable precisa, en la resolución impugnada en el recurso de apelación bajo análisis, que:

“la respuesta de la otrora coalición se consideró insatisfactoria, toda vez que a la fecha de elaboración del Dictamen consolidado, omitió presentar

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

la documentación solicitada; por tal razón, la observación quedó no subsanada por un importe de \$251,731.60”.

De tal forma, la autoridad responsable concluye que, al haber presentado la otrora coalición cuatro contratos de prestación de servicios con hojas faltantes, incumplió con lo dispuesto en el artículo 198 del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, como ha quedado previamente precisado, el partido político recurrente alega que la determinación del Consejo General de Instituto Federal Electoral se encuentra indebidamente fundada y motivada, toda vez que la información solicitada fue entregada, a través de los diversos oficios de errores y omisiones que fueron contestados y en consecuencia no se tenía que estimar dichas observaciones como no cumplimentadas, por lo que no tenían por qué ser objeto de una sanción.

En este sentido, la actora sostiene que su afirmación de que la documentación fue presentada, la sustenta en las actas pormenorizadas que fueron realizadas por la propia autoridad electoral.

En razón de las consideraciones contenidas en la resolución impugnada, y de los argumentos expresados por la parte recurrente, a efecto de dilucidar la controversia en particular, debe acudir a las constancias que obran en los autos del expediente bajo estudio, para que a partir de su análisis, se determine a quién le asiste la razón, conforme a derecho.

Precisado lo anterior, esta Sala Superior advierte que en el expediente se encuentra el oficio de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, número UF-DA/5289/13, del veinticuatro de mayo de dos mil trece, suscrito por el Director General de la referida Unidad, en el cual se puede advertir, entre otros aspectos, que en la página 1 obra un sello, con la leyenda “Coalición Parcial. Compromiso por México. Comité de Administración”, con los emblemas del Partido Revolucionario Institucional (del lado izquierdo) y del Partido Verde Ecologista de México (del lado derecho), con la fecha “24 MAYO 2013”, en el que se puede apreciar una rúbrica ilegible, además del dato, en manuscrito de “16:30”.

Asimismo, en el oficio se puede advertir que se señala como “ASUNTO”, lo siguiente: “Errores y Omisiones de Egresos relativos a los Informes de Campaña correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalición Parcial ‘Compromiso por México’.(Segunda Vuelta al oficio UF-DA/3701/13)”.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

*En la documental antes precisada se puede apreciar, a fojas 74 a 76, el requerimiento antes detallado. Asimismo, en el oficio bajo análisis, se señala, en la página 1, que se hacen del conocimiento de la coalición, las observaciones que en el mismo oficio se indican, “para que, en un plazo de **5 días hábiles** contados a partir de la notificación” del propio oficio, proporcionara las aclaraciones y rectificaciones que fueran necesarias, así como la documentación comprobatoria y contable que se estaba requiriendo.*

De igual forma, en la última página del oficio en cita, se reitera que el plazo para presentar la documentación solicitada, así como las aclaraciones y rectificaciones correspondientes, ante la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, es de cinco días hábiles, y que de conformidad con el artículo 8, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, el mencionado plazo vence a las dieciocho horas del último día a computar “a fin de que la documentación solicitada sea presentada en tiempo”.

Por otra parte, en el expediente bajo estudio, obra el oficio del Comité de Administración de la Coalición Parcial “Compromiso por México”, con número CACP/026/13, del treinta y uno de mayo de dos mil trece, suscrito por el Responsable de la Administración de la referida coalición parcial, y dirigido al Director General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, en el que se consigna como “ASUNTO”, lo siguiente: “Respuesta al oficio UF-DA/5289/13 Correspondiente a Errores y Omisiones de Egresos relativos a los Informes de Campaña correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalición Parcial ‘Compromiso por México’. (2ª vuelta)”.

Cabe señalar que, en la página uno del oficio antes descrito, se puede advertir un sello en el que se contiene lo siguiente: “(EMBLEMA DEL IFE), INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS. 31 MAY 2013. RECIBIDO”, así como las anotaciones de puño y letra “23:55” y “Alberto Sánchez Lara”, en el espacio de “FIRMA”, además de una rúbrica ilegible.

De lo anterior, se puede desprender que el oficio de referencia, fue presentado ante la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, el treinta y uno de mayo del año en curso, a las veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos.

En la página 112 del oficio antes precisado, se da respuesta al requerimiento de la autoridad fiscalizadora, en los siguientes términos: “Respecto al candidato a Senador de la fórmula 1 del Estado de Tabasco, y a efecto de dar

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

respuesta a la presente observación, se presenta en Apartado EVP17 las pólizas PE-02/04-12, PE-02/06-12 y PE-06/06-12, las cuales contienen los contratos de prestación de servicios observados, con la totalidad de hojas que integran cada uno de ellos”.

Junto con el oficio del Responsable de la Administración de la Coalición Parcial “Compromiso por México”, se encuentra en autos el “ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS MEDIANTE OFICIO UF-DA/5289/13 POR LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL COMO RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COALICIÓN PARCIAL ‘COMPROMISO POR MÉXICO’, DERIVADAS DE LA REVISIÓN A LOS INFORMES DE CAMPAÑA CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012”, en la cual se consigna que la diligencia de mérito dio inicio a las “23:55 horas del 31 de mayo de 2013”. Entre la documentación entregada, según se desprende del contenido de la referida acta, se consigna lo siguiente: “...Carpeta 10 Apartado EVP17 correspondiente a Tabasco Fórmula 1 consistente en PE-02/04-12, PE-02/06-12, PE-06/06-12 con documentación soporte en original y en copias fotostáticas...”.

También cabe destacar que en autos obra la citada carpeta 10, en la cual se encuentran, entre otras constancias, los contratos de prestación de servicios solicitados, con la totalidad de fojas que los integran.

De tal forma, para esta Sala Superior, y a partir de las constancias que han quedado precisadas previamente, así como la normativa aplicable al caso concreto, resulta evidente que el requerimiento bajo estudio fue debidamente atendido por la coalición requerida, en el último día del plazo otorgado por la propia autoridad fiscalizadora, no obstante la hora en que se presentó ante la autoridad fiscalizadora, como se explica a continuación.

Como ha quedado precisado, el oficio de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, número UF-DA/5289/13, del veinticuatro de mayo de dos mil trece, mediante el cual se notificó el requerimiento realizado a la coalición parcial “Compromiso por México”, fue recibido por esta, el mismo día, a las dieciséis horas con treinta minutos.

De tal forma, los cinco días hábiles comprendieron del lunes veintisiete al viernes treinta y uno de mayo del año en curso, sin contar el veinticinco y veintiséis, al ser sábado y domingo, respectivamente.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

No escapa a esta Sala Superior, que en el oficio mediante el cual se realizó el requerimiento bajo análisis, expresamente se señaló que, el plazo para presentar la documentación solicitada, así como las aclaraciones y rectificaciones correspondientes, ante la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, era de cinco días hábiles, y que de conformidad con el artículo 8, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, el mencionado plazo vencía a las dieciocho horas del último día a computar, a fin de que la documentación que se estaba solicitando, se considerara presentada en tiempo.

Sin embargo, este último señalamiento resulta contrario a lo previsto en la normativa atinente, y particularmente en el Reglamento de Fiscalización. Al respecto, cabe hacer algunas precisiones, a efecto de hacer evidente el incorrecto proceder de la autoridad señalada como responsable.

En términos del artículo 84, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, después de que se ha realizado un primer requerimiento, en el que se ha notificado al partido político, o coalición, la existencia de errores u omisiones técnicas, para que en un plazo de diez días contados a partir de la correspondiente notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos está obligada a informar al partido político, o a la coalición, si las aclaraciones o rectificaciones hechas por éste subsanan los errores u omisiones encontrados, y de ser el caso, debe otorgarle un nuevo plazo improrrogable de cinco días, para que subsane los mismos.

Por su parte, en el artículo 8 del Reglamento de Fiscalización, invocado por la autoridad fiscalizadora en el oficio número UF-DA/5289/13, se prevé que, para efectos del propio Reglamento se entenderán por días hábiles, los laborables, con excepción de los sábados, los domingos, los no laborables en términos de ley y aquellos en los que no haya actividad en el Instituto Federal Electoral y por horas hábiles las comprendidas entre las nueve y las dieciocho horas, y se señala que, cuando no se precise, los días se entenderán como hábiles.

Asimismo, resulta necesario precisar que, en el artículo 18, párrafo 2, del citado Reglamento, expresamente se dispone que, el día de vencimiento de respuestas a oficios de errores y omisiones, la Unidad de Fiscalización deberá disponer las medidas necesarias, a efecto de recibir los oficios respectivos hasta las veinticuatro horas del día en que venza el plazo.

Con base en esta última disposición, resulta evidente que el señalamiento de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, en el

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

sentido de que el plazo para presentar la documentación solicitada, así como las aclaraciones y rectificaciones correspondientes, además de ser de cinco días hábiles, el mismo vencía a las dieciocho horas del último día a computar, resulta contrario a lo previsto en el referido Reglamento de Fiscalización.

En efecto, si bien es cierto que, de conformidad con el artículo 8, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización, para efectos del propio Reglamento se entienden como horas hábiles las comprendidas entre las nueve y las dieciocho horas, es necesario tener presente que, para efectos de presentar el desahogo de los requerimientos que formula la Unidad de Fiscalización, en el artículo 18 del propio Reglamento, se establece expresamente una regla particular que consiste en que, como ha quedado precisado, la citada autoridad fiscalizadora debe disponer las medidas necesarias, a efecto de recibir los oficios que den respuesta a los requerimientos relacionados con los errores y omisiones, hasta las veinticuatro horas del día en que venza el plazo.

*En conclusión, y como se anticipó, le asiste la razón a la recurrente en el sentido de que presentó la documentación que se requirió, de conformidad con las constancias que obran en autos, por lo que resulta **fundado** su agravio, en lo que se refiere a la conclusión identificada con el número 76, y en consecuencia, deberá ordenarse la **modificación** de la resolución ahora impugnada, a efecto de que lo señalado en tal conclusión no sea tomado en cuenta al momento de dictar la resolución que corresponda conforme a derecho.*

5. Conclusión 77

En cuanto a la “CONCLUSIÓN 77”, se señala que, de la revisión a la cuenta “Gastos en Espectaculares Colocados en la Vía Pública”, se observó el registro contable de pólizas que presentaron como soporte documental facturas de proveedores; sin embargo, la autoridad fiscalizadora refiere que no se localizaron los contratos de prestación de servicios correspondientes. Asimismo, precisa que los casos en comento fueron detallados en el Anexo 21 del oficio UF-DA/3701/13.

Por tal razón, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos requirió a la otrora coalición “Compromiso por México”, para que presentara lo siguiente:

- *Los contratos de prestación de servicios celebrados con los prestadores de servicio detallados en el Anexo 21 del oficio UFDA3701/ 13, debidamente firmados, en los cuales se detallaran los servicios*

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

presentados, duración, el periodo, las condiciones, vigencia, términos pactados, así como el monto total del servicio y formas de pago, en original anexos a su póliza de registro.

- *Las aclaraciones que a su derecho convinieran.*

Lo anterior, señala la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 198 y 339, del Reglamento de Fiscalización.

En la resolución ahora impugnada, se señala que la solicitud antes precisada fue notificada mediante oficio UFDA/3701/13, del dieciocho de abril de dos mil trece, el cual fue recibido por la otrora coalición “Compromiso por México”, en la misma fecha.

Por su parte, la otrora coalición “Compromiso por México”, dio contestación al requerimiento antes precisado, mediante escrito CACP/007/13 del tres de mayo de dos mil trece, manifestando lo siguiente:

*Se está en proceso de análisis e integración.
(...)*

La autoridad fiscalizadora consideró insatisfactoria la respuesta antes precisada, pues la documentación no había sido presentada, por lo que determinó realizar un nuevo requerimiento a la otrora coalición de referencia, en los siguientes términos:

- *Los contratos de prestación de servicios celebrados con los proveedores con los prestadores de servicios, detalladas en el Anexo 12 del oficio UF-DA/5289/13, debidamente firmados, en los cuales se detallen los servicios prestados, duración, el periodo las condiciones, vigencia y términos pactados, así como el monto total del servicio y formas de pago, en original anexos a sus pólizas de registro.*
- *Las aclaraciones que a su derecho convinieran.*

Tal requerimiento, al igual que el previamente realizado, se fundamentó en lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 198 y 339, del Reglamento de Fiscalización.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Esta nueva solicitud fue notificada por la autoridad fiscalizadora a la otrora coalición, mediante oficio UFDA/5289/13 del veinticuatro de mayo de dos mil trece, quien la recibió en la misma fecha.

La otrora coalición “Compromiso por México”, dio respuesta al nuevo requerimiento, mediante escrito CACP/026/13, del treinta y uno de mayo de dos mil trece, expresando lo que a continuación se reproduce:

*Al respecto, se presenta documentación en **EVP18** como a continuación se detalla:*

JALISCO.

Se presentan los contratos anexos a las pólizas señaladas con (1); conviene precisar que en algunos casos se realizó un solo contrato que ampara diversas facturas como a continuación se detalla:

[Cuadro]

DISTRITO FEDERAL.

[Cuadro]

Es importante aclarar que los contratos fueron presentados en tiempo y forma para su revisión anexos a sus respectivas fórmulas; sin embargo, en aras de cumplir con lo solicitado por la autoridad se presenta nuevamente en apartado EVP18, las pólizas señaladas con (1) en la columna “Referencia del presente”, con su respectiva documentación soporte original consistente en copia de cheque, factura, muestra fotográfica, hoja membretada impresa y contrato de prestación de servicios.

QUINTANA ROO

Del Estado de Quintana Roo, se presentan las pólizas siguientes: PE-16/06-12, son soporte documental.

TABASCO.

Respecto a la omisión de contratos correspondientes al Estado de Tabasco fórmula 1, en Apartado EVP17 se hace entrega de la póliza PE-02/04-12 con su documentación soporte correspondiente, la cual contiene el contrato observado.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Por lo que respecta a la póliza con referencia PE-04/05-12 en la cual se presenta en el EVP18, con su respectiva documentación soporte

SAN LUIS POTOSÍ.

Se remite póliza PE-26/05-12 del Estado de San Luis, con su respectivo soporte documental.

ESTADO DE MÉXICO.

Se remite póliza PE-16/06-12, PE-13/05-12, PE-29/06-12, PE-14/05-12, con su respectivo soporte documental’.

Respecto de la respuesta antes transcrita, la autoridad fiscalizadora, en la resolución ahora impugnada, señala que de la revisión a la documentación presentada por la otrora Coalición, se determinó lo siguiente:

Por lo que respecta a los proveedores referenciados con (1) en la columna “Referencia para Dictamen” del Anexo 12 del oficio UFDA/5289/13, Anexo 38, del Dictamen consolidado, a la fecha de elaboración del Dictamen consolidado la otrora coalición no presentó la documentación solicitada; por tal razón, la observación quedó no subsanada por un importe de \$2’119,992.47.

De tal forma, en la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, se concluye que, al no presentar dieciséis contratos de prestación de servicios anexos a sus respectivas pólizas, la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 198 del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, como ha quedado previamente precisado, el partido político recurrente argumenta que la determinación del Consejo General de Instituto Federal Electoral se encuentra indebidamente fundada y motivada, toda vez que la información solicitada fue entregada, por medio de los diversos oficios de errores y omisiones que fueron contestados, por lo que, desde su perspectiva, no se tenía que estimar dichas observaciones como no cumplimentadas y, en consecuencia, tampoco debían ser objeto de una sanción.

Al respecto, resulta necesario tomar en cuenta que el partido político recurrente sostiene que su afirmación de que la documentación fue presentada, la sustenta en las actas pormenorizadas que fueron realizadas por la propia autoridad electoral.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones de la autoridad señalada como responsable, mismas que se encuentran contenidas en la resolución ahora impugnada, y los argumentos expresados por el partido político recurrente, con la finalidad de esclarecer la controversia en particular, debe acudir a las constancias que obran en los autos del expediente bajo estudio, para que a partir de su análisis, se determine a quién le asiste la razón, conforme a derecho.

Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional electoral federal advierte que, en el expediente formado con motivo del recurso de apelación que ahora se resuelve, se encuentra el oficio de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos identificado con el número UF-DA/5289/13, del veinticuatro de mayo de dos mil trece, suscrito por el Director General de la referida Unidad, en el cual se puede advertir, entre otros aspectos, que en la página 1 obra un sello, con la leyenda “Coalición Parcial. Compromiso por México. Comité de Administración”, con los emblemas del Partido Revolucionario Institucional (del lado izquierdo) y del Partido Verde Ecologista de México (del lado derecho), con la fecha “24MAYO 2013”, en el que se puede apreciar una rúbrica ilegible, además del dato, en manuscrito de “16:30”.

De igual forma, en el oficio se puede advertir que se señala como “ASUNTO”, lo siguiente: “Errores y Omisiones de Egresos relativos a los Informes de Campaña correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalición Parcial ‘Compromiso por México’. (Segunda Vuelta al oficio UFDA/3701/13)”.

En la documental antes precisada se puede apreciar, a fojas 76 a 77, el requerimiento antes detallado. Asimismo, en el oficio bajo análisis, se señala, en la página 1, que se hacen del conocimiento de la coalición, las observaciones que en el mismo oficio se indican, “para que, en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la notificación” del propio oficio, proporcionara las aclaraciones y rectificaciones que fueran necesarias, así como la documentación comprobatoria y contable que se estaba requiriendo.

Resulta necesario precisar que en la página 100, que es la última del oficio bajo análisis, se reitera que el plazo para presentar la documentación solicitada, así como las aclaraciones y rectificaciones correspondientes, ante la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, es de cinco días hábiles, y que de conformidad con el artículo 8, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, el mencionado plazo vence a las dieciocho horas del último día a computar “a fin de que la documentación solicitada sea presentada en tiempo”.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Por otra parte, en el expediente bajo análisis, obra el oficio del Comité de Administración de la Coalición Parcial “Compromiso por México”, identificado con el número CACP/026/13, del treinta y uno de mayo de dos mil trece, suscrito por el Responsable de la Administración de la referida coalición parcial, y dirigido al Director General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, en el que se consigna como “ASUNTO”, lo siguiente: “Respuesta al oficio UF DA/5289/13 Correspondiente a Errores y Omisiones de Egresos relativos a los Informes de Campaña correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalición Parcial ‘Compromiso por México’. (2ª vuelta)”.

Resulta necesario señalar que, en la página uno del oficio del Comité de Administración de la Coalición Parcial “Compromiso por México”, se puede advertir un sello en el que se contiene lo siguiente: “(EMBLEMA DEL IFE), INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS. 31 MAY 2013. RECIBIDO”, así como las anotaciones de puño y letra “23:55” y “Alberto Sánchez Lara”, en el espacio de “FIRMA”, además de una rúbrica ilegible.

De los elementos antes descritos, y que se encuentran en el oficio de mérito, se puede desprender que dicho oficio fue presentado ante la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, el treinta y uno de mayo del año en curso, a las veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos.

En las páginas 113 a 115 del oficio antes precisado, se da respuesta al requerimiento de la autoridad fiscalizadora, en los términos que en la resolución ahora impugnada se reproducen, y que en obvio de repeticiones no se transcribe.

Sin embargo, de la respuesta emitida en su momento, cabe destacar que el Responsable de Administración de la Coalición Parcial “Compromiso por México”, señaló que presentaba la documentación en EVP18, y procedía a detallarla, por entidad federativa, auxiliándose con dos tablas, por lo que se refiere al Estado de Jalisco y el Distrito Federal.

En cuanto al Estado de Jalisco y el Distrito Federal, señaló que se presentaban los contratos anexos a las pólizas precisadas en las respectivas tablas, explicando que en algunos casos, se realizó un solo contrato, que amparaba diversas facturas.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En su respuesta, el Responsable de Administración de la Coalición Parcial “Compromiso por México”, aclaró que los contratos fueron presentados en tiempo y forma para su revisión anexos a sus respectivas fórmulas; y que sin embargo, en aras de cumplir con lo solicitado por la autoridad, presentaba nuevamente en el apartado EVP18, las pólizas precisadas en las tablas, con su respectiva documentación soporte original, consistente en copia de cheque, factura, muestra fotográfica, hoja membretada impresa y contrato de prestación de servicios. En cuanto a los Estados de Quintana Roo, Tabasco, San Luis Potosí, así como el Estado de México, precisó las pólizas relativas, afirmando que se acompañaba su correspondiente soporte documental.

Cabe destacar que, junto con el oficio del Responsable de la Administración de la Coalición Parcial “Compromiso por México”, se encuentra en autos el “ACTA DE ENTREGARECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS MEDIANTE OFICIO UFDA/5289/13 POR LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL COMO RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COALICIÓN PARCIAL ‘COMPROMISO POR MÉXICO’, DERIVADAS DE LA REVISIÓN A LOS INFORMES DE CAMPAÑA CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012”, en la cual se consigna que la diligencia de mérito dio inicio a las “23:55 horas del 31 de mayo de 2013”

Entre la documentación entregada, según se desprende del contenido de la referida acta, se consigna lo siguiente:

*“...**Carpeta 10... Apartado EVP18** correspondiente a Distrito Federal Fórmula 1 consistente en PE-14/06-12, PE-11/05-12, PE-06/06-12, PE-05-06-12, PE-9/06-12 y PE-11/06-12 con documentación soporte en original y en copias fotostáticas, Quintana Roo Fórmula 1 consistente en PE-16/06-12 con documentación soporte en original y en copias fotostáticas, Tabasco Fórmula 1 consistente en PE-04/05-12 con documentación soporte en original y en copias fotostáticas;...”*

No obstante lo anterior, y como ha quedado precisado previamente, la autoridad señalada como responsable se concretó a sostener que, por lo que respecta a los proveedores referenciados con “(1)” en la columna “Referencia para Dictamen” del Anexo 12 del oficio UF-DA/5289/13, Anexo 38, del Dictamen consolidado, a la fecha de elaboración del referido Dictamen la otrora coalición no presentó la documentación solicitada; por lo que determinó que la observación quedó no subsanada por un importe de \$2’119,992.47 (DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.).

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Asimismo, en la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, se concluye que, al no presentar dieciséis contratos de prestación de servicios anexos a sus respectivas pólizas, la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 198 del Reglamento de Fiscalización.

Sin embargo, tales razonamientos resultan imprecisos, toda vez que si bien se puede advertir que el apartado EVP18 que se refiere el oficio identificado con el número CACP/026/13, del treinta y uno de mayo de dos mil trece, suscrito por el Responsable de la Administración de la Coalición Parcial “Compromiso por México”, a partir de la correspondiente acta de entrega-recepción de la documentación, no se encuentra la totalidad de las constancias que refiere en dicho oficio, no menos cierto es que el anexo al que se refiere la responsable, tampoco brinda precisión respecto de cuáles con los contratos de prestación de servicios que estimó no fueron presentados, como se puede advertir de dicho anexo 12, que a continuación se reproduce:

**UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS
COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO
CONTRATO
ANEXO 12**

ENTIDAD	DISTRITO/ FORMULA	REFERENCIA CONTABLE	NO. DE COMPROBANTE	FECHA	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE
Distrito Federal	F-1	P.E.-14/6-2012	487	18-06-12	Poster Comercial Regional S.A. de C.V. F-487	Anuncios espectaculares	\$42,500.00
Distrito Federal	F-1	P.E.-11/5-2012	450	24-05-12	Poster Comercial Regional	2 anuncios espectaculares en el interior de la República.	44,592.09
Distrito Federal	F-1	P.E.-6/6-2012	A3044	18-05-12	Isa Corporativo, S.A. de C.V.	Cabecera para metro	932,210.80
Distrito Federal	F-1	P.E.-5/6-2012	2253	12-06-12	Migonet S.A. de C.V.	Renta de espectacular	32,250.00
Distrito Federal	F-1	P.E.-9/6-2012	313507	18-06-12	Vendor Publicidad Exterior S. de RL de C.V.	Carteleras	45,240.00
Distrito Federal	F-1	P.E.-11/6-2012	5868	14-06-12	Casa Publicidad y Asociados S.A. de C.V.	Servicios publicitarios	175,000.00
Jalisco	F-1	P.E.-9/6-2012	A056 A061 A070	07-jun- 12	Israel Barajas Lugo	5 Horas de grúa, 1 lona impresa en gran formato de 23x6m, instalación y 5 lonas display	64,902.00
Jalisco	F-1	P.E.-20/6-12	A078	27-jun- 12	Israel Barajas Lugo	12 desmontada de lonas para espectacular en dif. Puntos de la	32,712.00
Jalisco	F-1	P.E.-1/5-12	3385	25-abr- 12	Fidel Ramón Changolla Pimienta	Pago del 50% de renta de 6 estructuras metálicas, para la instalación de lonas publicitarias.	49,184.00
Jalisco	F-1	P.E.-12/5-12	1571	16-may- 12	Alterc Gdl S.A. de C.V.	1 ½ meses de renta de espacio	29,580.00

CONSEJO GENERAL SUP-RAP-124/2013 Y OTROS

ENTIDAD	DISTRITO/ FORMULA	REFERENCIA CONTABLE	NO. DE COMPROBANTE	FECHA	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE
Jalisco	F-1	P.E.-14/5-12	1574	16-may-12	Alterc Gdl S.A. de C.V.	Espectaculares y vallas en lonas	51,493.79
Jalisco	F-1	P.E.-17/5-12	1578	24-may-12	Alterc Gdl S.A. de C.V.	1 ½ meses de renta de espacio publicitario. Espectacular en lona de 12x8	101,616.00
Jalisco	F-1	P.E.-18/5-12	1591	28-may-12	Alterc Gdl S.A. de C.V.	3 pantallas spots 2 vallas lonas 10x3 2 espectaculares 2 caras	237,800.00
Jalisco	F-2	P.E.-19/5-12	1593	24-may-12	Alterc Gdl S.A. de C.V.	7 espectaculares 1 cartelera 10 vallas vinil 1 espectacular doble ubicación 12x16	101,500.00
Jalisco	F-2	P.E.-3/4-2012	1553	16-04-12	Alterc GDL S.A. de C.V.	4 lonas de 12x8, 2 lonas de 12.90 x 7.20, 500 lonas de 1.80 x 1.50, 1 lona de 7x9	138,620.00
Jalisco	F-2	P.E.-1/5-2012	A28	16-04-12	Israile Barajas	69.5 metros cuadrados de lonas impresas	4,031.00
Jalisco	F-2	P.E.-1/5-2012	A27	16-04-12	Israile Barajas	95 metros cuadrados de lonas impresas	4,953.00
Jalisco	F-2	P.E.-8/5-2012	1580	16-05-12	Alterc GDL S.A. de C.V.	Renta de espacio publicitario	29,580.00
Jalisco	F-2	P.E.-10/5-2012	1581	16-05-12	Alterc GDL S.A. de C.V.	Lonas para espectaculares	51,493.79
Jalisco	F-2	P.E.-11/5-2012	1585	24-05-12	Alterc GDL S.A. de C.V.	Mes y medio de renta de espectacular y 96 metros de lonas de 12x8	101,616.00
Jalisco	F-2	P.E.-13/5-2012	1588	28-05-12	Alterc GDL S.A. de C.V.	3 pantallas de spots, 2 vallas, 2 espectaculares, 2 espectaculares y 1 cartelera	237,800.00
Jalisco	F-2	P.E.-14/5-2012	1594	24-05-12	Alterc GDL S.A. de C.V.	7 espectaculares, 1 cartelera, 10 vallas, 1 espectacular	101,500.00
Jalisco	F-2	P.E.-18/6-2012	104	26-06-12	Apoyos Empresariales Jaimarell S.A. de C.V.	20 carteleras en cabinas con renta, 20 renta de carteleras, espectaculares foráneos doble cara, 6 espectaculares con la renta de la estructura por 3 meses	232,000.00
Quintana Roo	F-1	P.E.-16/06-2012	A472	07-jun-12	Extreme Energy S.A. de C.V.	Publicidad en espectaculares	60,000.00
Tabasco	F-1	P.E.-2/04-12	ENAA257	23-04-12	Cía. Periodística El Heraldo de Tabasco, S.A. de C.V.	1 transmisión de spots durante 30 días en las pantallas de av. Universidad, pages Llargo y paseo tabasco del 13 de abril al 12 de mayo de 2012 del candidato al senado "Lic. Humberto Mayans Canabal"	35,496.00
Tabasco	F-1	P.E.-4/05-12	ENAA275	16-05-12	Cía. Periodística El Heraldo de Tabasco, S.A. de C.V.	1 transmisión de spots durante 30 días en las pantallas de av. Universidad, pages Llargo y paseo tabasco del 13 de mayo al 11 de junio de 2012 del candidato al senado "Lic. Humberto Mayans Canabal"	35,496.00
TOTAL							\$2973,166.47

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

De tal forma, para esta Sala Superior a partir de las constancias que han quedado precisadas previamente, así como la normativa aplicable al caso concreto, resulta evidente que no existe certeza respecto de por qué consideró la autoridad fiscalizadora que el requerimiento bajo estudio no fue debidamente atendido por la coalición requerida.

*Es así que, le asiste la razón a la recurrente en el sentido de que la resolución carece de una debida motivación, por lo que resulta **fundado** su agravio, en lo que se refiere a la conclusión identificada con el número 77, y en consecuencia, deberá ordenarse la **revocación** de la resolución ahora impugnada, a efecto de que la autoridad fiscalizadora, al emitir la resolución que corresponda conforme a lo resuelto en la presente ejecutoria, señale con precisión, cuál es la documentación que estima no fue presentada por la coalición requerida, y determine lo que corresponda conforme a derecho.*

Cabe hacer la aclaración que, como ha quedado razonado respecto de la conclusión precedente, el oficio identificado con el número CACP/026/13, del treinta y uno de mayo de dos mil trece, suscrito por el Responsable de la Administración de la Coalición Parcial “Compromiso por México, fue presentado en tiempo, de conformidad con la normativa aplicable, ante la Unidad de Fiscalización.

6. Conclusión 78

En cuanto a la “CONCLUSIÓN 78”, en la resolución impugnada en el presente recurso de apelación, se señala que, de la revisión a la cuenta “Gastos en Espectaculares Colocados en la Vía Pública”, se observó el registro contable de pólizas que presentaron como soporte documental facturas de proveedores; sin embargo, la otrora coalición omitió presentar las fotografías correspondientes, y se agrega que los casos en comento se detallaron en el Anexo 22 del oficio UF-DA/3701/13.

Por tal razón, la Comisión de Fiscalización procedió a solicitar a la otrora coalición presentar lo siguiente:

- *Las fotografías de los Anuncios Espectaculares en la Vía Pública en las cuales se indicara la ubicación exacta de donde fueron colocados, anexas a su póliza de registro.*
- *Las aclaraciones que a su derecho convinieran.*

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Tal requerimiento lo sustentó la autoridad fiscalizadora, en lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso K) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como los artículos 181, numerales 1, inciso c), 3, 5 y 339, del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UFDA/3701/13 del dieciocho de abril de dos mil trece, recibido por la otrora coalición en la misma fecha.

Al respecto, con escrito CACP/007/13 del tres de mayo de dos mil trece, la otrora coalición manifestó lo que a la letra se transcribe:

*‘Con referencia a este punto, se hacen las aclaraciones correspondientes en el Apéndice XXII’.
(...).’*

La respuesta de la otrora coalición se consideró insatisfactoria, toda vez que, al decir de la autoridad responsable, aun cuando dicha coalición señaló que presentó la documentación solicitada, esta no había sido presentada.

Como consecuencia de lo anterior, en la resolución impugnada se precisa que se solicitó a la otrora coalición nuevamente lo siguiente:

- *Las fotografías de los Anuncios Espectaculares en la Vía Pública en las cuales se indique la ubicación exacta de donde fueron colocados detalladas en el Anexo 13 del oficio UF-DA/5289/13, anexas a sus pólizas de registro.*
- *Las aclaraciones que a su derecho convinieran.*

Tal requerimiento, según lo consigna la autoridad fiscalizadora, se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 38, párrafo 1, inciso k), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como los artículos 181, numerales 1, inciso c), 3, 5 y 339, del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, la autoridad fiscalizadora consigna en la resolución ahora impugnada, que la referida solicitud, le fue notificada a la otrora coalición, mediante oficio UF-DA/5289/13, del veinticuatro de mayo de dos mil trece, recibido por la coalición en la misma fecha.

De la revisión del citado oficio, se advierte que a fojas 77 y 78 del mismo, se encuentra el requerimiento al que se refiere la resolución ahora impugnada.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En respuesta a la solicitud antes señalada, la otrora coalición manifestó, mediante el escrito identificado con la clave CACP/026/13, del treinta y uno de mayo de dos mil trece, lo que a continuación se transcribe:

*Para dar contestación al presente punto, se hace entrega en **EVP19** de la siguiente documentación:*

JALISCO

[Cuadro]

Las pólizas señaladas con (1) se presentan en el apartado EVP-18 y las señaladas con (2) se presentan en el EVP-19.

PUEBLA

[Cuadro]

DISTRITO FEDERAL

[Cuadro]

En el apartado EVP19, se presenta la póliza identificada con (1) en la columna “Referencia del Partido”, con su respectivo soporte documental incluyendo las muestras fotográficas.

Respecto a la póliza identificada con (2) en la columna “Referencia del Partido”, se presenta en el apartado EVP18, con sus respectivas muestras.

Respecto a la póliza identificada con (3) en la columna “Referencia del Partido”, se presenta en escrito de respuesta al oficio UF/DA/5286-13, con sus respectivas muestras.

Con respecto a la póliza identificada con (4) en la columna “Referencia del Partido”, se presenta en el apartado EVP21, con sus respectivas muestras.

CUADRO A.

CHIAPAS.

A fin de dar respuesta al caso observado relativo al Estado de Chiapas fórmula 1, se hace entrega en el Apartado EVP19 de la póliza contable PE-04/06-12, PE-01/05-12, PE-10/05-12 y PE-11/06-12, la cual contiene su documentación soporte completa e incluye las muestras observadas.

VERACRUZ.

A fin de dar respuesta al caso observado relativo al Estado de Veracruz fórmula 1, se hace entrega en el Apartado EVP19 de la póliza contable PE-06/06-12, la cual contiene su documentación soporte completa e incluye las muestras observadas.

ZACATECAS.

A fin de dar respuesta al caso observado relativo al Estado de Zacatecas f-1, se hace entrega en el Apartado EVP19 de la póliza contable PE-10/06-12, y Zacatecas fórmula 2, la PE-07/05-12, la cual contiene su documentación soporte completa e incluye las muestras observadas’.

De la revisión a la documentación presentada por la otrora Coalición, la autoridad fiscalizadora determinó lo siguiente:

Con relación a las facturas señaladas con (1) en la columna “Referencia para Dictamen” del Anexo 13 del oficio UF-DA/5289/13, Anexo 39 del Dictamen consolidado, a la fecha de elaboración del Dictamen consolidado, la otrora coalición no presentó la documentación solicitada; por tal razón, la observación quedó no subsanada por un importe de \$1’967,560.40 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 40/100 M.N.).

De tal forma, la autoridad fiscalizadora determinó que, al no presentar la otrora coalición, las muestras de dieciséis facturas anexas a sus respectivas pólizas, dicha coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 181, párrafo 5, del Reglamento de Fiscalización.

*Al respecto, del análisis de las constancias que obran en el expediente, se advierte que el agravio expuesto por la recurrente resulta **fundado**, toda vez que, como lo señala la recurrente, la resolución de la autoridad fiscalizadora no se encuentra debidamente motivada, pues la responsable sólo se concreta a señalar que la otrora coalición fue omisa en aportar todas las muestras que le fueron requeridas, sin embargo, no precisa cuáles fueron los dieciséis casos que no fueron debidamente atendidos, esto es, en cuáles no se presentaron las muestras que se le solicitaron.*

En efecto, en el expediente obra el anexo 13, del oficio UFDA/5289/13, en el cual se precisaron los casos respecto de los cuales se estaban solicitando las muestras que presuntamente estaban pendientes de ser exhibidas por la entonces coalición Compromiso por México.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Sin embargo, de la revisión del citado anexo 13 del oficio UF-DA/5289/13, no se advierte que haya una columna “Referencia para Dictamen”, sino que las columnas del mismo son las siguientes: “Entidad”, “Distrito/Formula”, “Referencia Contable”, “N° de Comprobante”, “Fecha”, “Proveedor y/o prestador de servicios”, “Concepto”, e “Importe”. De tal forma, no es posible determinar a cuáles casos se refiere la resolución ahora impugnada, esto es, en qué casos no fueron presentadas las muestras solicitadas.

En consecuencia, deberá ordenarse la revocación de la resolución ahora impugnada, a efecto de que la autoridad fiscalizadora, al emitir la resolución que corresponda conforme a lo resuelto en la presente ejecutoria, señale con precisión, cuáles son los casos en que las muestras requeridas no fueron presentadas por la coalición de mérito, y un vez hecho lo anterior, determine lo que corresponda conforme a derecho.

Cabe hacer la aclaración que, como ha quedado razonado respecto de las conclusiones precedentes, el oficio identificado con el número CACP/026/13, del treinta y uno de mayo de dos mil trece, suscrito por el Responsable de la Administración de la Coalición Parcial “Compromiso por México, fue presentado en tiempo, de conformidad con la normativa aplicable, ante la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral.

7.8.9. Conclusiones 79, 80 y 82

*Con relación a las conclusiones **79, 80 y 82** el Partido Revolucionario Institucional alega que el Consejo General del Instituto Federal Electoral efectuó un análisis equívoco, incompleto y sesgado del informe de gastos de campaña. Lo anterior porque, a su juicio, indebidamente se le atribuyó la omisión de presentar diversa documentación solicitada dentro del procedimiento de fiscalización, siendo que, la información requerida fue desahogada en tiempo y forma; por lo que, a juicio del recurrente, resulta inexacto que la autoridad hubiera sancionado por la omisión de exhibirla.*

Para tal efecto, el actor inserta una tabla en la que sistematiza diversa información relacionada con la documentación que en su oportunidad le fue requerida (cuya presunta omisión de exhibir generó la sanción); asimismo identifica los oficios en los que el partido afirma haber desahogado la documentación requerida; y, finalmente identifica en qué carpeta, disco o documento del expediente del presente recurso de apelación, se encuentra la información que asegura haber remitido oportunamente a la autoridad fiscalizadora a fin de subsanar la omisión que se le atribuye.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Para demostrar lo anterior, el actor inserta una tabla con los rubros siguientes: a. conclusión a la que se refiere la sanción; b. entidad federativa; c. la fórmula de candidatos; d. la referencia contable, e. el importe; f. los números de oficio de requerimiento de la autoridad fiscalizadora; g. los números de oficio de respuesta del partido; h. el contenido de la respuesta; i. así como el apéndice o apartado del acta del presente expediente, en donde se encuentra el desahogo de la información solicitada.

La información, respecto de la cual, se le atribuyó la omisión de presentar en el informe de gastos de campaña es la que a continuación se menciona.

(...)

*Respecto a la **conclusión 80** se sancionó a la otrora coalición porque al revisar la cuenta “Gastos en Espectaculares Colocados en la Vía Pública”, se omitió presentar la documentación relacionada con las hojas membretadas impresas y la hoja de cálculo Excel de los anuncios espectaculares que amparó cada una de las facturas reportadas.*

El informe pormenorizado de los Anuncios Espectaculares colocados en la Vía Pública debía de contener:

- *La relación de cada uno de los anuncios espectaculares que amparó cada una de las facturas impresa y en hoja de cálculo electrónica en hojas membretadas de la empresa, anexas a sus pólizas de registro, la cual debía de contener la siguiente información:*
- *Nombre la otrora coalición que contrató;*
- *Nombre del candidato que apareció en cada espectacular;*
- *Número de espectaculares que amparó;*
- *Valor unitario de cada espectacular, así como el Impuesto al Valor Agregado de cada uno de ellos;*
- *Periodo de permanencia de cada espectacular rentado y colocado;*
- *Ubicación exacta de cada espectacular: nombre de la calle principal, número, calles aledañas, colonia, municipio o delegación; o en su caso los datos del taxi, microbús o autobús en los que se colocó la propaganda;*
- *Entidad Federativa en donde se rentaron y colocaron los espectaculares;*
- *Medidas de cada espectacular;*
- *Detalle del contenido de cada espectacular; y*
- *Fotografías.*

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Asimismo, se requirieron las fotografías de los espectaculares que respaldaran las hojas membretadas, las cuales deberían señalar la ubicación exacta de donde fueron exhibidos.

La información requerida se relaciona con los siguientes conceptos, importes, proveedores, entidad federativa y referencia contable:

<i>Entidad</i>	<i>Referencia contable</i>	<i>Proveedor y/o prestador de servicios</i>	<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>
Chiapas	P.E.-8/5-2012	Publicidad Gráfica Signal S.A De C.V	Pago total por la contratación de espectaculares para la campaña para Senador por Chiapas, PRI-PVEM, Lic. Roberto Albores Gleason, durante el periodo del 23 de abril al 27 de mayo de 2012.	504,552.67
Jalisco	P.E.-9/6-12	Israel Barajas Lugo	5 Horas de grúa, 1 lona impresa en gran formato de 23x6m, instalación y 5 lonas display	64,902.00
Jalisco	P.E.-14/5-2012	Alterc GDL S.A. de C.V.	7 espectaculares, 1 cartelera, 10 vallas, 1 espectacular	101,500.00
Tabasco	P.E.-4/05-12	Cia Periodística El Heraldo De Tabasco SA de CV	1 transmisión de spots durante 30 días en las pantallas de Av. Universidad, Pages Llergo y Paseo Tabasco del 13 de mayo al 11 de junio del 2012 del candidato al senado "Lic. Humberto Mayans Canabal"	35,496.00

*Por lo que hace a la **conclusión 82** se sancionó a la otrora coalición porque al verificar la cuenta “Gastos en Espectaculares Colocados en la Vía Pública”, se observaron pólizas las cuales contenían como soporte documental facturas de proveedores, contratos de prestación de servicios, hojas membretadas y fotografías; sin embargo, las hojas membretadas carecían de la totalidad de datos como ubicación exacta del espectacular, detalle del contenido y datos del vehículo.*

La relación de cada uno de los anuncios que amparó la factura y el periodo en el que permanecieron colocados en hojas membretadas de la empresa, impresa y en hoja de cálculo electrónica, debía contener la siguiente información:

- Nombre de quien contrató;
- Nombre del candidato que apareció en cada espectacular;
- Número de espectaculares que amparó;

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- *Valor unitario de cada espectacular, así como el Impuesto al Valor Agregado de cada uno de ellos;*
- *Periodo de permanencia de cada espectacular rentado y colocado;*
- *Ubicación exacta de cada espectacular: nombre de la calle principal, número, calles aledañas, colonia, municipio o delegación; o en su caso los datos del taxi, microbús o autobús en los que se colocó la propaganda;*
- *Entidad Federativa en donde se rentaron y colocaron los espectaculares;*
- *Medidas de cada espectacular;*
- *Detalle del contenido de cada espectacular, y*
- *Fotografías.*

La anterior información se requirió con relación a los siguientes conceptos, importes, proveedores, entidad federativa y referencia contable:

[Cuadro]

*Expuesto lo anterior, se estima que es **parcialmente fundado** el agravio formulado por el actor, en tanto que, de la revisión hecha por este órgano jurisdiccional a la información consistente en discos compactos en formato DVD, carpetas, oficios, entre otra documentación aportada por la otrora coalición ante la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, se advierte que existe documentación que sí fue presentada por la otrora coalición, respecto de la cual, la Unidad responsable dejó de tomar en consideración al momento de determinar la existencia de la falta.*

Lo anterior se sustenta a partir de los resultados que arrojó la revisión llevada a cabo por esta instancia jurisdiccional a los documentos que, en su oportunidad, presentó el actor ante la Unidad de Fiscalización.

Para evidenciar la afirmación anterior, a continuación se inserta una tabla en la que se confronta la información requerida por la Unidad de Fiscalización a la otrora coalición como parte de su obligación de reportar la documentación necesaria de sus gastos de campaña, contra la información encontrada en los oficios y carpetas que fueron exhibidos oportunamente ante la responsable.

[Tablas]

(...)

*Por lo que corresponde a la conclusión 80 el agravio es **parcialmente fundado**.*

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Lo anterior porque, si bien el apelante no logró demostrar la presentación de la documentación requerida por la Unidad de Fiscalización relacionada con los comprobantes, hojas membretadas impresas y en hoja de cálculo Excel de los anuncios espectaculares que ampararan las referencias contables identificadas como PE-14/05-12 y PE-09/06-12 vinculadas con el número de comprobante 1574 y A056, A061 y A070 emitidos por los proveedores Alterc GDL S.A de C.V. e Israel Barajas Lugo, respectivamente en el estado de Jalisco; por el contrario, sí quedó demostrado que la otrora coalición “Compromiso por México” exhibió la documentación requerida relacionada con la referencia contable identificada como PE-08/05-12 vinculada con el número de comprobante 7126 emitido por el proveedor Publicidad Gráfica Signal S.A. de C.V. en el Estado de Chiapas.

En efecto, como se desglosó en la tabla inserta en páginas anteriores, en la caja 27, se encontró la Carpeta 7 identificada con el nombre de “Respuesta al oficio UFDA/ 5286/13 - Chiapas”.

En la referida ubicación se encontró la documentación comprobatoria del gasto realizado por la contratación de espectaculares para la campaña para Senador por Chiapas, PRI-PVEM, Lic. Roberto Albores Gleason, durante el periodo del 23 de abril al 27 de mayo de 2012, por el importe de \$504,552.67 contratada con el proveedor Publicidad Gráfica Signal S.A De C.V.

De modo que la información requerida por la Unidad de Fiscalización, sí fue desahogada por la otrora coalición.

En ese estado de cosas lo procedente es revocar la resolución impugnada, en lo que fue objeto de impugnación –en lo que corresponde a la conclusión 80 “revisión a la cuenta “Gastos en Espectaculares Colocados en la Vía Pública”- para el efecto de que la autoridad responsable tome en consideración que la otrora coalición “Compromiso por México” sí presentó oportunamente la información requerida consistente en la documentación relacionada con las hojas membretadas impresas y la hoja de cálculo Excel de los anuncios espectaculares asociada a la referencia contable identificada como PE-08/05-12 vinculada con el número de comprobante 7126 emitido por el proveedor Publicidad Gráfica Signal S.A. de C.V. por la contratación de espectaculares para la campaña para Senador por Chiapas, PRI-PVEM, Lic. Roberto Albores Gleason, durante el periodo del 23 de abril al 27 de mayo de 2012, por el importe de \$504,552.67.

La información antes referida fue requerida por la Unidad de Fiscalización mediante oficios UF-DA/3701/13 y UFDA/5289/13 de fecha dieciocho de abril y veinticuatro de mayo de dos mil trece.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Por otra parte, por lo que se refiere a la **conclusión 82** el agravio también resulta **parcialmente fundado**.

La calificación del agravio obedece a que, por una parte, el apelante no demostró haber desahogado la información requerida en los oficios UF-DA/3701/13 y UF-DA/5289/13 de fecha dieciocho de abril y veinticuatro de mayo de dos mil trece, consistentes en las hojas membretadas con la totalidad de datos como ubicación exacta del espectacular, detalle del contenido y datos del vehículo, relacionada con las siguientes referencias contables, entidad, proveedores, concepto del servicio e importe:

Entidad	Referencia contable	Proveedor y/o prestador de servicios	Concepto	Importe
Jalisco	P.E.-5/4-12	Israel Barajas Lugo	95 m2 de lona impresa a color 69.5 m2 de lona impresa a color	8,984.20
Jalisco	P.E.-8/5-12	Israel Barajas Lugo	338 m2 de lona impresa a color	17,643.60
Quintana Roo	P.E.-4/05-12	Construcciones y Proyectos Publicitarios, S.A. de C.V.	Servicio de Renta y Diseño de cartelera Movil, marca Faw, color blanca, con medidas totales de 3 x 2 m laterales y la trasera de 1x2m	3,330.00
Quintana Roo	P.E.-1/06-12	Construcciones y Proyectos Publicitarios, S.A. de C.V.	1 Renta de 3 espectaculares para la publicidad de la campaña del senador, incluye diseño, elaboración, colocación y retiro.	13,320.00
Quintana Roo	P.E.-2/06-12	Construcciones y Proyectos Publicitarios, S.A. de C.V.	32 Servicio de Renta y Diseño de cartelera Movil, marca Faw, color blanca, con medidas totales de 3 x 2 m laterales y la trasera de 1x2m	17,760.00
Quintana Roo	P.E.-18/06-12	Construcciones y Proyectos Publicitarios, S.A. de C.V.	Renta de anuncio espectacular de 12.90x7m y otro de 10x5m	6,938.06
Quintana Roo	P.E.-8/06-12	Operadora De Servicios Turísticos Bahía, S.A. De C.V.	1 Renta de Espacio Publicitario en BuleBuzz (camión espectacular), meses mayo y junio de 2012	5,205.00
Quintana Roo	P.E.-12/06-12	David Vieyra Lira	1pago de 72.80m de Impresión de lonas incluye Diseño, para el Evento de Inicio de Campaña del 1o de abril de 2012	1,185.18
Quintana Roo	P.E.-25/06-12	Francisco Javier Salmerón Vargas	Servicio de Renta, diseño, elaboración, montaje y desmontaje de espectaculares del 01 al 27 de junio de 2012	17,459.38

Por el contrario, conforme a lo explicado en las tablas insertas en páginas anteriores, le asiste la razón al apelante cuando sostiene que sí entregó la documentación requerida consistente en las hojas membretadas con la totalidad de datos como ubicación exacta del espectacular, detalle del contenido y datos del vehículo, relacionadas con las referencias contables

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

PE-9/06-12, PE-12/06-12, P.E.-1/05-12 y P.E.-8/04-12, cuyos datos de identificación se insertan a continuación:

[Tabla]

En efecto, como se desglosó en la tabla inserta en páginas anteriores, en la caja 28, se encontraron las carpetas identificadas como 9 (Quintana Roo) y 10 (Tabasco) las cuales tienen la misma leyenda de “Respuesta al oficio UFDA/5286/13”.

En las referidas carpetas se encontraron la documentación comprobatoria del gasto realizado. De modo que la información requerida por la Unidad de Fiscalización, sí fue desahogada por la otrora coalición.

*En ese estado de cosas, lo procedente es **revocar** la resolución impugnada, en lo que fue objeto de impugnación –en lo que corresponde a la conclusión 82 “revisión a la cuenta “Gastos en Espectaculares Colocados en la Vía Pública”- para el efecto de que la autoridad responsable tome en consideración que la otrora coalición “Compromiso por México” sí presentó oportunamente la información requerida consistente en la documentación relacionada con las hojas membretadas impresas y la hoja de cálculo Excel de los anuncios espectaculares asociadas a la referencias contables identificadas como PE-9/06-12, PE-12/06-12, P.E.-1/05-12 (de Quintana Roo) y P.E.-8/04-12 (de Tabasco), por la contratación de espectaculares.*

La información antes referida fue requerida por la Unidad de Fiscalización mediante oficios UF-DA/3701/13 y UF DA/5289/13 de fecha dieciocho de abril y veinticuatro de mayo de dos mil trece.

(...)

11. Conclusión 88

Por lo que hace a la conclusión 88, en el dictamen se respectivo se consideró que la Coalición Compromiso por México omitió presentar los contratos de servicios correspondientes a las siguientes referencias contables, que corresponden a la elección de senadores del Estado de Jalisco:

FORMULA	REFERENCIA CONTABLE	IMPORTE
F-2	PE-35/06-12	435.00
F-2	PE-03/04-12	67,280.00

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

FORMULA	REFERENCIA CONTABLE	IMPORTE
F-2	PE-32/06-12	98,600.00
F-2	PE-03/04-12	26,100.00
F-2	PE-03/06-12	5,510.00
F-2	PE-32/06-12	1,392.00

El agravio es **fundado** por lo siguiente:

Contrariamente a lo referido por la responsable, en autos obran constancias que acreditan la exhibición de los contratos de presentación de servicios de las referencias contables antes referidas.

La documentación de referencia fue requerida por la Unidad de Fiscalización mediante oficio UF-DA/3701/13 (numeral 20, senadores), y se desahogó mediante el escrito CACP/007/13.

Respecto a las referencias contables PE-35/06-12 y PE-03/06-12, en el Apéndice 9-A del acta de entrega-recepción de la documentación adjunta al escrito CACP/007/13, relativa a las observaciones formuladas mediante oficio UF-DA/3701/134 elaborado por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas, de la Unidad de Fiscalización, documento que cuenta con las antefirmas de Jasmina Carmona Tufiño y Alberto Sánchez Lara, funcionarios comisionados para recibir la documentación, se hace constar que se presentó la póliza con documentación soporte original y el contrato de presentación de servicios en original, en ambos casos sin copia de la credencial de elector.

Cabe precisar que la irregularidad encontrada por la Unidad de Fiscalización fue la falta del contrato respectivo y no la falta de exhibición de las copias de las credenciales de elector de los contratantes.

El Apéndice 9-A merece el valor probatorio de un documento público, pues fue elaborado por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, razón por la cual es suficiente para acreditar la entrega de los contratos de referencia.

Por lo que hace a las referencias contables restantes, los contratos respectivos se encuentran en el apartado 20 de la carpeta 19-24⁹ de

⁹ Caja 4

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

respuestas al oficio UF-DA/3701/13 que se adjuntó al escrito CACP/007/03, de autos.

Los detalles de las operaciones contables referidas son los siguientes:

FORMULA	REFERENCIA CONTABLE	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
<i>F-2</i>	<i>PE-03/04-12</i>	<i>1553</i>	<i>Alterc GDL S.A. de C.V.</i>	<i>500 lonas de 1.20x.60</i>	<i>26,100.00</i>
<i>F-2</i>	<i>PE-03/04-12</i>	<i>1553</i>	<i>Alterc GDL S.A. de C.V.</i>	<i>2 Botargas</i>	<i>67,280.00</i>
<i>F-2</i>	<i>PE-32/06-12</i>	<i>74</i>	<i>Solufaz S.A. de C.V.</i>	<i>Grabacion de cortometraje</i>	<i>98,600.00</i>
<i>F-2</i>	<i>PE-32/06-12</i>	<i>74</i>	<i>Solufaz S.A. de C.V.</i>	<i>Diseño de tarjetas de presentación de 2 caras</i>	<i>1,392.00</i>

La referencia contable PE-03/04-12, por las cantidades de \$26,100.00 y \$67,280.00 corresponden a la factura 1559 de 23 de abril de 2012, expedida por Alterc GDL S.A. de C.V. Tanto la factura como el contrato de presentación de servicios de propaganda electoral se encuentran en el apartado 20 mencionado.

El contrato fue suscrito por Rafael González Pimienta, delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional con funciones de Presidente del Comité Directivo Estatal en Jalisco y por Ángel Martínez Rico en su calidad de representante legal de Alterc GDL S.A. de C.V.

Su objeto es la elaboración de la propaganda electoral descrita en el anexo 1 del contrato por la cantidad de \$2'131,486.10 incluido el impuesto al valor agregado

Entre la propaganda electoral descrita en el anexo 1 referido, se detallan: 500 lonas 1.20X.60 metros con precio unitario de \$45.00 que da un total de \$22,500.00 más el Impuesto al Valor Agregado, esto es \$26,100.00, y 2 botargas de \$29,000.00 con un total de \$58,000.00 más el impuesto al valor agregado (\$67,280.00).

Por su parte, la referencia contable PE-32/06-12, por las cantidades de \$98,600.00 y \$1,392.00 corresponden a la factura 74 de 26 de junio de 2012, expedida por Solufaz S.A. de C.V. Tanto la factura como el contrato de

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

presentación de servicios de propaganda electoral se encuentran en el anexo 20 mencionado.

El contrato fue suscrito por Rafael González Pimienta, delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional con funciones de Presidente del Comité Directivo Estatal en Jalisco y por Antonio Sánchez Maldonado en su calidad de representante legal de Solifaz S.A. de C.V.

Su objeto es la elaboración propaganda electoral con mensajes publicitarios de la campaña de Jesús Casillas Romero, candidato al Sentado por el Estado de Jalisco, detallada en el anexo 1 del contrato, por la cantidad de \$286,462.00 incluido el impuesto al valor agregado.

Entre la propaganda electoral descrita en el anexo 1 referido, se detallan: la grabación de un cortometraje por \$85,000.00 más el Impuesto al Valor Agregado, esto es \$98,600.00, y el diseño de tarjetas de presentación por \$1,200.00 más el Impuesto al Valor Agregado (\$1,392.00).

Como se advierte, los contratos descritos se refieren a la propaganda electoral precisada en la tabla de referencia, pues alude tanto a la cantidad como a los productos elaborados.

Por tanto, contrariamente a lo concluido por la autoridad responsable, sí se presentaron los contratos de prestación de servicios correspondientes.

*En este sentido, lo procedente es **revocar** la conclusión 88, para el efecto de que la autoridad responsable tome en cuenta los documentos presentados por el partido actor de manera oportuna.*

(...)

13. Conclusión 132

En la parte conducente del escrito de impugnación, el partido político recurrente señala lo siguiente:

[Cuadro]

En la página 2115 de la resolución controvertida, la autoridad señalada como responsable determinó lo siguiente:

“[...]

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- *Por lo que respecta a los proveedores señalados con (1) en la columna ‘Referencia para Dictamen’ del Anexo 6 del oficio UFDA/5289/13, Anexo 60 del Dictamen consolidado, la respuesta de la otrora coalición se consideró insatisfactoria toda vez que aun cuando presentó los contratos de prestación de servicios solicitados, éstos están en copia simple, por tal razón la observación no quedó subsanada por un importe de \$612,043.87.*

En consecuencia, al presentar 27 contratos en copia simple, la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 198 del Reglamento de Fiscalización.

La parte conducente del Anexo 60 que se cita, refiere

[Tabla]

En la respuesta al oficio UF-DA-5289/13, en la parte que interesa, la otrora Coalición “Compromiso por México” expuso en el escrito identificado con la clave CACP/026/13:

‘DISTRITO FEDERAL

En el apartado EVP3, se presentan las pólizas señaladas con (1) en la columna “Referencia del partido”, con su respectiva documentación soporte original consistente en: copia de cheque, factura, muestra fotográfica, hoja membretada impresa, informe pormenorizado impreso y contrato.

*Por lo que corresponde al Distrito Federal distrito 17 en apartado EVP3, se presenta la póliza PE-04/05-12 con su respectiva documentación soporte original; así como copia de cheque con la leyenda “abono en cuenta del beneficiario”. **Adicionalmente la póliza PE-04/05-12 la póliza original se presenta en el apartado 1 de la respuesta al oficio UF-DA/5286-13’ (Énfasis añadido).***

[...]

YUCATÁN

Para dar contestación a los casos relativos al estado de Yucatán, se entregan en el apartado EVP3 las pólizas con su documentación soporte y los contratos observados.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En términos de los planteamientos anteriores la materia de la controversia se centra en determinar si la otrora Coalición “Compromiso por México” presentó o no los originales de los contratos de prestación de servicios respecto de la colocación y renta de los espectaculares a que se refieren las pólizas PE-04/05-12 (Distrito Federal), PE-6/06-12, PE-7/06-12, PE-8/06-12 y PE-9/06-12 (Yucatán).

Ahora bien, por lo que hace al Distrito Federal, de la revisión de la documentación que presentó la coalición de referencia, la cual se tiene a la vista en la Carpeta 5, localizada en la caja 27 del expediente que se resuelve, se constata la existencia del original del “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN ESPECTACULARES”, correspondiente a la póliza PE-04/05-12, por concepto de la “Colocación y renta de espectacular de 11 x 7 m Puente Contadero”, con importe de \$39,440.00.

En cuanto al estado de Yucatán, de la revisión de la documentación que presentó la coalición de referencia, la cual se tiene a la vista en la Carpeta 11, respuesta al oficio UFDA/5286/13, localizada en la caja 28 del expediente que se resuelve, se constata la existencia de los originales de los cuatro “CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN ESPECTACULARES”, correspondientes a las pólizas PE-6/06-12, PE-7/06-12, PE-8/06-12 y PE-9/06-12, con importes de \$38,280.00, \$3,000.00, \$37,000.00 y \$16,161.05, respectivamente.

*De la valoración de las documentales que se han tenido a la vista, de conformidad con lo establecido en los artículos 14, párrafo 1, inciso b); 15, párrafo 2; y 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Superior considera que en el caso, la coalición de que se trata, sí presentó los originales de los contratos de prestación de servicios publicitarios solicitados por la autoridad fiscalizadora, por lo que dicha coalición cumplió con lo dispuesto en el artículo 198 del Reglamento de Fiscalización, en razón de ello el agravio examinado resulta **fundado**.*

*En tal virtud, lo conducente **es dejar sin efectos** la parte de la conclusión 132 que ha sido materia de estudio, a fin de que las cantidades respectivas no sean tomadas en cuenta dentro del monto de la falta formal de que se trata.*

14. Conclusión 133

En su escrito de demanda, la parte apelante expone lo siguiente:

[Cuadro]

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En la página 2122 de la resolución controvertida, la autoridad señalada como responsable determinó lo siguiente:

[...]

- *Con relación a las facturas señaladas con (2) en la columna ‘Referencia para Dictamen’ del Anexo 6 del oficio UFDA/5289/13, **Anexo 60 del Dictamen consolidado**, a la fecha del Dictamen consolidado la otrora coalición no presentó la documentación solicitada; por tal razón, la observación no quedó subsanada por un importe de \$2,175,068.18.’*

En consecuencia, al no presentar los contratos de prestación de servicios de 85 facturas anexas a sus respectivas pólizas la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 198 del Reglamento de Fiscalización.

La parte conducente del Anexo 60 que se cita, refiere:

(Se transcribe tabla)

En respuesta al oficio UF-DA-5289/13, en la parte que interesa, la otrora Coalición “Compromiso por México” expuso en el escrito identificado con la clave CACP/026/13:

‘JALISCO

- *En el apartado EVP3, se presentan las pólizas identificadas con (1) en la columna “Referencia del partido”, en el siguiente cuadro, con su respectivo soporte documental incluyendo el contrato de prestación de servicios:*

[...]

(Se transcribe tabla)

[...]

En términos de los planteamientos anteriores la materia de la controversia se centra en determinar si la otrora Coalición “Compromiso por México” presentó o no los originales de los contratos de prestación de servicios celebrados con el proveedor JORGE ARMANDO BARAJAS GONZÁLEZ, respecto de las pólizas PE-03/05-12, PE-06/05-12 y PE-04/06-12 (Jalisco), en relación con las facturas 1407, 1411 y 1451.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Ahora bien, de la revisión de la documentación que presentó la coalición de referencia, la cual se tiene a la vista en el Apartado 2.2. de la caja 3 del expediente en que se resuelve, se constata la existencia del original del “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROPAGANDA ELECTORAL”, celebrado con el proveedor JORGE ARMANDO BARAJAS GONZÁLEZ, el cual ampara las pólizas PE-03/05-12, PE-06/05-12 y PE-04/06-12, en relación con las facturas 1407, 1411 y 1451, respectivamente, expedidas por el mencionado proveedor, por los conceptos a que se refieren los cuadros de referencia, con la aclaración de que en el anexo uno del contrato y en la factura 1407 aparece la cantidad de 225.16 metros cuadrados de lona impresa a color, en tanto que en la póliza PE-03/05-12 y en la resolución impugnada aparece la cantidad de 5,225.16 metros cuadrados, lo cual puede obedecer a un lapsus calami en estos dos últimos documentos.

*De la valoración de las documentales que se han tenido a la vista, de conformidad con lo establecido en los artículos 14, párrafo 1, inciso b); 15, párrafo 2; y 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Superior considera que en el caso, la coalición de que se trata, sí presentó el original del contrato de prestación de servicios solicitado por la autoridad fiscalizadora, por lo que dicha coalición cumplió con lo dispuesto en el artículo 198 del Reglamento de Fiscalización, de ahí que el agravio examinado resulta **fundado**.*

*En tal virtud, lo conducente **es dejar sin efectos** la parte de la conclusión 133 que ha sido materia de estudio, a fin de que las cantidades respectivas no sean tomadas en cuenta dentro del monto de la falta formal de que se trata.*

15. Conclusión 134

En su escrito de demanda, la parte apelante expone lo siguiente:

[Cuadro]

En la página 2130 de la resolución controvertida, la autoridad señalada como responsable determinó lo siguiente:

[...]

- *Por lo que respecta a las pólizas referenciadas con (1) en la columna ‘Referencia para Dictamen’ del Anexo 7 del oficio UFDA/5289/13, Anexo 61 del Dictamen consolidado la respuesta de la otrora coalición se consideró insatisfactoria, toda vez que aun cuando presentó las pólizas con sus respectivas muestras éstas se encuentran ilegibles, razón por la cual la observación quedó no subsanada por un importe de \$198,511.19.*

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En consecuencia, al no presentar 7 muestras ilegibles, la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en los artículos 181, numeral 5 del Reglamento de Fiscalización.

La parte conducente del Anexo 61 que se cita, refiere:

ENTIDAD	DISTRITO/ FÓRMULA	REFERENCIA CONTABLE	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	ANEXO DEL PRESENTEDICTAMEN
Colima	D-1	PE-38/06-12	249	27-06-12	Verónica Marisa Santa Ana Covarrubias	Elaboración de lona para cierre de campaña	5,372.19	1

Al respecto, cabe precisar que mediante el oficio UFDA/ 5289/13, se requirió a la referida coalición las fotografías de los respectivos anuncios espectaculares; sin embargo, del concepto del cuadro anterior, se puede advertir que se trata de una lona para cierre de campaña, por lo que en el caso se debe dilucidar si se presentó o no la respectiva fotografía de dicha lona.

En respuesta al oficio UF-DA-5289/13, en la parte que interesa, la otrora Coalición “Compromiso por México” expuso en el escrito identificado con la clave CACP/026/13

‘Colima

*Respecto al estado de Colima distrito 1, cabe hacer la aclaración de que los datos señalados en el cuadro de observación no concuerdan con la póliza PE-38/06-12, no obstante se hace entrega en el apartado **EVP4** de ésta póliza por haber sido solicitada por la autoridad electoral.*

[...]

En términos de los planteamientos anteriores la materia de la controversia se centra en determinar si la otrora Coalición “Compromiso por México” presentó o no la fotografía de la lona para cierre de campaña del Distrito I del Estado de Colima, respecto de la póliza PE-38/06-12.

De la revisión de la documentación que presentó la coalición de referencia, la cual se tiene a la vista en la carpeta 14 de la caja 22 del expediente en que se resuelve, se constata la existencia de la póliza PE-38/06-12, a la cual se acompaña, entre otra documentación, una fotografía a color, en la que destaca una lona de color verde, en cuya parte superior, en letras blancas, aparece la leyenda ¡VAMOS A GANAR!, junto con el emblema del PRI

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

cruzado con dos rayas negras; en la parte media aparece la imagen de siete personas; y, en la parte inferior aparece la imagen de siete planillas de candidatos. Dicha fotografía es la siguiente:

(Imagen)

Cabe precisar, que en el anexo 1 de la póliza de referencia, se describe dicha lona en los términos siguientes:

- 1. Candidato beneficiado: Miguel Ángel Aguayo López*
- 2. Campaña beneficiada: Diputado federal Distrito I, Colima*
- 3. Ubicación: Diferentes cierres de campaña*
- 4. Medidas: 72.42 metros cuadrados*
- 5. Periodo de permanencia 20 al 27 de junio*
- 6. Detalle de contenido: Vamos a ganar*

*De la valoración de las documentales que se han tenido a la vista, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 párrafo 1, inciso b); 15, párrafo 2; y 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Superior considera que en el caso, la coalición de que se trata, sí presentó la fotografía de la lona para cierre de campaña a que se refiere la póliza PE-38/06-12, respecto del Distrito 1 del Estado de Colima, por lo que dicha coalición cumplió con lo dispuesto en el artículo 181, numeral 5, del Reglamento de Fiscalización y, en consecuencia, el agravio examinado resulta **fundado**.*

*En tal virtud, lo conducente **es dejar sin efectos** la parte de la conclusión 134 que ha sido materia de estudio, a fin de que la cantidad respectiva no sea tomada en cuenta dentro del monto de la falta formal de que se trata.*

16. Conclusión 135

En su escrito de demanda, la parte apelante expone lo siguiente:

[Cuadro]

De la documentación que se tiene a la vista, se obtiene lo siguiente:

*En cumplimiento al oficio UF-DA/5289/13, de veinticuatro de mayo de dos mil trece, recibido por la otrora coalición en la misma fecha, y el cual se tiene a la vista en **la caja 41** del expediente que se examina, se observa que al no haberse exhibido “Las fotografías de los Anuncios Espectaculares en la Vía Pública en las cuales se indicara la ubicación exacta de donde fueron colocados, anexas a su póliza de registro”, solicitadas en el oficio UF-*

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

DA/3701/13; el partido político apelante presentó el escrito identificado con la clave CACP/026/13, mismo que se tiene a la vista en la caja 1, legajo “2 DE 2”.

En dicho escrito, con relación a la póliza PE-03/04-12, vinculada a los gastos de propaganda en lonas realizadas para la campaña del diputado federal en el Distrito 17 del Estado de Jalisco, se expuso que se acompañaba, dentro del soporte documental, “En apartado EVP4... muestra fotográfica” (Página 68 de 150); mientras que respecto a la póliza PE-07/05-12, relativa a los gastos realizados en la campaña de diputado federal en el Distrito 5 de la misma entidad: “se presenta la muestra fotográfica de la impresión de microperforados para medallón... adjunto en este apartado EVP3” (Página 69 de 150).

*Esta Sala Superior considera **infundado** el agravio del actor, en el cual plantea que respecto de la póliza PE-03/04-12, se acompañó la muestra fotográfica de diversas lonas.*

Lo anterior, en razón que, del análisis y valoración conforme a lo establecido en los artículos 14, párrafo 1, inciso b); 15, párrafo 2; y 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; de la documentación que se tiene a la vista en la caja 22 del expediente que se examina, carpeta “RESPUESTA AL OFICIO UF-DA-5289/13 – EGRESOS - 13”, Apartado EVP3, no se observa alguna imagen o muestra fotográfica de las 60 lonas de 8 m. (2 x 4) y de 84 lonas de 4.5 m. (1.5 x 3), que reporta la factura 0505, expedida por el proveedor Javier Pérez Soltero.

*Por el contrario, se considera **fundado** el agravio en el cual, la parte recurrente alega que exhibió la muestra fotográfica de medallones alusivos a la campaña de diputado federal realizada en el 5 Distrito Electoral del Estado de Jalisco.*

Esta autoridad jurisdiccional considera que en la especie, no se incumple con lo dispuesto en el artículo 181, numeral 5 del Reglamento de Fiscalización, el cual establece que el partido político deberá conservar y presentar muestras y/o “fotografías”, de la publicidad utilizada en anuncios espectaculares en la vía pública a solicitud de la Unidad de Fiscalización; ya que al aludirse al vocablo “fotografías”, de manera general, y no hacerse la precisión del mecanismo (cámara oscura, película sensible, imagen digital, etc.) para la obtención de la misma, ni el modo (proceso químico, digital, impresión, fotocopia, etc.) y la forma (banco y negro o a color en que debe ser exhibida, es de entenderse que la disposición reglamentaria se colmará, si la imagen

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

que se tenga a la vista, reúne las características¹⁰ consideradas al realizar el estudio de la Conclusión 29.

De la valoración realizada en términos de lo previsto en los artículos 14, párrafo 1, inciso b); 15, párrafo 2; y 16, párrafos 1 y 3, de la citada ley de medios de impugnación, a la documentación que obra en la citada caja 22, carpeta “RESPUESTA AL OFICIO UF-DA-5289/13 – EGRESOS - 13”, Apartado EVP4, se observa que se acompañaron dos imágenes fotográficas a color de un micro-perforado para medallón “no exhibido” del candidato Rafa González, obtenidas mediante impresión por computadora, reportadas en la factura 2460 por el proveedor Edgar Miralrio Juárez, a las cuales se les considera como fotografías, dadas sus características.

Por tal razón, es de considerarse que si en la especie, el partido político apelante exhibió la muestra fotográfica requerida por la autoridad, entonces, no incurrió en la omisión que se le imputa y, por ello, no incumplió con lo previsto en el párrafo 5 del artículo 181 del Reglamento de Fiscalización.

Derivado de lo antes expuesto, queda en relieve que no existe sustento para considerar la cantidad de \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), dentro del monto involucrado en una falta formal que ha sido motivo de examen.

*En consecuencia, al quedar en relieve que la resolución impugnada, en la parte que ha sido materia de análisis, no se encuentra debidamente motivada, lo conducente es **dejar sin efecto** la parte que ha sido materia de estudio de la conclusión 135 contenida en la resolución CG190/2013, relacionada con el estudio de las irregularidades encontradas en el informe de campaña presentado por la Coalición “Compromiso por México”.*

17. Conclusión 136

En su escrito de demanda, la parte recurrente expone:

[Cuadro]

Por razón de método, esta Sala Superior realizará el estudio de los planteamientos del actor, en atención al orden alfabético de las entidades que se refieren, y en su caso, atendiendo el orden numérico de los distritos que correspondan a cada una de ellas.

¹⁰ Recreación de alguna figura u objeto, caracterizada por registrar las propiedades lumínicas generadas de manera única e inequívoca a partir de la combinación de la luz que proceda de referente o modelo, y reproduzcan su realidad física en un momento determinado.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Asimismo, es de precisar que de acuerdo con lo considerado en la página 2145 de la resolución CG190/2013, en la conclusión 136, que se relaciona con un monto total de \$8'707,881.96 (\$292,001.39 y \$8'415,880.57), la falta imputada a la Coalición "Compromiso por México" estriba en la omisión de presentar "informes pormenorizados con su respectiva hoja de cálculo en Excel anexas a sus respectivas pólizas la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 181, numerales 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización".

Ahora bien, en la página 2139 de la resolución que es materia de análisis, se expone que:

*'De la revisión a la cuenta "Gastos en Espectaculares Colocados en la Vía Pública", se observaron pólizas por concepto de Exhibición de Espectaculares, las cuales contenían como soporte documental facturas de proveedores y contratos de prestación de servicios; **sin embargo, la otrora coalición omitió presentar el informe pormenorizado de la contratación.**'*

Por ello, mediante oficio UF-DA-3701/13, se solicitó a la otrora coalición que presentara: "El informe pormenorizado de los Anuncios Espectaculares colocados en la Vía Pública en forma impresa y en hoja de cálculo Excel, el cual debía contener [...] Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos [...] 181 [...] numeral 3 [...] del Reglamento de Fiscalización." Dicha solicitud, en idénticos términos, se reiteró mediante oficio UF-DA/5289/13, que fuera recibido por la otrora coalición el veinticuatro de mayo de dos mil trece, según se advierte en la página 2140 de la resolución que se estudia.

Esta autoridad jurisdiccional hace notar que, de acuerdo a los términos que se realizó la solicitud a la coalición de que se trata y del motivo por el cual se hicieron (omisión de presentar informe pormenorizado), vinculado con lo establecido en el artículo 181, párrafo 1, inciso c), del Reglamento de Fiscalización, es dable colegir que para cumplir con las prevenciones formuladas por la autoridad fiscalizadora, el representante de la Coalición "Compromiso por México" debía presentarse el informe pormenorizado: a) En forma escrita, y b) En medio magnético, en hoja de cálculo Excel, aspecto último que se prevé en el párrafo 3 del citado artículo 181.

Por lo tanto, esta autoridad procederá a examinar si, en cada uno de los casos a que hace referencia la parte apelante, se exhibieron los informes pormenorizados en forma impresa y en medio magnético (hoja de cálculo Excel).

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

A. Chiapas

En la página 2145 de la resolución CG190/2013, se expone lo siguiente:

‘Por lo que respecta a los proveedores señalados con (1) en la columna ‘Referencia para Dictamen’ del Anexo 8 del oficio UFDA/ 5289/13, Anexo 62 del Dictamen consolidado, la respuesta de la otrora Coalición se consideró insatisfactoria aun cuando presentó las pólizas con su respectivo soporte consistente en facturas, muestras y contrato de prestación de servicios, toda vez que no se localizaron los informes con su respectiva hoja de cálculo en Excel, por tal razón, la observación quedó no subsanada por un importe de \$ 292,001.39.’

La parte conducente del anexo a que se hace referencia, contiene la información que enseguida se reproduce:

[Cuadro]

Del examen de la documentación que integra el expediente que se resuelve, esta Sala Superior obtiene los datos que enseguida se especifican:

[Cuadro]

*De la valoración de la documentación antes mencionada, realizada conforme a lo previsto en los artículos 14, párrafo 1, inciso b); 15, párrafo 2; y 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Superior llega al convencimiento de que con relación a los gastos reportados en los comprobantes fiscales, es **infundado** el relacionado con la póliza P.E.1/6-2012, por la cantidad de \$20,880.00 (VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), dado que de la revisión de la documentación que se tiene a la vista, si bien se advierte la existencia de un diverso comprobante por la misma cantidad, tal situación no solventa la omisión de la presentación del informe pormenorizado en forma impresa y en medio magnético Excel, respecto del comprobante que en su oportunidad fue reportado.*

*Por otro lado, esta autoridad jurisdiccional considera **fundado** el planteamiento del actor, en los demás casos, dado que con relación a los comprobantes fiscales: PE-2/06-12, PE-6/05-12 y PE-7/05-12, del Distrito 2; PE-7/05-12 del Distrito 5; PE-5/04-12 y PE-5/06-12, del Distrito 6; P.E.-1/5-2012 y P.E.- 2/6-2012, del Distrito 7; y P.E.-1/4-2012 y P.E.-1/7-2012, del Distrito 11; cuyos montos involucrados suman la cantidad de \$271,121.39 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUNO 39/100 M.N.), se advierte que fue exhibida en su oportunidad, el informe pormenorizado*

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

impreso de manera concentrada, y asimismo, en medio magnético (formato Excel).

Por lo tanto, esta Sala Superior considera que en estos casos, el partido político recurrente no incumplió con lo establecido en el artículo 181, párrafo 1, inciso c), del Reglamento de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, es dable concluir que no existen razones para que la autoridad señalada como responsable haya considerado la cantidad de \$271,121.39 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUNO 39/100 M.N.), dentro del monto involucrado en una falta formal que se examina.

*En consecuencia, al quedar en relieve que la resolución impugnada, no se encuentra debidamente motivada, lo conducente es **dejar sin efecto** la parte que ha sido materia de estudio de la conclusión 136, relacionada con el estudio de las irregularidades cometidas por la Coalición “Compromiso por México”, al rendir su informe de campaña.*

B. Jalisco

Con relación a los distritos del Estado de Jalisco que cuestiona la parte recurrente, el Anexo 62 del Dictamen Consolidado, al cual remite la página 2145 de la resolución CG190/2013, alude lo siguiente:

[Cuadro]

De conformidad con lo establecido en los artículos 14, párrafo 1, inciso b); 15, párrafo 2; y 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Superior procede al análisis de la documentación que integra el expediente que se resuelve, de lo cual, obtiene los datos que se plasman en el cuadro siguiente:

[Cuadro]

De los datos asentados en el cuadro que antecede, cabe hacer las precisiones siguientes

Con relación a las pólizas PE-02/06-12 y PE-03/04-12, en las páginas 69 y 70 del escrito identificado con la clave CACP/026/13, el cual se tiene a la vista en la Caja 1, legajo “2 DE 2”, se observa que el partido ahora actor solicitó la reclasificación de los gastos relacionados con dichos comprobantes de egresos; sin embargo, ello no relegó al representante de la Coalición “Compromiso por México”, de cumplir con la obligación prevista en el artículo

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

181, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, consistente en presentar el informe pormenorizado en forma escrita y en medio magnético (formato Excel).

En consecuencia, es **infundado** el motivo de disenso examinado.

Por otro lado, son **fundados** los planteamientos que hace valer la parte actora con relación a las pólizas PE-07/05-12, por la cantidad de \$3,000.00, y PE-08/06-12, por la cantidad de \$32,518.34. Lo anterior, en razón que, de la documentación que se tuvo a la vista y cuyos datos han quedado plasmados en el cuadro que antecede, se observa que en ambos casos, fueron presentados con toda oportunidad los informes pormenorizados, tanto en forma escrita como en medio magnético (formato Excel).

Por ende, es inexacto que en la especie, la Coalición “Compromiso por México” haya infringido el artículo 181, párrafo 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, pues como ha quedado demostrado, se desahogó plenamente el requerimiento formulado por la autoridad fiscalizadora. De ahí que al no existir sustento para que la responsable haya tomado en consideración la cantidad de \$35,518.34 (TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.), dentro del monto de la falta formal que se examina.

Con apoyo en lo anterior, ha lugar **a dejar sin efectos** la parte de la conclusión 136 que ha sido materia de estudio.

C. Puebla

El referido Anexo 62, mismo al que remite la resolución CG190/2013 en la página 2145; en lo concerniente a los distritos del Estado de Puebla cuyas referencias contables la parte recurrente controvierte, establece lo siguiente:

[Cuadro]

Ahora bien, al dar respuesta al oficio UF-DA/5289/13, mediante escrito identificado con la clave CACP/026/13, la otrora Coalición “Compromiso por México” presentó diversa documentación relacionada con las pólizas de los distritos antes enunciados, la cual se plasma en el cuadro siguiente:

[Cuadro]

De la valoración de la documentación que se ha tenido a la vista, de conformidad con lo establecido en los artículos 14, párrafo 1, inciso b); 15, párrafo 2; y 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Superior estima lo siguiente:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

*Es **infundado** el motivo de queja que se aduce respecto de la póliza PE-1/06-12 (Distrito 14), relacionada con la presentación del informe pormenorizado en forma impresa y en medio magnético, dado que de las constancias examinadas no se pudo advertir su existencia, con lo cual, queda en relieve el incumplimiento de lo establecido en el artículo 181, párrafo 1, inciso c), del Reglamento de Fiscalización.*

*Por otro lado, es **fundado** el planteamiento que se realiza respecto de las pólizas PE-1/04-12 (Distrito 6, por \$17,908.08) y PE-1/04-12 (Distrito 15, por \$3,480.00), toda vez que se pudo advertir la existencia del mencionado informe, tanto en su versión impresa como en medio magnético.*

Por ende, carece de sustento la determinación de la responsable, dado que en el caso, al haberse presentado los informes solicitados por la autoridad fiscalizadora, en las versiones pertinentes, no existe razón para considerar la vulneración del precepto reglamentario antes señalado.

*Por lo tanto, al haber actuado de manera indebida la autoridad responsable al tomar en cuenta la cantidad de \$21,388.08 (VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.), que es el resultado de sumar las cantidades que amparan las dos pólizas anteriormente precisadas, dentro del monto de la falta formal que se examina; lo conducente **es dejar sin efectos** la parte de la conclusión 136 que ha sido materia de estudio.*

(...)

18. Conclusión 137

En la parte conducente del escrito de impugnación, el partido político actor señala lo siguiente:

[Cuadro]

En la página 2158 de la resolución controvertida, la autoridad señalada como responsable asentó lo siguiente:

‘(...)

➤ Por lo que respecta a los proveedores referenciados con (1) en la columna ‘Referencia para Dictamen’ del Anexo 9 del oficio UFDA/5289/13, Anexo 63 del Dictamen consolidado, aun cuando la otrora Coalición presentó las pólizas con su respectivo soporte consistente en facturas, muestras y contrato de prestación de servicios omitió presentar las hojas membretadas;

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

por tal razón; la observación quedó no subsanada por un importe de \$2,672,944.14.

En consecuencia al omitir presentar las hojas membretadas de 59 proveedores, por un importe de \$ 2,672,944.14 la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en los artículos 181, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización.'

La parte conducente del Anexo 63 que se cita, refiere:

[Cuadro]

Al momento de dar respuesta al oficio UF-DA-5289/13, en la parte que interesa, la otrora Coalición "Compromiso por México" expuso en el escrito identificado con la clave CACP/026/13:

'QUERÉTARO

Respecto al estado de Querétaro distrito 2, se hace entrega en el apartado EVP6 de la póliza PE-05/05-13, con su documentación soporte.'

De la revisión de la documentación que presentó la coalición de referencia, la cual se tiene a la vista en la Carpeta 16 "RESPUESTA AL OFICIO UF-DA/5289/13- EGRESOS". Localizada en la caja 22 del expediente que se resuelve, se observa una hoja membretada, cuya imagen enseguida se reproduce:

(Imagen)

De la valoración de la documental que se ha tenido a la vista, de conformidad con lo establecido en los artículos 14, párrafo 1, inciso b), 15, párrafo 2; y 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Superior considera que en el caso, la coalición de que se trata, si presentó la hoja membretada solicitada por la autoridad fiscalizadora, aun cuando dicho documento incumplió con varios de los requisitos establecidos en el párrafo 3 del artículo 181 del Reglamento de Fiscalización, dado que es omisa en señalar: el nombre del partido que contrata; el nombre del candidato que aparece en cada espectacular; el periodo de permanencia de cada espectacular rentado y colocado; la ubicación exacta de cada espectacular (nombre de la calle principal, número, calles aledañas, colonia, municipio o delegación); así como la Entidad Federativa en donde se rentaron y colocaron los espectaculares.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Sin embargo, tal situación no trae consigo la irregularidad que se imputa a la Coalición “Compromiso por México”, dado que el incumplimiento de ciertos requerimientos previstos en la normativa reglamentaria, no puede traducirse, lisa y llanamente, en la omisión de su presentación, ni mucho menos, equipararse a ello.

Se estima que en el caso, ante el incumplimiento de ciertos requisitos que debía contener la hoja membretada conforme a las disposiciones reglamentarias, la autoridad responsable debía valorar tal situación y acorde con la misma, emitir un pronunciamiento que resultara congruente con la misma. A guisa de ejemplo, cabe señalar que en la conclusión 143, visible en la página 2186 de la resolución CG190/2013, ante la presentación de hojas membretadas que incumplían con las exigencias establecidas en las disposiciones reglamentarias aplicables, la autoridad responsable determinó: “En consecuencia, al presentar las hojas membretadas de 90 pólizas sin la totalidad de datos la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 181, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización.”

Con esta perspectiva, esta autoridad jurisdiccional considera que le asiste la razón a la parte apelante, pues como se colige de lo anteriormente transcrito, el hecho de que la hoja membretada presentada por la otrora coalición, haya incumplido con algunos de los requisitos previstos en el artículo 181, párrafo 3, del Reglamento de Fiscalización, no implica per se, que se haya omitido la presentación de dicha documental.

*Por las razones anteriores, el agravio examinado deviene **fundado**.*

En este sentido, esta Sala Superior concluye que carece de toda motivación la determinación de la responsable, en el sentido en que lo hizo, al haber quedado demostrado que la Coalición “Compromiso por México” presentó la hoja membretada relacionada con la póliza PE-5/05-12, por la cantidad de \$12,064.00 (DOCE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

*Con apoyo en lo anterior, lo conducente **es dejar sin efectos** la parte de la conclusión 137 que ha sido materia de estudio, a fin de que la cantidad antes señalada no sea tomada en cuenta dentro del monto de la falta formal de que se trata.*

19. Conclusión 138

En el escrito de demanda, la parte recurrente expone lo siguiente:

[Cuadro]

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En la página 2170 de la resolución CG190/2013, la autoridad señala como responsable, refiere:

“De la revisión a la documentación presentada por la otrora Coalición, se determinó lo siguiente:

*➤ Con relación a las facturas referenciadas con (2) en la columna “Referencia para Dictamen”, **del Anexo 63 del Dictamen consolidado** la respuesta de la otrora coalición se consideró insatisfactoria, toda vez que a la fecha de elaboración del Dictamen consolidado, omitió presentar la documentación solicitada; por tal razón, la observación quedo no subsanada por un importe de \$ 2,042,929.86.*

En consecuencia, al presentar 67 facturas sin sus hojas membretadas solicitadas anexas a sus respectivas pólizas de registro la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en los artículos 181, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización.”

Con relación al mencionado Anexo 63, en la parte conducente, el mismo señala lo siguiente:

[Cuadro]

De lo antes transcrito, es dable advertir que, de acuerdo con el dictamen consolidado y lo considerado por la autoridad señalada como responsable en el caso que se examina, la infracción atribuida a la Coalición “Compromiso por México” consiste en que no adjuntó las hojas membretadas a sus respectivas pólizas de registro.

Ahora bien, el estudio de los casos que aduce la parte recurrente, se realiza al tenor de lo que enseguida se expone:

A. Jalisco

[Cuadro]

De la valoración de la documentación que se ha tenido a la vista, de conformidad con lo establecido en los artículos 14, párrafo 1, inciso b); 15, párrafo 2; y 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Superior llega al convencimiento de lo siguiente:

*Es **infundado** el motivo de disenso que hace valer la parte apelante, en el sentido de que presentó las respectivas hojas membretadas relacionadas con*

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

las pólizas PE-09/05-12 (Distrito 12), por la cantidad de \$44,293.44; PE-10/06-12 (Distrito 15), por la cantidad de \$23,490.00; PE-02/06-12 (Distrito 15), por la cantidad de \$48,720.00; y PE-03/04-12 (Distrito 17), por la cantidad de \$51,051.61; toda vez que de la revisión exhaustiva de la documentación presentada en respuesta al oficio UF-DA-5289/13, la cual, a decir de la parte apelante, corre agregada en el Apartado “EVP3”, no se pudieron localizar las correspondientes hojas membretadas, anexas a los mencionados comprobantes de egresos.

Por otro lado, se estima **fundado** el agravio que se expone relacionado con las pólizas PE-10/06-12 (Distrito 15), por la cantidad de \$11,838.96 amparada en la factura 3274 expedida por “Mercadotecnia, publicidad digital en gran formato”; y PE-01/05-12 (Distrito 19), por la cantidad de \$1,359.52, amparado en la factura 0898 expedida por la empresa “iconograma, diseño + publicidad”, toda vez que de la revisión de la documentación exhibida por la otrora coalición al dar respuesta al oficio antes mencionado, visible en el apartado “EVP3” y cuyos datos se plasman en el cuadro antes expuesto, queda de manifiesto que en la especie, sí se adjuntó la respectiva hoja membretada. De ahí que sea dable concluir que respecto de los dos casos antes enunciados, la Coalición “Compromiso por México” no incumplió con lo previsto en el artículo 181, párrafo 3, del Reglamento de Fiscalización.

Por ende, al carecer de la debida motivación la determinación adoptada por la ahora responsable respecto de la presentación de las hojas membretadas anexas a las pólizas PE-10/06-12 y PE-01/05-12, esta Sala Superior considera indebido que haya sido tomada en cuenta, dentro del monto de la falta formal de que se trata, la cantidad de \$13,198.48 (TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 48/100 M.N.), que es el resultado de sumar las cantidades amparadas en las facturas de mérito (\$11,838.96 más \$1,359.52).

De ahí que se estime conducente **dejar sin efectos** la parte de la conclusión 138 que ha sido materia de estudio.

(...)

20. Conclusión 143

Con relación a esta observación, el Partido Revolucionario Institucional, en su calidad de representante de la Coalición “Compromiso por México”, expone:

[Cuadro]

Al respecto, cabe señalar que en la página 2186 de la resolución CG190/2013, el Consejo General del Instituto Federal Electoral determina:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

“De la verificación a la documentación presentada por la otrora coalición se determinó lo siguiente:

(...)

➤ *Referente a 90 hojas membretadas referenciadas (1) en la columna ‘Referencia del Dictamen Consolidado’ del Anexo 11 del oficio UF-DA/5289/13, Anexo 65 del Dictamen Consolidado, la otrora coalición a la fecha de elaboración del Dictamen Consolidado omitió presentar las hojas membretadas con las correcciones solicitadas; por tal razón, la observación quedo no subsanada por \$ 3,309,789.91*

En consecuencia, al presentar las hojas membretadas de 90 pólizas sin la totalidad de datos la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 181, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización.”

En la parte conducente del referido Anexo 65, se expone lo siguiente:

[Cuadro]

Es de señalarse que mediante oficio UF-DA/5289/13, recibido por la otrora coalición el veinticuatro de mayo de dos mil trece, la Unidad de Fiscalización solicitó, según se aprecia en la página 2179 de la resolución materia de impugnación, lo siguiente:

- *La relación de cada uno de los anuncios que ampara la factura y el periodo en el que permanecieron colocados en hojas membretadas de la empresa, impresa [...] la cual deberá contener la siguiente información:*
- *Nombre de quien contrató*
- *Nombre del candidato que apareció en cada espectacular;*
- *Número de espectaculares que amparo;*
- *Valor unitario de cada espectacular, así como el Impuesto al Valor Agregado de cada uno de ellos;*
- *Periodo de permanencia de cada espectacular rentado y colocado;*
- *Ubicación exacta de cada espectacular: nombre de la calle principal, número, calles aledañas, colonia, municipio o delegación; o en su caso*

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

los datos del taxi, microbús o autobús en los que se colocó la propaganda;

- *Entidad Federativa en donde se rentaron y colocaron los*
- *espectaculares;*
- *Medidas de cada espectacular;*
- *Detalle del contenido de cada espectacular, y*
- *Fotografías.”*

Cabe señalar que los requisitos solicitados en su oportunidad por la Unidad de Fiscalización, son los mismos que se contemplan en el párrafo 3 del artículo 181 del Reglamento de Fiscalización.

Por lo tanto, esta Sala Superior procederá a examinar, en su caso, si las hojas membretadas presentadas por la Coalición “Compromiso por México”, cumplen con los requisitos a que se ha hecho referencia.

Una vez expuesto lo anterior, el estudio de los planteamientos del promovente se realiza al tenor de lo que a continuación se expone:

(...)

B. Veracruz

a) Distrito 1

Con relación a la póliza P.E.-1/7-2012 y a la Factura con folio 105, que ampara la cantidad de \$14,207.74, del análisis de la documentación que se tiene a la vista en la carpeta identificada como “RESPUESTA AL OFICIO UF-DA/5289/13 – EGRESOS – 18”, que se tiene a la vista en la Caja 22 del expediente que se resuelve, se observa que se acompañaron dos hojas membretada por la empresa “Comercializadora COMIME, S.A. de C.V.”, con la información que a continuación se detalla:

I. “RELACIÓN DE CAMBIO DE LONAS DE ANUNCIOS ESPECTACULARES”, en la cual, se contiene la información siguiente:

Nombre del partido que contrata: Partido Revolucionario
Institucional Nombre de la candidata: Zita Beatriz Pazzi Maza

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Campaña beneficiada: Candidata a diputada federal por el distrito 1 Pánuco

Entidad federativa: Veracruz de Ignacio de la Llave.

En dicha hoja se contiene un cuadro con información relacionada con los rubros siguientes: “NO.”, “DIRECCIÓN”, “PERÍODO DE PERMANENCIA”, “MEDIDA”, “DETALLE DEL CONTENIDO DE CADA ESPECTACULAR”, “SUBTOTAL”, “IVA”, “TOTAL”. Asimismo, se acompaña una fotografía del espectáculo de referencia.

II. “RELACIÓN DE MEDALLONES EN AUTOBUSES”, con los datos siguientes:

Nombre del partido que contrata: Partido Revolucionario

Institucional **Nombre de la candidata:** Zita Beatriz Pazzi Maza

Campaña beneficiada: Candidata a diputada federal por el distrito 1 Pánuco

Entidad federativa: Veracruz de Ignacio de la Llave

En esta relación, se hace referencia a diversa información sobre los temas siguientes: “NO.”, “NÚMERO ECONÓMICO”, “PLACA”, “PERÍODO DE PERMANENCIA”, “MEDIDA”, “DETALLE DEL CONTENIDO DEL MEDALLÓN”, “SUBTOTAL”, “IVA”, “TOTAL”. Asimismo, se acompañan diversas fotografías relacionadas con la colocación de medallones en autobuses del servicio público.

De la valoración de la documentación antes detallada, realizada conforme a lo establecido en los artículos 14, párrafo 1, inciso b); 15, párrafo 2; y 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Superior considera **fundado** el agravio que al respecto expone la parte apelante.

Lo anterior, en razón de que las hojas membretadas presentadas por la otrora coalición, cumplen con los requisitos exigidos en el párrafo 3 del artículo 181 del Reglamento de Fiscalización.

En tal virtud, al carecer de la debida motivación la determinación adoptada por la ahora responsable respecto de la presentación de las hojas membretadas anexas a la póliza P.E.-1/7-2012, esta Sala Superior considera que no asistía la razón a la autoridad señalada como responsable, de tomar en cuenta, dentro del monto de la falta formal de que se trata, la cantidad de \$14,207.74 (CATORCE MIL DOSCIENTOS SIETE 74/100 M.N.), amparada

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

en la Factura con folio 105, expedida por la empresa “Comercializadora COMIME, S.A. de C.V.”.

*Por tal razón, se estima que lo conducente es **dejar sin efectos** la parte que ha sido materia de estudio, de la conclusión 143.*

(...)

22. Conclusión 151

En su escrito de impugnación, la parte recurrente expone lo siguiente:

[Cuadro]

En la página 2206 de la resolución CG190/2013, la autoridad administrativa electoral señalada como responsable, señala lo siguiente:

■ Conclusión 151 (\$49,891.52)

*En relación a las pólizas señaladas con (1) en la columna “Referencia para Dictamen” del **Anexo 67 del Dictamen Consolidado**, la respuesta de la otrora coalición es insatisfactoria, toda vez que, aun cuando presentó las pólizas contables solicitadas con las relaciones de la pinta de bardas y las autorizaciones respectivas para su fijación en inmuebles de propiedad privada o lugares de uso común, omitió presentar la totalidad de las muestras fotográficas solicitadas. Por tal razón, la observación quedó no subsanada por un importe de \$49,891.52.*

En consecuencia, al omitir presentar la totalidad de las muestras fotográficas de 2 relaciones detalladas de pinta de bardas, la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento de Fiscalización.”

La parte conducente del Anexo 67 de referencia, es del tenor siguiente:

[Cuadro]

*De la valoración de los documentos que se tienen a la vista en el Apartado “B4” de la carpeta identificada como “RESPUESTA AL OFICIO UF-DA-5289/13 – EGRESOS - 5”, que se tiene a la vista en la **Caja 20** del expediente que se estudia, realizada de conformidad con lo establecido en los artículos 14, párrafo 1, inciso b); 15, párrafo 2; y 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Superior considera lo siguiente:*

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

De la relación de pinta de bardas presentada de manera conjunta respecto de las pólizas PE-1/07-12 y PE-2/06-12, se observa que la Coalición “Compromiso por México” reportó un total de 104 bardas pintadas. Asimismo, acompañó a dicha relación, los permisos y fotografías respecto respectivos.

De la compulsa que esta autoridad jurisdiccional realizó, entre la relación de la pinta de bardas y las diversas imágenes que se exhibieron, se advierte que, sólo con relación a las bardas que a continuación se precisan, no se acompañaron las fotografías respectivas:

[Cuadro]

En este orden de ideas, esta Sala Superior considera indebido que la autoridad señalada como responsable, haya tomado en consideración el monto total del egreso reportado en ambas pólizas, respecto de la pinta de bardas (\$49,891.52), cuando en la especie, el monto relacionado con la omisión de presentar fotografías sobre la pinta de las cinco bardas que han quedado precisadas, de acuerdo con la documentación que se tiene a la vista, es de \$1,268.81.

*En vista de lo anterior, se considera **fundado** el agravio planteado, ya que en la omisión de presentar fotografías respecto de la pinta de bardas de que se trata, indebidamente se tomó en cuenta la cantidad de \$48,622.71 (CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VENTIDOS PESOS 71/100 M.N.), que corresponde a noventa y nueve bardas pintadas, para las cuales, la otrora coalición sí presentó las fotografías respectivas.*

*Por lo tanto, lo conducente es dejar sin efectos la conclusión que ha sido examinada, para el efecto de que la autoridad responsable, **únicamente tome en consideración**, como monto involucrado de esta falta formal, la cantidad de \$1,268.81 (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.).*

23. Conclusión 154

La parte recurrente expone en su escrito de demanda, lo siguiente:

[Cuadro]

En las páginas 2207 a 2211 de la resolución CG190/2013, la autoridad señalada como responsable expone lo siguiente:

‘Conclusión 154 (\$40,897.38)

*Por lo que se refiere a las pólizas señaladas con (4) en la columna “Referencia para Dictamen” en el **Anexo 67 del Dictamen Consolidado**, la respuesta de la otrora coalición es insatisfactoria, toda vez que, aun cuando presentó las pólizas contables solicitadas con las relaciones de la pinta de bardas, las autorizaciones respectivas para su fijación en inmuebles de propiedad privada o lugares de uso común y las muestras fotográficas, se observó que 10 fotografías están duplicadas con diferentes direcciones, los casos en comento se detallan a continuación:*

[Imágenes...]

Por tal razón, la observación quedó no subsanada por un importe de \$40,897.38.

En consecuencia, la otrora coalición omitió presentar muestras de la relación detallada de pinta de bardas por \$40,897.38, por lo que incumplió con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento de Fiscalización.’

De la valoración realizada, de conformidad con lo establecido en los artículos 14, párrafo 1, inciso b); 15, párrafo 2; y 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a los documentos que se tienen a la vista en el Apartado “B1” de la carpeta identificada como “RESPUESTA AL OFICIO UF-DA-5289/13 – EGRESOS - 53, agregada en la Caja 20 del expediente que se analiza, esta Sala Superior observa que la Coalición “Compromiso por México” reportó de manera conjunta un total de 73 bardas pintadas a favor de la candidata a diputada federal por el 20 Distrito Electoral Federal del Estado de Veracruz, Regina Vázquez Saut, relacionadas con las pólizas PE-02/06-12 (\$14,854.27) y PE-01/07-12 (\$26,043.11).

Ahora bien, con base en las imágenes que la autoridad responsable señala como duplicadas, así como de la “RELACIÓN POR PINTAS DE BARDAS” que al final arroja la cantidad de \$40,897.39 (sic), se obtienen los datos que enseguida se precisan:

(Cuadro)

*En este orden de ideas, esta Sala Superior considera **fundado** el agravio planteado, ya que con relación a la falta consistente en la presentación duplicada de once fotografías relacionadas con la pinta de bardas, la autoridad señalada como responsable actuó en forma indebida, al tomar el*

monto total por concepto de la pinta de setenta y tres bardas que se hace constar en las pólizas respectivas, y que asciende a la cantidad de \$40,897.38 (CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.), cuando ha quedado demostrado con las constancias que se tienen a la vista, que sólo respecto de once bardas se presenta la falta.

*En consecuencia, esta autoridad jurisdiccional estima que lo conducente es dejar sin efectos la conclusión de que se trata, para el efecto de que la autoridad responsable, **únicamente tome en consideración**, como monto involucrado de la falta formal que ha sido examinada, la cantidad de \$4,755.17 (CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.).*

24. Conclusión 190

En su medio de impugnación, la parte recurrente expone lo siguiente:

(Cuadro)

Al respecto, cabe señalar que de la página 2306 a 2309 de la resolución CG190/2013, la autoridad administrativa federal señalada como responsable, expone que de la revisión a la cuenta “Gastos de Prensa”, en varias subcuentas, se localizaron pólizas con documentación soporte consistente en facturas, copias de cheque nominativo, contratos de prestación de servicios, muestras de las inserciones y publicaciones que beneficiaron las campañas de las candidatas y candidatos a Diputados Federales; sin embargo, dichas inserciones fueron presentadas en copia fotostática.

En esta virtud, se requirió a la otrora coalición presentara la página completa de las inserciones en diarios revistas y medios impresos, en original, las cuales debían contener la leyenda “inserción pagada”, seguida del nombre de la persona responsable del pago, anexas a sus respectivas pólizas; así como la relación de cada una de las inserciones que amparó la factura, la cual debía contener las fechas de publicaciones, el tamaño de cada inserción o publicación, valor unitario de cada una de las inserciones y el nombre del candidato beneficiado con cada una de ellas, anexas a su respectiva factura y póliza de registro; y las aclaraciones que a su derecho convinieran. Lo anterior se hizo del conocimiento el dieciocho de abril de dos mil trece, mediante oficio UF-DA/3701/13.

El tres de mayo del mismo año, la otrora coalición, mediante escrito identificado con la clave CACP/007/13, manifestó que: “Se está en proceso de análisis e integración.”

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Al considerarse insatisfactoria tal respuesta, se volvió a requerir a la coalición de referencia, el veinticuatro de mayo de dos mil trece, mediante oficio UF-DA/5293/13, a fin de que presentara la documentación a que se ha hecho referencia.

En respuesta a lo anterior, mediante escrito identificado con la clave CACP/027/13, de treinta y uno de mayo del mismo año, la coalición de mérito expuso, con relación a las pólizas que menciona en el agravio que se examina: "... que se está en proceso de análisis e integración de la documentación, la cual será remitida a esa Autoridad en oficio de alcance correspondiente."

En vista de lo anterior, en la resolución materia de impugnación se refiere que:

'Aun cuando la otrora coalición manifestó que daría respuesta y proporcionaría la documentación mediante escrito de alcance, a la fecha de elaboración del Dictamen Consolidado no presentó documentación alguna al respecto; razón por la cual, la observación no quedó subsanada, por \$430,429.83.

En consecuencia, toda vez que no presentó 4 contratos de prestación de servicios y 3 relaciones de inserciones, la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en los artículos 179 y 198 del Reglamento de Fiscalización.'

Ahora bien, de la revisión exhaustiva realizada a la documentación relacionada con el expediente que se resuelve, y de su valoración conforme a lo establecido en los artículos 14, párrafo 1, inciso b); 15, párrafo 2; y 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Superior obtiene lo siguiente:

(...)

B. Elección de Senadores de Jalisco, fórmula 1 (PE-09/04-12)

De la revisión de la documentación que se tiene a la vista en el Apartado "66", de la Carpeta "RESPUESTA AL OFICIO UFDA-3701/13 – APARTADO 60-71

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- *PRENSA*", contenida en la **Caja 6** del expediente que se examina, esta Sala Superior observa que corren agregados los documentos siguientes:

- *EL original del contrato de prestación de servicios celebrado entre los representantes de la Coalición "Compromiso por México" y la sociedad anónima denominada "EDICIONES DEL NORTE S.A DE C.V."*
- *"RELACIÓN DE PUBLICIDAD EXHIBIDA EN PRENSA", con el membrete de la empresa "EDICIONES DEL NORTE S.A DE C.V. (MURAL); de la cual, se reproduce la imagen siguiente:*

(Imagen)

- *"REPORTE DE BANNERS PERIÓDICO MURAL", y*
- *Cuatro inserciones periodísticas: a) Una sin fecha, cubierta; b) Una de 17 de mayo de 2012, p. 39 y c) Dos del mes de junio de 2012, pp. 26 y 27, respectivamente.*

De la documentación antes examinada, al contrastarla con la relación a la relación de publicidad exhibida en prensa, se advierte que en la especie, la otrora coalición presentó las muestras de las inserciones correspondientes a: una de la página 39, por la cantidad de \$6,603.30; las de las páginas 26 y 27, por un costo de \$25,879.60; así como la de la cubierta, por la cantidad de \$232,000.44. Es decir, la otrora coalición presentó originales de cuatro inserciones en prensa por la cantidad de \$264,483.34 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILCUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.).

*Por lo tanto, se estima **fundado** el agravio, en tanto que la autoridad responsable tomo como base del monto de la sanción, el total del monto que refiere la factura con folio "DC17888", emitida el diecinueve de abril de dos mil doce por la empresa "Ediciones del Norte, S.A. de C.V.", y que asciende a la cantidad de \$348,000.00; siendo que, al haberse justificado cuatro inserciones por las cantidades antes precisadas, dicha cantidad no debió tomarse en consideración, o bien, restarse al monto total amparado en la factura. Además, en el presente caso, la otrora coalición presentó el original del contrato celebrado con el proveedor.*

*Por lo tanto, lo conducente es dejar sin efectos la parte que ha sido materia de pronunciamiento respecto de la conclusión de que se trata, para el efecto de que la autoridad responsable, **únicamente tome en consideración**, como*

monto involucrado de la falta formal examinada, la cantidad de \$83,516.66 (OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS 66/100 M.N.).

(...)

AGRAVIO SEXTO

El examen del agravio sexto de la demanda de apelación, permite advertir que el partido apelante lo divide en cuatro apartados, cuyo contenido es, en esencia, el siguiente:

- I. 137 FALTAS DE CARÁCTER FORMAL;*
- II. INDEBIDA CALIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES COMO SUSTANCIALES, DEBIENDO SER FORMALES;*
- III. SANCIONES INDIVIDUALIZADAS EN LAS QUE LA DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE SANCIÓN APLICABLE Y/O SU GRADUACIÓN Y CONCRECIÓN, SE REALIZÓ EN CONTRAVENCIÓN A LA NORMATIVA APLICABLE Y A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SALA SUPERIOR DEL TEPJF; y*
- IV. AGRAVIOS FRENTE A LA INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES IMPUESTAS CON MOTIVO DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE CANDIDATOS POSTULADOS POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR SÍ MISMO (CONSIDERANDO 9.2).*

Por razón de método, se examinarán en primer lugar, los grupos de agravios identificados bajo los numerales II, III y IV, en tanto el agravio identificado bajo el grupo I se examinará al final.

Tal determinación obedece a que en los tres grupos de agravios antes precisados, se controvierten distintas faltas sustanciales cuyo resultado podría impactar en el agravio identificado bajo el numeral “I” que se encuentra enfocado a combatir el apartado de “faltas formales”.

Lo anterior es así, ya que el apelante solicita que distintas faltas sustanciales de los grupos II, III y IV, sean calificadas como faltas formales y, por consiguiente, que sean sancionadas bajo las condiciones de estas últimas, mismas que también son materia de cuestionamiento en el apartado I del presente agravio sexto.

En consecuencia, será una vez que se determine en cuáles agravios le asiste la razón al apelante en cuanto a la indebida calificación de las faltas sustanciales, que se estará en aptitud de examinar a continuación, las irregularidades que se hacen valer per se sobre la individualización de la sanción que se impuso al grupo de 137 faltas formales que determinó la autoridad responsable en la resolución reclamada.

II. INDEBIDA CALIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES COMO SUSTANCIALES DEBIENDO SER FORMALES.

Dentro de este apartado se formulan los planteamientos siguientes:

2.1 OMISIÓN DE PRESENTAR UNO DE LOS DOCUMENTOS “SOPORTE” PARA ACREDITAR UN GASTO EN ORIGINAL (Páginas 296 a 306 de la demanda). Respecto a las conclusiones 23 (Concepto de renta de bienes inmuebles y Equipo por \$27,000.00), 121 (Gastos de propaganda en páginas de internet por \$87,377.40), 159 (Gastos de Propaganda, Eventos-Bardas por \$77,834.00) y 200 (Cuentas por cobrar, Gastos por comprobar por \$99,274.07), el apelante manifiesta, en resumen, que fueron sancionadas con multas equivalentes al cien por ciento de los montos involucrados, por lo cual considera que en tales casos, se actualiza la omisión de presentar en original uno de los documentos “soporte” para acreditar el gasto.

Apunta que los egresos sí fueron registrados contablemente y soportados con la documentación conducente, pero uno de esos documentos se presentó en copia fotostática y no en original, por lo cual es incongruente la autoridad responsable cuando afirma que se “omitió presentar las pólizas con su respectivo soporte documental”, ya que no es lo mismo, no adjuntar el original que no presentar documento alguno.

El apelante considera que resulta absurdo suponer un beneficio económico, a partir de que no se presentó el documento original, cuando dicho beneficio debe quedar objetivamente demostrado.

En congruencia, señala que las cuatro conclusiones aquí apuntadas deben considerarse como omisiones, tal como lo hizo la propia autoridad responsable en las conclusiones 75, 132, 169 y 212 del grupo de 137 faltas formales, al ser casos similares donde sólo se acompañaron copias fotostáticas y no originales.

Como resultado, considera que es indebido que se les consideren faltas sustanciales calificadas como graves ordinarias, cuando deben considerárseles faltas formales y ser calificadas como leves. En consecuencia, solicita se revoque la sanción impuesta y, por consiguiente,

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

que este grupo de 4 faltas se sume al grupo de 137 faltas formales detectadas por la autoridad responsable.

Las faltas 23, 121, 159 y 200 cuya calificación como faltas sustanciales y sanciones respectivas se impugnan en el presente agravio, se refieren a las cuestiones siguientes:

b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del artículo 149 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización: 17, 23, 25 y 33.

EGRESOS

Gastos de Propaganda

Gastos Directos de Propaganda Utilitaria

Conclusión 23

“La otrora Coalición omitió presentar dos facturas en original por concepto de renta de bienes inmuebles y equipo, por un importe de \$27,000.00.”

i) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del artículo 149 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización: 89, 90, 91, 92, 121, 139, 159, 168, 170, 171, 184, 196 y 209.

EGRESOS

Gastos de Propaganda en Páginas de Internet

Conclusión 121

“La otrora coalición omitió presentar 3 facturas en original del proveedor Impresora y Editorial, S.A. de C.V., por un monto de \$87,377.40.”

Gasto de propaganda Bardas

Conclusión 159

“La otrora coalición presentó 2 facturas en copia fotostática, por un importe de \$77,834.00”

n) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 31 y 149, numeral 1 en relación con el artículo 35 del Reglamento de Fiscalización: 102, 200, 202, 203 y 204.

Gastos por Comprobar

Conclusión 200

“La otrora coalición omitió presentar una copia de cheque, así como las muestras fotográficas de los 6 eventos realizados por un importe de \$99,274.07”

Por lo que respecta a las conclusiones 75, 132, 169 y 212 del grupo de 137 faltas formales, de la resolución reclamada, respecto de las cuales se construye el argumento de incongruencia en que incurrió la autoridad responsable, se aprecia que éstas se refirieron a los conceptos siguientes:

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, mismas que tienen relación con el apartado de ingresos y egresos, las cuales se analizarán por temas.

EGRESOS

Gastos en Espectaculares colocados en la vía pública.

Conclusión 75

“La otrora coalición presentó un contrato de prestación de servicios en copia simple por \$5,570.34.”

EGRESOS

Gastos en espectaculares colocados en la vía pública

Conclusión 132

“La otrora Coalición presentó 27 contratos de prestación de servicios en copia simple por \$612,043.87”

EGRESOS

Propaganda

Conclusión 169

“La otrora coalición presentó dos pólizas con su respectiva documentación, sin embargo, omitió presentar la factura original, por \$10,208.00”

EGRESOS

Contabilidad de Senadores y Diputados

Cuenta Concentradora

Conclusión 212

“La otrora coalición omitió presentar un contrato de prestación de servicios en original la copia de un cheque nominativo, las muestras de espectaculares, hojas membretadas e informe pormenorizado en forma impresa y en medio magnético, por un importe de \$14,653.55”

Análisis de las conclusiones 23, 121 y 159

*Esta Sala Superior considera que es **fundado** el agravio formulado respecto a las conclusiones 23, 121 y 159 en lo relativo a la incongruencia en que incurrió la autoridad responsable al calificarla como falta sustancial, cuando otras faltas similares fueron catalogadas como formales.*

Sobre el principio de congruencia, esta Sala Superior ha sostenido el criterio de que toda resolución administrativa o jurisdiccional debe ser pronta, completa, imparcial, así como emitida dentro de los plazos y términos exigidos por las leyes que correspondan, ello con sustento en el artículo 17 de la Constitución General de la República.

Tales exigencias suponen, entre otros requisitos, la congruencia que debe caracterizar toda resolución, así como la exposición concreta y precisa de la fundamentación y motivación correspondiente, entendida ésta en dos vertientes: la externa y la interna.

La congruencia externa impone la plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto por el órgano resolutor de que se trate, con la litis planteada por las partes en el escrito de denuncia o demanda, mientras que la interna exige que en la resolución no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.

De ahí que si la responsable introduce en su determinación elementos ajenos a la controversia, no resuelve la litis planteada por las partes al considerar aspectos diversos a ésta, decide algo distinto o más allá de la pretensión aducida por los actores o trata en forma distinta un mismo aspecto, incurre en el vicio de incongruencia. Lo que torna la determinación contraria a derecho.

*Dicho criterio fue sustentado por esta Sala Superior en la tesis de jurisprudencia 28/2009 de rubro: **"CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA"**.*

Sobre este particular, es necesario explicar que la incongruencia señalada se podrá actualizar, cuando frente a conductas y disposiciones jurídicas violadas similares, la autoridad responsable sin expresar una mayor fundamentación y motivación, arriba a conclusiones distintas.

Precisado lo anterior, en el caso particular se observa que existe la identidad aducida por el partido apelante entre las conclusiones 23, 121 y 159 contra la conclusión 169, que fueron calificadas por la autoridad responsable como sustanciales las tres primeras y como formal, la última de las mencionadas.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Resulta importante destacar, que en el caso particular no se encuentra en entredicho la calificación como falta de carácter formal que la autoridad responsable realizó respecto a la conclusión 169, por lo cual no será materia de examen ese punto en la presente ejecutoria. Lo anterior, porque la parte apelante circunscribe exclusivamente su planteamiento a la incongruencia anotada.

Ahora bien, a efecto de demostrar las incoherencias apuntadas, se inserta a continuación un cuadro que contiene la información en donde se pone en evidencia el tratamiento diferenciado a faltas similares:

[Cuadro]

Como se puede observar, en tales casos las faltas se configuraron porque el hoy apelante, como parte de la coalición “Compromiso por México”, no aportó las facturas originales correspondientes, lo cual en concepto de la autoridad responsable, violó lo previsto en el artículo 149, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización.

Luego, es evidente que la falta se configuró con la omisión de presentar el mismo documento en original, lo cual se considera violó exactamente el propio dispositivo reglamentario.

Sin embargo, no obstante las apuntadas similitudes, la autoridad responsable determinó la configuración de faltas de distinta naturaleza, motivo por el cual le asiste la razón al partido recurrente en cuanto a la incongruencia apuntada, sin especificar la causa jurídica por la que arribó a conclusiones distintas.

Como resultado de lo anterior, deben revocarse las calificaciones de faltas de carácter sustancial o de fondo que la autoridad responsable determinó sobre las conclusiones 23, 121 y 159 en el considerando “9.3 Compromiso por México”, de la mencionada resolución y, por ende, las multas impuestas en el resolutivo TERCERO, inciso b), Conclusión 23, así como inciso i), Conclusiones 121 y 159, de la propia resolución reclamada, para el efecto de que dichas faltas sean consideradas como de carácter formal y, en su oportunidad, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emita nueva resolución en la que las faltas 23, 121 y 159 sean objeto de sanción, en el grupo que la propia autoridad responsable identificó en el grupo del actual inciso a) de 137 faltas de carácter formal que se refieren en el propio considerando y resolutivo arriba señalados.

(...)

2.5 FALTA DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE GASTO DEBIDAMENTE INFORMADO Y COMPROBADO (Páginas 337 a 345 de la demanda). En la conclusión 92 (Gastos de propaganda-Gastos en prensa-\$267,020.40) que fue sancionada con multa equivalente al cien por ciento del monto involucrado por la cantidad de \$267,020.40, el apelante afirma que la responsable determinó como falta sustancial que la coalición omitió la totalidad de la documentación soporte correspondiente a gastos de una factura por concepto de medios impresos, porque no presentó el informe pormenorizado impreso y en medio electrónico de los gastos en espectaculares, las hojas membretadas impresas y en medio electrónico, la relación de cada una de las inserciones, ni los formatos "IC-COA" Informe de campaña con las debidas correcciones.

Aduce el apelante, que tal omisión total no existe porque la coalición sí entregó las pólizas de reclasificación, facturas, copias de cheques, contratos, muestras, auxiliares contables y balanzas de comprobación de ese gasto, pero que lo que le faltó remitir a la autoridad fiscalizadora fue el informe pormenorizado de los gastos de espectaculares, las hojas membretadas impresas y en medio electrónico, la relación de cada una de las inserciones y los formatos "IC-COA".

Además de lo anterior, apunta que las omisiones detectadas configuran en concepto de la parte apelante, faltas de carácter formal, tal como lo determinó la responsable al resolver, a manera de ejemplo, sobre las conclusiones 22, 39, 40, 41, 42, 95 y 96 del grupo de 137 faltas formales.

Como resultado, la parte apelante sostiene que es indebido que en el caso particular se considere un beneficio económico a su favor para imponerle una sanción equivalente al decomiso con base en una falta que, indebidamente, fue calificada como sustancial y grave ordinaria, cuando debe considerársele falta formal y ser calificada como leve. En consecuencia, solicita se revoque la sanción impuesta y, por consiguiente, esta falta se sume al grupo de 137 faltas formales detectadas por la autoridad responsable.

*En concepto de esta Sala Superior, el agravio relativo a la documentación soporte que no fue presentada y sobre la cual se justificó la calificación de la falta y la sanción impuesta, resulta **fundado**.*

De la parte conducente de la resolución reclamada, a saber, las páginas 2,966 a 2,971, se desprende que, respecto al "Gasto en Prensa" correspondiente a la fórmula 2 de Diputados en el Distrito Federal, la autoridad responsable en su último requerimiento que formuló a la otrora coalición mediante oficio UF-DA/5087/13 de veinticuatro de mayo de dos mil trece, solicitó en lo que al caso interesa, la documentación siguiente:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

➤ *La relación de cada una de las inserciones que ampara la factura en forma impresa y en hoja de cálculo Excel, la cual debía contener:*

- *Las fechas de publicación*
- *El tamaño de cada inserción o publicación*
- *El valor unitario de cada inserción o publicación*
- *El nombre del candidato beneficiado en cada una de ellas*
- *En el caso de los gastos por concepto de prensa deberá presentar:*
-

➤ *Los formatos “IC-COA” Informe sobre el origen, monto y destino de los recursos para las campañas federales electorales de las candidatas y candidatos a Senadores y Diputados de la coalición “Compromiso por México”, debidamente corregidos con la totalidad de datos, impreso, y en medio magnético.*

Se observa lo anterior, porque con base en el primer requerimiento que le formuló a la otrora coalición mediante el oficio UF-DA/3701/13 de dieciocho de abril de dos mil trece, el cual fue desahogado mediante oficio CACP/007/13 del tres de mayo siguiente, la autoridad responsable arribó a la consideración siguiente:

De la verificación a la documentación presentada por la otrora coalición se observó que aun cuando remitió las pólizas de reclasificación, facturas, copias de cheques, contratos, muestras, auxiliares contables y balanzas de comprobación, no presentó; el informe pormenorizado impreso y en medio electrónico de los gastos en espectaculares, las hojas membretadas impresas y en medio electrónico, la relación de cada una de las inserciones ni los formatos “IC-COA” Informe de campaña con las debidas correcciones.

Por lo anterior, en desahogo del oficio UF-DA/5087/13, la otrora coalición emitió el diverso CACP/022/13 de treinta y uno de mayo pasado, destacando en lo que al caso interesa, que:

Cabe señalar que de la observación a Estado de Zacatecas, fórmula 2 y el Distrito Federal, fórmula 2, es de señalarse, por lo que corresponde a dichas campañas, mediante el oficio CACP/007/13 de fecha 03 de mayo de 2013, se presentaron las reclasificaciones respectivas, junto con su soporte documental y en los casos de los gastos por concepto de anuncios espectaculares en la vía pública, se presentó el informe pormenorizado y en hoja de cálculo Excel, así como la relación de cada uno de los anuncios que ampara el gasto y el periodo en el que permanecieron colocados en hojas membretadas y en hojas de cálculo electrónica.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Con base en lo anterior, la autoridad responsable en la página 2,971 de la resolución reclamada, sostuvo lo siguiente

Del análisis y verificación a las aclaraciones y documentación presentada por la otrora coalición se determinó lo siguiente:

(...)

Asimismo, al no presentar la documentación soporte correspondiente a gastos de una factura por concepto de medios impresos, consistente en facturas, relación de inserciones, contratos de prestación de servicios y la página completa original de la publicación, la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo, 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización por un monto de \$267,020.40

Como se puede observar, le asiste la razón al partido apelante cuando señala que la autoridad responsable determinó incorrectamente calificar la falta 92 como de carácter sustancial, al supuestamente incurrir en la omisión de presentar facturas, relación de inserciones, contratos de prestación de servicios y la página completa original de la publicación, y que consideró violatoria del artículo 149, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización.

Lo anterior, toda vez que en el último requerimiento UFDA/5087/13 sólo se le solicitó a la otrora coalición, como ya se explicó con antelación, la relación de cada una de las inserciones que ampara la factura en forma impresa y en hoja de cálculo Excel así como los formatos "IC-COA".

Por tanto, la autoridad responsable viola en perjuicio de la parte apelante el principio de legalidad, toda vez que consideró como falta sustancial por considerar violatorio del artículo 149, fracción I, del Reglamento de Fiscalización, la omisión de presentar documentación que no fue materia del último requerimiento UF-DA5087/13 que le formuló a la otrora coalición.

Conclusión que, además se soporta en que, de la propia resolución reclamada se aprecia, que la autoridad responsable no realiza el ejercicio de análisis y verificación a las aclaraciones y documentación presentada por la otrora coalición en el diverso oficio CACP/022/13. En otras palabras, la autoridad responsable no explica por qué concluye que faltaron documentos distintos a los que le requirió al ahora actor mediante el oficio UF-DA/5087/13.

Sobre este punto resulta importante destacar que el propio apelante reconoce en su agravio, que dejó de presentar tanto la relación de cada una de las inserciones así como los formatos "IC-COA", la cual esta Sala Superior

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

observa que le fue requerida mediante oficio UF-DA/5087/13, por lo cual se reconoce la existencia de una falta.

Bajo esa premisa, esta Sala Superior considera que la omisión de presentar esa documentación auxiliar, atendiendo a los extremos de este análisis, deberá ser calificada como una falta formal.

Ello, porque cualquier otro análisis que sostuviera una calificación distinta, podría operar en perjuicio del apelante, ya que éste demostró que los motivos que expresó la autoridad responsable para sustentar su criterio, por las razones que quedaron expresadas en párrafos precedentes, violaron en su perjuicio el principio de legalidad.

Adicionalmente, cabe destacar que dicha conclusión hace innecesario el estudio de los demás motivos de agravio, relacionados con la supuesta incongruencia en la calificación de otras faltas similares así como en lo desproporcional de la multa impuesta, ya que están encaminados a sostener que la conclusión 92, debió considerarse como una falta formal y no de carácter sustancial, lo cual ya fue alcanzado a partir del análisis precedente.

Como consecuencia de lo anterior, se considera que al carecer de sustento el criterio que utilizó la autoridad responsable para calificar como falta sustancial la conclusión 92, así como al observar que el propio apelante reconoce la omisión de presentar diversa documentación auxiliar a la que estaba obligado por virtud del requerimiento UF-DA/5087/13, lo procedente es que se revoque la calificación de falta de carácter sustancial o de fondo que la autoridad responsable determinó sobre las conclusión 92 en el considerando “9.3 Compromiso por México”, de la mencionada resolución y, por ende, la multa impuesta en el resolutivo TERCERO, inciso i), Conclusión 92, de la propia resolución reclamada, para el efecto de que dicha falta sea considerada como de carácter formal y, en su oportunidad, el Consejo General del Instituto Federal

Electoral emita nueva resolución en la que la falta 92 sea objeto de sanción por la propia autoridad responsable identificó en el grupo del actual inciso a) de 137 faltas de carácter formal que se refieren en el propio considerando y resolutive arriba señalados.

2.6 FALTA DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE GASTO DEBIDAMENTE INFORMADO Y COMPROBADO (Páginas 345 a 357 de la demanda). *En la conclusión 171 (Gastos de Propaganda-Gastos de anuncios espectaculares en la vía pública y Gastos de Prensa-Reclasificación de 17 facturas que fueron clasificadas como lonas cuando en realidad eran espectaculares-\$216,078.79), la autoridad responsable sancionó con multa equivalente al cien por ciento del monto involucrado, esto es, \$216,078.79, la falta sustancial*

que consistió en que si bien la otrora coalición presentó registros de reclasificación de 19 pólizas (17 facturas por concepto de anuncios espectaculares y 2 de medios impresos), lo cierto es que no presentó la documentación que soporta dichos gastos, como son las pólizas de origen con los contratos, hojas membretadas, muestras, relación de espectaculares y de inserciones, así como los informes de campaña con las debidas correcciones.

(...)

En otro orden, el partido apelante identifica a continuación en su escrito de apelación, el apartado siguiente:

III. SANCIONES INDIVIDUALIZADAS EN LAS QUE LA DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE SANCIÓN APLICABLE Y/O SU GRADUACIÓN Y CONCRECIÓN, SE REALIZÓ EN CONTRAVENCIÓN A LA NORMATIVA APLICABLE Y A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SALA SUPERIOR DEL TEPJF.

Ahora bien, dentro de este apartado, el partido apelante formula los motivos de agravio siguientes:

3.1 INDEBIDA CUANTIFICACIÓN DE GASTOS NO REGISTRADOS (Páginas 357 a 395 de la demanda). En la conclusión 32 (Gastos de Propaganda-Producción de spots de la elección presidencial-\$2'918,081.92) la otrora coalición fue sancionada con multa equivalente al ciento cincuenta por ciento del monto involucrado, cuyo total ascendió a \$4'377,122.88 y que se distribuyó al Partido Revolucionario Institucional \$3'501,698.30 mientras que al Partido Verde Ecologista de México \$875,424.58 en una proporción de 80% y 20%, respectivamente, porque la responsable determinó como falta sustancial que la coalición no reportó el gasto por la producción de ocho spots de radio y televisión:

[Cuadro]

El costo de producción lo calculó la autoridad responsable en un total de \$2'918,081.92 a razón de \$412,575.08 por promocional de televisión que fueron siete y de \$30,056.38 por promocional de radio que fue uno. Dicha irregularidad se consideró grave ordinaria y que generó un beneficio económico a la coalición.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Sobre este particular, se observa que la parte apelante agrupa sus agravios en 4 apartados. Por razón de método, esta Sala Superior analizará en forma conjunta los agravios identificados con las letras A) y B), porque en ambos se hace referencia al promocional RV01093-12, además de otros promocionales diferentes en cada caso, así como de manera separada los correspondientes a las letras C) y D) por referirse a distintos promocionales.

Precisado lo anterior, la parte apelante afirma que esa determinación carece de la debida fundamentación y motivación porque se soporta en un análisis equívoco, incompleto y sesgado del informe de campaña, por las consideraciones siguientes:

A) Páginas 379 a 383 de la demanda. Respecto a los promocionales “RA01162-12 Propuesta Educación” y “RV01093-12 Vota Verde”, señala el apelante que la responsable omite considerar que los mismos fueron trabajos de post-producción contratados y realizados por la empresa Limón Publicistas, S.A. de C.V. como le fue reportado oportunamente mediante oficio CACP/003/13 de dieciocho de abril de dos mil trece, cuyo costo fue de \$1 ' 106,992.00 y por el cual se emitió la factura con folio 333 de tres de diciembre de dos mil doce.

Sobre lo cual afirma el apelante, la autoridad responsable en forma dogmática se limita a señalar, por una parte, que el promocional “RA01162-12 Propuesta Educación” no corresponde con la factura y, por tanto, se trata de un promocional no reportado y, por otro lado, omite considerar que ambos promocionales se realizaron al amparo del contrato celebrado con la mencionada empresa.

La parte apelante considera que si bien los promocionales no resultan idénticos a los materiales que se entregaron a la Unidad de Fiscalización, lo cierto es que se trata de promocionales elaborados mediante trabajo de post-producción, es decir, reelaborados con equipos de cómputo ad hoc con los que superpuso o suprime digitalmente alguna característica original, ya sea de imagen o de audio o se le “separan” dichas características, para generar versiones con alguna particularidad o característica menor.

Sin embargo, apunta la apelante que tales trabajos son versiones de escritorio cuyo costo no resulta equiparable con la elaboración de los masters originales, en donde su elaboración implica todo el proceso de producción original, esto es, personal técnico, actores, viáticos, traslados, locaciones, grabaciones, etc.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En ese contexto, resulta ilegal que la responsable omita considerar que el promocional “RA01162-12 Propuesta Educación” fue generado a partir de extraer sólo el audio del respectivo promocional para televisión reportado mediante la factura C616 emitida por la empresa The Mates Contents, S.A. de C.V., que lo realizó y, que el respectivo trabajo de post producción, formara parte del contrato celebrado con la empresa Limón Publicistas, S.A. de C.V.

La apelante considera que si los promocionales “RA01162- 12 Propuesta Educación” y “RV01093-12 Vota Verde”, fueron trabajos de post-producción contratados y realizados por la empresa Limón Publicistas, S.A. de C.V., entonces no resulta procedente informar de algún gasto adicional o extra, al no tratarse de promocionales distintos, sino de versiones elaboradas a través de los trabajos de post producción que sí fueron reportados.

Por consecuencia, resulta contrario a derecho que la responsable lo sancione por la falsa premisa de omitir reportar los supuestos gastos de producción y, más aun que la multa considere como base el costo promedio de producción de un promocional, cuando en el supuesto más favorable a la responsable, debe tenerse presente que el costo fue bajo el esquema de post producción, por lo que en todo caso, sería dicho costo el que debería tomarse como base de la cuantificación.

B) Páginas 383 a 387 de la demanda. Con relación a los promocionales “RV00473-12 Vales” y “RV01093-12 Vota Verde”, la responsable los considera como gastos no reportados.

Dice la parte apelante que la responsable omite considerar que el promocional “RV00473-12 Vales” fue elaborado por la empresa The Mates Contents, S.A. de C.V., y pagado al amparo de la factura C592, que fue reportado a la autoridad responsable mediante oficio CACP/003/2013 de dieciocho de abril de dos mil trece, el cual fue hecho del conocimiento de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos por el que se generó el acuse correspondiente, el cual inserta como imagen en la demanda de apelación.

Respecto al promocional “RV01093-12 Vota Verde” el apelante reitera que formó parte de los trabajos de postproducción con la empresa Limón Publicistas, S.A. de C.V., a que se refiere el inciso anterior. Por lo anterior, afirma el apelante que en el caso más favorable a la autoridad, su costo tendría que cuantificarse pero bajo el esquema de postproducción.

Igualmente, no comparte la conclusión dogmática e insuficiente de la responsable en el sentido de que al compararlos promocionales presentados

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

por la apelante con los que cuenta la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, “observó” que no se tratan de las mismas versiones, por lo que determina “no tenerlos por identificados en los registros contables”.

Ello, debido a que le reportó los dos contratos arriba precisados, así como las facturas correspondientes.

Además, considera que la responsable lo deja en estado de indefensión, porque debió precisarle las diferencias que encontraba entre las versiones de los promocionales que contrastó y no sólo concluir que no se trataban de las mismas versiones, porque la sola descalificación formulada por la autoridad, no refiere las circunstancias necesarias para sustentar su apreciación.

*Con relación al agravio A), se declara **infundado** el agravio relativo al promocional RA01162-12 por las consideraciones siguientes:*

El partido apelante se duele de que la autoridad responsable, se limitó a señalar en la resolución reclamada que dicho promocional no corresponde con los que se incluye en la factura 333 de fecha tres de diciembre de dos mil doce, emitida por la empresa Limón Publicitas, S.A. de C.V., por lo que determinó que se trata de un promocional que no fue reportado.

No le asiste la razón al partido apelante.

Lo anterior es así, porque esta Sala Superior observa que la autoridad responsable determinó en la resolución reclamada a foja 2,617, lo siguiente:

[...]

[Cuadro]

Respecto al promocional indicado con (2) en la columna “REF” del cuadro en comento, aun y cuando manifiesta que forma parte de la factura 333 expedida a nombre del Partido Verde Ecologista de México; éste no corresponde a dicho documento, toda vez que en la misma, sólo hace referencia a promocionales que benefician al partido en comento, así como, al candidato a la presidencia de la República; sin embargo éste, hace alusión al Partido Revolucionario Institucional y al candidato presidencial, por lo que no fue identificado en la contabilidad de su coalición.

[...]

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

De conformidad con lo anterior, se aprecia que la autoridad responsable adoptó esa decisión con apoyo en que, a su juicio, dicho promocional no podía quedar amparado en la factura 333 expedida a nombre del Partido Verde Ecologista de México, debido a que hace alusión al Partido Revolucionario Institucional y al candidato presidencial.

Conclusión sobre la cual, el partido apelante se abstiene de formular consideración alguna, por lo que con independencia de lo correcto o no de la misma, deberá seguir rigiendo los efectos de la presente resolución.

En consecuencia, se confirma la determinación de la responsable en lo que respecta al promocional RA01162-12.

*Por lo que se refiere a los promocionales RV01093-12 y RV00473-12, esta Sala Superior considera que el agravio en estudio resulta **fundado**.*

Entre otros agravios, el partido apelante se duele que la autoridad responsable determinó la configuración de la falta, a partir de que no razonó ni justificó en forma detallada las circunstancias particulares que la llevaron a la conclusión de considerar a dichos promocionales como gastos no reportados. Aduce, que la responsable debió de precisar las diferencias que encontraba entre las versiones entregadas por la Dirección de Prerrogativas de Partidos Políticos y las que le entregó esa otrora coalición, tales como, imágenes de candidatos diferentes a los mencionados o en qué imagen o parte de audio no existía la debida correspondencia o si se exhibió un promocional de radio cuando se estaba informando un promocional de televisión. Circunstancias que, en ningún momento, fueron señaladas por la autoridad responsable y, por ende, afirma que lo dejó en estado de indefensión.

Le asiste la razón al partido apelante.

Esto es así, porque de la página 2,617 de la resolución reclamada se advierte que sobre esos promocionales, se formularon las consideraciones siguientes

[...]

[Cuadro]

Referente a los promocionales señalados con (3) en la columna “REF” del cuadro que antecede, aun y cuando manifiesta, que fueron reportados en sus registros contables respectivos, se observó que al comparar las versiones presentadas por la coalición contra las otorgadas por la Dirección

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

de Prerrogativas de Partidos Políticos, no corresponden a las observados por esta autoridad, por tal razón no fueron identificados en su contabilidad.

[...]

Cabe destacar, que esa conclusión de la autoridad responsable fue resultado de la solicitud formulada mediante oficio UF-DA/3180/13 así como de la respuesta contenida en el diverso CACP/003/13, la cual en nada varió con motivo de la solicitud UF-DA/5296/13 y la respuesta CACP/035/13.

Bajo esas condiciones, esta Sala Superior considera que la autoridad responsable viola en perjuicio de la parte apelante, lo dispuesto en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución General de la República, porque dejó de exponer las razones particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales, que le permitieran motivar su decisión, en el sentido de que los promocionales RV01093-12 y RV00473-12 proporcionados por la otrora coalición no eran coincidentes con los detectados por la Dirección de Prerrogativas de Partidos Políticos.

Esto es así, porque la autoridad responsable no expone razonamiento alguno para sustentar su determinación, lo que impide a la otrora coalición conocer los motivos de su decisión y, por ende, encontrarse en condiciones de defender sus derechos.

*Como resultado de lo anterior, se considera que al carecer de motivación el criterio que utilizó la autoridad responsable para calificar como gasto no reportado el de los promocionales RV01093-12 y RV00473-12 y, por ende, como falta sustancial la conclusión 32, lo procedente es que se **modifique** dicha falta en el considerando “9.3 Compromiso por México”, de la mencionada resolución y, por ende, también se reindividualice la multa impuesta en el resolutivo TERCERO, inciso e), Conclusión 32, de la propia resolución reclamada, para el efecto de que en dicha falta no sean considerados los promocionales RV01093-12 y RV00473.*

(...)

3.2 OMISIÓN EN EL REGISTRO DE UN GASTO, SIN QUE SE ACTUALICEN CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES QUE AUTORICEN CONCRETIZAR LA SANCIÓN APLICABLE POR UN EQUIVALENTE SUPERIOR A LA SUMA DE GASTO OMITIDO (Páginas 395 a 405 de la demanda). En las conclusiones 100 (Visitas de verificación a casas de campaña y eventos-Perifoneo no reportado-\$22,199.50); 158 (No registro contable del cheque 04 a favor de

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

José Alberto Gutiérrez López y no se localizó el cobro en el estado de cuenta-\$20,000.00); 199 (Visitas de verificación-no se registraron contablemente gastos de arrendamiento de vehículos, equipo de sonido y audio, lonas y espectaculares-\$126,635.47); y, 201 (Cuentas por cobrar-gastos por comprobar-saldo pendiente por recuperar-cheque expedido no corresponde al monto de la factura presentada- la diferencia fue de \$4,509.50) la autoridad responsable impuso multas en cada caso equivalentes al ciento cincuenta por ciento de las cantidades involucradas, las cuales ascendieron a las cantidades de \$33,249.40, \$30,000.00, \$189,953.21 y \$6,764.25, respectivamente

Señala el apelante que también impugna las sanciones impuestas en las conclusiones 32 (\$4'377,122.88); 43 (\$38,789.79); 61(\$561,697.19) y 70 (\$17,869.25), porque cada sanción corresponde al ciento cincuenta por ciento del monto involucrado.

Al respecto, manifiesta el apelante que todas se tratan de multas desproporcionales, porque la responsable las consideró como faltas sustanciales que calificó de graves ordinarias al considerar que existió un beneficio.

Sin embargo, le causa agravio que la responsable también indebidamente hubiera considerado la “pluralidad de conductas” como rasgo distintivo de tales infracciones, cuando en realidad la configuración del tipo administrativo en cada una de ellas, deriva de una conducta singular, esto es la omisión de reportar un presunto gasto.

Considera que es incorrecto que la pretendida pluralidad pudiera constituir un factor para calificar la gravedad de la falta y determinar la clase de sanción aplicable por encima de la mínima.

Máxime si la propia responsable que los partidos que conformaron la coalición “Compromiso por México” no son reincidentes en la falta en examen y la propia responsable no hizo valer alguna circunstancia de modo, tiempo y lugar que justificara la imposición de una sanción más alta que la mínima de conformidad con la tesis “MULTA IMPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. SI LA INFRACCIÓN ES DE CARÁCTER PATRIMONIAL DEBE CUMPLIR UNA FUNCIÓN SIMILAR O EQUIVALENTE AL DECOMISO”, entonces no se justifica que la responsable como lo hizo en otros casos similares, no impusiera en los casos particulares la sanción mínima, y en su lugar impusiera el equivalente al ciento cincuenta por ciento del monto que, presuntamente, se omitió reportar.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Como resultado, solicita se revoque esas sanciones y en su lugar, en plenitud de jurisdicción la Sala Superior fije en el mínimo las sanciones aplicables al caso concreto o, en su defecto ordene a la responsable proceder en los términos señalados.

Sobre este agravio previamente es necesario realizar las aclaraciones siguientes:

Resulta importante precisar que el partido apelante reconoce, por un lado, la comisión de las faltas apuntadas así como que éstas deben ser sancionadas con multa, cuando expresa "...como lo hizo en los demás casos en que se presentaron circunstancias similares a las descritas, impusiera la sanción mínima prevista en la normativa y orientada por la tesis invocada por la responsable y no el equivalente al 150% del monto que presuntivamente significó lo no reportado por la infractora. ...Por los motivos y fundamentos expuestos, respetuosamente se solicita a esa H. Sala Superior, revoque la resolución impugnada y en su lugar, con plenitud de jurisdicción fije en el mínimo la sanción aplicable al caso concreto o, en su defecto, ordene a la responsable proceder en los señalados términos."

Además, la parte apelante expresa que la "pluralidad de conductas" a que se refiere la autoridad responsable tiene que ver, con la forma en que configuró cada falta.

Esto es, si para su comisión, detectó la existencia de dos o más actividades u omisiones cuyo resultado dio lugar a la falta correspondiente. Al respecto, el apelante señala que la autoridad responsable tiene indebidamente por actualizado ese elemento, en casos en los que, en su concepto, la falta deriva de una conducta singular.

Por tanto, el análisis que se efectuará enseguida, se circunscribirá a revisar si la autoridad responsable sostuvo o no cada una de sus determinaciones, entre otros factores, en el relativo a la "pluralidad de conductas", exclusivamente en los términos arriba apuntados, toda vez que el partido apelante no proporciona elementos adicionales para verificar si su aplicación, cuando existe efectivamente esa pluralidad, es correcta o no.

Precisado lo anterior, esta Sala Superior considera que resulta infundado el agravio en estudio respecto a las conclusiones 32, 43 y 70.

Lo anterior, debido a que en los casos anteriores, se advierte que cada falta quedó configurada a partir de la existencia de la "pluralidad de conductas", como se evidenciará a continuación:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Con relación a la conclusión 32, como se puede leer de la página 2,605 a 2,622, 2,753 a la 2,769 y de la 2,774 a la 2,779, todas de la resolución reclamada, se aprecia que la autoridad responsable determinó la existencia de una “pluralidad de conductas”, a partir de que consideró que la otrora coalición omitió reportar los gastos de producción de diversos promocionales de radio y televisión, cuyas claves fueron RA01162-12, RV00473-12, RV01093-12, RV01278-12, RV01326-12, RV01394-12, RV00699-12 y RV01041-12, puesto que por la omisión de reportar el gasto de cada uno de esos promocionales, le impuso el monto de la multa que consideró procedente.

Respecto a la conclusión 43 se puede observar en las páginas 2,841 a la 2,847 y de la 2,867 a la 2,886, la autoridad responsable configuró la falta respectiva debido a que la coalición omitió presentar dos pólizas contables de la contabilidad de los senadores y del diputado con su respectivo soporte documental consistente en dos contratos de prestación de servicios, las relaciones de cada una de las inserciones que ampara la factura y el original de las inserciones, por un importe de \$25,859.19

Dicho en otras palabras, se observa que dicha falta se configuró por la omisión de reportar las aportaciones en especie siguientes: 1) de la fórmula 2 de senadores correspondiente al Estado de Guanajuato, bajo la póliza PI-24/07-12, las cantidades de \$3,338.66 y \$13,506.85; y, 2) del distrito 7 de diputado en Michoacán, bajo la póliza PI-13/07-12 por la cantidad de \$9,0134.68.

Finalmente, respecto a la conclusión 70 se puede leer en las páginas 3,305 a 3,327 de la resolución reclamada, relativa a que la otrora coalición omitió presentar una póliza de registro contable, por la cantidad de \$11,913.30, se observa que la autoridad responsable determinó al individualizar la sanción que:

‘Se trató de diversas irregularidades, es decir, se actualizó una pluralidad de conductas cometidas por los partidos coaligados. (inciso f) de la resolución correspondiente a la coalición Compromiso por México’

En ese orden, se puede leer en la página 3,316 que al examinar el apartado denominado “f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas” que la autoridad responsable estimó lo siguiente:

‘Cabe señalar que en el caso, existe pluralidad en la falta cometida en virtud de que del análisis integral de los informes presentados por la otrora

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

coalición Compromiso por México, se advierte que en el inciso f), conclusiones 43 y 58 se cometieron diversas irregularidades en las que se vulneró el mismo precepto normativo, en consecuencia se trata de una diversidad de faltas, las cuales aun cuando derivan de conductas distintas, vulneran el mismo bien jurídico tutelado, esto es la transparencia en la rendición de cuentas.

Como se expuso, se trata de una diversidad de faltas, las cuales aun cuando sean distintas y a diversos preceptos normativos, configuran una afectación directa al bien jurídico, el del uso adecuado de recursos, sin que exista (sic).

En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 342, numeral 1, incisos c), d) y l) del código electoral federal lo procedente es imponer una sanción.'

Aspecto sobre el cual, resulta importante destacar, el partido apelante no formula consideración alguna para confrontar la determinación de la autoridad responsable, de tener por configurada en el presente caso la 'pluralidad de conducta' respectiva, por lo que con independencia de lo correcto o no de dicha determinación, la misma deberá seguir surtiendo sus efectos legales.

*En otro orden, esta Sala Superior considera que resulta **fundado** el presente agravio respecto a las conclusiones 61,100, 158,199 y 201, como se evidenciará a continuación.*

[Cuadro]

Le asiste la razón al partido apelante.

Esto es así, debido a que no obstante que cada conclusión se refiere a una falta configurada a partir de una sola conducta, en los términos que han quedado explicados en el cuadro que antecede, también se observa que la autoridad responsable al momento de determinar la "III. Imposición de la sanción" invocó como un elemento a considerar en cada una de esas conclusiones, la "pluralidad de la conducta" a pesar de tratarse de una sola.

Lo anterior se confirma con la información que se asienta en la tabla siguiente:

[Cuadro]

Incluso, como se puede observar en cada uno de los casos apuntados, la autoridad responsable sí tomó en cuenta ese dato cuando afirmó, al analizar

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

cada conducta infractora de las conclusiones 61, 100, 158, 199 y 201, en las fojas 2,828, 3,262, 3,266, 3,270 y 3,275, respectivamente y en esencia, que:

‘Que se trató de diversas irregularidades, es decir, se actualizó una pluralidad de conductas cometidas por los partidos coaligados’.

Por tanto, es evidente que como lo afirmó el partido apelante, la autoridad responsable impuso cada sanción, tomando en cuenta, indebidamente, el elemento consistente en la “pluralidad de la conducta”, no obstante tratarse de una sola en cada caso.

Cabe destacar, que del análisis realizado por la autoridad responsable no se desprende qué relevancia tiene ese elemento para llevar a cada una de las multas impuestas al ciento cincuenta por ciento de los montos involucrados, de donde se desprende la violación al principio de legalidad de que se duele la parte apelante, al imponer las sanciones objeto de la controversia en estudio.

En consecuencia, atendiendo a las particularidades de los presentes casos, es inconcuso que el ejercicio de reindividualización de las sanciones que deberá realizar la autoridad responsable en cumplimiento de esta ejecutoria, tendrá que ajustarse a los montos involucrados, sin poder incluir elementos que agraven la situación del ahora apelante.

Como consecuencia de lo anterior, se considera que al carecer de sustento el criterio que utilizó la autoridad responsable para imponer como sanción la equivalente al ciento cincuenta por ciento de los montos involucrados, en las conclusiones 61, 100, 158, 199 y 201 así como al observar que el propio apelante reconoce la comisión de tales faltas y de que las mismas deben sancionarse a partir del criterio contenido en la tesis “MULTA IMPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. SI LA INFRACCIÓN ES DE CARÁCTER PATRIMONIAL DEBE CUMPLIR UNA FUNCIÓN SIMILAR O EQUIVALENTE AL DECOMISO”, lo procedente es que se revoque las multas impuestas en las conclusiones 61, 100, 158, 199 y 201 en el considerando “9.3 Compromiso por México”, de la mencionada resolución y, por consecuencia, también se dejen sin efectos las multas impuestas en el resolutivo TERCERO, inciso e), Conclusión 61, e inciso I), conclusiones 100, 158, 199 y 201, de la propia resolución reclamada.

Lo anterior, para el efecto de que en su oportunidad, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emita nueva resolución en la que las faltas 61, 100, 158, 199 y 201 sean objeto de sanción por la propia autoridad responsable con multas que deberán ajustarse a la tesis arriba precisada.

(...)

I. 137 FALTAS DE CARÁCTER FORMAL (Páginas 275 a 289 de la demanda).

Como se adelantó desde la metodología de estudio del presente agravio, esta Sala Superior observa que con motivo del análisis de los agravios identificados bajo el grupo II, al asistirle la razón al partido apelante en algunos de los agravios antes examinados, la autoridad responsable deberá considerar dentro del grupo de faltas formales, los casos siguientes:

Del grupo “II INDEBIDA CALIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES COMO SUSTANCIALES, DEBIENDO SER FORMALES”:

- 2.1 OMISIÓN DE PRESENTAR UNO DE LOS DOCUMENTOS “SOPORTE” PARA ACREDITAR UN GASTO EN ORIGINAL, **las conclusiones 23, 121 y 159.**
- 2.5 FALTA DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE GASTO DEBIDAMENTE INFORMADO Y COMPROBADO, **la conclusión 92.**
- 2.6 FALTA DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE GASTO DEBIDAMENTE INFORMADO Y COMPROBADO, **la conclusión 171.**

Tales determinaciones, de suyo, serían suficientes para ordenarle a la autoridad responsable que realizara un nuevo ejercicio de reindividualización de la sanción que debe imponerse al grupo de faltas formales, dentro del cual ahora deberá considerar también las conclusiones 23, 92, 121, 159 y 171.

Sin embargo, se aprecia que el partido apelante, además formuló agravios acerca de la motivación que expresó la autoridad responsable para individualizar la sanción que aplicó sobre el grupo que identificó como de “137 faltas formales”, sobre lo cual esta Sala Superior deberá pronunciarse a continuación, para efecto de que la autoridad responsable, al dictar la nueva resolución sobre ese tema, en su caso, se ajuste a las indicaciones que se asienten en la presente ejecutoria.

El partido apelante expresa que no es motivo de controversia ni la etapa de calificación de la falta como leve, ni que la sanción que debe aplicarse es la multa.

Aduce que la sanción de 137 faltas de carácter formal resulta desproporcional a la reprochabilidad objetiva, debido a que no obstante que la autoridad responsable en su calificación adjetiva las consideró leves y no existen

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

situaciones agravantes de la responsabilidad, impuso una sanción que rebasa la media (5,250 días de SMGVDF) dentro de los márgenes mínimo y máximo, sin exponer las razones del porqué no impuso la mínima u otra cercana a ésta y directamente aplicó ese monto.

Aduce que la imposición de esa multa como argumento para persuadir o evitar futuras infracciones de similar naturaleza, carece de razonabilidad y pertinencia para justificarla.

Señala que del análisis de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la comisión de la falta, tampoco se advierten elementos para justificar la sanción impuesta. Sobre ese aspecto, considera que la autoridad responsable al graduar la sanción, al analizar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, no tomó en cuenta en su completa dimensión y complejidad, las situaciones siguientes:

- Que cualitativamente, los informes de campaña debe ser elaborados por profesionales de la materia contable con conocimientos y experiencia también electoral, atendiendo a las particularidades de esta última, cuya disponibilidad con ese alto grado de especialización, no es elevada.*
- Que cuantitativamente, existe la concurrencia de las elecciones de diputados federales, senadores y Presidente de la República, sus precampañas, con sus respectivos informes y anexos, cuya presentación separada o consolidada no significa un menor carga de trabajo ni disminuye la posibilidad de que se cometan errores u omisiones, las cuales sólo ameritarán una especial reprochabilidad, cuando son de entidad grave o que por su número revelen evidente negligencia o incapacidad profesional.*
- Que en la mayoría de los casos la documentación comprobatoria para llevar el registro contable depende de terceras personas, lo que excluye de responsabilidad a ese partido derivado del incumplimiento de un tercero: y,*
- Que las 137 faltas formales son resultado de la revisión entre un universo de miles de documentos y de movimientos de similar naturaleza a los sancionados, en donde por la alta complejidad se incrementa la posibilidad de que ocurran observaciones o errores, siendo esto lo ordinario.*

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

El apelante explica que en 32 de las 137 faltas formales, si bien se advirtió reincidencia, ello fue en relación con faltas vinculadas al incumplimiento de sólo 8 normas reglamentarias de tipo formal, lo cual tampoco considera suficiente el apelante para justificar la sanción impuesta.

Señala que la responsable consideró además, que la conducta fue “culposa”; que no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta.

A mayor abundamiento, el apelante considera que la responsable es incongruente porque en otra falta formal similar atribuida al Partido Revolucionario Institucional en el considerando 9.2, la multa de 2,159 días de salario mínimo equivale al 21.59% de la sanción máxima, mientras que en el caso particular, los 5,250 días de salario mínimo, representa el 52.50%, es decir, una multa en un nivel superior a la media

Todo lo anterior, en concepto del apelante, debe dar lugar a que la sanción a imponérsele se ubique entre la mínima y la media y más cercana a la primera.

Resulta necesario establecer en primer lugar, que el partido apelante formula respecto a la resolución reclamada, las precisiones siguientes:

- *Su conformidad con la calificación de la falta como leve;*
- *Su conformidad con que la sanción aplicable es la multa y no la amonestación pública; y,*
- *La incongruencia para sancionar este grupo de faltas se muestra, desde la óptica del partido recurrente, con la diversa sanción impuesta al Partido Revolucionario Institucional en el considerando 9.2 de la resolución impugnada, en la que impuso por faltas de carácter formal una multa por 2,159 días de salario mínimo general vigente del Distrito Federal, equivalente a \$134,009.50 o igual al 21.59%, que se ubica entre la mínima y la media y más cercana a la primera, mientras que en el presente caso, en evidente violación al principio de proporcionalidad, por faltas del mismo carácter formal impuso una multa de 5,250 días de salario mínimo general vigente del Distrito Federal, equivalente a \$327,232.50 o igual a 52.50%, que se ubica en un nivel superior a la media.*

Ahora bien, esta Sala Superior examina en su orden los agravios planteados, los cuales están esencialmente enfocados a demostrar la desproporcionalidad de la multa impuesta a partir, esencialmente, de dos temas:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- *Que se dejaron de tomar en cuenta diversas circunstancias de modo, tiempo y lugar que, en su concepto, le deben favorecer; y,*
- *Que de los diversos elementos que se tomaron en cuenta para la individualización de la sanción no se sigue el monto de la multa impuesta.*

No le asiste la razón al partido recurrente cuando afirma, en esencia, que al analizar las circunstancias de modo, tiempo y lugar atinentes a la comisión del presente grupo de faltas, la autoridad responsable debió considerar a su favor, entre otros elementos, la complejidad cuantitativa y cualitativa de los informes; el número de elecciones a reportar; que el registro contable depende de terceras personas; y, su alto grado de especialidad.

Esto es así, porque de conformidad con lo previsto en los artículos 41, bases II y V, párrafos décimo y décimo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27, párrafo 1, inciso c), fracción IV, 36, párrafo 1, inciso c), 38, párrafo 1, incisos a) y k), 77, párrafo 5 y 81, párrafo 1 y 83, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y, conforme al Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen derecho a recibir financiamiento público, que prevalecerá sobre cualquier otra modalidad de financiamiento, para realizar sus actividades el cual se sujetará a las reglas que establezca la ley; la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos corresponderá a un órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral; los partidos políticos tienen la obligación de permitir la práctica de auditorías y verificaciones así como entregar la documentación que les requieran las autoridades competentes respecto a sus ingresos y egresos; y, los partidos políticos deberán tener un órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y de campaña, así como de la presentación de los informes trimestrales de avance del ejercicio; anuales; de precampaña; y, de campaña, debiendo respecto a estos últimos, especificar los gastos y el origen de los recursos de cada una de las elecciones en que participen, en términos del Reglamento de Fiscalización de la materia.

Sobre este último ordenamiento es importante destacar, que el mismo fija las condiciones bajo las cuales los partidos políticos deberán registrar sus ingresos y egresos, la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos, así como la presentación de los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación.

Por consiguiente, es inconcuso que los partidos políticos carecen de justificación para hacer valer en su defensa, cuestiones como las invocadas por el instituto político recurrente para incumplir las obligaciones apuntadas o para que disminuya su grado de responsabilidad o, incluso, para la graduación en la individualización de las sanciones a imponérseles.

*Ahora bien, esta Sala Superior considera que el segundo tema de agravio resulta **fundado**, el cual medularmente consiste en que de los elementos que se estudiaron en la individualización de la sanción no se sigue el monto de la multa impuesta.*

En efecto, la lectura del apartado “B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN” consultable en las páginas 2,396 a 2,414 de la resolución reclamada, permite advertir que la autoridad responsable impuso la multa recurrida, en resumen, con base en los elementos siguientes:

1. Calificación de la falta cometida

*Considero **leves** las faltas cometidas, al advertir la ausencia de dolo, ya que estimó que las violaciones cometidas derivaron de una falta de cuidado y sólo pudieron en peligro los bienes jurídicos tutelados. En consecuencia, determinó que debía sancionarse a los infractores, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, en forma apropiada para disuadir a los actores de conductas similares en el futuro y proteger los valores tutelados por las normas violadas.*

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

Ante el incumplimiento de la obligación de presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos se puso en riesgo al principio de certeza porque la autoridad no pudo verificar que el sujeto fiscalizado cumpliera con la totalidad de sus obligaciones.

Sin embargo, considera que esa afectación no fue significativa, ya que no se vulneró en forma sustancial el bien jurídico tutelado por la norma, porque simplemente se puso en peligro en forma abstracta.

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia Diputados)

La autoridad responsable consideró actualizada la reincidencia en los casos siguientes:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- *En las conclusiones 122, 130, 131, 174 y 184 relacionadas con la presentación de cheques por pagos que rebasan el tope de 100 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, los cuales carecen de la leyenda “Para abono en cuenta del beneficiario”.*
- *En las conclusiones 132, 133, 165, 166, 181, 192, 197 y 211 relativas a la presentación de los contratos de prestación de servicios, los cuales deben contener los costos, fechas de pago, características del servicio, vigencia del contrato, derechos, obligaciones, impuestos, así como las penalizaciones en caso de incumplimiento.*
- *En las conclusiones 163 y 214 porque se relacionaron con la presentación de muestras de la propaganda electoral y utilitaria de los partidos políticos*
- *En las conclusiones 137, 138, 143 y 212 vinculadas con que no se presentaron las hojas membretadas de la empresa que deben anexar a cada factura, lo cual servirá como comprobante de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en la vía pública.*

*Enseguida, la autoridad responsable en el apartado “III. **Imposición de la sanción**” legible a fojas 2,414 a 2,422 de la resolución reclamada, en síntesis, sostuvo lo siguiente:*

- *Que las faltas se calificaron como **LEVES**.*
- *Que las faltas formales no afectaron sino sólo pusieron en peligro la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.*
- *Que los integrantes de la otrora coalición conocían los alcances de las normas invocadas, así como los oficios de errores y omisiones expedidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente.*
- *Que si bien no hay elementos para considerar la presencia de intencionalidad o dolo, si se desprende la falta de cuidado para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Reglamento de Fiscalización, las cuales impidieron el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora, cuya finalidad es garantizar que la actividad de los institutos políticos se desempeñe con apego a los cauces legales.*

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- *Existe reincidencia en las conclusiones 122, 130, 131, 132, 133, 137, 138, 143, 163, 165, 166, 174, 181, 183, 192, 197, 211, 212 y 214.*
- *Explicó que el monto involucrado en las faltas formales, cuando éste es determinable, resulta sólo uno de los parámetros para que, discrecionalmente, la autoridad responsable fije la proporcionalidad e idoneidad del monto de la sanción a aplicarse, entre los cuales deben observarse, la comisión intencional o culposa de la falta; las trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, entre otros elementos cuyo conjunto permitan a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir o disuadir la conducta infractora*
- *A continuación, procedió a seleccionar la sanción de las previstas en el artículo 354, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, resulta aplicable al caso particular, con la finalidad de determinar si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, establecer la graduación concreta idónea, obedeciendo a las circunstancias objetivas y subjetivas de las faltas, cuidando que no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas o desproporcionales ni tampoco insignificantes o irrisorias.*
- *Con base en lo anterior, la autoridad responsable desestimó las sanciones previstas en las fracciones I y III a VI, del párrafo 1 del artículo 354 del Código Federal Electoral, ya que las consideró no aptas para satisfacer esos propósitos atendiendo a su grado de entidad, ya sea por ser ésta mínima o excesivas.*
- *En ese orden determinó que la sanción de multa prevista en el artículo 354, párrafo 1, inciso a), fracción II, del ordenamiento invocado, resulta idónea al caso particular, porque puede ser graduada, dentro del margen establecido en ese dispositivo legal, atendiendo a su gravedad, las agravantes y atenuantes, las particularidades del infractor y los hechos que motivaron la falta, por lo que se repiten los factores a que se ha hecho referencia con anterioridad.*
- *Además, toma en cuenta el criterio “COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE” por lo que concluye que la sanción que se impondrá deberá obedecer al porcentaje de aportación de recursos de los partidos a la coalición “Compromiso por México” equivalente al 80% al Partido Revolucionario Institucional y 20% al Partido Verde Ecologista de México.*

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- *Como resultado, la autoridad responsable impone como multa total la cantidad de \$327,232.50, correspondiéndole al Partido Revolucionario Institucional 4,200 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, igual a la cantidad de \$261,786.00 y al Partido Verde Ecologista de México 1,050 días de salario mínimo, equivalente a \$65,446.50.*
- *Finalmente, la autoridad responsable concluye que esa sanción en modo alguno afecta el cumplimiento de los fines de esos institutos políticos y el desarrollo de sus actividades, de acuerdo con sus respectivas capacidades económicas y conforme a otras sanciones pecuniarias que se les han impuesto.*

De conformidad con todo lo anteriormente explicado, esta Sala Superior arriba a la convicción de que la autoridad responsable, no obstante refiere a que se trataron de faltas leves, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, al conocimiento de la conducta y las normas infringidas, al elemento disuasivo, lo cierto es que la autoridad no explica de qué modo cada uno de esos factores la llevaron a determinar que el monto de la sanción correspondiente debe ascender a la cantidad de \$327,232.50 que supera el punto intermedio entre el mínimo y la máxima de la sanción de multa a que se refiere el artículo 354, párrafo 1, inciso a), fracción II, del código electoral federal.

No pasa inadvertido, que en el ejercicio de la facultad sancionatoria la autoridad responsable cuenta con un margen de arbitrio y discrecionalidad para determinar la sanción económica a imponerse.

Sin embargo, esta Sala Superior considera que la autoridad sancionadora se encuentra obligada a explicar cómo arriba a ese monto, como puede ser, a través de detallar de qué manera cada elemento que toma en cuenta, en su concepto justifica que se ubique en algún punto intermedio entre el mínimo y la máxima de los rangos para imponer la sanción de multa en estudio.

De otro modo, los justiciables carecen de los elementos necesarios para conocer las condiciones del arbitrio o discrecionalidad realizados en el ejercicio de la facultad sancionadora correspondiente, impidiéndoseles conocer las razones que objetivamente soportan la determinación que, en su concepto, pudiera causarles indebidamente un perjuicio.

Como resultado, la autoridad responsable deberá reindividualizar la sanción del grupo de faltas formales en que incurrió la otrora coalición “Compromiso por México”, observando los lineamientos siguientes:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- *Indicará objetivamente cómo influye cada elemento en la determinación de la sanción a imponer;*
- *Con el grupo de 137 faltas formales, deberá considerar con el mismo carácter además las conclusiones 23, 92, 121, 159 y 171, atendiendo a los efectos de la presente ejecutoria; y,*
- *La reindividualización que se realice deberá ser congruente con la sanción que se impuso al Partido Revolucionario Institucional en el considerando 9.2 de la resolución impugnada, en la que impuso por faltas de carácter formal una multa por 2,159 días de salario mínimo general vigente del Distrito Federal, equivalente a \$134,009.50 o igual al 21.59%, que se ubica entre la mínima y la media y más cercana a la primera.*

*En consecuencia, al resultar **fundado** el presente agravio, lo procedente es que esta Sala Superior revoque el ejercicio de individualización de la sanción realizado por la autoridad responsable en las páginas 2,396 a 2,422 de la resolución reclamada, así como el resolutivo TERCERO, inciso a), del Acuerdo impugnado, para el efecto de que la autoridad responsable, ajustándose a los lineamientos de la presente ejecutoria, reindividualice la sanción que deberá imponerse por el grupo que, como efecto de la presente sentencia, ahora sería de 147 faltas formales en que incurrió la otrora Coalición “Compromiso por México” conformada por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.*

Como resultado de todo lo anterior, en los apartados de efectos de la ejecutoria y de resolutivos, se deberá con motivo del agravio SEXTO, considerar contra la resolución impugnada, las consecuencias siguientes:

- 1. Revocar** las sanciones impuestas como faltas sustanciales a las conclusiones 23, 92, 121, 159 y 171 para el efecto de sancionarlas dentro del grupo de faltas formales.
- 2. Reindividualizar** la sanción impuesta por la conclusión 32 a efecto de no considerar los promocionales RV01093-12 y RV00473-12.
- 3. Reinvidividualizar** las multas aplicables a las conclusiones 61, 100, 158, 199 y 201 porque indebidamente se tomó como agravante la “pluralidad de conductas”,
- 4. Reinvidualizar** la sanción impuesta al grupo de las faltas formales, tomando en cuenta que ese grupo pasó de 137 a 142 faltas formales; que

debe exponer objetivamente cómo influye cada elemento en la determinación de la sanción a imponer; y, la reindividualización que realice deberá ser congruente con la sanción que se impuso al Partido Revolucionario Institucional en el considerando 9.2 de la resolución impugnada.

AGRAVIO SÉPTIMO

*El partido inconforme, sostiene que le causa agravio la **conclusión 45**, contenida en el apartado 9.3 de la resolución controvertida, ya que a su parecer adolece de la debida fundamentación y motivación, por lo siguiente:*

- A. Apunta que la autoridad responsable de manera errada concluyó que omitió reportar diversas erogaciones en sus informes de gastos de campaña federales, al considerar que no le fue posible identificar la propaganda genérica y específica en cuarenta y dos actos proselitistas, pues presentó sus registros contables por adquisición realizada y no por evento.*

En su opinión, con tal razonamiento se le generó una obligación jurídica inexistente, ya que la normativa fiscal en ningún momento refiere que se tengan que presentar registros contables por evento.

- B. En consonancia, sostiene que en los cuarenta y dos eventos de campaña detectados que, supuestamente, no reportó, se violaron las formalidades esenciales del procedimiento, ya que en ningún momento se le precisó y detalló en qué consistieron los supuestos gastos, elementos y propaganda que se ubicó en los eventos monitoreados.*

En su opinión, la responsable debió especificar con toda claridad y suficiencia, el tipo, descripción, características particulares, la cantidad de gastos, elementos y propaganda detectados, que se afirma, no correspondían con los que fueron reportados en su oportunidad de manera global y por adquisición realizada, a fin de que tuviera oportunidad de controvertir tal afirmación.

Hace énfasis en que no es obstáculo para tal conclusión, que en el Anexo 1 del oficio UF-DA/12000/12 se detallaran los eventos a los cuales asistió el personal de la Unidad de Fiscalización, pues en dicho documento sólo se mencionan, de manera genérica, diversas clases de artículos propagandísticos; sin embargo, no se exhibieron muestras o fotografías, a efecto de que tuviera conocimiento de dicha propaganda.

A su parecer, la propia responsable reconoce expresamente que reportó en forma general o global los gastos y propaganda utilizada en cada uno de los

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

eventos verificados, arguyendo que le fue imposible identificar o ubicar la totalidad de dichos elementos propagandísticos por evento, circunstancia distinta a que no hubiera reportado dichos gastos.

Sostiene que, contrariamente a lo afirmado, su representada sí identificó e informó de la propaganda utilizada en sus eventos de campaña, tal y como lo prevé la normativa aplicable, circunstancia que es reconocida por la autoridad fiscalizadora.

Hace notar que al momento de reseñar lo asentado en las respectivas actas de verificación de los eventos monitoreados, la responsable se limitó a manifestar 'que observó equipo del cual la coalición no hizo manifestación al respecto', sin embargo, en ningún momento hizo de su conocimiento a qué se refería, lo cual lo dejó en estado de indefensión al no poder hacer las aclaraciones pertinentes.

Por lo expuesto, desde su perspectiva, las conclusiones a las que arribó la autoridad electoral, así como la sanción que le fue impuesta, no se encuentran debidamente apegadas a derecho, pues a pesar de las aclaraciones y precisiones que en su oportunidad realizó, la autoridad se limitó a manifestar de forma dogmática que observó equipo, que detectó ciertos gastos, y propaganda que no fue reportada, sin especificar a qué conceptos se refería, lo cual lo dejó en un estado de indefensión jurídica.

Afirma que en el supuesto no concedido de que algún tipo de propaganda no hubiere sido reportado, la cuantificación que al respecto correspondía realizar sólo debió incluir la propaganda supuestamente no reportada; sin embargo del análisis que efectúa al Anexo 27 desprende una cuantificación como si no se hubiera reportado ningún tipo de propaganda o gastos erogados por la realización de los eventos, circunstancia que no es conforme a derecho.

En ese sentido, hace hincapié que entregó como Anexo 1, un disco compacto en el que esencialmente presentó una integración del costo de los eventos, costo unitario, número de piezas, costo por producto y global, respecto de lo asentado en las actas de verificación elaboradas por personal de la Unidad de Fiscalización, a fin de evidenciar que informó con toda oportunidad los gastos y elementos propagandísticos utilizados en cada uno de los eventos monitoreados por la autoridad administrativa electoral.

A mayor abundamiento, destaca algunos de los informes y documentos que dan cuenta de que en su oportunidad informó lo conducente, respecto de algunos de los conceptos que se cuantificaron como gasto no reportado.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Hace énfasis en que las documentales señaladas, se exhibieron con toda oportunidad en su informe de gastos de campaña, lo cual evidencia con toda nitidez que sí informó y reportó los respectivos gastos operativos de campaña, por lo que resulta inverosímil que la autoridad responsable pretenda cuantificar dichos conceptos como gastos no reportados, bajo la premisa de que no los pudo identificar por evento.

Reitera que si bien no hizo un reporte individualizado de la propaganda adquirida y utilizada por cada evento, así como de algunos gastos operativos, sí efectuó el reporte de dicha propaganda y gastos en forma global y por adquisición realizada, no existiendo sustento para establecer una cuantificación como la efectuada.

De esa forma, concluye diciendo que en el supuesto de que se hubiere distribuido algún tipo de propaganda no reportada, no es conforme a derecho cuantificar la totalidad de la propaganda utilizada en los referidos eventos, ni incluir otros conceptos o gastos diversos sino, en todo caso, únicamente cuantificar el costo de la propaganda que se dice detectada y “no reportada”.

C. En esa lógica, también reclama por vicios propios el desglose y cuantificación que la autoridad responsable realiza en el Anexo 27 del Dictamen consolidado, en el que se establece como importe de un supuesto gasto directo omitido la cantidad de 12´128,492.10 (DOCE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N) y que también sirve de sustento para la determinación de la multa.

A su modo de ver, con independencia de que se incluyen conceptos que no pueden ser considerados como propaganda utilitaria, el desglose y cuantificación realizada por la responsable, es sólo su determinación parcial, subjetiva y unilateral, siendo que nunca tuvo la oportunidad de cuestionar dicha apreciación.

Para sustentar lo anterior, señala los siguientes casos:

1. Tratándose del evento identificado como 6, consistente en la celebración de un mitin en la plaza municipal de Guelatao, Oaxaca, en el acta de verificación se hizo referencia a “dos lonas”, en tanto que en el anexo que se cuestiona se desglosaron y cuantificaron “tres lonas”, que importan un total de \$1,030.59 (UN MIL TREINTA PESOS 59/100 M.N).

2. En el caso del evento marcado como número 10, relacionado con un mitin en el salón El Oro, en Puerto Vallarta, Jalisco, en el acta de verificación respectiva en el rubro de “lona” no se precisó su número, en tanto que en el

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

anexo que se cuestiona se desglosaron y cuantificaron 2 lonas, que importan un total de \$687.06 (SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N).

3. En el caso del evento marcado como 11, consistente en un mitin celebrado en la Plaza Patria, en Aguascalientes, Aguascalientes, en el acta de verificación respectiva, en los rubros denominados “pancartas/pendones”, “banderines”, “gorras”, “playeras”, “aplaudidores”, no se precisó su número, en tanto que en el anexo se desglosaron y cuantificaron 1,000 gorras, 1,000 playeras, 1,000 banderines, 500 aplaudidores y 625 pendones, que importan \$125,782.50 (CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N).

4. Tratándose del evento numerado como 12, consistente en un mitin celebrado en la Arena Monterrey, Nuevo León, en el acta de verificación respectiva no se precisó el número de pancartas, en tanto que en el anexo que se cuestiona se desglosaron y cuantificaron 3,500 pancartas que importan \$666,050.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N).

5. En el caso del evento numerado por la Unidad de Fiscalización como 23, consistente en un mitin celebrado en el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, en Campeche, Campeche, en el acta de verificación no se precisó su número en tanto que en el anexo en comento se cuantificaron 500 banderas, 1,000 abanicos y 1,000 pulseras, que importan \$30,070.00 (TREINTA MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N).

6. En el caso del evento identificado como 33, consistente en un mitin celebrado en el Deportivo Luis Donaldo Colosio, en Valle de Chalco, Estado de México, en el acta de verificación en el rubro de “playeras” son señaladas 3,200 en tanto en el anexo que se cuestiona, se hizo referencia de 3,400 unidades y, por ende, advierte una diferencia injustificada de 200 playeras, lo cual equivale a \$5,586.00 (CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).

7. Respecto del evento 43, consistente en un mitin celebrado en Lagos de Moreno, Jalisco, en el acta de verificación respectiva en los rubros de pancartas, pendones, aplaudidores, playeras y bastidores, no se precisó su número, en tanto que en el anexo se desglosaron y cuantificaron 5 pancartas, 2 pendones, 2,500 aplaudidores, 1,250 playeras y 20 bastidores, que importan \$61,023.64 (SESENTA Y UN MIL VEINTITRÉS PESOS 64/100 M.N).

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

8. *En lo que toca al evento numerado como 44, consistente en un mitin celebrado en el Estadio Azteca, en el Distrito Federal, en el acta de verificación en los rubros de “aplaudidores”, “bolsas”, “sombrillas”, “volantes”, “banderines”, “gorras”, “playeras”, “chamarras” y “caras del candidato” no se precisó su número, en tanto que en el anexo que se cuestiona se desglosaron y cuantificaron, sin explicación 10,000 aplaudidores, 10,000 bolsas, 10,000 sombrillas, 10,000 volantes, 10,000 banderines, 10,000 gorras, 10,000 playeras; 5,000 chamarras y 10,000 caras del candidato, que importan \$4’459,100 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N).*

9. *En el caso del evento numerado como 47, consistente en un mitin celebrado en la Macro Plaza de Monterrey, Nuevo León, en el acta de verificación respectiva en los rubros de “camisas” y “banderas” no se precisó su existencia y por lo que hace a los de “volantes”, “pendones”, “banderines”, “gorras”, “pulseras”, “playeras”, “aplaudidores”, “bolsas”, “cuadernos” “sombrillas”, “Cd”, “lápiz labial” y “calendarios” no se precisó su número, mientras que en el anexo que se cuestiona se desglosaron y cuantificaron, sin explicación 1,250 camisas, 4,000 banderas, 5,000 volantes, 200 pendones, 250 banderines, 4,000 gorras, 4,000 pulseras, 4,000 playeras, 4,000 aplaudidores, 4,000 bolsas, 4,000 cuadernos, 4,000 sombrillas, 4,000 Cd, 4,000 lápiz labial y 4,000 calendarios que importan \$1’049,589.50 (UN MILLÓN CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N).*

Conforme a lo expresado, en opinión del recurrente, no existe la debida congruencia entre la información y datos asentados en las respectivas actas y en el referido Anexo 27.

Desde su perspectiva, la autoridad responsable debió precisar en cada uno de los eventos que monitoreó, el tipo y número de los artículos propagandísticos que observó, por lo que al no hacerlo así, fue contrario a derecho que fijara el número de artículos propagandísticos que se habrían empleado en cada evento.

En vía de consecuencia, reclama la determinación de 9’997,318.23 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 23/100 M.N), que la responsable estima como gasto “centralizado” de campaña no reportado, cifra que además considera sujeta a prorrateo entre las distintas elecciones y cuyo desglose y cuantificación se realiza en el anexo 28 del dictamen consolidado.

A su modo de ver, lo narrado evidencia que la cuantificación de gastos y propaganda supuestamente no reportada en 42 eventos, resulta ilegal (en

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

atención a las violaciones al debido procedimiento), de ahí que la cuantificación y prorrateo que se realiza en el anexo 28 del supuesto gasto omitido, clasificado ahora como gasto “centralizado”, devenga igualmente contraria a derecho.

En conclusión, considera que la cuantificación realizada por la responsable no debe sumarse en tales términos a los respectivos informes de gastos de campaña, ni mucho menos, imponerse alguna sanción que tome como base el desglose y cuantificación que impugna.

Ahora bien, a fin de estar en condiciones de dar respuesta a la alegación del partido inconforme, es de tener presente las consideraciones que sustentan la conclusión 45, que derivó en la sanción que le fue impuesta a la coalición “Compromiso por México”, luego de que se determinó que omitió registrar el gasto por concepto de propaganda distribuida en cuarenta y dos eventos.

Sobre el particular, es menester señalar que con apoyo en sus atribuciones, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, informó a la otrora coalición “Compromiso por México” que durante el periodo de campaña, el personal de la referida Unidad efectuó visitas de verificación a diversos eventos realizados por su candidato a la Presidencia de la República, levantándose actas de verificación, con el objeto de asentar de manera formal la propaganda utilizada en cada uno de esos eventos y realizar las compulsas correspondientes.

Sin embargo, de la verificación a las pólizas contables presentadas por la otrora coalición y la respectiva documentación soporte, no le fue posible identificar los gastos erogados ni la publicidad utilizada en cada uno de los eventos de manera específica.

(...)

A través del oficio UF-DA/14090/12 la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, manifestó al responsable del órgano de administración de la coalición “Compromiso por México”, que realizó la verificación de la documentación presentada; sin embargo, no le fue posible identificar la totalidad de gastos y propaganda utilizada en cada uno de los eventos señalados, toda vez que los presentó de forma general, sin especificar a qué evento correspondía el gasto o la propaganda.

Derivado de lo anterior, se concluyó que aun cuando la otrora coalición señaló que las muestras de la publicidad utilizada en cada uno de los eventos realizados por el entonces candidato a la Presidencia de la República, se anexaron en las pólizas respectivas que contenían la propaganda solicitada

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

de la verificación a las pólizas contables presentadas por la otrora coalición y a su respectiva documentación soporte, no fue posible identificar los gastos erogados ni la publicidad utilizada en cada uno de los eventos de manera específica.

De esa suerte, como Anexo 3 se le detallaron los eventos a los cuales asistió el personal de la Unidad de Fiscalización, así como la propaganda identificada en cada uno de ellos. Por tanto, nuevamente se le solicitó (...)

Por oficio CACP/102/12, el responsable de la Administración de la coalición “Compromiso por México”, expresó que:

‘En relación a esta observación cabe aclarar que el partido en su operación normal realiza las adquisiciones de su propaganda por monto de factura, y no por cada evento que este programado realizar. Así también, si se observa el catálogo de cuentas del Reglamento de Fiscalización no indica la necesidad del registro contable por cada evento, sino por adquisición realizada. Adicionalmente, en las visitas de verificación que realizó el personal adscrito a la Unidad de Fiscalización según consta en Actas levantadas no se indica la obligación o recomendación de tener registrado los gastos inherentes a la realización de cada evento en una cuenta específica para el control de los mismos.’ Así también, en la búsqueda de normatividad que emitió el Consejo General del Instituto Federal Electoral, no se encontró norma que nos remita a llevar el gasto por cada evento a realizar, si hubiese existido tal normatividad el partido responsable de la coalición parcial “Compromiso por México” hubiese realizado las operaciones mercantiles, contrataciones, planeación y administración de forma diferente. Por tal motivo, se indica que todos los gastos de campaña realizados en beneficio del candidato presidencial Enrique Peña Nieto se encuentran registrados por conceptos y contratos totales los cuales abarcan propaganda que se utilizó en todos los eventos y no en uno en particular; es importante mencionar que la documentación que ampara las adquisiciones de propaganda ya fue entregada y revisada por la Unidad de Fiscalización.’

Tal respuesta se consideró insatisfactoria, al señalarse que si bien es cierto el catálogo de cuentas no contemplaba cuentas específicas para hacer el registro contable por evento, dicho catálogo era enunciativo, por lo cual no había limitaciones para realizar el registro contable de esa forma.

Por lo que hace a las actas de verificación, se especificó que la otrora coalición reconoció haber utilizado publicidad en los eventos aludidos al señalar que los gastos de propaganda fueron registrados de manera general;

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

sin embargo, el personal de la unidad de fiscalización asistió a los cuarenta y siete eventos realizados por el entonces candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto, en los cuales recabó muestras de la propaganda utilitaria detectada en cada uno de ellos; sin embargo, al comparar dichas muestras con la propaganda reportada por la coalición, se detectó que ésta no era igual.

Por lo anterior, con independencia de la forma de registro o contratación de los servicios, se concluyó que la otrora coalición debió identificar la publicidad difundida en dichos eventos, a fin de dar certeza respecto del origen y aplicación de los recursos.

En virtud de que en la revisión anticipada del informe del candidato a la Presidencia de la República, se advirtieron indicios de que durante los eventos señalados, hubo beneficios para senadores y diputados, durante la revisión de tales informes se notificó a la coalición “Compromiso por México” una serie de observaciones.

(...)

Luego de concluir la revisión de los distintos oficios y anexos que fueron remitidos por la coalición “Compromiso por México”, la autoridad responsable concluyó que en cuarenta y dos eventos a los cuales asistió, su otrora candidato a la Presidencia, no fueron reportados los gastos utilizados en su ejecución.

Por tal motivo, la observación se consideró como no subsanada, al incumplirse con lo señalado por el numeral 83, numeral 1, inciso d), fracción IV, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, pues no se reportó un importe de \$9´977,318.23 de gasto centralizado y de \$12´128,492.10 de gasto directo.

Señalado lo anterior, corresponde dar contestación a las alegaciones del partido inconforme.

(...)

*c. En contraposición, se estima que resulta sustancialmente **fundada** la alegación del partido inconforme, relacionada con que el desglose y cuantificación que realizó la responsable es ilegal, dado que se efectuó sin que se hubiera tomado en consideración la totalidad de la documentación que presentó, encaminada a justificar el gasto erogado en diversos eventos.*

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Sobre el tema, es de tener presente que en lo tocante al principio de exhaustividad, es criterio jurisprudencial que las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegura el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar.

De ese modo, el principio de exhaustividad impone que cualquier autoridad una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, agote cuidadosamente en la resolución, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo.

(...)

Efectivamente, en alcance al requerimiento que se le hizo mediante oficio UF-DA/4666/13, la coalición señalada a través del oficio CACP/033/13, de veintinueve de mayo de dos mil trece, señaló que entregaba la documentación para atender las observaciones derivadas de la existencia de diversos errores y omisiones, entre ellas, las relacionadas con la realización de los multicitados eventos, de ahí que remitía:

- Como **Anexo 1**, un CD que contenía la integración del costo de los eventos, así como el concepto que fue erogado en cada uno, costo unitario, número de piezas, costo por producto y el costo global según las actas de verificación.
- Como **Anexo 2**, pólizas donde reflejaba el gasto efectuado por el entonces candidato a Presidente de acuerdo con lo observado, aclarando que las pólizas adjuntadas representaban el gasto de la planeación, logística y propaganda adquirida durante la campaña.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- *Bajo el **Anexo 3**, el formato REL-VIAPAS-PRES, con el que reportaba el gasto de trasportación aérea y terrestre, que implicó el traslado de su candidato a eventos a los que acudió como invitado.*
- *Bajo el **Anexo 4**, las pólizas de diario 104 y 105 de treinta y uno de marzo de dos mil doce, pertenecientes a la contabilidad del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, con sus respectivas copias de facturas y contratos de prestación de servicios; la póliza de diario número 20, de treinta de junio de dos mil doce, donde se reconocía la depreciación de las adquisiciones; y la número 2, de treinta y uno de agosto de dos mil doce, de la contabilidad de su entonces candidato a Presidente, mismas que se anexaban junto con el cálculo de dicha depreciación conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta.*
- *Como **Anexo 5** remitía la póliza de diario número 10 de seis de mayo de dos mil doce, así como las 48 y 49 de primero de junio de dos mil doce, encaminadas a demostrar el gasto en el traslado y logística que generó la utilización de bienes (equipo de sonido, iluminación, pantallas, templete, vallas, planta de luz, sillas) en diversos eventos.*
- *Finalmente, como **Anexo 6** incorporaba la integración del gasto centralizado en torno a la propaganda genérica cuyo monto prorrateo.*

(...)

De lo anterior, es posible aseverar que el pronunciamiento realizado por la responsable, se centró en precisar que estaba acreditada la infracción, relacionada con la falta de presentación de documentación que acreditara el origen y destino de los recursos que la coalición empleó para la adquisición de la propaganda empleada en cuarenta y dos eventos proselitistas; sin embargo, ningún pronunciamiento hizo respecto a la documentación que le fue proporcionada a fin de que tuviera por colmadas las observaciones que precisamente realizó en torno a dicho tópico, por lo que hace a los eventos sobre los cuales ordenó la práctica de visitas de verificación.

Efectivamente, nada dice respecto al contenido del disco compacto que se le ofreció mismo que, en opinión de la recurrente, contenía una integración del costo de los eventos, así como el monto que fue erogado en cada uno de ellos, esto es, su costo unitario, número de piezas, costo por producción y el costo global, según lo asentado en las actas verificación practicadas (Anexo 1).

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Tampoco, no precisa el alcance de los Anexos 2, 3 y 4 que le fueron presentados, los cuales según refiere la coalición contenían, entre otras cuestiones: las pólizas del gasto efectuado por su entonces candidato a Presidente de la República; las pólizas en las que se relacionaba al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional; las pólizas relacionadas con el traslado y logística de bienes; el gasto centralizado de la propaganda genérica utilizada en los eventos.

De la misma manera, en ningún momento objeta lo aseverado por la actora, relacionado con que es inexacto que no reportó gasto alguno, en las contabilidades de diputados federales y senadores, derivado de las visitas practicadas, ya que según destaca, la misma se reportó en tiempo y forma (Anexo 6).

Ciertamente, la falta de pronunciamiento puntual, respecto de la totalidad de la documentación aportada por la entonces coalición, no puede generar convicción respecto a lo afirmado en el sentido de que no le fue posible identificar el gasto realizado en cuarenta y dos eventos, dado que tal consideración se sostiene en una valoración sesgada de la documentación aportada durante el proceso de revisión del informe de gastos.

Esto, ya que como se constató, realmente no realizó un pronunciamiento puntual del alcance de los medios de convicción que se han precisados, encaminados a justificar el gasto erogado en la ejecución de los multicitados eventos de campaña, a los cuales asistió tanto el candidato de la Presidencia de la República, como también, candidatos a diputados y senadores, postulados por la referida coalición.

Tal situación constituye una violación al principio de exhaustividad y, por ende, al principio de legalidad contenido en el numeral 16 de la Norma Fundamental, dado que emitió una conclusión e impuso una sanción, sin haber analizado el cúmulo de probanzas que se sometieron a su conocimiento.

*d. Igualmente, se considera **fundado** el disenso relacionado con que el desglose y cuantificación de gastos y propaganda contenido en el Anexo 27 es ilegal, pues no existe coincidencia entre lo asentado en las actas de verificación correspondientes a los eventos identificados como 6, 10, 11, 12, 23, 33, 43, 44 y 47, con lo que finalmente fue cuantificado.*

Se arriba a esa conclusión, dado que tal y como lo refiere el recurrente, no existe coincidencia entre lo asentado por los funcionarios designados por la Unidad de Fiscalización para atender las visitas de verificación de los distintos eventos a los cuales asistió el candidato de la otrora coalición “Compromiso

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

por México” y lo que finalmente se asentó en la Cédula de Gastos de Eventos identificada como Anexo 27, cuyo monto equivale al gasto total directo que el aludido candidato realizó en los eventos a que se ha hecho referencia.

A fin de evidenciar lo anterior, a continuación se inserta un cuadro en el que se precisa lo que se asentó en las actas de verificación levantadas por personal de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, así como lo que finalmente se asentó en el Anexo 27 del acumulado de gastos de propaganda utilitaria que benefició a la campaña de Presidente de la República:

[Cuadro]

Como se podrá advertir, no existe coincidencia alguna entre lo asentado en las respectivas actas de verificación levantadas por los funcionarios comisionados por la Unidad de Fiscalización y lo que fue asentado en el Anexo 27, respecto a la propaganda que se empleó en los eventos identificados como 6, 10, 11, 12, 23, 33, 43, 44 y 47.

Esto, ya que en las aludidas actas, en algunos casos no se precisó el número de la propaganda detectada y, en otros, ni siquiera su existencia, de ahí que no encuentre asidero la cuantificación realizada por la responsable, en su cédula de gastos de eventos, relacionado con el acumulado de gastos de propaganda utilitaria que beneficio a la campaña de Presidente.

Se afirma lo anterior, ya que no da ninguna motivación que justifique por qué contabilizó propaganda no detectada, ni tampoco explica cuál fue el criterio que siguió para registrar cierta propaganda que sí ubicó de manera primigenia durante la realización de las visitas, pero que no cuantificó.

Tal situación era relevante, pues ello hubiera permitido conocer con certeza, los criterios que se adoptaron para cuantificar ciertos gastos como no reportados; sin embargo, esto no acontece, pues simplemente se realizó un estimado de la propaganda empleada en cada uno de los eventos que se han precisado, sin señalar en qué se basaba para llegar a tal determinación.

Ciertamente, lo ordinario era que lo asentado en las actas de verificación que se han señalado, se reflejara en la cédula de gastos en eventos de la propaganda utilitaria que benefició a la campaña de Presidente; sin embargo, resulta palpable que lo asentado en éstas, no se aproxima a lo que finalmente se anotó.

Finalmente, es de desestimar lo alegado por el instituto político inconforme, relacionado con que la falta de correspondencia entre las actas de verificación

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

y el Anexo 27, relacionado con el “gasto directo”, en vía de consecuencia, imponga que la cantidad que se consideró como “gasto centralizado”, por un monto de \$9,977,318.23, respecto a las elecciones de Presidente, Diputados y Senadores, resulte ilegal, al sostenerse en una cuantificación inexacta.

Esto, ya que ambos anexos regulan situaciones distintas, ya que en el Anexo 27, sólo se puntualiza el acumulado de la propaganda utilitaria que se estimó favoreció al otrora candidato a Presidente de la República, mientras que en el Anexo 26 se contempla la propaganda genérica, que se consideró benefició a los distintos candidatos que asistieron a determinado evento de campaña, siendo el acumulado de éste último ejercicio, el que precisamente se sujetó a prorrateo.

Así las cosas, el hecho de que se hubiesen detectado inconsistencias en el desglose y cuantificación de ciertos eventos contenidos en el Anexo 27, respecto a lo asentado en las actas de verificación que fueron levantadas, ello no impone una afectación al resto de los Anexos que se precisan, pues regulan el acumulado de propagandas distintas, que pudieron beneficiar sólo al otrora candidato Enrique Peña Nieto, o también a candidatos a diputados o senadores.

*En mérito de lo narrado, lo conducente es **revocar** las consideraciones que integran la conclusión 45 del informe de ingresos y gastos de campaña de los candidatos de la coalición “Compromiso por México, a fin de que la autoridad responsable, en el ámbito de sus atribuciones:*

a) Valore pormenorizadamente la documentación que mediante oficio CAPC/033/13, la otrora coalición presentó al Director General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a fin de aclarar el contenido del oficio UF-DA/4666/13 de quince de mayo de dos mil trece, y

b) Funde y motive su decisión respecto a la cuantificación del gasto presumiblemente no reportado, respecto a los eventos 6, 10, 11, 12, 23, 33, 43, 44 y 47 que desplegó la coalición “Compromiso por México”.

Hecho lo anterior, deberá emitir la determinación que en derecho estime pertinente, respecto a la aludida conclusión.

AGRAVIO OCTAVO

El apelante, sostiene que la resolución controvertida adolece de la debida fundamentación y motivación, pues la autoridad responsable le impuso sanciones pecuniarias a partir de premisas falsas, ya que el único elemento para sancionarlo es el monto involucrado, el cual tiene vicios de origen tales

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

como la duplicidad de registros de dicha observación, así como la determinación de irregularidades cuando las mismas fueron debidamente solventadas.

De manera particular, se refiere a la conclusión 18 del dictamen del Partido Revolucionario Institucional, así como sus similares 133, 173 y 175 del informe de la coalición “Compromiso por México”, ya que existe duplicidad de la misma irregularidad en la integración de la motivación que determina las omisiones cometidas, lo cual incrementa el monto involucrado, parámetro que es estimado como base para la imposición de la sanción.

A su parecer, la sanción impuesta carece de certeza, congruencia y legalidad, ya que el monto involucrado que fue tomado en cuenta por la autoridad no es el adecuado, derivado de la referida duplicidad.

Apunta que existe una misma irregularidad observada por la autoridad que se duplica, ya sea en la misma motivación, o bien en una diversa pero que se trata de la misma irregularidad y norma vulnerada.

De igual manera, considera que existen supuestos en los cuales en el cuerpo del dictamen se determina que fue subsanada la irregularidad; sin embargo, cuando se establecen las conclusiones que serán objeto de sanción y motivación para efectos de la realización de la resolución, se estima que existió alguna violación a la normativa aplicable por falta de documentación soporte, que si bien es cierto fue solicitada a través de un oficio, la misma autoridad estimó que fue solventada en el cuerpo del dictamen.

De manera concreta, estima que en virtud de la duplicidad en las conductas que le fueron imputadas, la resolución carece de certeza y congruencia interna, pues los montos involucrados no son los que realmente reflejan las irregularidades que no fueron solventadas, pues en algunos casos se duplica la irregularidad y, en otros, la misma no debía formar parte de la resolución porque la irregularidad fue debidamente subsanada.

En tal orden de ideas, estima que las sanciones impuestas en las cuales se involucran las conclusiones sancionatorias que señala, parten de premisas falsas, sobre todo si se estima que el único elemento para imponer la sanción es el monto involucrado, el cual tiene vicios de origen, tales como la duplicidad de registros de la observación, así como la determinación de irregularidades cuando las mismas dentro del dictamen fueron debidamente solventadas.

Por todo lo expuesto, solicita se determine la eliminación de los saldos que se encuentran duplicados, así como las observaciones que dentro del dictamen

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

se estiman como debidamente solventadas, y que por un error de la responsable fueron llevados a conclusiones sancionatorias y, en consecuencia, tomadas en cuenta en la resolución emitida para imponerle una sanción.

De lo que precede, es posible advertir que la inconformidad total que vierte el partido inconforme, estriba en evidenciar que en la conclusión 18, del dictamen de informes de gastos de campaña del Partido Revolucionario Institucional, así como en las diversas 133, 173 y 175, del informe de gastos de la coalición “Compromiso por México son ilegales, ya que se sustentan en observaciones duplicadas.

Cabe hacer notar que las conclusiones en comento, se trataron de faltas formales, consistentes en:

DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD	ACCIÓN U OMISIÓN
18. El partido omitió presentar de 9 entidades federativas, 43 informes pormenorizados, así como las relaciones de detalle de espectaculares colocados en la vía pública, por un monto de \$2',888,211.03	Omisión
133. La otrora coalición omitió presentar los contratos de prestación de servicios de 85 facturas, anexos a sus respectivas pólizas por \$2,175,068.18	Omisión
173. Se observaron 35 copias de cheques que no presentan la totalidad de los datos por \$747,882.10	Omisión
175. La otrora coalición presentó 25 copias de cheques que carecen de datos consistentes en fecha, nombre del beneficiario y en algunos casos firma por \$409,482.70	Omisión

*Ahora bien, resulta **infundada** la alegación del partido inconforme, respecto a que existe duplicidad en observaciones que forman parte de la conclusión 18 del informe del Partido Revolucionario Institucional, las cuales según refiere se contienen en el Anexo 60.*

Esto, ya que dicho documento no formó parte del dictamen del referido instituto político, pues pertenece al informe consolidado de la Coalición “Compromiso por México”.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Así las cosas, los razonamientos que se contienen en la referida conclusión 18, respecto a que omitió anexar a sus respectivas pólizas 43 informes, así como las relaciones de cada uno de los espectaculares colocados en la vía pública, se apoyan en el Anexo 5 del dictamen consolidado del Partido Revolucionario Institucional, en específico, en el apartado denominado “Relación de Proveedores que carecen de informe pormenorizado y hoja membretada de espectaculares colocados en la vía pública- Senadores”.

De esa suerte, ahí consta pormenorizadamente la omisión detectada por la Unidad de Fiscalización, respecto a la información relacionada con 43 espectaculares, más no en el Anexo 60.

Con apoyo en lo vertido, no es posible constatar la verificación a que alude el inconforme, dada la falta de relación entre la conclusión 18 y el Anexo 60.

*Por otro lado, resulta sustancialmente **fundado** el disenso relacionado con que existe duplicidad en las irregularidades que se tuvieron por detectadas en las conclusiones 133, 173 y 175, de la resolución controvertida.*

Esto, ya que como se demostrará en líneas subsecuentes, la responsable de forma incorrecta contabilizó las mismas inconsistencias en dos ocasiones, ocasionando por tanto, que se computaran irregularidades por duplicado, como se demostrará a continuación:

*Por lo que hace a la **conclusión 133**, la responsable de la revisión de la cuenta “Gastos en Espectaculares Colocados en la Vía Pública”, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, observó el registro contable de pólizas que presentaron como soporte documental facturas de proveedores; sin embargo, no se localizaron los contratos de prestación de servicios correspondientes.*

Una vez revisada la documentación que fue desahogada por la otrora coalición “Compromiso por México”, se determinó que no presentó la documentación solicitada; por tal razón, la observación quedó no subsanada por un importe de \$2´175,068.18

[Cuadro]

En consecuencia, al no presentar los contratos de prestación de servicios de diversas facturas anexas a sus respectivas pólizas, se concluyó que la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 198 del Reglamento de Fiscalización.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Ahora bien, del análisis del Anexo 60 del dictamen consolidado de la otrora coalición “Compromiso por México”, se tiene que se asentó en dos ocasiones un mismo registro, relacionado con el Distrito 5, del Distrito Federal, por un monto de \$183,354.00.

[Cuadro]

La situación acaecida, impacta significativamente en la conclusión a la que finalmente se arribó, dado que al momento se individualizar la sanción, se tuvo por no justificadas un número inexacto de facturas por un monto de \$2,175,068.18, cuando lo correcto era tener por no demostrado un equivalente a \$1'991,714.18, cantidad que se obtiene luego de descontar la factura duplicada.

De la misma suerte, existe duplicidad en un gasto que se tuvo por no reportado, ya que se reiteran las mismas consideraciones, en las conclusiones 173 y 175.

*En efecto, en la **conclusión 173**, la cual se dividió en dos apartados, de la revisión a la cuenta “Gastos de Propaganda”, varias subcuentas, se observaron pólizas que presentaron como soporte documental facturas por concepto de propaganda utilitaria y copias de los cheques nominativos; sin embargo, estos carecían de la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”.*

[Cuadro]

De la verificación a la documentación presentada, se determinó que por lo que se refería a las pólizas en el cuadro que antecede, aun cuando la otrora coalición presentó la copia del cheque ésta no presenta la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”; razón por la cual la observación no quedó subsanada por \$338,399.40.

En consecuencia, toda vez que emitió 9 cheques que carecen de la leyenda precisada, se determinó que la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 153 del Reglamento de Fiscalización.

Dentro de esta misma conclusión, de la revisión de la cuenta “Gastos de Propaganda”, varias subcuentas, se observaron pólizas que amparaban facturas por concepto de propaganda utilitaria y copia de cheques; sin embargo, del análisis de las copias de los cheques presentados, y luego de desahogados diversos requerimientos que se hicieron a la otrora coalición, se consideró la observación como no subsanada, por un monto de \$409,482.70.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En consecuencia, al presentar 25 copias de cheques que carecían de datos consistentes en fecha, nombre del beneficiario y en algunos casos firma, se concluyó que la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso k) Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales.

[Cuadro]

*Respecto a la **conclusión 175**, de la revisión a la cuenta “Gastos de Propaganda”, varias subcuentas, se observaron pólizas que presentaron como parte de su soporte documental facturas por concepto de propaganda utilitaria y copia de cheques; sin que las copias de los cheques que fueron presentadas, hayan cumplido con la totalidad de los datos requeridos por la normativa.*

En esa línea, dado que se presentaron 25 copias de cheques que carecían de datos (Anexo 74 del dictamen), la observación se tuvo por no subsanada, por \$409,482.70.

Como se puede apreciar, la segunda parte de la conclusión 173 se duplica con la conclusión 175, pues en ambos casos, se considera que la otrora coalición, presentó 25 cheques que no cumplieron con lo previsto con la legislación fiscal aplicable, por un monto de \$409,482.70, los cuales se precisan en el Anexo 74, del dictamen consolidado.

La situación evidenciada, impone una violación al principio de legalidad, ya que una misma conducta se tuvo por acreditada en dos ocasiones, impactando en la individualización la sanción.

Esto es así, puesto que por lo que hace a la conclusión 173, se estimó que no se presentaron 34 copias de cheques (9/25) que no presentaron la totalidad de los datos exigidos por un monto de \$747,882.10, que divididos importan \$409,482.70 y \$338,399.40, respectivamente, mientras que por lo que hace a la conclusión 175, se razonó que no se presentaron 25 copias de cheques que carecen de datos consistentes en fecha, nombre del beneficiario y en algunos casos firma, por un importe de \$409,482.70

*En atención a lo señalado en el presente apartado, lo conducente es **revocar** la resolución controvertida, respecto a las conclusiones 133, 173 y 175, del informe de la coalición “Compromiso por México”, a fin de la autoridad responsable realice un nuevo análisis de dichos apartados, sin contabilizar la documentación que ha quedado evidenciada como duplicada, para que luego, reinvidualice la sanción y emita la determinación que en derecho proceda.*

Efectos de la sentencia.

Agravio 1

- *Se ordena tomar en cuenta los gastos accesorios generados con motivo de la contratación de las tarjetas Monex, como gastos de campaña en términos de lo expuesto en el considerando DÉCIMO CUARTO del recurso de apelación SUP-RAP-5/2013 y sus acumulados.*

Agravio 3

- *Se revocan las conclusiones 77 y 78, para el efecto de que se hagan las precisiones de los documentos y muestras, respectivamente, que se omitieron presentar.*
- *Se **revocan** las conclusiones 80, 82 y 88, para el efecto de que se tomen en consideración los documentos que fueron presentados de manera oportuna.*
- *Se **revocan**, en la parte conducente, las conclusiones marcadas con los números 29, 72, 76, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 143, 151, 154 y 190, para el efecto de que la autoridad cuantifique de nueva cuenta el monto total que corresponda, descontando las cantidades que en cada caso se hayan determinado.*
- *En su oportunidad, se fije una nueva sanción por la comisión de faltas formales (omisión).*

Agravio 6

- *Se revocan las multas impuestas en las conclusiones 23, 92, 121, y 159, dado que indebidamente se consideraron como faltas sustanciales, por lo que deberán ser sancionadas dentro del bloque de faltas formales.*
- *Se ordena reindividualizar las multas aplicables a las conclusiones 61, 100, 158, 199 y 201 porque indebidamente se tomó como agravante la “pluralidad de conductas” ,*
- *Se ordena reindividualizar la sanción impuesta por la conclusión 32, a fin de no considerar los promocionales RV01093-12 y RV00473-12.*
- *Se ordena reindividualizar la sanción impuesta al grupo de las faltas formales, tomando en cuenta que ese grupo pasó de 137 a 141 faltas*

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

formales; que debe exponer objetivamente cómo influye cada elemento en la determinación de la sanción a imponer, debiendo ser la nueva reindividualización congruente con la sanción que se impuso al Partido Revolucionario Institucional en el considerando 9.2 de la resolución impugnada.

Agravio 7

- *Se revocan las consideraciones que integran la conclusión 45, a fin de que la autoridad responsable, en el ámbito de sus atribuciones:*
 - *Valore pormenorizadamente la documentación que mediante oficio CAPC/033/13, la otrora coalición presentó al Director General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a fin de aclarar el contenido del oficio UF-DA/4666/13 de quince de mayo de dos mil trece, y*
 - *Funde y motive su decisión respecto a la cuantificación del gasto presumiblemente no reportado, respecto a los eventos 10, 11, 12, 23, 33, 43, 44 y 47 que desplegó la coalición “Compromiso por México” .*

Agravio 8

- *Se revocan las conclusiones 133, 173 y 175, a fin de la autoridad responsable realice un nuevo análisis de dichos apartados, sin que contabilice la documentación que ha quedado evidenciada como duplicada, para que luego, reinvidualice la sanción y emita la determinación que en derecho proceda.
(...)”*

SUP-RAP-124/2013

“(...)”

III. Tope de gastos de campaña y prorrateo a candidatos no coaligados

Planteamientos de los apelantes

Los apelantes alegan violación a los principios de legalidad y de equidad, porque a su criterio la autoridad responsable:

(...)”

4. Con lo señalado se viola el artículo 98, párrafo 2, del Código, que prevé que las coaliciones serán consideradas como un solo partido para efectos de topes de gastos de campaña, por lo que fue ilegal que en los gastos de la

coalición se incluyeran candidaturas que no fueron postuladas por ella, es decir, candidaturas que no estaban incluidas en el convenio de coalición.

Agregan que, al respecto, el artículo 125, párrafo 1, del Reglamento señala que en el caso de coaliciones parciales se deberán separar los gastos en beneficio de los partidos y en beneficio de la coalición y que queda prohibida la facturación conjunta de bienes y servicios a nombre de un partido coaligado, cuyo beneficio sea tanto para el partido como para la coalición.

(...)

Consideraciones de la Sala Superior

(...)

Finalmente, en lo atinente a lo sintetizado en el punto 4 que antecede, respecto del agravio tercero, esta Sala Superior considera que el agravio es parcialmente fundado.

La parte apelante alega que la autoridad electoral violó el artículo 98, párrafo 2, del Código, que prevé que las coaliciones serán consideradas como un solo partido para efectos de topes de gastos de campaña, por lo que es ilegal que en los gastos de la coalición se incluyan candidaturas que no fueron postuladas por ella ni están incluidas en el convenio de coalición.

Agrega que, al respecto, el artículo 125, párrafo 1, del Reglamento señala que en el caso de coaliciones parciales se deberán separar los gastos en beneficio de los partidos y en beneficio de la coalición y que queda prohibida la facturación conjunta de bienes y servicios a nombre de un partido coaligado cuyo beneficio sea tanto para el partido como para la coalición.

*En párrafos precedentes se transcribieron algunas partes del punto 9.3 de la resolución impugnada, atinente al estudio de las conclusiones sancionatorias del dictamen consolidado en relación con las irregularidades encontradas en la revisión del informe de campaña correspondiente al proceso electoral federal 2011-2012 rendido por la **coalición Compromiso por México**.*

En el punto mencionado, se advierte que la autoridad responsable detectó inconsistencias entre lo reportado por la coalición Compromiso por México y las campañas realmente beneficiadas con alguna de la propaganda realizada para el cargo de Presidente de la República.

En las partes transcritas se puede observar que, contrariamente a lo aducido por la autoridad responsable en la página 39 del informe circunstanciado en el sentido de que “no se realizó prorratio con las candidaturas no integradas en

el Convenio de Coalición, sino únicamente con candidaturas que fueron debidamente registradas por la coalición parcial Compromiso por México y que fueron beneficiadas”, en la resolución impugnada queda evidenciado que la autoridad responsable detectó las siguientes hipótesis:

a) Casos en los que una parte de la propaganda de la campaña para el cargo de Presidente de la República difundida por la coalición benefició a otras campañas para cargos de Diputado Federal o de Senador registrados por la propia coalición;

b) Casos en los que una parte de la propaganda de los partidos integrantes de la coalición Compromiso por México para cargos diversos al de Presidente de la República y distintos a los comprendidos en el convenio de coalición benefició a la campaña al cargo presidencial.

c) Casos en los que la propaganda de la campaña del candidato a la Presidencia a la República de la Coalición Compromiso por México beneficiaron a candidatos a diputados y senadores de la coalición, y a candidatos del PRI y del PVEM.

d) Casos en los que una parte de la propaganda de la coalición Compromiso por México o de los partidos que la integraron benefició a campañas de candidatos a cargos locales.

Como se ve, es posible que en las circunstancias señaladas, se estuviera ante la infracción a lo dispuesto en los artículos 98, párrafo 2, del Código y 125, párrafo 1, del Reglamento, cuyo contenido ha sido referido en párrafos precedentes.

En la resolución impugnada, la autoridad responsable no hizo un análisis de dicha posibilidad, a pesar de que detectó las hipótesis señaladas. En consecuencia, la resolución impugnada es incompleta en el aspecto mencionado, puesto que no contiene pronunciamiento alguno al respecto. Es decir, no señala si al haber detectado propaganda en la etapa de campaña del proceso electoral federal 2011-2012 las irregularidades destacadas en la transcripción que antecede, ello se tradujo en infracción a los artículos citados.

La consecuencia de haber considerado parcialmente fundado el agravio en examen se precisará en un apartado especial de la presente ejecutoria, el cual contendrá el efecto derivado de todos los agravios que resulten fundados.

(...)

2. Subvaluación de los gastos no reportados.

Planteamientos de los apelantes

Sobre este tema los recurrentes expresan lo siguiente:

(...)

c) Se aduce que la responsable al cuantificar los gastos no reportados respecto de las bardas cuyo costo fue de mil pesos, al promediarlo con propaganda de menor costo y calidad, el costo de dichas bardas se redujo a seiscientos pesos a favor de la coalición Compromiso por México.

Para los recurrentes, con esta metodología se estimula que la omisión de reportar gastos de campaña, dado que se obtiene un beneficio indebido de ello.

Según los recurrentes, es ilegal el cálculo general de promedios realizado por la responsable, dado que dio un trato igual a partidos políticos y coaliciones, sin tomar en cuenta su grado de incidencia.

Consideraciones de esta Sala Superior.

*Los agravios precisados en incisos a), b), d) y e) son **infundados**, ya que carecen de aptitud para evidenciar la pretendida ilegalidad de la parte impugnada.*

En principio es de apuntarse que, en efecto, el Dictamen Consolidado contiene un apartado que se denomina ‘Procedimientos y formas de revisión’.

Dicho apartado a su vez contiene lo que se titula ‘Metodología utilizada para cuantificar gastos no reportados’, en el cual se establecen, precisamente, el conjunto de los modos de obrar en los casos de que serían cuantificados los gastos que no fueran reportados en los informes correspondientes.

Los supuestos determinados fueron diez, de acuerdo con el tipo de propaganda, a saber:

1. Visitas de Verificación a los Eventos de Campaña del entonces Candidata y/o Candidato a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos; 2. Bardas; 3. Carteleras y panorámicos (espectaculares); 4. Vallas; 5. Marquesinas; 6. Mantas; 7. Spots; 8. Propaganda visitas casas de campaña (se refiere a la publicidad identificada durante las visitas de verificación a casas de campaña); 9. Autotransporte; 10. Medios impresos.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En cada uno de esos supuestos se estableció un modo distinto de proceder para la obtención del importe de los gastos no reportados, lo cual resulta explicable dada la naturaleza de tales casos.

Esto genera una situación en la cual, para poner en evidencia que los costos fueron subvaluados, era necesario que se formularan planteamientos de manera específica respecto a los métodos concretos que generaron esa supuesta situación.

Sin embargo, con excepción de lo relacionado con el método concerniente a bardas, esa impugnación específica no se realiza respecto de los demás supuestos que conforman la metodología utilizada para la cuantificación de los gastos no reportados.

(...)

*En el agravio resumido en el inciso c) se hace valer que **los elementos de la metodología fueron distorsionados, al promediarse de manera conjunta gastos no reportados, pese a que existe propaganda diferente entre sí, como es el caso de las bardas,** cuyo costo se redujo en beneficio de la coalición Compromiso por México.*

*El agravio es sustancialmente **fundado**.*

En este motivo de inconformidad se controvierte de manera clara y precisa el método para la cuantificación del costo de bardas no reportadas.

El procedimiento está conformado con 2 pasos para la cuantificación, a saber:

1. Se determinó el promedio por partido o coalición, de acuerdo con lo reportado en sus respectivos informes pormenorizados; la fórmula aplicada es la siguiente:

Costo por Barda	Costo total de las bardas
	Número total de bardas

2. El segundo paso consistió en que los promedios por partido o coalición, a su vez, fueron promediados para obtener el factor que sería considerado como valor promedio.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Por consiguiente, de acuerdo con los primeros promedios el resultado de las operaciones fue el siguiente:

PARTIDO Y/O COALICIÓN	COSTO PROMEDIO
<i>Compromiso por México</i>	<i>\$1,080.00</i>
<i>Movimiento Progresista</i>	<i>403.00</i>
<i>Partido Acción Nacional</i>	<i>440.00</i>
<i>Nueva Alianza</i>	<i>500.00</i>
Suma de Costos	\$2,423.00
<i>Número de Partido/Coalición</i>	<i>4</i>
Costo determinado por Borda	\$605.75

En el cuadro que antecede se observa el resultado que la parte apelante tilda como ilegal; es decir, que la coalición Compromiso por México gastó por concepto de bardas mil ochenta pesos (\$ 1,080.00) en promedio, pero para el cálculo del costo de bardas no reportadas se fincó el importe de seiscientos cinco pesos con setenta y cinco centavos (\$ 605.75) para todas las fuerzas políticas contendientes.

En el concepto de agravio se afirma que lo anterior es indebido, ya que deriva de la tergiversación de la metodología al promediar propaganda disímbola, esto es, al tomar solamente en consideración elementos cuantitativos y no así los cualitativos.

En esencia asiste razón a la parte apelante, pues en la determinación del costo de las bardas se infringió el principio de objetividad que deben observar los actos y resoluciones electorales, como se verá enseguida.

Preliminarmente es de apuntarse, que no pasa inadvertido a esta Sala Superior que las cuestiones de fiscalización de los recursos públicos destinados a la propaganda electoral de los partidos políticos y coaliciones, no solamente involucran temas de naturaleza jurídica, sino también en materia financiera y de contabilidad, las cuales constituyen disciplinas distintas a la especialización de este órgano jurisdiccional; empero, esto no es obstáculo para atender y resolver la cuestión efectivamente planteada en materia electoral, aun cuando esté vinculada con aquellas disciplinas.

Así, del estudio de la temática, así como de lo dispuesto en el artículo 25, párrafo 1, inciso a), del Reglamento, se obtuvo información de que los principios generalmente aceptados para guiar las acciones contables están contenidos en las denominadas Normas de Información Financiera¹¹ (NIF) de

¹¹ Se consultó el texto Normas de Información Financiera 2015 coeditado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Consejo Mexicano de Información Financiera y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

*las cuales la identificada como A-6 contiene las normas básicas de **valuación**.*

Según el capítulo “Fundamentos”, la valuación consiste en la cuantificación monetaria de los efectos de determinadas operaciones financieras, que se reconocen como activos, pasivos y capital contable o patrimonio contable.

En el propio texto se afirma, que la norma de información financiera en comento se limita a describir y uniformar los principales conceptos de valuación y no pretende abarcar todas las posibles técnicas y métodos.

Entre los conceptos enunciados en dicha norma, a juicio de este órgano jurisdiccional destaca el denominado valor razonable, del cual, para mayor claridad se transcribe lo siguiente:

‘Valor razonable

Definición: representa el monto de efectivo o equivalentes que participantes en el mercado estarían dispuestos a intercambiar para la compra o venta de un activo, o para asumir o liquidar un pasivo, en una operación entre partes interesadas, dispuestas e informadas, en un mercado de libre competencia.

El valor razonable, por consiguiente, es el valor de intercambio de una operación o una estimación de éste.

El valor razonable, como valor atribuible a activos, pasivos o activos netos, según corresponda, representa un valor ideal para las cuantificaciones contables en términos monetarios, el cual puede determinarse por orden de preferencia, a partir de:

- a) cotizaciones observables en los mercados,*
- b) valores de mercado de activos, pasivos o activos netos similares en cuanto a sus rendimientos, riesgos y beneficios, y*
- c) técnicas de valuación (enfoques o modelos) reconocidos en el ámbito financiero, tales como valor presente esperado, valor presente estimado, modelos de precios de opción, modelos de valuación de acciones, modelos de valuación de acciones, opciones o derivados, entre otros.’*

Sobre el mismo tema del valor razonable, destaca uno de los lineamientos contenidos en la norma citada que dice:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

‘El valor de mercado cotizado en mercados activos es la mejor evidencia del valor razonable y debe ser utilizado si éste se encuentra disponible, como base para su valuación.’

En concepto de este Tribunal, para la explicación del caso específico, los lineamientos que anteceden resultan de mejor comprensión para la cuantificación o valuación de los gastos no reportados, dada su recurrencia en los asuntos en materia de fiscalización que han sido sujetos a la revisión jurisdiccional.

La misma “Metodología utilizada para cuantificar gastos no reportados” da cuenta de ello, pues en ella se advierte que la cotización en el mercado así como la información financiera de las partes, han sido elementos empleados en los métodos según el tipo de propaganda para el cálculo y determinación respectivos.

En el caso de las bardas se observa, que no se seleccionó la cotización del valor en el mercado como la técnica para la cuantificación de los gastos no reportados, sino que se optó por la información financiera aportada por las fuerzas políticas contendientes.

Se hace mención de que no fue utilizada la técnica de cotización del valor en el mercado, porque como ha quedado sentado, en las normas invocadas se sugiere su empleo como técnica para evidenciar y determinar de mejor manera el valor razonable.

Se especifica que, en el caso concreto, el método seleccionado es uno distinto, ya que tiene como base el monto total por concepto de bardas y el número de éstas, que fueron reportados por los partidos políticos y coaliciones en sus respectivos informes pormenorizados.

De dicho reporte se obtuvo un promedio por partido político o coalición en lo individual.

Dichos promedios individuales constituyeron los factores para que, a su vez, se promediaran entre sí a fin de obtener un solo costo determinado por barda.

Al margen de la validez teórica de dicho técnica, lo cierto es que su resultado se encuentra distante de constituir el valor que razonablemente admita ser considerado como tal, para efectos de la determinación del monto base del gasto no reportado.

Cierto es que, por tratarse de propaganda no reportada, su costo se convierte en una incógnita a dilucidar para la cuantificación debida.

También lo es que su determinación debe realizarse con los mejores elementos objetivos que la autoridad administrativa fiscalizadora tenga a su alcance, pues por una parte, la finalidad perseguida es la de seleccionar el precio que se encuentre lo más ajustado a la realidad, y por otra, con ello se procura evitar que se emitan determinaciones casuísticas o que se incurra en apreciaciones subjetivas, inconsistentes o contradictorias; de lo contrario, la labor fiscalizadora sería de difícil realización y conclusión, si se estimara que el costo de las bardas debiera calcularse caso por caso y de acuerdo con las características particulares de cada una de ellas.

Por ello, resulta explicable que en la normas de información financiera se considere, como una de las mejores técnicas de valuación, la de obtener cotizaciones del valor de mercado, ya que ésta es una manera objetiva e imparcial de percibir e interpretar los hechos de forma más aproximada a la realidad.

A diferencia de la cotización del valor de mercado, en los promedios por partidos inciden otro tipo de factores, tales como la libertad del instituto político de destinar sus prerrogativas de recursos públicos de la manera en que considere que mejor conviene a sus intereses legítimos.

Así, por ejemplo, el instituto político decide sobre la diversidad de propaganda que va a contratar; a qué tipo de propaganda le dará mayor importancia o peso específico para el destino de los recursos; convendrá con los proveedores sobre el precio, la calidad, características, plazos de permanencia de la propaganda, etcétera.

Las causas que anteceden pueden constituir la explicación del por qué, en el caso concreto, existe la diferencia de más del 100% entre los promedios de la coalición Compromiso por México y las demás fuerzas políticas que participaron en la elección federal, ya que éstas últimas promediaron \$403.00, \$440.00 y \$500.00 pesos, y aquella coalición tuvo el promedio de \$1,080.00.

De esa manera y dadas estas características, resulta evidente que el procedimiento consistente en que dichos promedios individuales, a su vez, se promedien para obtener el costo determinado por barda, resulta contrario al principio de objetividad.

Esto es así, porque como se ha explicado, tales promedios individuales derivan del ejercicio que de manera libre y voluntaria cada fuerza política hizo de sus prerrogativas para aplicarlas al gasto de la propaganda electoral; de tal manera que lo que realmente reflejan es, precisamente, el pago promediado que en lo individual hicieron por concepto de propaganda en bardas; mas no

constituyen un costo estimado en lo general, cuya finalidad sea la de expresar la realidad aproximada en los precios de las bardas y que, por ende, sean los idóneos para ser promediados entre todos los institutos políticos; lo cual queda patentizado con el hecho de que aquellos promedios individuales presentan diferencias de poco más del doble en los costos cubiertos por los institutos políticos para el pago de propaganda electoral en bardas.

*En esas condiciones, **lo conducente es considerar que el costo por barda se debe determinar, únicamente, de acuerdo con el primer paso del método empleado, es decir, el respectivo promedio por cada fuerza política-electoral.***

Esto es así, pues se reitera que dichas cifras tienen como base los propios reportes pormenorizados, es decir, tienen la calidad de gasto ejercido, que muestra indiciariamente una tendencia sobre los montos aplicados por cada una de las fuerza políticas a esa clase de propaganda electoral.

*En este sentido, **el promedio individual se considera con mayores rasgos de objetividad que el promedio general, porque existe un mayor grado de probabilidad que los costos permanecen más cercanos a las circunstancias reales en las que cada partido o coalición se ubicó con el ejercicio del gasto en la propaganda específica.***

Por el contrario, el promedio general se aparta de la objetividad, al identificar y sumar el producto de actos ejecutados de manera diferente por parte de cada uno de los partidos políticos o coaliciones, para luego dividir en partes iguales el monto derivado de aquellos actos de pago distintos entre sí; operación que en términos de cuantificación podría resultar beneficiosa para unas partes y perjudicial para otras.

De ahí que, dadas las circunstancias particulares del caso, lo conducente sea que la determinación del costo por barda sea uno por cada partido político o coalición, de acuerdo con lo reportado en su informe pormenorizado.

Es importante destacar, que este modo diferenciado de asignar el costo a un gasto no reportado no es inédito en la metodología que fue implementada, pues por ejemplo, así fue establecido respecto a los eventos de campaña, en donde también se consideró una cifra distinta para cada una de las coaliciones que participaron en el proceso electivo, la cual se obtuvo de los montos y eventos que respectivamente reportaron.

Además, los datos necesarios ya obran en el procedimiento, por lo que constituyen los elementos al alcance que mayormente pudieran revestir las características de objetividad requeridas puesto que tienen como base el

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

gasto que se presume que realmente fue ejercido, ya que así fue informado por cada uno de los institutos políticos involucrados.

También es importante apuntar, que en este estudio se descarta la reposición del procedimiento para que la autoridad responsable proceda al allegamiento de un muestreo de cotizaciones del valor de las bardas en el mercado, ya que no se tiene certeza de la viabilidad de la obtención de cotizaciones que se retrotraigan a la época en que se produjeron los hechos (año dos mil doce) con la consecuente posibilidad de afectar sustancialmente los costos ya calculados y determinados en la resolución reclamada, en perjuicio de los partidos políticos participantes, entre ellos los apelantes.

En consecuencia, en lo concerniente a gastos no reportados por concepto de bardas, la autoridad deberá realizar la determinación del costo de bardas de manera diferenciada, con base exclusivamente en el promedio de gasto realizado por cada fuerza política en lo individual, que de acuerdo con la metodología empleada es como sigue:

PARTIDO/COALICIÓN	COSTO DETERMINADO POR BARDA
Compromiso por México	\$1,080.00
Movimiento Progresista	403.00
Partido Acción Nacional	440.00
Nueva Alianza	500.00

El resultado de esta nueva determinación de costos de bardas deberá impactar en el nuevo cálculo que la autoridad haga para determinar las cifras que sirvan de base en relación con el rebase de topes de gastos de campaña.

También se deberá reflejar el nuevo costo en la individualización de las sanciones por rebase de tope de gastos de campaña en los casos en que ese problema subsista.

5. Conclusión 42-2, monitoreo en el Estado de Tabasco

Planteamiento de los apelantes

Los recurrentes aducen que en el considerando 9.4, en relación al resolutivo cuarto, inciso g), no se le otorgó garantía de audiencia respecto de la conclusión 42-2 y le impuso multa.

Dicha conclusión está relacionada con un monitoreo que hizo el Instituto Electoral del Estado de Tabasco en el ámbito local, en el cual se advirtió la

existencia de propaganda consistente en mantas y una marquesina que no fueron reportados en la contabilidad local ni federal, que benefició al candidato a la presidencia de la República de la coalición Movimiento Progresista y a candidatos locales.

La parte recurrente aduce, que no se ordenó darle vista con el monitoreo hecho por la autoridad electoral local, para que pudiera ejercer una adecuada defensa y, no obstante, le impusieron multa.

Los recurrentes agregan, que la resolución impugnada es incongruente, porque en un caso similar, relacionado con la conclusión 119-1, del propio dictamen consolidado en el que se sustenta la resolución impugnada, la decisión fue distinta, puesto que, en relación con el oficio número IEEM/CG/08/2013 mediante el cual el Instituto Electoral del Estado de México informó haber determinado la existencia de un beneficio a la campaña federal por un monto de \$5'124,242.38, en vez de imponer multa, ordenó iniciar un procedimiento oficioso para determinar y en su caso cuantificar el gasto de campaña no reportado, en el que se diera a la coalición la garantía de audiencia que corresponda.

Consideraciones de esta Sala Superior

*Esta Sala Superior considera que el agravio es **fundado**.*

En relación con la conclusión 42-2, la autoridad responsable sostuvo, en la parte conducente de la resolución impugnada:

Conclusión 42-2

'42-2. El Instituto Electoral de Tabasco proporcionó el monitoreo realizado en el ámbito local que benefició al locales, de los cuales 6 mantas y una marquesina no fueron reportados en la contabilidad local ni federal; por lo cual, la coalición no reportó el beneficio obtenido y su consecuente parte proporcional que le corresponde a las campaña (sic) federal de Presidente de la República por \$703.53'.

...

Conclusión 42-2

Para dar seguimiento a lo identificado durante la revisión al Informe de campaña del entonces candidato a Presidente, la Unidad de Fiscalización emitió un oficio al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, para que confirmara si fueron reportados en la campaña local del estado y si aplicó el beneficio a las campañas federales. A continuación se indica el oficio en comentario:

...

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Ahora bien, en el proceso de la revisión a los Informes de Campaña de los entonces candidatos a Senadores de la República y Diputados Federales, el Órgano Electoral Local dio contestación al oficio referido, manifestando lo siguiente:

...

Por lo que respecta a las evidencias que no fueron reportadas, al omitir presentar el registro del gasto que le correspondía a la campaña federal de Presidente de la República de 6 mantas y 1 marquesina que fueron monitoreados por el Instituto Electoral Local, la coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un monto de \$703.53. Anexo 5 del Dictamen Consolidado, columna "REF" de los registros identificados con

(b), de acuerdo a lo siguiente:

...

Es conveniente señalar que derivado de la Metodología para la determinación del costo aplicable a los anuncios espectaculares colocados en la vía pública, señalada en el punto 3.4 'Metodología utilizada para cuantificar gastos no reportados' del Dictamen Consolidado, con fundamento en lo establecido en el artículo 340 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad de Fiscalización determinó el costo unitario de los anuncios no reportados por la coalición, mismo que fue aplicado a cada uno de los anuncios en espectaculares no subsanados señalados en el anexo citado en el cuadro anterior. Adicionalmente, el gasto no reportado se acumula para efectos del rebase de tope de gastos de campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República.

Conviene aclarar que lo citado con anterioridad no se hizo del conocimiento de la coalición, en virtud de que dicha observación fue el resultado de la valoración de la respuesta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, la cual fue recibida una vez concluido el periodo en que la Unidad de Fiscalización se encontraba facultada para la notificación de oficios en el plazo señalado en el artículo 346 del Reglamento de Fiscalización.

[...]

*Mientras que, en relación con la **conclusión 119-1**, la autoridad responsable sostuvo, en la parte conducente de la resolución impugnada, lo siguiente:*

[...]

V. Conclusión 119-1

'119-1. El Instituto Electoral del Estado de México, hizo del conocimiento de la autoridad el Punto Octavo del acuerdo número IEEM/CG/08/2013,

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

por el que se determinó un beneficio a la campaña federal por un importe de \$5,124,242.38.

Cabe señalar, que lo anterior no se hizo del conocimiento de la coalición en virtud de que, derivó del análisis a la información y documentación proporcionada por el Instituto Electoral del Estado de México en fecha en la que había concluido el plazo para la notificación de errores y omisiones de la revisión."

...

Derivado de lo anterior, la Unidad de Fiscalización procedió a verificar que los comprobantes de gastos reportados en el Dictamen del Instituto Electoral del Estado de México fueran localizados en la contabilidad de la campaña presidencial; sin embargo, no se detectaron ingresos en la campaña presidencial por Transferencias de Recursos no Federales', evidenciando que al tratarse de recursos locales, la coalición no reportó monto alguno por la parte que le beneficia a la campaña presidencial, aunado a que no se localizó en la documentación presentada, evidencia comprobatoria de los gastos realizados con recursos locales. A continuación se indican los gastos en comento:

...

Cabe señalar, que lo anterior no se hizo del conocimiento de la coalición en virtud de que, derivó del análisis a la información y documentación proporcionada por el Instituto Electoral del Estado de México en fecha en la que había concluido el plazo para la notificación de errores y omisiones de la revisión.

En consecuencia, esta autoridad considera que debe iniciarse un procedimiento oficioso, a efecto de que se determine y, en su caso cuantifique el gasto de campaña no reportado, con fundamento en los artículos 77, numeral 6; 81, numeral 1, incisos c) y o); 118, numeral 1, incisos h), w) y z); y 361 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un monto de \$5,124,242.38 (\$5,109,498.78 + \$14,743.60).

[...]

Como se ve, las dos conclusiones, la 42-2 y la 119-1 se refieren a la detección, a partir de los informes rendidos por institutos electorales locales (El de Tabasco y el del Estado de México) de gastos en el ámbito local que beneficiaron a la campaña del candidato al cargo de Presidente de la República postulado por la Coalición Movimiento Progresista y que no fueron reportados en el informe respectivo.

No obstante, la autoridad responsable dio un trato distinto a situaciones similares, pues mientras que respecto de la conclusión 42-2 concluyó con la

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

imposición de multa económica a los partidos políticos integrantes de la coalición Movimiento Progresista, en lo atinente a la conclusión 119-1 no impuso sanción alguna, sino que determinó que se debería iniciar un procedimiento oficioso, a efecto de que se determinara y, en su caso cuantificara el gasto de campaña no reportado.

Tal manera de proceder de la responsable se traduce en incongruencia de la resolución, al dar un tratamiento y consecuencias jurídicas distintas a situaciones similares.

La consecuencia de haber considerado fundado el agravio en examen se precisará en el apartado respectivo.

7. Efectos de la sentencia.

De acuerdo con los agravios que se han declarado fundados, lo conducente es, con fundamento en el artículo 47, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ordenar la modificación de la resolución CG190/2013 para que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, autoridad sustituta del Instituto Federal Electoral, proceda conforme a los siguientes efectos que se precisan:

a) En lo concerniente al subtema “III. Tope de gastos de campaña y prorratio a candidatos no coaligados”, se ha considerado fundado el punto 4 de la síntesis de agravios relacionados, en el que los apelantes alegaron violación a lo dispuesto en los artículos 98, párrafo 2, del Código y 125, párrafo 1, del Reglamento.

En consecuencia, la autoridad responsable deberá analizar si la conducta consistente en aplicar recursos económicos de las campañas de candidatos propuestos por la coalición Compromiso por México, a campañas de candidatos que no formaron parte del convenio de coalición, vulneró lo dispuesto en los artículos 98, párrafo 2 y 125, párrafo 1 citados y, a partir de la conclusión a la que arribe, actúe en consecuencia.

b) En lo concerniente a la conclusión 42-2 (Monitoreo en el Estado de Tabasco) del dictamen consolidado, en relación con la conclusión 119-1 respecto de la coalición Movimiento Progresista, el agravio hecho valer ha sido declarado fundado, en el sentido de que la autoridad responsable dio un trato distinto a situaciones similares.

En consecuencia, se revoca la multa impuesta sobre la base de la conclusión 42-2 y se ordena a la autoridad responsable, que inicie un procedimiento oficioso, a efecto de determinar y, en su caso cuantificar el gasto de campaña

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

no reportado precisado en dicha conclusión, tal como lo hizo respecto de la conclusión 119-1.

c) En lo concerniente a gastos no reportados por concepto de bardas, la autoridad deberá realizar la determinación del costo de bardas de manera diferenciada, con base exclusivamente en el promedio de gasto realizado por cada fuerza política en lo individual, que de acuerdo con la 'Metodología utilizada para cuantificar gastos no reportados' es como sigue:

<i>PARTIDO/COALICIÓN</i>	<i>COSTO DETERMINADO POR BARDAS</i>
<i>Compromiso por México</i>	<i>\$1,080.00</i>
<i>Movimiento Progresista</i>	<i>403.00</i>
<i>Partido Acción Nacional</i>	<i>440.00</i>
<i>Nueva Alianza</i>	<i>500.00</i>

El resultado de esta nueva determinación de costos de bardas deberá impactar en el nuevo cálculo que la autoridad haga para determinar las cifras que sirvan de base en relación con el rebase de topes de gastos de campaña.

También se deberá reflejar el nuevo costo en la individualización de las sanciones por rebase de tope de gastos de campaña en los casos en que ese problema subsista.

8. Sección de ejecución.

Toda vez que constituye un hecho notorio, para esta Sala Superior, que el PRD, MC y PT participaron en la otrora Coalición Movimiento Progresista y que los referidos institutos políticos, así como el PAN, PRI y PVEM han promovido los recursos de apelación que a continuación se precisan

[Cuadro]

Teniendo presente además que en estos recursos se hicieron valer conceptos de agravio relativos a las diversas resoluciones emitidas por el Consejo General, con relación a la fiscalización de los gastos de campaña y de los informes de ingresos y egresos del ejercicio dos mil doce, de los partidos políticos nacionales, y que implican la determinación de criterios relativos a la interpretación de la normativa aplicable, así como de los procedimientos seguidos por la autoridad fiscalizadora, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación arriba a la convicción de que, a fin de precisar los efectos que finalmente deriven de las correspondientes ejecutorias, se debe revocar la individualización de la sanción y toda vez que

este es el último medio de impugnación que se resuelve sobre el tema, debe integrarse la sección de ejecución correspondiente, en la que se precisara la forma en que ha de proceder el Instituto Nacional Electoral.

Para tal efecto, se deben tomar en consideración todas las sentencias que incidan en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, para la revisión de informes anuales del ejercicio dos mil doce (2012), así como de gastos de campaña del procedimiento electoral dos mil once – dos mil doce (2011-2012).

[Énfasis añadido]

Recursos de apelación que impugnaron la Resolución CG242/2013

SUP-RAP-162/2013

3.2 Agravios relacionados con la conclusión 41.

El instituto político recurrente aduce que la resolución impugnada está indebidamente fundada y motivada, toda vez que se realizó una interpretación y aplicación incorrecta de la normativa aplicable, pues de manera genérica se sostuvo que la documentación aportada era insuficiente para justificar el objeto partidista del gasto efectuado con motivo, por una parte, de un servicio de desayuno, y por otra parte, del arrendamiento de diversos vehículos, este último contratado para el traslado de personas a un taller de capacitación organizado por el Organismo Nacional de Mujeres Priístas “OMPRI”.

3.2.1 Servicio de desayunos. En relación con la contratación del gasto indicado, cuyo monto ascendió a la cantidad de \$22, 968.00 (veintidós mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), el partido político apelante afirma que mediante la documentación aportada quedó plenamente acreditado el objeto partidista, puesto que no sólo se presentó una póliza por concepto de ‘Congresos’ como soporte documental a la factura expedida por Grupo Secanu, S.A. de C.V. (éste último proveedor del servicio contratado) y la copia del cheque correspondiente, sino que, además, en cumplimiento a diverso requerimiento, se entregó un memorándum y una fotografía con los que la irregularidad quedaba subsanada. Sin embargo, argumenta el partido recurrente, la responsable no explicó el por qué, en su opinión, la documentación en cuestión resultaba insuficiente, de ahí que advierta la omisión de realizar una valoración de las pruebas aportadas.

En este punto, añade el recurrente, que la responsable no tomó en consideración el hecho de que el servicio de desayuno se encontraba

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

relacionado con un evento celebrado por el Partido Revolucionario Institucional, cuyo gasto fue reportado dentro del informe anual de ingresos y gastos del partido, sin que al respecto se hubiere formulado ninguna observación.

*Esta Sala Superior estima que los agravios son **fundados**.*

En la resolución controvertida (conclusión 41) se advierte que en la cuenta ‘Servicios Generales’, existía una póliza por concepto de ‘Congresos’ que fue soportada con la factura de proveedores número 6832 de fecha diecinueve de marzo de dos mil doce y con la copia del cheque respectivo, gasto que fue atribuido al Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, con motivo de la contratación de un servicio de desayunos, cuyo monto fue de \$22,968.00 (veintidós mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), sin embargo, la responsable consideró que dicho instituto político no justificó el objeto partidista del gasto, por lo que, mediante oficio UF-DA/7091/13, la Unidad de Fiscalización solicitó, el diecinueve de agosto de dos mil trece, que subsanara dicha irregularidad.

A fin de dar respuesta a lo anterior, el veintiséis de agosto de dos mil trece, por medio del oficio SFA/527/2013, el partido político apelante remitió un memorándum signado por el entonces Secretario de Administración y Finanzas del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, así como una fotografía, en la que se puede observar adherida a una pared una manta o lona en la que se lee: programaparamexico@pridf.org.mx, lo que genera un indicio leve de la realización del acto partidista.

Por su parte el memorándum fue emitido el veintidós de febrero de dos mil doce, por el entonces Secretario de Administración y Finanzas del Partido Revolucionario Institucional del Distrito Federal, con el objeto de solicitar a la Tesorería del partido, la expedición del cheque a nombre de Grupo Secanu, S.A. de C.V., por la cantidad de \$22,968.00 (veintidós mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), por concepto del pago de la factura número 6832, asamblea distrito 23 federal. Dicho medio de convicción, concatenado con la fotografía antes descrita, la póliza contable emitida por concepto de ‘Congresos’, soportada por el partido político apelante con la factura de proveedores número 6832, de diecinueve de marzo de dos mil doce, así como la copia simple del cheque respectivo, son suficientes para identificar el objeto partidista del gasto efectuado por el Comité Directivo del Partido

Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, al realizar un servicio de desayuno para la celebración de una asamblea en el distrito 23 Federal durante la etapa de precampaña en el proceso electoral federal 2011-2012.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Por ende, la autoridad responsable actuó indebidamente al afirmar de manera categórica que no estaba justificado el gasto sin exponer fundamento o razonamiento alguno para sostener su conclusión, por lo tanto, ha lugar a revocar la resolución controvertida, en lo tocante al gasto por concepto 'Servicio de desayunos', en cual se advierten documentos que los vinculan con el objeto partidista por un importe de \$22,968.00 (veintidós mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

3.3.2 Incongruencia. *Relacionado con lo anterior, el apelante también alega que la resolución impugnada viola el principio de congruencia interna, ya que, por una parte, la responsable reconoció que se habían presentado facturas y contratos de prestación de servicios (pero que éstos no correspondían a los gastos reportados) y, por la otra, específicamente, en la parte referente a la imposición de la sanción, sostuvo que el partido había omitido presentar los contratos de prestación de servicios con su respectivo soporte documental, lo cual, según el impugnante, es incorrecto.*

*Los conceptos de agravio son **parcialmente fundados**.*

En primer orden, esta Sala Superior considera oportuno realizar una reseña de los oficios de observaciones y de respuesta emitidos en su momento por la Unidad de Fiscalización, así como por el partido político recurrente, que dieron origen a la conclusión 79 que ahora se analiza y, como segundo punto, se ejemplificará por medio de una tabla, la documentación que obra en el expediente de este recurso de apelación.

Lo anterior, a fin de dilucidar si el estudio realizado por la autoridad responsable fue conforme a Derecho al concluir que no se subsanaron las irregularidades en doce operaciones, o si por el contrario, asiste la razón al partido político recurrente y sí se encuentran subsanadas.

i) En la resolución controvertida, el Consejo General responsable estimó que el Partido Revolucionario Institucional reportó gastos de operación ordinaria de los Comités Directivos Estatales en las entidades federativas por un monto de \$234,282,332.39 (doscientos treinta y cuatro millones doscientos ochenta y dos mil trescientos treinta y dos pesos 39/100 M.N.), de los cuales, se verificaron \$114,321,766.24 (ciento catorce millones trescientos veintiún mil setecientos sesenta y seis pesos 24/100 M.N.).

ii) Revisadas las balanzas de comprobación de los treinta y dos Comités Directivos Estatales que fueron presentadas por el partido político apelante, la Unidad de Fiscalización identificó saldos en ingresos y gastos, así como la omisión de presentar las pólizas con su respectivo soporte documental, por lo

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

que mediante oficio UF-DA-6383/13 de veintiséis de junio de dos mil trece¹², se solicitó la documentación respectiva en cada caso.

iii) En respuesta a lo anterior, el titular de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, mediante oficio SFA/385/13 de diez de julio de dos mil trece, manifestó lo que a su derecho convino y remitió la documentación atinente, contestación que se consideró satisfactoria por la autoridad; sin embargo, observó inconsistencias en la verificación de varias subcuentas de la cuenta “Propaganda Utilitaria”.

iv) Por ende, en el oficio UF-DA-7091/2013 de diecinueve de agosto de dos mil trece⁹, la Unidad de Fiscalización, entre otros, concluyó que con motivo de la verificación de la cuenta ‘Propaganda Utilitaria’, en varias subcuentas, se observaron pólizas que carecen de su respectivo soporte documental, por lo que solicitó al Partido Revolucionario Institucional presentar lo siguiente:

- Las pólizas detalladas en el Anexo 2 del oficio UFDA/ 7091/13, con la totalidad de documentación soporte anexa en original, a nombre del partido y con la totalidad de requisitos fiscales.*
- Los contratos de prestación de servicios de los proveedores señalados en el Anexo 2 del oficio UF-DA/7091/13 debidamente firmados, en los cuales se detallaran las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto de los contratos, tipos y condiciones de los mismos, importes contratados, formas y fechas de pago, características de los bienes o servicios, vigencia de los contratos, impuestos, penalizaciones y todas las demás condiciones a las que se hubieren comprometido, anexo a su respectiva póliza de registro.*
- En el caso de los gastos que rebasen el tope de 100 días de Salario Mínimo General Vigente para el Distrito Federal, que en el año dos mil doce equivalía a \$6,233.00; las copias de los cheques nominativos a nombre del prestador de servicio, la cual debía contener la leyenda ‘para abono en cuenta del beneficiario’ y anexa a su respectiva póliza. o Las muestras de la propaganda adquirida, o bienes o servicios prestados. o En su caso, kardex, notas de entrada y salida de almacén, anexos a sus respectivas pólizas contables. o Las aclaraciones que a su derecho convinieran.*

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 149, párrafo 1, 153, 154, 155, 178, 204, 205, 206 párrafo 2, y 339 del Reglamento de Fiscalización entonces vigente.

¹² Notificado en la misma fecha al partido hoy apelante.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

v) *En cumplimiento a la anterior observación, el titular de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, mediante oficio SFA/527/13 de veintiséis de agosto de dos mil trece, dio respuesta al oficio UF-DA-7091/2013 mencionado con anterioridad y, en lo conducente¹⁰, refirió:*

[...]

Querétaro

En Apartado 20, se remiten 11 carpetas con las pólizas detalladas en anexo 2, con su respectivo soporte en original a nombre del Partido, con la totalidad de requisitos que establece la normatividad; así como los contratos de prestación de servicios debidamente firmados donde se establece claramente las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, vigencia, tipo y condiciones del mismo, importe y formas de pago y las muestras de la propaganda.

[...]

vi) *El Consejo General responsable resolvió que de doce operaciones reportadas por el partido político apelante, relacionadas con gastos por concepto de propaganda utilitaria y de las cuales se presentaron facturas de proveedores, así como los contratos de prestación de servicios, tales contratos no eran acordes con las erogaciones que se reportaron, además que no se localizaron pólizas con su respectivo soporte de los gastos que amparaban a esos contratos.*

vii) *En tal sentido, el Consejo General determinó que la observación quedó no subsanada por un importe de \$1,810,817.12 (un millón ochocientos diez mil ochocientos diecisiete pesos 12/100 M.N.), al omitirse presentar 10 contratos de prestación de servicios, así como las pólizas con su respectivo soporte documental, por lo que concluyó que el partido político recurrente incumplió con lo establecido en el artículo 149, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización.*

A efecto de estar en aptitud de dilucidar si las anteriores conclusiones vertidas por la responsable se apegaron a Derecho, se inserta la tabla siguiente cuyo contenido hace referencia a las operaciones identificadas por la autoridad, con su respectivo soporte documental, el cual obra en autos del expediente que se resuelve

[Cuadro]

Sobre la base de los datos analíticos que arroja la documentación cuya información se inserta en la tabla de referencia, esta Sala Superior considera

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

que son fundados en parte los agravios del partido político recurrente, de acuerdo con las razones siguientes.

- 1. Fiscontable Consultoría S.C., cuyo monto de operación ascendió a \$104,748.00 (ciento cuatro mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.).*
- 2. Laura Olivia López Torres, cuyo monto de operación ascendió a \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).*
- 3. Edgar Jesús Batres Jonguitud, cuyo monto de operación ascendió a \$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.).*
- 4. Gustavo Alberto Saldaña Palacios, cuyo monto de operación ascendió a \$204,670.40 (doscientos cuatro mil seiscientos setenta pesos 40/100 M.N.).*
- 5. Jesús Samuel Martínez Navarrete, cuyo monto de operación ascendió a \$191,632.00 (ciento noventa y un mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.).*
- 6. Comercializadora Integral de Querétaro S.A. de C.V., cuyo monto de operación ascendió a \$57,420.00 (cincuenta y siete mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.).*
- 7. Medios Impresos Servicios Integrales S.A. de C.V., cuyo monto de operación ascendió a \$154,850.72 (ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta pesos 72/100 M.N.).*
- 8. Factorekiz Publicidad S. de R.L., cuyo monto de operación ascendió a \$172,840.00 (ciento setenta y dos mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.).*
- 9. Comercializadora e Importadora Odama S.A. de C.V., cuyo monto de operación ascendió a \$94,656.00 (noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.).*
- 10. Ricardo Ríos Flores, cuyo monto de operación ascendió a \$360,000.00 (trescientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.), y*
- 11. Ricardo Ríos Flores, cuyo monto de operación ascendió a \$270,000.00 (doscientos setenta mil pesos 00/100 M.N.).*

Este órgano jurisdiccional federal estima que de forma indebida, el Consejo General responsable estableció que a pesar de haber solicitado al Partido

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Revolucionario Institucional¹³ que enviara el soporte documental de las pólizas respectivas, en los casos enumerados se concluyó que los contratos no correspondían con las erogaciones, además de que no se localizaron las pólizas respectivas con el soporte documental de los gastos que amparan los contratos de prestación de servicios, por lo que se determinó que el partido político recurrente omitió subsanar la irregularidad.

Sin embargo, el Consejo General responsable incurrió en el vicio de incongruencia interna, pues en la conclusión 79 afirmó, por una parte, que los contratos presentados para subsanar las irregularidades detectadas, no correspondían a las erogaciones reportadas y, por otra parte, aseguró que el partido omitió presentar esos mismos contratos.

Asimismo, el Consejo General responsable no identificó cuáles son los contratos con los respectivos proveedores que se omitieron presentar, ni las pólizas que supuestamente no se presentaron, mucho menos cuál es la falta de correspondencia entre la documentación aportada por el partido político recurrente, sino que solo se limitó a señalar que la observación quedó no subsanada por un importe de \$1,810,817.12 (un millón ochocientos diez mil ochocientos diecisiete pesos 12/100 M.N.), y que el partido incumplió con lo previsto en el artículo 148, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, pero sin apoyar en mayores razonamientos tal decisión.

Lo anterior podría resultar suficiente para revocar, en este tópico particular, el fallo controvertido, pero en aras de cumplir el principio de exhaustividad de las sentencias, a fin de resolver todas las cuestiones sometidas al conocimiento de este órgano de justicia especializado, se advierte que la autoridad responsable sí tuvo a su disposición los contratos de prestación de servicios, las pólizas contables, facturas, cheques y el soporte documental necesario, para examinar si las supuestas irregularidades se encontraban subsanadas.

Tal como se advierte de la tabla cuya información se extrae de la documentación que obra en el expediente de este recurso de apelación, la que en su momento fue hecha del conocimiento de la autoridad fiscalizadora por parte del partido político recurrente, con el propósito de que se tuvieran como subsanadas las irregularidades y demostrar con ello el objeto partidista de los gastos, se concluye lo siguiente:

Específicamente, por cuanto hace a los proveedores anteriormente enumerados, es evidente que existe coincidencia entre las pólizas contables, los importes de los cheques, el contenido y monto de las facturas, con las

¹³ Mediante oficio UF-DA-7091/2013 emitido por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, el diecinueve de agosto de dos mil trece, notificado al partido en la misma fecha.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

cantidades estipuladas en los respectivos contratos de prestación de servicios, su modo de pago, así como de lo establecido y detallado en el respectivo anexo 1 de cada uno de los contratos, donde se especificaron las cantidades y objetos que el proveedor se obligó a elaborar, de los cuales existen las muestras correspondientes, todo lo cual, obra en copia simple en el expediente que se resuelve, pero que fue aportado así por la autoridad responsable, al contar ella misma con los respectivos originales durante el procedimiento de fiscalización que originó esta instancia jurisdiccional.

A partir de lo anterior, esta Sala Superior considera que la autoridad responsable debió tener por subsanadas las irregularidades de las operaciones referenciadas en el cuadro inserto anteriormente, en virtud de que el partido político apelante sí aportó la documentación suficiente para acreditar tal situación y, por ende, justificar el objeto partidista de las erogaciones; consecuentemente, estas operaciones (celebradas con los proveedores Fiscontable Consultoría S.C., por \$104,748.00; Laura Olivia López Torres, por \$50,000.00; Gustavo Alberto Saldaña Palacios, por \$204,670.40; Jesús Samuel Martínez Navarrete, por \$191,632.00; Comercializadora Integral de Querétaro S.A. de C.V., por \$57,420.00; Medios Impresos Servicios Integrales S.A. de C.V., por \$154,850.72; Factorekiz Publicidad S. de R.L., por \$172,840.00; Comercializadora e Importadora Odama S.A. de C.V., por \$94,656.00; Ricardo Ríos Flores, por \$360,000.00 y por \$270,000.00) no debieron ser motivo de sanción por parte de la autoridad administrativa electoral.

A juicio de este órgano jurisdiccional no puede ser impedimento para considerar lo anterior, la circunstancia de que en los contratos de prestación de servicios relativos a cada una de las operaciones anteriores¹⁴, se haya utilizado para precisar el objeto de los mismos, una redacción guía o general para identificar los objetos que se obligaron a elaborar y a entregar en su oportunidad cada uno de los proveedores.

Lo anterior, pues de conformidad con lo estipulado en dichos contratos, en su respectiva cláusula primera, el detalle de los objetos a elaborar se encontraba en el Anexo 1, el cual convinieron las partes (partido político y proveedor) formaba parte de cada contrato; máxime que, en cada uno de esos contratos de prestación de servicios, se encuentra su respectivo anexo y se identifica claramente a qué campaña estaban vinculados los objetos elaborados, aspectos que, junto con las pólizas contables, facturas, cheques y muestras aportadas por el partido político recurrente resultan de la magnitud suficiente para considerar que las irregularidades se subsanaron adecuadamente,

¹⁴ Tal como se puede apreciar en la tabla *supra* citada, en el rubro cláusulas relevantes del contrato.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

además de que el objeto partidista de las erogaciones sí está justificado en cada caso.

Este órgano jurisdiccional federal considera importante destacar que, en cuanto a las operaciones relativas a los gastos que se contrataron con el proveedor Ricardo Ríos Flores, cuyo monto ascendió, respectivamente, a \$360,000.00 (trescientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.) y \$270,000.00 (doscientos setenta mil pesos 00/100 M.N.), el contrato de prestación de servicios que soporta dichas operaciones estipuló como importe de contraprestación la cantidad de \$630,000.00 (seiscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), a pagar en varias exhibiciones y, en su respectivo Anexo 1, se detalló que debían elaborarse 17,500 playeras rojas y la misma cantidad de playeras blancas (es decir 35,000 playeras en total).

Ahora bien, de la revisión de la documentación aportada por el partido político recurrente en el procedimiento de fiscalización (cheques, póliza contable, facturas), se advierte que se dividió el pago total del contrato de \$630,000.00 (seiscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), en una primera factura cuyo monto ascendió a la cantidad de \$360,000.00 (trescientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.) y en una segunda factura por \$270,000.00 (doscientos setenta mil pesos 00/100), en donde se elaboraron, respectivamente 20,000 playeras (10,000 rojas y blancas) y 15,000 playeras (7,500 rojas y blancas), cuyo total son 35,000 playeras.

Por tanto, en concepto de esta Sala Superior, la situación que se advierte en los documentos antes precisados impide concluir que el partido político haya incurrido en alguna falta de tipo formal o sustancial, ya que al haber fraccionado el pago del gasto en dos facturas con sus respectivos cheques a nombre del mencionado proveedor, esto resulta insuficiente para concluir que las operaciones no están subsanadas o, inclusive, que el objeto partidista de tales gastos no están justificados.

Situación distinta recae a la irregularidad relativa a la erogación del partido apelante contratada con el proveedor Edgar Jesús Batres Jonguitud cuyo importe ascendió a la cantidad de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

Lo anterior, en razón de que, si bien, el partido político remitió la documentación soporte de la póliza respectiva, es decir existe la factura, copia del cheque, contrato de prestación de servicios y su Anexo 1, de dichas documentales no es posible establecer una concordancia entre las cantidades contenidas en dichos documentos, a fin de que la irregularidad detectada pueda ser subsanada.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En efecto, de la póliza contable que reporta el partido político y de la copia del cheque respectivo, se advierte que al proveedor Edgar Jesús Batres Jonguitud se le pagó la cantidad de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), con motivo de lo estipulado en el respectivo contrato de prestación de servicios que, conforme a su anexo 1, se obligó a elaborar distintos objetos (1,000 playeras impresas; 150 micro perforados; 5,000 calcomanías; 200 parasoles para auto; 5,000 trípticos; 1,000 gorras; 1,000 tarjetas de presentación; 2,000 hojas membretadas; 160 lonas impresas) para la campaña de Saúl Gilardo Trejo Altamirano, candidato a Presidente Municipal de Jalpan de Serra, en el Estado de Querétaro.

Sin embargo, en términos de lo pactado en la cláusula tercera de dicho contrato de prestación de servicios, así como del total de los objetos detallados en el respectivo Anexo 1, la cantidad pactada para la contraprestación ascendió a \$76,297.84 (setenta y seis mil doscientos noventa y siete pesos 84/100 M.N.).

De tales cantidades extraídas de la póliza contable, cheque, contrato y su anexo 1, es posible advertir la falta de correspondencia entre las cantidades que ahí se señalan además de que, tampoco hay concordancia en la factura expedida por el proveedor Edgar Jesús Batres Jonguitud cuyo monto total, incluyendo impuestos, fue de \$69,987.44 (sesenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos 44/100), de la cual se advierte que se elaboraron 1,000 playeras impresas; 150 micro perforados; 5,000 calcomanías; 200 parasoles para auto; 5,000 trípticos; 1,000 gorras; 1,000 tarjetas de presentación, y 2,000 hojas membretadas, para la campaña de Saúl Gilardo Trejo Altamirano, candidato a Presidente Municipal de Jalpan de Serra, en el Estado de Querétaro.

Ante las discrepancias existentes entre la póliza y la documentación que la soporta, esta Sala Superior considera que la irregularidad no se subsanó, tal como lo consideró la autoridad responsable, pues el contrato de prestación de servicios no corresponde al gasto erogado, de ahí lo infundado, en esta parte, del agravio del partido político recurrente.

Por consiguiente, en lo tocante a la materia de impugnación de la conclusión 79, esta Sala Superior considera que se debe confirmar lo relativo a que el partido político recurrente no subsanó la irregularidad vinculada con el gasto contratado con el proveedor Edgar Jesús Batres Jonguitud por un monto de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

Al resultar parcialmente fundados el resto de los agravios estudiados en párrafos precedentes, lo procedente es revocar, en la materia de

impugnación, la resolución controvertida y, en consecuencia, dejar sin efectos la sanción impuesta por la autoridad responsable, respecto de las supuestas once irregularidades anteriormente señaladas, cuyo monto en su conjunto asciende a la cantidad de \$1,760,817.12 (un millón setecientos sesenta mil ochocientos diecisiete pesos 12/100 M.N.), por tanto, la autoridad responsable deberá de emitir una nueva resolución tomando en consideración que el partido político impugnante, en lo tocante a la conclusión 79, únicamente no subsanó la irregularidad sobre un monto equivalente a \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), conforme a lo expuesto en esta parte considerativa.

3.4 Agravios relacionados con la conclusión 77.

Por último, el partido apelante sostiene que fue indebido que la responsable tuviera por acreditada la realización de dos operaciones distintas con la promotora 'Hotelera Misión Querétaro S.A de C.V.', ya que si bien se presentaron dos facturas, ello atendió al hecho de que la factura primigeniamente entregada contenía un error en el domicilio fiscal del partido, por lo que hubo la necesidad de sustituirla con otra, lo cual no implica que se trate de un gasto no reportado, sino una irregularidad que sí está subsanada.

El recurrente afirma que la sanción impuesta en este rubro multa del ciento cincuenta por ciento del monto involucrado) es ilegal y transgresora de los principios de fundamentación, motivación y exhaustividad, al no analizarse debidamente la documentación soporte presentada ante la autoridad fiscalizadora, a partir de la cual se acreditaba que las dos facturas citadas trataban del mismo concepto de los servicios prestados, en tanto que se advierte el mismo sujeto para efectos de facturación y el mismo monto a facturar.

En consecuencia, según el impugnante, existen elementos probatorios que generan certeza respecto del origen y destino de los recursos, así como el objeto partidista de las operaciones realizadas.

*El motivo de inconformidad es **fundado**.*

Cabe destacar que, como se advierte de la resolución combatida, la supuesta irregularidad detectada en la conclusión 77, deriva de los oficios de observaciones¹⁵ y de respuesta¹⁶ mencionados en párrafos precedentes,

¹⁵ UF-DA-7091/2013 emitido por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, el diecinueve de agosto de dos mil trece.

¹⁶ SFA/527/13 Signado por el Titular de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, el veintiséis de agosto de dos mil trece.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

vinculados con la cuenta de 'Propaganda Utilitaria', varias subcuentas, donde se observaron pólizas contables que, a decir de la autoridad responsable, no tenían el respectivo soporte documental.

La respuesta del partido político recurrente fue considerada por la autoridad sancionadora, en algunos casos, como satisfactoria y las observaciones se calificaron como atendidas; sin embargo, observó gastos por concepto de consumo de alimentos, renta de salón y banquetes, de los cuales determinó lo siguiente:

- El Consejo General responsable concluyó que dichos gastos presentan como soporte documental facturas de proveedores y copia cheque.*
- Al respecto, se consideró que el importe del registro contable no coincidía con el soporte documental, ni tampoco con el contrato de prestación de servicios respectivo.*

Consecuentemente, la responsable determinó que al no registrar contablemente una factura por un importe de \$97,440.00 (noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), el Partido Revolucionario Institucional incumplió con lo establecido en el artículo 83, párrafo 1, inciso b), fracción II, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 149, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización.

- La responsable consideró que se respetó la garantía de audiencia del afectado, toda vez que al advertir la existencia de errores y omisiones técnicas, la Unidad de Fiscalización, le notificó oficios para que se presentaran aclaraciones o rectificaciones y la documentación que subsanara las irregularidades observadas; sin embargo, las respuestas no fueron las idóneas en concepto de la autoridad.*

Asimismo, la autoridad responsable introdujo la tabla siguiente para sustentar sus aseveraciones.

[Cuadro]

A partir de lo anterior, la responsable consideró que se debía atribuir responsabilidad al hoy apelante con motivo de que el importe del registro contable no coincide con el soporte documental, ni con el contrato de prestación de servicios y, por ende, estimar que no se registró contablemente una factura cuyo importe fue de \$97,440.00 (noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.).

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Para esta Sala Superior, contrario a tales afirmaciones, es posible advertir de la simple observación a la tabla anterior, que sí existe concordancia entre el importe del registro contable y los restantes documentos que constituyen el soporte documental (factura y cheque, tanto en su concepto como en el importe) de la operación tildada de irregular.

En otras palabras, para este órgano jurisdiccional federal la autoridad responsable consideró que la irregularidad quedó no subsanada al no registrar contablemente una factura por el importe mencionado; sin embargo, conforme a la tabla anterior utilizada en la resolución reclamada, así como las documentales que obren en autos del presente expediente que corroboran su contenido, es dable concluir que la referencia contable de la operación antes citada y el soporte documental ofrecido por el partido político apelante para subsanarla, sí resultan coincidentes, lo que demuestra que la existencia de una doble factura se debió a un error en la captura del domicilio fiscal del Partido Revolucionario Institucional, cuya falta de aclaración oportuna, como lo aduce el recurrente, constituye sólo una falta formal.

Por consiguiente, ante lo fundado del agravio del partido político recurrente, lo que procede es revocar la resolución controvertida, en la parte impugnada, para el efecto de que la responsable determine que la existencia de una doble factura, se debió a un error en la captura del domicilio fiscal del partido impugnante, aspecto que al no haberse aclarado oportunamente, amerita se considere como una omisión que para efectos de individualización de la sanción, tendrá que calificarse como una falta formal, cuya sanción que proceda conforme a derecho deberá imponer la responsable.
(...)"

EFFECTOS DE LA SENTENCIA

"(...)

4.2 Se revoca la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las 'irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondiente al ejercicio dos mil doce', emitida en sesión extraordinaria de veintiséis de septiembre del año dos mil trece, identificada con la clave CG242/2013, para el efecto de que se emita una nueva considerando que:

a) Respecto a la conclusión 41, relativa al gasto por concepto 'Servicio de desayunos', establezca que sí está justificado el objeto partidista por un importe de \$22,968.00 (veintidós mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

b) *En lo tocante a la conclusión 41, la autoridad responsable deberá considerar para la individualización de la sanción correspondiente, que el Partido Revolucionario Institucional no es reincidente, de acuerdo a lo expuesto en el apartado 3.2.3.*

c) *Concerniente a la conclusión 79, se deja sin efectos la sanción impuesta, respecto de las once irregularidades señaladas en los apartados 3.3.1 y 3.3.2, cuyo monto en su conjunto asciende a la cantidad de \$1,760,817.12 (un millón setecientos sesenta mil ochocientos diecisiete pesos 12/100 M.N.), por ende, la autoridad responsable deberá de emitir una nueva resolución tomando en consideración que el partido político recurrente, únicamente no subsanó la irregularidad sobre un monto equivalente a \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), en el entendido de que se debe realizar una nueva individualización de la sanción en torno a ella solamente.*

d) *Por lo que hace a la conclusión 77, la responsable determinará que la existencia de una doble factura, se debió a un error en la captura del domicilio fiscal del partido impugnante, aspecto que al no haberse aclarado oportunamente, amerita se considere como una omisión que para efectos de individualización de la sanción, tendrá que calificarse como una falta formal, cuya sanción que proceda conforme a derecho deberá imponer la responsable.*

4.3 *El Consejo General responsable deberá informar a este órgano de justicia el cumplimiento dado a esta sentencia, una vez que emita la nueva resolución que se le ordena, dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.*

SUP-RAP-164/2013

“(…)

QUINTO. Estudio de fondo. *Los agravios que formula el Partido de la Revolución Democrática, se hacen consistir en lo siguiente:*

a. Agravio relativo a la imposición de sanciones por rebase de topes de gastos de campaña. *En primer término se analiza el planteamiento, mediante el cual, el apelante sostiene que fue indebido que la autoridad fiscalizadora sancionara al Partido de la Revolución Democrática por el presunto rebase de topes de gastos de campaña detectado en el ‘informe anual de ingresos y egresos 2012’ sin tomar en consideración que no es posible sancionar por rebase de topes de gastos de campaña, mientras no se*

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

resuelva el tema del prorrateo de los gastos de campaña de los partidos políticos integrantes de la otrora coalición 'Movimiento Progresista'.

*De modo que el apelante se duele porque fue sancionado por una situación que se encuentra sub judice, en tanto que, la solicitud de prorrateo los gastos de campaña de los partidos políticos integrantes de la otrora coalición 'Movimiento Progresista' fue planteada en el recurso de apelación identificado con la clave **SUP-RAP-124/2013**, originado con motivo de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral identificada con la clave CG190/2013 relativa al **'informe de ingresos y gastos de campaña del proceso electoral federal 2011-2012'**.*

Por lo anterior, el actor señala que, en tanto no se resuelva si es posible prorratear los gastos de campaña, no es posible determinar si el Partido de la Revolución Democrática rebasó el tope de gastos de campaña en el proceso electoral federal de 2011-2012.

De tal suerte, el actor controvierte la conclusión 73 de la resolución impugnada, que señala lo siguiente:

Conclusión 73

'73. Los partidos integrantes de la otrora Coalición Total 'Movimiento Progresista' reportaron gastos de campaña en la revisión del Informe Anual 2012, mismos que al ser aplicados a los entonces candidatos de dicha coalición, se determinó un incremento en el rebase del tope de gastos de campaña de 12 candidatos a puestos de elección popular, por un excedente de \$2,309,711.79.'

(...)

En este contexto, una vez que se determinó el monto implicado, la autoridad fiscalizadora impuso la sanción de \$2,309,711.79 a los partidos integrantes de la otrora coalición 'Movimiento Progresista' de conformidad con el artículo 279, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización. Del referido monto, la autoridad responsable determinó que al Partido de la Revolución Democrática le correspondía una sanción de \$769,903.93

*Una vez que se han establecido las consideraciones, con base en las cuales, el Consejo General del Instituto Electoral Federal determinó sancionar al Partido de la Revolución Democrática por el rebase de topes de gastos de campaña en la revisión del informe anual 2012, esta Sala Superior considera que el agravio formulado por el partido resulta **infundado**.*

(...)"

EFFECTOS DE LA SENTENCIA

“(…)

a) Por las razones expuestas en que el considerando anterior, en relación con el planteamiento identificado como ‘a. Agravio relativo a la imposición de sanciones por rebase de topes de gastos de campaña’, esta Sala Superior determina lo siguiente:

Dado que el rebase de topes de gastos de campaña se encuentra pendiente de resolver en el recurso de apelación SUPRAP- 124/2013; esta Sala Superior ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que, con independencia de lo que se resuelva en el recurso de apelación SUP-RAP- 124/2013, sume a los gastos de campaña de dos mil doce, el gasto determinado en la Conclusión 73 de la resolución impugnada.

b) Toda vez que constituye un hecho notorio, para esta Sala Superior, que los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo participaron en la otrora Coalición ‘Movimiento Progresista’ y que, los referidos institutos políticos, así como los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México han promovido los recursos de apelación que a continuación se precisan:

[Cuadro]

Teniendo presente además que en estos recursos se hacen valer conceptos de agravio relativos a las diversas resoluciones emitidas por el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral, con relación a la fiscalización de los gastos de campaña y de los informes de ingresos y egresos del ejercicio dos mil doce, de los partidos políticos nacionales, y que implican la determinación de criterios relativos a la interpretación de la normativa aplicable, así como de los procedimientos seguidos por la autoridad fiscalizadora, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación arriba a la convicción de que, a fin de precisar los efectos que finalmente deriven de las correspondientes ejecutorias, se debe integrar una sección de ejecución, una vez resuelto el último de los medios de impugnación antes citados, en la que se precise la forma en que ha de proceder el Instituto Nacional Electoral.

Para tal efecto, se deben tomar en consideración todas las sentencias que incidan en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, para la revisión de informes anuales del ejercicio dos mil doce (2012), así

*como de gastos de campaña del procedimiento electoral dos mil once – dos mil doce (2011-2012).
(...)”*

SUP-RAP-166/2013

“(...)”

TERCERO. *Del escrito de demanda se desprende que el accionante formula, medularmente, como motivos de inconformidad los que a continuación se exponen.*

(...)”

3. *En la conclusión 41, la responsable determinó que los partidos que integraron la coalición “Movimiento Progresista”, reportaron en el informe anual correspondiente al ejercicio dos mil doce, erogaciones que pertenecen a gastos de campaña, los cuales, aplicados a doce candidatos, trae como consecuencia el rebase de los topes de campaña.*

Con apoyo en esta conclusión resolvió que la coalición transgredió la ley sustantiva de la materia al excederse en dos millones trescientos nueve mil setecientos once pesos con setenta y nueve centavos, circunstancia que conlleva a sancionarla con un tanto igual al monto ejercido en demasía.

(...)”

*Por otro lado, la Sala Superior considera que son **infundados** los motivos de disenso que el actor fórmula para sostener la inconstitucionalidad del artículo 279, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización; sin embargo, estima que son fundados los agravios relacionados con la indebida interpretación que la autoridad efectuó de la norma cuestionada al momento de imponer las sanciones controvertidas.*

Sobre el particular, el apelante en esencia aduce que la responsable al sancionar el rebase de topes de gastos de campaña, indebidamente determinó imponer a cada uno de los partidos integrantes de la otrora coalición ‘Movimiento Progresista’ igual monto de la multa, cuando el financiamiento recibido por Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo es inferior al del Partido de la Revolución Democrática.

El recurrente afirma que lo ilegal de la sanción controvertida radica:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- *En que indebidamente se castiga a todos los institutos políticos integrantes de la coalición por rebasar el tope de gastos de campaña, cuando la administración de los recursos de la coalición estaba a cargo exclusivamente del Partido de la Revolución Democrática.*

- *En que para su individualización se dejaron de observar las circunstancias de modo, tiempo y lugar; las condiciones socioeconómicas a partir del financiamiento público que recibe cada uno de los partidos políticos coaligados; el monto de la aportación efectuada a la coalición en términos de la cláusula séptima del convenio atinente; el grado de responsabilidad de sus integrantes; la causa que motivó el rebase del tope de gastos de campaña; el mayor grado de responsabilidad del partido político a quien correspondió administrar y distribuir los recursos destinados a la coalición –siendo que en el caso estuvo a cargo del Partido de la Revolución Democrática-, y si se entregaron oportunamente los informes de campaña.*

Con el propósito de evidenciar la ilegal determinación, los inconformes señalan que la sanción se fundó en el párrafo 3, del artículo 279, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, porción normativa que a decir del recurrente contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que tratándose de infracciones relacionadas con la violación a los topes de gastos de campaña, se impondrán a todos los partidos integrantes de la coalición sanciones ‘equivalentes’.

(...)

Por tanto, el vocablo “equivalentes” debe interpretarse en congruencia con el sistema descrito, a fin de que el significado que se le atribuya encuentre concordancia con los lineamientos previstos en los multicitados artículos del abrogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como con los principios de proporcionalidad, racionalidad y equidad que rigen la aplicación de sanciones.

Por tanto, opuestamente a lo estimado por la responsable, para imponer la sanción no basta considerar el elemento objetivo consistente en la cantidad ejercida en exceso y dividirla entre los integrantes de la coalición, para que el resultado sea la base inicial de la multa a imponerse, ya que se reitera, debe ser proporcional a las características específicas de cada miembro de la coalición.

Por consiguiente, carece de sustento la inaplicación que de tal porción normativa se pretende sobre la base apuntada, en atención a que tal y como se pondrá de relieve en párrafos subsecuentes, la interpretación de la expresión que alude a sanciones ‘equivalentes’ resulta acorde con los

principios referidos en acápites precedentes y conduce a la conclusión mencionada; es decir, que la sanción debe imponerse a los partidos coaligados en forma individualizada.

Así y desde otra arista, se concluye que lo fundado del agravio en examen, reside en que la responsable impuso una multa igual a partidos que tienen condiciones disímboles, por lo que en esa tesitura lo conducente es revocar la sanción impuesta a Movimiento Ciudadano con motivo del rebase de topes de gastos de campaña, para el efecto de que el Instituto Nacional Electoral¹⁷ individualice de nueva cuenta la sanción atendiendo a las circunstancias particulares de los mencionados institutos políticos, conforme a lo razonado en párrafos precedentes.

Efectos de la Sentencia.

(...) Conforme a lo expuesto, lo procedente es revocar la determinación impugnada, a fin de que el Consejo General nuevamente individualice la sanción correspondiente, partiendo de que en la aplicación del artículo 279, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización, no basta considerar el elemento objetivo consistente en la cantidad ejercida en exceso y dividirla entre los integrantes de la coalición.

Para dar eficacia al sistema de individualización de sanciones, respecto al rebase de topes de gastos de campaña, con base en ese numeral reglamentario, además de la cantidad ejercida en exceso y la reincidencia, deben considerarse (de manera descriptiva no limitativa) el porcentaje aportado por cada uno de los partidos políticos en términos del convenio de coalición; la gravedad de la conducta en atención al bien jurídico tutelado; distinguiendo, en su caso, el grado de participación de cada uno de los integrantes, y de manera particular, la actividad de quien operó como responsable del órgano de finanzas al administrar directamente los recursos de la coalición; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; así como las condiciones socioeconómicas del infractor (particularmente el financiamiento ordinario que reciben).

De esta manera el significado de equivalente debe corresponder a la ponderación de los factores que haga la autoridad administrativa electoral respecto de los lineamientos descritos.

(...)"

¹⁷ Autoridad Sustituta del Instituto Federal Electoral.

SUP-RAP-168/2013

CUARTO. Resumen de agravios. *En el escrito de recurso de mérito, el apelante hace valer, en síntesis, los agravios siguientes:*

(...)

b) Conclusión 33. *Ahora bien, respecto a la conclusión mencionada, el partido político sostiene los motivos de disenso que a continuación se resumen:*

El partido apelante aduce que las multas que le fueron impuestas por este concepto son excesivas y desproporcionadas dado que, en primer lugar, porque la responsable sustenta su resolución en el Acuerdo CG190/2013 emitido el quince de julio de dos mil trece, el cual no ha quedado firme al haber sido impugnado a través de dos recursos de apelación ante esta Sala Superior, identificados con las claves SUP-RAP-120/2013 y SUP-RAP-124/2013.

QUINTO. Estudio de fondo. *El estudio de los agravios invocados por el apelante se realizará en el orden propuesto en los puntos que anteceden acorde con el resumen realizado.*

(...)

En este sentido, argumenta que la responsable indebidamente tomó en cuenta para imponer la sanción a que refiere este inciso, el supuesto rebase a topes de campaña decretado en la diversa resolución referida a la coalición Movimiento Progresista, sin considerar que ésta se encuentra sub judice.

Por ello, estima que no será hasta que esta Sala Superior determine en los juicios citados la situación jurídica de la mencionada coalición, respecto del rebase a topes de campaña, por lo que cualquier multa impuesta con base en tal concepto, da lugar a que ésta sea ilegal, pues aún no ha quedado firme.

En segundo lugar, en el mismo agravio, el partido apelante aduce que las multas que le fueron impuestas por este concepto son excesivas y desproporcionadas dado que la responsable tomó como base y de manera literal lo dispuesto por el artículo 279, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización, para todos los partidos integrantes de la coalición Movimiento Progresista, sin atender a las condiciones particulares de cada uno de ellos.

(...)

B. Una vez resuelto lo anterior, es preciso el pronunciamiento, respecto del agravio invocado en contra de la conclusión 33 de la resolución a debate, resumido en el considerando tercero, inciso b) de esta sentencia.

En primer lugar se destaca que el agravio resulta **infundado**, por una parte, y **fundado** por otra, tal como se expone a continuación:

(...)

En segundo lugar, es **fundada** la parte del agravio de mérito en donde el partido actor impugna que las multas que le fueron impuestas por este concepto son excesivas y desproporcionadas dado que la responsable tomó como base y de manera literal lo dispuesto por el artículo 279, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización, para todos los partidos integrantes de la coalición Movimiento Progresista, sin atender a las condiciones particulares de cada uno de ellos, pues le asiste la razón en cuanto a que la responsable debió tomar en cuenta aspectos particulares de cada uno de los partidos políticos integrantes de la coalición e individualizar la sanción basándose en dichas condiciones especiales ya que imponer una sanción “equivalente” en los términos aplicados, hace ilegal la imposición de la misma.

Efectivamente, esta Sala Superior llega a la convicción de que la responsable realizó una indebida interpretación del artículo 279, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización y para ello se basa en las consideraciones que siguen.

En el examen habrá que verificar si el precepto analizado faculta a la autoridad, al momento de establecer la cuantía de la multa, a tomar en cuenta la gravedad de la infracción, el valor jurídico lesionado, la capacidad económica del sujeto responsable, la reincidencia, o cualquier otro elemento conducente para la individualización correspondiente.

Igualmente, se tendrá que analizar si es factible sancionar a los partidos coaligados a virtud de la falta cometida por la coalición, teniendo en cuenta, para tal fin, que la norma constitucional delega a la ley, la facultad de regular la forma de participación de los partidos políticos en las elecciones, como pueden ser, entre otros aspectos, si deciden contender de manera individual o en forma coaligada, y en este último caso, las reglas a las que queda sujeta la coalición; la obligación que tienen tanto los institutos políticos como las coaliciones de sujetarse a los topes de campaña, etcétera.

Además, deberá tenerse en consideración que de conformidad con los artículos 95, párrafo 1 y 98, párrafo 2, del abrogado Código Federal de

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

*Instituciones y Procedimientos Electorales*¹⁸, los partidos políticos tenían derecho a formar coaliciones para participar en las elecciones; con la obligación, en su caso, de manifestar en el convenio de coalición que se sujetaban a los topes de gastos de campaña que se habían fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido.

(...)

Así, la expresión “equivalentes” contenida en la norma cuestionada, a la luz de una interpretación sistemática con los artículos 342, 354 y 355, del anterior Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de los párrafos 1 y 2, del propio artículo 279, del supracitado reglamento, permite concluir que la locución de mérito no puede entenderse como igualdad o paridad.

Por el contrario, debe considerarse vinculada directamente con las condiciones particulares de cada partido político integrante de la coalición; es decir, la responsabilidad del sujeto y su situación específica, las condiciones objetivas y subjetivas de la conducta sancionada y del sujeto infractor.

(...)

En tal sentido, tanto la porción normativa analizada como los demás párrafos del artículo 279, comprendidos en forma integral, se dirigen a hacer efectiva la aplicación del sistema de individualización de sanciones, particularmente, por lo que hace a la infracción del rebase al tope de gastos de campaña.

Esto es así, porque el contenido integral del artículo 279 en análisis es acorde con los lineamientos que se prevén en los artículos 354 y 355, del abrogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en tanto, se reitera, para fijar la sanción deben tenerse en cuenta, entre otros aspectos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el interés jurídico tutelado por el derecho; además de señalar expresamente que si se trata de integrantes de una coalición se debe sancionar de manera individual a cada instituto político en atención, al porcentaje aportado por cada uno de los partidos políticos en términos del convenio de coalición; sus respectivas condiciones; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; así como la solvencia socioeconómica del infractor.

¹⁸ Disposiciones aplicables al momento de la comisión de las conductas infractoras, y que actualmente se recogen en los artículos 23, párrafo 1, inciso f); 87, párrafo 1 y 91, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Lo anterior conduce a establecer, que el sentido y alcance de la expresión sanciones ‘equivalentes’ que se contempla en el párrafo 3, del artículo 279, conforme a la cual para imponer una multa se debe atender a las condiciones particulares de cada uno de los partidos que integran una coalición, se corrobora con la sistemática de lo previsto en los otros dos párrafos del citado artículo, así como con las disposiciones legales que regulan las sanciones y su individualización.

Estas directrices son concordantes con los criterios de este órgano jurisdiccional, respecto a que el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral en la aplicación de sanciones derivadas de infracciones a la normatividad electoral, necesariamente debía tomar en cuenta las circunstancias particulares de cada caso concreto, y para cada partido político de modo proporcional y no igualitario.

A lo anterior cabe agregar, que puede haber circunstancias agravantes o atenuantes en la ejecución de la infracción que determinan un mayor o menor grado de culpabilidad sobre alguno de los partidos integrantes de la coalición, por lo que para sancionar la conducta se deben desterrar aspectos arbitrarios o caprichosos, lo cual obliga a la autoridad a exponer los acontecimientos particulares que en cada supuesto específico se suscitan, así como los razonamientos lógicos, motivos y fundamentos en que se apoya.

Por tanto, el vocablo ‘equivalentes’ debe interpretarse en congruencia con el sistema descrito, a fin de que el significado que se le atribuya encuentre concordancia con los lineamientos previstos en los multicitados artículos del abrogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como con los principios de proporcionalidad, racionalidad y equidad que rigen la aplicación de sanciones.

Así, opuestamente a lo estimado por la responsable, para imponer la sanción no basta considerar el elemento objetivo consistente en la cantidad ejercida en exceso y dividirla entre los integrantes de la coalición, para que el resultado sea la base inicial de la multa a imponerse, ya que se reitera, debe ser proporcional a las características específicas de cada miembro de la coalición.

De esta manera, lo fundado del agravio en examen reside en que la responsable impuso una multa igual a partidos que tienen condiciones disímboles, por lo que en esa tesitura lo conducente es revocar la sanción impuesta al Partido del Trabajo con motivo del rebase de topes de gastos de campaña, para el efecto de que el Instituto Nacional Electoral¹⁹ individualice de nueva cuenta la sanción atendiendo a las circunstancias particulares del mencionado instituto político, conforme a lo razonado en párrafos precedentes.

(...)

EFFECTOS DE LA SENTENCIA

SEXTO. Efectos de la sentencia. *Conforme a lo razonado en el considerando quinto, apartados A y B de esta sentencia, esta Sala Superior considera pertinente exponer cuáles son los efectos de tal determinación.*

(...)

2. Se revoca la imposición de la sanción y su correspondiente individualización, por el concepto determinado en la conclusión 33, a fin de que el Consejo General del actual Instituto Nacional Electoral, analice nuevamente la infracción e individualice la sanción correspondiente, partiendo de que en la aplicación del artículo 279, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización, no basta considerar el elemento objetivo consistente en la cantidad ejercida en exceso y dividirla entre los integrantes de la coalición.

Para dar eficacia al sistema de individualización de sanciones, respecto al rebase de topes de gastos de campaña, con base en ese numeral reglamentario, además de la cantidad ejercida en exceso y la reincidencia, deben considerarse (de manera descriptiva no limitativa) el porcentaje aportado por cada uno de los partidos políticos en términos del convenio de coalición; la gravedad de la conducta en atención al bien jurídico tutelado; distinguiendo, en su caso, el grado de participación de cada uno de los integrantes, y de manera particular, la actividad de quien operó como responsable del órgano de finanzas al administrar directamente los recursos de la coalición; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; así como las condiciones socioeconómicas del infractor (particularmente el financiamiento ordinario que reciben).

¹⁹ Autoridad sustituta del Instituto Federal Electoral.

*De esta manera el significado de 'equivalente' debe corresponder a la ponderación de los factores que haga la autoridad administrativa electoral respecto de los lineamientos descritos.
(...)"*

6. Metodología para el cumplimiento de las ejecutorias en relación a la Sección de Ejecución. Como se observa la autoridad jurisdiccional determinó abrir una sección de ejecución en atención a la complejidad de los temas relacionados con las diversas ejecutorias vinculadas al Proceso Electoral Federal 2011-2012, así como las consecuencias jurídicas en cada una de sus determinaciones con la finalidad de otorgar certeza en el cumplimiento de su mandato.

En este contexto, es importante abordar la forma en que esta autoridad responsable acatará las diversas ejecutorias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

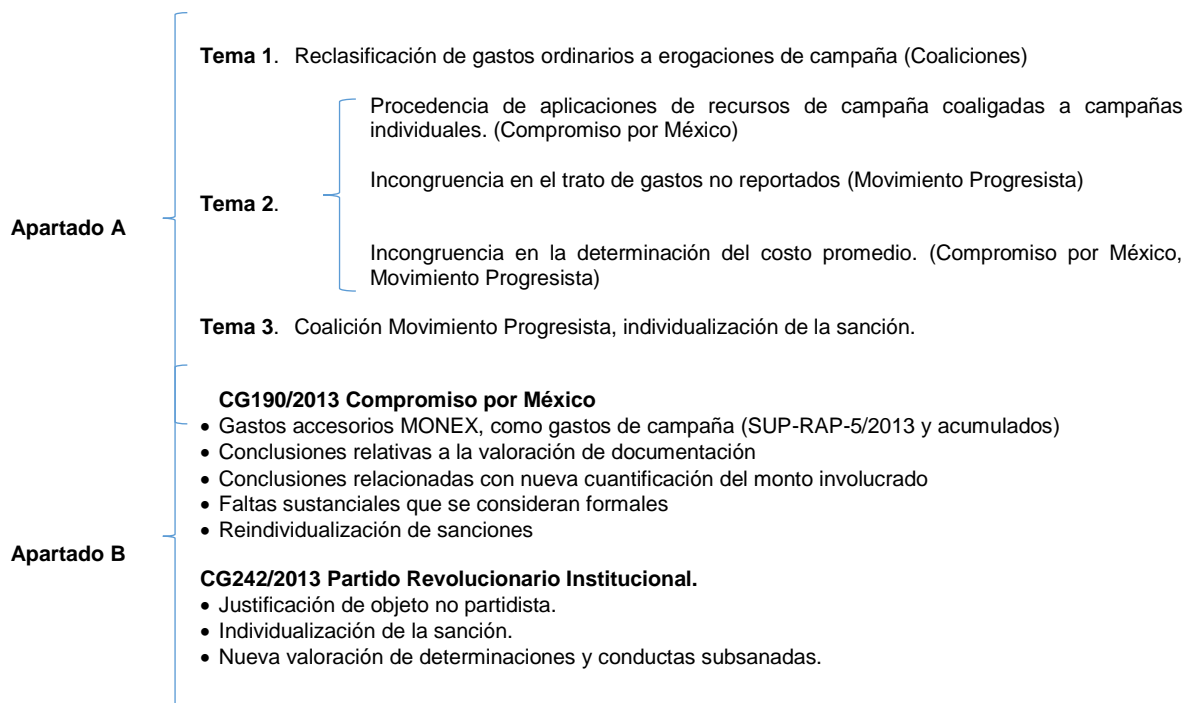
Si bien la sección en cita representa un parámetro claro para el cumplimiento de los recursos de apelación, esta autoridad advierte que la valoración de cada tema trasciende de forma directa en diversos rubros de los Dictámenes Consolidados del Partido Revolucionario Institucional, las otras coaliciones Compromiso por México y Movimiento Progresista por lo que hace a los informes de campaña y a los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, en los informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2012, esto último por contener conclusiones que se encuentran relacionadas con gastos de campaña.

Consecuente con lo anterior las Resoluciones CG190/2013 y CG242/2013, se modificaran de acuerdo a la valoración realizada en el dictamen consolidado de que se trate conforme a las ejecutorias de mérito y las afectaciones que se actualicen al acatar los temas establecidos.

Adicionalmente se presentan efectos particulares en resoluciones vinculadas a procedimientos administrativos sancionadores, situación que será retomada en párrafos posteriores.

Bajo este orden de ideas la sección en comento presenta en dos apartados los temas que debe acatar la responsable considerando su división de acuerdo a la afectación de los mismos en una o más ejecutorias.

A continuación se presentan los temas en comento.



Como se refirió en párrafos precedentes los temas presentados en la sección de ejecución se encuentran vinculados a la revisión de los informes de campaña y anuales correspondientes al ejercicio 2012; por lo que tal situación justifica que en el presente acatamiento se aborden los efectos de las ejecutorias relacionadas con las Resoluciones CG190/2013 y CG242/2013.

Lo anterior con la finalidad de seguir la secuencia establecida en la sección de ejecución pero en atención a los sujetos obligados, lo cual implica que esta autoridad electoral presente para su análisis un considerando en el orden de aparición de las entonces coaliciones en el dictamen consolidado y resolución relativos a los informes de campaña; así como la parte considerativa relativa a la imposición de sanciones.

Bajo esta tesitura, en considerando posterior se entrara a lo tocante a la Resolución CG242/2013 y las modificaciones que en derecho correspondan de ser el caso.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en advertir que si bien el recurso de apelación **SUP-RAP-164/2013** confirmó en lo que fue materia de impugnación la Resolución CG242/2013 respecto del Partido de la Revolución Democrática, la autoridad jurisdiccional ordenó se reclasificara el importe relativo a la conclusión 73 del dictamen consolidado del informe anual del partido en cita con la finalidad de cuantificarlo en el tope de gastos de campaña respectivo, hecho que implica se valore en el **Considerando 11, apartado B**, al afectar las cifras relativas al informe de campaña de la otrora coalición Movimiento Progresista.

Mismo caso se actualiza en los recursos de apelación **SUP-RAP-166/2013** (Movimiento Ciudadano) y **SUP-RAP-168/2013** (Partido del Trabajo), los cuales se vinculan a la Resolución CG242/2013, sin embargo en el considerando referido en el párrafo precedente se dará cumplimiento a los mismos, de conformidad con los argumentos ahí vertidos.

Procedimientos administrativos sancionadores

Por lo que hace a los recursos de apelación relacionados con procedimientos administrativos sancionadores, es dable acotar que en el marco de la revisión de los informes de campaña (CG190/2013) la autoridad electoral determinó el inicio de diversos procedimientos oficiosos en materia de fiscalización, los cuales una vez agotada la sustanciación del mismo en cumplimiento al debido proceso y con pleno respeto a la garantía de audiencia de los entes infractores, esta autoridad determinó la responsabilidad de los entes infractores de las conductas ahí analizadas.

Consecuente con lo anterior los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, interpusieron diversos recursos de apelación en contra de las Resoluciones **CG270/2013**, **CG271/2013** y **CG103/2014**, las cuales confirmó la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sentido; sin embargo revocó en dichos casos la individualización de la sanción.

Resolución	Recurso de apelación	Sentido	Tema
CG270/2013 P-UFRPP 29/13	172/2013 PRD	Revoca	Individualización de la sanción a los partidos políticos que integraron la coalición Movimiento Progresista, por lo que a la conducta relativa al rebase de tope de gastos de campaña.
	174/2013 MC		
	178/2013 PT		
CG271/2013 P-UFRPP 33/13	173/2013 PRD		
	175/2013 MC		
	177/2013 PT		
CG103/2014 P-UFRPP 08/13	32/2014 y su acumulado 35/2014		

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Al respecto, atendiendo al origen de los actos revocados los cuales producen efectos particulares en cada una de las resoluciones impugnadas, lo procedente en dichos casos es cumplir lo ordenado en las ejecutorias relativas a las Resoluciones CG270/2013 y CG271/2013 en acatamientos diversos al que ahora se atiende.

En cuanto al recurso de apelación **SUP-RAP-33/2014** y su acumulado **SUP-RAP-35/2014**, así como **SUP-RAP-32/2014**, trascienden situaciones especiales que deben aclararse.

Bajo esta tesitura, el recurso de apelación SUP-RAP-33/2014 y su acumulado SUP-RAP-35/2014, se acató en sesión ordinaria del CG celebrada el 26 de febrero de 2016, mediante **INE/CG89/2016**, el cual no fue materia de impugnación, **por lo que se encuentra firme y para efecto de la sección de ejecución se encuentra cumplimentado**. Cabe señalar que su sentido en modo alguno afecta la Resolución CG190/2013.

Relativo al recurso de apelación **SUP-RAP-32/2014** cabe destacar que el Partido de la Revolución Democrática, al impugnar la Resolución CG103/2013 argumentó entre otras cuestiones que el “*supuesto*” rebase de topes de gasto de campaña en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012, sancionado, se encontraba *sub judice*, en el momento de su aprobación; por lo que se actualizaba la vulneración a los principios de certeza jurídica, objetividad, legalidad, equidad y exhaustividad y formalidades esenciales del debido proceso.

Por lo que al resolver la ejecutoria en comentario la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó por un lado considerar inoperante el argumento vertido por el instituto político y por otra, en congruencia con el argumento concerniente a la individualización de la sanción en el caso del rebase al tope de gastos de campaña tomada en otras ejecutorias, ordenó revocar la resolución en cuanto a la individualización de la sanción.

A continuación se transcribe la parte que interesa.

(...)

En primer lugar cabe señalar que el partido político actor en ningún momento niega la existencia de las tres inserciones en medios impresos que contenían propaganda electoral a favor de los entonces candidatos a Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; a Senadora por el Distrito Federal,

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

María Alejandra Barrales Magdaleno y a Diputada Federal por el Distrito III del Estado de Nuevo León, Irgla Guzmán Treviño, postulados por la citada coalición durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, y que las mismas no fueron reportadas en los informes de campaña correspondientes, por lo que la referida conducta no está sujeta a controversia.

Asimismo, del escrito de demanda también se puede apreciar que el Partido de la Revolución Democrática no hace valer ningún agravio con el que se pretenda controvertir las razones por las que la responsable llegó a la determinación de que dicho partido político era responsable por las inserciones referidas en el párrafo precedente, así como aquellas por las que la llevaron a imponerle sanciones consistentes en una multa equivalentes a ochenta y cuatro días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil doce, misma que asciende a la cantidad de cinco mil doscientos treinta y cinco pesos 72/100 M.N. así como una sanción económica que asciende a la cantidad de quince mil doscientos ochenta y ocho 72/100 M.N, por lo que dichas determinaciones tampoco serán sujetas de estudio en el presente medio de impugnación.

Ahora bien, por lo que se refiere a lo alegado por el partido político actor respecto a que la resolución impugnada no se dictó conforme a derecho, toda vez que se basa en una determinación que se encuentra sub judice, esta Sala Superior considera que resulta inoperante, pues, en estricto apego en el artículo 41, apartado D, fracción VI, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6º, numeral 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en ningún caso la interposición de uno de los medios de impugnación previstos en la ley producirá efectos suspensivos sobre el acto o la resolución impugnada.

En este sentido, si bien el partido político actor impugnó la resolución CG190/2013, a través del recurso de apelación que se encuentra registrado en esta Sala Superior bajo el número de expediente SUP-RAP-124/2013, dicha situación no produce efectos suspensivos sobre el acto o la resolución impugnada, de modo que estos surten todos sus efectos de manera inmediata, y su cumplimiento es exigible hasta que no exista determinación judicial al respecto.

Por lo tanto, la autoridad responsable actuó conforme a derecho al continuar con la sustanciación y resolución del procedimiento oficioso P-UFRPP 08/13, en contra de la otrora coalición Movimiento Progresista, integrada por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, independientemente de la presentación de diversos medios de

impugnación para combatir distintos actos, por parte de los referidos partidos políticos.

QUINTO. Sección de ejecución (...)

Teniendo presente además que en estos recursos se hacen valer conceptos de agravio relativos a las diversas resoluciones emitidas por el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral, con relación a la fiscalización de los gastos de campaña y de los informes de ingresos y egresos del ejercicio dos mil doce, de los partidos políticos nacionales, y que implican la determinación de criterios relativos a la interpretación de la normativa aplicable, así como de los procedimientos seguidos por la autoridad fiscalizadora, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación arriba a la convicción de que, a fin de precisar los efectos que finalmente deriven de las correspondientes ejecutorias, se debe revocar la individualización de la sanción y se debe integrar una sección de ejecución, una vez resuelto el último de los medios de impugnación antes citados, en la que se precise la forma en que ha de proceder el Instituto Nacional Electoral.

(...)

ÚNICO. *Se **revoca** la ‘Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral) respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, instaurado en contra de la otrora Coalición Movimiento Progresista, integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, identificado como P-UFRPP 08/13’ de veinticuatro de febrero de dos mil catorce, identificada con el número CG103/2014, para el efecto de que el Instituto Nacional Electoral proceda a emitir una nueva, atendiendo a las consideraciones expuestas en el considerando QUINTO de la presente ejecutoria.*

(...)”

En consecuencia, toda vez que esta responsable en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, aprobó el Acuerdo **INE/CG89/2016** “...POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAIDA A LOS RECURSOS DE APELACIÓN IDENTIFICADOS CON NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-33/2014 Y SU ACUMULADO SUP-RAP-35/2014 INTERPUESTOS POR EL PARTIDO DEL TRABAJO Y MOVIMIENTO CIUDADANO, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN CG103/2014 RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INICIADO EN CONTRA DE LA OTRORA COALICIÓN

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

MOVIMIENTO PROGRESISTA.” y toda vez que el recurso de apelación SUP-RAP-32/2016 versa sobre el mismo efecto ordenado en los recursos de apelación SUP-RAP-33/2014 y su acumulado SUP-RAP-35/2014, relativos a la resolución CG103/2013, **se tiene por acatada la sentencia SUP-RAP-32/2014 con la aprobación del Acuerdo INE/CG89/2016**, el cual se encuentra firme.

Consecuentemente se tienen por cumplidas los recursos de apelación referidos previamente.

Monex.

Por lo que hace al apartado B, de la Sección de Ejecución relacionado con el recurso de apelación SUP-RAP-121/2013, agravio 1, la autoridad jurisdiccional ordenó se tomaran en cuenta los gastos accesorios generados con motivo de la contratación de las tarjetas denominadas “**Monex**” como gastos de campaña en términos de lo expuesto en el Considerando “*DÉCIMO CUARTO*” del recurso de apelación SUP-RAP-5/2013 y sus acumulados, por lo que en la parte conducente del dictamen consolidado correspondiente a la otrora coalición Compromiso por México, se dará cumplimiento a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional.

Ahora bien, para efecto de certeza, en el siguiente cuadro se establecen los recursos de apelación que son materia de análisis en el presente acatamiento con relación a la sección de ejecución, así como aquellos que de conformidad con lo expuesto en párrafos precedentes se han acatado o se acataran en diverso acto.

RESOLUCIÓN IMPUGNADA	SUP-RAP SECCIÓN DE EJECUCIÓN	SE ACATAN EN EL PRESENTE ACUERDO	SE ACATAN EN DIVERSO CUMPLIMIENTO	ACATADOS.
CG190/2013	118/2013 MC	X	-	-
	120/2013 PT	X	-	-
	121/2013 PRI	X	-	-
	124/2013 PRD y PT	X	-	-
CG242/2013	162/2013 PRI	X	-	-
	164/2013 PRD	X	-	-
	166/2013 MC	X	-	-
	168/2013 PT	X	-	-
CG270/2013	172/2013 PRD	-	X	-
	174/2013	-	X	-

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

RESOLUCIÓN IMPUGNADA	SUP-RAP SECCIÓN DE EJECUCIÓN	SE ACATAN EN EL PRESENTE ACUERDO	SE ACATAN EN DIVERSO CUMPLIMIENTO	ACATADOS.
CG271/2013	MC			
	178/2013 PT	-	X	-
	173/2013 PRD	-	X	-
	175/2013 MC	-	X	-
CG103/2014	177/2013 PT	-	X	-
	32/2014 PRD	-	-	X
	33/2014 y 35/2014 Acumulados MC y PT	-	-	X

7. Modificaciones al Dictamen Consolidado correspondiente a los informes de ingresos y gastos de campaña del Partido Revolucionario Institucional por lo que hace a las faltas formales (CG190/2013). (SUP-RAP-121/2013, Agravio 3; Apartado B, Sección de ejecución).

En lo atinente a dos faltas formales derivadas de las conclusiones 29 y 72 del dictamen referido, la Sala Superior ordenó en el caso de la conclusión 29 no considerar la cantidad de \$89,375.01 en el monto involucrado; asimismo, en lo que atañe a la conclusión 72, determinó no tomar en cuenta el monto de \$30,000.00, amparado en la Factura 011 expedida por “PUBLIMEJ vallas móviles”, por lo que se modifican las conclusiones para quedar en los siguientes términos:

Conclusión	Monto original	Monto final
29	\$970,775.01	\$881,400.00
72	\$1,215,443.71	\$1,185,443.71

En congruencia con lo anterior, se procede a modificar el dictamen consolidado de la coalición referida como a continuación se plantea, emitiéndose pronunciamiento únicamente respecto de aquellas cuestiones señaladas por la Sala Superior, por lo que aquellos apartados que no fueron revocados no serán referidos:

4.3 Partido Revolucionario Institucional

4.3.3 Egresos

Senadores

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

4.3.3.1.4.1.1 Gastos Directos de Propaganda Utilitaria

Bardas

Conclusión 29

Al respecto la observación que originó la conclusión 29 del Dictamen Consolidado relacionada a la cuenta “Gastos de Propaganda”, subcuenta “Bardas”, se localizaron pólizas con documentación soporte consistente en facturas, copias de cheque nominativo, contratos de prestación de servicios y relación de pinta de bardas; sin embargo, no fueron localizadas las muestras fotográficas de las bardas que soportaban el concepto del gasto.

En consecuencia, al omitir presentar anexo a sus respectivas pólizas 11 muestras fotográficas por concepto de pinta de bardas por un total de **\$970,775.01** el Partido Revolucionario Institucional incumplió con lo establecido en el artículo 182 del Reglamento de Fiscalización.

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes.

En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-121/2013, se determinó lo siguiente:

ENTIDAD	FORMULA	REFERENCIA CONTABLE	DATOS DEL COMPROBANTE					REF. DICTAMEN	Acatamiento SUP-RAP-121/2013
			No.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE		
Baja California	F-1	PE-2/05-12	275	17/05/2012	Edgar Ulises Figueroa Carrillo	300 Rotulados de bardas publicidad del candidato a senador Eligio Valencia Roque	\$233,100.00	(2)	(1)
Coahuila	F-2	PE-7/04-12	164921	30/04/2012	Promotora Server S.A. de C.V.	Rotulación de 171 bardas con logo de los candidatos F1 y F2 Senadores por Coahuila	138,852.00	(2)	(1)
Coahuila	F-1	PE-10/04-12	164922	30/04/2012	Promotora Sever, S.A. de C.V.	Rotulación de 171 bardas con logotipo de campaña formula de senadores por Coahuila en todo el estado de Coahuila.	138,852.00	(2)	(1)
Nayarit	F-1	PE-13/06-12	25	25/06/2012	Kuare construcciones S.A. de C.V.	Metros cuadrados de rótulos con pintura para bardas	42,688.00	(2)	(1)
Nayarit	F-2	PE-11/06-12	26	25/06/2012	Kuare construcciones S.A. de C.V.	Pinta de bardas según anexo "A" del contrato de fecha 30-03-12	54,288.00	(2)	(1)

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

ENTIDAD	FORMULA	REFERENCIA CONTABLE	DATOS DEL COMPROBANTE					REF. DICTAMEN	Acatamiento SUP-RAP-121/2013
			No.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE		
Oaxaca	F-1	PE-15/05-12	45	24/05/2012	Desarrolladores Urbanos y Constructores Oaxtex, S.A. de C.V.	Pinta de 500 bardas en beneficio de la campaña del C. Evel Pérez Magaña	100,000.00	(2)	(1)
Oaxaca	F-2	PE-10/04-12	2177	24/04/2012	Cruz Paz Guillermo Arnaldo	60 Fondeo, diseño y pintura de bardas en Huajuapán de León, Oax.	35,000.00	(2)	(1)
Oaxaca	F-2	PE-8/05-12	2179	21/05/2012	Cruz Paz Guillermo Arnaldo	61 Fondeo, diseño y pintura de bardas en Huajuapán de León, Oax.	35,380.00	(2)	(1)
Oaxaca	F-2	PE-10/05-12	21	21/05/2012	Jonathan Jalil García Marín	28 Fondeo, pintado de bardas en Oaxaca, Oax.	16,240.00	(2)	(1)
Querétaro	F-1	PE-9/06-12	162	20/06/2012	Enrique González Rodríguez	Pinta de 166 bardas	87,000.00	(2)	(1)
Tlaxcala	F-2	PE-6/04-12	FA 816	30/04/2012	Leticia Domínguez Miranda	6,163 Mts. de pintado de bardas, No. de aprobación: 392414; año de aprobación 2010	89,375.01	(2)	(2)
Total							\$1,151,212.43		

En cuanto al importe marcado con (2) en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2013” del cuadro que antecede por un monto de \$89,375.01, en acatamiento a la resolución dictada por la H. Sala Superior, se deja sin efecto dicha observación.

En cuanto a los importes marcados con (1), en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2013” del cuadro que antecede, por un monto de \$881,400.00, el partido omitió presentar 10 muestras fotográficas de la pinta de bardas, por tal razón la observación no quedó atendida.

En consecuencia, al omitir presentar 10 muestras fotográficas por concepto de pinta de bardas, por un importe de **\$881,400.00**, el partido incumplió con lo establecido en el artículo 182 del Reglamento de Fiscalización. **(Conclusión 29).**

Al respecto, el monto involucrado de la observación corresponde a un importe de **\$881,400.00 (Ochocientos ochenta y un mil cuatrocientos pesos 00/100 MN).**

Conclusión 72

Diputados

Gastos en Espectaculares colocados en la Vía Pública

Cabe destacar que la conclusión 72 del Dictamen Consolidado tiene su origen de la revisión a la cuenta “Gastos en Espectaculares Colocados en la Vía Pública” en el que se observaron pólizas que contienen como soporte documental factura,

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

copia del cheque, muestras y contratos de prestación de servicio; sin embargo, el partido omitió presentar las hojas membretadas, así como el informe pormenorizado correspondientes.

En consecuencia al omitir presentar como anexo a sus respectivas pólizas 39 relaciones de anuncios espectaculares, y 49 informes pormenorizados, por **\$1,215,443.71**, el partido incumplió con lo establecido en el artículo 181, numerales 1, inciso c); y 3 del Reglamento de Fiscalización.

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes.

En ese sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-121/2013, se determinó lo siguiente:

En cuanto a las pólizas señaladas con **(2)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2013” del **Anexo 18**, del Dictamen, el partido presentó las relaciones; sin embargo, omitió presentar el informe pormenorizado de 11 Anuncios Espectaculares colocados en la Vía Pública en forma impresa y en medio magnético, por tal motivo, la observación no quedó atendida por \$353,979.25.

Respecto a la póliza señalada con **(3)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2013” del **Anexo 18**, del Dictamen, el partido presentó el informe pormenorizado; sin embargo omitió presentar anexo a su respectiva póliza la relación de 1 de los anuncios que ampara la factura y el periodo en el que permanecieron colocados en hojas membretadas de la empresa, en forma impresa y en hoja de cálculo electrónica, por tal motivo, la observación no quedó atendida por \$40,650.74

Referente a la póliza señalada con **(a)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2013” del **Anexo 18**, del presente Dictamen, por un monto de \$30,000.00, en acatamiento a la resolución dictada por la H. Sala Superior, se deja sin efecto dicha observación.

Relativo a las pólizas señalada con **(4)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2013” del **Anexo 18**, del presente Dictamen, por un monto de \$790,813.72, el partido omitió presentar 37 relaciones y el informe pormenorizado de Anuncios

espectaculares, motivo por el cual, la observación no quedó atendida. **(Conclusión 72).**

En consecuencia al omitir presentar 38 relaciones de anuncios espectaculares, y 48 informes pormenorizados, por **\$1,185,443.71**, el partido incumplió con lo establecido en el artículo 181, numerales 1, inciso c) y 3 del Reglamento de Fiscalización.

Al respecto, el monto involucrado de la observación corresponde a un importe de **\$1,185,443.71 (Un millón ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 71/100 MN).**

Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado del Partido Revolucionario Institucional

Egresos Senadores

Bardas

29.El partido omitió presentar 10 muestras fotográficas por concepto de pinta de bardas, por un monto de \$881,400.00.

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 182 del RF.

Egresos Diputados

Gastos en Espectaculares colocados en la Vía Pública

72.El partido omitió presentar 38 relaciones de anuncios espectaculares, así como 48 informes pormenorizados, por un monto de \$1,185,443.71.

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 181, numerales 1, inciso c) y 3 del RF.

8. Modificaciones a la Resolución CG190/2013 en lo relativo al Partido Revolucionario Institucional contemplado en el considerando 9.2, inciso a) correspondiente a faltas formales en relación considerando 7 del presente acatamiento. (SUP-RAP-121/2013, Agravio 3; Apartado B, Sección de ejecución).

Derivado de los ajustes realizados al dictamen consolidado del partido político, se procederá a modificar la Resolución **CG190/2013** en lo tocante a su Considerando **9.2 inciso a)**, así como al correlativo Resolutivo **SEGUNDO**, para lo cual se considerarán los montos de las faltas formales que no tuvieron modificación derivado del **SUP-RAP-121/2013**, ya que las mismas quedaron firmes, pero la imposición de la sanción debe tomar en cuenta la totalidad de las conductas al realizarse el análisis conjunto de las mismas por su naturaleza, lo que se sanciona en los siguientes términos.

9.2 Partido Revolucionario Institucional

EGRESOS

Gastos Directos de Propaganda Utilitaria

Bardas

Conclusión 29

“El partido omitió presentar 10 muestras fotográficas por concepto de pinta de bardas, por un monto de \$881,400.00”

Diputados (as)

Gastos en Espectaculares colocados en la Vía Pública

Conclusión 72

“El partido omitió presentar 38 relaciones de anuncios espectaculares, así como 48 informes pormenorizados, por un monto de \$1,185,443.71”

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

a) Valor protegido o trascendencia de la norma.

- b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un sujeto obligado, y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como **(1)** se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el sujeto obligado, y en la columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción.

Descripción de la Irregularidad observada (1)	Acción u omisión (2)
(...)	
<i>"29. El partido omitió presentar 10 muestras fotográficas por concepto de pinta de bardas, por un monto de \$881,400.00"</i>	Omisión
(...)	
<i>"72. El partido omitió presentar 38 relaciones de anuncios espectaculares, así como 48 informes pormenorizados, por un monto de \$1,185,443.71"</i>	Omisión
(...)	

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: Tal como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de conductas realizadas por el ente político, por lo que para efectos de su exposición cabe referirnos a lo señalado en la columna (1) del citado cuadro, siendo lo que en ella se expone, el modo de llevar a cabo las violaciones a la normatividad electoral.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado, surgieron del estudio a través del procedimiento de revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos correspondientes al Proceso Electoral Federal 2012, presentados por el referido sujeto.

Lugar: Las irregularidades se actualizaron por el Partido Revolucionario Institucional en el marco del proceso federal 2012.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del ente político para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado ente para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos obligados²⁰.

En las conclusiones en comento, el Partido Revolucionario Institucional vulneró lo dispuesto en los artículos 181, numeral 1, inciso c) y 182 del Reglamento de Fiscalización mismos que a la letra señalan:

²⁰ En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:

*“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen una mera falta formal, **porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos**, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.*

*En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad **por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público**, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”*

Reglamento de Fiscalización.

(...)

Artículo 181.

1. Los partidos o coaliciones podrán contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares en la vía pública para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes:

c) Durante las campañas electorales, cada partido y coalición deberá realizar un informe pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o concesionarias dedicadas a la renta de espacios y colocación de anuncios espectaculares en la vía pública, así como con las empresas dedicadas a la producción, diseño y manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos anuncios. Este informe deberá ser entregado, anexando copia del contrato respectivo y las facturas originales correspondientes, a más tardar el día de la presentación de informes de campaña, con la información siguiente:

- i. Nombre de la empresa;*
- ii. Condiciones y tipo de servicio;*
- iii. Ubicación (dirección completa) y características de la publicidad;*
- iv. Precio total y unitario;*
- v. Duración de la publicidad y del contrato;*
- vi. Condiciones de pago; y*
- vii. Fotografías*

(...)

3. Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en la vía pública deberán incluir, en hojas membretadas de la empresa que se anexen a cada factura, una relación de cada uno de los anuncios que ampara la factura y el periodo en el que permanecieron colocados. En dichas hojas deberá incluirse el valor unitario de todos y cada uno. El importe y el número total de los anuncios detallados deben coincidir con el valor y número de anuncios que ampare la factura respectiva. Asimismo, deberá presentar en medio magnético y en hoja impresa un resumen con la información de las hojas membretadas en hoja de cálculo electrónica, la cual deberá contener cada uno de los anuncios espectaculares que amparan las facturas de sus proveedores con los datos señalados en el presente artículo. Adicionalmente, tales hojas del proveedor deberán contener:

- a) Nombre del partido que contrata;*
- b) Nombre del candidato que aparece en cada espectacular;*
- c) Número de espectaculares que ampara;*

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- d) Valor unitario de cada espectacular, así como el Impuesto al Valor Agregado de cada uno de ellos;*
- e) Periodo de permanencia de cada espectacular rentado y colocado;*
- f) Ubicación exacta de cada espectacular: nombre de la calle principal, número, calles aledañas, colonia, municipio o delegación; o en su caso los datos del taxi, microbús o autobús en los que se colocó la propaganda;*
- g) Entidad Federativa en donde se rentaron y colocaron los espectaculares;*
- h) Medidas de cada espectacular;*
- i) Detalle del contenido de cada espectacular; y*
- j) Fotografías.*

(...)

5. El partido deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en anuncios espectaculares en la vía pública a solicitud de la Unidad de Fiscalización.

Artículo 182.

1. Los partidos y coaliciones llevarán una relación que detalle la ubicación y las medidas exactas de las bardas utilizadas en cada campaña para la pinta de propaganda electoral, especificando los datos de la autorización para su fijación en inmuebles de propiedad privada o lugares de uso común, la descripción de los costos, el detalle de los materiales y mano de obra utilizados, la identificación del candidato, y la fórmula o campaña beneficiada con este tipo de propaganda, debiendo cumplir, en su caso, con lo dispuesto en este Reglamento respecto de los criterios de prorrateo. Dicha relación deberá conservarse anexa a las pólizas y documentación soporte correspondiente. El partido deberá conservar y presentar fotografías de la publicidad utilizada en bardas, indicando su ubicación exacta.

(...)"

De la valoración en conjunto de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que el partido, realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la fusión de la fiscalización.

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.

En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.

En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara.

Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia los artículos referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o privado del sujeto obligado.

En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos del sujeto obligado, de conformidad con los preceptos previamente citados, tales como la realización de operaciones aritméticas incorrectas; informar de manera extemporánea la apertura de cuentas bancarias; presentación de cheques; cifras reportadas en el formato correspondiente que no coinciden contra los saldos reportados en la balanza de comprobación, entre otros.

Esto es, se trata de diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político, derivadas de la revisión del Informe de los Ingresos y Gastos de Campaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí mismas constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de resultado.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación de las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en diversas conductas infractoras imputables al ente político, las cuales pusieron en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control y cotejar lo reportado por el ente en relación a los informes de aquellos candidatos que participaron en el proceso electoral para ganar un cargo de elección popular.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado infractor cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter FORMAL.

Calificación de la falta

Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

- Se trata de diversas faltas formales, al incumplir con diversas normas que ordenan un debido registro contable, la entrega de formatos debidamente requisitados, la presentación en tiempo los informes, la entrega del informe en el Sistema Integral de Fiscalización, de documentación soporte de ingresos y egresos del ente político infractor, de diferencias en el registro contable, entre otras, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos en la materia.
- Con la actualización de faltas formales no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de entes políticos, sino únicamente su puesta en peligro.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que las infracciones deben calificarse como **LEVES**

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta cometida.

Este Consejo General estima que la falta de forma cometida por el sujeto obligado debe calificarse como **LEVE**.

Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político, adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.

En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades que desplegó el sujeto obligado, y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con su obligación de presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos, dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los entes se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo el principio del adecuado control en la rendición de cuentas, en tanto que no es posible verificar que el sujeto obligado, hubiese cumplido con la totalidad de obligaciones a que estuvo sujeto.

Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los entes políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos.

De la revisión al Informe en comentó del ente político, se advierte que el mismo incumplió con su obligación de presentar documentación comprobatoria soporte.

Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en diversas faltas que impidieron que la autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que el ente utilizó diversos recursos.

No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el sujeto obligado presentó conductas que implican una contravención a lo dispuesto por los ordenamientos electorales, tal y como se ha señalado en el apartado de calificación de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta.

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no es reincidente respecto de la conducta que aquí se han analizado.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga, ya que mediante el Acuerdo CG623/2016 aprobado por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral el pasado veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se le asignó un total de \$1,004,337.987 (Mil cuatro millones trescientos treinta y siete mil novecientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el año 2017.

En este tenor, es oportuno mencionar que el Partido Revolucionario Institucional está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral.

Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, obran dentro de los archivos de la autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Revolucionario Institucional, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual a deducir	Saldo
INE/CG198/2017-SEGUNDO-a)	FEDERAL	\$139,581.01	\$0.01	\$0.00
INE/CG808/2016-PRIMERO-a	FEDERAL	\$21,181.60	\$0.55	\$0.04
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-1	FEDERAL	\$38,404.44	\$38,404.44	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-2	FEDERAL	\$40,015.86	\$40,015.86	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-3	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-4	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-5	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-6	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-7	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-8	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-9	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-10	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-11	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-12	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-13	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-14	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-15	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-16	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-17	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-18	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-19	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-20	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-21	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-22	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-23	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual a deducir	Saldo
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-24	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-25	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
Total:		\$1,232,787.05	\$1,072,025.00	\$0.04

De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un saldo pendiente de \$0.04 (cero pesos 04/100 M.N.); por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.

De lo anterior se desprende que, aun cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica; por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la Resolución de mérito.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 354, numeral 1, inciso a) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:

"I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

En este contexto, del análisis realizado a la(s) conducta(s) infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **LEVE**.
- Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
- Que el sujeto obligado, conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.
- Que el sujeto obligado, no es reincidente.
- Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.

Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado.

En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto involucrado, toda vez que las características mismas de la infracción, en ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracciones relacionadas con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.

Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la conducta infractora.

De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa electoral.

Así pues, tomando en consideración las particularidades previamente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como ente político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia del procedimiento de mérito.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medida y Actualización) es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquella que guarde proporción a la falta y las circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos objetivos que rodean las faltas formales se llegó a la conclusión de que las mismas son clasificables como leves, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo,

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

tiempo y lugar, la existencia de culpa y la ausencia de reincidamos, el conocimiento de las conductas sancionadas y las normas infringidas, la pluralidad de conductas; por lo que el objeto de la sanción a imponer es evitar o fomentar el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

Cabe señalar que la actualización de la sanción a imponer (Unidad de Medida y Actualización) se realiza de conformidad con lo establecido en el **considerando 3** del presente acuerdo.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Revolucionario Institucional es la prevista en la fracción II, inciso a) del artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a **1771 (Mil setecientos setenta y uno) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de \$133,692.79 (Ciento treinta y tres mil seiscientos noventa y dos pesos 79/100 M.N.).**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

9. Modificación al Dictamen Consolidado correspondiente a los informes de ingresos y gastos de campaña de la otrora coalición Compromiso por México. (CG190/2013).

Por cuestión de método se dividen en apartados los temas relacionados con las modificaciones al dictamen consolidado de la otrora coalición Compromiso por México, como a continuación se presenta.

A. Suma al tope de gastos de campaña, derivado del empleo de las tarjetas MONEX. (SUP-RAP-005/2013).

Respecto a los procedimientos administrativos de Queja identificada como Q-UFRPP 58/12, en su momento se le hicieron las observaciones al partido respecto de los gastos ahí atribuidos, determinándose como una observación no subsanada por \$50,508,890.90; observándose que también se benefició a los candidatos a

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

diputados y senadores postulados por la otrora Coalición “Compromiso por México”, por lo que se procedió a realizar el prorrateo entre los candidatos beneficiados, determinando los siguientes montos a distribuir entre los candidatos a Presidente, Senadores y Diputados como se detalla a continuación:

CONCPETO	MONTO A PRORRATEAR	IMPORTE PRORRATEABLE PRESIDENTE	IMPORTE PRORRATEABLE DIPUTADOS/ SENADORES
Caso Monex	\$50,508,890.90	\$2,226,671.70	\$48,282,218.71

Cabe señalar, que dicho gasto fue mal clasificado, en virtud de que corresponde a un gasto de campaña y el partido político lo registro como operación ordinaria, por lo que dichos gastos son distribuidos de acuerdo al beneficio obtenido, considerando lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de Fiscalización, para efectos de los topes de gastos de campaña, situación que se ve reflejada en los **Anexos A, B y C** del presente dictamen.

Ahora bien, esta autoridad en pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las sentencias recaídas a los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-5/2013 y SUP-RAP-121/2013, procede a modificar el Dictamen Consolidado en los términos que a continuación se exponen:

En primera instancia resulta imperativo conocer los términos y sentido de la resolución primigenia que, a través de la cadena impugnativa desarrollada, ahora se acata. En ese sentido, el veintitrés de enero de dos mil trece, en sesión extraordinaria del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral se aprobó la Resolución CG31/2013, respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, instaurado en contra de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, integrantes de la otrora Coalición “Compromiso por México”, e identificado con la clave alfanumérica Q-UFRPP 58/12 y sus acumulados Q-UFRPP 246/12 y Q-UFRPP 232/12.

Agotada que fue la etapa de instrucción desarrollada, se determinó que el partido político contrató personal dentro del Proceso Electoral Federal, esto es, para un periodo de tiempo específico, constituyendo así un personal eventual cuyas funciones se desarrollaron en dicho Proceso Electoral Federal 2011-2012, cubriendo el periodo de campaña, el cual comprendió del treinta de marzo al veintisiete de junio de dos mil doce, además de la jornada electoral.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En razón de lo anterior se concluyó válidamente que este tipo de estructura fue contratada para operar en todo el territorio nacional y en cada distrito electoral, siendo su objetivo principal durante el periodo de campaña, el beneficiar a la misma el reclutamiento y capacitación de personas encaminadas a favorecer a los institutos políticos en sus pretensiones electorales. En ese sentido, allegándose de dicho personal que eventualmente estuvo presente el día de la jornada electoral, resultó en la actualización de un gasto de campaña y no gasto ordinario como lo afirmó el Partido Revolucionario Institucional.

Así, a efecto de remunerar al personal en cuestión, el instituto político contrató un sistema de pago a través de tarjetas bancarias (monederos electrónicos Monex) a las cuales se les realizaron abonos de saldos por concepto de contraprestación de los servicios recibidos. Por lo tanto, los recursos erogados a través de este medio financiero constituyeron **gastos operativos de campaña** ya que se actualizaron primordialmente, durante el periodo de campaña a nivel federal. Ello es así, toda vez que el partido contrató una estructura de más de siete mil personas, desempeñando funciones que se vinculan al Proceso Electoral Federal 2011-2012, aunado al hecho de existencia de indicios de haber desempeñado funciones para la promoción del voto.

Dicho de otra manera, la estructura que contrató el partido político en cuestión fue para un tiempo limitado y un objetivo específico encaminado a la promoción y obtención del voto y no una estructura para el sostenimiento del propio instituto político.

Esto es, de la concatenación de los elementos de prueba obtenidos, se llegó a la conclusión que de los mismos se advierte con grado de suficiencia que se dispersaron recursos en el periodo de campaña pues la entrega de los monederos electrónicos así como el manejo de recursos, se ejecutó dentro de este periodo.

Adicionalmente, se advirtió una sistematización en las operaciones de las tarjetas, pues su entrega se dio en un periodo continuo y sus operaciones abarcaron en su mayoría este periodo de campaña.

En consecuencia, analizados que fueron los contratos presentados por el partido político y los movimientos de los saldos relativos, se advirtió que a través de las tarjetas adquiridas por el partido político se erogaron recursos por la cantidad de **\$50,508,891.00 (cincuenta millones quinientos ocho mil ochocientos noventa y un pesos 00/100 M.N.), monto que deberá considerarse para efectos de**

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

gasto de campaña, es decir cuantificarse y prorratearse en los informes de campaña presidencial, de diputados y senadores del Proceso Electoral Federal 2011-2012.

Inconformes con lo anterior, los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano interpusieron sendos recursos de apelación, los cuales quedaron integrados bajo los números de expedientes SUP-RAP-5/2013, SUP-RAP-10/2013 y SUP-RAP-11/2013, aprobándose los mismos el diecinueve de febrero de dos mil quince, y en cuya ejecutoria se ordenó, en la parte que interesa, la modificación de la resolución de origen bajo las siguientes directrices:

- Convalidación de la calificación de gastos de campaña a las erogaciones del Partido Revolucionario Institucional efectuadas a través de las tarjetas Monex Recompensa con motivo del personal eventual contratado como estructura para el proceso electoral federal 2011-2012.
- Convalidación de la determinación relativa a que quedó demostrado que el instituto político erogó \$50,508,891.00 (cincuenta millones quinientos ocho mil ochocientos noventa y un pesos 00/100 M.N.), para los gastos de campaña del proceso electoral federal, derivados de las disposiciones que se realizaron de los monederos electrónicos Monex.
- **Tomar en consideración las cantidades correspondientes a los diversos conceptos accesorios del contrato de prestación de servicios y mutuo con interés celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y Alkino, Servicios y Calidad, S.A. de C.V. para efectos del informe de gastos de campañas atinente al proceso electoral 2011-2012, así como determinar lo conducente en relación a un eventual rebase al tope de gastos de campaña.**

Así las cosas, la autoridad electoral procedió a acatar lo determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, procediendo a modificar la resolución primigenia mediante el Acuerdo de cumplimiento INE/CG642/2016, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis; modificación que realizó en virtud de las consideraciones siguientes:

En primer término se clarificaron los hechos que dieron origen a los conceptos accesorios materia del acatamiento, a saber los siguientes:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- El uno de marzo de dos mil doce, el Partido Revolucionario Institucional celebró contrato con Alkino Servicios y Calidad, S.A. de C.V., por el que dicha empresa se obligó a prestar servicios de desarrollo, diseño e implementación de soluciones de negocios basados en el mecanismo de disponibilidad inmediata de recursos monetarios a través de tarjetas de prepago, otorgando a dicho instituto político sendo monto líquido con la finalidad de fondear los monederos electrónicos en cuestión.
- De conformidad con lo establecido en el contrato aludido, aunado al financiamiento referido en el párrafo anterior, el Partido Revolucionario Institucional, acordó pagarle a Alkino Servicios y Calidad, S.A. de C.V. los conceptos accesorios siguientes:

Concepto	Importe	Cantidad	Importe total pagado
Prestación del servicio de desarrollo, diseño e implementación de soluciones de negocios	\$1,682,528.67	1	\$1,682,528.67
Por cada tarjeta adquirida	\$58.00	7851 tarjetas	455,358.00
Interés del financiamiento otorgado.	3% mensual, a partir de la disposición de los recursos, los cuales serían entregados de forma periódica	2 pagos \$2,560,525.88 (financiamiento otorgado del 5-may-12 al 5-jul-12) \$3,351,975.79 (financiamiento otorgado del 6-julio-12 al 1-nov-12)	5,912,500.57
Total de gastos accesorios			\$8,050,387.24

Posteriormente y tomando en consideración el mandato expreso de la autoridad jurisdiccional, se señaló que por cuanto hace a los conceptos accesorios por la “prestación del servicio”, “el interés del préstamo otorgado” y el “costo de cada tarjeta (plástico)” referidos en la tabla inserta, **corresponden a gastos de campaña** realizados por el Partido Revolucionario Institucional, entre otras cosas, por haber sido empleados para el servicio de desarrollo e implementación de soluciones de negocios basados en mecanismos de dispersión de recursos para el pago del personal eventual que conformó la estructura de dicho instituto político para el Proceso Electoral Federal 2011-2012.

Consecuencia de las consideraciones que hasta el momento se han expuesto, se determinó en el Acuerdo de cumplimiento INE/CG642/2016, medularmente que, al quedar firme para efectos de la cuantificación y distribución de los gastos de campaña federal 2012, la cantidad de **\$50,508,891.00 (cincuenta millones**

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

quinientos ocho mil ochocientos noventa y un pesos 00/100 M.N.) determinados en la resolución primigenia CG31/2013; se deberá sumar a dicho monto **los gastos por conceptos accesorios** a que previamente se han hecho referencia y **que ascienden a un monto de \$8,050,387.24 (ocho millones cincuenta mil trescientos ochenta y siete pesos 24/100 M.N.).**

En este orden de ideas, tomando en consideración que la resolución derivada de la revisión de los informes de campaña correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012 fue revocada, el procedimiento idóneo para la cuantificación, suma y determinación de sendo rebase de tope de gastos con resultados definitivos lo será el acatamiento atinente, procedimiento que se materializa a través de la presente modificación al Dictamen Consolidado correspondiente y desarrollo del acuerdo de cumplimiento relativo.

En consecuencia, esta autoridad procedió en pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con los números de expediente SUP-RAP-5/2013 y SUP-RAP-121/2013 a sumar el monto por concepto de accesorios del contrato celebrado con Alkino, Servicios y Calidad, S.A. de C.V., señalados a continuación:

Concepto	Monto
Servicio de desarrollo, diseño e implementación de soluciones de negocios	\$1,682,528.67
Costo de las Tarjetas adquiridas	455,358.00
Intereses del préstamo otorgado	5,912,500.57
Total	\$8,050,387.24

Por lo que derivado de lo anterior, la observación no quedó subsanada por un monto de \$58,559,278.24, integrado por \$50,508,891.00 y \$8,050,387.24; sin embargo, del análisis a la información presentada por la coalición, se observó que también benefició a los candidatos a diputados y senadores, postulados por la otrora Coalición “Compromiso por México”, Partido Revolucionario Institucional, o bien, por el Partido Verde Ecologista de México, por lo que se procedió a realizar el prorrateo entre los candidatos beneficiados, situación que se detalla en el **Anexo 35** del presente dictamen, determinando los siguientes montos a distribuir entre los candidatos a Presidente, Senadores y Diputados como se detalla a continuación:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

CONCEPTO	MONTO A PRORRATEAR	IMPORTE PRORRATEABLE PRESIDENTE	IMPORTE PRORRATEABLE DIPUTADO S/SENADORES
Caso Monex	\$58,559,278.24	\$2,258,265.46	\$56,301,012.78

Por lo anterior, la observación quedó no subsanada en virtud de que no realizó corrección alguna, por lo que se concluye que el monto total a acumular al entonces candidato a la Presidencia de la República es por \$2,258,265.46 y \$56,301,012.78 a Diputados y Senadores, integrado en el anexo antes referido.

Derivado de lo anterior, los montos de prorrateo entre los candidatos beneficiados se acumulan en los **Anexos A, B y C** del presente Dictamen.

B. Modificaciones al Dictamen Consolidado CG190/2013 en lo relativo a la Coalición Compromiso por México respecto del nuevo análisis de faltas formales. (SUP-RAP-121/2013, Agravio 3; Apartado B, Sección de ejecución).

En lo atinente a las faltas derivadas de las conclusiones **77 y 78** del dictamen referido, relacionadas con contratos de prestación de servicios y muestras de facturas, respectivamente, la Sala Superior ordenó señalar con precisión, cuál es la documentación que se estima no fue presentada por la coalición, ya que de lo señalado en el anexo respectivo no se tiene certeza de qué documentación faltó.

Respecto de las conclusiones **80, 82 y 88**, derivadas de la falta de presentación de hojas membretadas en los primeros dos casos, y de contratos de prestación de servicios en el último, el órgano jurisdiccional ordenó respecto de dichas conclusiones lo siguiente:

(Conclusión 80)

“(…) que la autoridad responsable tome en consideración que la otrora coalición “Compromiso por México” sí presentó oportunamente la información requerida consistente en la documentación relacionada con las hojas membretadas impresas y la hoja de cálculo Excel de los anuncios espectaculares asociada a la referencia contable identificada como PE-08/05-12 vinculada con el número de comprobante 7126 emitido por el proveedor Publicidad Gráfica Signal S.A. de C.V. por la contratación de espectaculares para la campaña para Senador por Chiapas, PRI-PVEM, Lic. Roberto Albores Gleason, durante el periodo del 23 de abril al 27 de mayo de 2012, por el importe de \$504,552.67.”

(Conclusión 82)

“(…) tome en consideración que la otrora coalición “Compromiso por México” sí presentó oportunamente la información requerida consistente en la documentación

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

relacionada con las hojas membretadas impresas y la hoja de cálculo Excel de los anuncios espectaculares asociadas a la referencias contables identificadas como PE-9/06-12, PE-12/06-12, P.E.-1/05-12 (de Quintana Roo) y P.E.-8/04-12 (de Tabasco), por la contratación de espectaculares.”

(Conclusión 88)

“(…) en autos obran constancias que acreditan la exhibición de los contratos de presentación de servicios de las referencias contables antes referidas.

La documentación de referencia fue requerida por la Unidad de Fiscalización mediante oficio UF-DA/3701/13 (numeral 20, senadores), y se desahogó mediante el escrito CACP/007/13.

(…)

*(…) lo procedente es **revocar** la conclusión 88, para el efecto de que la autoridad responsable tome en cuenta los documentos presentados por el partido actor de manera oportuna.”*

De igual forma, en lo que atañe a las conclusiones **76, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 143, 151, 154 y 190**, la Sala Superior ordenó en la ejecutoria cuantificar de nueva cuenta el monto total que corresponda, descontando las cantidades que en cada caso se hayan determinado conforme a lo siguiente:

(Conclusión 76)

“(…) le asiste la razón a la recurrente en el sentido de que presentó la documentación que se requirió, de conformidad con las constancias que obran en autos, por lo que resulta fundado su agravio, en lo que se refiere a la conclusión identificada con el número 76, y en consecuencia, deberá ordenarse la modificación de la resolución ahora impugnada, a efecto de que lo señalado en tal conclusión no sea tomado en cuenta al momento de dictar la resolución que corresponda conforme a derecho.”

(Conclusión 132)

“(…) de la revisión de la documentación que presentó la coalición de referencia, la cual se tiene a la vista en la Carpeta 5, localizada en la caja 27 del expediente que se resuelve, se constata la existencia del original del “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN ESPECTACULARES”, correspondiente a la póliza PE-04/05-12, por concepto de la “Colocación y renta de espectacular de 11 x 7 m Puente Contadero”, con importe de \$39,440.00.

En cuanto al estado de Yucatán, de la revisión de la documentación que presentó la coalición de referencia, la cual se tiene a la vista en la Carpeta 11, respuesta al oficio UFDA/5286/13, localizada en la caja 28 del expediente que se resuelve, se constata la existencia de los originales de los cuatro “CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN ESPECTACULARES”, correspondientes a las pólizas PE-6/06-12, PE-7/06-12, PE-8/06-12 y PE-9/06-12, con importes de \$38,280.00, \$3,000.00, \$37,000.00 y \$16,161.05, respectivamente.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

(...)

(...) esta Sala Superior considera que en el caso, la coalición de que se trata, sí presentó los originales de los contratos de prestación de servicios publicitarios solicitados por la autoridad fiscalizadora (...).

En tal virtud, lo conducente es dejar sin efectos la parte de la conclusión 132 que ha sido materia de estudio, a fin de que las cantidades respectivas no sean tomadas en cuenta dentro del monto de la falta formal de que se trata.”

(Conclusión 133)

“(...) de la revisión de la documentación que presentó la coalición de referencia, la cual se tiene a la vista en el Apartado 2.2. de la caja 3 del expediente en que se resuelve, se constata la existencia del original del “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROPAGANDA ELECTORAL”, celebrado con el proveedor JORGE ARMANDO BARAJAS GONZÁLEZ, el cual ampara las pólizas PE-03/05-12, PE-06/05-12 y PE-04/06-12, en relación con las facturas 1407, 1411 y 1451, respectivamente, expedidas por el mencionado proveedor, por los conceptos a que se refieren los cuadros de referencia, con la aclaración de que en el anexo uno del contrato y en la factura 1407 aparece la cantidad de 225.16 metros cuadrados de lona impresa a color, en tanto que en la póliza PE-03/05-12 y en la resolución impugnada aparece la cantidad de 5,225.16 metros cuadrados, lo cual puede obedecer a un lapsus calami en estos dos últimos documentos.

De la valoración de las documentales que se han tenido a la vista, (...) esta Sala Superior considera que en el caso, la coalición de que se trata, sí presentó el original del contrato de prestación de servicios solicitado por la autoridad fiscalizadora (...)

(...)

(...) lo conducente es dejar sin efectos la parte de la conclusión 133 que ha sido materia de estudio, a fin de que las cantidades respectivas no sean tomadas en cuenta dentro del monto de la falta formal de que se trata.”

(Conclusión 134)

“(...) esta Sala Superior considera que en el caso, la coalición de que se trata, sí presentó la fotografía de la lona para cierre de campaña a que se refiere la póliza PE-38/06-12, respecto del Distrito 1 del Estado de Colima

(...)

En tal virtud, lo conducente es dejar sin efectos la parte de la conclusión 134 que ha sido materia de estudio, a fin de que la cantidad respectiva no sea tomada en cuenta dentro del monto de la falta formal de que se trata.”

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

(Conclusión 135)

“Derivado de lo antes expuesto, queda en relieve que no existe sustento para considerar la cantidad de \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), dentro del monto involucrado en una falta formal que ha sido motivo de examen.

En consecuencia, al quedar en relieve que la resolución impugnada, en la parte que ha sido materia de análisis, no se encuentra debidamente motivada, lo conducente es dejar sin efecto la parte que ha sido materia de estudio de la conclusión 135 contenida en la resolución CG190/2013, relacionada con el estudio de las irregularidades encontradas en el informe de campaña presentado por la Coalición “Compromiso por México”.”

(Conclusión 136)

“A. Chiapas

(...)

Derivado de lo anterior, es dable concluir que no existen razones para que la autoridad señalada como responsable haya considerado la cantidad de \$271,121.39 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUNO 39/100 M.N.), dentro del monto involucrado en una falta formal que se examina.

En consecuencia, al quedar en relieve que la resolución impugnada, no se encuentra debidamente motivada, lo conducente es dejar sin efecto la parte que ha sido materia de estudio de la conclusión 136, relacionada con el estudio de las irregularidades cometidas por la Coalición “Compromiso por México”, al rendir su informe de campaña.

B. Jalisco

(...)

Por otro lado, son fundados los planteamientos que hace valer la parte actora con relación a las pólizas PE-07/05-12, por la cantidad de \$3,000.00, y PE-08/06-12, por la cantidad de \$32,518.34. Lo anterior, en razón que, de la documentación que se tuvo a la vista y cuyos datos han quedado plasmados en el cuadro que antecede, se observa que en ambos casos, fueron presentados con toda oportunidad los informes pormenorizados, tanto en forma escrita como en medio magnético (formato Excel).

(...)

(...) De ahí que al no existir sustento para que la responsable haya tomado en consideración la cantidad de \$35,518.34 (TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.), dentro del monto de la falta formal que se examina.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Con apoyo en lo anterior, ha lugar a dejar sin efectos la parte de la conclusión 136 que ha sido materia de estudio.

C. Puebla

Por otro lado, es fundado el planteamiento que se realiza respecto de las pólizas PE-1/04-12 (Distrito 6, por \$17,908.08) y PE-1/04-12 (Distrito 15, por \$3,480.00), toda vez que se pudo advertir la existencia del mencionado informe, tanto en su versión impresa como en medio magnético.

(...)

Por lo tanto, al haber actuado de manera indebida la autoridad responsable al tomar en cuenta la cantidad de \$21,388.08 (VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.), que es el resultado de sumar las cantidades que amparan las dos pólizas anteriormente precisadas, dentro del monto de la falta formal que se examina; lo conducente es dejar sin efectos la parte de la conclusión 136 que ha sido materia de estudio”

(Conclusión 137)

“En este sentido, esta Sala Superior concluye que carece de toda motivación la determinación de la responsable, en el sentido en que lo hizo, al haber quedado demostrado que la Coalición “Compromiso por México” presentó la hoja membretada relacionada con la póliza PE-5/05-12, por la cantidad de \$12,064.00 (DOCE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

Con apoyo en lo anterior, lo conducente es dejar sin efectos la parte de la conclusión 137 que ha sido materia de estudio, a fin de que la cantidad antes señalada no sea tomada en cuenta dentro del monto de la falta formal de que se trata.”

(Conclusión 138)

“A. Jalisco

(...)

Por ende, al carecer de la debida motivación la determinación adoptada por la ahora responsable respecto de la presentación de las hojas membretadas anexas a las pólizas PE-10/06-12 y PE-01/05-12, esta Sala Superior considera indebido que haya sido tomada en cuenta, dentro del monto de la falta formal de que se trata, la cantidad de \$13,198.48 (TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 48/100 M.N.), que es el resultado de sumar las cantidades amparadas en las facturas de mérito (\$11,838.96 más \$1,359.52).

De ahí que se estime conducente dejar sin efectos la parte de la conclusión 138 que ha sido materia de estudio.”

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

(Conclusión 143)

"B. Veracruz

a) Distrito 1

(...)

En tal virtud, al carecer de la debida motivación la determinación adoptada por la ahora responsable respecto de la presentación de las hojas membretadas anexas a la póliza P.E.-1/7-2012, esta Sala Superior considera que no asistía la razón a la autoridad señalada como responsable, de tomar en cuenta, dentro del monto de la falta formal de que se trata, la cantidad de \$14,207.74 (CATORCE MIL DOSCIENTOS SIETE 74/100 M.N.), amparada en la Factura con folio 105, expedida por la empresa "Comercializadora COMIME, S.A. de C.V."

Por tal razón, se estima que lo conducente es dejar sin efectos la parte que ha sido materia de estudio, de la conclusión 143."

(Conclusión 151)

"En vista de lo anterior, se considera fundado el agravio planteado, ya que en la omisión de presentar fotografías respecto de la pinta de bardas de que se trata, indebidamente se tomó en cuenta la cantidad de \$48,622.71 (CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VENTIDOS PESOS 71/100 M.N.), que corresponde a noventa y nueve bardas pintadas, para las cuales, la otrora coalición sí presentó las fotografías respectivas.

Por lo tanto, lo conducente es dejar sin efectos la conclusión que ha sido examinada, para el efecto de que la autoridad responsable, únicamente tome en consideración, como monto involucrado de esta falta formal, la cantidad de \$1,268.81 (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.)."

(Conclusión 154)

"En este orden de ideas, esta Sala Superior considera fundado el agravio planteado, ya que con relación a la falta consistente en la presentación duplicada de once fotografías relacionadas con la pinta de bardas, la autoridad señalada como responsable actuó en forma indebida, al tomar el monto total por concepto de la pinta de setenta y tres bardas que se hace constar en las pólizas respectivas, y que asciende a la cantidad de \$40,897.38 (CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.), cuando ha quedado demostrado con las constancias que se tienen a la vista, que sólo respecto de once bardas se presenta la falta.

En consecuencia, esta autoridad jurisdiccional estima que lo conducente es dejar sin efectos la conclusión de que se trata, para el efecto de que la autoridad responsable, únicamente tome en consideración, como monto involucrado de la falta formal que ha sido examinada, la cantidad de \$4,755.17 (CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.)."

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

(Conclusión 190)

Por lo tanto, se estima fundado el agravio, en tanto que la autoridad responsable tomo como base del monto de la sanción, el total del monto que refiere la factura con folio "DC17888", emitida el diecinueve de abril de dos mil doce por la empresa "Ediciones del Norte, S.A. de C.V.", y que asciende a la cantidad de \$348,000.00; siendo que, al haberse justificado cuatro inserciones por las cantidades antes precisadas, dicha cantidad no debió tomarse en consideración, o bien, restarse al monto total amparado en la factura. Además, en el presente caso, la otrora coalición presentó el original del contrato celebrado con el proveedor.

Por lo tanto, lo conducente es dejar sin efectos la parte que ha sido materia de pronunciamiento respecto de la conclusión de que se trata, para el efecto de que la autoridad responsable, únicamente tome en consideración, como monto involucrado de la falta formal examinada, la cantidad de \$83,516.66 (OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS 66/100 M.N.).

Por lo anterior, se modifican los montos de las conclusiones para quedar en los siguientes términos:

Conclusión	Monto original	Monto final		Conclusión	Monto original	Monto final
76	\$251,731.60	\$0.00		135	\$1,804,648.87	\$1,801,648.87
77	\$2,119,992.47	\$848,199.58		136	\$8,707,881.96	\$8,358,974.15
78	\$1,967,560.40	\$1,792,560.40		137	\$2,672,944.14	\$2,660,880.14
80	\$2,638,071.85	\$2,133,519.18		138	\$2,042,929.86	\$2,029,731.38
82	\$4,893,289.67	\$4,670,253.45		143	\$3,309,789.91	\$3,295,582.17
88	\$217,571.00	\$18,254.00		151	\$49,891.52	\$1,268.81
132	\$612,043.87	\$478,162.82		154	\$40,897.38	\$4,755.17
133	\$2,175,068.18	\$1,974,419.12 ²¹		190	\$430,429.83	\$82,429.83
134	\$198,511.19	\$193,139.00				

En congruencia con lo anterior, **se procede a modificar el dictamen consolidado** de la coalición referida como a continuación se plantea, emitiéndose pronunciamiento únicamente respecto de aquellas cuestiones señaladas por la Sala Superior, por lo que aquellos apartados que no fueron revocados no serán referidos:

²¹ Este monto disminuye en \$200,649.04 debido a que la variación se compone de dos disminuciones ordenadas por la Sala Superior en el SUP-RAP-121/2013, una en el presente agravio 3 (\$17,295.06), y otra en el agravio 8 (\$183,354.00).

4.2 Coalición “Compromiso por México”

4.2.3.1.3.1 Gastos directos de propaganda en Espectaculares

Conclusión 76

La conclusión en comento observó, derivado de la revisión a la cuenta “Gastos en Espectaculares Colocados en la Vía Pública”, que se localizaron pólizas las cuales presentaron como soporte documental contratos de prestación de servicios; sin embargo, estos carecían de la totalidad de las hojas.

Una vez agotado el periodo de revisión y valoración de las respuestas a los oficios de errores y omisiones, se determinó que la otrora coalición Compromiso por México, presentó 4 contratos de prestación de servicio que carecen de la totalidad de requisitos correspondientes.

Por lo que en consecuencia al presentar 4 contratos de prestación de servicios con hojas faltantes, se determinó que la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 198 del Reglamento de Fiscalización por un importe de **\$251,731.60**.

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes.

Consecuentemente, en pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se deja sin efectos la observación correspondiente, ya que el órgano jurisdiccional confirmó que el recurrente presentó en tiempo y forma la documentación solicitada. **(Conclusión 76)**

Conclusión 77

La conclusión 77 tiene origen de la revisión a la cuenta “Gastos en Espectaculares Colocados en la Vía Pública”, en la que se observó el registro contable de pólizas que presentaron como soporte documental facturas de proveedores; sin embargo, no se localizaron los contratos de prestación de servicios correspondientes.

Bajo esta tesitura, una vez agotados los plazos de revisión y analizada la documentación presentada en las respuestas al oficio de errores y omisiones, esta autoridad electoral advirtió que la otrora coalición Compromiso por México, a la fecha de elaboración del Dictamen Consolidado la otrora coalición no presentó la

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

documentación solicitada; por tal razón, la observación quedó no atendida por un importe de **\$2,119,992.47**.

En consecuencia, se determinó que al no presentar 16 contratos de prestación de servicios anexos a sus respectivas pólizas la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 198 del Reglamento de Fiscalización.

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes.

- Por lo que respecta a los proveedores referenciados con **(b)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” del Anexo 12 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 38** del presente Dictamen, se determinó que la coalición presentó 6 contratos de prestación de servicios por un monto de \$1,271,792.89, por tal razón la observación quedó atendida.
- Por lo que respecta a los proveedores referenciados con **(1)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” del Anexo 12 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 38** del presente Dictamen, la otrora coalición no presentó la documentación solicitada; por tal razón, la observación quedó no atendida por un importe de \$848,199.58.

En consecuencia, al no presentar 10 contratos de prestación de servicios anexos a sus respectivas pólizas, la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 198 del RF. **(Conclusión 77)**

Al respecto, el monto involucrado de la observación corresponde a un importe de **\$848,199.58 (Ochocientos cuarenta y ocho mil ciento noventa y nueve pesos 58/100 MN)**.

Conclusión 78

La conclusión en comento deriva de la revisión a la cuenta “Gastos en Espectaculares Colocados en la Vía Pública”, en la que se observó el registro contable de pólizas que presentaron como soporte documental facturas de proveedores; sin embargo, la otrora coalición omitió presentar las fotografías correspondientes.

De la revisión a la documentación presentada en los oficios de errores y omisiones por la otrora Coalición Compromiso por México, se determinó que a la fecha de

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

elaboración del Dictamen Consolidado la otrora coalición no presentó la documentación solicitada; por tal razón, la observación quedó no atendida por un importe de **\$1,967,560.40**.

En consecuencia, al no presentar las muestras de 16 facturas anexas a sus respectivas pólizas, se determinó que la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en los artículos 181, numeral 5 del Reglamento de Fiscalización.

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes.

- Con relación a la factura señalada con (b) en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” del Anexo 13 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 39** del presente Dictamen, se realizó la valoración de la documentación presentada por la otrora Coalición Compromiso por México, determinando que presentó las muestras anexas a la póliza contable por un monto de \$175,000.00, por tal razón la observación quedó atendida.
- Con relación a las facturas señaladas con (1) en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” del Anexo 13 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 39** del presente Dictamen, la otrora coalición no presentó la documentación solicitada; por tal razón, la observación quedó no atendida por un importe de **\$1,792,560.40**.

En consecuencia, al no presentar las muestras de 14 facturas anexas a sus respectivas pólizas la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 181, numeral 5 del RF. **(Conclusión 78)**

Al respecto, el monto involucrado de la observación corresponde a un importe de **\$1,792,560.40 (Un millón setecientos noventa y dos mil quinientos sesenta pesos 40/100 MN)**.

Conclusión 80.

Cabe destacar que la conclusión del Dictamen Consolidado tiene origen de la revisión a la cuenta “Gastos en Espectaculares Colocados en la Vía Pública”, en la que se observó el registro contable de pólizas por concepto de Lonas, Renta de Espectaculares y Colocación de Espectaculares; sin embargo, omitió presentar la relación que amparara los espectaculares, las hojas membretadas impresas y en

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

hoja de cálculo Excel de los anuncios espectaculares que amparó cada una de las facturas reportadas.

Al respecto, una vez que se analizó la respuesta de los oficios de errores y omisiones de la otrora coalición, se determinó que aun cuando la otrora Coalición presentó las pólizas con su respectivo soporte consistente en facturas, muestras y contrato de prestación de servicios, omitió presentar las hojas membretadas de 6 facturas; por tal razón; la observación quedó no atendida por un importe de \$637,699.79.

Con relación a 6 facturas referenciadas con **(2)** en la columna “Referencia para Dictamen”, del **Anexo 41** la respuesta de la otrora coalición se consideró insatisfactoria, toda vez que, a la fecha de elaboración del dictamen, omitió presentar la documentación solicitada; por tal razón, la observación quedó no atendida por un importe de \$2,000,372.06.

En consecuencia, al no presentar 12 facturas con sus respectivas hojas membretadas anexas a sus respectivas pólizas de registro, se determinó que la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 181, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización por un importe de **\$2,638,071.85**.

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes.

En ese sentido como resultado integral del análisis a la documentación y con la finalidad de que se aportaran elementos para la conciliación correspondiente se determinó lo siguiente:

- Por lo que respecta a los proveedores referenciados con **(1)** en la columna “Referencia para Dictamen” del Anexo 15 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 41** del presente Dictamen, aun cuando la otrora Coalición presentó las pólizas con su respectivo soporte consisten en facturas, muestras y contrato de prestación de servicios omitió presentar las hojas membretadas; por tal razón; la observación quedó no atendida por un importe de \$637,699.79.

En consecuencia, al omitir presentar las hojas membretadas de 6 facturas por un importe de \$637,699.79 la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 181, numeral 3 del RF. **(Conclusión 80)**

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- Con relación a la factura referenciada con **(b)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015”, del Anexo 15 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 41** del presente Dictamen, se realizó la valoración de la documentación presentada por la otrora Coalición Compromiso por México, determinando que presentó las hojas membretadas anexas a la póliza contable por un monto de \$504,552.67, por tal razón la observación quedó atendida.
- Con relación a las facturas referenciadas con **(2)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015”, la respuesta de la otrora coalición se consideró insatisfactoria, toda vez que omitió presentar la documentación solicitada; por tal razón, la observación quedó no atendida por un importe de \$1,495,819.39.

En consecuencia, al no presentar las hojas membretadas de 6 facturas y 11 facturas con sus respectivas hojas membretadas anexas a las pólizas de registro, la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 181, numeral 3 del RF por un total de **\$2,133,519.18. (Conclusión 80)**

Al respecto, el monto involucrado de la observación corresponde a un importe de **\$2,133,519.18 (Dos millones ciento treinta y tres mil quinientos diecinueve pesos 18/100 MN).**

Conclusión 82

La conclusión en comento observó al verificar la cuenta “Gastos en Espectaculares Colocados en la Vía Pública” la existencia de pólizas las cuales contenían como soporte documental facturas de proveedores, contratos de prestación de servicios, hojas membretadas y fotografías; sin embargo, las hojas membretadas carecían de la totalidad de datos como ubicación exacta del espectáculo, detalle del contenido y datos del vehículo.

De la revisión a la documentación presentada por la otrora Coalición en la revisión a los oficios de errores y omisiones se determinó que aun cuando la otrora Coalición presentó las pólizas con su respectivo soporte consistente en facturas, muestras y contrato de prestación de servicios omitió presentar las hojas membretadas con la totalidad de los datos solicitados; por tal razón; la observación quedó no atendida por un importe de \$4,893,289.67.

En consecuencia, al omitir presentar las hojas membretadas con la totalidad de dato de 56 facturas por un importe de **\$4,893,289.67**, se determinó que la otrora

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 181, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización.

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes.

Al respecto, tomando en consideración que la otrora coalición “Compromiso por México” presentó oportunamente la información requerida consistente en la documentación relacionada con las hojas membretadas impresas y la hoja de cálculo Excel de los anuncios espectaculares asociadas a la referencias contables identificadas como PE-9/06-12, PE-12/06-12, P.E.-1/05-12 (de Quintana Roo) y P.E.-8/04-12 (de Tabasco), por la contratación de espectaculares, se concluye lo siguiente:

- Por lo que respecta a los proveedores referenciados con **(b)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” del Anexo 17 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 42** del presente Dictamen, se determina que la otrora Coalición Compromiso por México presentó las hojas membretadas con la totalidad de los datos solicitados; anexas a la póliza contable por un monto de \$223,036.22, por tal razón la observación quedó atendida respecto a este punto.
- Por lo que respecta a los proveedores referenciados con **(1)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” del Anexo 17 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 42** del presente Dictamen, aun cuando la otrora Coalición presentó las pólizas con su respectivo soporte consisten en facturas, muestras y contrato de prestación de servicios omitió presentar las hojas membretadas con la totalidad de los datos solicitados; por tal razón; la observación quedó no atendida por un importe de \$4,670,253.45.

En consecuencia, al omitir presentar las hojas membretadas con la totalidad de datos de 52 facturas por un importe de **\$4,670,253.45**, la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 181, numeral 3 del RF. **(Conclusión 82)**

Al respecto, el monto involucrado de la observación en comentario corresponde a un importe de **\$4,670,253.45 (Cuatro millones seiscientos setenta mil doscientos cincuenta y tres pesos 45/100 MN).**

Conclusión 88

La conclusión derivó de la revisión a la cuenta “Gastos de Propaganda”, varias subcuentas, en la que se observaron pólizas que presentan como parte de su soporte documental facturas por concepto de propaganda utilitaria; sin embargo, omitió presentar los contratos de prestación de servicios correspondientes.

En consecuencia, aun cuando la otrora coalición manifestó por medio de las respuestas a los oficios de errores y omisiones que daría respuesta y proporcionaría la documentación en el momento que contara con la documentación solicitada, a la fecha de elaboración del Dictamen Consolidado no presentó documentación alguna; razón por la cual, la observación no quedó atendida, por \$217,571.00.

En consecuencia, toda vez que no presentó 7 contratos de prestación de servicios, se determinó que la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo, 198 del Reglamento de Fiscalización por un importe de **\$217,571.00**.

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes.

Referente a las pólizas señaladas con (a) en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” del Anexo 9 del oficio UF-DA/5087/13, **Anexo 50** del presente dictamen, al verificar los apartados presentados en contestación a diversas observaciones, se localizaron 6 contratos de prestación de servicios; por tal razón, la observación quedó atendida por un importe de \$199,317.00.

Por lo que se refiere a la póliza señalada con **(2)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” del Anexo 9 del oficio UF-DA/5087/13, **Anexo 50** del presente dictamen, la otrora coalición no presentó el contrato solicitado; razón por la cual, la observación no quedó atendida, por **\$18,254.00**.

En consecuencia, al omitir presentar 1 contrato de prestación de servicios, la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 198 del RF. **(Conclusión 88)**

Al respecto, el monto involucrado de la observación en comentario corresponde a un importe de **\$18,254.00 (Dieciocho mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 MN)**.

Conclusiones 132 y 133

Al respecto las observaciones que dieron lugar a las conclusiones 132 y 133 del Dictamen Consolidado se originaron de la revisión a la cuenta “Gastos en Espectaculares Colocados en la Vía Pública”, en la que se observó el registro contable de pólizas que presentaron como soporte documental facturas de proveedores; sin embargo, no se localizaron los contratos de prestación de servicios correspondientes. Los casos en comento fueron detallados en el Anexo 15 del oficio UF-DA/3701/13.

En consecuencia, se le solicitó a la otrora coalición documentación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 198 y 339 del Reglamento de Fiscalización.

De la revisión a la documentación presentada por la otrora Coalición en respuesta a los oficios de errores y omisiones, se determinó lo siguiente:

- Por lo que respecta a los proveedores señalados con **(1)** en la columna ‘Referencia para Dictamen’ del Anexo 6 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 60** del presente Dictamen, la respuesta de la otrora coalición se consideró insatisfactoria toda vez que aun cuando presentó los contratos de prestación de servicios solicitados, estos estaban en copia simple, por tal razón, la observación no quedó atendida por un importe de **\$612,043.87**.

En consecuencia, al presentar 27 contratos en copia simple, se determinó que la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 198 del Reglamento de Fiscalización.

- Con relación a las facturas señaladas con **(2)** en la columna ‘Referencia para Dictamen’ del Anexo 6 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 60** del presente Dictamen, a la fecha de elaboración del presente Dictamen la otrora coalición no presentó la documentación solicitada; por tal razón, la observación quedó no atendida por un importe de **\$2,175,068.18**.

En consecuencia, al no presentar los contratos de prestación de servicios de 85 facturas anexos a sus respectivas pólizas, se determinó que la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 198 del Reglamento de Fiscalización.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes.

- Por lo que respecta a los proveedores referenciados con **(b)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” del Anexo 6 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 60**, del presente Dictamen, acorde con lo señalado por la Sala Superior, esta autoridad no considerará el monto de \$133,881.05 en la conclusión respectiva.
- Por lo que respecta a los proveedores señalados con **(1)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” del Anexo 6 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 60** del presente Dictamen, la respuesta de la otrora coalición se consideró insatisfactoria toda vez que aun cuando presento los contratos de prestación de servicios solicitados, estos están en copia simple, por tal razón la observación quedó no atendida por un importe de \$478,162.82.

En consecuencia, al omitir presentar 22 contratos originales por un monto de **\$478,162.82**, la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 198 del RF. **(Conclusión 132)**

- Por lo que corresponde al proveedor referenciado con (c) en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” del Anexo 6 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 60**, del presente Dictamen, acorde con lo señalado por la Sala Superior, esta autoridad no considerará el monto de **\$17,295.06** en la conclusión respectiva.
- Con relación a los proveedores señalados con (2) en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” del Anexo 6 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 60** del presente Dictamen, a la fecha de elaboración del presente Dictamen la otrora coalición no presentó la documentación solicitada; por tal razón, la observación no quedó atendida por un importe de \$1,974,419.12²².

En consecuencia, al no presentar los contratos de prestación de servicios de 81 facturas por un monto de **\$1,974,419.12** anexos a sus respectivas pólizas, la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 198 del RF. **(Conclusión 133)**

²² Este monto refleja las dos disminuciones ordenadas por la Sala Superior en el SUP-RAP-121/2013, una en el presente agravio 3 (\$17,295.06), y otra en el agravio 8 (\$183,354.00), analizado más adelante.

Al respecto, el monto involucrado de la conclusión 132 corresponde a un importe de **\$478,162.82 (Cuatrocientos setenta y ocho mil ciento sesenta y dos pesos 82/100 MN).**

Al respecto, el monto involucrado de la conclusión 133 corresponde a un importe de **\$1,974,419.12 (Un millón novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos diecinueve pesos 12/100 MN).**

Conclusiones 134 y 135

Derivado de la revisión a la cuenta ‘Gastos en Espectaculares Colocados en la Vía Pública’ de la otrora coalición Compromiso por México, se observó el registro contable de pólizas que presentan como soporte documental facturas de proveedores; sin embargo, la otrora coalición omitió presentar las fotografías correspondientes.

Se le solicitó a la otrora coalición que presentara la documentación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como los artículos, 181, numerales 1, inciso c), 3, 5 y 339 del Reglamento de Fiscalización.

- Por lo que respecta a las pólizas referenciadas con **(1)** en la columna “Referencia para Dictamen” del Anexo 7 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 61** del presente Dictamen la respuesta de la otrora coalición se consideró insatisfactoria, toda vez que aun cuando presentó las pólizas con sus respectivas muestras éstas se encuentran ilegibles, razón por la cual la observación quedó no atendida por un importe de \$198,511.19.

En consecuencia, al presentar 7 muestras ilegibles, se determinó que la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en los artículos 181, numeral 5 del Reglamento de Fiscalización. **(Conclusión 134).**

- Con relación a las facturas señaladas con **(2)** en la columna ‘Referencia para Dictamen’ del Anexo 7 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 61** del presente Dictamen, a la fecha de elaboración del presente Dictamen la otrora coalición no presentó la documentación solicitada; por tal razón, la observación quedó no atendida por un importe de \$1,804,648.87

En consecuencia, al no presentar las muestras de 63 facturas anexas a sus respectivas pólizas, se determinó que la otrora coalición incumplió con lo

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

dispuesto en el artículo 181, numeral 5 del Reglamento de Fiscalización. **(Conclusión 135).**

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes.

- Por lo que respecta al proveedor referenciado con **(b)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” del Anexo 7 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 61**, del presente Dictamen, acorde con lo señalado por la Sala Superior, esta autoridad no considerará el monto de \$5,372.19 en la conclusión respectiva.
- Por lo que respecta a las pólizas referenciadas con **(1)** en la columna “Referencia para Dictamen” del Anexo 7 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 61** del presente Dictamen la respuesta de la otrora coalición se consideró insatisfactoria, toda vez que aun cuando presentó las pólizas con sus respectivas muestras éstas se encuentran ilegibles, razón por la cual la observación no quedó atendida por un importe de \$193,139.00.

En consecuencia, al presentar 6 muestras ilegibles por un importe de \$193,139.00, la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en los artículos 181, numeral 5 del RF. **(Conclusión 134)**

- Por lo que respecta al proveedor referenciado con **(c)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” del Anexo 7 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 61**, del presente Dictamen, acorde con lo señalado por la Sala Superior, esta autoridad no considerará el monto de \$3,000.00 en la conclusión respectiva al haber quedado sin efectos.
- Con relación a las pólizas señaladas con **(2)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” del Anexo 7 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 61** del presente documento, a la fecha de elaboración del presente, la otrora coalición no presentó la documentación solicitada; por tal razón, la observación no quedó atendida por un importe de \$1,801,648.87.

En consecuencia, al no presentar las muestras de 62 facturas anexas a sus respectivas pólizas por un importe de \$1,801,648.87, la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 181, numeral 5 del RF. **(Conclusión 135)**

Al respecto, el monto involucrado de la conclusión 134 corresponde a un importe de **\$193,139.00 (Ciento noventa y tres mil ciento treinta y nueve mil pesos 00/100 MN).**

Al respecto, el monto involucrado de la conclusión 135 corresponde a un importe de **\$1,801,648.87 (Un millón ochocientos un mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 87/100 MN).**

Conclusión 136

Al respecto la observación que originó la conclusión 136 deriva de la revisión a la cuenta “Gastos en Espectaculares Colocados en la Vía Pública”, en la que se observaron pólizas por concepto de Exhibición de Espectaculares, las cuales contenían como soporte documental facturas de proveedores y contratos de prestación de servicios; sin embargo, la otrora coalición omitió presentar el informe pormenorizado de la contratación de los espacios.

En consecuencia, se solicitó a la otrora coalición presentar el informe pormenorizado de los Anuncios Espectaculares colocados en la Vía Pública en forma impresa y en hoja de cálculo Excel, el cual debía de contener los requisitos correspondientes.

En consecuencia de la revisión a la documentación presentada por la otrora Coalición, se determinó que no se localizaron 280 informes con su respectiva hoja de cálculo en Excel, por lo que la observación quedó no atendida por un importe de \$8,707,881.96, concluyendo que la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 181, numerales 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización.

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes.

- Por lo que respecta a las pólizas referenciadas con **(b)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” Anexo 8 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 62**, del presente Dictamen, correspondientes a Chiapas, acorde con lo señalado por la Sala Superior, esta autoridad no considerará el monto de \$271,121.39 en la conclusión respectiva al haber quedado sin efectos.
- Por lo que respecta a la póliza señalada con **(1)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” del Anexo 8 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 62** del presente Dictamen, la respuesta de la otrora Coalición se consideró

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

insatisfactoria aun cuando presentó las pólizas con su respectivo soporte consistente en facturas, muestras y contrato de prestación de servicios, toda vez que no se localizó el informe pormenorizado con su respectiva hoja de cálculo en Excel, por tal razón, la observación quedó no atendida por un importe de \$20,880.00.

- Por lo que respecta a los proveedores referenciados con **(c)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” Anexo 8 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 62**, del presente Dictamen, correspondientes a Puebla y Jalisco, acorde con lo señalado por la Sala Superior esta autoridad no considerará el monto de \$56,906.42 en la conclusión respectiva al haberse dejado sin efectos.
- Con relación a las facturas señaladas con **(2)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” del Anexo 8 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 62** del presente Dictamen, la respuesta se consideró insatisfactoria, toda vez que, a la fecha de elaboración del presente Dictamen, la otrora coalición no presentó la documentación solicitada; por tal razón, la observación no quedó atendida por un importe de \$8,358,974.15.

En consecuencia, al no presentar 265 facturas de los informes pormenorizados con su respectiva hoja de cálculo en Excel por un importe de **\$8,358,974.15** anexas a sus respectivas pólizas la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 181, numerales 1, inciso c) del RF. **(Conclusión 136)**

Al respecto, el monto involucrado en la conclusión 136 corresponde a un importe de **\$8,358,974.15.15 (Ocho millones trescientos cincuenta y ocho mil novecientos setenta y cuatro pesos 15/100 MN).**

Conclusiones 137 y 138

Las observaciones que originan las conclusiones 137 y 138 derivan de la revisión a la cuenta “Gastos en Espectaculares Colocados en la Vía Pública”, en la que se observaron los registros contables de pólizas por concepto de Lonas, Renta de Espectaculares y Colocación de Espectaculares; sin embargo, la coalición omitió presentar la relación de los espectaculares, las hojas membretadas impresas y en hoja de cálculo Excel de los anuncios espectaculares que amparó cada una de las facturas reportadas.

Bajo esta tesitura, la otrora Coalición presentó las pólizas con su respectivo soporte consistente en facturas, muestras y contrato de prestación de servicios,

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

sin embargo omitió presentar las hojas membretadas; razón por la cual se determinó que la observación no quedó atendida por un importe de \$2,672,944.14. **(Conclusión 137).**

Con relación a diversas facturas, la otrora coalición omitió presentar las hojas membretadas de 67 de ellas, razón por la cual se determinó que la observación no fue atendida por un importe de **\$2,042,929.86. (Conclusión 138).**

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes.

- Por lo que respecta a la póliza referenciada con **(b)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” Anexo 9 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 63**, del presente Dictamen, acorde con lo señalado por la Sala Superior esta autoridad no considerará el monto de \$12,064.00 en la conclusión respectiva al haberse dejado sin efectos.
- Por lo que respecta a las pólizas referenciadas con **(1)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” del Anexo 9 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 63** del presente Dictamen, aun cuando la otrora Coalición presentó las pólizas con su respectivo soporte consistente en facturas, muestras y contrato de prestación de servicios omitió presentar las hojas membretadas; por tal razón; la observación quedó no atendida por un importe de \$2,660,880.14.

En consecuencia, al omitir presentar las hojas membretadas de 58 proveedores, por un importe de **\$2,660,880.14** la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en los artículos 181, numeral 3 del RF. **(Conclusión 137)**

- Por lo que respecta a las facturas referenciadas con **(c)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” Anexo 9 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 63**, del presente Dictamen, acorde con lo señalado por la Sala Superior esta autoridad no considerará el monto de \$13,198.48 en la conclusión respectiva al haberse dejado sin efectos.
- Con relación a las facturas referenciadas con **(2)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015”, del **Anexo 63** del presente Dictamen la respuesta de la otrora coalición se consideró insatisfactoria, toda vez que, a la fecha de elaboración del dictamen, omitió presentar la documentación solicitada; por tal razón, la observación no quedó atendida por un importe de \$2,029,731.38.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En consecuencia, al presentar 65 facturas sin sus hojas membretadas solicitadas anexas a sus respectivas pólizas de registro un importe de **\$2,029,731.38** la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 181, numeral 3 del RF. **(Conclusión 138)**

Al respecto, el monto involucrado en la conclusión 137 corresponde a un importe de **\$2,660,880.14 (Dos millones seiscientos sesenta mil ochocientos ochenta pesos 14/100 MN).**

Al respecto, el monto involucrado en la conclusión 138 corresponde a un importe de **\$2,029,731.38 (Dos millones veintinueve mil setecientos treinta y un mil pesos 38/100 MN).**

Conclusión 143

La Observación que originó la conclusión 143 del Dictamen Consolidado derivó de la verificación a la cuenta “Gastos en Espectaculares Colocados en la Vía Pública”, en la que se observaron pólizas las cuales contenían como soporte documental facturas de proveedores, contratos de prestación de servicios, hojas membretadas y fotografías; sin embargo, las hojas membretadas carecían de la totalidad de datos como ubicación exacta del espectacular, detalle del contenido y datos del vehículo.

De la verificación a la documentación presentada por la otrora coalición se determinó que omitió presentar las hojas membretadas con las correcciones solicitadas; por tal razón, se determinó que la observación no quedó atendida por \$3,309,789.91.

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes.

- Por lo que respecta a la póliza referenciada con (b) en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” Anexo 11 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 65**, del presente Dictamen, acorde con lo señalado por la Sala Superior esta autoridad no considerará el monto de \$14,207.74 en la conclusión respectiva al haberse dejado sin efectos.
- Referente a 90 hojas membretadas referenciadas (1) en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015” del Anexo 11 del oficio UF-DA/5289/13, **Anexo 65** del Dictamen, la otrora coalición omitió presentar las hojas

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

membretadas con las correcciones solicitadas; por tal razón, la observación no quedó atendida por \$3,295,582.17.

En consecuencia, al omitir presentar las hojas membretadas de 89 pólizas sin la totalidad de datos, por un importe de **\$3,295,582.17** la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 181, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización. **(Conclusión 143)**

Al respecto, el monto involucrado en la conclusión 143 corresponde a un importe de **\$3,295,582.17 (Tres millones doscientos noventa y cinco mil quinientos ochenta y dos pesos 17/100 MN).**

Conclusiones 151 y 154

Cabe destacar que las conclusiones 151 y 154 se derivaron de la revisión a la cuenta “Gastos de Propaganda”, subcuenta “Bardas”, en donde se localizaron pólizas que contenían como soporte documental facturas por concepto de pinta de bardas; sin embargo, no fueron localizadas las muestras fotográficas que soportaron el concepto del gasto por lo que, al omitir presentar la totalidad de las muestras fotográficas de 2 relaciones detalladas de pinta de bardas, se determinó que la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento de Fiscalización por un importe de **\$49,891.52 (Conclusión 151).**

Por otra parte, la otrora coalición omitió presentar muestras de la relación detallada de pinta de bardas por **\$40,897.38**, por lo que incumplió con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento de Fiscalización **(Conclusión 154).**

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes.

En consecuencia, al valorar de nueva cuenta la documentación presentada por la otrora coalición en respuesta al oficio de errores y omisiones de las conclusiones 151 y 154 se determinó lo siguiente:

Acorde con lo señalado por la Sala Superior esta autoridad únicamente tomará en consideración el monto de **\$1,268.81**, dejando de considerar los conceptos referenciados con **(b)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015”, **Anexo 67**, del presente Dictamen, por un monto de \$48,622.71.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En consecuencia, al omitir presentar la totalidad de las muestras fotográficas de 2 relaciones detalladas de pinta de bardas por un monto de **\$1,268.81**, la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento de Fiscalización. **(Conclusión 151)**

Asimismo, considerando lo resuelto por la Sala Superior esta autoridad únicamente tomará en consideración el monto de **\$4,755.17**, dejando de considerar los conceptos referenciados con **(c)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015”, **Anexo 67**, del presente Dictamen, por un monto de \$36,142.21.

En consecuencia, la otrora coalición omitió presentar muestras de la relación detallada de pinta de bardas por **\$4,755.17**, por lo que incumplió con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento de Fiscalización. **(Conclusión 154)**

Al respecto, el monto involucrado en la conclusión 151 corresponde a un importe de **\$1,268.81 (Mil doscientos sesenta y ocho pesos 81/100 MN)**.

Al respecto, el monto involucrado en la conclusión 154 corresponde a un importe de **\$4,755.17 (Cuatro mil setecientos cincuenta y cinco pesos 17/100 MN)**.

Conclusión 190

La observación que origina la conclusión 190 se deriva de la revisión a la cuenta “Gastos de Prensa”, en varias subcuentas, en las cuales se localizaron pólizas, con documentación soporte consistente en facturas, copias de cheque nominativo y muestras de inserciones de publicidad en medios impresos; sin embargo, después del periodo de errores y omisiones la coalición omitió presentar 4 contratos de prestación de servicios y 3 relaciones de inserciones, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 179 y 198 del Reglamento de Fiscalización por un importe de **\$430,429.83**.

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes.

Acorde con lo señalado por la Sala Superior esta autoridad únicamente tomará en consideración el monto de **\$82,429.83**, dejando de considerar los conceptos referenciados con **(a)** en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2015”, del cuadro inicial de la observación por un monto de \$348,000.00, lo cual fue dejado sin efectos por el órgano jurisdiccional.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En consecuencia, toda vez que no presentó 3 contratos de prestación de servicios y 2 relaciones de inserciones por **\$82,429.83**, la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en los artículos 179 y 198 del RF. **(Conclusión 190).**

Al respecto, el monto involucrado en la conclusión 190 corresponde a un importe de **\$82,429.83 (Ochenta y dos mil cuatrocientos veintinueve mil 83/100 MN).**

**Conclusiones finales del dictamen consolidado de la otrora coalición
Compromiso por México.**

76. La presente conclusión quedó sin efectos.

77. La otrora coalición omitió presentar 10 contratos de prestación de servicios anexos a sus respectivas pólizas, por \$848,199.58.

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 198 del RF.

78. La otrora coalición omitió presentar las muestras de 14 facturas anexas a sus respectivas pólizas, por \$1,792,560.40.

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 181, numeral 5 del RF.

80. La otrora coalición omitió presentar las hojas membretadas de 6 facturas, las facturas y las hojas membretadas de 11 facturas por \$2,133,519.18 (\$637,699.79 y \$1,495,819.39)

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 181, numeral 3, del RF.

82. La otrora coalición omitió presentar las hojas membretadas con la totalidad de datos, de 52 facturas por \$4,670,253.45.

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 181, numeral 3, del RF.

88. La otrora coalición omitió presentar 1 contrato de prestación de servicios por \$18,254.00.

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 198 del RF

132. La otrora Coalición omitió presentar 22 contratos de prestación de servicios en original por \$478,162.82.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 198 del RF

133. La otrora coalición omitió presentar los contratos de prestación de servicios de 82 facturas, anexas a sus Respectivas pólizas por \$1,974,419.12.

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 198 del RF

134. La otrora coalición presentó 6 muestras ilegibles por \$193,139.00

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 181, numeral 5, del RF.

135. La otrora coalición omitió presentar las muestras de 62 facturas anexas a sus respectivas pólizas, por \$1,801,648.87

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 181, numeral 5, del RF.

136. La otrora coalición omitió presentar los informes pormenorizados de 265 facturas con su respectiva hoja de cálculo de Excel anexas a sus respectivas pólizas, por \$8,358,974.15.

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 181 numeral 1, inciso c) del RF.

137. La otrora Coalición omitió presentar las hojas membretadas de 58 proveedores, por \$2,660,880.14.

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 181 numeral 3 del RF.

138. La otrora coalición omitió presentar 65 hojas membretadas anexas a sus respectivas pólizas de registro por \$2,029,731.38.

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 181, numeral 3 del RF.

143. La otrora coalición omitió presentar las hojas membretadas de 89 pólizas con las correcciones solicitadas; por un importe de \$3,295,582.17.

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 181, numeral 3 del RF.

Gastos de Propaganda en Bardas

151. La otrora coalición omitió presentar las muestras fotográficas de 2 relaciones detalladas de pinta de bardas, por un importe de \$1,268.81.

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 182 del RF.

154. La otrora coalición omitió presentar muestras de la relación detallada de pinta de bardas por \$4,755.17.

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 182 del RF.

Prensa

190. La otrora coalición omitió presentar 3 contratos de prestación de servicios y 2 relaciones de inserciones, por \$82,429.83.

Tal situación incumple con lo dispuesto en los artículos 179 y 198 del RF.

C. Modificaciones al Dictamen Consolidado CG190/2013 en lo relativo a la Coalición Compromiso por México correspondientes a dejar de considerar dos spots. (SUP-RAP-121/2013, Agravio 6; Apartado B, Sección de ejecución).

Respecto de la conclusión 32 del multicitado dictamen, la Sala Superior ordena que no se consideren dos promocionales como parte del gasto no reportado ya que no se expusieron las razones particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales, que permitieran motivar la decisión de esta autoridad.

En congruencia con lo anterior, se procede a modificar el dictamen consolidado de la coalición referida como a continuación se plantea, emitiéndose pronunciamiento únicamente respecto de aquellas cuestiones señaladas por la Sala Superior, por lo que aquellos apartados que no fueron revocados no serán referidos:

Hechos Posteriores referente a monitoreos

Conclusión 32

La conclusión 32 tiene su origen en los monitoreos realizados por la Unidad de Fiscalización, en los cuales se observaron gastos no reportados por parte de la

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Coalición “Compromiso por México”, que beneficiaron al entonces candidato a la presidencia de la República, a Diputados y Senadores postulados por dicha coalición, por lo que fue necesario cuantificar la publicidad no reportada.

Al respecto, esta autoridad determinó que la coalición no reportó el gasto por la producción de los 8 spot observados por **\$2,918,081.92**, incumpliendo lo establecido en el artículo 83, numeral 1, inciso d, fracción IV, del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales; y 149, numeral 1, del Reglamento Fiscalización.

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes.

En congruencia con lo resuelto por la Sala Superior, se dejan de considerar los spots RV00473-12, por lo que al corresponder a un gasto directo del candidato a presidente, el monto fue descontado del Anexo A del presente Dictamen.

De igual forma el spot RV01093-12, el cual no fue considerado para efectos de la determinación del gasto no reportado y por consiguiente para efectos del prorrateo.

Por lo que corresponde a los 5 spots de televisión se procedió a la determinación del costo, para lo cual se realizó el siguiente procedimiento.

- Por lo que corresponde al costo por spot en TV de la otrora coalición, se determinó tomando como base una factura reportada en la contabilidad de la otrora coalición, dividiendo el monto total consignado en ella por la producción de spots en TV entre el total de spots que la ampara, como se indica a continuación:

Costo por spot de la coalición	\$412,575.08	=	$\frac{\text{Monto de Producción de Spots en TV}}{\text{Número total de spots en TV}}$	$\frac{\$9,489,226.76}{23}$
---------------------------------------	---------------------	---	--	-----------------------------

- Por lo que corresponde al costo por spot en Radio de la otrora coalición, se determinó tomando como base una factura reportada en la contabilidad de la otrora coalición, dividiendo el monto total consignado en ella por la producción de spots en Radio entre el total de spots que la ampara, como se indica a continuación:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Costo por spot de la coalición	\$30,056.36	=	Monto de Producción de Spots en Radio	\$120,225.43
			Número total de spots en Radio	4

- La valuación de los gastos no reportados se determinó de la forma siguiente:

Concepto	Unidades (A)	Costo Unitario (B)	Importe que debe ser contabilizado (A)*(B)=(C)
Spots en TV	5	\$412,575.08	\$2,062,875.40
Spots en Radio	1	30,056.36	30,056.36

- Una vez obtenido el costo se determinó el monto de los gastos no reportados, como se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE A PRORRATEAR	DISTRIBUCIÓN DEL GASTO		GASTO DIRECTO A PRESIDENTE	GASTOS NO REPORTADOS
		IMPORTE PRORRATEADO PARA PRESIDENTE	IMPORTE PRORRATEADO PARA SENADORES Y DIPUTADOS		
Spots en TV	\$2,062,875.40	\$513,959.43	\$1,548,915.97	\$0.00	\$2,062,875.40
Spots en Radio	0.00	0.00	0.00	30,056.36	30,056.36
TOTAL	\$2,062,875.40	\$513,959.43	\$1,548,915.97	\$30,056.36	\$2,092,931.76

- Del análisis a los spots de TV, se observó que en algunos casos también beneficiaron al candidato a la presidencia, a los candidatos a diputados y senadores de cada entidad, postulados por la otrora Coalición “Compromiso por México”, por el Partido Revolucionario Institucional, o bien, por el Partido Verde Ecologista de México, por lo que se procedió a realizar el prorrateo entre los candidatos beneficiados, situación que se detalla en **Anexo 17**, del presente dictamen, así como en los **Anexos A, B y C** del presente Dictamen.

En consecuencia, al no reportar el gasto por la producción de 5 spot de televisión por \$2,062,875.40 y 1 spot de radio por \$30,056.36, la otrora coalición incumplió con lo establecido en el artículo 83 numeral 1 inciso d, fracción IV del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales y 149 numeral 1 del Reglamento Fiscalización. **(Conclusión 32).**

Al respecto, el monto involucrado en la conclusión 32 corresponde a un importe de **\$2,092,931.76 (Dos millones noventa y dos mil novecientos treinta y un pesos 76/100 MN).**

Conclusiones finales del dictamen consolidado de la otrora coalición Compromiso por México.

Prensa

32. La otrora coalición omitió reportar el gasto por la producción de 5 spot de televisión y 1 spot de radio por \$2,092,931.76 (\$2,062,875.40 + \$30,056.36).

Tal situación incumple con lo dispuesto en los artículos 83 numeral 1 inciso d, fracción IV del COFIPE y 149 numeral 1 del Reglamento Fiscalización.

D. Modificaciones al Dictamen Consolidado CG190/2013 en lo relativo a la otrora coalición Compromiso por México correspondiente a eventos monitoreados y verificados. (SUP-RAP-121/2013, Agravio 7; Apartado B, Sección de ejecución).

La Sala Superior ordenó en relación con la conclusión 45 lo siguiente:

“En mérito de lo narrado, lo conducente es revocar las consideraciones que integran la conclusión 45 del informe de ingresos y gastos de campaña de los candidatos de la coalición “Compromiso por México, a fin de que la autoridad responsable, en el ámbito de sus atribuciones:

a) Valore pormenorizadamente la documentación que mediante oficio CAPC/033/13, la otrora coalición presentó al Director General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a fin de aclarar el contenido del oficio UF-DA/4666/13 de quince de mayo de dos mil trece, y

b) Funde y motive su decisión respecto a la cuantificación del gasto presumiblemente no reportado, respecto a los eventos 6, 10, 11, 12, 23, 33, 43, 44 y 47 que desplegó la coalición “Compromiso por México”.

En ese sentido, el monto de la conclusión se modifica para quedar de la siguiente forma:

Conclusión	Monto original	Monto final
45	\$22,105,810.33	\$17,260,408.10

En congruencia con lo anterior, se procede a modificar el dictamen consolidado de la coalición referida como a continuación se plantea, emitiéndose pronunciamiento únicamente respecto de aquellas cuestiones señaladas por la Sala Superior, por lo que aquellos apartados que no fueron revocados no serán referidos:

Conclusión 45

Mediante oficio UF-DA/12000/12 del 22 de octubre de 2012, la Unidad de Fiscalización le informó respecto de 47 eventos a los cuales asistió el entonces candidato a la presidencia de la República y que fueron verificados por la Unidad de Fiscalización; sin embargo, de la revisión a los Informes de Campaña de los Senadores y Diputados de la Coalición Compromiso por México y del Partido Revolucionario Institucional, no se observaron gastos vinculados con los eventos en comento, por lo anteriormente observado se origina la conclusión 45.

En consecuencia, al revisar las respuestas de los oficios de errores y omisiones presentadas por la otrora coalición Compromiso por México se llegó a la conclusión que, al no reportar los gastos incurridos en 42 eventos, los cuales se encuentran detallados en los anexos señalados en el párrafo que antecede, por un importe de \$9,977,318.23 de gasto centralizado y de \$12,128,492.10 de gasto directo, haciendo un total de **\$22,105,810.33**, la otrora coalición incumplió con lo establecido en el artículo 83, numeral 1, inciso d), fracción IV del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes.

Del análisis a la documentación presentada por la otrora Coalición “Compromiso por México”, mediante escrito de alcance CACP/033/13, se determinó que presenta lo siguiente:

- ❖ **Anexo 1.** Contiene un CD con cédulas de trabajo elaboradas por la otrora coalición “Compromiso por México”, en las cuales se identifican los conceptos siguientes:

Respecto al evento

- Número de evento
- Fecha del evento
- Estado en el cual se realizó el evento
- Lugar donde se llevó acabo el evento
- Tipo de evento

Respecto a la propaganda distribuida y los gastos realizados

- Concepto del gasto gastos realizado o de la propaganda distribuida
- Número de piezas
- Costo por producto
- Costos total por evento

Como se muestra a continuación:

No.	FECHA	ESTADO	LUGAR			TIPO
10	17/04/2012	Jalisco	Salón El Oro, Puerto Vallarta			Mitín
INMUEBLE RENTADO			LONAS PUBLICITARIAS			GASTO POR EVENTO
CANTIDAD	C.U.	TOTAL	CANTIDAD	C.U.	TOTAL	
1	23,200.00	23,200.00	2	52.20	104.40	23,304.40

- ❖ **Anexo 2.** Contiene pólizas por diversos conceptos de gastos correspondientes a planeación, logística y propaganda de los eventos.
- ❖ **Anexo 3.** Contiene el formato REL-VIAPS-PRES en el cual se detallan gastos por concepto de transportación aérea y terrestre utilizado por el propio candidato para su traslado a diferentes eventos, así como, pólizas contables que amparan gastos por concepto de transportación aérea, terrestre y hospedaje.
- ❖ **Anexos 4 y 5.** Contienen pólizas de la contabilidad del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a adquisición de mobiliario y equipo, mismas que se amparan con facturas y contratos, así como, pólizas de aplicación de depreciación por el periodo en que duró la campaña; y pólizas por concepto de pago de logística para la utilización o colocación de los bienes como: pantallas, templete, vallas, planta de luz, sillas para diversos eventos; cumplen con la normatividad establecida; sin embargo, también se observó propaganda, mobiliario y equipo.
- ❖ **Anexo 6.** La otrora coalición proporcionó una integración del gasto centralizado referente a propaganda genérica que prorrateó; sin embargo, corresponde únicamente a la propaganda que adquirió y registró en forma global, mas no la propaganda identificada en el monitoreo de los eventos.

Del análisis a la documentación presentada se determinó lo siguiente:

- Por lo que corresponde a las cédulas de trabajo identificadas en el Anexo 1, contienen una integración del costo de los eventos, así como el concepto del gasto que fue erogado en cada uno de los eventos, el costo unitario, el número de artículos que se repartieron en cada evento y el monto total de cada evento.
- Por lo que corresponde al Anexo 2, se identificaron en la contabilidad gastos por concepto de planeación, logística y propaganda; sin embargo, la otrora coalición no presentó evidencia documental que acreditara la distribución de la propaganda en los eventos, tales como kardex, notas de entrada y salida, asimismo, las facturas no indicaban a que evento correspondían, estas fueron registradas por concepto de propaganda, situación que originó que esta autoridad no pudiera realizar la vinculación de los gastos con los eventos.
- Respecto a los Anexos 4 y 5, después de un análisis exhaustivo a la información proporcionada por la otrora coalición, se determinó que aun cuando proporcionó las pólizas de la contabilidad del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a la adquisición de mobiliario y equipo y pólizas por concepto de pantallas, templete, vallas, planta de luz, sillas para diversos eventos se determinó que cumplen con la normatividad; por lo que esta autoridad en los casos en los cuales identificó la vinculación con algún evento se consideró el gasto como reportado.

De lo anterior, esta Unidad Técnica de Fiscalización en atención a lo mandado por la Sala Superior, realizó una nueva valoración de los eventos 6, 10, 11, 12, 23, 33, 43, 44 y 47, para lo cual realizó las siguientes acciones:

- ❖ Se consideró como cantidad de propaganda repartida en cada uno de los eventos, la señalada por la otrora coalición “Compromiso por México” en dicho anexo.
- ❖ En los casos en los cuales la cantidad de la propaganda repartida por la otrora coalición coincidía con lo que determinó la entonces Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, no se realizaron modificaciones a las cifras ya determinadas.
- ❖ En los casos en los cuales la propaganda determinada por la entonces Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos no

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

coincide con la reportada por la otrora coalición, se consideró como propaganda distribuida la relacionada en el Anexo 1; misma que la otrora coalición reconoció haber distribuido en los eventos.

- ❖ En los casos en los cuales la propaganda determinada por la entonces Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, no fue reconocida por la otrora coalición como distribuida en los eventos, no fue considerada para efectos de la determinación del gasto no reportado, por lo que solo fue considerada la propaganda que la otrora coalición reconoce haber distribuido.
- ❖ De lo anterior, la cantidad de propaganda que se disminuye para efectos de la determinación de los gastos no reportados es la que se detalla en la columna Diferencia del siguiente cuadro.

EVENTO	ACTA DE VERIFICACIÓN		CÉDULA DE GASTOS ANEXO 27	GASTOS VINCULADOS EN ESCRITO DE ALCANCE CACP/033/13	DIFERENCIA
	INSUMO	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	
6	Lona	-	3	3	0
10	Lona	-	2	2	0
11	Pancartas-Pendones	-	625	625	0
	Banderines	-	1,000	1,000	0
	Gorras	-	1,000	1,000	0
	Playeras	-	1,000	1,000	0
	Aplaudidores	-	500	500	0
12	Pancartas-Pendones	-	3,500	0	3,500
23	Banderas	-	500	500	0
	Abanicos	-	1,000	1,000	0
	Pulseras	-	1,000	1,000	0
33	Playeras	-	3,400	3,000	400
43	Pancartas-Pendones	-	7	7	0
	Aplaudidores	-	2,500	1,000	1,500
	Playeras	-	1,250	1,000	250
	Bastidores	-	20	20	0
44	Aplaudidores	-	10,000	10,000	0
	Bolsas	-	10,000	5,000	5,000
	Sombrillas	-	10,000	1,000	9,000
	Volantes	-	10,000	10,000	0
	Banderines	-	10,000	5,000	5,000
	Gorras	-	10,000	5,000	5,000
	Playeras	-	10,000	5,000	5,000
	Chamarras	-	5,000	0	5,000
	Caras del candidato	-	10,000	5,000	5,000
47	Camisas	-	1,250	0	1,250
	Banderas	-	4,000	2,500	1,500
	Volantes	-	5,000	5,000	0
	Pendones	-	100	100	0
	Banderines	-	250	250	0
	Gorras	-	4,000	4,000	0
	Pulseras	-	4,000	4,000	0
	Playeras	-	4,000	4,000	0
	Aplaudidores	-	4,000	4,000	0
	Bolsas	-	0	4,000	4,000
	Cuadernos	-	4,000	4,000	0
	Sombrillas	-	4,000	4,000	0
	CD	-	4,000	4,000	0
	Lápiz Labial	-	4,000	4,000	0
	Calendarios	-	4,000	4,000	0

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

De lo anterior, se realizó de nueva cuenta la determinación de la propaganda no reportada misma que se refleja en el Anexo 27, quedando de la siguiente forma:

EVENTO	ANEXO 27	
NO.	MONTO ORIGINAL	MONTO FINAL
6	\$1,030.59	\$1,030.59
10	687.06	687.06
11	125,782.50	125,782.50
12	721,910.00	55,860.00
23	171,006.41	82,846.41
33	113,612.59	102,440.59
43	69,700.92	53,088.42
44	4,479,085.57	679,335.57
47	1,051,650.68	722,443.18
TOTAL	\$6,734,466.32	\$1,823,514.32

Cabe señalar, que se aplicaron los cambios respectivos a los eventos 6, 10, 11, 12, 23, 33, 43, 44 y 47, de conformidad con lo presentado en el alcance; sin embargo, se advierte que existió propaganda de la cual la otrora coalición no se manifestó al respecto.

En consecuencia, y derivado del análisis realizado a la conclusión 45, se determina una modificación al monto global de los Anexos 27 y 28, los cuales se adjuntan a este oficio, para los efectos conducentes. A continuación se presenta a nivel global los cambios que sufrieron cada uno de éstos:

ANEXO	MONTO ORIGINAL	MONTO FINAL
ANEXO 27	12,128,492.10	\$7,217,540.10
ANEXO 28	9,977,318.23	10,042,868.00

Por tal motivo, la observación se consideró no subsanada por lo que hace a los candidatos referidos en los anexos señalados en el párrafo que antecede por un importe de \$10,042,868.00 de gasto centralizado y \$7,217,540.10 de gasto directo, haciendo un total de \$17,260,408.10, los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:

CANDIDATO	CENTRALIZADO	DIRECTO	TOTAL
EPN	\$1,225,093.60		
Diputados y Senadores	8,817,774.40		
Subtotal Federal	\$10,042,868.00	\$7,217,540.10	\$17,260,408.10
Local	3,019,968.09	0.00	3,019,968.09
TOTAL DEL GASTO	\$13,062,836.09	\$7,217,540.10	\$20,280,376.19

En consecuencia, al no reportar los gastos incurridos en 42 eventos, los cuales se encuentran detallados en los anexos señalados en el párrafo que antecede, por un importe de \$10,042,868.00 de gasto centralizado y de \$7,217,540.10 de gasto directo, haciendo un total de \$17,260,408.10, la otrora coalición incumplió con lo establecido en el artículo 83, numeral 1, inciso d), fracción IV del COFIPE y 149 numeral 1 del RF.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Derivado de lo anterior, los montos de prorratio entre los candidatos beneficiados se acumulan en los **Anexos A, B y C** del presente Dictamen.

Al respecto, el monto involucrado en la conclusión 45 corresponde a un importe de **\$17,260,408.10 (Diecisiete millones doscientos sesenta mil cuatrocientos ocho pesos 10/100 MN-)**.

Conclusiones finales del dictamen consolidado de la otrora coalición Compromiso por México.

Eventos

45. La otrora Coalición omitió reportar gastos por concepto de operativos y de propaganda distribuida en 42 de los 47 eventos monitoreados y verificados por esta autoridad, realizados por el entonces candidato a la presidencia de la República el Lic. Enrique Peña Nieto, por un importe de \$10,042,868.00 de gasto centralizado y de \$7,217,540.10 de gasto directo, haciendo un total de \$17,260,408.10.

Tal situación incumple con lo dispuesto en los artículos 83, numeral 1, inciso d), fracción IV del COFIPE y 149, numeral 1 del RF.

E. Modificaciones al Dictamen Consolidado CG190/2013 en lo relativo a la otrora coalición Compromiso por México correspondientes a eventos monitoreados y verificados. (SUP-RAP-121/2013, Agravio 8; Apartado B, Sección de ejecución).

El órgano jurisdiccional revocó las conclusiones 133, 173 y 175, las cuales fueron analizadas en la sentencia de mérito y la Sala Superior determinó lo que a continuación se plantea:

“Ahora bien, del análisis del Anexo 60 del dictamen consolidado de la otrora coalición “Compromiso por México”, se tiene que se asentó en dos ocasiones un mismo registro, relacionado con el Distrito 5, del Distrito Federal, por un monto de \$183,354.00.

La situación acaecida, impacta significativamente en la conclusión a la que finalmente se arribó, dado que al momento se (sic) individualizar la sanción, se tuvo por no justificadas un número inexacto de facturas por un monto de \$2,175,068.18, cuando lo correcto era tener por no demostrado un equivalente a \$1'991,714.18, cantidad que se obtiene luego de descontar la factura duplicada.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

De la misma suerte, existe duplicidad en un gasto que se tuvo por no reportado, ya que se reiteran las mismas consideraciones, en las conclusiones 173 y 175.

(...)

Esto es así, puesto que por lo que hace a la conclusión 173, se estimó que no se presentaron 34 copias de cheques (9/25) que no presentaron la totalidad de los datos exigidos por un monto de \$747,882.10, que divididos importan \$409,482.70 y \$338,399.40, respectivamente, mientras que por lo que hace a la conclusión 175, se razonó que no se presentaron 25 copias de cheques que carecen de datos consistentes en fecha, nombre del beneficiario y en algunos casos firma, por un importe de \$409,482.70

En atención a lo señalado en el presente apartado, lo conducente es revocar la resolución controvertida, respecto a las conclusiones 133, 173 y 175, del informe de la coalición “Compromiso por México”, a fin de la autoridad responsable realice un nuevo análisis de dichos apartados, sin contabilizar la documentación que ha quedado evidenciada como duplicada, para que luego, reinvidualice la sanción y emita la determinación que en derecho proceda.”

Por lo tanto, esta autoridad procedió actuando en atención a lo ordenado, derivado de lo cual los montos de las conclusiones sufrieron las siguientes modificaciones:

Conclusión	Monto original	Monto final
133	\$2,175,068.18	\$1,974,419.12 ²³
173	\$747,882.10	\$338,399.40
175	\$409,482.70	\$409,482.70

En congruencia con lo anterior, se procede a modificar el dictamen consolidado de la coalición referida como a continuación se plantea, emitiéndose pronunciamiento únicamente respecto de aquellas cuestiones señaladas por la Sala Superior, por lo que aquellos apartados que no fueron revocados no serán referidos:

Conclusión 173

La conclusión 173 deriva de la revisión a la cuenta “Gastos de Propaganda”, varias subcuentas, en la que observaron pólizas que presentaron como soporte documental facturas por concepto de propaganda utilitaria y copias de los cheques

²³ Este monto disminuye en \$200,649.04 debido a que la variación se compone de dos disminuciones ordenadas por la Sala Superior en el SUP-RAP-121/2013, una en el agravio 3 que ya ha sido abordado (\$17,295.06), y otra en el presente agravio (\$183,354.00).

nominativos; sin embargo, estos carecían de la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”.

Una vez concluido el período para aclarar errores y omisiones por parte de la coalición, la autoridad realizó un análisis de la documentación, subsanando lo que pudo corregir o aclarar el sujeto obligado, y determinándose que la observación no quedó atendida por \$747,882.10.

En consecuencia, toda vez que emitió 9 cheques que carecen de la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”, la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 153 del Reglamento de Fiscalización.

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes.

En acatamiento a lo señalado por la Sala Superior, esta autoridad no considerará el monto duplicado en el dictamen original por un monto de \$409,482.70, considerándose únicamente lo relativo a que la otrora coalición presentó las copias de los cheques sin la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”; razón por la cual la observación no quedó atendida por **\$338,399.40**.

En consecuencia, toda vez que emitió 9 cheques que carecen de la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”, la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 153 del RF. **(Conclusión 173)**

Al respecto, el monto involucrado en la conclusión 173 corresponde a un importe de **\$338,399.40 (Trescientos treinta y ocho mil trescientos noventa y nueve mil pesos 40/100 MN)**.

Conclusión 175

La conclusión 175 se deriva de la revisión a la cuenta “Gastos de Propaganda”, varias subcuentas, en la que se observaron pólizas que presentaron como parte de su soporte documental facturas por concepto de propaganda utilitaria y copia de cheques; sin embargo, del análisis a las copias de los cheques se constató que no presentan la totalidad de los datos, los casos en comento fueron detallados en el Anexo 6 del oficio UF-DA/3701/13.

De la revisión a las respuestas de la otrora coalición Compromiso por México manifestó que proporcionaría la documentación en el momento que contara con los

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

elementos necesarios; **Anexo 74** del Dictamen sin embargo, la coalición no presentó aclaración ni documentación alguna; razón por la cual, la observación no quedó subsanada, por \$409,482.70.

En consecuencia, al presentar 25 copias de cheques que carecen de datos consistentes en fecha, nombre del beneficiario y en algunos casos firma, la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso k) Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales por un monto de **\$409,482.70**.

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes.

En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-121/2013, se procedió a modificar el monto involucrado en la conclusión **173** eliminando la duplicidad del monto involucrado de \$409,482.70, por lo que en el caso de la conclusión 175, quedó en el mismo sentido, como se muestra a continuación:

Aun cuando la otrora coalición manifestó que proporcionaría la documentación en el momento que contara con los elementos necesarios; a la fecha de elaboración del presente dictamen no presentó aclaración ni documentación alguna; razón por la cual, respecto a las pólizas señaladas con (2) en la columna “Acatamiento SUP-RAP-121/2013” del **Anexo 74** del presente Dictamen, la observación no quedó atendida, por \$409,482.70.

En consecuencia, al presentar 25 copias de cheques que carecen de datos consistentes en fecha, nombre del beneficiario y en algunos casos firma, por **\$409,482.70**, la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso k) Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales. **(Conclusión 175)**

Al respecto, el monto involucrado en la conclusión 175 corresponde a un importe de **\$409,482.70 (Cuatrocientos nueve mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 70/100 MN)**.

Conclusiones finales del dictamen consolidado de la otrora coalición Compromiso por México.

Propaganda

173. La otrora coalición emitió 9 cheques que carecen de la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” por \$338,399.40.

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso k) del COFIPE.

175. La otrora coalición presentó 25 copias de cheques que carecen de datos consistentes en fecha, nombre del beneficiario y en algunos casos firma, por \$409,482.70

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso k) del COFIPE.

F. Modificaciones al Dictamen Consolidado de la otrora coalición Compromiso por México correspondiente al análisis de la conducta consistente en aplicar recursos económicos de las campañas de candidatos propuestos por la coalición Compromiso por México, a campañas de candidatos que no formaron parte del convenio de coalición (SUP-RAP-124/2013; Apartado A, Tema 2, Sección de ejecución).

Por lo que hace al tema en comento la autoridad jurisdiccional determinó entre otras cuestiones lo siguiente:

“Como se ve, es posible que en las circunstancias señaladas, se estuviera ante la infracción a lo dispuesto en los artículos 98, párrafo 2, del Código y 125, párrafo 1, del Reglamento, cuyo contenido ha sido referido en párrafos precedentes.

En la resolución impugnada, la autoridad responsable no hizo un análisis de dicha posibilidad, a pesar de que detectó las hipótesis señaladas. En consecuencia, la resolución impugnada es incompleta en el aspecto mencionado, puesto que no contiene pronunciamiento alguno al respecto. Es decir, no señala si al haber detectado propaganda en la etapa de campaña del proceso electoral federal 2011-2012 las irregularidades destacadas en la transcripción que antecede, ello se tradujo en infracción a los artículos citados.

La consecuencia de haber considerado parcialmente fundado el agravio en examen se precisará en un apartado especial de la presente ejecutoria, el cual contendrá el efecto derivado de todos los agravios que resulten fundados.

(...)

a) En lo concerniente al subtema “III. Tope de gastos de campaña y prorrateo a candidatos no coaligados”, se ha considerado fundado el punto 4 de la síntesis de agravios relacionados, en el que los apelantes alegaron violación a lo dispuesto en los artículos 98, párrafo 2, del Código y 125, párrafo 1, del Reglamento.

En consecuencia, la autoridad responsable deberá analizar si la conducta consistente en aplicar recursos económicos de las campañas de candidatos propuestos por la coalición Compromiso por México, a campañas de candidatos que no formaron parte del convenio de coalición, vulneró lo dispuesto en los artículos 98, párrafo 2 y 125, párrafo 1 citados y, a partir de la conclusión a la que arribe, actúe en consecuencia.”

Una vez señalado lo anterior, esta autoridad procede en estricto acatamiento a lo señalado por la Sala Superior a analizar la conducta relacionada con la coalición en torno al beneficio que tuvieron diversos gastos que fueron prorrateados a candidatos postulados por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, esto es, el prorrateo entre los 510 candidatos registrados entre cada uno de los partidos (PRI, PVEM) y la misma Coalición.

En ese sentido debe decirse que de las imágenes muestra que presentó la Coalición, a la luz del reporte de gastos que realizó, se observaron diversas hipótesis que encuadran dentro del supuesto de que una parte de la propaganda de la campaña para el cargo de Presidente de la República difundida por la coalición benefició a otras campañas para cargos de Diputado Federal o de Senador registrados por la propia coalición, así como a candidatos registrados entre cada uno de los partidos (PRI y PVEM) en lo individual, es decir, fuera de la figura de la Coalición.

Cabe decir que en el dictamen consolidado la autoridad únicamente ordenó sumar al tope de gastos aquellos que fueron prorrateados entre la coalición y los partidos

políticos, sin pronunciarse de la posible vulneración de los artículos 98, párrafo 2, del Código Electoral aplicable, y 125, párrafo 1, del Reglamento.

Por ende, se debe partir del contenido de las disposiciones antes citadas, en las que se establece lo siguiente:

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 98

(...)

2. En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos coaligados, según el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes.

(...)”

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 125.

1. En el caso de las coaliciones parciales, el partido que hubiere sido designado como responsable del órgano de finanzas de la coalición deberá separar los gastos que realice en beneficio propio y en beneficio de la coalición. En consecuencia, queda prohibida la facturación conjunta de bienes y servicios a nombre de un partido coaligado cuyo beneficio sea tanto para el propio partido como para la coalición.”

Del análisis de los preceptos transcritos en las partes respectivas, de cuya inobservancia esta autoridad no se pronunció en el dictamen primigenio, debe considerarse que los mismos son, en principio, aplicables únicamente respecto de las coaliciones y, más específicamente a las coaliciones parciales conforme a lo que dispone el segundo de los artículos citados.

Es el caso que la otrora coalición Compromiso por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, fue constituida de esa forma, es decir, bajo el esquema de coalición parcial, por lo que cada partido postuló candidatos dentro de la figura de la coalición en aquellos distritos electorales federales que fueron detallados en el convenio de coalición respectivo, postulando también candidatos de manera individual en aquellos distritos electorales federales en que no operó la figura de la coalición.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Esto trajo como consecuencia que para fines del prorrateo que en su momento determinó esta autoridad, derivado del análisis de los gastos reportados por los sujetos obligados de mérito, existieron 510 campañas involucradas a nivel nacional, en distintos ámbitos geográficos pero participando en algunos casos de gasto concurrente que benefició a los candidatos de la coalición, así como a candidatos postulados de manera individual por los partidos políticos.

Conforme al artículo 125 del Reglamento de Fiscalización vigente para el proceso electoral federal 2011-2012, el partido responsable del órgano de finanzas de la coalición, en este caso el Revolucionario Institucional, tenía la obligación de distinguir aquellos gastos facturados tanto para la coalición como para el partido político en lo individual, lo que significa que debía tener ordenada la información a fin de poderla reportar en las campañas respectivas, es decir, dentro de la contabilidad del partido político se daría cuenta del gasto que benefició al partido político, y en la cuenta del gasto de la coalición debía registrar todo aquel gasto que benefició a cualquiera de los candidatos de la coalición.

En una segunda parte, el mismo artículo analizado refiere una prohibición, y es la de no realizar una facturación conjunta de bienes o servicios a nombre de uno de los partidos coaligados cuyo beneficio sea tanto para el partido político como para la coalición.

A este respecto, debe analizarse cuidadosamente lo que se entiende por facturación conjunta que puede entenderse como un documento que se encuentre a nombre de dos o más sujetos obligados, sin embargo, también puede darse otra acepción más amplia, para lo cual se debe entender el sentido de la norma, por lo que debe aplicarse una interpretación funcional a fin de identificar el significado de dicha cuestión atendiendo la intención del legislador, sus fines y las consecuencias de un significado.

El artículo tiene un contenido dirigido a la fiscalización de los recursos de partidos políticos y coaliciones, en donde se busca garantizar que exista equidad en la contienda. Para tal fin, se establecen topes de gastos de campaña que implican un límite a los recursos que pueden erogar los candidatos o las campañas, lo que resulta aplicable para todos los que se encuentran en un mismo tipo de elección conforme al cargo respectivo.

Por ello, todos los candidatos a un cargo específico cuentan con el mismo tope, lo que implica que ninguno de ellos puede gastar más recurso que otro, tomando por tanto una ventaja y generando inequidad en la contienda. Dicha restricción es

aplicable no solamente al gasto efectivamente erogado, sino por tanto al beneficio obtenido, pues afirmar lo contrario llevaría a permitir la inequidad derivada de la conducta de un candidato que no erogara más del tope de gastos aplicable a su campaña, pero que se beneficiara por el gasto erogado en otras.

Para salvaguardar tal cuestión es que se establecen criterios de prorrateo en donde cuando una campaña beneficia a otra con un gasto específico, o bien, cuando una propaganda beneficia a varias candidaturas por las características del gasto, es que se debe determinar el beneficio resultante para los candidatos involucrados a fin de asignar a cada uno un porcentaje del gasto que le está beneficiando.

Lo anterior es relevante puesto que en el caso que nos ocupa, no debe entenderse que la facturación conjunta se refiere únicamente al gasto involucrado resultante de documentos (facturas) a nombre de dos o más sujetos obligados, sino por tanto a gastos que beneficien a más de una candidatura, lo que nos lleva a entender que si queda prohibida tal facturación conjunta, la intención del legislador es restringir el beneficio que podría obtener el candidato de un partido político por gasto que tenga como origen la cuenta de una coalición.

A este respecto vale la pena hacer otra puntualización en torno a la dispersión del gasto. Tomemos como ejemplo la campaña a Diputados Federales; cuando un partido político decide no postularse en coalición sino contender por la vía individual, este tiene un margen de dispersión de trescientas candidaturas, lo que significa que un gasto a nivel nacional, afecta a trescientos topes de gasto o contabilidades.

Los partidos políticos que deciden postularse en coalición cuentan con un espectro de dispersión, equivalente a la cantidad de candidatos postulados por la propia coalición. Esto es importante porque si una coalición es total, los candidatos de la coalición serán trescientos, al igual que en el caso de los partidos políticos, por lo que su espectro de dispersión es el mismo y por tanto, un gasto a nivel nacional impactará de la misma forma que en el caso de los partidos.

El artículo analizado establece la restricción para las coaliciones parciales, la lógica del artículo debe entenderse desde la óptica de que si se permite que los candidatos postulados en lo individual por un partido político que a su vez cuenta con candidatos postulados dentro de una coalición parcial, el espectro de dispersión es mucho mayor y así, no obstante que el beneficio sea el mismo, el gasto posible será mayor, lo que conlleva inequidad.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

A mayor explicación, tomando ahora como ejemplo el caso que nos ocupa, la coalición Compromiso por México postuló a los siguientes candidatos:

	PRESIDENTE	DIPUTADOS	SENADORES	TOTAL
Compromiso por México	1	199	20	220
PRI		101	44	145
PVEM		101	44	145
TOTAL	1	401	108	510

En ese sentido, su margen de dispersión en un gasto nacional era de 510 candidatos, por lo tanto, un gasto de campaña se distribuiría entre los quinientos diez conforme a los criterios de prorrateo, sin embargo, un partido político que no se hubiera coaligado, o que lo hubiera hecho en el esquema de coalición total, tendría lo siguiente:

PRESIDENTE	DIPUTADOS	SENADORES	TOTAL
1	300	64	365

Esto evidencia que el margen de dispersión es mucho menor, ya que el espectro es de trescientas sesenta y cinco candidaturas, correspondiéndole mayor porcentaje de gasto a los candidatos de un partido político o coalición que hayan postulado candidatos bajo el segundo esquema, por una propaganda con el mismo nivel de beneficio que la misma propaganda dispersada entre candidatos de la coalición referida en el primer esquema.

Esto es lo que el legislador buscó evitar al prohibir la facturación conjunta, la cual es aplicable únicamente a las coaliciones parciales, que es donde se puede dar el beneficio referido puesto que al haber más candidatos, podría haber mayor beneficio por tener más propaganda que impacta menos al tope de gastos de cada uno de ellos.

Lo anterior no se traduce solo en un esquema de estrategia de los partidos políticos, sino en un auténtico mecanismo de equidad que el legislador estableció en el artículo 125 del Reglamento de Fiscalización en relación con el 98 del COFIPE.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Por tanto, respecto de la prohibición precisada en el artículo citado esta autoridad concluye que:

1. Es aplicable a coaliciones parciales y a los partidos que participan en ella.
2. Consiste en no beneficiar con un mismo gasto a candidatos de una coalición y a candidatos postulados por un partido político de manera individual.
3. Es un mecanismo que busca garantizar la equidad en la contienda respecto de los gastos empleados en las campañas.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la autoridad detectó que en los gastos reportados por la coalición Compromiso por México también se observó beneficio para candidatos tanto del PRI como del PVEM, lo que se tradujo en que la autoridad fiscalizadora ajustara el prorrateo respectivo asignando el gasto que correspondiera aplicando los criterios de prorrateo.

Esta medida de la autoridad no implica validar la prohibición del artículo 125 antes citado, sino que al haber un beneficio, se debe asignar el gasto respectivo a las campañas beneficiadas, no hacerlo generaría un mayor perjuicio puesto que no se estaría cuantificando propaganda que impulsó a una candidatura a través de gasto conjunto.

No obstante lo anterior, una vez distribuido el gasto de la coalición que benefició a las candidaturas de los partidos, la autoridad determina en congruencia con lo ordenado por la Sala Superior, que la coalición Compromiso por México vulneró lo dispuesto por el artículo 125 del Reglamento de Fiscalización, en virtud de que del ejercicio realizado por la autoridad en uso de sus atribuciones, determinó gastos que beneficiaron a las campañas del partido político por \$63,997,753.17, contenido en el anexo 19 del dictamen, los cuales fueron reportados por la Coalición referida.

En consecuencia, al beneficiar la Coalición con gastos por un importe de \$63,997,753.17, a candidatos postulados en lo individual por el PRI y el PVEM, esta incumplió con lo dispuesto en el artículo 98, párrafo 2, del Código y 125, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización.

Conclusiones finales del dictamen consolidado de la otrora coalición Compromiso por México

Propaganda

228 bis. La otrora coalición “Compromiso por México” aplicó recursos económicos de las campañas de candidatos propuestos por la coalición Compromiso por México, a campañas de candidatos que no formaron parte del convenio de coalición, por un importe de \$63,997,753.17.

G. Modificaciones al Dictamen Consolidado de la otrora coalición Compromiso por México correspondiente a la actualización de rebases a topes de gastos de campaña.

Una vez que fueron determinados diversos gastos de campaña adicionales para las candidaturas de la Coalición Compromiso por México, se advierten ajustes a las cifras que originalmente fueron determinadas.

Asimismo, se contemplan aquellos casos derivados de la Resolución INE/CG198/2017 en la que se determinaron gastos adicionales a los determinados en el presente acatamiento, motivo por el cual el ajuste final de cifras se detalla en el **Anexo C-Bis** de la presente Resolución.

Del presente acatamiento se determinó que 5 candidatos al cargo de Diputado Federal tuvieron gastos superiores al tope máximo de los permitidos para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, sumando en total un rebase al tope de gastos de campaña por \$78,502.92.

Asimismo, 149 candidatos al mismo cargo, habían rebasado el tope de gastos de campaña de acuerdo a lo que determinó el Consejo General en el CG190/2013 y, al considerar el gasto que mediante el acatamiento a las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se acumuló, habiendo contemplado además lo resuelto en el INE/CG198/2017²⁴, dichos candidatos ampliaron el rebase que había sido determinado originalmente por un monto adicional de \$3,360,329.73.

²⁴ Del ajuste se advierte que dos candidatos a Diputados Federales en el estado de Veracruz ampliaron su rebase al tope de gastos de campaña.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Por lo anterior, al rebasar el tope de gastos de campaña de 154 candidatos al cargo de Diputado Federal por un importe de \$3,438,832.65, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 229, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Acuerdo CG433/2011. **(Conclusión 50.3)**

Adicionalmente, se ordena a la Secretaría del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que de vista a las autoridades correspondientes.

Conclusiones finales del dictamen consolidado de la otrora coalición Compromiso por México

50.3 Derivado del prorrateo de publicidad que beneficio al candidato a presidente y uno o más candidatos, se advierte el rebase de topes de gastos de Campaña Federal de 154 Diputados por \$3,438,832.65.

Tal situación constituye un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 229, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Acuerdo CG433/2011.

Adicionalmente, se ordena a la Secretaría del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que dé vista a las autoridades correspondientes.

10. Modificaciones a la Resolución CG190/2013, en lo relativo a la otrora coalición Compromiso por México contemplado en el considerando 9.3, en relación al considerando 9 del presente acatamiento.

Por cuestión de método se dividen en apartados los temas relacionados con las modificaciones al considerando la resolución de la otrora coalición Compromiso por México, como a continuación se presenta.

Apartados

A. Modificaciones a la Resolución CG190/2013 en lo relativo a la Coalición Compromiso por México respecto del nuevo análisis de faltas formales, así como de conductas sustanciales que se consideran faltas formales en relación a los apartados B y E, considerando 9 del presente acatamiento. (SUP-RAP-121/2013, Agravios 3 y 8; Apartado B, Sección de ejecución)

CONSEJO GENERAL SUP-RAP-124/2013 Y OTROS

Derivado de los ajustes realizados al dictamen consolidado de la coalición, se procederá a modificar la resolución **CG190/2013** en lo tocante a su considerando **9.3 inciso a)**, así como al correlativo Resolutivo **TERCERO**, aclarando que en el inciso a) se considerarán los montos de las faltas formales que no tuvieron modificación derivado del **SUP-RAP-121/2013**, al haber quedado firmes, ya que la imposición de la sanción en ese caso debe tomar en cuenta la totalidad de las conductas al realizarse el análisis conjunto de las mismas por su naturaleza.

Asimismo, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por la Sala Superior en el SUP-RAP-121/2013, en lo correspondiente al agravio 6, esta autoridad sancionará las conclusiones **23, 92, 121 y 159**, dentro del bloque de faltas formales, y las conclusiones **61, 100, 158, 199 y 201** no se agravaran por la “pluralidad de las conductas”.

Asimismo, dentro de la imposición de la sanción de las faltas formales, debe decirse que en aquellos casos en los que disminuyó el monto involucrado en la conclusión, la sanción se redujo proporcionalmente al valor de dicha conclusión dentro del cúmulo de las conductas que constituyeron la sanción por la falta formal, con lo que se busca tener racionalidad en la disminución de la sanción, así como congruencia respecto del monto que originalmente se determinó, en relación con la variación de las actualización de las conductas determinadas en el presente acatamiento. Todo lo anterior se sanciona en los siguientes términos.

9.3 Coalición Compromiso por México

De la revisión llevada a cabo al dictamen referido y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió la otrora Coalición Compromiso por México, integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, son las siguientes:

a) **142** faltas de carácter formal: conclusiones **7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 50, 52, 53, 54, 62, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217 y 218. (...)**

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, mismas que tienen relación con el apartado de ingresos y egresos, las cuales se analizarán por temas.

EGRESOS

Gastos de Propaganda

Gastos Directos de Propaganda Utilitaria

Conclusión 23

"La otrora Coalición omitió presentar dos facturas en original por concepto de renta de bienes inmuebles y equipo, por un importe de \$27,000.00."

(...)

Gastos de Propaganda en Páginas de Internet

Conclusión 77

"La otrora coalición omitió presentar 10 contratos de prestación de servicios anexos a sus respectivas pólizas, por \$848,199.58."

Conclusión 78

"La otrora coalición omitió presentar las muestras de 14 facturas anexas a sus respectivas pólizas, por \$1,792,560.40."

(...)

Conclusión 80

"La otrora coalición omitió presentar las hojas membretadas de 6 facturas, las facturas y las hojas membretadas de 17 facturas por \$2,133,519.18 (\$637,699.79 y \$1,495,819.39)"

(...)

Conclusión 82

"La otrora coalición omitió presentar las hojas membretadas con la totalidad de datos, de 52 facturas por \$4,670,253.45"

(...)

Propaganda

Conclusión 88

"La otrora coalición omitió presentar 1 contrato de prestación de servicios por \$18,254.00"

(...)

Gastos en prensa

Conclusión 92

"No presento la documentación soporte correspondiente a gastos de una factura por concepto de medias impresos, consistente en facturas, relación de inserciones, contratos de prestación de servicios y la pagina completa original de la publicación, por \$267,020.40."

Gastos de Propaganda en Páginas de Internet

Conclusión 121

"La otrora coalición omitió presentar 3 facturas en original del proveedor Impresora y Editorial, S.A. de C. V" par un monto de \$87,377.40."

(...)

Gastos en espectaculares colocados en la vía pública

Conclusión 132

"La otrora Coalición presentó 22 contratos de prestación de servicios en copia simple por \$478,162.82."

Conclusión 133

"La otrora coalición omitió presentar los contratos de prestación de servicios de 82 facturas, anexas a sus Respectivas pólizas por \$1,974,419.12"

Conclusión 134

"La otrora coalición presentó 6 muestras ilegibles por \$193,139.00."

Conclusión 135

"La otrora coalición omitió presentar las muestras de 62 facturas anexas a sus respectivas pólizas, por \$1,801,648.87."

Conclusión 136

"La otrora coalición omitió presentar los informes pormenorizados de 266 facturas con su respectiva hoja de cálculo de Excel anexas a sus respectivas pólizas, por \$8,379,854.15 (\$20,880.00 y \$8,358,974.15)."

Conclusión 137

"La otrora Coalición omitió presentar las hojas membretadas de 58 proveedores, por \$2,660,880.14."

Conclusión 138

"La otrora coalición omitió presentas 65 hojas membretadas anexas a sus respectivas pólizas de registro por \$2,029,731.38."

(...)

Conclusión 143

"La otrora coalición omitió presentar las hojas membretadas de 89 pólizas con las correcciones solicitadas; por un importe de \$3,295,582.17."

(...)

Gasto de propaganda en Bardas

Conclusión 151

“La otrora coalición omitió presentar las muestras fotográficas de 2 relaciones detalladas de pinta de bardas, por un importe de \$1,268.81.”

(...)

Conclusión 154

“La otrora coalición omitió presentar muestras de la relación detallada de pinta de bardas por \$4,755.17.”

(...)

**Propaganda
Conclusión 173**

“Se observaron 9 copias de cheques que no presentan la totalidad de los datos por \$338,399.40.”

(...)

Conclusión 175

“La otrora coalición presentó 25 copias de cheques que carecen de datos consistentes en fecha, nombre del beneficiario y en algunos casos firma, por \$409,482.70.”

(...)

Gastos operativos de Campaña Directos

Conclusión 190

“La otrora coalición omitió presentar 3 contratos de prestación de servicios y 2 relaciones de inserciones, por \$82,429.83.”

(...)

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un sujeto obligado, y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

obligado, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como **(1)** se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el sujeto obligado, y en la columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción.

Descripción de la Irregularidad observada (1)	Acción u omisión (2)
(...)	
"23. La otrora Coalición omitió presentar dos facturas en original por concepto de renta de bienes inmuebles y equipo, por un importe de \$27,000.00."	Omisión
(...)	
77. La otrora coalición omitió presentar 10 contratos de prestación de servicios anexos a sus respectivas pólizas, por \$848,199.58.	Omisión
78. La otrora coalición omitió presentar las muestras de 14 facturas anexas a sus respectivas pólizas, por \$1,792,560.40.	Omisión
(...)	
80. La otrora coalición omitió presentar las hojas membretadas de 6 facturas, las facturas y las hojas membretadas de 17 facturas por \$2,133,519.18 (\$637,699.79 y \$1,495,819.39)	Omisión
(...)	
82. La otrora coalición omitió presentar las hojas membretadas con la totalidad de datos, de 52 facturas por \$4,670,253.45.	Omisión
(...)	
88. La otrora coalición omitió presentar 1 contrato de prestación de servicios por \$18,254.00.	Omisión
(...)	
"92. No presento la documentación soporte correspondiente a gastos de una factura por concepto de medias impresos, consistente en facturas, relación de inserciones, contratos de prestación de servicios y la página completa original de la publicación, por \$267,020.40."	Omisión

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Descripción de la Irregularidad observada (1)	Acción u omisión (2)
(...)	
"121. La otrora coalición omitió presentar 3 facturas en original del proveedor Impresora y Editorial, S.A. de C. V" par un monto de \$87,377.40."	Omisión
(...)	
133. La otrora coalición omitió presentar los contratos de prestación de servicios de 82 facturas, anexas a sus Respectivas pólizas por \$1,974,419.12.	Omisión
134. La otrora coalición presentó 6 muestras ilegibles por \$193,139.00	Omisión
135. La otrora coalición omitió presentar las muestras de 62 facturas anexas a sus respectivas pólizas, por \$1,801,648.87.	Omisión
136. La otrora coalición omitió presentar los informes pormenorizados de 266 facturas con su respectiva hoja de cálculo de Excel anexas a sus respectivas pólizas, por \$8,379,854.15 (\$20,880.00 y \$8,358,974.15).	Omisión
137. La otrora Coalición omitió presentar las hojas membretadas de 58 proveedores, por \$2,660,880.14.	Omisión
138. La otrora coalición omitió presentas 65 hojas membretadas anexas a sus respectivas pólizas de registro por \$2,029,731.38.	Omisión
(...)	
143. La otrora coalición omitió presentar las hojas membretadas de 89 pólizas con las correcciones solicitadas; por un importe de \$3,295,582.17.	Omisión
(...)	
151. La otrora coalición omitió presentar las muestras fotográficas de 2 relaciones detalladas de pinta de bardas, por un importe de \$1,268.81.	Omisión
(...)	
154. La otrora coalición omitió presentar muestras de la relación detallada de pinta de bardas por \$4,755.17.	Omisión
(...)	
"159. La otrora coalición presentó 2 facturas en copia fotostática, por un importe de \$77,834.00."	Omisión
(...)	
173. Se observaron 9 copias de cheques que no presentan la totalidad de los datos por \$338,399.40.	Omisión
(...)	
175. La otrora coalición presentó 25 copias de cheques que carecen de datos consistentes en fecha, nombre del beneficiario y en algunos casos firma, por \$409,482.70.	Acción
(...)	
190. La otrora coalición omitió presentar 3 contratos de prestación de servicios y 2 relaciones de inserciones, por \$82,429.83.	Omisión
(...)	

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: Tal como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de conductas realizadas por el ente político, por lo que para efectos de su exposición cabe referirnos a lo señalado en la columna (1) del citado cuadro, siendo lo que en ella se expone, el modo de llevar a cabo las violaciones a la normatividad electoral.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado, surgieron del estudio a través del procedimiento de revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos correspondientes al Proceso Electoral Federal 2012, presentados por el referido sujeto.

Lugar: Las irregularidades se actualizaron por la otrora coalición “Compromiso por México” en el marco del proceso federal 2012.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del ente político para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado ente para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos obligados²⁵.

²⁵ En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:

*“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen una mera falta formal, **porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos**, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.*

*En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad **por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público**, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”*

(...)

En las conclusiones en comento, la otrora coalición “Compromiso por México” vulneró lo dispuesto en los artículos 179; 181, numerales 1, inciso c), 3 y 5; 182; 198 del Reglamento de Fiscalización mismos que a la letra señalan:

Reglamento de Fiscalización.

“Artículo 179.

*1. Los comprobantes de los gastos efectuados por los partidos o coaliciones en propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos deberán incluir una relación de cada una de las inserciones que ampara la factura, las fechas de publicación, el tamaño de cada inserción o publicación, el valor unitario de cada inserción o publicación y el nombre del candidato beneficiado con cada una de ellas. Los partidos deberán conservar la página completa de un ejemplar original de las publicaciones que contengan las inserciones en diarios, revistas y otros medios impresos que realicen en cada una de las campañas electorales, así como todos aquellos que realicen durante los periodos que comprenden las campañas electorales, aún cuando no se refieran directamente a dichas campañas. Cada una de las inserciones deberá contener la leyenda “inserción pagada” seguida del nombre de la persona responsable del pago. La página con la inserción deberá anexarse a la documentación comprobatoria y presentarse junto con ésta a la Unidad de Fiscalización cuando sea solicitada.
(...)”*

“Artículo 181.

1. Los partidos o coaliciones podrán contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares en la vía pública para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes:

(...)

c) Durante las campañas electorales, cada partido y coalición deberá realizar un informe pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o concesionarias dedicadas a la renta de espacios y colocación de anuncios espectaculares en la vía pública, así como con las empresas dedicadas a la producción, diseño y manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos anuncios. Este informe deberá ser entregado, anexando copia del contrato respectivo y las facturas originales correspondientes, a más tardar el día de la presentación de informes de campaña, con la información siguiente:

- i. Nombre de la empresa;*
- ii. Condiciones y tipo de servicio;*

- iii. Ubicación (dirección completa) y características de la publicidad;*
- iv. Precio total y unitario;*
- v. Duración de la publicidad y del contrato;*
- vi. Condiciones de pago; y*
- vii. Fotografías*

(...)

3. Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en la vía pública deberán incluir, en hojas membretadas de la empresa que se anexas a cada factura, una relación de cada uno de los anuncios que ampara la factura y el periodo en el que permanecieron colocados. En dichas hojas deberá incluirse el valor unitario de todos y cada uno. El importe y el número total de los anuncios detallados deben coincidir con el valor y número de anuncios que ampare la factura respectiva. Asimismo, deberá presentar en medio magnético y en hoja impresa un resumen con la información de las hojas membretadas en hoja de cálculo electrónica, la cual deberá contener cada uno de los anuncios espectaculares que amparan las facturas de sus proveedores con los datos señalados en el presente artículo. Adicionalmente, tales hojas del proveedor deberán contener:

- a) Nombre del partido que contrata;*
- b) Nombre del candidato que aparece en cada espectacular;*
- c) Número de espectaculares que ampara;*
- d) Valor unitario de cada espectacular, así como el Impuesto al Valor Agregado de cada uno de ellos;*
- e) Periodo de permanencia de cada espectacular rentado y colocado;*
- f) Ubicación exacta de cada espectacular: nombre de la calle principal, número, calles aledañas, colonia, municipio o delegación; o en su caso los datos del taxi, microbús o autobús en los que se colocó la propaganda;*
- g) Entidad Federativa en donde se rentaron y colocaron los espectaculares;*
- h) Medidas de cada espectacular;*
- i) Detalle del contenido de cada espectacular; y*
- j) Fotografías.*

(...)

5. El partido deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en anuncios espectaculares en la vía pública a solicitud de la Unidad de Fiscalización.”

“Artículo 182.

1. Los partidos y coaliciones llevarán una relación que detalle la ubicación y las medidas exactas de las bardas utilizadas en cada campaña para la pinta de propaganda electoral, especificando los datos de la autorización para su

*fijación en inmuebles de propiedad privada o lugares de uso común, la descripción de los costos, el detalle de los materiales y mano de obra utilizados, la identificación del candidato, y la fórmula o campaña beneficiada con este tipo de propaganda, debiendo cumplir, en su caso, con lo dispuesto en este Reglamento respecto de los criterios de prorrateo. Dicha relación deberá conservarse anexa a las pólizas y documentación soporte correspondiente. El partido deberá conservar y presentar fotografías de la publicidad utilizada en bardas, indicando su ubicación exacta.
(...)”*

“Artículo 198.

*1. Cuando la organización de actividades promocionales implique el beneficio a una campaña electoral, al contratar los partidos políticos la compra de bienes o la prestación de servicios, éstos deberán hacerlo a través de la celebración de contratos que contengan costos, fechas de pago, características del servicio, vigencia del contrato, derechos, obligaciones, impuestos, así como las penalizaciones en caso de incumplimiento. De igual forma, en los citados contratos debe incluirse una cláusula mediante la cual se autorice a la Unidad de Fiscalización a solicitar a dicha empresa la información que estime necesaria con la finalidad de verificar el origen y monto de los recursos obtenidos.
(...)”*

De la valoración en conjunto de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que la otrora coalición, realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la fusión de la fiscalización.

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.

En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.

En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara.

Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia los artículos referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o privado del sujeto obligado.

En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos del sujeto obligado, de conformidad con los preceptos previamente citados, tales como la realización de operaciones aritméticas incorrectas; informar de manera extemporánea la apertura de cuentas bancarias; presentación de cheques; cifras reportadas en el formato correspondiente que no coinciden contra los saldos reportados en la balanza de comprobación, entre otros.

Esto es, se trata de diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político, derivadas de la revisión del Informe de los Ingresos y Gastos de Campaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí mismas constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de resultado.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en diversas conductas infractoras imputables al ente político, las cuales pusieron en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control y cotejar lo reportado por el ente en relación a los informes de aquellos candidatos que participaron en el proceso electoral para ganar un cargo de elección popular.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado infractor cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter FORMAL.

Calificación de la falta

Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

- Se trata de diversas faltas formales, al incumplir con diversas normas que ordenan un debido registro contable, la entrega de formatos debidamente requisitados, la presentación en tiempo los informes, la entrega del informe en el Sistema Integral de Fiscalización, de documentación soporte de ingresos y egresos del ente político infractor, de diferencias en el registro contable, entre otras, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos en la materia.
- Con la actualización de faltas formales no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de entes políticos, sino únicamente su puesta en peligro.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que las infracciones deben calificarse como **LEVES**

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta cometida.

Este Consejo General estima que la falta de forma cometida por el sujeto obligado debe calificarse como **LEVE**.

Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político, adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.

En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades que desplegó el sujeto obligado, y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con su obligación de presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos, dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los entes se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo el principio del adecuado control en la rendición de cuentas, en tanto que no es posible verificar que el sujeto obligado, hubiese cumplido con la totalidad de obligaciones a que estuvo sujeto.

Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los entes políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos.

De la revisión al Informe en comentó del ente político, se advierte que el mismo incumplió con su obligación de presentar documentación comprobatoria soporte.

Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en diversas faltas que impidieron que la autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que el ente utilizó diversos recursos.

No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el sujeto obligado presentó conductas que implican una contravención a lo dispuesto por los ordenamientos electorales, tal y como se ha señalado en el apartado de calificación de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta.

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no es reincidente respecto de la conducta que aquí se han analizado.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga, ya que mediante el acuerdo CG623/2016 aprobado por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral el pasado veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se les asignó a cada uno un total de \$1,004,337.987 (Mil cuatro millones trescientos treinta y siete mil novecientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) y \$338,022,361 (Trescientos treinta y ocho millones veintidós mil trescientos sesenta y un mil pesos 00/100 M.M) respectivamente, como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el año 2017.

En este tenor, es oportuno mencionar que los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México están legal y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, obran dentro de los archivos de la autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas a los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual a deducir	Saldo
INE/CG198/2017-SEGUNDO-a)	FEDERAL	\$139,581.01	\$0.01	\$0.00
INE/CG808/2016-PRIMERO-a	FEDERAL	\$21,181.60	\$0.55	\$0.04
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-1	FEDERAL	\$38,404.44	\$38,404.44	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-2	FEDERAL	\$40,015.86	\$40,015.86	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-3	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-4	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-5	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-6	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-7	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-8	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-9	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-10	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-11	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-12	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-13	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-14	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-15	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-16	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-17	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-18	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-19	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-20	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-21	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-22	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-23	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-24	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-25	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
Total:		\$1,232,787.05	\$1,072,025.00	\$0.04

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual a deducir	Saldo
INE/CG87/2016-QUINTO-b-5	FEDERAL	\$2,937,495.27	\$126,758.38	\$685,510.30
INE/CG87/2016-QUINTO-d-12	FEDERAL	\$22,623,489.00	\$968,997.43	\$5,408,315.00
INE/CG278/2016-SEGUNDO	FEDERAL	\$214,970,474.04	\$11,267,412.00	\$58,691,691.89
SUP-RAP-451/2016-PRIMERO	FEDERAL	\$24,175,549.94	\$1,711,633.69	\$11,726,007.53
INE/CG799/2015-CUARTO-a)-4	LOCAL / SONORA	\$1,822.60	\$1,822.60	\$0.00
INE/CG799/2015-CUARTO-a)-5	LOCAL / SONORA	\$4,276.10	\$4,276.10	\$0.00
INE/CG799/2015-SEPTIMO-a)-2	LOCAL / SONORA	\$701.00	\$701.00	\$0.00
INE/CG799/2015-DECIMO CUARTO-a)-9	LOCAL / SONORA	\$1,822.60	\$1,822.60	\$0.00
INE/CG799/2015-DECIMO NOVENO-a)-7	LOCAL / SONORA	\$701.00	\$701.00	\$0.00
INE/CG799/2015-VIGESIMO CUARTO-a)	LOCAL / SONORA	\$140.20	\$140.20	\$0.00
Total:		\$264,716,471.75	\$14,084,265.00	\$76,511,524.72

De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un saldo pendiente de \$0.04 (cero pesos 04/100 M.N.) y el Partido Verde Ecologista México tiene un saldo pendiente de \$76,511,524.72 (setenta y seis millones quinientos once mil quinientos veinticuatro pesos 72/100 MN) por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.

De lo anterior se desprende que, aun cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica; por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la Resolución de mérito.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“I. Con amonestación pública;

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

En este contexto, del análisis realizado a la(s) conducta(s) infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **LEVE**.
- Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
- Que el sujeto obligado, conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.
- Que el sujeto obligado, no es reincidente.
- Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.

Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado.

En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto involucrado, toda vez que las características mismas de la infracción, en ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracciones relacionadas con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.

Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la comisión intencional o culpable de la falta; la trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la conducta infractora.

De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

recursos con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa electoral.

Así pues, tomando en consideración las particularidades previamente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como ente político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia del procedimiento de mérito.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medida y Actualización) es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad,

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción a la falta y las circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos objetivos que rodean las faltas formales se llegó a la conclusión de que las mismas son clasificables como leves, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa y la ausencia de reincidamos, el conocimiento de las conductas sancionadas y las normas infringidas, la pluralidad de conductas; por lo que el objeto de la sanción a imponer es evitar o fomentar el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

Cabe señalar que la actualización de la sanción a imponer (Unidad de Medida y Actualización) se realiza de conformidad con lo establecido en el **considerando 3** del presente acuerdo.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer a la otrora coalición “Compromiso por México”, es la prevista en la fracción II, inciso a) del artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a **4257 (Cuatro mil doscientos cincuenta y siete) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de \$321,360.93 (Trescientos veintiún mil trescientos sesenta pesos 93/100 M.N.).**

En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Revolucionario Institucional** en lo individual lo correspondiente al **80%** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente **3405 (Tres mil cuatrocientos cinco) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de \$257,043.45 (Doscientos cincuenta y siete mil cuarenta y tres pesos 45/100 M.N.).**

Asimismo, al **Partido Verde Ecologista de México** en lo individual lo correspondiente al **20%** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

impone a dicho instituto político es una multa equivalente a **851 (Ochocientos cincuenta y un)** Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de **\$64,262.23 (Sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y dos pesos 23/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

B. Modificaciones a la Resolución CG190/2013 en lo relativo a la Coalición Compromiso por México correspondientes a dejar de considerar dos spots en relación al apartado C, considerando 9 del presente acatamiento. (SUP-RAP-121/2013, Agravio 6; Apartado B, Sección de ejecución).

Derivado de los ajustes realizados al dictamen consolidado de la coalición, se procederá a modificar la Resolución **CG190/2013** en lo tocante a su considerando **9.3 inciso e)**, así como al correlativo Resolutivo **TERCERO**, lo que se refleja de la siguiente forma:

e) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 83, numeral 1, inciso d), fracciones IV, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 149 numeral 1, del Reglamento de Fiscalización: (...) 32, (...) 45, (...).

(...)

Gastos de propaganda

Producción Spots

Conclusión 32

"La otrora coalición omitió reportar el gasto por la producción de 5 spot de televisión y 1 spot de radio por \$2,092,931.76 (\$2,062,875.40 + \$30,056.36)"

(...)

Eventos

Conclusión 45

"La otrora Coalición omitió registrar gastos por concepto de operativos y de propaganda distribuida en 42 de los 47 eventos monitoreados y verificados por esta autoridad, realizados por el entonces candidato a la presidencia de la República el Lic. Enrique Peña Nieto, por un importe de \$10,042,868.00 de gasto centralizado y de \$7,759,563.18 de gasto directo, haciendo un total de \$17,802,431.18."

(...)

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas que violentan los artículos 83, numeral 1 inciso d), fracciones IV, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 149 numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.

- d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

En relación con las irregularidades identificadas el Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal 2012.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado consistente en omitir reportar gastos, durante la campaña del Proceso Electoral Federal 2012, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 83, numeral 1 inciso d), fracciones IV, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 149 numeral 1, del Reglamento de Fiscalización

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: La otrora Coalición “Compromiso por México” omitió reportar en el Informe de campaña el egreso relativo a:

Descripción de las Irregularidades observadas
(...)
32. La otrora coalición omitió reportar el gasto por la producción de 5 spot de televisión y 1 spot de radio por \$2,092,931.76 (\$2,062,875.40 + \$30,056.36)
(...)
45. La otrora Coalición omitió registrar gastos por concepto de operativos y de propaganda distribuida en 42 de los 47 eventos monitoreados y verificados por esta autoridad, realizados por el entonces candidato a la presidencia de la República el Lic. Enrique Peña Nieto, por un importe de \$10,042,868.00 de gasto centralizado y de \$7,759,563.18 de gasto directo, haciendo un total de \$17,802,431.18.
(...)

Como se describe en el cuadro que antecede, en la columna (“Descripción de las Irregularidades observadas”), se expone el modo de llevar a cabo la violación a los artículos 83, numeral 1 inciso d), fracciones IV, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 149 numeral 1, del Reglamento de Fiscalización.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado, surgieron de la revisión del Informe de Campaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso Electoral Federal 2012.

Lugar: Las irregularidades se actualizaron en por la otrora coalición “Compromiso por México”.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del sujeto obligado para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que en el campo de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente²⁶:

- a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.

26 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables.
- e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

En este orden de ideas el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 83, numeral 1 inciso d), fracciones IV, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 149 numeral 1, del Reglamento de Fiscalización:

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 83

1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

(...)

d) Informes de campaña:

(...)

IV. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en el artículo 229 de este Código, así como el monto y destino de dichas erogaciones.

(...)”

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 149.

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que expida a nombre del partido, agrupación, organizaciones de observadores u organización de ciudadanos, la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, con excepción de lo señalado en los artículos 164, 166 al 168 del Reglamento.

(...)”

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los

ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que la otrora Coalición “Compromiso por México” se ubica dentro de las hipótesis normativa prevista en los artículos los artículos 83, numeral 1 inciso d), fracciones IV, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 149 numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de resultado.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por las conductas señaladas en las conclusiones es garantizar certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En el presente caso las irregularidades imputables al sujeto obligado infractor se traducen en unas infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real de los bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de reportar el gasto de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines.

En razón de lo anterior, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se traducen en **faltas de fondo**, cuyo objeto infractor concurre directamente en tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por la otrora coalición infractora.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues la otrora Coalición Compromiso por México cometió una sola irregularidad que se traduce en faltas de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO**, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 83, numeral 1 inciso d), fracciones IV, del Código Federal de Instituciones

y Procedimientos Electorales, y 149 numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta procedente imponer una sanción.

En este sentido al actualizarse las irregularidades en comento, lo procedente es imponer una sanción.

Calificación de la falta

Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

- Que se trata de faltas sustantivas o de fondo, toda vez que el sujeto obligado impidió a la autoridad fiscalizadora tener certeza sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos erogados al no reportarlos dentro de su Informe de Campaña.
- Que con la actualización de las faltas sustantivas, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización; esto es, certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
- Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la materia.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVES ORDINARIAS**.

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta cometida.

Este Consejo General estima que las faltas de fondo cometidas por la otrora coalición infractora se califican como **GRAVES ORDINARIAS**.

Lo anterior es así, en razón de que se trata de diversas faltas de fondo o sustantivas en las que se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, toda vez que la otrora Coalición “Compromiso por México” omitió registrar el gasto realizado como parte de las actividades de campaña, considerando que el bien jurídico tutelado por la norma

transgredida se vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

En ese contexto, el sujeto obligado debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades que desplegó el sujeto obligado y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

Debe considerarse que sujeto obligado no cumplió con su obligación de reportar la totalidad de los gastos que realizó durante el periodo establecido; por lo tanto, la irregularidad se tradujo en faltas que impidieron que la autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que la otrora coalición utilizó diversos recursos. Por lo tanto, no debe perderse de vista que las conductas descritas, vulneran directamente el principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

En ese tenor, las faltas cometidas por la otrora coalición son sustantivas y el resultado lesivo es significativo, toda vez que omitió reportar la totalidad de los gastos realizados en el informe de campaña respectivo situación que, como ya ha quedado expuesto, vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido en reiteración y sistematicidad.

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga, ya que mediante el acuerdo CG623/2016 aprobado por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral el pasado veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se les asignó a cada uno un total de \$1,004,337.987 (Mil cuatro millones trescientos treinta y siete mil novecientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) y \$338,022,361 (Trescientos treinta y ocho millones veintidós mil trescientos sesenta y un mil pesos 00/100 M.M) respectivamente, como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el año 2017.

En este tenor, es oportuno mencionar que los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México están legal y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, obran dentro de los archivos de la autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas a los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual a deducir	Saldo
INE/CG198/2017-SEGUNDO-a)	FEDERAL	\$139,581.01	\$0.01	\$0.00
INE/CG808/2016-PRIMERO-a	FEDERAL	\$21,181.60	\$0.55	\$0.04
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-1	FEDERAL	\$38,404.44	\$38,404.44	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-2	FEDERAL	\$40,015.86	\$40,015.86	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-3	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-4	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-5	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-6	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-7	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-8	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-9	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-10	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-11	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-12	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-13	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-14	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-15	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-16	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-17	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-18	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-19	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-20	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-21	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-22	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-23	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-24	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-25	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
Total:		\$1,232,787.05	\$1,072,025.00	\$0.04

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual a deducir	Saldo
INE/CG87/2016-QUINTO-b-5	FEDERAL	\$2,937,495.27	\$126,758.38	\$685,510.30
INE/CG87/2016-QUINTO-d-12	FEDERAL	\$22,623,489.00	\$968,997.43	\$5,408,315.00
INE/CG278/2016-SEGUNDO	FEDERAL	\$214,970,474.04	\$11,267,412.00	\$58,691,691.89
SUP-RAP-451/2016-PRIMERO	FEDERAL	\$24,175,549.94	\$1,711,633.69	\$11,726,007.53
INE/CG799/2015-CUARTO-a)-4	LOCAL / SONORA	\$1,822.60	\$1,822.60	\$0.00
INE/CG799/2015-CUARTO-a)-5	LOCAL / SONORA	\$4,276.10	\$4,276.10	\$0.00
INE/CG799/2015-SEPTIMO-a)-2	LOCAL / SONORA	\$701.00	\$701.00	\$0.00
INE/CG799/2015-DECIMO CUARTO-a)-9	LOCAL / SONORA	\$1,822.60	\$1,822.60	\$0.00
INE/CG799/2015-DECIMO NOVENO-a)-7	LOCAL / SONORA	\$701.00	\$701.00	\$0.00
INE/CG799/2015-VIGESIMO CUARTO-a)	LOCAL / SONORA	\$140.20	\$140.20	\$0.00
Total:		\$264,716,471.75	\$14,084,265.00	\$76,511,524.72

De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un saldo pendiente de \$.04 (cero pesos 04/100 M.N.) y el Partido Verde Ecologista México tiene un saldo pendiente de \$76,511,524.72 (setenta y seis millones quinientos once mil quinientos veinticuatro pesos 72/100 M.N.) por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.

De lo anterior se desprende que, aun cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica; por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la Resolución de mérito.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“I. Con amonestación pública;

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada falta analizadas.

Conclusión 32

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña en el Proceso Electoral Federal 2012, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal 2012.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$2,092,931.76 (Dos millones noventa y dos mil novecientos treinta y un pesos 76/100 M.N.)**.
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las circunstancias particulares del caso.

Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de Derecho.

Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del COFIPE no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del partido político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencial del presente procedimiento.

La sanción V no es aplicable al no contravenir el artículo 38, numeral 1, inciso p) del COFIPE.

Asimismo, la sanción contenida en la fracción VI consistente en la cancelación del registro como partido político se estima aplicable cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una **reducción de la ministración mensual del financiamiento público** que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de **omitir reportar gastos** y las normas infringidas [artículos 83, numeral 1 inciso d), fracciones IV, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 149 numeral 1, del Reglamento de Fiscalización], la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomenta el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al **150% (ciento cincuenta por ciento)** sobre el monto involucrado que asciende a un total de **\$3,139,327.14 (Tres millones ciento treinta y nueve mil trescientos veintisiete pesos 14/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Revolucionario Institucional** en lo individual lo correspondiente al 80% (porcentaje en letra) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del **50% (cincuenta)** de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$2,511,461.71 (Dos millones quinientos once mil cuatrocientos sesenta y un pesos 71/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Verde Ecologista de México** en lo individual lo correspondiente al 20% (porcentaje en letra) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del **50% (cincuenta)** de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$627,865.43 (Seiscientos veintisiete mil ochocientos sesenta y cinco pesos 43/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 45

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.

- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña en el Proceso Electoral Federal 2012, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal 2012.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$17,802,431.18 (Diecisiete millones ochocientos dos mil cuatrocientos treinta y un pesos 18/100 M.N.)**.
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las circunstancias particulares del caso.

Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de Derecho.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del COFIPE no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del partido político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencial del presente procedimiento.

La sanción V no es aplicable al no contravenir el artículo 38, numeral 1, inciso p) del COFIPE.

Asimismo, la sanción contenida en la fracción VI consistente en la cancelación del registro como partido político se estima aplicable cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una **reducción de la ministración mensual del financiamiento público** que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurren en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de **omitir reportar gastos** y las normas infringidas (artículos 83, numeral 1 inciso d), fracciones IV, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 149 numeral 1, del Reglamento de Fiscalización), la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomenta el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al **150% (ciento cincuenta por ciento)** sobre el monto involucrado que asciende a un total de **\$26,703,646.77 (Veintiséis mil setecientos tres mil seiscientos cuarenta y seis pesos 77/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Revolucionario Institucional** en lo individual lo correspondiente al 80% (porcentaje en letra) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del **50% (cincuenta)** de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$21,362,917.42 (Veintiún millones trescientos sesenta y dos mil novecientos diecisiete pesos 42/100 M.N).**

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Verde Ecologista de México** en lo individual lo correspondiente al 20% (porcentaje en letra) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del **50% (cincuenta)** de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$5,340,729.35 (Cinco millones trescientos cuarenta mil setecientos veintinueve pesos 35/100 M.N).**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

C. Modificaciones a la Resolución de la otrora coalición Compromiso por México correspondiente al análisis de la conducta consistente en aplicar recursos económicos de las campañas de candidatos propuestos por la coalición Compromiso por México, a campañas de candidatos que no formaron parte del convenio de coalición en relación al apartado F, considerando 8 del presente acatamiento. (SUP-RAP-124/2013; Apartado A, Tema 2, Sección de ejecución).

Derivado del análisis ordenado por la Sala Superior a la conducta relacionada con la facturación conjunta realizada entre la otrora Coalición Compromiso por México y los partidos políticos integrantes de la misma, lo que ha quedado reflejado en el dictamen consolidado de la coalición, se procederá a modificar la Resolución **CG190/2013** en lo tocante a su considerando **9.3**, incorporando el inciso **y)**, para quedar de la siguiente forma.

(...)

y) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 228 bis.

(...)

y) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora en los artículos 98, párrafo 2, del Código y 125, párrafo 1 del Reglamento de Fiscalización; Conclusión 228 bis

De la revisión llevada a cabo al dictamen referido y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que la irregularidad en la que incurrió la otrora Coalición Compromiso por México, integrada por los Partidos Revolucionario institucional y Verde Ecologista de México, es la siguiente:

Conclusión 228 bis

“La otrora coalición “Compromiso por México” aplicó recursos económicos de las campañas de candidatos propuestos por la coalición Compromiso por México, a campañas de candidatos que no formaron parte del convenio de coalición, por un importe de \$63,997,753.17.”

En consecuencia, al **beneficiar a candidatos propuestos por la coalición Compromiso por México, a campañas de candidatos que no formaron parte del convenio de coalición**, el Sujeto Obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 98, párrafo 2, del Código y 125, párrafo 1 del Reglamento de Fiscalización por un importe de \$63,997,753.17.

De la faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia de la coalición, contemplada en el artículo 84, numeral 1, incisos b) y c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que al advertirse durante la revisión correspondiente de los Informes de Campaña de Ingresos y Egresos en el marco del Proceso Electoral Federal 2011 - 2012 la existencia de errores y omisiones técnicas, mediante los oficios referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad de Fiscalización notifica a la coalición Compromiso por México, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara la irregularidad observada; sin embargo, las respuestas no fueron idóneas para subsanar las observaciones realizadas, y en algunos casos el partido fue omiso en dar contestación en lo solicitado.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera los artículos 98, párrafo 2, del Código y 125, párrafo 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por el ente infractor y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en el Dictamen Consolidado, se identificó que la otrora Coalición, benefició a campañas de candidatos que no formaron parte del convenio de coalición, vulnerando la legalidad en el manejo de los recursos proporcionados para sus actividades de campaña, provocando inequidad entre los contendientes electorales.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: El sujeto obligado aplicó recursos económicos de las campañas de candidatos propuestos por la coalición Compromiso por México, a campañas de candidatos que no formaron parte del convenio de coalición. De ahí que el sujeto obligado contravino lo dispuesto por los artículos 98, párrafo 2, del Código y 125, párrafo 1 del Reglamento de Fiscalización.

Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió del estudio a través del procedimiento de revisión de los Informes de Campaña correspondientes al Proceso Electoral Ordinario Federal 2012.

Lugar: La irregularidad se actualizó en el marco del Proceso Electoral Federal 2012.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe **culpa** en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por que el sujeto obligado beneficie la campaña de un candidato postulado por otro ente político, se vulnera sustancialmente la legalidad en el uso de los recursos otorgados para sus actividades de campaña, así como la equidad en la contienda electoral.

Así las cosas, la falta sustancial trae consigo la indebida aplicación de recursos públicos al beneficiar a los candidatos postulados por partidos políticos en lo individual por el sujeto obligado infractor, por consecuencia, se vulnera la legalidad y equidad en la contienda como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la legalidad en el uso de los recursos para sus actividades de campaña y la equidad en la contienda electoral.

El sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los artículos 98, párrafo 2, del Código y 125, párrafo 1 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala:

“Artículo 98

2. En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos coaligados, según el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones, como

si se tratara de un solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes.

Artículo 125.

1. En el caso de las coaliciones parciales, el partido que hubiere sido designado como responsable del órgano de finanzas de la coalición deberá separar los gastos que realice en beneficio propio y en beneficio de la coalición. En consecuencia, queda prohibida la facturación conjunta de bienes y servicios a nombre de un partido coaligado cuyo beneficio sea tanto para el propio partido como para la coalición.

(...)"

Con el objetivo de abonar a la pluralidad de fuerzas políticas en los cargos de elección popular, el sistema democrático mexicano está diseñado para que mediante los partidos políticos, los ciudadanos puedan contender para obtener un cargo de poder público, por lo que al ser propuestos como candidatos ante un partido o coalición, lo concerniente es que con el respaldo del instituto político respectivo, contiendan para resultar ganadores en la elección ciudadana.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en los artículos 98, párrafo 2, del Código y 125, párrafo 1 del Reglamento de Fiscalización.

En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del principio de legalidad en el uso de sus recursos públicos, así como la equidad en la contienda.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de resultado.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la

que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada en estudio es garantizar la legalidad en el uso de los recursos públicos, así como la equidad en la contienda.

En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado se traduce en infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, consistente en manejar adecuadamente el uso de los recursos otorgados para sus actividades de campaña, procurando en todo momento que los mismos cumplan con el fin correspondiente.

En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en **una falta de fondo** cuyo objeto infractor concurre directamente en hacer un uso inadecuado de sus recursos para actividades de campaña, alejándolos de los objetivos legales por los cuales fueron otorgados.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 98, párrafo 2, del Código y 125, párrafo 1 del Reglamento de Fiscalización.

Como se expuso, se trata de una falta, la cual, vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad en el uso de los recursos para actividades de campaña, así como la equidad en la contienda electoral.

En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 342 numeral 1 inciso I) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo procedente es imponer una sanción.

Calificación de la falta

Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

- Que se trata de una falta sustantiva o de fondo, toda vez que la otrora coalición benefició a campañas de candidatos que no formaron parte del convenio de coalición.
- Que con la actualización la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, esto es, respecto de la legalidad de los recursos, así como la equidad en la contienda electoral.
- Que la conducta fue singular.
- Que el monto involucrado ascendió a un importe de **\$63,997,753.17 (Sesenta y tres millones novecientos noventa y siete mil setecientos cincuenta y tres pesos 17/100 M.N)**

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta cometida.

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el sujeto obligado se califica como **GRAVE ORDINARIA**.

Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo o sustantiva en las que se vulnera directamente el principio de legalidad respecto del manejo y uso de los recursos para actividades de campaña, así como la equidad en la contienda, toda vez que el sujeto obligado benefició campañas de candidatos que no formaron parte del convenio de coalición considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de relevancia para el buen funcionamiento y correcto manejo de los recursos de los partidos políticos.

En tales condiciones, para determinar la sanción y su graduación se debe partir no sólo del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino en concurrencia con el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual se realizó a través de la valoración de la irregularidad detectada.

En ese contexto, el sujeto obligado debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir a los actores de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades que desplegó el sujeto obligado y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

Debe considerarse que el hecho de que el sujeto obligado haya beneficiado a un candidato postulado por otro instituto político, provocó que los recursos otorgados para las actividades de campaña no cumplieran cabalmente con el fin por los cuales se otorgan, en consecuencia, no debe perderse de vista que la conducta descrita, vulnera directamente el principio de legalidad respecto manejo y uso de recursos, así como la equidad en la contienda electoral.

En ese tenor, la falta cometida por el sujeto obligado es sustantiva y el resultado lesivo es significativo, toda vez que la otrora coalición benefició a campañas de candidatos que no formaron parte del convenio de coalición por el importe de **\$63,997,753.17 (Sesenta y tres millones novecientos noventa y siete mil setecientos cincuenta y tres pesos 17/100 M.N)**, se vulneraron los principios de legalidad respecto manejo y uso de recursos, así como la equidad en la contienda electoral.

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera lo establecido en los artículos 98, párrafo 2, del Código y 125, párrafo 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga, ya que mediante el acuerdo CG623/2016 aprobado por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral el pasado veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se les asignó a cada uno un total de \$1,004,337.987 (Mil cuatro millones trescientos treinta y siete mil novecientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) y \$338,022,361 (Trescientos treinta y ocho millones veintidós mil trescientos sesenta y un mil pesos 00/100 M.M) respectivamente, como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el año 2017.

En este tenor, es oportuno mencionar que los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México están legal y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, obran dentro de los archivos de la autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas a los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual a deducir	Saldo
INE/CG198/2017-SEGUNDO-a)	FEDERAL	\$139,581.01	\$0.01	\$0.00
INE/CG808/2016-PRIMERO-a	FEDERAL	\$21,181.60	\$0.55	\$0.04
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-1	FEDERAL	\$38,404.44	\$38,404.44	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-2	FEDERAL	\$40,015.86	\$40,015.86	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-3	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-4	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-5	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-6	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-7	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-8	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-9	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-10	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-11	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-12	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-13	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-14	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-15	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-16	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-17	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-18	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-19	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-20	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-21	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-22	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-23	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-24	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-25	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
Total:		\$1,232,787.05	\$1,072,025.00	\$0.04

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual a deducir	Saldo
INE/CG87/2016-QUINTO-b-5	FEDERAL	\$2,937,495.27	\$126,758.38	\$685,510.30
INE/CG87/2016-QUINTO-d-12	FEDERAL	\$22,623,489.00	\$968,997.43	\$5,408,315.00
INE/CG278/2016-SEGUNDO	FEDERAL	\$214,970,474.04	\$11,267,412.00	\$58,691,691.89
SUP-RAP-451/2016-PRIMERO	FEDERAL	\$24,175,549.94	\$1,711,633.69	\$11,726,007.53
INE/CG799/2015-CUARTO-a)-4	LOCAL / SONORA	\$1,822.60	\$1,822.60	\$0.00
INE/CG799/2015-CUARTO-a)-5	LOCAL / SONORA	\$4,276.10	\$4,276.10	\$0.00
INE/CG799/2015-SEPTIMO-a)-2	LOCAL / SONORA	\$701.00	\$701.00	\$0.00
INE/CG799/2015-DECIMO CUARTO-a)-9	LOCAL / SONORA	\$1,822.60	\$1,822.60	\$0.00
INE/CG799/2015-DECIMO NOVENO-a)-7	LOCAL / SONORA	\$701.00	\$701.00	\$0.00
INE/CG799/2015-VIGESIMO CUARTO-a)	LOCAL / SONORA	\$140.20	\$140.20	\$0.00
Total:		\$264,716,471.75	\$14,084,265.00	\$76,511,524.72

De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un saldo pendiente de \$0.04 (cero pesos 04/100 M.N.) y el Partido Verde Ecologista México tiene un saldo pendiente de \$76,511,524.72 (setenta y seis millones quinientos once mil quinientos veinticuatro pesos 72/100 MN) por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.

De lo anterior se desprende que, aun cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica; por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la Resolución de mérito.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“I. Con amonestación pública;

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada.

Conclusión 228 bis

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por la coalición, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA** en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que benefició a un candidato postulado por otro instituto político.
- Por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto infractor, consistió en beneficiar a campañas de candidatos que no formaron parte del convenio de coalición, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la revisión a los Informes de Campaña correspondientes al Proceso Electoral Ordinario Federal 2012.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$63,997,753.17 (Sesenta y tres millones novecientos noventa y siete mil setecientos cincuenta y tres pesos 17/100 M.N)**
- El sujeto obligado no es reincidente.
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de Derecho.

Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.

Por ello, la consecuencia del ilícito debe tomar en cuenta la necesidad de cumplir con una función equivalente a la restitución o reparación del beneficio obtenido, así como los que derivaron de su comisión, con la finalidad de que no se mantengan como parte del patrimonio del autor del ilícito, para que no se vea beneficiado de alguna forma por su comisión.

Incluso, considerar lo contrario, derivaría en un fraude a la ley, al permitir que una conducta ilícita sirviera como medio para que el que la cometa pueda obtener un beneficio, no obstante que fuera sancionado por la autoridad competente, conforme a las leyes aplicables al caso.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del COFIPE no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del partido político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencial del presente procedimiento.

La sanción V no es aplicable al no contravenir el artículo 38, numeral 1, inciso p) del COFIPE.

Asimismo, la sanción contenida en la fracción VI consistente en la cancelación del registro como partido político se estima aplicable cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una **reducción de la ministración mensual del financiamiento público** que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.

Por lo expuesto, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de aplicar recursos económicos de las campañas de candidatos propuestos por la coalición Compromiso por México, a campañas de candidatos que no formaron parte del convenio de coalición y la norma infringida en los artículos 98, párrafo 2, del Código y 125, párrafo 1 del Reglamento de Fiscalización, la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse a la Coalición Compromiso por México, en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al **100% (cien por ciento)** sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$63,997,753.17 (Sesenta y tres millones novecientos noventa y siete mil setecientos cincuenta y tres pesos 17/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Revolucionario Institucional** en lo individual lo correspondiente al 80% (ochenta en letra) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50% (cincuenta) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$51,198,202.54 (Cincuenta y un millones ciento noventa y ocho mil doscientos dos pesos 54/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Verde Ecologista de México** en lo individual lo correspondiente al 20% (veinte por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50% (cincuenta) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$12,799,550.63 (Doce millones setecientos noventa y nueve mil quinientos cincuenta pesos 63/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

D. Modificaciones a la Resolución de la otrora coalición Compromiso por México correspondiente a la actualización de rebases a topes de gastos de campaña en relación al apartado G, considerando 9 del presente acatamiento.

Derivado del análisis ordenado por la Sala Superior en diversos apartados, los candidatos de la otrora Coalición Compromiso por México y los partidos políticos integrantes de la misma, se actualizaron rebases al tope de gastos de campaña adicionales a lo que se resolvió en la resolución **CG190/2013**, lo que ha quedado reflejado en el dictamen consolidado de la coalición, por lo que se procederá a modificar la resolución **CG190/2013** en lo tocante a su considerando **9.3**, inciso **p)**, para quedar de la siguiente forma.

(...)

p) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 50.1, 50.2 y 50.3.

(...)

p) En el capítulo de Conclusiones finales de la Revisión de Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 229, numeral 1 , en relación al 342, numeral 2, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: Conclusiones 50.1, 50.2 y 50.3.

EGRESOS

Rebase de Tope de Gastos de Campana

(...)

Conclusión 50.3

“Derivado del prorrateo de publicidad que beneficio al candidato a presidente y uno o más candidatos, se advierte el rebase de topes de gastos de Campaña Federal de 154 Diputados por \$3,438,832.65.

En consecuencia, al exceder el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad, la coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 229, numeral 1, en relación al 342, numeral 2, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora bien, es importante señalar que derivado de la reforma político electoral en 2014 se considera en el artículo 41, base VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como causal de nulidad de las elecciones exceder el tope de gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado para tales efectos.

Visto lo anterior, toda vez que los sujetos obligados excedieron el tope de gastos de campaña fijado para la coalición Compromiso por México se considera ha lugar dar vista al Tribunal Electoral correspondiente para los efectos conducentes.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 229, numeral 1, en relación al 342, numeral 2, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede en la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión)
- b)** Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades de los sujetos obligados de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la conclusión **50.3**, del Dictamen Consolidado, se observó que la coalición Compromiso por México excedió el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad para Proceso Electoral Local Ordinario 2011 - 2012, por un importe de **\$3,438,832.65 (tres millones cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos treinta y dos pesos 65/100 M.N.)**.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una acción de la coalición Compromiso por México, toda vez que el artículo 229, numeral 1, en relación al 342, numeral 2, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales contiene una norma prohibitiva, consistente en la obligación de no exceder el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad, por lo que en el caso concreto el actuar del sujeto obligado actualizó la conducta prohibida por la norma.

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron

Modo: La coalición Compromiso por México excedió el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad, por un monto de **\$3,438,832.65 (tres millones cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos treinta y dos pesos 65/100 M.N.)**. De ahí que contravino lo dispuesto en el artículo 229, numeral 1, en

relación al 342, numeral 2, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Tiempo: La irregularidad atribuida a la coalición Compromiso por México, surgió de la revisión del Informe de Ingresos y Gastos de Campaña de la coalición Compromiso por México, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2011-2012.

Lugar: La irregularidad se actualizó por la coalición Compromiso por México.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica de la coalición para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado sujeto obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Por lo que hace a las normas transgredidas, es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva, se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación de los principios protegidos por la legislación aplicable en materia de financiamiento de los partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro.

Esto es, al actualizarse una falta sustancial por exceder los topes de gastos de campaña establecidos por la autoridad electoral, se vulneran los principios de legalidad y equidad en la contienda, puesto que implica una modificación en la balanza a favor del partido, coalición o candidato, al contar con mayores elementos de índole económico para influenciar al electorado, situación que es contraria al sistema electoral de nuestro país, cuyo entramado jurídico pretende igualar las oportunidades de los sujetos obligados para representar a la sociedad en un ámbito democrático y en circunstancias similares.

En la conclusión **50.3**, la coalición vulneró lo dispuesto en el artículo 229, numeral 1, en relación al 342, numeral 2, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que a la letra señala:

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

(...)

“Artículo 229

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.

Artículo 342

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código:

(...)

f) Exceder los topes de gastos de campaña;

(...)”

Del artículo antes descrito se desprende la necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; es decir, una coalición que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.

Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.

En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los postulados que formulen.

Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.

Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.

Es importante señalar que, al exceder el tope de gastos establecido por la autoridad, la coalición vulneró de manera directa los principios de fiscalización que éstos están obligados a cumplir.

Así las cosas, ha quedado acreditado que la coalición se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 229, numeral 1, en relación al 342, numeral 2, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de legalidad y equidad en la contienda.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación de las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la norma infringida por la conducta señalada en la conclusión **50.3**, son los principios de equidad que rigen al sistema mixto de financiamiento, así como la legalidad de su actuar.

En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, consistente en incumplir con la obligación de respetar los topes de gastos de campaña establecidos por la autoridad.

En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en **una falta de fondo**, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los principios protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado infractor cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO**, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 229, numeral 1, en relación al 342, numeral 2, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta cometida.

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el ente infractor se califica como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga, ya que mediante el acuerdo CG623/2016 aprobado por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral el pasado veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se les asignó a cada uno un total de \$1,004,337.987 (Mil cuatro millones trescientos treinta y siete mil novecientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) y \$338,022,361 (Trescientos treinta y ocho millones veintidós mil trescientos sesenta y un mil pesos 00/100 M.M) respectivamente, como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el año 2017.

En este tenor, es oportuno mencionar que los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México están legal y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral.

Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, obran dentro de los archivos de la autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas a los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual a deducir	Saldo
INE/CG198/2017-SEGUNDO-a)	FEDERAL	\$139,581.01	\$0.01	\$0.00
INE/CG808/2016-PRIMERO-a	FEDERAL	\$21,181.60	\$0.55	\$0.04
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-1	FEDERAL	\$38,404.44	\$38,404.44	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-2	FEDERAL	\$40,015.86	\$40,015.86	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-3	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-4	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-5	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-6	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-7	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-8	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-9	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-10	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-11	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-12	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-13	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-14	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-15	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-16	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-17	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-18	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-19	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-20	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-21	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-22	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-23	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-24	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-25	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
Total:		\$1,232,787.05	\$1,072,025.00	\$0.04

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual a deducir	Saldo
INE/CG87/2016-QUINTO-b-5	FEDERAL	\$2,937,495.27	\$126,758.38	\$685,510.30
INE/CG87/2016-QUINTO-d-12	FEDERAL	\$22,623,489.00	\$968,997.43	\$5,408,315.00
INE/CG278/2016-SEGUNDO	FEDERAL	\$214,970,474.04	\$11,267,412.00	\$58,691,691.89
SUP-RAP-451/2016-PRIMERO	FEDERAL	\$24,175,549.94	\$1,711,633.69	\$11,726,007.53
INE/CG799/2015-CUARTO-a)-4	LOCAL / SONORA	\$1,822.60	\$1,822.60	\$0.00

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual a deducir	Saldo
INE/CG799/2015-CUARTO-a)-5	LOCAL / SONORA	\$4,276.10	\$4,276.10	\$0.00
INE/CG799/2015-SEPTIMO-a)-2	LOCAL / SONORA	\$701.00	\$701.00	\$0.00
INE/CG799/2015-DECIMO CUARTO-a)-9	LOCAL / SONORA	\$1,822.60	\$1,822.60	\$0.00
INE/CG799/2015-DECIMO NOVENO-a)-7	LOCAL / SONORA	\$701.00	\$701.00	\$0.00
INE/CG799/2015-VIGESIMO CUARTO-a)	LOCAL / SONORA	\$140.20	\$140.20	\$0.00
Total:		\$264,716,471.75	\$14,084,265.00	\$76,511,524.72

De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un saldo pendiente de \$0.04 (cero pesos 04/100 M.N.) y el Partido Verde Ecologista México tiene un saldo pendiente de \$76,511,524.72 (setenta y seis millones quinientos once mil quinientos veinticuatro pesos 72/100 MN) por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.

De lo anterior se desprende que, aun cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica; por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la Resolución de mérito.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente.

Conclusión 50.3

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por la coalición, se desprende lo siguiente:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral aplicables en materia de fiscalización, al exceder el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad, contraviniendo expresamente lo establecido en el artículo 229, numeral 1, en relación al 342, numeral 2, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que la coalición conocía los alcances de las disposiciones legales y acuerdos invocados, así como el oficio de errores y omisiones emitido por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión de los Informes de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2011-2012.
- La coalición no es reincidente.

Que el monto involucrado asciende a **\$3,438,832.65 (tres millones cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos treinta y dos pesos 65/100 M.N.)**.

- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.²⁷

²⁷ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código; V. La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código se sancionará con multa; durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá sancionar con la suspensión parcial de las prerrogativas previstas en los artículos 56 y 71 de este ordenamiento; y VI. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la

[Énfasis añadido]

Consecuentemente, toda vez que la conducta analizada vulnera de forma directa el tope de gastos de campaña, la sanción a imponer corresponde a una sanción económica equivalente a un tanto igual al monto excedido.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer es la establecida en la fracción II, del inciso a) del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, considerando los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada tales como la gravedad ordinaria, la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta respecto a **exceder los topes de gastos de campaña establecidos por la autoridad** y la norma infringida [229, numeral 1, en relación al 342, numeral 2, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales], la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse a la coalición debe ser en razón del monto ejercido en exceso lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar a la coalición, con una sanción económica equivalente un tanto igual al monto excedido.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Revolucionario Institucional** en lo individual lo correspondiente al 80% (ochenta por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del **50% (cincuenta)** de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$2,751,066.12 (dos millones setecientos cincuenta y un mil sesenta y seis pesos 12/100 M.N.)**.

Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Verde Ecologista de México** en lo individual lo correspondiente al 20% (porcentaje en letra) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del **50% (cincuenta)** de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$687,766.53 (seiscientos ochenta y siete mil setecientos sesenta y seis pesos 53/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que las sanciones que por este medio se impone atienden a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

11. Modificaciones al Dictamen Consolidado de la otrora coalición Movimiento Progresista (CG190/2013, CG242/2013).

Que del análisis a las sentencias emitidas por la autoridad jurisdiccional, en específico por lo que hace al estudio de fondo y efectos de las mismas, se determinó confirmar las sanciones impuestas en la Resolución CG190/2013, por lo que hace a los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano entonces integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista, con excepción de lo establecido en las conclusiones **42; 132²⁸; 157; 219; 277; 378; 394²⁹** de la resolución. Por lo que este Consejo General únicamente se avocará al estudio y análisis de las conclusiones en cita, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por otra parte respecto de la Resolución CG242/2013, relativa a los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos correspondientes al ejercicio 2012, la autoridad jurisdiccional confirmó las sanciones impuesta al Partido de la Revolución Democrática, ordenando únicamente reclasificar la conclusión 73 de la resolución en comentario, situación que afecta la parte

²⁸ Consecuente con las modificaciones a la conclusión **132**, se actualizan las conclusiones informativas **133; 133-1 y 133-2**, las cuales no son sustantivas en el análisis de fondo del presente acatamiento.

²⁹ Consecuente con las modificaciones a la conclusión **394**, se actualizan las conclusiones informativas **395 y 396**, las cuales no son sustantivas en el análisis de fondo del presente acatamiento.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

conducente de las conclusiones 33 y 41 de los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano, respectivamente, de la resolución en cita.

En consecuencia, esta autoridad responsable procedió a acatar las sentencias relacionadas con el dictamen consolidado y resolución de la otrora coalición Movimiento Progresista realizando la valoración respectiva en congruencia con el sentido de las ejecutorias de mérito y la sección de ejecución.

A continuación se establecen los recursos de apelación a cumplir en el presente considerando, los temas materia de análisis, su vínculo con la sección de ejecución y el proceder general de la autoridad responsable, lo cual en algunos casos representa consecuencia jurídicas que en su momento se detallaran a cabalidad.

Resolución	SUP-RAP	Tema Sección de Ejecución	Valoración acatamiento
CG190/2013	118/2013 MC	Tema 3 Individualización de la sanción rebase de topes.	Una vez que se determine lo que en derecho corresponda por lo que hace a la conducta relativa a los topes de gasto de campaña se procederá a individualizar de conformidad con lo establecido en las ejecutorias.
	120/2013 PT		
	124/2013 PRD y PT	Tema 2 <i>Aplicaciones de recursos de campaña reportados y, en su caso, no coaligadas e incongruentes en la determinación del costo promedio en gasto no reportados.</i>	Esta autoridad dio cumplimiento a lo ordenado con el inicio del procedimiento administrativo sancionador INE/P-COF-UTF/421/2013.
		Incongruencia en el trato de gastos no reportados, C-42-2 Movimiento progresista (sanción), frente a C-119 procedimiento oficioso. En consecuencia se revocó la sanción impuesta y se ordenó el inicio de un PO.	Se resolvió mediante INE/CG615/2016 aprobado en sesión extraordinaria celebrada el 26 de agosto de 2016. En su resolutivo Cuarto, ordena a la UTF a efecto de que el monto involucrado consistente en \$703.53 se sume a los gastos de campaña PEF 2011-2012, COA Movimiento Progresista, del entonces candidato a Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador. Su cuantificación se advierte y dictamen y anexo.
		Tema 2 <i>Aplicaciones de recursos de campaña reportados y, en su caso, no coaligadas e incongruentes en la determinación del costo promedio en gasto no reportados.</i>	Se modifican las cifras relacionadas con gastos por concepto de bardas no reportadas a la autoridad, las cuales en el marco de la revisión se consideró actualizan una vulneración al artículo 77, numeral 3 del COFIPE.
		Incongruencia en la determinación del	

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Resolución	SUP-RAP	Tema Sección de Ejecución	Valoración acatamiento						
		<p>costo promedio. Vulneración al principio de objetividad ya que la responsable realizó una diferenciación de apreciación del método aplicado para determinar el costo promedio del costo de bardas en lo concerniente a gastos no reportados por concepto de bardas, cuando lo conducente sea que la determinación del costo por barda sea uno por cada partido o coalición. De acuerdo al informe.</p> <p>De ahí, que se haya estimado que la autoridad deberá de realizar la determinación del costo de bardas de manera diferenciada, con base exclusivamente en el promedio de gasto realizado por cada fuerza política en lo individual.</p> <p>En este sentido la SS ordenó realizar la determinación del costo de bardas de manera diferenciada con base exclusivamente en el promedio de gasto realizado por cada fuerza política en lo individual, que de acuerdo con la "Metodología utilizada para cuantificar gastos no reportados", es como sigue:</p> <table><tr><th>PP/COA</th><th>Costo determinado por barda</th></tr><tr><td>Compromiso por México</td><td>\$1,080.00</td></tr><tr><td>Movimiento Progresista</td><td>\$403.00</td></tr></table> <p>El resultado de la nueva determinación de costos de bardas deberá impactar en el nuevo cálculo que la autoridad haga para determinar las cifras que sirvan de base en relación con el rebase de topes de gastos de campaña.</p>	PP/COA	Costo determinado por barda	Compromiso por México	\$1,080.00	Movimiento Progresista	\$403.00	<p>Consecuentemente se modifica el monto involucrado por concepto de bardas en las conclusiones 42; 132; 219 y 394 del dictamen consolidado correspondiente a la coalición Movimiento Progresista, situación que implica se individualice de nueva cuenta dichas conductas.</p> <p>Adicionalmente al actualizarse las cifras cuantificadas a topes se determinara lo que en derecho corresponda y en su caso se procederá a la individualización de la sanción.</p>
PP/COA	Costo determinado por barda								
Compromiso por México	\$1,080.00								
Movimiento Progresista	\$403.00								
CG242/2013	164/2013 PRD	<p>Tema 1 Reclasificación de gastos ordinarios a erogaciones de campaña.</p> <p>1. Reclasificar las cantidades de la conclusión 73 a gastos de campaña; y,</p> <p>2. Sumar el gasto, al gasto de campaña reportado y, en su caso, determinar lo que en derecho proceda respecto de los gastos de campaña</p>	<p>Se reclasifica la conclusión 73 correspondiente al informe anual del Partido de la Revolución Democrática a efecto de considerarse el importe que la origina en el informe de campaña de la otrora coalición, en específico se cuantifica al tope de gasto de campaña respectivo.</p> <p>Consecuentemente se dejan sin efectos el análisis e individualización de la sanción impuesta con motivo de tal conclusión en la resolución CG242/2013.</p>						

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Resolución	SUP-RAP	Tema Sección de Ejecución	Valoración acatamiento
			<p>(...)</p> <p>73. Los partidos integrantes de la otrora Coalición Total "Movimiento Progresista" reportaron gastos de campaña en la revisión del Informe Anual 2012, mismos que al ser aplicados a los entonces candidatos de dicha coalición, se determinó un incremento en el rebase del tope de gastos de campaña de 12 candidatos a puestos de elección popular, por un excedente de \$2,309,711.79. (...)</p>
	166/2013 MC	<p>Tema 3 Individualización de la sanción rebase de topes</p>	<p>Al resolver el recurso de apelación la Sala Superior revocó la individualización de la sanción relativa a la conclusión 41 del partido Movimiento Ciudadano por el rebase de topes de gastos de campaña, conducta que se encuentra vinculada en su origen a la conclusión 73 del Partido de la Revolución Democrática.</p> <p>(...)</p> <p>41. Los partidos integrantes de la otrora Coalición Total "Movimiento Progresista" reportaron gastos de campaña en la revisión del Informe Anual 2012, mismos que al ser aplicados a los entonces candidatos de dicha coalición, se determinó un incremento en el rebase del tope de gastos de campaña de 12 candidatos a puestos de elección popular, por un excedente de \$2,309,711.79. (...)</p> <p>Consecuentemente al ordenarse la reclasificación de la conclusión 73, el monto total se considerara en la parte conducente del acatamiento a la resolución CG190/2013; por lo que, la conclusión 41 con la reclasificación referida queda insubsistente y por ende no produce consecuencias jurídicas que acatar.</p>
	168/2013 PT		<p>Al resolver el recurso de apelación la Sala Superior revocó la individualización de la sanción</p>

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Resolución	SUP-RAP	Tema Sección de Ejecución	Valoración acatamiento
			<p>relativa a la conclusión 33 del Partido del Trabajo por el rebase de topes de gastos de campaña, conducta que se encuentra vinculada en su origen a la conclusión 73 del Partido de la Revolución Democrática.</p> <p><i>“33.Los partidos integrantes de la otrora Coalición Total “Movimiento Progresista” reportaron gastos de campaña en la revisión del Informe Anual 2012, mismos que al ser aplicados a los entonces candidatos de dicha coalición, se determinó un incremento en el rebase del tope de gastos de campaña de 12 candidatos a puestos de elección popular, por un excedente de \$2,309,711.79.”</i></p> <p>Consecuentemente al ordenarse la reclasificación de la conclusión 73, el monto total se considerara en la parte conducente del acatamiento a la resolución CG190/2013; por lo que, la conclusión 33 con la reclasificación referida queda insubsistente y por ende no produce consecuencias jurídicas que acatar.</p>

Como se advierte existen diversos supuestos que por cuestión de método en su análisis deben ser abordados de forma específica, por lo que en presente considerando se dividirá en apartados en atención a los temas y afectación de los recursos de apelación al dictamen consolidado y resolución de la otrora coalición multicitada.

Es trascendente señalar que a la división propuesta se incluirán aquellos montos involucrados que con motivo de resoluciones aprobadas por esta autoridad responsable se ordena cuantificar al tope de gasto de diversas campañas; por lo que los montos involucrados a cuantificar (toda vez que las resoluciones se encuentran firmes) se reflejaran en la determinación que de forma funda y motivada se adopte en cuanto al tema del rebase al tope de gastos de campaña.

Visto lo precedente a continuación se desarrollan los apartados en comentario.

A. Incongruencia en el trato del gasto no reportado (SUP-RAP-124/2013; Tema 2, sección de ejecución).

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-124/2013**, entre otras cuestiones determinó que la autoridad responsable al resolver la Resolución CG190/2013, aplicó un tratamiento y consecuencias jurídicas distintas a situaciones similares.

Al respecto señaló que en la conclusión 119-1, correspondiente al considerando 9.4, inciso am), de la otrora “coalición Movimiento Progresista” la autoridad responsable determinó el inicio de un procedimiento oficioso en materia de fiscalización.

En tanto que en la conclusión 42-2, inciso g) del considerando en comento, determinó sancionar a los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano como integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista.

A consideración de la autoridad jurisdiccional ambas conclusiones se refieren a la detección de gastos a partir de los informes rendidos por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y, del Instituto Electoral del Estado de México, respecto de gastos en el ámbito local que beneficiaron a la campaña del entonces candidato al cargo de Presidente de la República postulado por la otrora coalición Movimiento Progresista, que no fueron reportados en el informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012.

Bajo esta tesitura la autoridad responsable dio un trato distinto a situaciones similares, pues mientras en la conclusión 42-2 concluyó la imposición de una multa económica a los partidos integrantes de la otrora coalición en cita, en lo atinente a la conclusión 119-1, no impuso sanción alguna y por el contrario determinó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, situación que se refleja para efecto del tope de gastos de campaña en el **Anexo 29**, del Dictamen, columna (55).

Para efecto de claridad a continuación se presentan las determinaciones de la autoridad electoral establecidas en la Resolución CG190/2013.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

CG190/2013 9.4 COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA	
<p>Conclusión 42-2, inciso g)</p> <p><i>"42-2. El Instituto Electoral de Tabasco proporcionó el monitoreo realizado en el ámbito local que benefició al locales, de los cuales 6 mantas y una marquesina no fueron reportados en la contabilidad local ni federal; por lo cual, la coalición no reportó el beneficio obtenido y su consecuente parte proporcional que le corresponde a las campaña (sic) federal de Presidente de la República por \$703.53.</i></p> <p>(...)</p> <p><i>Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse a la Coalición Movimiento Progresista una sanción económica consistente en el 200% (doscientos por ciento) del monto involucrado, dando como resultado el importe de \$ 1,308.93 (mil trescientos ocho pesos 93/100 M.N.)¹⁴¹.</i></p> <p><i>En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido de la Revolución Democrática en lo individual lo correspondiente al 50% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 11 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil doce, misma que asciende a la cantidad de \$685.63 (seiscientos ochenta y cinco pesos 63/100 M.N.).</i></p> <p><i>Por otra parte, este Consejo General impone al Partido del Trabajo en lo individual el 26% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 5 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil doce, misma que asciende a la cantidad de \$311.65 (trescientos once pesos 65/100 M.N.).</i></p> <p><i>Finalmente este Consejo General impone a Movimiento Ciudadano en lo individual el 24% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 5 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil doce, misma que asciende a la cantidad de \$311.65 (trescientos once pesos 65/100 M.N.).</i></p> <p>(...)"</p>	<p>Conclusión 119-1</p> <p><i>'119-1. El Instituto Electoral del Estado de México, hizo del conocimiento de la autoridad el Punto Octavo del acuerdo número IEEM/CG/08/2013, por el que se determinó un beneficio a la campaña federal por un importe de \$5,124,242.38.</i></p> <p><i>Cabe señalar, que lo anterior no se hizo del conocimiento de la coalición en virtud de que, derivó del análisis a la información y documentación proporcionada por el Instituto Electoral del Estado de México en fecha en la que había concluido el plazo para la notificación de errores y omisiones de la revisión."</i></p> <p>(...)</p> <p><i>En consecuencia, esta autoridad considera que debe iniciarse un procedimiento oficioso, a efecto de que se determine y, en su caso cuantifique el gasto de campaña no reportado, con fundamento en los artículos 77, numeral 6; 81, numeral 1, incisos c) y o); 118, numeral 1, incisos h), w) y z); y 361 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un monto de \$5,124,242.38 (\$5,109,498.78 + \$14,743.60).</i></p> <p>(...)"</p>

En consecuencia la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador oficioso por lo que hace a la **conclusión 42-2** en congruencia con lo determinado por la responsable en la **conclusión 119-1** visible en el cuadro precedente.

Cumplimiento.

De conformidad con lo ordenado por la autoridad jurisdiccional, el cinco de agosto de dos mil quince, se acordó el inicio y sustanciación del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, el cual se identificó con el número de expediente **INE/P-COF-UTF/421/2015**.

Con lo anterior, esta autoridad dio cumplimiento a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional en el recurso de apelación SUP-RAP-124/2013.

Bajo esta tesitura, una vez realizadas las diligencias correspondientes, en pleno respeto al debido proceso, en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, el Consejo General de este Instituto, aprobó por unanimidad la Resolución **INE/CG615/2016**³⁰, mediante la cual la autoridad resolvió el procedimiento referido en el párrafo precedente.

Al respecto, determinó lo siguiente:

“(…)

RESUELVE

PRIMERO. Se deja sin efectos las sanciones impuestas en el resolutivo cuarto, inciso g), conclusión 42-2; a los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano; **así como la cuantificación del beneficio obtenido al tope de gastos de campaña** del informe correspondiente al entonces candidato a la Presidencia de la República por la otrora coalición Movimiento Progresista el C. Andrés Manuel López Obrador, términos del **considerando 3** de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se declara **fundado** el presente procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano entonces integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista de conformidad con lo expuesto en el **Considerando 5** de la presente Resolución.

TERCERO. Se impone a los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano entonces integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista una sanción consistente en una **AMONESTACIÓN**

³⁰ La resolución INE/CG615/2016, no fue materia de impugnación, por lo que se encuentra firme.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

***PÚBLICA**, de conformidad con lo expuesto en el **Considerando 6** en relación al considerando 5, de la presente Resolución.*

***CUARTO.** Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización considere el monto involucrado correspondiente a **\$703.53 (Setecientos tres pesos 53/100 M.N.)** determinado en el considerando 4 de la presente Resolución, a las cifras finales del tope de gastos del informe de campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República por la otrora coalición Movimiento Progresista el C. Andrés Manuel López Obrador, para los efectos conducentes del recurso de apelación **SUP-RAP-124/2013**.*

***QUINTO.** Dese vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco en los términos establecidos en el **Considerando 7** de la presente Resolución.
(...)”*

Como se advierte, al resolver el procedimiento de mérito la responsable dejó sin efectos la sanción impuesta en la conclusión 42-2, así como la cuantificación respectiva al tope de gastos de campaña establecidas en la Resolución CG/190/2013 en congruencia con lo ordenado en la ejecutoria multicitada.

Por otra parte, al declarar fundado el procedimiento administrativo sancionador, ordenó que el monto involucrado correspondiente a **\$703.53 (Setecientos tres pesos 53/100 M.N.)**, se considerara en las cifras finales del tope de gastos del informe de campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República por la otrora coalición Movimiento Progresista, vinculando tal determinación con el recurso de apelación **SUP-RAP-124/2013**.

Consecuente con lo anterior, la autoridad responsable da cumplimiento parcial con lo ordenado por la autoridad jurisdiccional al dejar sin efecto las sanciones impuestas en la Resolución **CG190/2013** relativas a la conclusión 42-2 de la otrora coalición Movimiento Progresista, ordenar el inicio y sustanciación del procedimiento de mérito, así como determinar lo ya expuesto.

Finalmente, esta autoridad responsable **da cumplimiento total a lo ordenado cuantificando el importe de \$703.53 (Setecientos tres pesos 53/100 M.N.), a la cifra final dictaminada por auditoría correspondiente al tope de gastos de la campaña presidencial de la otrora coalición Movimiento Progresista, en el marco del Proceso del Proceso Electoral Federal 2011-2012.**

Tal situación se advierte reflejada en la modificación al **Anexo 29** del Dictamen, **columna (70)** que forma parte integral del presente acatamiento.

En consecuencia, una vez realizada la operación del total de gastos en la campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República contra el tope de gastos correspondiente, los resultados obtenidos se detallan en el apartado 4.5.1.10 “Rebase de Tope de Gastos de Campaña” del Dictamen Consolidado y que se relaciona con el **Anexo 29** referido; así como en la conclusión final de la revisión de los informes, identificada con el número **157**.

B. Reclasificación de gastos, conclusión 73 (SUP-RAP-164/2013; Apartado A, Tema 1, Sección de ejecución).

A continuación se establecerán las consideraciones determinadas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a lo establecido en el recurso de apelación **SUP-RAP-164/2013**, así como a los recursos **SUP-RAP-166/2013** y **SUP-RAP-168/2013**, relacionados con la Resolución **CG242/2013** y el tema 1 “**Reclasificación de gastos ordinarios a erogación de campaña**” de la sección de ejecución.

Bajo esta tesitura, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado como **SUP-RAP-164/2013**³¹, determinó confirmar la Resolución **CG242/2013**³² por lo que fue materia de impugnación.

No obstante al advertirse que la autoridad responsable acreditó la existencia de gastos que beneficiaron diversas campañas electorales en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, los cuales fueron registrados en la operación ordinaria del Partido de la Revolución Democrática, la autoridad jurisdiccional ordenó que el monto involucrado que origina la conclusión **73, considerando 2.3, inciso h)** de la resolución **CG242/2013** se reclasifique como gastos de campaña.

Como consecuencia de lo anterior, se sume el monto involucrado correspondiente a **\$2’309,711.79 (dos millones trescientos nueve mil setecientos once pesos 79/100 M.N.)** al tope de gastos de campaña de los entonces candidatos beneficiados; por lo que, con independencia de lo ordenado en el recurso de

³¹ Interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática

³² Resolución respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los Informes Anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales correspondientes al ejercicio dos mil doce.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

apelación **SUP-RAP- 124/2013** relativo a la Resolución **CG190/2013**,³³ se deja a salvo el derecho de la responsable para determinar lo correspondiente respecto al tope de gastos de campaña ahí analizado.

Para mayor claridad a continuación se transcribe la parte conducente de la conclusión 73, materia de análisis.

“Conclusión 73

‘73. Los partidos integrantes de la otrora Coalición Total ‘Movimiento Progresista’ reportaron gastos de campaña en la revisión del Informe Anual 2012, mismos que al ser aplicados a los entonces candidatos de dicha coalición, se determinó un incremento en el rebase del tope de gastos de campaña de 12 candidatos a puestos de elección popular, por un excedente de \$2,309,711.79.’

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO.

(...)

Ahora bien, como ya se señaló, los partidos entonces integrantes de la otrora Coalición excedieron el tope de campaña, fijado por la autoridad electoral por la cantidad total de \$2,309,711.79 (Dos millones trescientos nueve mil setecientos once pesos 79/100 M.N.) cantidad que implica lo siguiente:

CANDIDATO/CAMPAÑA/DTO.	TOTAL EGRESOS CAMPAÑA INFORME CAMPAÑA (A)	DE DE	MONTO INVOLUCRADO (B)	TOPE CAMPAÑA IA 2012 (D)	DE EN	REBASE TOPES DERIVADO DE IA 2012	DE DE
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR/PRESIDENTE/NACIONAL	336,112,084.16		2,233,533.64	2,233,533.64		2,233,533.64	
LEONEL EFRAÍN COTA MONTAÑO/FORMULA 1 BAJA CALIFORNIA SUR	2,240,747.23		12,231.94	12,231.94		12,231.94	
LAYDA ELENA SANORES SAN ROMÁN/SENADOR/FORMULA 1/CAMPECHE	2,240,747.23		12,231.94	12,231.94		12,231.94	
MARIO MIGUEL CARRILLO HUERTA/DIPUTADO/DTO. 16 D.F.	1,120,373.61		5,746.03	5,746.03		5,746.03	
JOSÉ ALBERTO BENAVIDES CASTAÑEDA/DIPUTADO/DTO. 20 D.F.	1,120,373.61		5,746.03	5,746.03		5,746.03	
JOSÉ ARTURO LÓPEZ CANDIDO/DIPUTADO/DTO.26 D.F.	1,120,373.61		5,746.03	5,746.03		5,746.03	
ALEJNADRO GONZALEZA YAÑEZ/DIPUTADO/DTO. 4 DURANGO	1,120,373.61		5,746.03	5,746.03		5,746.03	
CRISTOFORO HERNÁNDEZ	1,120,373.61		5,746.03	5,746.03		5,746.03	

³³ Resolución respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de los candidatos de los partidos políticos y coaliciones correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

CANDIDATO/CAMPAÑA/DTO.	TOTAL EGRESOS CAMPAÑA INFORME CAMPAÑA (A)	DE DE	MONTO INVOLUCRADO (B)	TOPE CAMPAÑA IA 2012 (D)	DE EN	REBASE TOPES DERIVADO IA 2012	DE DE
MENA/DIPUTADO/DTO. 36 MÉXICO							
YARIBET BERNAL RUIZ –IVONNE CERVANTES CALDERON/DIPUTADO/DTO. 10 MICHOACÁN	1,120,373.61		5,746.03	5,746.03		5,746.03	
GUADALUPE FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA/DIPUTADO/DTO. 1 NAYARIT	1,120,373.61		5,746.03	5,746.03		5,746.03	
GERARDO GAUDIANO ROVIROSA/DIPUTADO/DTO. 4 TABASCO	1,120,373.61		5,746.03	5,746.03		5,746.03	
URIEL FLORES AGUAYO/DIPUTADO/DTO. 10 VERACRUZ	1,120,373.61		5,746.03	5,746.03		5,746.03	
TOTAL				\$2,309,711.79		\$2,309,711.79	

(...)

En consecuencia, este Consejo General concluye que los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Progresista entonces integrantes de la otrora coalición total Movimiento Progresista, excedieron en \$2,309,711.79 (Dos millones trescientos nueve mil setecientos once pesos 79/100 M.N.), el tope de gastos de campaña para la elección de los entonces candidatos a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Senadores de la República en las formulas referidas; así como en las candidaturas a Diputados Federales señaladas anteriormente en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012, vulnerando lo establecido en el artículo 229, numeral 1 en relación con el 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En este contexto, es importante señalar que una vez que se tiene un monto implicado lo procedente es imponer la sanción que corresponda a cada uno de los partidos integrantes de la otrora coalición multicitada de conformidad con el artículo 279, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, el cual establece que si se trata de infracciones relacionadas con la violación con los topes de los gastos de campaña, se impondrán sanciones equivalentes a todos los partidos integrantes de la coalición.

Por tanto, las sanciones económicas a imponer a cada uno de los partidos será la que a continuación se indique:

Monto en exceso (Rebase de topes) (A)	Sanción total a imponer al Partido de la Revolución Democrática (A/3) = (B)	Sanción total a imponer al Partido del Trabajo (A/3) = (C)	Sanción total a imponer al Partido Movimiento Ciudadano (A/3) = (D)
\$2,309,711.79	\$769,903.93	\$769,903.93	\$769,903.93

Nota: El análisis e imposición de la sanción correspondiente a los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano se observan en la parte correspondiente de la Resolución de **dichos partidos**.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Ahora bien, determinado el monto de la sanción que se debe de imponer a los partidos que en su momento integraron la otrora coalición Movimiento Progresista, se debe precisar que por lo que hace al partido de la Revolución Democrática se impone la sanción de \$769,903.93 (setecientos sesenta y nueve mil novecientos tres pesos 93/100 M.N.).

(...)

*En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al **Partido de la Revolución Democrática**, es la consistente en una **reducción del 0.24% (cero punto veinticuatro por ciento) de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes hasta alcanzar el equivalente a la cantidad de \$769,903.93 (Setecientos sesenta y nueve mil novecientos tres pesos 93/100 M.N.).***

(...)

TERCERO. *Por razones y fundamentos expuestos en el considerando 2.3 de la presente Resolución, se imponen al **Partido de la Revolución Democrática**, las siguientes sanciones:*

(...)

h) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 73

La reducción del 0.24% (cero punto veinticuatro por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar el equivalente a la cantidad de \$769,903.93 (setecientos sesenta y nueve mil novecientos tres pesos 93/100 M.N.).

Como se observa, en la conclusión 73 en cita, la autoridad responsable acreditó que el Partido de la Revolución Democrática, integrante de la otrora coalición Movimiento Progresista vulneró lo dispuesto en el artículo 229, numeral 1 con relación al 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; por lo que determinó de conformidad con el artículo 279, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, imponer sanciones

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

equivalentes³⁴ a los institutos políticos que integraron en su momento la coalición Movimiento Progresista.

Esto es así, derivado de los procedimientos de revisión del informe anual de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2012 (operación ordinaria), la autoridad advirtió la existencia de gastos que se encontraban vinculados a gastos de campaña, por lo que dichos conceptos de gasto debieron registrarse en los informes de campaña respectivos y no así en el informe anual.

Bajo esta tesitura la autoridad electoral realizó las observaciones correspondientes en los oficios de errores y omisiones en el marco de la revisión anual, haciendo del conocimiento a los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano el mal registro contable³⁵, consecuentemente se realizó la afectación del gasto no cuantificado al tope de gastos de campaña dictaminado por auditoría en el marco de la revisión de los informes de gastos de campaña, visibles en los **Anexos 8, 9 y 10** del Dictamen Consolidado relativo a la Resolución **CG190/2013**.

Consecuente con lo precedente, en la Resolución **CG242/2013** se determinó sancionar a cada uno de los institutos políticos integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista, imponiendo sanciones equivalentes ³⁶ como a continuación se observa:

Monto en exceso (Rebase de topes) (A)	Sanción total a imponer al Partido de la Revolución Democrática (A/3) = (B)	Sanción total a imponer al Partido del Trabajo (A/3) = (C)	Sanción total a imponer al Partido Movimiento Ciudadano (A/3) = (D)
\$2,309,711.79	\$769,903.93	\$769,903.93	\$769,903.93

Bajo esta tesitura, la conclusión 73 se encuentra relacionada directamente con conclusiones observadas en los dictámenes consolidados del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, las cuales advierten el mismo origen. Los casos en comento son los siguientes:

³⁴ La responsable determinó sancionar a los partidos políticos integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista, por rebase al tope de gastos de campaña de diversas candidaturas por el monto ejercido en exceso de forma equitativa entre los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano.

³⁵ Es trascendente señalar que de conformidad con los criterios determinados por la autoridad electoral, la omisión de reportar gastos en el informe correspondiente, como es el caso que nos ocupa, se consideró como un mal registro contable (Falta Formal)

³⁶ Interpretación realizada por la autoridad electoral del artículo 279, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización vigente al momento en que sucedieron los hechos.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- **Considerando 2.4 Partido del Trabajo, inciso c), conclusión 33; resolutivo cuarto, inciso c).**
- **Considerando 2.6 Movimiento Ciudadano, inciso e), conclusión 41; resolutivo sexto, inciso e)**

Al respecto, a continuación se transcribe la parte conducente de la resolución en comento:

“(…)

2.4 PARTIDO DEL TRABAJO

(…)

c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visible en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora de los artículos 229, numeral 1, en relación con el 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

‘Conclusión 33

‘33. Los partidos integrantes de la otrora Coalición Total ‘Movimiento Progresista’ reportaron gastos de campaña en la revisión del Informe Anual 2012, mismos que al ser aplicados a los entonces candidatos de dicha coalición, se determinó un incremento en el rebase del tope de gastos de campaña de 12 candidatos a puestos de elección popular, por un excedente de \$2,309,711.79.’

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO.

(…)

Ahora bien, como ya se señaló, los partidos entonces integrantes de la otrora Coalición excedieron el tope de campaña, fijado por la autoridad electoral por la cantidad total de \$2,309,711.79 (Dos millones trescientos nueve mil setecientos once pesos 79/100 M.N.) cantidad que implica lo siguiente:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

CANDIDATO/CAMPAÑA/DTO.	TOTAL EGRESOS DE CAMPAÑA INFORME DE CAMPAÑA (A)	MONTO INVOLUCRADO (B)	TOPE DE CAMPAÑA EN IA 2012 (D)	REBASE DE TOPE DERIVADO DE IA 2012
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR/PRESIDENTE/NACIONAL	336,112,084.16	2,233,533.64	2,233,533.64	2,233,533.64
LEONEL EFRAÍN COTA MONTAÑO/FORMULA 1 BAJA CALIFORNIA SUR	2,240,747.23	12,231.94	12,231.94	12,231.94
LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN/SENADOR/FORMULA 1/CAMPECHE	2,240,747.23	12,231.94	12,231.94	12,231.94
MARIO MIGUEL CARRILLO HUERTA/DIPUTADO/DTO. 16 D.F.	1,120,373.61	5,746.03	5,746.03	5,746.03
JOSÉ ALBERTO BENAVIDES CASTAÑEDA/DIPUTADO/DTO. 20 D.F.	1,120,373.61	5,746.03	5,746.03	5,746.03
JOSÉ ARTURO LÓPEZ CANDIDO/DIPUTADO/DTO.26 D.F.	1,120,373.61	5,746.03	5,746.03	5,746.03
ALEJNADRO GONZALEZA YAÑEZ/DIPUTADO/DTO. 4 DURANGO	1,120,373.61	5,746.03	5,746.03	5,746.03
CRISTOFORO HERNÁNDEZ MENA/DIPUTADO/DTO. 36 MÉXICO	1,120,373.61	5,746.03	5,746.03	5,746.03
YARIBET BERNAL RUIZ -IVONNE CERVANTES CALDERON/DIPUTADO/DTO. 10 MICHOACÁN	1,120,373.61	5,746.03	5,746.03	5,746.03
GUADALUPE FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA/DIPUTADO/DTO. 1 NAYARIT	1,120,373.61	5,746.03	5,746.03	5,746.03
GERARDO GAUDIANO ROVIROSA/DIPUTADO/DTO. 4 TABASCO	1,120,373.61	5,746.03	5,746.03	5,746.03
URIEL FLORES AGUAYO/DIPUTADO/DTO. 10 VERACRUZ	1,120,373.61	5,746.03	5,746.03	5,746.03
TOTAL			\$2,309,711.79	\$2,309,711.79

(...)

En consecuencia, este Consejo General concluye que los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Progresista entonces integrantes de la otrora coalición total Movimiento Progresista, excedieron en **\$2,309,711.79 (Dos millones trescientos nueve mil setecientos once pesos 79/100 M.N.)**, el tope de gastos de campaña para la elección de los entonces candidatos a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Senadores de la República en las formulas referidas; así como en las candidaturas a Diputados Federales señaladas anteriormente en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012, vulnerando lo establecido en el artículo 229, numeral 1 en relación con el 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En este contexto, es importante señalar que una vez que se tiene un monto implicado lo procedente es imponer la sanción que corresponda a cada uno de los partidos integrantes de la otrora coalición multicitada de conformidad con el artículo 279, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, el cual establece que si se trata de infracciones relacionadas con la violación con los

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

topes de los gastos de campaña, se impondrán sanciones **equivalentes** a todos los partidos integrantes de la coalición.

Por tanto, las sanciones económicas a imponer a cada uno de los partidos será la que a continuación se indique:

Monto en exceso (Rebase de topes) (A)	Sanción total a imponer al Partido de la Revolución Democrática (A/3) = (B)	Sanción total a imponer al Partido del Trabajo (A/3) = (C)	Sanción total a imponer al Partido Movimiento Ciudadano (A/3) = (D)
\$2,309,711.79	\$769,903.93	\$769,903.93	\$769,903.93

Nota: El análisis e imposición de la sanción correspondiente a los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano se observan en la parte correspondiente de la Resolución de dichos partidos.

Ahora bien, determinado el monto de la sanción que se debe de imponer a los partidos que en su momento integraron la otrora coalición Movimiento Progresista, se debe precisar que por lo que hace al partido de la Revolución Democrática se impone la sanción de \$769,903.93 (setecientos sesenta y nueve mil novecientos tres pesos 93/100 M.N.).

(...)

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al **Partido del Trabajo**, es la consistente en una **reducción del 0.24% (cero punto veinticuatro por ciento) de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes hasta alcanzar el equivalente a la cantidad de \$769,903.93 (Setecientos sesenta y nueve mil novecientos tres pesos 93/100 M.N.).**

(...)

CUARTO. Por razones y fundamentos expuestos en el considerando **2.4** de la presente Resolución, se imponen al **Partido del Trabajo**, las siguientes sanciones:

(...)

c) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **33**

La reducción del 0.24% (cero punto veinticuatro por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar el equivalente a la cantidad de \$769,903.93 (setecientos sesenta y nueve mil novecientos tres pesos 93/100 M.N.).

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

(...)

2.6 MOVIMIENTO CIUDADANO

(...)

e) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visible en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora de los artículos 229, numeral 1, en relación con el 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

‘Conclusión 41

‘41. Los partidos integrantes de la otrora Coalición Total ‘Movimiento Progresista’ reportaron gastos de campaña en la revisión del Informe Anual 2012, mismos que al ser aplicados a los entonces candidatos de dicha coalición, se determinó un incremento en el rebase del tope de gastos de campaña de 12 candidatos a puestos de elección popular, por un excedente de \$2,309,711.79.’

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO.

(...)

Ahora bien, como ya se señaló, los partidos entonces integrantes de la otrora Coalición excedieron el tope de campaña, fijado por la autoridad electoral por la cantidad total de \$2,309,711.79 (Dos millones trescientos nueve mil setecientos once pesos 79/100 M.N.) cantidad que implica lo siguiente:

CANDIDATO/CAMPAÑA/DTO.	TOTAL EGRESOS DE CAMPAÑA INFORME DE CAMPAÑA (A)	MONTO INVOLUCRADO (B)	TOPE DE CAMPAÑA EN IA 2012 (D)	REBASE DE TOPES DERIVADO DE IA 2012
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR/PRESIDENTE/NACIONAL	336,112,084.16	2,233,533.64	2,233,533.64	2,233,533.64
LEONEL EFRAÍN COTA MONTAÑO/FORMULA 1 BAJA CALIFORNIA SUR	2,240,747.23	12,231.94	12,231.94	12,231.94
LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN/SENADOR/FORMULA 1/CAMPECHE	2,240,747.23	12,231.94	12,231.94	12,231.94
MARIO MIGUEL CARRILLO HUERTA/DIPUTADO/DTO. 16 D.F.	1,120,373.61	5,746.03	5,746.03	5,746.03
JOSÉ ALBERTO BENAVIDES CASTAÑEDA/DIPUTADO/DTO. 20 D.F.	1,120,373.61	5,746.03	5,746.03	5,746.03

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

CANDIDATO/CAMPAÑA/DTO.	TOTAL EGRESOS DE CAMPAÑA INFORME DE CAMPAÑA (A)	MONTO INVOLUCRADO (B)	TOPE DE CAMPAÑA EN IA 2012 (D)	REBASE DE TOPE DERIVADO DE IA 2012
JOSÉ ARTURO LÓPEZ CANDIDO/DIPUTADO/DTO. 26 D.F.	1,120,373.61	5,746.03	5,746.03	5,746.03
ALEJNADRO GONZALEZA YAÑEZ/DIPUTADO/DTO. 4 DURANGO	1,120,373.61	5,746.03	5,746.03	5,746.03
CRISTOFORO HERNÁNDEZ MENA/DIPUTADO/DTO. 36 MÉXICO	1,120,373.61	5,746.03	5,746.03	5,746.03
YARIBET BERNAL RUIZ –IVONNE CERVANTES CALDERON/DIPUTADO/DTO. 10 MICHOACÁN	1,120,373.61	5,746.03	5,746.03	5,746.03
GUADALUPE FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA/DIPUTADO/DTO. 1 NAYARIT	1,120,373.61	5,746.03	5,746.03	5,746.03
GERARDO GAUDIANO ROVIROSA/DIPUTADO/DTO. 4 TABASCO	1,120,373.61	5,746.03	5,746.03	5,746.03
URIEL FLORES AGUAYO/DIPUTADO/DTO. 10 VERACRUZ	1,120,373.61	5,746.03	5,746.03	5,746.03
TOTAL			\$2,309,711.79	\$2,309,711.79

(...)

En consecuencia, este Consejo General concluye que los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Progresista entonces integrantes de la otrora coalición total Movimiento Progresista, excedieron en **\$2,309,711.79 (Dos millones trescientos nueve mil setecientos once pesos 79/100 M.N.)**, el tope de gastos de campaña para la elección de los entonces candidatos a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Senadores de la República en las formulas referidas; así como en las candidaturas a Diputados Federales señaladas anteriormente en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012, vulnerando lo establecido en el artículo 229, numeral 1 en relación con el 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En este contexto, es importante señalar que una vez que se tiene un monto implicado lo procedente es imponer la sanción que corresponda a cada uno de los partidos integrantes de la otrora coalición multicitada de conformidad con el artículo 279, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, el cual establece que si se trata de infracciones relacionadas con la violación con los topes de los gastos de campaña, se impondrán sanciones **equivalentes** a todos los partidos integrantes de la coalición.

Por tanto, las sanciones económicas a imponer a cada uno de los partidos será la que a continuación se indique:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Monto en exceso (Rebase de topes) (A)	Sanción total a imponer al Partido de la Revolución Democrática (A/3) = (B)	Sanción total a imponer al Partido del Trabajo (A/3) = (C)	Sanción total a imponer al Partido Movimiento Ciudadano (A/3) = (D)
\$2,309,711.79	\$769,903.93	\$769,903.93	\$769,903.93

Nota: El análisis e imposición de la sanción correspondiente a los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano se observan en la parte correspondiente de la Resolución de dichos partidos.

Ahora bien, determinado el monto de la sanción que se debe de imponer a los partidos que en su momento integraron la otrora coalición Movimiento Progresista, se debe precisar que por lo que hace al partido de la Revolución Democrática se impone la sanción de \$769,903.93 (setecientos sesenta y nueve mil novecientos tres pesos 93/100 M.N.).

(...)

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al **Partido Movimiento Ciudadano**, es la consistente en una **reducción del 0.60% (cero punto sesenta por ciento) de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes hasta alcanzar el equivalente a la cantidad de \$769,903.93 (Setecientos sesenta y nueve mil novecientos tres pesos 93/100 M.N.).**

(...)

SEXTO. Por razones y fundamentos expuestos en el considerando **2.6** de la presente Resolución, se imponen al **Partido del Trabajo**, las siguientes sanciones:

(...)

e) *Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 41*

La reducción del **0.60%** (cero punto sesenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto *Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes*, hasta alcanzar el equivalente a la cantidad de \$769,903.93 (setecientos sesenta y nueve mil novecientos tres pesos 93/100 M.N.).

(...)"

Como se observa, las **conclusiones 73, 33 y 41**, conforme al orden establecido en su análisis y sanción en la Resolución **CG242/2013**, se encuentran directamente vinculadas entre sí, pues las tres observaciones tienen como origen la vulneración al tope de gastos de campaña por el monto involucrado de

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

\$2'309,711.79 (dos millones trescientos nueve mil setecientos once pesos 79/100 M.N.), el cual se consideró en su momento dividir de forma equivalente a los institutos políticos para la imposición de las sanciones respectivas,

En este orden de ideas, la reclasificación del monto total que da origen a la conclusión 73 ordenada en el recurso de apelación **SUP-RAP-164/2013** trasciende de forma sustancial en las conclusiones **33 y 41**, por lo que no se puede desvincular la conducta relativa al rebase de tope de gastos de las tres conclusiones pues los efectos del mismo tienen un origen común y por ende la imposición de la sanción.

Consecuentemente, al ordenar la autoridad jurisdiccional la reclasificación de **\$2'309,711.79 (dos millones trescientos nueve mil setecientos once pesos 79/100 M.N.)**, con la finalidad de que se sumen al tope de gastos de campaña fijado en dictamen consolidado correspondiente y se determine lo que en derecho corresponda, lo procedente es armonizar las determinaciones de la responsable al dar cumplimiento a los recursos de apelación materia de análisis.

Conforme a lo anterior, las tres conclusiones en cita deberán de perder los efectos determinados en la Resolución **CG242/2013** con la finalidad de formar parte integral del análisis y valoración que determine esta responsable en el recurso de apelación **SUP-RAP-124/2013**.

No considerar lo anterior vulneraria de forma grave el principio de congruencia que rige en las resoluciones que emite esta responsable.

Sirve como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia **28/2009**, bajo el rubro **CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA, SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA**. Con el texto siguiente:

“El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que toda decisión de los órganos encargados de impartir justicia, debe ser pronta, completa e imparcial, y en los plazos y términos que fijen las leyes. Estas exigencias suponen, entre otros requisitos, la congruencia que debe caracterizar toda resolución, así como la exposición concreta y precisa de la fundamentación y motivación correspondiente. La congruencia externa, como principio rector de toda sentencia, consiste en la plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto, en un juicio o recurso, con la litis planteada por las partes, en la demanda respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia. La

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

congruencia interna exige que en la sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutive. Por tanto, si el órgano jurisdiccional, al resolver un juicio o recurso electoral, introduce elementos ajenos a la controversia o resuelve más allá, o deja de resolver sobre lo planteado o decide algo distinto, incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia, que la torna contraria a Derecho.

Cuarta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2642/2008 y acumulado.—Actores: Jesús Ortega Martínez y Alfonso Ramírez Cuellar.—Órgano Partidista Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática.—12 de noviembre de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Alejandro David Avante Juárez, Sergio Dávila Calderón y Genaro Escobar Ambríz.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-17/2009.—Actor: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa del Estado de Sonora.—17 de abril de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Julio César Cruz Ricárdez.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-466/2009.—Actor: Filemón Navarro Aguilar.—Órgano Partidista Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática.—13 de mayo de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Jorge Julián Rosales Blanca.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de octubre de dos mil nueve, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 23 y 24.”

Bajo esta tesitura, la autoridad responsable se encuentra obligada a ser congruente en las resoluciones que emita, por lo que si la reclasificación de la conclusión 73, implica que se deje sin efecto el análisis y sanción impuesta al Partido de la Revolución Democrática, **como consecuencia directa se deberán de dejar sin efecto las conclusiones 33 y 41 de los considerandos y resolutive referidos**, con la finalidad de determinar en congruencia lo que en derecho corresponda en la valoración realizada al acatamiento del recurso de

CONSEJO GENERAL SUP-RAP-124/2013 Y OTROS

apelación **SUP-RAP-124/2013**, por lo que hace a la vulneración al tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012.

Lo anterior tomando en consideración que las cifras finales dictaminadas por auditoría se encuentran pendientes de conclusión hasta en tanto esta autoridad responsable determine lo conducente de conformidad con lo establecido en el recurso de apelación **SUP-RAP-124/2013** relativo a la Resolución CG190/2013, situación que resuelve en el **apartado E**, del presente acatamiento relativo a las modificaciones del dictamen consolidado respecto del rebase de topes.

Recursos de apelación SUP-RAP-166/2013 y SUP-RAP-168/2013.

Ahora bien, esta autoridad electoral no es omisa en advertir que en los recursos de apelación **SUP-RAP-166/2013** (Movimiento Ciudadano) y **SUP-RAP-168/2013** (Partido del Trabajo) la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó revocar la Resolución CG242/2013 por lo que hace a la individualización de las sanciones impuestas a los partidos apelantes relacionadas con las conclusiones 41 y 33,³⁷ respectivamente.

Bajo esta tesitura, si lo procedente es dejar sin efectos el análisis de fondo y consecuente imposición de la sanción impuesta en las conclusiones en comento relativas al informe anual de conformidad con los argumentos vertidos en párrafos precedentes, el cumplimiento de las ejecutorias en cita se realizará conforme a la determinación de esta responsable en el recurso de apelación **SUP-RAP-124/2013**; lo anterior, en atención al principio de congruencia en cita.

Por lo que hace a la individualización de la sanción que en derecho corresponda se realizará conforme a las ejecutorias y sección de ejecución materia del presente acatamiento.

Conclusiones

En atención a los argumentos vertidos en el presente considerando, esta autoridad responsable concluye que para armonizar lo ordenado en los recursos de apelación **SUP-RAP-164/2013**; **SUP-RAP-166/2013** y **SUP-RAP-168/2013**, se realiza lo siguiente:

³⁷ Los efectos de las sentencias se observan en el considerando 4 del presente cumplimiento.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

a) Se dejan sin efecto el análisis e individualización de las sanciones, de las conclusiones siguientes:

- 73, considerando 2.3, inciso h); resolutivo tercero, inciso h) correspondiente al Partido de la Revolución Democrática.
- 33, considerando 2.4, inciso c); resolutivo cuarto, inciso c) correspondiente al Partido del Trabajo.
- 41, considerando 2.6, inciso e); resolutivo sexto, inciso e) correspondiente al partido Movimiento Ciudadano.

Todas de la Resolución CG242/2013.

b) Se reclasifica el monto involucrado de **\$2'309,711.79 (dos millones trescientos nueve mil setecientos once pesos 79/100 M.N.)**, vinculado con las conclusiones 73, 33 y 41 referidas en el inciso a) precedente, para que el mismo forme parte integral de las modificaciones que al respecto realice la responsable al dar cumplimiento al recurso de apelación **SUP-RAP-124/2013**.

c) Consecuente con lo anterior, se cuantifica el monto involucrado materia de observación al tope de gastos de las campañas beneficiadas; por lo que en la parte conducente del dictamen consolidado que al respecto se modifique se afecta el gasto respectivo.

d) Del análisis y valoración que en derecho corresponda esta autoridad electoral determinara si se actualiza alguna vulneración en materia de tope de gastos de campaña.

Lo anterior, toda vez que se encuentra pendiente de resolver el tope de gastos de campaña, el cual será materia del presente acatamiento en el **apartado E**, considerando 8 del presente acatamiento.

e) Por lo que hace a lo ordenado en los recursos de apelación **SUP-RAP-166/2013** y **SUP-RAP-168/2013**, relacionados con las conclusiones 41 y 33, respectivamente, de la Resolución CG242/2013, esta autoridad responsable dará cumplimiento a lo ordenado en las ejecutorias de mérito en la individualización de la sanción que en su caso se realice de conformidad con las modificaciones realizadas al recurso de apelación **SUP-RAP-124/2013**, en materia de topes de gastos de campaña.

C. Acumulación a topes de gastos de diversas campañas en atención a Procedimientos administrativos sancionadores.

Durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012 y una vez concluido el mismo, en ejercicio de sus atribuciones competenciales y facultades de investigación, la autoridad electoral sustanció diversos procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización relacionados con los gastos de campaña de la otrora coalición Movimiento Progresista.

Como consecuencia de las investigaciones realizadas se advirtieron gastos que beneficiaron las campañas de los entonces candidatos a Presidente y Senadores de la República, así como Diputados Federales, los cuales no se habían considerado en el tope de gastos respectivo, por lo que era necesario cuantificarlo y determinar si se acreditaba alguna infracción en la materia.

No obstante lo anterior, al resolverse el recurso de apelación **SUP-RAP-124/2013**, ordenando diversas modificaciones que afectan los topes de campaña de la otrora coalición en comento, implicó que las cifras dictaminadas por auditoría no se encontraran firmes.

Por lo que esta autoridad electoral determinó resolver diversos procedimientos administrativos sancionadores ordenado cuantificar al tope de gastos de campaña de la otrora coalición que se encontraba pendiente de acatar, con la finalidad de armonizar las sanciones que en derecho correspondieran y acumular el gasto correspondiente, tal y como consideró la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al ordenar en el recurso de apelación **SUP-RAP-164/2013**, la reclasificación de gastos de campaña registrados en el informe anual al informe de campaña y considerar el gasto a los topes respectivos.

Cabe señalar que tal situación en modo alguno representa que la autoridad electoral se encuentre imposibilitada a determinar la existencia de más gastos no cuantificados y/o reportados en los informes de campaña relacionados con el Proceso Electoral Federal 2011-2012; previo respeto a las formalidades esenciales del procedimiento.

Ahora bien, a continuación se presenta la relación de procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización que se cuantificaran a los topes de gastos de campaña respectivos, los cuales se encuentran visibles en

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

las **columnas (72) y (73) del Anexo 29 y (30) del Anexo 54** del presente acatamiento.

• **INE/CG611/2016³⁸**

En sesión ordinaria celebrada el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG611/2016, la cual resolvió el procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización identificado con el número **P-UFRPP 36/13**.

Al respecto, no obstante que el procedimiento se consideró infundado, de conformidad con el considerando “**4. Probable rebase de tope de gastos de campaña.**” con relación al Resolutivo “**SEGUNDO**” de la resolución en cita se ordenó la cuantificación a tope de gastos de campaña de diversos candidatos de la otrora coalición Movimiento Progresista.

A continuación se transcribe la parte que interesa:

“(…)

4. Probable rebase de tope de gastos de campaña.

*Tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la presente Resolución, los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrantes de la otrora coalición “Movimiento Progresista” se beneficiaron con la adquisición de propaganda electoral de la especie “espectaculares”, por un monto de **\$571,948.32 (quinientos setenta y un mil novecientos cuarenta y ocho pesos 32/100 M.N.)**, tal cantidad debe ser prorrateada y contabilizada en los tope de gastos de campaña presentado por los partidos integrantes de la Coalición “Movimiento Progresista”, relativo al entonces candidato a la Presidencia de la República, el **C. Andrés Manuel López Obrador** y los entonces candidatos a Diputados Federales analizados en la presente Resolución, a saber:*

ENTIDAD	DISTRITO	DIPUTADA/DIPUTADO
VERACRUZ	12	POLA ESTRADA CUAUHTÉMOC
VERACRUZ	14	GUZMAN ALEMAN AMADO
VERACRUZ	9	GONZÁLEZ ROJANO MARÍA DE LA LUZ
VERACRUZ	18	ROMERO AQUINO DULCE MARÍA
VERACRUZ	15	NORA GABRIELA LIRA DOMÍNGUEZ
VERACRUZ	10	FLORES AGUAYO URIEL
VERACRUZ	3	MEDINA PÉREZ MARCO ANTONIO

³⁸ La resolución puede consultarse en la siguiente liga: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2016/08_Agosto/CGor201608-26/CGor201608-26-rp-16-2.pdf

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

ENTIDAD	DISTRITO	DIPUTADA/DIPUTADO
VERACRUZ	4	BARRANCO AGUIRRE BYRON BORIS

Lo anterior, con la finalidad de determinar si hubo rebase al tope de gasto de campaña establecido por la autoridad electoral; y con ello, determinar si se contravino lo dispuesto por el artículo 229, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

A continuación se desglosa el monto obtenido de las consideraciones que preceden al presente apartado:

CONCEPTO	Factura	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Transferencia en especie al CEN	MT1301	Exhibición de su	\$161,849.00
	MT1950	publicidad en	\$161,849.00
	MT3022	espectaculares (cartelera	\$80,924.50
	MT45485	y unipolar)	\$161,849.00
	MT2967	Lona font	\$5,476.32
TOTAL			\$571,948.32

(...)

*En ese sentido, esta autoridad considera que respecto al monto de **\$571,948.32 (quinientos setenta y un mil novecientos cuarenta y ocho pesos 32/100 M.N.)**, deberá aplicarse el prorrateo conducente y computarse en el Acuerdo que dé cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior en la referida sentencia y, en caso de actualizar un rebase al tope de gastos de campaña respectivo, sancionar tal conducta en dicho momento procesal.*

(...)

RESUELVE

(...)

SEGUNDO. *Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto que, de conformidad con lo analizado en el **Considerando 4**, una vez que se realice al acatamiento al SUP-RAP-124/2013, sean sumados a los montos de erogaciones finales correspondientes a los sujetos obligados que correspondan, así como que, en su caso, se realice el prorrateo que conforme a derecho corresponda.*

(...)”

La resolución en comento no fue impugnada, en consecuencia se encuentra firme.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Cuantificación a topes (Auditoría)

En atención a lo ordenado por la resolución en comento la autoridad responsable procedió a realizar la cuantificación correspondiente, a continuación se presenta el ejercicio realizado.

En cumplimiento a lo ordenado por la autoridad electoral, se procedió a la valoración del beneficio a las campañas beneficiadas de acuerdo a lo establecido en la Resolución INE/CG611/2016 derivado de la documentación de los anuncios espectaculares presentada por los partidos políticos que amparan las facturas referidas, determinándose lo siguiente:

FACTURA Impactos Frecuencia y Cobertura en Medios, S.A. de C.V.				CANDIDATOS BENEFICIADOS
NÚMERO		CONCEPTO	IMPORTE	
MT1301	13-04-12	Por la exhibición de su publicidad (cartelera)	161,849.00	Campaña Presidencial AMLO Campaña Diputados Federales Dto. 3 Veracruz. Marco Antonio Medina Pérez Dto. 4 Veracruz. Byron Boris Barranco Aguirre Dto. 9 Veracruz. María de la Luz González Rojano Dto. 10 Veracruz. Uriel Flores Aguayo Dto. 12 Veracruz. Cuauhtémoc Pola Estrada Dto. 14 Veracruz. Amado Guzmán Alemán Dto. 15 Veracruz. Nora Gabriela Lira Domínguez Dto. 18 Veracruz. Dulce María Romero Aquino Dto. 19 Veracruz. Sergio Cadena Martínez
MT1950	11-05-12	Por la exhibición de su publicidad (cartelera)	161,849.00	
MT3022	22-06-12	Por la exhibición de su publicidad (cartelera)	80,924.50	
MX45485	22-03-12	Por la exhibición de su publicidad	161,849.00	
		TOTAL	\$566,471.50	
MT2967	20-06-12	Impresión Lona Front., medida 12.90 X 7.32 mts.	5,476.82	Campaña Presidencial AMLO Campaña Diputados Federales Dto. 4 Veracruz. Byron Boris Barranco Aguirre
		TOTAL	\$571,948.32	

Cabe mencionar que en la Resolución INE/CG611/2016 se describe que los gastos fueron reportados por el Partido de la Revolución Democrática, en la cuenta "GASTOS EN ESPECTACULARES COLOCADOS EN LA VÍA PÚBLICA", en la contabilidad que controla recursos locales en el estado de Veracruz; por lo tanto, para el procedimiento de mérito se mandó llevar a cabo el prorrateo respecto del beneficio acreditado por los partidos integrantes de la entonces Coalición "Movimiento Progresista".

En este sentido, la coalición debió haber reportado los gastos que beneficiaban al candidato a la Presidencia de la República y a Diputados Federales señalados en el cuadro que antecede, tomando en cuenta los porcentajes de prorrateo determinados por el Responsable del Órgano de Finanzas de la Coalición "Movimiento Progresista", dichos criterios fueron notificados a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos mediante escrito SAFYPI/1032/2012 del 8 de octubre de 2012.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

No obstante, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral celebrada el día 10 de julio de 2013, se determinó en el caso de los gastos no reportados por los partidos políticos, únicamente se aplicó lo dispuesto en el inciso a) del artículo 177 del Reglamento de Fiscalización.

Por lo anterior, se procede a distribuir el monto de \$571,948.32 entre cada una de las campañas beneficiadas de conformidad con los porcentajes de prorratio descritos anteriormente, tal y como se detalla a continuación:

CAMPANAS BENEFICIADAS	CANDIDATO	FACTURAS MT1301, MT1950, MT3022 y MX45485	FACTURA MT1950	IMPORTE QUE SE ACUMULA AL TOPE
Presidente	Andrés Manuel López Obrador	283,235.75	2,738.41	\$285,974.16
Diputados Federales		283,235.75	2,738.41	\$285,974.16
	Dtto. 3 Veracruz. Marco Antonio Medina Pérez	31,470.64		\$31,470.64
	Dtto. 4 Veracruz. Byron Boris Barranco Aguirre	31,470.64	2,738.41	\$34,209.05
	Dtto. 9 Veracruz. María de la Luz González Rojano	31,470.64		\$31,470.64
	Dtto.10 Veracruz. Uriel Flores Aguayo	31,470.64		\$31,470.64
	Dtto.12 Veracruz. Cuauhtémoc Pola Estrada	31,470.64		\$31,470.64
	Dtto.14 Veracruz. Amado Guzmán Alemán	31,470.64		\$31,470.64
	Dtto.15 Veracruz. Nora Gabriela Lira Domínguez	31,470.64		\$31,470.64
	Dtto.18 Veracruz. Dulce María Romero Aquino	31,470.64		\$31,470.64
	Dtto.19 Veracruz. Sergio Cadena Martínez	31,470.64		\$31,470.64
TOTAL		\$566,471.50	\$5,476.82	\$571,948.32

Por lo anteriormente señalado, el gasto reportado ante la autoridad electoral local en el estado de Veracruz y no reportado el beneficio a la campaña de Presidente de la República por **\$285,974.16**, se acumula para efectos del rebase de tope de gastos de campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República, mismo que se identifica en el **Anexo 29 del Dictamen, columna (72)**.

En consecuencia, una vez realizada la operación del total de gastos en la campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República contra el tope de gastos correspondiente, los resultados obtenidos se detallan en el apartado 4.5.1.10 “Rebase de Tope de Gastos de Campaña” del Dictamen Consolidado y que se relaciona con el **Anexo 29** del Dictamen referido; así como en la conclusión final de la revisión de los informes, identificada con el número 157.

Referente al gasto reportado ante la autoridad electoral local en el estado de Veracruz y no a la campaña de Diputados Federales por **\$285,974.16**, se acumulan para efectos del rebase de tope de gastos de campaña de los entonces candidatos a Diputados Federales, mismos que se identifica en el **Anexo 54** del Dictamen, columna (30).

En consecuencia, una vez realizada la operación del total de gastos en la campaña de los entonces candidatos a Diputados Federales contra el tope de gastos correspondiente, los resultados obtenidos se detallan en el **apartado 4.5.3.7 “Rebase de Tope de Gastos de Campaña” del Dictamen Consolidado y que se relaciona con el Anexo 54 referido; así como en la conclusión final de la revisión de los informes, identificada con el número 378.**

- **INE/CG422/2016³⁹**

En sesión extraordinaria celebrada el treinta y uno de mayo de dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG422/2016, la cual resolvió el procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización identificado con el número **P-UFRPP 72/13**.

Al respecto, no obstante que el procedimiento se consideró infundado, de conformidad con el considerando **“4. Probable rebase de tope de gastos de campaña.”** con relación al Resolutivo **“SEGUNDO”** de la resolución en cita se ordenó la cuantificación al tope de gastos de la campaña del entonces candidato a la Presidencia de la república de la otrora coalición Movimiento Progresista.

A continuación se transcribe la parte que interesa:

“(…)

*Tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la presente Resolución, el Partido del Trabajo se benefició con la adquisición de propaganda electoral de la especie “lonas”, por un monto de **\$87,435.34 (ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 34/100 M.N.)**, tal cantidad debe ser prorrateada y contabilizada en los tope de gastos de campaña presentado por los partidos integrantes de la Coalición “Movimiento Progresista”, relativo al entonces candidato al Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de determinar si hubo rebase al tope de gasto de campaña establecido por la autoridad electoral; y con ello, determinar si se contravino lo dispuesto por el artículo 229, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

A continuación se desglosa el monto obtenido de las consideraciones que preceden al presente apartado:

³⁹ La resolución puede consultarse en la siguiente liga: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2016/05_Mayo/CGex201605-31_01/CGex201605-31-rp-2-1.pdf

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

CONCEPTO	Factura	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Transferencia en especie al CEN	DVF4502	LONA STD FRONT	\$19,922.26
	DVF4579	LONA STD FRONT	\$67,513.08
	TOTAL		\$87,435.34

(...)

*En ese sentido, esta autoridad considera que respecto al monto de **\$87,435.34 (ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 34/100 M.N.)**, deberá aplicarse el prorrateo conducente y computarse en el Acuerdo que dé cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior en la referida sentencia y, en caso de actualizar un rebase al tope de gastos de campaña respectivo, sancionar tal conducta en dicho momento procesal.*

(...)

RESUELVE

(...)

SEGUNDO. *Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto que, de conformidad con lo analizado en el **Considerando 4**, una vez que se realice al acatamiento al SUP-RAP-124/2013, sean sumados a los montos de erogaciones finales correspondientes a los sujetos obligados que correspondan, así como que, en su caso, se realice el prorrateo que conforme a derecho corresponda.*

(...)"

La resolución en comento no fue impugnada, en consecuencia se encuentra firme.

Cabe señalar que mediante oficios INE/UTF/DRN/575/2016 e INE/UTF/DRN/601/2016 de veintitrés de septiembre y dieciocho de octubre, respectivamente, ambos de dos mil dieciséis, se notificó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos y Otros, lo ordenado en las resoluciones en cita.

Visto lo anterior, esta autoridad responsable procederá a realizar el prorrateo de gastos, por lo que se cuantificara el beneficio económico determinado de conformidad con lo ordenado en las resoluciones de mérito.

En las cifras finales del tope de gasto de campaña correspondiente se refleja la cuantificación respectiva, la cual se advierte en el **Anexo 29** por lo que se refiere a

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

la campaña Presidencial y en el **Anexo 54** relativo a las campañas de Diputados Federales del presente acatamiento; por lo que en las cifras finales en comento se analizará la procedencia de ser el caso, de infracciones en materia de tope de gastos.

Cuantificación a topes (Auditoría)

En cumplimiento a lo ordenado por la autoridad electoral, se procedió a la valoración del beneficio a las campañas de acuerdo a lo establecido en la Resolución INE/CG422/2016 derivado de la documentación de los gastos por concepto de lonas presentada que amparan las facturas referidas, determinándose lo siguiente:

FACTURA				CANDIDATOS BENEFICIADOS
Papeles y Conversiones de México, S.A. de C.V.				
NUMERO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
DFV4502	27-01-12	5 SBL13-32100 LONA STD FRONT 13OZ HTY 3.20X100	19,922.26	1 Miguel Ángel Mancera/ Víctor Hugo Monterola Ríos 2 Andrés Manuel López Obrador/ Víctor Hugo Monterola Ríos 3 Andrés Manuel López Obrador/ Angelina Méndez Álvarez 4 Andrés Manuel López Obrador/ Jorge Manuel Ballesteros López 5 Andrés Manuel López Obrador/Miguel Ángel Cámara Arango
DFV4579	03-02-12	17 SBL13-32100 LONA STD FRONT 13OZ HTY 3.20 X 100	\$67,513.08	1 Miguel Ángel Mancera Espinosa/ Víctor Hugo Lobo Román 2 Miguel Ángel Mancera Espinosa/Vidal Llerenas Morales 3 Miguel Ángel Mancera Espinosa/ Agustín Torres Pérez 4 Andrés Manuel López Obrador/ Alejandro Rafael Piña Medina 5 Andrés Manuel López Obrador/ Lucila Estela Hernández 6 Miguel Ángel Mancera Espinosa/Miriam Saldaña Chairez 7 Miguel Ángel Mancera Espinosa/Manuel Granados Covarrubias 8 Miguel Ángel Mancera Espinosa/Eduardo Santillán Pérez 9 Andrés Manuel López Obrador/ Jorge Agustín Zepeda Cruz 10 Miguel Ángel Mancera Espinosa/Jesús Cuauhtémoc Velasco Olivia 11 Andrés Manuel López Obrador/ Claudia Guadalupe Cortez Quiroz 12 Andrés Manuel López Obrador/ Rubén Escamilla Salinas 13 Andrés Manuel López Obrador/ Ma. Angelina Hernández Solís 14 Miguel Ángel Mancera Espinosa/ Carlos Hernández Mirón 15 Miguel Ángel Mancera Espinosa/ Alejandro Fernández Ramírez 16 Miguel Ángel Mancera Espinosa/ Nora del Carmen Bárbara Arias C. 17 Miguel Ángel Mancera Espinosa/ Jesús Salvador Valencia Guzmán
		TOTAL	\$87,435.34	

En este sentido, toda vez que la coalición no reportó los gastos que beneficiaban al candidato a la Presidencia de la República señalados en el cuadro que antecede en el Informe de Campaña respectivo; esta autoridad procedió a determinar las cantidades que se acumulan para efectos del tope de gastos de campaña de conformidad con los criterios de prorrateo aplicables.

Al respecto, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral celebrada el día 10 de julio de 2013, se determinó en el caso de los gastos no reportados por los partidos políticos, únicamente se aplicara lo dispuesto en el inciso a) del artículo 177 del Reglamento de Fiscalización.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En consecuencia, el monto acumulable a los gastos de la campaña al cargo de Presidente de la República es de **\$19,882.96**, el cual se integra de la manera siguiente:

FACTURA	CANDIDATOS BENEFICIADOS	COSTO UNITARIO	CAMPAÑA PRESIDENCIAL	CAMPAÑA LOCAL
DFV4502	1 Miguel Ángel Mancera/ Víctor Hugo Monterola Ríos	3,984.45	0.00	3,984.45
	2 Andrés Manuel López Obrador/ Víctor Hugo Monterola Ríos	3,984.45	1,992.23	1,992.22
	3 Andrés Manuel López Obrador/ Angelina Méndez Álvarez	3,984.45	1,992.23	1,992.22
	4 Andrés Manuel López Obrador/ Jorge Manuel Ballesteros López	3,984.45	1,992.23	1,992.22
	5 Andrés Manuel López Obrador/Miguel Ángel Cámara Arango	3,984.46	1,992.23	1,992.23
	Subtotal	19,922.26	\$7,968.92	\$11,953.34
DFV4579	1 Miguel Ángel Mancera Espinosa/ Víctor Hugo Lobo Román	3,971.36	0.00	3,971.36
	2 Miguel Ángel Mancera Espinosa/Vidal Llerenas Morales	3,971.36	0.00	3,971.36
	3 Miguel Ángel Mancera Espinosa/ Agustín Torres Pérez	3,971.36	0.00	3,971.36
	4 Andrés Manuel López Obrador/ Alejandro Rafael Piña Medina	3,971.36	1,985.68	1,985.68
	5 Andrés Manuel López Obrador/ Lucila Estela Hernández	3,971.36	1,985.68	1,985.68
	6 Miguel Ángel Mancera Espinosa/Miriam Saldaña Chairez	3,971.36	0.00	3,971.36
	7 Miguel Ángel Mancera Espinosa/Manuel Granados Covarrubias	3,971.36	0.00	3,971.36
	8 Miguel Ángel Mancera Espinosa/Eduardo Santillán Pérez	3,971.36	0.00	3,971.36
	9 Andrés Manuel López Obrador/ Jorge Agustín Zepeda Cruz	3,971.36	1,985.68	1,985.68
	10 Miguel Ángel Mancera Espinosa/Jesús Cuauhtémoc Velasco Olivia	3,971.36	0.00	3,971.36
	11 Andrés Manuel López Obrador/ Claudia Guadalupe Cortez Quiroz	3,971.36	1,985.68	1,985.68
	12 Andrés Manuel López Obrador/ Rubén Escamilla Salinas	3,971.36	1,985.68	1,985.68
	13 Andrés Manuel López Obrador/ Ma. Angelina Hernández Solís	3,971.36	1,985.68	1,985.68
	14 Miguel Ángel Mancera Espinosa/ Carlos Hernández Mirón	3,971.35	0.00	3,971.35
	15 Miguel Ángel Mancera Espinosa/ Alejandro Fernández Ramírez	3,971.35	0.00	3,971.35
	16 Miguel Ángel Mancera Espinosa/ Nora del Carmen Bárbara Arias C.	3,971.35	0.00	3,971.35
	17 Miguel Ángel Mancera Espinosa/ Jesús Salvador Valencia Guzmán	3,971.35	0.00	3,971.35
	Subtotal	\$67,513.08	\$11,914.08	\$55,599.00
	TOTAL	87,435.34	19,883.00	67,552.34

Por lo anteriormente señalado, el gasto no reportado en beneficio a la campaña de Presidente de la República por **\$19,883.00**, se acumula para efectos del rebase de tope de gastos de campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República, mismo que se identifica en el **Anexo 29 del Dictamen, columna (73)**.

En consecuencia, una vez realizada la operación del total de gastos en la campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República contra el tope de gastos correspondiente, los resultados obtenidos se detallan en el apartado **4.5.1.10 “Rebase de Tope de Gastos de Campaña” del Dictamen Consolidado** y que se relaciona con el **Anexo 29** referido; así como en la conclusión final de la revisión de los informes, identificada con el número **157**.

D. Modificaciones al Dictamen Consolidado CG190/2013 en lo relativo a la otrora coalición Movimiento Progresista correspondiente a la determinación del costo promedio –Aportaciones de personas no identificadas-. (SUP-RAP-124/2013; Apartado A, Tema 2, Sección de ejecución).

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Por lo que hace al tema en comento la autoridad jurisdiccional determinó entre otras cuestiones lo siguiente⁴⁰:

“(…)

En consecuencia, en lo concerniente a gastos no reportados por concepto de bardas, la autoridad deberá realizar la determinación del costo de bardas de manera diferenciada, con base exclusivamente en el promedio de gasto realizado por cada fuerza política en lo individual, que de acuerdo con la metodología empleada es como sigue:

PARTIDO/COALICIÓN	COSTO DETERMINADO POR BARDA
<i>Compromiso por México</i>	<i>\$1,080.00</i>
<i>Movimiento Progresista</i>	<i>403.00</i>
<i>Partido Acción Nacional</i>	<i>440.00</i>
<i>Nueva Alianza</i>	<i>500.00</i>

El resultado de esta nueva determinación de costos de bardas deberá impactar en el nuevo cálculo que la autoridad haga para determinar las cifras que sirvan de base en relación con el rebase de topes de gastos de campaña.

También se deberá reflejar el nuevo costo en la individualización de las sanciones por rebase de tope de gastos de campaña en los casos en que ese problema subsista.

(…)”

En este orden de ideas, para dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional, se realizan las modificaciones correspondientes al dictamen consolidado de la otrora coalición Movimiento Progresista, como se presenta a continuación.

- a) Toda vez que la nueva determinación de costos implica una afectación sustancial en el monto involucrado de aquellas conclusiones en las que se utilizó la metodología para determinar costos no reportados, lo consecuente es actualizar los montos en comento con lo efectos siguientes:

⁴⁰ Para mayor detalle consúltense el considerando 4 del presente acatamiento.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- ✓ Determinar el nuevo monto involucrado de la conducta establecida originalmente en las observaciones (aportaciones de personas desconocidas), lo anterior en congruencia con los criterios aplicados por la autoridad electoral en el marco de la revisión de los informes de campaña de ingreso y gastos del Proceso Electoral Federal 2011-2012 a los sujetos obligados.
- ✓ Lo anterior, tendrá como consecuencia jurídica se individualicen de nueva cuenta las conclusiones relacionadas con la actualización de montos y rebase de topes. (Esta situación se advierte en el **apartado F del presente acatamiento**)

b) Se modifican las conclusiones relacionadas con:

La actualización de montos conforme al criterio de costo promedio considerando **\$403.00 (cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.)** por barda.

42 Presidente
132 Presidente, Senadores y Diputados Federales
219 Senadores
394 Diputados Federales

Las conclusiones informativas que hacen referencia a montos involucrados determinados para cuantificar a topes que se afectan con la actualización de montos.

133 Cuantificación a campaña Presidencial
133-1 Cuantificación a campañas de Senadores
133-2 Cuantificación a campañas de Diputados Federales
395 Cuantificación a campaña Presidencial
396 Cuantificación a campañas de Diputados Federales.

El monto involucrado que resulte de la nueva determinación, se cuantifica al tope de gastos de campaña respectivo con el objeto de determinar si se actualiza un rebase al tope de gastos de campaña, situación que se encuentra visible en las conclusiones siguientes:

157 Presidencial
277 Senadores

378 Diputados Federales

Adicionalmente se consideraran en la cuantificación del gasto a topes de campaña, los siguientes montos:

- **SUP-RAP-124/2013**, incongruencia en el trato de gastos no reportados de conformidad con lo establecido en el apartado A del presente considerando por un importe de **\$703.53**
- **SUP-RAP-164/2013**, reclasificación de gastos (conclusión 73) de conformidad con el apartado B del presente considerando por un monto de **\$2'309,711.79**
- Cuantificación a tope de gastos de campaña derivado de procedimientos administrativos sancionadores de acuerdo al apartado C del presente acatamiento.

Es trascendente señalar que al reclasificarse la conclusión 73, que originalmente se encontraba dictaminada en el informe anual, se afectan las cifras finales de los topes correspondientes a los candidatos beneficiados.

Cabe señalar que esto último se verá reflejado en los apartados correspondientes a los rebases de topes de gasto de campaña **(E, F y G)**

Por lo que una vez realizado el ejercicio correspondiente, se advertirá sin con la reclasificación aumentan o disminuyen las cifras o se actualizan nuevos rebases al tope de gastos de campaña de los entonces candidatos de la otrora coalición Movimiento Progresista.

Visto lo anterior a continuación se presentan las modificaciones realizadas al dictamen consolidado relativas a la actualización del costo promedio por barda, conclusiones **42; 132; 219 y 394** de la otrora coalición Movimiento Progresista.

Conclusión 42

Presidente

Monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la vía pública.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Al respecto la observación que originó la conclusión 42 del Dictamen Consolidado relacionada con el monitoreo a anuncios espectaculares colocados en la vía pública en términos de lo establecido por el artículo 227 del Reglamento de Fiscalización, advirtió la existencia de conceptos de gasto no registrados en la contabilidad de la otrora coalición, tales como muros (bardas).

Bajo esta tesitura, una vez que se analizó la respuesta de los oficios de errores y omisiones de la otrora coalición, se consolidaron los gastos de las campañas a Senadores y Diputados Federales con la campaña Presidencial y se llevaron a cabo las reuniones de trabajo respectivas con la otrora Coalición en comento, la autoridad electoral acreditó la existencia de 418 muros (pinta de bardas) que beneficiaron a su entonces candidato a la Presidencia de la República, los cuales no fueron registrados en el informe de campaña correspondiente.

Consecuentemente, al no contar con elementos que permitieran identificar el origen de los muros se consideró que las mismas vulneraron lo dispuesto en el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un importe de **\$253,203.50**

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes.

Es importante señalar que en el marco de la revisión de los informes de campañas de los entonces candidatos a los cargos de Senadores de la República y Diputados Federales, de conformidad a lo establecido en el artículo 84, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente en el momento en que sucedieron los hechos, esta autoridad electoral identificó documentación que acredita la colocación de la pinta de bardas que beneficiaron la campaña electoral del entonces candidato a la Presidencia de la República por la otrora Coalición en comento; como consecuencia de lo anterior se advirtieron 68 bardas que se conciliaron dentro de los 486 que fueron sujetas de observación, para quedar como a continuación se detalla:

TIPO PROPAGANDA	MONITOREO EN PINTA DE MUROS (BARDAS)			NO CONCILIADOS	
	NO CONCILIADOS AL 30-01-2013	CONCILIADOS	NO CONCILIADOS	ANEXO DEL PRESENTE DICTAMEN (RELACIÓN DETALLADA)	ANEXO DEL OFICIO UF- DA/12779/12 (EVIDENCIA DEL MONITOREO)
Muros (Bardas)	486	68	418	4	B

Nota: la relación detallada de anuncios en muros (bardas) y la evidencia del monitoreo, se puede verificar a través del número de identificación na ID EXURVEY de la relación detallada y de las evidencias del monitoreo.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En consecuencia, al no reportar 418 anuncios publicitarios detallados en el **Anexo 4** referenciados con (B) en la columna “REF” del presente Acatamiento, que corresponden a propaganda electoral que benefició la campaña electoral del entonces candidato a la Presidencia de la República de la otrora coalición Movimiento Progresista incumplió con lo dispuesto en el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. **(Conclusión Final 42)**

Por lo que hace al monto involucrado, en atención a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional en la materia, el costo promedio por pinta de barda se considera en \$403.00 (Cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N), para quedar en los términos siguientes:

Bardas no conciliadas	Costo promedio	Beneficio económico no reportado (Monto involucrado)
418	403.00	\$168,454.00

Al respecto, el monto involucrado de la observación asciende a un importe de **\$168,454.00 (ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)**

Por lo anteriormente señalado, el monto involucrado se acumula para efectos del rebase de tope de gastos de campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República, mismo que se identifica en el **Anexo 29** del presente Acatamiento, columna (32).

En consecuencia, una vez realizada la operación del total de gastos en la campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República contra el tope de gastos correspondiente, los resultados obtenidos se detallan en el apartado 4.5.1.10 “Rebase de Tope de Gastos de Campaña” del Dictamen Consolidado y que se relaciona con el **Anexo 29** referido; así como en la conclusión final de la revisión de los informes, identificada con el número **157**.

Conclusión 132

Presidente, Senadores y Diputados Federales

- **Por lo que hace a 567 conceptos.**

4.5.1.9. Gastos Centralizados

4.5.1.9.6 Monitoreo de Anuncios Espectaculares colocados en la Vía Pública

Genérico Federal

Cabe destacar que la conclusión 132 del Dictamen Consolidado tiene su origen en el monitoreo realizado por la autoridad electoral el término del artículo 227 del Reglamento de Fiscalización; por lo que una vez realizado el monitoreo en cita, se advirtió la existencia de conceptos no registrados en los informes de campaña beneficiados.

Al respecto, una vez que se analizó la respuesta de los oficios de errores y omisiones de la otrora coalición, se consolidaron los gastos de las campañas a Senadores y Diputados Federales con la campaña Presidencial y se llevaron a cabo las reuniones de trabajo respectivas con la otrora Coalición en comento, la autoridad electoral acreditó la existencia de 567 conceptos de gasto genéricos (234 anuncios espectaculares; 168 mantas y 165 muros –bardas) y 228 mixtos (110 anuncios espectaculares; 43 muros –bardas y 75 mantas)

Consecuentemente, al no contar con elementos que permitieran identificar el origen de los conceptos de gasto referidos se consideró que los mismos vulneraron lo dispuesto en el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un importe total de **\$ 5'636,063.58**

- Propaganda Genérica \$4'281,890.71
- Propaganda Mixta \$1'354,172.87

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes.

En ese sentido como resultado integral del análisis a la documentación y con la finalidad de que se aportaran elementos para la conciliación correspondiente de la propaganda de tipo genérico federal, esta autoridad determinó que la coalición

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

subsano un total de 477 anuncios publicitarios, correspondientes a 204 anuncios espectaculares, 125 mantas y 148 muros como se detallan en el **Anexo 25** del dictamen.

Bajo esta tesitura una vez que se notificaron los oficios de errores y omisiones, que concluyeron los plazo para su contestación, la otrora coalición Movimiento Progresista omitió presentar documentación y/o aclaración respecto de 567 anuncios publicitarios, correspondientes a 239 anuncios espectaculares (\$4'096,582.42), 163 mantas (\$85,359.54)⁴¹ y 165 muros (\$66,495.00) mismos que se detallan en el **Anexo 26** del dictamen para pronta referencia

En consecuencia, al no presentar la documentación soporte que acreditara el registro de 567 conceptos de gastos relativos a propaganda electoral la otrora coalición incumplió con lo establecido en el artículo 77, numeral 3 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales por un importe de **\$4'248,436.96**

Ahora bien, en el **Anexo 26** del Dictamen se advierte el criterio de prorrato establecido por la autoridad, el cual en términos generales queda de la forma siguiente:

ANEXO 26 MUROS (165) COSTO PROMEDIO \$403.00 x 165 = \$66,495.00		
PRESIDENTE	SENADORES	DIPUTADOS
\$33,986.33 (165)	\$5,977.83 (34)	\$26,530.83 (136)

ANEXO 26 Mantas 163 = 85,359.54		
PRESIDENTE	SENADORES	DIPUTADOS
\$42,707.52 (163)	\$18,924.11 (54)	\$23,727.91 (108)

ANEXO 26 Anuncios Espectaculares 239 = 4'096,582.42		
PRESIDENTE	SENADORES	DIPUTADOS
\$2'045,373.52 (239)	\$1'266,322.99 (152)	\$784,885.91 (94)

⁴¹ En la resolución CG190/2013 y dictamen consolidado respectivo se advierte que la observación corresponde a 567 anuncios publicitarios, de los cuales 234 aparecen bajo el concepto de anuncios espectaculares y 168 como mantas; no obstante lo correcto debe ser 239 anuncios espectaculares y 163 mantas, lo anterior, toda vez que por un *lapsus cálamí* se indicaron números de conceptos erróneos, sin embargo, por lo que hace a la determinación de montos involucrados (**Anexo 26**) que conformaron la observación son consecuentes con el número correcto determinado en la resolución CG190/2013.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

ANEXO 26 Anuncios Espectaculares 239 = 4'096,582.42		

TOTAL		
PRESIDENTE	SENADORES	DIPUTADOS
\$2'122,067.38	\$1'291,224.93	\$835,144.65

Bajo esta tesitura, el importe de **\$2'122,067.38** se cuantificara al tope de gastos de la campaña Presidencial del entonces candidato de la otrora coalición. **Conclusión 132.**

Por lo que hace al importe de **\$1'291,224.93** monto atribuible a las campañas de los entonces candidatos a Senadores y el importe de **\$835,144.65**, monto correspondiente a las campañas de los entonces candidatos Diputados, dichos montos se acumulan para efectos del rebase del tope de gastos de campaña de los entonces candidatos a Senadores y Diputados Federales beneficiados, los cuales se detallan en el **Anexo 26** del presente dictamen. **Conclusión 132.**

• **Por lo que hace a 228 conceptos**

Genérico Mixto

A continuación se presentan las modificaciones correspondientes a la parte final de la observación realizada en el dictamen consolidado, para quedar en los términos siguientes:

Con escrito SAFyPI/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalización en la misma fecha, la Coalición “Movimiento Progresista” manifestó lo que a continuación se transcribe:

“Respecto a todo lo relativo a gastos por espectaculares, le informo que se está pendiente de las conclusiones de la mesa de trabajo acordada en la confronta del 30 de abril del año en curso y será hasta ese momento que se puedan atender estas observaciones, de acuerdo a lo señalado por esa autoridad.”

Es importante señalar que se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo con la otrora coalición, quedando esta última de entregar la documentación solicitada, por lo que la otrora coalición quedó de proporcionar la documentación solicitada a

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

la brevedad; sin embargo no presentó el soporte documental y pólizas respectivas a la fecha de elaboración del dictamen respecto de los 228 anuncios.

Bajo esta tesitura de los 319 anuncios publicitarios mixtos observados, se obtuvo como consecuencia de la compulsa realizada por la autoridad advirtiéndose que la otrora coalición subsanó un total de 91 (39+52) anuncios publicitarios y 228 no se subsanaron, el detalle se observa en el **Anexo 27**, del dictamen.

En este contexto, una vez que se notificaron los oficios de errores y omisiones para su notificación y concluyeron los plazos para su contestación la otrora coalición Movimiento Progresista omitió presentar documentación y/o aclaración respectiva respecto de **228 anuncios** integrados por 110 anuncios espectaculares, **43 muros** y 75 mantas (72 mantas, 3 propaganda utilitaria) los cuales se detallan en el **Anexo 28** del presente acatamiento.

En consecuencia, al no presentar la documentación soporte que acreditara el registro de 228 conceptos de gastos relativos a propaganda electoral, la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un importe de **\$1'347,532.81**

Ahora bien, en el **Anexo 28** del Dictamen se advierte el criterio de prorrateo establecido por la autoridad, el cual en términos generales queda de la forma siguiente:

Anexo 28 Muros Costo promedio \$403.00 x 43= 17,329.00			
Presidente	Senadores	Diputados	Local
\$7,690.58 (43)	\$2,048.58 (17)	\$3,459.08 (24)	\$4,130.75 (27)

Anexo 28 Anuncios espectaculares 110 \$1,925,674.30			
Presidente	Senadores	Diputados	Local
\$844,670.77 (109)	\$252,380.04 (41)	\$226,120.85 (38)	\$602,502.64 (75)

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

--	--	--	--

<p style="text-align: center;">Anexo 28 Mantas y propaganda utilitaria 72 + 3 \$18,102.25</p>			
Presidente	Senadores	Diputados	Local
\$8,967.88 (72)	\$888.00 (8)	\$1,307.03 (11)	\$6,939.35 (58)

TOTAL		
PRESIDENTE	SENADORES	DIPUTADOS
\$861,329.23	\$255,316.62	\$230,886.96

Bajo esta tesitura, el importe de **\$861,329.23** correspondiente al beneficio de la campaña del entonces candidato a Presidente de la República de la otra coalición se cuantificara al tope de gastos de campaña. **Conclusión 132**

Por lo que hace al importe de **\$255,316.62** monto atribuible al beneficio de las campañas electorales de los entonces candidatos a **Senadores de la República** y el importe de **\$230,886.96** correspondiente al beneficio de las campañas electorales de los entonces candidatos a **Diputados Federales**, dichos montos se cuantificaran a los topes de gastos de campaña respectivos, mismos que se detallan en el **Anexo 41, columna (27) y (28) y en el Anexo 54 columna (14) y (15) del Dictamen**, respectivamente.

En consecuencia, considerando los 567 conceptos referidos en párrafos precedentes, así como los 228 que anteceden, la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un importe total de **\$5'595,969.77** (4'248,436.96 + 1'347,532.81)

Vista

Cabe señalar que originalmente en la conclusión en análisis se ordenó el seguimiento a la contratación de 160 anuncios espectaculares que beneficiaron a diversos candidatos locales; por lo que en el marco de la revisión del Informe Anual 2012 del Partido de la Revolución Democrática se realizó la observación respectiva, bajo el rubro "*Monitoreo de Anuncios Espectaculares colocados en la Vía Pública (Genérica Mixta)*", la cual es visible en el Dictamen Consolidado y Resolución CG242/013.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Al respecto se determinó lo siguiente:

“(…)

Monitoreo de Anuncios Espectaculares colocados en la Vía Pública (Genérica Mixta)

Al efectuar la compulsa del monitoreo de anuncios espectaculares realizada por la autoridad electoral contra lo reportado por la otrora coalición “Movimiento Progresista”, se observaron 319 anuncios espectaculares que beneficiaron a las campañas de los candidatos a Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales, que no fueron localizados en la documentación soporte, en los registros contables presentados por la coalición, ni reportados en los informes de campaña de los candidatos beneficiados.

Dicha situación fue informada a la otrora coalición mediante oficios de errores y omisiones de la campaña presidencial, números UF-DA/12811/12 y UF-DA/14088/12.

En este sentido, una vez determinados por esta autoridad electoral los costos promedio correspondientes a 91 anuncios espectaculares reportados, se detallaron en el Anexo 27 del Dictamen de Campaña.

Ahora bien, respecto a los 228 anuncios espectaculares no reportados, una vez determinados los costos promedio por ésta Autoridad electoral, así como el criterio de prorrateo proporcionado por la otrora coalición, por un importe de \$615,650.93, se observó que 160 anuncios espectaculares benefician a candidatos locales de la siguiente manera:

COMITE	ESPECTACULARES	TOTAL	ANEXO DEL DICTÁMEN CAMPAÑA	ANEXO DEL OFICIO UF-DA/7136/13
Campeche	9	9,587.42	28	3
Chiapas	3	13,129.60		
Colima	8	9,610.94		
Distrito Federal	25	39,910.94		
Durango	2	598.88		
Guanajuato	10	96,283.72		
Guerrero	21	47,314.67		
México	12	6,872.44		
Morelos	22	153,178.64		
Nuevo León	7	61,271.46		
Querétaro	3	129.50		
Quintana Roo	7	1,128.50		
San Luis Potosí	6	860.25		
Tlaxcala	2	302.88		
Veracruz	1	151.44		
Yucatán	22	175,320.30		
Total	160	615,650.93		

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

COMITE	ESPECTACULARES	TOTAL	ANEXO DEL DICTÁMEN CAMPAÑA	ANEXO DEL OFICIO UF-DA/7136/13
general				

Por lo tanto, los gastos por \$615,650.93, no fueron reportados en la contabilidad de las campañas locales que controlan recursos federales del partido, en la parte proporcional que le correspondía de acuerdo al Convenio de Coalición.

En consecuencia, se solicitó que presentara lo siguiente:

- *Las aclaraciones que a su derecho conviniera.*

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 148, 177, 193 y 273 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/7136/13 del 19 de agosto de 2013, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SAFyPI/646/13 de fechas 26 de agosto de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalización en la misma fecha, el partido manifestó lo que a continuación se transcribe:

‘(...) respecto de ‘319 anuncios espectaculares que beneficiaron a las campañas de los candidatos a Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales, que no fueron localizados en la documentación soporte, en los registros contables presentados por la coalición, ni reportados en los informes de campaña de los candidatos beneficiados’, su registro en el gasto ordinario del PRD, en la proporción que le corresponde de acuerdo con el convenio de coalición, se realiza por ajuste de auditoría en la póliza 180,002 aludida en el punto anterior’.

Al verificar los movimientos efectuados en la póliza de diario PD-180,0002/08-12, se observó que corresponden a movimientos de la cuenta Dispersadora PRD 2 de la campaña federal de la entonces coalición “Movimiento Progresista”, gastos identificados como una transferencia en especie a campañas locales; sin embargo, no presentó las pólizas de los Comités Estatales Campaña Local en los cuales se reflejaran los gastos en comento respecto de la operación ordinaria del partido por el monto de \$615,650.93; aunado a que no presentó el acuerdo de aplicación entre los partidos que conformaron la coalición en el que se especificara el monto que a cada uno le correspondía, conforme a las reglas que sobre el particular se hayan establecido en el convenio de coalición correspondiente.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En este sentido, toda vez que el partido no reconoció los gastos en la operación ordinaria de anuncios espectaculares monitoreados en la campaña federal de la otrora coalición “Movimiento Progresista” por la parte proporcional que le correspondía, por un importe de \$310,985.04 de un total de \$615,650.93 (160 anuncios espectaculares no reportados en la campaña federal) en beneficio de campañas locales.

Al ser el partido, parte integrante de la otrora coalición “Movimiento Progresista”, y al no presentar el documento en el cual se hayan establecido las reglas sobre la distribución según el convenio de coalición, como se señala en el apartado “Distribución de Saldos de Campaña Federal”; la autoridad electoral determinó que en ausencia de una regla específica, la distribución de los montos a cada partido de conformidad con el artículo 189 del Reglamento de Fiscalización corresponde a las ministraciones por financiamiento para gastos de campaña (Acuerdo CG431/2011) que recibieron los partido integrantes de la otrora coalición “Movimiento Progresista” (PRD, PT y MC), de la siguiente manera:

PPN COALIGADO	IMPORTE RECIBIDO POR FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE CAMPAÑA (ACUERDO CG431/2011)	% MINISTRACIONES
Partido de la Revolución Democrática	\$225,745,363.72	50.51%
Partido del Trabajo	118,098,139.85	26.43%
Movimiento Ciudadano	103,060,128.93	23.06%
TOTAL	\$446,903,632.50	100.00%

Por lo anterior, las cifras de los gastos no reconocidos en la operación ordinaria, se determinó de la siguiente manera:

MONITOREO DE ANUNCIOS ESPECTACULARES CAMPAÑA FEDERAL	IMPORTE EN BENEFICIO DE CAMPAÑAS LOCALES NO RECONOCIDOS EN OPERACIÓN ORDINARIA	GASTOS NO RECONOCIDOS EN LA OPERACIÓN ORDINARIA (DISTRIBUCIÓN)		
		PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 50.51%	PARTIDO DEL TRABAJO 26.43%	MOVIMIENTO CIUDADANO 23.06%
160 anuncios espectaculares	\$615,650.93	\$310,985.04	\$162,691.07	\$141,974.82

En consecuencia, al no registrar la parte proporcional de los gastos en la operación ordinaria de 160 anuncios espectaculares monitoreados en la campaña federal por un importe de \$310,985.04 en beneficio de campañas locales, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento de Fiscalización.

Adicionalmente, toda vez que se advierte la existencia de propaganda en anuncios espectaculares que beneficiaron a diversas campañas locales en el marco de los procesos electorales ordinarios en las entidades federativas que se detallan a continuación, se hace del conocimiento a los órganos

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

electorales correspondientes, para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que en derecho corresponda:

CONSECUTIVO	ENTIDAD	CONSECUTIVO	ENTIDAD
1	Campeche	9	Morelos
2	Chiapas	10	Nuevo León
3	Colima	11	Querétaro
4	Distrito Federal	12	Quintana Roo
5	Durango	13	San Luis Potosí
6	Guanajuato	14	Tlaxcala
7	Guerrero	15	Veracruz
8	Estado de México	16	Yucatán

La observación en comentario se advierte en la conclusión 68 de la Resolución CG242/2013, aprobada por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil trece.

Consecuentemente, el Partido de la Revolución Democrática al no reconocer en su operación ordinaria la parte proporcional de los anuncios espectaculares vulneró lo establecido en el artículo 189 del Reglamento de Fiscalización, actualizando una falta formal de conformidad con los criterios establecidos en el marco de la revisión del informe materia de análisis.

A continuación se transcribe la parte conducente:

“2.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

(...)

a) 75 faltas de carácter formal: conclusiones: 4, 5, 6, (...) 67, 68, 70, (...)

(...)

Conclusión 68

‘68. El partido no reconoció en su operación ordinaria la parte proporcional de inserciones en prensa y anuncios espectaculares monitoreados en la campaña federal que beneficiaban a campañas locales, por un importe \$505,639.17 (\$194,654.13+\$310,985.04)’.

(...)

*En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido de la Revolución Democrática, es la prevista en dicha fracción II, inciso a) del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a **9317 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en el dos mil doce, equivalente a***

\$580,728.61 (quinientos ochenta mil setecientos veintiocho pesos 61/100 M.N.)
(...)”

Al respecto, la resolución en comento fue impugnada por el Partido de la Revolución Democrática, la cual se confirmó al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-164/2013**, ordenando únicamente considerar el gasto involucrado en la conclusión 73 multicitada en el presente acatamiento.

Conclusión 219.

Senadores

4.5.2.3.1.3.2 Monitoreo de Anuncios Espectaculares colocados en la Vía Pública

La conclusión en comento observó anuncios publicitarios que promocionaron a candidatos a Senadores de la otrora coalición, los cuales no fueron localizados en la documentación soporte de los informes de campaña. Lo anterior, derivado del monitoreo realizado por la autoridad electoral.

Una vez agotado el periodo de revisión y valoración de las respuestas a los oficios de errores y omisiones, se determinó que la otrora coalición Movimiento Progresista, no reportó en su contabilidad 158 anuncios publicitarios, los cuales se detallan en el Anexo 38 del presente acatamiento, vulnerando con ello el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes:

Al respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalización el mismo día, la coalición dio contestación al oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presentó aclaración ni documentación alguna.

No obstante lo anterior, se identificó la documentación que acredita la colocación de la pinta de bardas correspondiente a 47 anuncios que fueron monitoreados A continuación se detalla el caso en comento:

TIPO DE PROPAGANDA	MONITOREO DE PINTA DE MUROS (BARDAS) Y PROPAGANDA UTILITARIA	NO CONCILIADOS
--------------------	--	----------------

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

	OBSERVADOS UF-DA/5211/13	CONCILIADOS	NO CONCILIADOS	ANEXO DEL PRESENTE DICTAMEN (RELACIÓN DETALLADA)	ANEXO DEL OFICIO UF- DA/3663/13 (EVIDENCIA DEL MONITOREO)
Muros (Bardas)	205	47	158	38	B

Nota: La vinculación entre la relación detallada de anuncios en muros (bardas) y la evidencia del monitoreo, se puede verificar a través del número de identificación señalado en la columna ID EXURVEY de la relación detallada y de las evidencias del monitoreo

En consecuencia, al no reportar 158 anuncios publicitarios detallados en el **Anexo 38 del Dictamen**, que corresponden a gastos en favor de las campañas de los entonces candidatos Senadores de la Republica por un importe **\$63,674.00** la otrora coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Es conveniente señalar que derivado de la Metodología para la determinación del costo aplicable a los anuncios en pinta de bardas, señalada en el punto 3.4 "Metodología utilizada para cuantificar gastos no reportados" del Dictamen Consolidado, con fundamento en lo establecido en el artículo 340 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad de Fiscalización determino el costo unitario de los anuncios en pinta de bardas no reportados por la coalición, mismo que fue aplicado a cada uno de los anuncios no subsanados señalados en el **Anexo 38 del Dictamen**.

El gasto no reportado se acumula para efectos del rebase de tope de gastos de campaña de los entonces candidatos a Senadores de la Republica.

A continuación se indica la integración del beneficio a los entonces candidatos Senadores de la Republica de los anuncios en pinta de bardas monitoreados y que no fueron reportados por la otrora coalición:

MONITOREO DE ANUNCIOS EN PINTA DE BARDAS NO SOLVENTADOS CAMPAÑA SENADORES DE LA REPÚBLICA				
LOCALIZACIÓN DEL ANUNCIO EN LA ENTIDAD	FORMULA	CANDIDATO BENEFICIADO	TOTAL	IMPORTE
Distrito Federal	F2	Mario Delgado Carrillo	38	\$15,314.00
Durango	F1	Alfonso Primitivo Ríos Vázquez	2	\$806.00
	F2	Jesús Iván Ramírez Maldonado	1	\$403.00
Guerrero	F1	Armando Ríos Piter	7	\$2,821.00
Hidalgo	F1	Isidro Pedraza Chavéz	1	\$403.00
Jalisco	F1	Carlos Lomelí Bolaños	1	\$403.00
México	F1	Alejandro de Jesús Encinas	3	\$806.00

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

MONITOREO DE ANUNCIOS EN PINTA DE BARDAS NO SOLVENTADOS CAMPAÑA SENADORES DE LA REPÚBLICA				
LOCALIZACIÓN DEL ANUNCIO EN LA ENTIDAD	FORMULA	CANDIDATO BENEFICIADO	TOTAL	IMPORTE
		Rodríguez		
Oaxaca	F1	Ángel Benjamín Robles Montoya	10	\$4,030.00
Puebla	F1	Manuel Bartlett Díaz	5	\$2,015.00
	F2	Beltrán Mario Armando Etcheverry	2	\$806.00
Querétaro	F1	Celia Maya García	3	
Quintana Roo	F1	Luz María Beristáin Navarrete	1	\$403.00
San Luis Potosí	F1	Fernando Silva Nieto	1	\$403.00
Tamaulipas	F1	Cuitláhuac Ortega Maldonado	5	\$2,015.00
Tlaxcala	F2	Martha Palafox Gutiérrez	2	\$806.00
Zacatecas	F1	David Monreal Ávila	76	\$30,628.00
TOTAL			158	\$63,674.00

Conclusión 394

Diputados Federales

Monitoreo de Anuncios Espectaculares colocados en la Vía Pública

La conclusión 394, se encuentra integrada por dos montos involucrados, uno correspondiente a \$1,246,223.10 y otra por \$112,336.82 (111,336.82 y 9,090.15), en ella se observó en el Dictamen Consolidado y Resolución CG190/2013, que derivado del monitoreo realizado por la autoridad electoral se localizaron anuncios espectaculares colocados en la vía pública, como son panorámicos, carteleras, muebles urbanos, mantas, marquesinas, muros (bardas) y propaganda utilitaria que promocionaron a los entonces candidatos a Diputados Federales de la otrora coalición movimiento progresista, no obstante no se localizaron registrados en los informes de campaña correspondientes.

Bajo esta tesitura, una vez agotados los plazos de revisión y analizada la documentación presentada en las respuestas al oficio de errores y omisiones, esta autoridad electoral advirtió que la otrora coalición Movimiento Progresista no registró conceptos de gasto relativos a propaganda electoral colocada en la vía pública, como fueron 132 espectaculares (monto involucrado por \$1,246,223.10);

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

así como 176 muros y 6 conceptos relacionados a propaganda utilitaria (monto involucrado por \$123,512.38 + \$909.15 = 124,421.53⁴²)

Visto lo anterior, la autoridad responsable determinó que la otrora coalición incumplió lo establecido en el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así el monto involucrado de la conclusión ascendió a un monto total de **\$1'370,644.63**

Ahora bien, como se advierte el monto involucrado analizado por \$1'246,223.10 se encuentra vinculado a la difusión de 132 anuncios espectaculares, los cuales no forman parte de la modificación ordenada en el recurso de apelación **SUP-RAP-124/2013** por lo que queda intocada la parte conducente y monto de la observación, que se integra como a continuación se indica:

132 Anuncios Espectaculares Anexo 51 del Dictamen	
Presidente	Diputados
54,655.14	1,191,567.96

Respecto del importe por \$124,421.53, se observó la existencia de 6 conceptos de gastos relativos a propaganda utilitaria en la que se encuentra un concepto por pinta de bardas, consecuentemente se modificará el costo promedio (**Anexo 53**) y de igual forma se actualizará el costo de las 176 muros (bardas) detalladas en el **Anexo 52 del Dictamen**.

A continuación se procede a actualizar el costo promedio por concepto de bardas pintadas de conformidad con lo establecido en la ejecutoria de mérito, por lo que se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes:

Modificación.

Al respecto, con escrito SAFyPI/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalización el mismo día, la coalición dio contestación al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitió presentar documentación o aclaración alguna; razón por la cual, la observación quedo no subsanada.

⁴² Cabe señalar que en la resolución CG190/2013, página 6313, por error se incluyó una viñeta con el importe siguiente: “**\$112,336.82 (\$111,336.382 y 909.15)**”, cuando lo correcto es **\$124,421.53 (\$123,512.38 y \$909.15)**. El error en comento no trasciende de forma sustancial al monto involucrado de la observación pues el contenido del cuerpo del dictamen, resolución y monto involucrado corresponden a la suma de \$1'246,223.10 y \$124,421.53, esto es **\$1'370,644.63**.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

No obstante lo anterior, derivado de la revisión efectuada a la documentación esta autoridad mediante un análisis realizado a la propaganda en pinta de bardas, determinó solventar 18 anuncios que fueron monitoreados en 2 o 3 ocasiones (meses distintos), atendiendo al criterio de temporalidad, esto debido a que los gastos en pinta de bardas, se consideran un solo anuncio publicitario por el periodo de campaña comprendido entre el 31 de marzo al 27 de junio de 2012; las 18 pintas de bardas en comento se detallan a continuación:

Nº	ID EXURVEY	CANDIDATO	ENTIDAD	DISTRITO	TIPO DE ANUNCIO
1	4282	Fernando Zarate Salgado	Distrito Federal	XVII Distrito Federal	Muros
2	5382		México	XVI Ecatepec de Morelos	
3	12595	Nora del Consuelo Camacho González	Durango	II Gómez Palacio	
4	16756	Víctor Cruz Briones Lorancia	Tlaxcala	I Apizaco	
5	16760	Víctor Cruz Briones Lorancia	Tlaxcala	I Apizaco	
6	16762	Víctor Cruz Briones Lorancia	Tlaxcala	I Apizaco	
7	16770	Víctor Cruz Briones Lorancia	Tlaxcala	I Apizaco	
8	22675	Gerardo Villanueva Albarran	Distrito Federal	XXIV Distrito Federal	
9	28155	Claudia Sofía Corichi García	Zacatecas	IV Guadalupe	
10	28157	Claudia Sofía Corichi García	Zacatecas	IV Guadalupe	
11	28183	Claudia Sofía Corichi García	Zacatecas	IV Guadalupe	
12	28185	Claudia Sofía Corichi García	Zacatecas	IV Guadalupe	
13	28189	Claudia Sofía Corichi García	Zacatecas	IV Guadalupe	
14	14167	Fernando González Bolaños	México	XXV Chimalhuacán	
15	28033	María de la Luz Domínguez Campos	Zacatecas	Zacatecas	
16	17448	Ramón Montalvo	México	XXXII México	
17	17455	Ramón Montalvo	México	XXXII México	
18	255573	Ramón Montalvo	México	XXXII México	

Razón por la cual, la por lo que se refiere a las 18 muros, la observación se consideró subsanada.

En consecuencia al no presentar documentación comprobatoria respeto a 176 muros y 6 conceptos relativos a propaganda utilitaria por un monto de \$88,737.53 (\$88,031.13 y \$706.40), la coalición incumplió con lo establecido en el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Muros (bardas) 176 x 403.00 \$88,031.13 Anexo 53 del presente acatamiento	
Presidente	Diputados
\$7,657.00 (38)	\$80,374.13 (176)

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Muros (bardas) 176 x 403.00 \$88,031.13 Anexo 53 del presente acatamiento

Propaganda utilitaria + 1 barda 403.00 + 303.40 \$706.40 Anexo 52 del presente acatamiento.	
Presidente	Diputados
0.0	\$706.40

Bajo esta tesitura, el importe de **\$7,657.00** correspondiente al beneficio de la campaña del entonces candidato a Presidente de la República de la otra coalición se cuantificara al tope de gastos de campaña.

Por lo que hace al importe de **\$81,080.53** monto atribuible al beneficio de campañas electorales de los entonces candidatos a Diputados Federales se cuantificaran a los topes de gastos de campaña respectivos.

Es así que el monto total de \$1'272,648.49 (\$1'191,567.96 + \$80,374.13 + \$706.40), atribuible al beneficio de campañas electorales de los entonces candidatos a Diputados Federales se cuantificaran a los topes de gastos de campaña respectivos en el **Anexo 54, columna (16) del Dictamen.**

Visto lo anterior, considerando los 132 anuncios espectaculares por un monto involucrado de \$1'246,223.10 que ha quedado intocados, así como los 176 muros y 6 conceptos relativos a propaganda utilitaria por un monto de \$88,737.53 (\$88,031.13 y \$706.40), el monto involucrado total de la conclusión 394 asciende a un importe de **\$1'334,960.63**

Modificaciones a las conclusiones finales del Dictamen Consolidado.

Presidente

42. Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el entonces Instituto Federal Electoral, se localizaron 486 anuncios en pinta de bardas que corresponden al candidato a la Presidencia de la República, que no fueron localizados en la documentación soporte presentada por la coalición, por un monto de \$294,394.50; sin embargo, en hechos posteriores se solventaron 68 pintas de bardas, por lo cual los anuncios en muros no reportados son 418 por un monto de \$253,203.50.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En acatamiento a la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación **SUP-RAP-124/2013**, se actualizó el monto involucrado de la conclusión en comento quedando en **\$168,454.00**

Tal situación constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalización, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en los artículos 354, en relación al 342 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por lo anteriormente señalado, el gasto no registrado se acumula para efectos del rebase de tope de gastos de campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República, **mismo que se identifica en el Anexo 29 del Dictamen, columna (32).**

Presidente, Senadores y Diputados Federales

132. Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el entonces Instituto Federal Electoral, se localizaron 567 anuncios espectaculares genéricos y 228 anuncios espectaculares mixtos colocados en la vía pública que contienen propaganda electoral en beneficio del candidato a la Presidencia de la República, Senadores y Diputados que no fueron localizados en la documentación soporte presentada por la otrora coalición, por un monto de \$5'636,063.58. Como se detalla a continuación:

TIPO DE ANUNCIO	No. DE ESPECTACULARES	PRESIDENTE	SENADORES	DIPUTADOS	TOTAL
Genéricos Federales	567	\$2,139,165.96	\$1,294,212.39	\$848,492.36	\$4,281,890.71
Genéricos Mixtos	228	865,198.38	256,347.27	232,627.23	\$1,354,172.87
Total	795	\$3,004,364.34	\$1,550,579.66	\$1,081,119.59	\$5,636,063.58

En acatamiento a la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación **SUP-RAP-124/2013**, se actualizó el monto involucrado de la conclusión en comento quedando en **\$5'595,969.77**

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

TIPO DE ANUNCIO	No. DE ESPECTACULARES	PRESIDENTE	SENADORES	DIPUTADOS	TOTAL
Genéricos Federales	567	\$2,122,067.38	\$1,291,224.93	\$835,144.65	\$4,248,436.96
Genéricos Mixtos	228	861,329.23	255,316.62	230,886.96	1,347,532.81
Total	795	\$2,983,396.61	\$1,546,541.55	\$1,066,031.61	\$5,595,969.77

Tal situación constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalización, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en los artículos 354, en relación al 342 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por lo anteriormente señalado, el gasto no registrado se acumula para efectos del tope de gastos de las campañas beneficiadas, como se detallada en el **Anexo 29 columnas (30) y (31), en el Anexo 41 columna (27) y (28) y en el Anexo 54, columnas (14) y (15).**

Senadores.

219. Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el Instituto Federal Electoral, se localizaron 158 anuncios en pinta de bardas que corresponden a candidatos a Senadores de la República, que no fueron localizados en la documentación soporte presentada por la coalición, por un monto de \$95,708.50.

En acatamiento a la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación **SUP-RAP-124/2013**, se actualizó el monto involucrado de la conclusión en comento quedando en **\$63,674.00**

Tal situación constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalización, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en los artículos 354, en relación al 342 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Por lo anteriormente señalado, el gasto no registrado se acumula para efectos del rebase de tope de gastos de campaña de los entonces candidatos a Senadores de la República, mismo que se identifica en el **Anexo 41** del Dictamen, columna (29).

Diputados Federales

394. Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el entonces Instituto Federal Electoral, se localizaron 132, anuncios espectaculares, 176 muros y 6 conceptos de propaganda utilitaria con propaganda electoral en beneficio del candidato a la Presidencia de la República y Diputados que no fueron localizados en la documentación soporte presentada por la coalición, por un monto de \$1,370,644.63 como se detalla a continuación:

TIPO DE ANUNCIO	No. DE ANUNCIOS	PRESIDENTE	DIPUTADOS	TOTAL
Espectaculares y Mantas	132	\$54,655.14	\$1,191,567.96	\$1,246,223.1
Muros	176	11,509.25	112,003.13	123,512.38
Propaganda Utilitaria	6	0.00	909.15	909.15
TOTAL	314	\$66,164.39	\$1,304,480.24	\$1,370,644.63

En acatamiento a la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación **SUP-RAP-124/2013**, se consideró un costo promedio por pinta de bardas en \$403.00 por lo que el monto quedó de la siguiente manera:

TIPO DE ANUNCIO	No. DE ANUNCIOS	PRESIDENTE	DIPUTADOS	TOTAL
Espectaculares y Mantas	132	\$54,655.14	\$1,191,567.96	\$1,246,223.1
Muros	176	7,657.00	80,374.13	88,031.13
Propaganda Utilitaria	6	0.00	706.40	706.40
TOTAL	314	\$62,312.14	\$1,272,648.49	\$1,334,960.63

Tal situación constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalización, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 77, numeral 3, en relación con el 339, del Reglamento de Fiscalización por un importe de **\$1'334,960.63** por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en el artículo 354, numeral 1, inciso a), en relación con el 342 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Modificaciones a las conclusiones informativas relacionadas con gastos no reportados, las cuales por su propia naturaleza únicamente se reflejan en conclusiones finales, para efecto de su cuantificación a topes de gastos de campaña.

Presidente

133. Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el entonces Instituto Federal Electoral, se localizaron anuncios espectaculares genéricos y anuncios espectaculares mixtos colocados en la vía pública con propaganda electoral que benefició a su entonces candidato a la Presidencia de la República, que no fueron localizados en la documentación soporte presentada por la otrora coalición, por lo tanto, la cuantificación del gasto no reportado por **\$2,983,396.61** anuncios publicitarios, se acumulará para efectos del rebase de tope de gastos de campaña del entonces candidato a la **Presidencia de la República**.

TIPO DE ANUNCIO	IMPORTE ACUMULABLE A LA CAMPAÑA DE PRESIDENTE
Genéricos Federales	\$2'122,067.38
Genéricos Mixtos	\$861,329
Total	\$2'983,396.61

Senadores

133-1 Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el entonces Instituto Federal Electoral, se localizaron anuncios espectaculares genéricos y anuncios espectaculares mixtos colocados en la vía pública con propaganda electoral que benefició a sus entonces candidatos a Senadores de la Republica, que no fueron localizados en la documentación soporte presentada por la otrora coalición, por lo tanto, la cuantificación del gasto no reportado por **\$1,546,541.55** anuncios publicitarios, se acumulará para efectos del rebase de tope de gastos de campaña de los entonces candidatos a **Senadores de la Republica**, como se detalla a continuación:

TIPO DE ANUNCIO	IMPORTE ACUMULABLE A LAS CAMPAÑA DE SENADORES DE LA REPÚBLICA
Genéricos Federales	\$1'291,224.93
Genéricos Mixtos	\$255,316.62
Total	\$1'546,541.55

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Diputados Federales

133-2 Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el entonces Instituto Federal Electoral, se localizaron anuncios espectaculares genéricos y anuncios espectaculares mixtos colocados en la vía pública con propaganda electoral que benefició a sus entonces candidatos a Diputados Federales, los cuales no fueron localizados en la documentación soporte presentada por la otrora coalición, por lo tanto, la cuantificación del gasto no reportado por **\$1,066,031.60** por anuncios publicitarios, se acumulará para efectos del rebase de tope de gastos de campaña de los entonces candidatos a **Diputados Federales**, como se detalla a continuación:

TIPO DE ANUNCIO	IMPORTE ACUMULABLE A LAS CAMPAÑAS DE DIPUTADOS FEDERALES
Genéricos Federales	\$835,144.65
Genéricos Mixtos	\$230,886.95
Total	\$1'066,031.60

Presidente

395. Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el entonces Instituto Federal Electoral, se localizaron anuncios espectaculares y muros colocados en la vía pública con propaganda electoral que benefició a su entonces candidato a la **Presidencia de la República (conclusión 394)** los cuales no fueron localizados en la documentación soporte presentada por la otrora coalición, por lo tanto, la cuantificación del gasto no reportado por **\$62,312.14**, se acumula para efectos del tope de gastos de campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República.

TIPO DE ANUNCIO	PRESIDENTE
Espectaculares y mantas	\$54,655.14
Muros	\$7,657.00
Total	\$62,312.14

Por lo anteriormente señalado, el gasto no registrado se acumula para los efectos precisados, mismo que se observa en el **Anexo 29** del presente acatamiento columna (62).

396. Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el entonces Instituto Federal Electoral, se localizaron anuncios espectaculares colocados en la vía pública con propaganda electoral que benefició a 277 candidatos a **Diputados Federales**, los cuales no fueron localizados en la documentación soporte

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

presentada por la otrora coalición, por lo tanto, la cuantificación del gasto no registrado por **\$1,272,648.49** por anuncios publicitarios, se acumula para efectos del tope de gastos de campaña de los entonces candidatos a Diputados Federales, como se detalla a continuación:

TIPO DE ANUNCIO	DIPUTADOS
Espectaculares y mantas	\$1,191,567.96
Muros	\$80,374.13
Propaganda utilitaria	\$706.40
Total	\$1,272,648.49

El gasto no registrado el gasto no registrado se acumula para los efectos precisados, mismo que se observa en el **Anexo 54** del Dictamen, columna (16).

E. Modificaciones al Dictamen Consolidado CG190/2013 en lo relativo a la otrora coalición Movimiento Progresista correspondientes al tope de gastos de la campaña Presidencial (SUP-RAP-124/2013 y SUP-RAP-164/2013; Apartado A, Tema 1, Sección de ejecución).

4.5.1.10 Rebase de Tope de Gastos de Campaña

Campaña presidencial

Conviene señalar que una vez realizado los procedimientos para la revisión del Informe de Campaña al cargo de Presidente de la República, respecto a sus ingresos y egresos reportados, se realizaron observaciones sobre la documentación que amparaba el informe, notificados a la coalición con oficios de errores y omisiones por parte de la Unidad de Fiscalización.

Derivado de dichas observaciones y en virtud de que afectaban los importes reportados se procedió a realizar el ejercicio de aplicación al total de los gastos reportados por la coalición, los correspondientes a los gastos no reportados en el Informe de Campaña con base a la información recabada. Dicha operación se detalla en el **Anexo 29** del presente Dictamen, que se compone de la siguiente forma:

En la columna (1). *“TOTAL DE EGRESOS REPORTADOS POR LA COALICIÓN EN EL INFORME DE CAMPAÑA”*, se muestra el monto total de los gastos de campaña reportados en el formato “IC-COA” Informe sobre el Origen, Monto y Destino de los Recursos para las Campañas Federales Electorales de la

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Coalición, del entonces candidato presidencial presentado en su quinta versión del 12 de diciembre de 2012.

Las columnas (2 al 6) "*PRORRATEO SEGÚN COALICIÓN*" corresponde al total de los gastos centralizados y prorrateados según la coalición (con base a lo registrado en las cuentas "*Transferencias recibidas del Comité Ejecutivo Nacional*", subcuenta "*En Especie*" (columnas 2, 3 y 4), "*Transferencias recibidas de los Comités del Partido*", subcuenta "*En Especie*" (columna 5) y "*Transferencias de Candidatos a Diputados*" (columna 6), reportadas en la contabilidad de la campaña presidencial, cifras que se restaron a la columna (1), obteniendo así el total de los gastos directos realizados por el entonces candidato y señalado en la columna (7) "*DIFERENCIA, GASTOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL CANDIDATO*".

La suma de la columna (7), más el total de los gastos centralizados y prorrateados según auditoría, columnas (8 a la 12) "*PRORRATEO SEGÚN AUDITORÍA*", dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (13) "*TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORÍA*", el cual constituye el importe total de los gastos según la documentación comprobatoria que la coalición erogó en beneficio de la campaña electoral.

En la columna (14) se señala el tope de gastos de campaña de 2012, que por Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral CG382/2011 fue aprobado el 23 de noviembre de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, correspondiente a la campaña electoral de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y en la columna (15) se realiza la primera operación de gastos reportados contra tope de campaña y el resultado correspondiente.

En la columna (16) se indica el dato informativo del saldo de las cuentas por cobrar y anticipos de la campaña presidencial, derivado de la posible aplicación del artículo 35 del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, mediante oficios de errores y omisiones emitidos por esta Unidad de Fiscalización, se informó a la coalición de importes de reclasificaciones no procedentes correspondientes a gastos de Reconocimientos por Actividades Políticas, columna (17) "*RECLASIFICACIONES NO PROCEDENTES*", siendo la siguiente:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

OFICIO PRIMERA VUELTA	OFICIO SEGUNDA VUELTA	OFICIO	APARTADO EN EL OFICIO	CONCEPTO	IMPORTE QUE ACUMULA PARA EFECTOS DEL TOPE
UF-DA/12775/12	UF-DA/14082/12	Errores y Omisiones derivado de la revisión de los Ingresos y Egresos relativos al Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalición "Movimiento Progresista". Campaña Presidencial.	Reconocimiento por Actividades Políticas	Disminuye el importe del gasto originalmente reportado en la subcuenta "REPAP", no procedente.	\$12,951,969.92

Por lo tanto, considerando la suma de la columna (17) del **Anexo 29** (del importe del cuadro anterior), más el total de los gastos según auditoría columna (13), dan como resultado la cifra que se muestra en la columna (18) "**TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORIA CON RECLASIFICACIONES NO PROCEDENTES**", en la columna (19) se realiza la segunda operación de gastos reportados contra tope de campaña y el resultado correspondiente.

Asimismo, derivado de las confirmaciones realizadas por la Autoridad Electoral, varios proveedores y transportistas confirmaron operaciones con los partidos que integran la coalición (Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano) que no estuvieron reportados en el Informe de Campaña del entonces candidato presidencial, columnas (20), (21) y (22). Dichas observaciones se describen en los apartados "Circularización con Terceros" y "Circularización a Transportistas" del presente Dictamen.

Mediante oficios de errores y omisiones emitidos por esta Unidad de Fiscalización, se informó a la coalición de importes que se acumulaban para efectos del tope de campaña al no reportarse en sus registros contables o por diferencias en el registro contable, columnas (23, 24, 25 y 26) "**REVISIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS**", dichas situaciones se detallan en los apartados "Gastos en Anuncios Espectaculares", "Gastos Centralizados" y "Aportaciones de Militantes en Especie", respectivamente.

Por lo tanto, considerando la operación aritmética de las columnas (20 a la 26) del **Anexo 29** del presente Dictamen, más el total de los gastos según auditoría columna (18), dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (27) "**TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORIA CON CIRCULARIZACIONES Y DERIVADO DE LA REVISIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS**", en la columna (28) se realiza la tercera operación de gastos reportados contra tope de campaña y el resultado correspondiente.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En cumplimiento al artículo 227 del Reglamento de Fiscalización, el cual establece que la Unidad de Fiscalización realizaría las gestiones necesarias para llevar a cabo monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como anuncios espectaculares colocados en la vía pública, se realizó monitoreos con base en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), del resultado obtenido de la compulsa de la información monitoreada contra la propaganda electoral registrada por la coalición, no se conciliaron los que se indican en las columnas (29 al 37). Dichas observaciones se describen en los apartados “Monitoreo en Espectaculares” y “Monitoreo en Medios Impresos” del presente Dictamen.

Por lo tanto, considerando la operación aritmética de las columnas (29 a la 37) del **Anexo 29** del presente Dictamen, más el total de los gastos según auditoría columna (27), dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (38) *“TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORIA CON MONITOREOS NO REPORTADOS”*, en la columna (39) se realiza la cuarta operación de gastos no reportados (monitoreos) contra tope de campaña y el resultado correspondiente.

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para la comprobación de los ingresos y egresos de la Coalición “Movimiento Progresista” durante el periodo de campaña en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, de los actos públicos del Lic. Andrés Manuel López Obrador como candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de sus facultades la Unidad de Fiscalización realizó visitas de verificación que versaran sobre el manejo de los recursos a los eventos del entonces candidato, asimismo, los resultados obtenidos se indicaron en “Actas de Visitas de Verificación”; de los eventos a los cuales no acudió la autoridad electoral se realizó el monitoreo por internet, entre otros, en la página del candidato www.amlo.org.mx.

Al respecto, la Unidad de Fiscalización procedió a verificar los resultados obtenidos contra la información reportada y registrada por la coalición durante la campaña del Proceso Electoral Federal 2011-2012; dando como resultado gastos no reportados que se indican en las columnas (40 a la 44). Dichas observaciones se describen en los apartados “Agenda de Eventos del Candidato a la Presidencia de la República” y “Monitoreo en Páginas de Internet” del presente Dictamen.

Por lo tanto, considerando la operación aritmética de las columnas (40 a la 44) del **Anexo 29** del presente Dictamen, más el total de los gastos según auditoría columna (38), dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (45) *“TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORIA CON GASTOS NO REPORTADOS”*

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

VISITAS DE VERIFICACIÓN", en la columna (46) se realiza la quinta operación de gastos no reportados (visitas de verificación) contra tope de campaña y el resultado correspondiente.

Dichas situación se describen en el apartados "*Agenda de Eventos del Candidato a la Presidencia de la República*" y "*Monitoreo en Páginas de Internet*" del presente Dictamen

Ahora bien, derivado del Convenio de Colaboración para el Apoyo e Intercambio de Información sobre el origen, monto y destino de los recursos de los partidos políticos, celebrado entre el Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales Locales; el Instituto Electoral del Distrito Federal hizo entrega mediante oficio IEDF/UTEF/1778/2012 del 14 de diciembre de 2012 a la Unidad de Fiscalización de información relacionada a un proveedor de anuncios espectaculares que beneficiaba a la campaña presidencial, la cual no fue reportada por la coalición en el informe correspondiente, columna (47) "*FACTURA A 4702 ISA CORPORATIVO NO REPORTADA*", y la acumulación de gastos derivados de las Resoluciones del Consejo General, columna (48), mismas que sumadas a la columna (45), nos da el resultado de la columna (49) "*TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORIA CON GASTOS NO REPORTADOS*", en la columna (50) se realiza la sexta operación de gastos no reportados (factura ISA Corporativo y queja Q-UFRPP 329/12 resolución del Consejo General) contra tope de campaña y el resultado correspondiente.

Dicha situación se detalla en el apartado "*Convenios de Colaboración y Apoyo con Institutos Electorales Locales*" y "*Gastos por cuantificar derivado de Resoluciones del Consejo General*".

Ahora bien, esta autoridad electoral determinó que los partidos integrantes de la otrora Coalición destinaron recursos de campaña para fines no electorales al beneficiar los gastos al Movimiento de Regeneración Nacional, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, situación que se detalla en el presente Dictamen en los diferentes apartados de Egresos, por lo cual, se disminuye el tope de gastos de campaña, columna (51), dando un total de gastos según auditoría, columna (52).

Por lo tanto, al realizarse la comparación con el tope de gastos de campaña columna (14), se revelan las cifras que se reportan en la columna (53) del **Anexo 29**, dando como resultado los importes que se indican a continuación:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

CAMPAÑA	TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORÍA CON GASTOS NO REPORTADOS PRESIDENTE (A)	TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA (B)	TOTAL DE GASTOS vs. TOPE DE CAMPAÑA (C) = (B) – (A)
Presidente	\$398,878,726.96	\$336,112,084.16	-\$62,766,642.80

Como se puede observar, la coalición rebasó el tope de gastos de campaña de 2012 de la campaña a Presidente de la República, por un monto de \$62,766,642.80.

Mediante oficio UF-DA/12778/12 del 29 de octubre de 2012, recibido por la coalición en la misma fecha, se notificó a la coalición del posible rebase del tope de gastos de campaña, por lo que se solicitó a la coalición que presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso k); 229, numerales 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo señalado en el Acuerdo Primero del Consejo General del Instituto Federal Electoral CG432/2011 por el que se actualiza el tope máximo de gastos de campaña para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en cumplimiento al Resolutivo Segundo del Acuerdo identificado con el número CG382/2011, aprobado el 16 de diciembre de 2011 y, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012.

Con escrito SAFyPI/1242/12 del 7 de noviembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalización el 13 del mismo mes y año, la coalición manifestó lo que a continuación se transcribe:

“(…)

Tope de Gastos de Campaña

Conviene señalar que una vez realizado los procedimientos para la revisión del Informe de Campaña al cargo del entonces Presidente de la República, respecto a sus ingresos y egresos reportados, se realizaron observaciones sobre la documentación que ampara el informe, notificados a su coalición con oficios de errores y omisiones por parte de la Unidad de Fiscalización.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Derivado de dichas observaciones y en virtud de que afectan los importes reportados procede realizar el ejercicio de aplicación al total de los gastos reportados por su coalición, los correspondientes a los gastos no reportados en el Informe de Campaña con base a la información recabada. Dicha operación se detalla en el Anexo 8 del presente oficio, que se compone de la siguiente forma:

RESPUESTA

En relación con estas aclaraciones se está llevando a cavo (sic) una exhaustiva revisión en relación con lo manifestado por la autoridad electoral misma que se le hará llegar de manera inmediata.

Se presenta el formato 'IC-COA' Informe de Campaña con las correcciones que resultaron pertinentes, en forma impresa y en medio magnético. Anexo 1 de este oficio.

Monitoreos no conciliados

En relación con estas aclaraciones se está llevando a cavo (sic) una exhaustiva revisión en relación con lo manifestado por la autoridad electoral misma que se le hará llegar de manera inmediata.

Visitas de verificación y monitoreos en internet

En relación con estas aclaraciones se está llevando a cavo (sic) una exhaustiva revisión en relación con lo manifestado por la autoridad electoral misma que se le hará llegar de manera inmediata.

(...)"

Derivado de las observaciones realizadas por la Unidad de Fiscalización y señaladas en los diferentes apartados del presente Dictamen y en base a las contestaciones de la otrora coalición Movimiento Progresista, se determina que se rebasó el tope de gastos de campaña establecido por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG432/2011 aprobado el 16 de diciembre de 2011 y, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En consecuencia, la coalición incumplió con lo establecido en el artículo 229, numeral 1, en relación al 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un excedente de \$62,766,642.80.

Resulta importante señalar que el artículo 1, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que las disposiciones contenidas en el mismo ordenamiento legal, son de **orden público y de observancia general**, en razón de que en su contenido se recogen principios e instituciones que contempla el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los derechos y obligaciones político electorales de los ciudadanos; la organización, función y prerrogativas de los partidos políticos y, la función de organizar elecciones para los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, que por su naturaleza resultan de especial interés para el Estado para su protección, por lo que las normas contenidas en ese cuerpo legal no pueden ser alterados por la voluntad de los individuos, al no estar bajo el imperio de la autonomía de voluntad.

Así, debe señalarse que la conducta consistente en exceder los topes de gastos de campaña constituye una infracción al artículo 229, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ello de conformidad con el artículo 342, numeral 1, inciso f) del mismo ordenamiento. Dicha infracción, según lo dispuesto por el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción II del citado código, debe ser sancionada con un tanto igual al del monto ejercido en exceso; pudiéndose aplicar un agravante que aumente la sanción hasta el doble en caso de existir reincidencia

Ello es así porque el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su base segunda que la ley debe fijar los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos, señalando las reglas a las que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales.

Bajo esta tesitura el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, en ejercicio de sus atribuciones aprobó en sesión extraordinaria celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil once, el Acuerdo CG432/2011, por medio del cual fijó como tope máximo de gastos de campaña para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, el monto total de **\$336'112,084.16 (trescientos treinta y seis millones ciento doce mil ochenta y cuatro pesos 16/100 M. N.)**.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Ahora bien, la autoridad electoral tiene el deber de verificar que los partidos políticos y coaliciones respeten los topes de gastos de campaña, situación que de no tenerse en cuenta implicaría dejar sin contenido normativo una disposición legal que impone una obligación a cargo de los partidos políticos de respetar los topes fijados por la autoridad electoral en cumplimiento de las disposiciones legales que reglamentan lo establecido en la base II del artículo 41 constitucional.

Así, tenemos que el artículo 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece dentro del catálogo de infracciones que pueden ser cometidas por partidos políticos, el exceder los topes de gastos de campaña establecidos; siendo el artículo 354 de dicho ordenamiento, el que establece una regla de aplicación estricta respecto de la imposición de la sanción.

No obsta mencionar que la conducta materia de análisis comprende el accionar de partidos políticos que constituyeron una coalición, por lo que esta autoridad electoral retoma el artículo 98, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece que en el convenio de coalición se debe manifestar que los partidos políticos coaligados, según el tipo de coalición de que se trate –en el caso concreto de una coalición total-, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado, como si se tratara de un solo partido.

Para este efecto, el dieciocho de noviembre de dos mil once, los partidos políticos nacionales de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, suscribieron el “*CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL TOTAL QUE PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SENADORES Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO Y MOVIMIENTO CIUDADANO*”, cuya cláusula **SEXTA** reza:

*“**SEXTA.-** Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 98, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos coaligados convienen que los candidatos de la coalición electoral total se sujetarán a los topes de gasto de campaña que determine el Consejo General del Instituto Federal Electoral, de acuerdo a la legislación aplicable.”*

Así, tenemos que la otrora coalición Movimiento Progresista también tenía la obligación de ceñirse a los límites establecidos para los gastos relativos a las

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

campañas de sus candidatos postulados a cargos de elección popular, en específico, del C. Andrés Manuel López Obrador, como su entonces candidato a la Presidencia de la República; de esta manera la autoridad electoral ejerce control sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos erogados en dicha campaña, supervisando que los mismos no rebasen el límite establecido en el Acuerdo CG432/2011.

De todo lo anterior, resulta claro que el bien jurídico protegido con el establecimiento de topes de gastos de campaña es la igualdad en las condiciones en las que participan los partidos políticos en la obtención del voto, la cual es fundamental para lograr la finalidad prevista en la Constitución, consistente en que la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión se lleve a cabo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.

La *ratio legis* de dichos artículos se traduce en la necesidad de impedir que esa contienda por el poder se realice en condiciones de inequidad entre los protagonistas de la misma; este es otro de los valores que a través de la referida limitación se pretende salvaguardar, ya que un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los partidos políticos, en un sistema en donde la ley protege un principio de relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.

Por lo tanto, por la capacidad económica y por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.

Con las acciones tendientes a la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, se ratifica el principio de máxima transparencia y rendición de cuentas en los manejos financieros de los partidos políticos.

Es decir, el rebase de topes de gastos de campaña se encuentra debidamente sustentado y la irregularidad se encuentra acreditada tanto cualitativa como cuantitativamente.

Por lo que hace al elemento cuantitativo, consta en el Dictamen Consolidado que de la revisión a la documentación soporte y comprobatoria presentada por los partidos políticos integrantes de la coalición Movimiento Progresista durante la revisión de los Informes de Campaña respectivos, se desprende que la referida

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

coalición **superó el tope de gastos de campaña fijado por el Consejo General para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2012**, por un monto de **\$62,766,642.80**. (Sesenta y dos millones setecientos sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y dos pesos 80/100 Moneda Nacional).

Con relación al elementos cualitativo, el referido exceso en el gasto de campaña trastoca los principios de equidad y transparencia en la rendición de cuentas respecto de los recursos circulantes en la campaña electoral del C. Andrés Manuel López Obrador entonces candidato a la Presidencia de la República postulado por la coalición en comento, lo que implica una inequidad en la contienda y el consecuente debilitamiento del sistema de partidos.

En consecuencia, al rebasar el tope de gastos de campaña establecido por este Consejo General, la coalición Movimiento Progresista incumplió con lo establecido en el artículo 229, numeral 1, en relación con el 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. **C-157**

Hechos Posteriores al periodo de revisión del Informe de Campaña Presidencial.

Conviene señalar que con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalización en la misma fecha, en contestación a oficios de errores y omisiones de los Informes de Campaña de los candidatos a Senadores y Diputados Federales, la coalición presentó una séptima versión del Informe de Campaña del candidato a la Presidencia de la República y presentó documentación comprobatoria que modifica el tope de gastos de campaña por lo cual en el **Anexo 29** se agrega un cuadro adicional al de la conclusión original denominado **“7A VERSION INFORME DE CAMPAÑA (INCLUYE HECHOS POSTERIORES)”**, dichas situaciones se indican a continuación:

En la columna (1). **“TOTAL DE EGRESOS REPORTADOS POR LA COALICIÓN EN EL INFORME DE CAMPAÑA”**, se muestra el monto total de los gastos de campaña reportados en el formato **“IC-COA”** Informe sobre el Origen, Monto y Destino de los Recursos para las Campañas Federales Electorales de la Coalición, del entonces candidato presidencial presentado en su séptima versión del 31 de mayo de 2013.

Las columnas (2 al 6) **“PRORRATEO SEGÚN COALICIÓN”** corresponde al total de los gastos centralizados y prorrateados según la coalición (con base a lo registrado en las cuentas **“Transferencias recibidas del Comité Ejecutivo**

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Nacional", subcuenta "*En Especie*" (columnas 2, 3 y 4), "*Transferencias recibidas de los Comités del Partido*", subcuenta "*En Especie*" (columna 5) y "*Transferencias de Candidatos a Diputados*" (columna 6), reportadas en la contabilidad de la campaña presidencial, cifras que se restaron a la columna (1), obteniendo así el total de los gastos directos realizados por el entonces candidato y señalado en la columna (7) "*DIFERENCIA, GASTOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL CANDIDATO*".

La suma de la columna (7), más el total de los gastos centralizados y prorrateados según auditoría, columnas (8 a la 12) "*PRORRATEO SEGÚN AUDITORÍA*", dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (13) "*TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORÍA*", el cual constituye el importe total de los gastos según la documentación comprobatoria que la coalición erogó en beneficio de la campaña electoral.

Al respecto, es conveniente señalar que la coalición no presentó nuevas versiones de las balanzas de comprobación de las cuentas dispersadoras (gastos centralizados) por lo que las cifras de las columnas 8, 9 y 10 no tuvieron modificación alguna.

En la columna (14) se señala el tope de gastos de campaña de 2012, que por Acuerdo del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral CG382/2011 fue aprobado el 23 de noviembre de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, correspondiente a la campaña electoral de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y en la columna (15) se realiza la primera operación de gastos reportados contra tope de campaña y el resultado correspondiente.

En la columna (16) se indica el dato informativo del saldo de las cuentas por cobrar y anticipos de la campaña presidencial, derivado de la posible aplicación del artículo 35 del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, mediante oficios de errores y omisiones emitidos por esta Unidad de Fiscalización, se informó a la coalición de importes de reclasificaciones no procedentes correspondientes a gastos de Reconocimientos por Actividades Políticas, columna (17) "*RECLASIFICACIONES NO PROCEDENTES*", siendo la siguiente:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

OFICIO PRIMERA VUELTA	OFICIO SEGUNDA VUELTA	OFICIO	APARTADO EN EL OFICIO	CONCEPTO	IMPORTE QUE ACUMULA PARA EFECTOS DEL TOPE
UF-DA/12775/12	UF-DA/14082/12	Errores y Omisiones derivado de la revisión de los Ingresos y Egresos relativos al Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalición "Movimiento Progresista". Campaña Presidencial.	Reconocimientos por Actividades Políticas	Disminuye el importe del gasto originalmente reportado en la subcuenta "REPAP", no procedente.	\$12,951,969.92

Al respecto, la coalición no revirtió el asiento contable a la cuenta de gastos "R.E.P.A.P." sino a la cuenta de ingresos "Transferencias recibidas por el Comité Ejecutivo Nacional", subcuenta "En Especie", "PRD", por lo que no se refleja el gasto de los recibos de reconocimientos por actividades políticas en el Informe de Campaña Presidencial. Situación que se analiza en el apartado "Gastos Operativos de Campaña", "R.E.P.A.P."

Por lo tanto, considerando la suma de la columna (17) del **Anexo 29** (del importe del cuadro anterior), más el total de los gastos según auditoría columna (13), dan como resultado la cifra que se muestra en la columna (18) "TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORIA CON RECLASIFICACIÓN INCORRECTA", en la columna (19) se realiza la segunda operación de gastos reportados contra tope de campaña y el resultado correspondiente.

Asimismo, derivado de las confirmaciones realizadas por la Autoridad Electoral, varios proveedores y transportistas confirmaron operaciones con los partidos que integran la coalición (Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano) que no estuvieron reportados en el Informe de Campaña del entonces candidato presidencial, columnas (20), (21) y (22). Dichas observaciones se describen en los apartados "Circularización con Terceros" y "Circularización a Transportistas" del presente Dictamen.

Mediante oficios de errores y omisiones emitidos por esta Unidad de Fiscalización, se informó a la coalición de importes que se acumulaban para efectos del tope de campaña al no reportarse en sus registros contables o por diferencias en el registro contable, columnas (23, 24, 25 y 26) "REVISIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS", dichas situaciones se detallan en los apartados "Gastos en Anuncios Espectaculares", "Gastos Centralizados" y "Aportaciones de Militantes en Especie", respectivamente.

Por lo tanto, considerando la operación aritmética de las columnas (20 a la 26) del **Anexo 29** del Dictamen, más el total de los gastos según auditoría columna (18),

dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (27) "*TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORIA CON CIRCULARIZACIONES Y DERIVADO DE LA REVISIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS*", en la columna (28) se realiza la tercera operación de gastos reportados contra tope de campaña y el resultado correspondiente.

En cumplimiento al artículo 227 del Reglamento de Fiscalización, el cual establece que la entonces Unidad de Fiscalización realizaría las gestiones necesarias para llevar a cabo monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como anuncios espectaculares colocados en la vía pública, se realizó monitoreos con base en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), del resultado obtenido de la compulsión de la información monitoreada contra la propaganda electoral registrada por la coalición, no se conciliaron los que se indican en las columnas (29 al 37). Dichas observaciones se describen en los apartados "*Monitoreo en Espectaculares*" y "*Monitoreo en Medios Impresos*" del presente Dictamen.

Al respecto, derivado de la revisión de los Informes de Campaña de Senadores y Diputados Federales en el plazo para la revisión señalado en el establecido en el artículo 84, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se localizó documentación comprobatoria que subsana varios registros del monitoreo en anuncios espectaculares y de inserciones en medios impresos, situaciones que se detallan en los hechos posteriores de los apartados "*Monitoreo de Anuncios Espectaculares colocados en la Vía Pública*" y "*Monitoreo en Medios Impresos*" del Dictamen Consolidado

Por lo tanto, considerando la operación aritmética de las columnas (29 a la 37) del **Anexo 29** del Dictamen, más el total de los gastos según auditoría columna (27), dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (38) "*TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORIA CON MONITOREOS NO REPORTADOS*", en la columna (39) se realiza la cuarta operación de gastos no reportados (monitoreos) contra tope de campaña y el resultado correspondiente.

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para la comprobación de los ingresos y egresos de la otrora coalición Movimiento Progresista durante el periodo de campaña en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, de los actos públicos del C. Andrés Manuel López Obrador como entonces candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de sus facultades la entonces Unidad de Fiscalización realizó visitas de verificación que versaran sobre el manejo de los recursos a los eventos del entonces candidato,

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

asimismo, los resultados obtenidos se indicaron en “*Actas de Visitas de Verificación*”; de los eventos a los cuales no acudió la autoridad electoral se realizó el monitoreo por internet, entre otros, en la página del candidato www.amlo.org.mx.

Al respecto, la entonces Unidad de Fiscalización procedió a verificar los resultados obtenidos contra la información reportada y registrada por la otrora coalición durante la campaña del Proceso Electoral Federal 2011-2012; dando como resultado gastos no reportados que se indican en las columnas (40 a la 44). Dichas observaciones se describen en los apartados “Agenda de Eventos del Candidato a la Presidencia de la República” y “Monitoreo en Páginas de Internet” del Dictamen.

Es conveniente señalar que la coalición presentó diversa documentación que ampara la realización de los eventos efectuados a favor del candidato presidencial a través de recibos de aportaciones de simpatizantes en especie; por lo cual, la cifra considerada como gastos no reportados disminuyó. Situación que se detalla en los hechos posteriores del apartado “*Agenda de Eventos del Candidato*” del Dictamen.

Por lo tanto, considerando la operación aritmética de las columnas (40 a la 44) del **Anexo 29** del Dictamen, más el total de los gastos según auditoría columna (38), dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (45) “*TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORIA CON GASTOS NO REPORTADOS VISITAS DE VERIFICACIÓN*”, en la columna (46) se realiza la quinta operación de gastos no reportados (visitas de verificación) contra tope de campaña y el resultado correspondiente.

Dichas situación se describen en el apartados “Agenda de Eventos del Candidato a la Presidencia de la República” y “Monitoreo en Páginas de Internet” del Dictamen.

Ahora bien, derivado del Convenio de Colaboración para el Apoyo e Intercambio de Información sobre el origen, monto y destino de los recursos de los partidos políticos, celebrado entre el entonces Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales Locales; el Instituto Electoral del Distrito Federal hizo entrega mediante oficio IEDF/UTEF/1778/2012 del 14 de diciembre de 2012 a la entonces Unidad de Fiscalización información relacionada a un proveedor de anuncios espectaculares que beneficiaba a la campaña presidencial, la cual no había sido reportada por la coalición en el informe correspondiente, columna (47) “*FACTURA A 4702 ISA*”

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

CORPORATIVO NO REPORTADA", y la acumulación de gastos derivados de las Resoluciones del Consejo General, columna (48), mismas que sumadas a la columna (45), nos da el resultado de la columna (49) "*TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORIA CON GASTOS NO REPORTADOS*", en la columna (50) se realiza la sexta operación de gastos no reportados (factura ISA Corporativo y queja Q-UFRPP 329/12 resolución del Consejo General) contra tope de campaña y el resultado correspondiente.

Dicha situación se detalla en el apartado "*Convenios de Colaboración y Apoyo con Institutos Electorales Locales*" y "*Gastos por cuantificar derivado de Resoluciones del Consejo General*".

Es conveniente señalar que la otrora coalición reconoció contablemente facturas del proveedor ISA Corporativo en la contabilidad de presidente; por lo cual, la cifra considerada como gasto no reportado se canceló de la columna (47) toda vez que se reflejan en la cuenta "*Gastos en Gastos en Anuncios Espectaculares en la vía Pública*". Situación que se detalla en los hechos posteriores del apartado "*Convenios de Colaboración y Apoyo con Institutos Electorales Locales*" del Dictamen.

Ahora bien, esta autoridad electoral determinó que los partidos integrantes de la otrora coalición destinaron recursos de campaña para fines no electorales al beneficiar los gastos al Movimiento de Regeneración Nacional, situación que se detalla en el Dictamen en los diferentes apartados de Egresos, por lo cual, se disminuye el tope de gastos de campaña, columna (51), dando un total de gastos según auditoría, columna (52).

En sesión extraordinaria celebrada el 10 de julio de 2013, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral ordenó el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de determinar lo que en derecho correspondiera respecto del uso de recursos destinados a la organización Movimiento de Regeneración Nacional.⁴³

⁴³ Procedimiento administrativo sancionador oficioso identificado con el número P-UFRPP 29/13, el cual se resolvió mediante **CG270/2013** aprobado por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el nueve de octubre de dos mil trece. Declarándose **infundado** por lo que hace al destino de recursos en beneficio de la organización Movimiento Regeneración Nacional y **Fundado** respecto del rebase al tope de gastos de la campaña presidencial de la otrora coalición en cita por **\$24'944,795.75 (veinticuatro millones novecientos cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos 75/100 M.N.)**.

Cabe señalar que la resolución en comento fue materia de impugnación, por lo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en los recursos de apelación SUP-RAP-172/2013; SUP-RAP-174/2013 y SUP-RAP-178/2013, revocar la resolución en cita, respecto de la individualización de la sanción del rebase de topes. Por lo que una vez que se apruebe por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el acatamiento de mérito, se presentará a consideración del órgano colegiado el cumplimiento a lo ordenado en las ejecutorias referidas.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En virtud de que el gasto implicado en las facturas es por \$24,944,795.74, columna (51), estas fueron disminuidas del tope de gastos de campaña en vez de los \$12,472,397.88 (el 50%) que se consideraba beneficiaron a MORENA.

Por lo tanto, al realizarse la comparación con el tope de gastos de campaña columna (14), se revelan las cifras que se reportan en la columna (53) del **Anexo 29**, dando como resultado los importes que se indican a continuación:

CAMPAÑA	TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORÍA CON GASTOS NO REPORTADOS PRESIDENTE (A)	TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA (B)	TOTAL DE GASTOS vs. TOPE DE CAMPAÑA (C) = (B) – (A)
Presidente	\$383,386,113.94	\$336,112,084.16	-\$47,274,029.78

Adicionalmente, el gasto no reportado en la campaña presidencial de los siguientes casos que se enlistan a continuación, se acumulan para efectos del rebase de tope de gastos de campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República derivado de hechos posteriores a la revisión del Informe:

- Algunos Institutos Electorales Locales proporcionaron a la Unidad de Fiscalización los monitoreos realizados en el ámbito local en los cuales aparecían imágenes o publicidad de candidatos federales (propaganda genérica mixta), de la compulsa realizada se detectaron monitoreos que no fueron reportados por la coalición en la contabilidad de la campaña presidencial, columna (55). Situación que se detalla en los hechos posteriores de los apartados “*Monitoreo de Anuncios Espectaculares (Institutos Electores Estatales)*” y Monitoreo de Medios Impresos (Institutos Electores Estatales) del presente Dictamen.
- Derivado de las confirmaciones realizadas en el periodo de revisión de los Informes de Senadores de la República y Diputados Federales; los proveedores remitieron comprobantes de gastos que benefician en parte a la campaña presidencial, columna (56). Situación que se detalla en la revisión de los Informes de Campaña de los entonces candidatos a Senadores de la República, apartado 4.5.2 “*SENADORES*”, “*Circularizaciones con Terceros*” del presente Dictamen.
- Los entonces candidatos a Senadores de la República realizaron gastos de campaña que benefician a la campaña presidencial reportados en sus balanzas de comprobación, auxiliares contables y documentación soporte que

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

no fueron reflejados en la balanza de la campaña presidencial ni en su Informe de Campaña, columna (57). Situación que se detalla en los hechos posteriores del apartado de ingresos “*Transferencias entre Campañas*”, “*Balanza Senadores contra Balanza Presidente*” del Dictamen.

- Derivado de la revisión de los Informes de Campaña de los entonces candidatos a Senadores de la República, se realizaron observaciones respecto a gastos que beneficiaban al entonces candidato a la Presidencia de la República que no fueron reportados en su Informe de Campaña, columna (58). Situación que se detalla en los apartados “*Gastos de Propaganda*” y “*Gastos en Prensa*” de la revisión de los Informes de Campaña de los Senadores de la República del presente Dictamen.
- El Instituto Electoral del Estado de México, en cumplimiento al Punto Octavo del acuerdo número IEEM/CG/08/2013, envió copia certificada del Dictamen denominado “*Dictamen Consolidado que emite el Órgano técnico de Fiscalización al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, sobre el origen, monto, volumen, aplicación y destino del Financiamiento Público y Privado, que ejercieron los Partidos Políticos y Coaliciones en las Campañas de diputados y Miembros de Ayuntamientos en el Proceso Electoral 2012*”, en el cual se determinó la existencia de propaganda compartida que beneficio al entonces candidato a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Andrés Manuel López Obrador, postulado por la otrora coalición Movimiento Progresista” en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012, columna (59). Situación que se detalla en el apartado “*Dictamen del Instituto Electoral del Estado de México*” del Dictamen.

En sesión extraordinaria celebrada el 10 de julio de 2013, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral ordenó el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de determinar lo que en derecho correspondiera respecto propaganda compartida que benefició al entonces candidato presidencial en atención a la información y documentación enviada por el Instituto Electoral del Estado de México.⁴⁴

⁴⁴ Procedimiento administrativo sancionador oficioso identificado con el número P-UFRPP 33/13, el cual se resolvió mediante **CG271/2013** aprobado por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el nueve de octubre de dos mil trece. Declarándose **Fundado** por cuanto al ingreso no reportado, imponiendo como sanción una amonestación pública y **Fundado** respecto del rebase al tope de gastos de la campaña presidencial de la otrora coalición en cita por **\$5'124,242.38** (cinco millones ciento veinticuatro mil doscientos cuarenta y dos pesos 38/100 M.N.).

Cabe señalar que la resolución en comento fue materia de impugnación, por lo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en los recursos de apelación SUP-RAP-173/2013; SUP-RAP-175/2013 y

CONSEJO GENERAL SUP-RAP-124/2013 Y OTROS

- Derivados de la Resolución CG136/2013 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto al procedimiento oficioso en materia de fiscalización, se determinó la acumulación de gastos a la campaña presidencial columna (60). Situación que se detalla en el apartado “*Procedimientos Oficiosos en Materia de Fiscalización*” del Dictamen.
- Gastos realizados por las campañas de Diputados Federales que benefician a presidente, no reconocidos en la balanza del entonces candidato a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andrés Manuel López Obrador, columna (61). Situación que se detalla en el apartado Revisión de Informes Diputados Federales, apartado 4.5.3 “*DIPUTADOS FEDERALES*” del Dictamen.
- Monitoreo de espectaculares Diputados Federales se observaron 59 anuncios espectaculares (genéricos mixtos) no reportados por las campañas de diputados federales, que benefician del entonces candidato a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Andrés Manuel López Obrador, columna (62). Situación que se detalla en el apartado Revisión de Informes Diputados Federales Monitoreo de Espectaculares.
- La entonces Unidad de Fiscalización, a través del oficio UF-DA/3841/2013 de 30 de abril de 2013, recibido por la Coalición el 02 de mayo del mismo año, solicitó diversas pólizas contables con su respectivo soporte documental correspondiente a egresos de la dispersadora “PT”, en consecuencia, mediante escrito SAFyPI/304/2013 de 03 de mayo del 2013, la otrora coalición presentó una serie de pólizas, de su análisis se observó que algunas de ellas se encuentran registradas en forma duplicada, columna (63). Situación que se detalla en el apartado Gasto Centralizado Dispersadora PT.

Por lo tanto, considerando la operación aritmética de las columnas (55 a la 63) del **Anexo 29** del Dictamen, más el total de los gastos según auditoría columna (52), dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (64) “*TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORIA CON HECHOS POSTERIORES*”, en la columna (65) se realiza la operación de gastos reportados contra tope de campaña, con el resultado siguiente:

SUP-RAP-177/2013, revocar la resolución en cita, respecto de la individualización de la sanción del rebase de topes. Por lo que una vez que se apruebe por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el acatamiento de mérito, se presentara a consideración del órgano colegiado el cumplimiento a lo ordenado en las ejecutorias referidas.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

CAMPAÑA	TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORÍA CON GASTOS NO REPORTADOS PRESIDENTE (A)	TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA (B)	TOTAL DE GASTOS vs. TOPE DE CAMPAÑA (C) = (B) – (A)
Presidente	\$389,355,687.08	\$336,112,084.16	-\$53,243,602.92

En sesión extraordinaria del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral celebrada el 10 de julio de 2013, se determinó en el caso de los gastos que beneficiaran a campañas federales y locales, **se aplicara primero lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento de Fiscalización y posteriormente el 177;** por lo anterior, se determinó una disminución por un importe de \$6,936,453.94, columna (66), importe que aplicando el prorrateo del artículo 195 del Reglamento de la materia, beneficia a las campañas locales concurrentes de los partidos que integran la coalición. Situación que se detalla en el apartado de “*Cuentas Concentradoras (Gastos Centralizados)*” del Dictamen.

Por lo tanto, considerando la operación aritmética de la columna (66) del **Anexo 29** del presente Dictamen, más el total de los gastos según auditoría columna (64), dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (67) “*TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORIA CON DIFERENCIA EN PRORRATEO*”, en la columna (68) se realiza la última operación de gastos reportados contra tope de campaña, con el resultado siguiente:

CAMPAÑA	TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORÍA CON GASTOS NO REPORTADOS PRESIDENTE (A)	TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA (B)	TOTAL DE GASTOS vs. TOPE DE CAMPAÑA (C) = (B) – (A)
Presidente	\$382,419,233.14	\$336,112,084.16	-\$46,307,148.98

Como se puede observar, la otrora coalición rebasó el tope de gastos de campaña de 2012 de la campaña a Presidente de la República, por un monto de **\$46’307,148.98**.

Derivado de las observaciones realizadas por la entonces Unidad de Fiscalización y señaladas en los diferentes apartados del presente Dictamen y con base en las contestaciones de la Coalición Total “Movimiento Progresista”, se determina que se rebasó el tope de gastos de campaña establecido por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG432/2011 aprobado el 16 de diciembre de 2011 y, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012.

En consecuencia, la coalición incumplió con lo establecido en el artículo 229, numeral 1, en relación al 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Instituciones y Procedimientos Electorales, por un excedente de **\$46,307,148.98.157**

[Fin de hechos posteriores]

Modificaciones al tope de gastos de campaña de conformidad con lo establecido en los recursos de apelación SUP-RAP-124/2013 y SUP-RAP-164/2013; así como de la acumulación de gasto ordenado en diversas resoluciones emitidas por la autoridad administrativa nacional electoral.

En atención a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a efecto de reflejar las modificaciones al tope de gastos de campaña se agrega en el **Anexo 29** un tercer cuadro denominado “**7A VERSION INFORME DE CAMPAÑA ACATAMIENTO SUP-RAP-124/2013**”, dichas modificaciones se indican a continuación:

El 6 de mayo de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación identificado como **SUP-RAP-124/2013**, entre otras cuestiones, determinó revocar el Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de los candidatos de los de los Partidos Políticos y Coaliciones correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012, identificado como CG190/2013, en específico que se cuantificara el costo promedio de la pinta de bardas no reportadas, el cual quedaría en \$403.00.

Al respecto se realizaron las actualizaciones correspondientes, en este sentido los **Anexos 4 y 6** del Dictamen, referentes al monitoreo de propaganda en bardas de la campaña al cargo de Presidente de la República, fueron modificados en la parte relativa al costo promedio sustituyendo los valores originales por la cantidad de \$403.00, lo cual representó una disminución en los montos determinados para quedar en \$168,454.00 y \$512.21 respectivamente, a acumularse a los gastos de campaña, como se describe en los apartados 4.5.1.3.1.3.5 “*Monitoreo de Anuncios Espectaculares*” y Seguimiento al “*Monitoreo de los Institutos Electorales Locales*” de la campaña presidencial.

Por lo anteriormente señalado, los montos acumulados originalmente para efectos del rebase de tope de gastos de campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República disminuyen para quedar como se detalla en el Anexo 29 del Dictamen, columnas (32) y (55), respectivamente.

Por lo que corresponde a la propaganda detectada en el monitoreo de pinta de bardas de la campaña de Diputados Federales que benefició a la campaña presidencial detallada en el **Anexo 52** del Dictamen, en la parte relativa al costo promedio fueron sustituidos los valores originales por la cantidad de \$403.00, lo cual representó una disminución en el monto observado inicialmente, determinándose la cantidad de \$7,657.00 para acumularse a los gastos que benefician a la campaña presidencial, como se describe en el apartado 4.5.3.5 Monitoreo de Anuncios Espectaculares en la Vía Pública, de la campaña a Diputados Federales.

Por lo anteriormente señalado, el gasto no reportado acumulado originalmente para efectos del rebase de tope de gastos de campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República disminuye para quedar como se detalla en el **Anexo 29 del Dictamen, columna (62)**.

En el mismo sentido al realizar los cálculos de conformidad con lo ordenado por la autoridad jurisdiccional los importes observados en los **Anexos 26 y 28 del Dictamen**, referentes a la pinta de bardas de “Genérico Federal” y “Genérico Mixto” que benefician a la campaña a Presidente de la República fueron modificados en la parte relativa al costo promedio sustituyendo el monto original por la cantidad de **\$403.00**, como se describe en el apartado 4.5.1.9. Gastos Centralizados.

Por lo anteriormente señalado, los gastos no reportados acumulados originalmente para efectos del rebase de tope de gastos de campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República sufrieron una disminución como se detalla en el **Anexo 29 del Dictamen, columnas (30) y (31)**, respectivamente.

Afectaciones relacionadas con la reclasificación de la conclusión 73 (CG242/2013).

- En sesión extraordinaria del 26 de septiembre de 2013, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral aprobó la Resolución CG242/2013 respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los Informes Anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales correspondientes al ejercicio 2012, en la cual se determinó sancionar a cada uno de los institutos políticos integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista toda vez que la autoridad advirtió la existencia de gastos que se encontraban vinculados a la campaña electoral del

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Proceso Electoral Federal 2011-2012, los cuales omitió reportar en los informes correspondientes.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación **SUP-RAP-164/2013** ordenó la reclasificación de los montos observados con la finalidad de que se sumaran al tope de gastos de campaña fijado en el dictamen consolidado correspondiente y se determinara lo que en derecho correspondiera.

Conforme a lo anterior, la Resolución CG242/2013 perdió sus efectos por lo que se refiere a la parte antes mencionada, con la finalidad de formar parte integral del análisis y valoración que determine esta responsable en el recurso de apelación **SUP-RAP-124/2013**.

Por lo anteriormente señalado, del gasto observado por la autoridad en el marco de la revisión a los Informes Anuales del ejercicio 2012, se determinó un beneficio a la campaña de Presidente de la República por un monto de \$2'233,533.64, mismo que no fue reportado en el Informe de Campaña por lo que se acumula para efectos del rebase de tope de gastos de campaña, mismo que se identifica en el **Anexo 29** del **Dictamen, columna (71)**.

Afectación relacionada con el tema 1 de la sección de ejecución, SUP-RAP-124/2013 conclusión 42-2, incongruencia en el trato de gastos.

- En cumplimiento a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional, la responsable dio inicio al procedimiento de mérito al cual se le asignó el número de expediente **INE/P-COF-UTF/421/2015**.

Derivado del inicio del procedimiento oficioso mencionado el monto acumulado originalmente disminuyó por \$703.53 a efecto de que la responsable realizara la investigación correspondiente, situación que se refleja el **Anexo 29**, columna (55).

Posteriormente, en sesión extraordinaria celebrada el 26 de agosto de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG615/2016, la cual en sus puntos resolutivos, específicamente el CUARTO, ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización acumular el monto involucrado correspondiente a \$703.53 (setecientos tres pesos 53/100 M.N.) a las cifras finales del tope de gastos de campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República por la otrora coalición Movimiento Progresista el C. Andrés Manuel López Obrador, para los efectos conducentes del recurso de apelación **SUP-RAP-**

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

124/2013, como se describe en el apartado “*Monitoreo de Anuncios Espectaculares (Institutos Electores Estatales)*” de la campaña presidencial.

Por lo anteriormente señalado, el gasto no reportado se acumula para efectos del rebase de tope de gastos de campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República, mismo que se identifica en el **Anexo 29 del Dictamen, columna (70)**.

Afectaciones derivadas de procedimientos administrativos.

- En sesión ordinaria del 26 de agosto de 2016, el Consejo General de Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución **INE/CG611/2016**, respecto al Procedimiento Oficioso en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, instaurado en contra de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista, identificado como P-UFRPP 36/13, en la cual mandato en su Punto Resolutivo SEGUNDO, en relación con el Considerando 4, llevar a cabo el prorrateo respecto del beneficio acreditado por los partidos integrantes de la entonces Coalición “Movimiento Progresista”, y una vez realizado lo anterior proceder a cuantificar los montos resultantes en los topes de gastos de campaña conducentes, por **\$285,974.16**.

Por lo anteriormente señalado, el gasto reportado ante la autoridad electoral local en el estado de Veracruz y no reportado el beneficio a la campaña de Presidente de la República por **\$285,974.16**, se acumula para efectos del rebase de tope de gastos de campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República, mismo que se identifica en el **Anexo 29 del Dictamen, columna (72)**.

- En sesión extraordinaria del 31 de mayo de 2016 el Consejo General de este Instituto aprobó la Resolución **INE/CG422/2016**, la cual resolvió el procedimiento oficioso en materia de fiscalización identificado como P-UFRPP 72/2013, mediante el cual la autoridad electoral determinó de conformidad con el considerando 4, cuantificar al tope de gastos de campaña facturas como se detallan en el apartado “*Gastos por cuantificar derivado de Resoluciones del Consejo General*” de la campaña presidencial, por **\$19,883.00**

Por lo anteriormente señalado, el gasto no reportado se acumula para efectos del rebase de tope de gastos de campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República, mismo que se identifica en el **Anexo 29 del Dictamen, columna (73)**.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Cifras finales dictaminadas

Así mismo, al realizarse la comparación con el tope de gastos de campaña columna **(14)** contra el total de gastos de la campaña presidencial columna **(74)** del **Anexo 29**, se obtiene como resultado el rebase del tope de gastos de campaña de la siguiente manera:

CAMPAÑA	TOTAL DE GASTOS SEGUN AUDITORÍA CON GASTOS NO REPORTADOS PRESIDENTE (A)	TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA (B)	TOTAL DE GASTOS vs. TOPE DE CAMPAÑA (C) = (B) – (A)
Presidente	\$384,849,796.76	\$336,112,084.16	-\$48,737,712.60

En consecuencia, la coalición incumplió con lo establecido en el artículo 229, numeral 1, en relación al 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un excedente de **\$48,737,712.60 (Conclusión final 157)**.

Modificación a la Conclusión Final relacionada con el rebase al tope de gastos de campaña del candidato a la Presidente de la República, por lo que hace a la otrora coalición Movimiento Progresista.

157. La otrora coalición Movimiento Progresista rebasó el tope de gastos de campaña establecido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG432/2011 para la campaña a Presidente de la República, por un excedente de \$62,766,642.80 al 30 de enero de 2013, en hechos posteriores a la revisión del Informe de Campaña, la entonces Unidad de Fiscalización analizó la documentación remitida por la otrora coalición durante el periodo de revisión de las Campañas de Senadores y Diputados Federales y la proporcionada por terceros, determinándose una disminución al rebase de tope de gastos de campaña para quedar en **\$46,307,148.98**.

En acatamiento al recurso de apelación **SUP-RAP-124/2013** y como consecuencia de la cuantificación de montos involucrados derivados de procedimientos administrativos sancionadores, se modifica el monto ejercido en exceso para quedar en **\$48'737,712.60**, el cual se integra de la siguiente manera:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

CAMPAÑA	TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORÍA CON GASTOS NO REPORTADOS PRESIDENTE (A)	TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA (B)	TOTAL DE GASTOS vs. TOPE DE CAMPAÑA (C) = (B) – (A)	Sanción CG242/2013
Presidente	\$384,849,796.76	\$336,112,084.16	-\$48,737,712.60	-\$2,233,533.64

En consecuencia, la coalición incumplió con lo establecido en el artículo 229, numeral 1, en relación al 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un excedente de **\$46,504,178.96 (Conclusión final 157).**

No obstante, la Conclusión 73 del CG242/2013, que sancionó parte del rebase al tope de gastos de campaña, se dejó sin efectos en el Considerando 11, apartado B del presente, por lo que el monto total que se debe imponer es el señalado de **\$48'737,712.60**, respecto del cual debe tomarse en cuenta que esta autoridad ha cobrado el monto de \$769,903.93 (Setecientos sesenta y nueve mil novecientos tres pesos 93/100 M.N.) al Partido de la Revolución Democrática con motivo de la Conclusión señalada. **(Ajuste de conclusión final 157)**

En ese sentido, a fin de generar congruencia y no cobrar indebidamente el monto señalado de manera repetida, esta situación deberá considerarse al individualizar la sanción al Partido de la Revolución Democrática.

F. Modificaciones al Dictamen Consolidado CG190/2013 en lo relativo a la otrora coalición Movimiento Progresista correspondientes a los topes de gastos de las campañas a Senadores de la República. (SUP-RAP-124/2013 y SUP-RAP-164/2013; Apartado A, Tema 1, Sección de ejecución).

4.5.2.12. Rebase de Tope de Gastos de Campaña

Senadores de la República

De la revisión a las cifras reportadas en las balanzas de comprobación presentadas a la autoridad electoral, se observó que en una fórmula, la otrora coalición había rebasado el tope de los gastos de campaña establecido para la elección de Senadores de la República por el principio de mayoría relativa en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, de conformidad con lo señalado en el Acuerdo Segundo del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, **CG433/2011**. A continuación se detalla el caso en comento:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

ENTIDAD FEDERATIVA	FÓRMULA	NOMBRE DEL CANDIDATO	TOTAL DE GASTOS REPORTADOS SEGÚN "IC-COA"	TOTAL DE GASTOS REPORTADOS SEGÚN BALANZA DE COMPROBACIÓN (A)	TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA (B)	MONTO QUE SOBREPASA EL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA (C)=(A)-(B)
Campeche	1	Sansores San Roman Layda Elena	\$1,256,713.00	\$2,344,676.39	\$2,240,747.23	\$103,929.16

Nota: La diferencia entre el "IC-COA" y la balanza de comprobación, se observa en el Oficio de Gabinete Senadores.

En consecuencia, se solicitó a la otrora coalición que presentara lo siguiente:

- Las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso k); 98, numeral 2, 229, numerales 1 y 2, así como 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo señalado en el Acuerdo Segundo del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral CG433/2011 por el que se determina el tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, aprobado en sesión extraordinaria el 16 de diciembre de 2011 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3195/13 del 8 de abril de 2013, recibido por la coalición el mismo día.

Al respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalización el mismo día, la coalición manifestó lo que a la letra se transcribe:

*“Por lo que se refiere al rebase de topes de gastos de campaña, me permito informar que aun (sic) **no es previsible dicho rebase en ningún caso**, toda vez que no se han aplicado todas las correcciones que se han señalado en los diversos oficio de errores y omisiones derivados de la revisión de los Informes de Campaña correspondiente al proceso Electoral Federal 2011-2012.*

[Énfasis añadido]”

La respuesta se consideró insatisfactoria, toda vez que aun cuando señaló estar aplicando las correcciones propuestas por la entonces Unidad de Fiscalización, fue importante señalar que en relación a los ingresos y egresos reportados en la fórmula referida, se constató la totalidad de los registros y soporte documental

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

consistentes en \$397,129.75, denominados Gastos Directos; \$588,719.76 de transferencia en especie de la campaña presidencial y \$1,358,826.88 como Gastos Centralizados.

Aunado a lo anterior, la otrora coalición presentó balanzas de comprobación a último nivel y auxiliares contables donde se reflejaban solo los gastos directos de las campañas y no así el prorrateo de los gastos centralizados que estaban reportados en las cuentas dispersadoras de la otrora coalición, por lo que disminuyó los gastos de campaña, situación que no fue solicitada por la autoridad, por lo que debía reportar y registrar la totalidad del gasto en el informe correspondiente.

En consecuencia, se solicitó nuevamente a la otrora coalición que presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso k); 98, numeral 2, 229, numerales 1 y 2, así como 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo señalado en el Acuerdo Segundo del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral CG433/2011 por el que se determina el tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, aprobado en sesión extraordinaria el 16 de diciembre de 2011 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4639/13 del 14 de mayo de 2013, recibido por la otrora coalición el mismo día.

Al respecto, con escrito SAFyPI/372/2013, recibido por la entonces Unidad de Fiscalización el 21 de mayo de 2013, la coalición dio contestación al oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presentó aclaración alguna.

Ahora bien, con escrito SAFyPI/465/2013 de 31 de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalización el mismo día, en respuesta a los oficios de errores y omisiones de las campañas de Senadores y Diputados Federales, la otrora coalición presentó una nueva versión de los 64 formatos "IC-COA" Informes de Campaña y de balanzas de comprobación de las campañas a Senadores de la República.

De la revisión a las cifras reportadas en los Informes de Campaña y balanzas de comprobación, se identificó que la otrora coalición no rebasa el tope de gastos de campaña en las fórmulas de los entonces candidatos a Senadores de la

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

República, derivado de la contabilidad que controlaba los recursos de las campañas de Senadores; sin embargo, respecto de los gastos centralizados, no coincidieron con los determinados por la autoridad electoral, por lo que se determinó lo siguiente:

Una vez realizados los procedimientos para la revisión del Informe de Campaña al cargo de Senadores de la República, respecto a sus ingresos y egresos reportados, se realizaron observaciones sobre la documentación que amparan los informes, notificados a la otrora coalición con oficios de errores y omisiones por parte de la entonces Unidad de Fiscalización.

Derivado de dichas observaciones y en virtud de que afectaban los importes reportados se procedió a realizar el ejercicio de aplicación de gastos no reportados al total de los gastos reportados por la otrora coalición. Dicha operación se detalla en el **Anexo 41** del Dictamen, que se compone de la siguiente forma:

En la columna (1). *“TOTAL DE EGRESOS REPORTADOS POR LA COALICIÓN EN LOS INFORMES DE CAMPAÑA”*, se muestra el monto total de los gastos de campaña reportados en los formatos *“IC-COA”* Informe sobre el Origen, Monto y Destino de los Recursos para las Campañas Federales Electorales de la Coalición, de los entonces candidatos a Senadores de la República presentado en su versión del 31 de mayo de 2013.

Las columnas (2 al 6) *“PRORRATEO SEGÚN COALICIÓN”* corresponde al total de los gastos centralizados y prorrateados según la coalición (con base a lo registrado en las cuentas *“Transferencias recibidas del Comité Ejecutivo Nacional”*, subcuenta *“En Especie”* (columnas 2, 3 y 4), *“Transferencias recibidas de los Comités del Partido”*, subcuenta *“En Especie”* (columna 5) y *“Transferencias de la Campaña Presidencial - Honorarios”* (columna 6), reportadas en la contabilidad de las campañas de Senadores, cifras que se restaron a la columna (1), obteniendo así el total de los gastos directos realizados por los entonces candidatos y señalado en la columna (7) *“DIFERENCIA, GASTOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL CANDIDATO”*.

La suma de la columna (7), más el total de los gastos centralizados y prorrateados según auditoría, columnas (8 a la 12) *“PRORRATEO SEGÚN AUDITORÍA”*, dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (13) *“TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORÍA”*, el cual constituye el importe total de los gastos según la documentación comprobatoria que la coalición erogó en beneficio de las campañas electorales.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En la columna (14) se señala el tope de gastos de campaña de 2012, que por Acuerdo del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral CG433/2011 fue aprobado el 16 de diciembre de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, correspondiente a las campañas electorales de Diputados y Senadores por el Principio de Mayoría Relativa y en la columna (15) se realiza la primera operación de gastos reportados contra tope de campaña y el resultado correspondiente.

En la columna (16) se indican los saldos de las cuentas por cobrar que reportan las balanzas de comprobación de las campañas, derivado de la aplicación del artículo 35 del Reglamento de Fiscalización y en la columna (17) se realiza la operación aritmética de la suma de la columna (13) *“TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORÍA”* Y DE LA COLUMNA (16) *“ARTICULO 35 DEL REGLAMENTO SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR EN CAMPAÑA NO COMPROBADOS”* y en la columna (18) se realiza la segunda operación de gastos reportados contra tope de campaña y el resultado correspondiente.

Asimismo, derivado de las confirmaciones realizadas por la Autoridad Electoral, varios proveedores confirmaron operaciones con los partidos que integran la otrora coalición (Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano) que no estuvieron reportados en el Informe de Campaña de los entonces candidatos a Senadores de la República, columna (19). Dichas observaciones se describen en los apartados *“Circularización con Terceros”* del Dictamen.

Mediante oficios de errores y omisiones emitidos por esta Unidad de Fiscalización, se informó a la otrora coalición de importes que se acumulaban para efectos del tope de campaña al no reportarse en sus registros contables o por diferencias en el registro contable, columnas (20, 21, 22 y 23) *“REVISIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS”*, dichas situaciones se detallan en los apartados *“Gastos en Prensa”* y *“Otros Gastos Directos de Propaganda”*, así como en el apartado *“Aportaciones de Simpatizantes en Especie”*.

Por lo tanto, considerando la operación aritmética de las columnas (19 a la 23) del **Anexo 41** del Dictamen, más el total de los gastos según auditoría con cuentas por cobrar, columna (17), dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (24) *“TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORIA CON CIRCULARIZACIONES Y DERIVADO DE LA REVISIÓN DE INGRESOS Y*

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

EGRESOS", en la columna (25) se realiza la tercera operación de gastos reportados contra tope de campaña y el resultado correspondiente.

En cumplimiento al artículo 227 del Reglamento de Fiscalización, el cual establece que la entonces Unidad de Fiscalización realizaría las gestiones necesarias para llevar a cabo monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como anuncios espectaculares colocados en la vía pública, consecuentemente se llevaron a cabo los monitoreos respectivos con base en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), del resultado obtenido de la compulsa de la información monitoreada contra la propaganda electoral registrada por la otrora coalición. No se conciliaron los que se indican en las columnas (26 a la 32).

Dichas observaciones se describen en los apartados "*Monitoreo en Anuncios Espectaculares*" y "*Monitoreo en Medios Impresos*" del Dictamen.

Por lo tanto, considerando la operación aritmética de las columnas (26 a la 32) del **Anexo 41** del Dictamen, más el total de los gastos según auditoría columna (24), dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (33) "*TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORIA CON MONITOREOS NO REPORTADOS*", en la columna (34) se realiza la cuarta operación de gastos no reportados (monitoreos) contra tope de campaña y el resultado correspondiente.

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para la comprobación de los ingresos y egresos de la otrora coalición Movimiento Progresista durante el periodo de campaña en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en ejercicio de sus facultades la entonces Unidad de Fiscalización realizó visitas de verificación que versan sobre el manejo de los recursos a domicilios de las casas de campaña de los candidatos a verificar, de los comités directivos distritales, estatales u órganos equivalentes que se localizaran en la circunscripción territorial de los Estados de la República, asimismo, los resultados obtenidos se indicaron en "*Actas de Visitas de Verificación*"; asimismo, se realizó el monitoreo por internet.

Al respecto, la entonces Unidad de Fiscalización procedió a verificar los resultados obtenidos contra la información reportada y registrada por la coalición durante la campaña del Proceso Electoral Federal 2011-2012; dando como resultado gastos no reportados que se indican en las columnas (35 a la 37). Dichas observaciones se describen en los apartados "*Visitas de Verificación*" y "*Monitoreo en Páginas de Internet*" del Dictamen.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Por lo tanto, considerando la operación aritmética de las columnas (35 a la 37) del **Anexo 41** del Dictamen, más el total de los gastos según auditoría columna (33), dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (38) “*TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORIA CON GASTOS NO REPORTADOS VISITAS DE VERIFICACIÓN*”, en la columna (39) se realiza la quinta operación de gastos no reportados (visitas de verificación) contra tope de campaña y el resultado correspondiente.

Ahora bien, derivado del Convenio de Colaboración para el Apoyo e Intercambio de Información sobre el origen, monto y destino de los recursos de los partidos políticos, celebrado entre el entonces Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales Locales; el Instituto Electoral del Distrito Federal hizo entrega mediante oficio IEDF/UTEF/1778/2012 del 14 de diciembre de 2012 de información relacionada a un proveedor de anuncios espectaculares que beneficiaba en parte a las campañas de Senadores de la República, la cual no fue reportada por la coalición en los informes correspondientes, columna (40) “*FACTURA A 4701 ISA CORPORATIVO NO REPORTADA*”, y la acumulación de gastos derivados de Resoluciones del Consejo General, columnas (41) y (42), mismas que sumadas a la columna (38), nos da el resultado de la columna (43) “*TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORIA*”, en la columna (44) se realiza la sexta operación de gastos no reportados (factura ISA Corporativo y Resoluciones del Consejo General) contra tope de campaña y el resultado correspondiente.

Dichas situaciones se detallan en los apartados “*Convenios de Colaboración y Apoyo con Institutos Electorales Locales*” y “*Gastos por cuantificar derivado de Resoluciones del Consejo General*”.

Por lo tanto, al realizarse la comparación con el tope de gastos de campaña columna (14), se revelan las cifras que se reportan en la columna (43) del **Anexo 41**, dando como resultado el rebase del tope de gastos de campaña de los siguientes candidatos a Senadores de la República:

ENTIDAD	FÓRMULA	CANDIDATO	TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORIA CON GASTOS NO REPORTADOS SENADORES (A)	TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA (B)	TOTAL DE GASTOS vs. TOPE DE CAMPAÑA (C) = (B) – (A)
Baja California Sur	1	Cota Montaño Leonel Efraín	\$2,394,589.02	\$2,240,747.23	\$153,841.79
Campeche	1	Sansores San Román Layda Elena	2,703,762.60	2,240,747.23	463,015.37

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

ENTIDAD	FÓRMULA	CANDIDATO	TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORÍA CON GASTOS NO REPORTADOS SENADORES	TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA	TOTAL DE GASTOS vs. TOPE DE CAMPAÑA
			(A)	(B)	(C) = (B) – (A)
Baja California Sur	1	Cota Montaño Leonel Efrain	\$2,394,589.02	\$2,240,747.23	\$153,841.79
TOTAL					\$616,857.16

Como se puede observar, la coalición rebasó el tope de gastos de campaña de 2012 de 2 campañas a Senadores de la República, por un monto de \$616,857.16.

Derivado de las observaciones realizadas por la entonces Unidad de Fiscalización y señaladas en los diferentes apartados del presente Dictamen y con base a las contestaciones de la otrora coalición Movimiento Progresista, se determina que se rebasó el tope de gastos de campaña establecido por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG433/2011 fue aprobado el 16 de diciembre de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012.

En consecuencia, la coalición incumplió con lo establecido en el artículo 229, numeral 1, en relación al 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un excedente de \$616,857.16.

Resulta importante señalar que el artículo 1, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que las disposiciones contenidas en el mismo ordenamiento legal, son de **orden público y de observancia general**, en razón de que en su contenido se recogen principios e instituciones que contempla el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los derechos y obligaciones político electorales de los ciudadanos; la organización, función y prerrogativas de los partidos políticos y, la función de organizar elecciones para los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, que por su naturaleza resultan de especial interés para el Estado para su protección, por lo que las normas contenidas en ese cuerpo legal no pueden ser alterados por la voluntad de los individuos, al no estar bajo el imperio de la autonomía de voluntad.

Así, debe señalarse que la conducta consistente en exceder los topes de gastos de campaña constituye una infracción al artículo 229, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ello de conformidad con el

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

artículo 342, numeral 1, inciso f) del mismo ordenamiento. Dicha infracción, según lo dispuesto por el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción II del citado código, debe ser sancionada con un tanto igual al del monto ejercido en exceso; pudiéndose aplicar un agravante que aumente la sanción hasta el doble en caso de existir reincidencia.

Ello es así porque el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su base segunda que la ley debe fijar los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos, señalando las reglas a las que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales.

Este Consejo General, en ejercicio de la atribución referida, aprobó, en sesión extraordinaria celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil once, el Acuerdo CG433/2011, por medio del cual fijó como tope máximo de gastos de campaña para la elección de Senadores de la República en el Proceso Electoral Federal 2011-2012.

Ahora bien, la autoridad electoral tiene el deber de verificar que los partidos políticos y coaliciones respeten los topes de gastos de campaña, situación que de no tenerse en cuenta implicaría dejar sin contenido normativo una disposición legal que impone una obligación a cargo de los partidos políticos de respetar los topes fijados por la autoridad electoral en cumplimiento de las disposiciones legales que reglamentan lo establecido en la base II del artículo 41 constitucional.

Así, tenemos que el artículo 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece dentro del catálogo de infracciones que pueden ser cometidas por partidos políticos, el exceder los topes de gastos de campaña establecidos; siendo el artículo 354 de dicho ordenamiento, el que establece una regla de aplicación estricta respecto de la imposición de la sanción.

No obsta mencionar que la conducta materia de análisis comprende el accionar de partidos políticos que constituyeron una coalición, por lo que esta autoridad electoral retoma el artículo 98, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece que en el convenio de coalición se debe manifestar que los partidos políticos coaligados, según el tipo de coalición de que se trate –en el caso concreto de una coalición total-, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado, como si se tratara de un solo partido.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Para este efecto, el dieciocho de noviembre de dos mil once, los partidos políticos nacionales de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, suscribieron el “*CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL TOTAL QUE PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SENADORES Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO Y MOVIMIENTO CIUDADANO*”, cuya cláusula **SEXTA** establece:

“SEXTA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 98, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos coaligados convienen que los candidatos de la coalición electoral total se sujetarán a los topes de gasto de campaña que determine el Consejo General del Instituto Federal Electoral, de acuerdo a la legislación aplicable.”

Así, tenemos que la otrora coalición Movimiento Progresista también tenía la obligación de ceñirse a los límites establecidos para los gastos relativos a las campañas de sus candidatos postulados a cargos de elección popular, de esta manera la autoridad electoral ejerce control sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos erogados en dicha campaña, supervisando que los mismos no rebasen el límite establecido en el Acuerdo CG433/2011.

De todo lo anterior, resulta claro que el bien jurídico protegido con el establecimiento de topes de gastos de campaña es la igualdad en las condiciones en las que participan los partidos políticos en la obtención del voto, la cual es fundamental para lograr la finalidad prevista en la Constitución, consistente en que la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión se lleve a cabo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.

La *ratio legis* de dichos artículos se traduce en la necesidad de impedir que esa contienda por el poder se realice en condiciones de inequidad entre los protagonistas de la misma; este es otro de los valores que a través de la referida limitación se pretende salvaguardar, ya que un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los partidos políticos, en un sistema en donde la ley protege un principio de relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Por lo tanto, por la capacidad económica y por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.

En conclusión, con las acciones tendientes a la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, se ratifica el principio de máxima transparencia y rendición de cuentas en los manejos financieros de los partidos políticos.

Es decir, el rebase de topes de gastos de campaña se encuentra debidamente sustentado y la irregularidad se encuentra acreditada tanto cualitativa como cuantitativamente.

Por lo que hace al elemento cuantitativo, consta en el Dictamen Consolidado que de la revisión a la documentación soporte y comprobatoria presentada por los partidos políticos integrantes de la coalición Movimiento Progresista durante la revisión de los Informes de Campaña respectivos, se desprende que la referida coalición **superó el tope de gastos de campaña fijado por el Consejo General para la elección de Senadores de la República en el año 2012**, en dos candidaturas.

Con relación al elemento cualitativo, el referido exceso en el gasto de campaña trastoca los principios de equidad y transparencia en la rendición de cuentas respecto de los recursos circulantes en las campañas de los entonces candidatos a Senadores de la República postulados por la coalición en comento, lo que implica una inequidad en la contienda y el consecuente debilitamiento del sistema de partidos.

En consecuencia, al rebasar el tope de gastos de campaña establecido por este Consejo General, la otrora coalición Movimiento Progresista incumplió con lo establecido en el artículo 229, numeral 1, en relación con el 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. C-

Modificaciones al tope de gastos de campaña de conformidad con lo establecido en los recursos de apelación SUP-RAP-124/2013 y SUP-RAP-164/2013; así como de la acumulación de gasto ordenado en diversas resoluciones emitidas por la autoridad administrativa nacional electoral.

El 6 de mayo de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación identificado como **SUP-RAP-**

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

124/2013, entre otras cuestiones, determinó revocar el Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de los candidatos de los Partidos Políticos y Coaliciones correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012, identificado como **CG190/2013**, en específico que se cuantificara el costo promedio de la pinta de bardas no reportadas, el cual quedaría en \$403.00.

Por lo anteriormente señalado, al realizar las actualizaciones correspondientes de conformidad con lo ordenado en las ejecutorias de mérito los importes observados en el **Anexo 38 del Dictamen**, referentes a la pinta de bardas de las campañas de Senadores de la República fueron modificados en el costo promedio de \$403.00, para quedar en **\$63,674.00** y acumularse a los gastos de campaña, situación que se describe en el apartado 4.5.2.3.1.3.2 “*Monitoreo de Anuncios Espectaculares colocados en la Vía Pública*”, de la campaña de Senadores de la República.

Por lo anteriormente señalado, el gasto no reportado se acumula para efectos del rebase de tope de gastos de campaña de los entonces candidatos a Senadores de la República, mismo que se identifica en el **Anexo 41 del Dictamen, columna (29)**.

En el mismo sentido al realizar los cálculos de conformidad con lo ordenado por la autoridad jurisdiccional los importes observados en los **Anexos 26 y 28 del Dictamen**, referentes a la pinta de bardas de “Genérico Federal” y “Genérico Mixto” que benefician a las campañas de Senadores de la República fueron modificados en el costo promedio de \$403.00, como se describe en el **apartado 4.5.1.9. Gastos Centralizados**.

Por lo anteriormente señalado, los gastos no reportados se acumulan para efectos del rebase de tope de gastos de campaña de los entonces candidatos a Senadores de la República, mismo que se identifica en el **Anexo 41 del Dictamen, columnas (27) y (28), respectivamente**.

Afectaciones relacionadas con la reclasificación de la conclusión 73 (CG242/2013).

- En sesión extraordinaria del 26 de septiembre de 2013, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral aprobó la Resolución **CG242/2013** respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los Informes Anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales correspondientes al ejercicio 2012, en la cual se determinó

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

sancionar a cada uno de los institutos políticos integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista toda vez que la autoridad advirtió la existencia de gastos que se encontraban vinculados a la campaña electoral del Proceso Electoral Federal 2011-2012, los cuales omitió reportar en los informes correspondientes.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación **SUP-RAP-164/2013** ordenó la reclasificación de los montos observados con la finalidad de que se sumara al tope de gastos de campaña fijado en dictamen consolidado correspondiente y se determinara lo que en derecho correspondiera.

Conforme a lo anterior, la resolución **CG242/2013 perdió sus efectos** por lo que se refiere a la parte antes mencionada, con la finalidad de formar parte integral del análisis y valoración que determine esta responsable en el recurso de apelación SUP-RAP-124/2013.

Por lo anteriormente señalado, del gasto observado por la autoridad en el marco de la revisión a los Informes Anuales del ejercicio 2012, se determinó un beneficio a las campañas de Senadores por un monto de **\$868,031.77**, mismo que no fue reportado en los Informes de Campaña por lo que se acumula para efectos de la cuantificación del rebase de tope de gastos de campaña, mismo que se identifica en el **Anexo 41 del Dictamen, columna (46)**.

Cifras finales dictaminadas

Por lo tanto, al realizarse la comparación con el tope de gastos de campaña, columna (14) del **Anexo 41**, con el total de gastos acumulados que se reportan en la columna (48) del mismo, se obtiene como resultado el rebase del tope de gastos de campaña de los entonces candidatos a Senadores de la República que se mencionan a continuación:

ENTIDAD	FÓRMULA	CANDIDATO	TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORÍA CON GASTOS NO REPORTADOS SENADORES (A)	TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA (B)	TOTAL DE GASTOS vs. TOPE DE CAMPAÑA (C) = (B) – (A)
Baja California Sur	1	Cota Montaño Leonel Efraín	\$2,406,820.96	\$2,240,747.23	\$166,073.73
Campeche	1	Sansores San Román Layda Elena	\$2,715,994.54	\$2,240,747.23	\$475,247.31

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

ENTIDAD	FÓRMULA	CANDIDATO	TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORÍA CON GASTOS NO REPORTADOS SENADORES (A)	TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA (B)	TOTAL DE GASTOS vs. TOPE DE CAMPAÑA (C) = (B) – (A)
Baja California Sur	1	Cota Montaña Leonel Efraín	\$2,406,820.96	\$2,240,747.23	\$166,073.73
TOTAL					\$641,321.04

Como se puede observar, la otrora coalición excedió el tope de gastos de campaña de 2012 en 2 campañas de entonces candidatos a Senadores de la República, por un monto de **\$641,321.04**

Derivado de las observaciones realizadas por la entonces Unidad de Fiscalización y señaladas en los diferentes apartados del Dictamen, con base a las contestaciones de la otrora coalición Movimiento Progresista, se determina que se rebasó el tope de gastos de campaña establecido por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG433/2011.

En consecuencia, la otrora coalición incumplió con lo establecido en el artículo 229, numeral 1, en relación al 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un excedente de **\$641,321.04. (Conclusión final 277).**

Modificación a la Conclusión Final relacionada con los rebases a topes de gastos de campaña de los candidatos a Senadores de la República, por lo que hace a la otrora coalición Movimiento Progresista.

277. La otrora coalición Movimiento Progresista rebasó el tope de gastos de campaña de 2 campañas a Senadores de la República, por un monto de \$616,857.16, como se detalla a continuación:

ENTIDAD	FÓRMULA	TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORÍA CON GASTOS NO REPORTADOS SENADORES (A)	TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA (B)	TOTAL DE GASTOS vs. TOPE DE CAMPAÑA (C) = (B) – (A)
Baja California Sur	1	\$2,394,589.02	\$2,240,747.23	\$153,841.79
Campeche	1	2,703,762.60	2,240,747.23	463,015.37
TOTAL				\$616,857.16

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En acatamiento al recurso de apelación **SUP-RAP-124/2013** y como consecuencia de la cuantificación de montos involucrados derivados de procedimientos administrativos sancionadores, se modifica el monto ejercido en exceso para quedar en **\$641,321.04**, el cual se integra de la siguiente manera:

ENTIDAD	FÓRMULA	CANDIDATO	TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORÍA CON GASTOS NO REPORTADOS SENADORES (A)	TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA (B)	TOTAL DE GASTOS vs. TOPE DE CAMPAÑA (C) = (B) - (A)
Baja California Sur	1	Cota Montaña Leonel Efraín	2,406,820.96	\$2,240,747.23	\$166,073.73
Campeche	1	Sansores San Román Layda Elena	2,715,994.54	2,240,747.23	\$475,247.31
TOTAL					\$641,321.04

En consecuencia la otrora coalición Movimiento Progresista integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, incumplieron con lo establecido en el artículo 229, numeral 1, en relación al 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el Acuerdo CG433/2011, al rebasar el tope de gastos fijado para las entonces campañas de dos candidatos a Senadores de la República en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012, por un importe total de **\$641,321.04**

G. Modificaciones al Dictamen Consolidado CG190/2013 en lo relativo a la otrora coalición Movimiento Progresista correspondientes a los topes de gasto de las campaña a Diputados Federales (SUP-RAP-124/2013 y SUP-RAP-164/2013; Apartado A, Tema 1, Sección de ejecución).

4.5.3.7 Rebase de Tope de Gastos de Campaña

Diputados Federales

Una vez realizado los procedimientos para la revisión del Informe de Campaña al cargo de Diputados Federales, respecto a sus ingresos y egresos reportados, se realizaron observaciones sobre la documentación que amparaban los informes, notificados a la coalición con oficios de errores y omisiones por parte de la entonces Unidad de Fiscalización.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Derivado de dichas observaciones, en virtud de que afectaban los importes reportados se procedió a realizar el ejercicio de aplicación de gastos no reportados al total de los gastos reportados por la otrora coalición, con base a la información recabada. Dicha operación se detalla en el **Anexo 54 del Dictamen**, que se compone de la siguiente forma.

En la columna (1). *“TOTAL DE GASTOS DIRECTOS REPORTADOS POR LA COALICIÓN EN LAS BALANZAS DE COMPROBACION DE LOS DIPUTADOS FEDERALES”*, se muestra el monto total de los gastos de campaña directos reportados en las 300 balanzas de comprobación de la otrora Coalición, de los entonces candidatos a Diputados Federales presentados en su versión del 31 de mayo de 2013.

Las columnas (2 al 4) *“PRORRATEO SEGÚN AUDITORIA”* corresponde al total de los gastos centralizados y prorrateados según auditoría, en base a la documentación registrada en las balanzas de comprobación denominadas por la otrora coalición como dispersadoras PRD, MC y PT.

La columna (5) *“TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORÍA”*, muestras el total de los gastos centralizados y prorrateados según auditoría, columnas (1 a la 4), constituye el importe total de los gastos según la documentación comprobatoria que la coalición erogó en beneficio de las campañas electorales.

En la columna (6) se señala el tope de gastos de campaña de 2012, el cual fue aprobado en sesión extraordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2011 por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG433/2011 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, correspondiente a las campañas electorales de Diputados y Senadores por el Principio de Mayoría Relativa. En la columna (7) se realiza la primera operación de gastos reportados contra tope de campaña.

Mediante oficios de errores y omisiones emitidos por la entonces Unidad de Fiscalización, se informó a la otrora coalición de los importes que se acumulaban para efectos del tope de campaña al no reportarse en sus registros contables o por diferencias en el registro contable, columnas (8 y 9) *“REVISIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS”*, dichas situaciones se detallan en los apartados de *“Gastos en espectaculares colocados en la vía pública”* y *“Gastos de Propaganda”* del apartado correspondiente a Diputados Federales y las columnas (10 y 11) en *“Gastos de Producción de Radio y T.V”* y *“Otros Gastos Directos de Propaganda”* del apartado correspondiente a Presidente de la República del dictamen.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Por lo tanto, considerando la operación aritmética de las columnas (8 a la 11) del **Anexo 54 del Dictamen**, más el total de los gastos según auditoría, columna (5), dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (12) *“TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORIA Y DERIVADO DE LA REVISIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS.”*

En la columna (13) se indican los saldos de las cuentas por cobrar que reportan las balanzas de comprobación de las campañas de diputados federales, derivado de la aplicación del artículo 35 del Reglamento de Fiscalización.

En cumplimiento al artículo 227 del Reglamento de Fiscalización, el cual establece que la entonces Unidad de Fiscalización realizaría las gestiones necesarias para llevar a cabo monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como anuncios espectaculares colocados en la vía pública, se llevaron a cabo los monitoreos con base en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), por lo que del resultado obtenido de la compulsa de la información monitoreada contra la propaganda electoral registrada por la otrora coalición, no se conciliaron los que se indican en las columnas (14 al 19).

Dichas observaciones se describen en los apartados *“Monitoreo en Espectaculares”* y *“Monitoreo en Medios Impresos”* del Dictamen.

Por lo tanto, considerando la operación aritmética de las columnas (14 a la 19) del **Anexo 54** del Dictamen, más el total de gastos según auditoría columna (12) más la columna (13) dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (20) *“TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORIA CON MONITOREOS NO REPORTADOS”*.

Asimismo, derivado de las confirmaciones realizadas por la autoridad electoral, varios proveedores confirmaron operaciones con los partidos que integran la coalición (Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano) que no estuvieron reportados en el Informe de Campaña del entonces candidato presidencial que beneficiaban en parte a las campañas de Diputados y de las confirmaciones de operaciones de las campañas de Senadores, columna (21).

Dichas observaciones se describen en los apartados *“Circularización con Terceros”* del Dictamen.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para la comprobación de los ingresos y egresos de la otrora coalición Movimiento Progresista durante el periodo de campaña en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en ejercicio de sus facultades la entonces Unidad de Fiscalización realizó visitas de verificación que versaran sobre el manejo de los recursos a domicilios de las casas de campaña de los candidatos a verificar, de los comités directivos distritales, estatales u órganos equivalentes que se localizaran en la circunscripción territorial de los Estados de la República, asimismo, los resultados obtenidos se indicaron en “*Actas de Visitas de Verificación*”.

Al respecto, la Unidad de Fiscalización procedió a verificar los resultados obtenidos contra la información reportada y registrada por la coalición durante la campaña del Proceso Electoral Federal 2011-2012; dando como resultado gastos no reportados que se indican en las columna (22).

Ahora bien, derivado del Convenio de Colaboración para el Apoyo e Intercambio de Información sobre el origen, monto y destino de los recursos de los partidos políticos, celebrado entre el Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales Locales; el Instituto Electoral del Distrito Federal hizo entrega mediante oficio IEDF/UTEF/1778/2012 del 14 de diciembre de 2012 a la entonces Unidad de Fiscalización de información relacionada a un proveedor de anuncios espectaculares que beneficiaba en parte a las campañas de Diputados Federales, la cual no fue reportada por la coalición en los informes correspondientes, columna (23) “*FACTURA A 4701 ISA CORPORATIVO NO REPORTADA*” y la acumulación de gastos derivados de la Queja PUFRPP/271/12, columna (24).

Así mismo, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para la comprobación de los ingresos y egresos de la otrora coalición Movimiento Progresista durante el periodo de campaña en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en ejercicio de sus facultades la entonces Unidad de Fiscalización realizó visitas de verificación que versaron sobre el manejo de los recursos, mismas que se realizaron a los domicilios de las casas de campaña de los candidatos, de los comités directivos distritales, estatales u órganos equivalentes que se localizaran en la circunscripción territorial de los Estados de la República, asimismo, los resultados obtenidos se indicaron en “*Actas de Visitas de Verificación*”.

Al respecto, la entonces Unidad de Fiscalización procedió a verificar los resultados obtenidos contra la información reportada y registrada por la otrora coalición durante la campaña del Proceso Electoral Federal 2011-2012; dando como

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

resultado gastos no reportados que se indican en la columna (25). Dichas observaciones se describen en el apartado “*Visitas de Verificación*” del Dictamen.

En consecuencia los importes de las columnas (21) a (25) que sumadas a la (20), nos da el resultado de la columna (26) “*TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORIA*”, finalmente en la columna (27) se realiza la operación contra el tope de gastos de campaña y el resultado correspondiente.

Por lo tanto, al realizarse la comparación con el tope de gastos de campaña columna (27), del **Anexo 54**, se obtiene como resultado el rebase del tope de gastos de campaña de los siguientes candidatos a Diputados Federales:

ENTIDAD	DISTRITO	TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORÍA CON GASTOS NO REPORTADOS DIPUTADOS (A)	TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA (B)	TOTAL DE GASTOS vs. TOPE DE CAMPAÑA (C) = (B) – (A)
Distrito Federal	16	\$1,122,724.02	\$1,120,373.61	\$2,350.41
Distrito Federal	20	1,836,837.32	1,120,373.61	\$716,463.71
Distrito Federal	26	1,152,420.02	1,120,373.61	\$32,046.41
Durango	4	1,293,313.99	1,120,373.61	\$172,940.38
México	36	1,210,508.73	1,120,373.61	\$90,135.12
Michoacán	10	1,195,450.81	1,120,373.61	\$75,077.20
Nayarit	1	1,402,730.69	1,120,373.61	\$282,357.08
Tabasco	4	1,123,123.83	1,120,373.61	\$2,750.22
Veracruz	10	1,337,449.14	1,120,373.61	\$217,075.53
TOTAL		\$11,674,558.54	\$10,083,362.49	\$1,591,196.05

Como se puede observar, la coalición rebasó el tope de gastos de campaña de 2012 de nueve campañas a Diputados Federales, por un monto de **\$1’591,196.05**.

Derivado de las observaciones realizadas por la entonces Unidad de Fiscalización y señaladas en los diferentes apartados del Dictamen, con base en las contestaciones de la otrora coalición Movimiento Progresista, se determina que se rebasó el tope de gastos de campaña establecido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG433/2011.

En consecuencia, la coalición incumplió con lo establecido en el artículo 229, numeral 1, en relación al 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un excedente de **\$1,591,196.05**.

Resulta importante señalar que el artículo 1, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que las disposiciones contenidas en el mismo ordenamiento legal, son de **orden público y de**

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

observancia general, en razón de que en su contenido se recogen principios e instituciones que contempla el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los derechos y obligaciones político electorales de los ciudadanos; la organización, función y prerrogativas de los partidos políticos y, la función de organizar elecciones para los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, que por su naturaleza resultan de especial interés para el Estado para su protección, por lo que las normas contenidas en ese cuerpo legal no pueden ser alterados por la voluntad de los individuos, al no estar bajo el imperio de la autonomía de voluntad.

Así, debe señalarse que la conducta consistente en exceder los topes de gastos de campaña constituye una infracción al artículo 229, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ello de conformidad con el artículo 342, numeral 1, inciso f) del mismo ordenamiento. Dicha infracción, según lo dispuesto por el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción II del citado código, debe ser sancionada con un tanto igual al del monto ejercido en exceso; pudiéndose aplicar un agravante que aumente la sanción hasta el doble en caso de existir reincidencia

Ello es así porque el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su base segunda que la ley debe fijar los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos, señalando las reglas a las que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales.

Este Consejo General, en ejercicio de la atribución referida, aprobó, en sesión extraordinaria celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil once, el Acuerdo CG433/2011, por medio del cual fijó como tope máximo de gastos de campaña para la elección de Diputados de la República en el Proceso Electoral Federal 2011-2012.

Ahora bien, la autoridad electoral tiene el deber de verificar que los partidos políticos y coaliciones respeten los topes de gastos de campaña, situación que de no tenerse en cuenta implicaría dejar sin contenido normativo una disposición legal que impone una obligación a cargo de los partidos políticos de respetar los topes fijados por la autoridad electoral en cumplimiento de las disposiciones legales que reglamentan lo establecido en la base II del artículo 41 constitucional.

Así, tenemos que el artículo 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece dentro del catálogo de

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

infracciones que pueden ser cometidas por partidos políticos, el exceder los topes de gastos de campaña establecidos; siendo el artículo 354 de dicho ordenamiento, el que establece una regla de aplicación estricta respecto de la imposición de la sanción.

No obsta mencionar que la conducta materia de análisis comprende el accionar de partidos políticos que constituyeron una coalición, por lo que esta autoridad electoral retoma el artículo 98, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece que en el convenio de coalición se debe manifestar que los partidos políticos coaligados, según el tipo de coalición de que se trate –en el caso concreto de una coalición total-, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado, como si se tratara de un solo partido.

Para este efecto, el dieciocho de noviembre de dos mil once, los partidos políticos nacionales de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, suscribieron el *“CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL TOTAL QUE PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SENADORES Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO Y MOVIMIENTO CIUDADANO”*, cuya cláusula **SEXTA**, establece:

“SEXTA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 98, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos coaligados convienen que los candidatos de la coalición electoral total se sujetarán a los topes de gasto de campaña que determine el Consejo General del Instituto Federal Electoral, de acuerdo a la legislación aplicable.”

Así, tenemos que la coalición Movimiento Progresista también tenía la obligación de ceñirse a los límites establecidos para los gastos relativos a las campañas de sus candidatos postulados a cargos de elección popular, de esta manera la autoridad electoral ejerce control sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos erogados en dicha campaña, supervisando que los mismos no rebasen el límite establecido en el Acuerdo CG433/2011.

De todo lo anterior, resulta claro que el bien jurídico protegido con el establecimiento de topes de gastos de campaña es la igualdad en las condiciones en las que participan los partidos políticos en la obtención del voto, la cual es fundamental para lograr la finalidad prevista en la Constitución, consistente en que

la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión se lleve a cabo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.

La *ratio legis* de dichos artículos se traduce en la necesidad de impedir que esa contienda por el poder se realice en condiciones de inequidad entre los protagonistas de la misma; este es otro de los valores que a través de la referida limitación se pretende salvaguardar, ya que un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los partidos políticos, en un sistema en donde la ley protege un principio de relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.

Por lo tanto, por la capacidad económica y por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.

En conclusión, con las acciones tendientes a la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, se ratifica el principio de máxima transparencia y rendición de cuentas en los manejos financieros de los partidos políticos.

Es decir, el rebase de topes de gastos de campaña se encuentra debidamente sustentado y la irregularidad se encuentra acreditada tanto cualitativa como cuantitativamente.

Por lo que hace al elemento cuantitativo, consta en el Dictamen Consolidado que de la revisión a la documentación soporte y comprobatoria presentada por los partidos políticos integrantes de la coalición Movimiento Progresista durante la revisión de los Informes de Campaña respectivos, se desprende que la referida coalición **superó el tope de gastos de campaña fijado por el Consejo General para la elección de Diputados Federales en el año 2012**, en nueve candidaturas.

Con relación al elementos cualitativo, el referido exceso en el gasto de campaña trastoca los principios de equidad y transparencia en la rendición de cuentas respecto de los recursos circulantes en las campañas de los entonces candidatos a Diputados Federales postulados por la coalición en comento, lo que implica una inequidad en la contienda y el consecuente debilitamiento del sistema de partidos.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En consecuencia, al rebasar el tope de gastos de campaña establecido por este Consejo General, la coalición Movimiento Progresista incumplió con lo establecido en el artículo 229, numeral 1, en relación con el 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Modificaciones al tope de gastos de campaña de conformidad con lo establecido en los recursos de apelación SUP-RAP-124/2013 y SUP-RAP-164/2013; así como de la acumulación de gasto ordenado en diversas resoluciones emitidas por la autoridad administrativa nacional electoral.

- El 6 de mayo de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-124/2013, entre otras cuestiones, determinó revocar el Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de los candidatos de los Partidos Políticos y Coaliciones correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012, identificado como CG190/2013, en específico que se cuantificara el costo promedio de la pinta de bardas no reportadas, el cual quedaría en \$403.00.

Por lo anteriormente señalado, al realizar los cálculos de acuerdo a lo ordenado por la ejecutoria de mérito los importes observados en los **Anexo 52 y 53** del Dictamen, referentes a la pinta de bardas de las campañas de Diputados Federales, fueron modificados en el costo promedio de \$403.00, para quedar en **\$80,374.13 y \$706.40** a acumularse a los gastos de campaña, como se describe en el apartado 4.5.3.5 Monitoreo de Anuncios Espectaculares en la Vía Pública, de la campaña a Diputados Federales.

Por lo anteriormente señalado, el gasto no reportado se acumula para efectos del rebase de tope de gastos de campaña de los entonces candidatos a Diputados Federales, mismo que se identifica en el **Anexo 54 del Dictamen, columna (16) se acumularon los gastos de campaña observados.**

Al realizar los cálculos de acuerdo a lo mandatado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la Resolución INE/CG615/2016, los importes observados en los **Anexos 26 y 27 del Dictamen**, referentes a la pinta de bardas de “Genérico Federal” y “Genérico Mixto” que benefician a las campañas de Diputados Federales fueron modificados en el costo promedio de \$403.00, como se describe en el apartado 4.5.1.9. Gastos Centralizados.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Por lo anteriormente señalado, los gastos no reportados se acumulan para efectos del rebase de tope de gastos de campaña de los entonces candidatos a Diputados Federales, mismo que se identifica en el **Anexo 54 del Dictamen, columnas (14) y (15)**, respectivamente.

- En sesión extraordinaria del 26 de septiembre de 2013, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral aprobó la Resolución CG242/2013 respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los Informes Anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales correspondientes al ejercicio 2012, en la cual se determinó sancionar a cada uno de los institutos políticos integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista toda vez que la autoridad advirtió la existencia de gastos que se encontraban vinculados a la campaña electoral del Proceso Electoral Federal 2011-2012, los cuales omitió reportar en los informes correspondientes.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación **SUP-RAP-164/2013** ordenó la reclasificación de los montos observados con la finalidad de que se sumaran al tope de gastos de campaña fijado en el dictamen consolidado correspondiente y se determinara lo que en derecho correspondiera.

Conforme a lo anterior, la resolución CG242/2013 perdió sus efectos por lo que se refiere a la parte antes mencionada, con la finalidad de formar parte integral del análisis y valoración que determine esta responsable en el recurso de apelación **SUP-RAP-124/2013**.

Por lo anteriormente señalado, del gasto observado por la autoridad en el marco de la revisión a los Informes Anuales del ejercicio 2012, se determinó un beneficio a las campañas de Diputados Federales por un monto de **\$1'946,228.32**, mismo que no fue reportado en el Informe de Campaña por lo que se acumula para efectos del rebase de tope de gastos de campaña, mismo que se identifica en el **Anexo 54 del Dictamen, columna (29)**.

Afectaciones derivadas de procedimientos administrativos.

- En sesión ordinaria del 26 de agosto de 2016, el Consejo General de Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución **INE/CG611/2016**, respecto al Procedimiento Oficioso en Materia de Fiscalización de los Recursos de los

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Partidos Políticos Nacionales, instaurado en contra de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista, identificado como P-UFRPP 36/13, en la cual mandato en su punto resolutive SEGUNDO, en relación con el Considerando 4, llevar a cabo el prorrateo respecto del beneficio acreditado por los partidos integrantes de la entonces Coalición “Movimiento Progresista”, y una vez realizado lo anterior proceder a cuantificar los montos resultantes en los topes de gastos de campaña conducentes, por **\$285,974.16**.

Referente al gasto reportado ante la autoridad electoral local en el estado de Veracruz y no a la campaña de Diputados Federales por **\$285,974.16**, se acumulan para efectos del rebase de tope de gastos de campaña de los entonces candidatos a Diputados Federales, mismo que se identifica en el **Anexo 54 del Dictamen, columna (30)**.

Cifras finales dictaminadas.

Derivado de lo anterior, al realizarse la comparación con el tope de gastos de campaña contra la columna (31) del **Anexo 54 del Dictamen**, se obtiene como resultado el rebase al tope de gastos de campaña de los candidatos a Diputados Federales siguientes:

ENTIDAD	DISTRITO	TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORÍA CON GASTOS NO REPORTADOS DIPUTADOS (A)	TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA (B)	TOTAL DE GASTOS vs. TOPE DE CAMPAÑA (C) = (B) – (A)
Distrito Federal	16	1,127,885.65	\$1,120,373.61	-\$7,512.04
Distrito Federal	20	1,839,833.07	1,120,373.61	-\$719,459.46
Distrito Federal	26	1,154,606.02	1,120,373.61	-\$34,232.41
Durango	4	1,298,992.43	1,120,373.61	-\$178,618.82
México	36	1,216,253.49	1,120,373.61	-\$95,879.88
Michoacán	10	1,201,196.84	1,120,373.61	-\$80,823.23
Nayarit	1	1,408,476.72	1,120,373.61	-\$288,103.11
Tabasco	4	1,128,869.86	1,120,373.61	-\$8,496.25
Veracruz	10	1,374,257.88	1,120,373.61	-\$253,884.27
TOTAL		\$11,750,371.96	\$10,083,362.49	-\$1,667,009.47

Como se puede observar, la otrora coalición rebasó el tope de gastos de campaña de 2012 en nueve campañas a Diputados Federales, por un monto de **\$1'667,009.47**.

Derivado de las observaciones realizadas por la autoridad y señaladas en los diferentes apartados del Dictamen con base a las contestaciones de la otrora

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

coalición Movimiento Progresista, se determina que se rebasó el tope de gastos de campaña establecido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG433/2011.

En consecuencia, la coalición incumplió con lo establecido en el artículo 229, numeral 1, en relación al 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un excedente de **\$1'667,009.47. (Conclusión final 378).**

Modificación a la Conclusión Final relacionada con los rebases a topes de gastos de campaña de los candidatos a Diputados Federales, por lo que hace a la otrora coalición Movimiento Progresista.

378. La otrora coalición Movimiento Progresista rebasó el tope de gastos de campaña establecido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG433/2011 para las campañas de 9 candidatos a Diputados Federales, por un excedente de \$1,591,196.05 los distritos en comento se detallan a continuación:

ENTIDAD	DISTRITO	TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORÍA CON GASTOS NO REPORTADOS DIPUTADOS (A)	TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA (B)	TOTAL DE GASTOS vs. TOPE DE CAMPAÑA (C) = (B) – (A)
Distrito Federal	16	\$1,122,724.02	\$1,120,373.61	\$2,350.41
Distrito Federal	20	1,836,837.32	1,120,373.61	\$716,463.71
Distrito Federal	26	1,152,420.02	1,120,373.61	\$32,046.41
Durango	4	1,293,313.99	1,120,373.61	\$172,940.38
México	36	1,210,508.73	1,120,373.61	\$90,135.12
Michoacán	10	1,195,450.81	1,120,373.61	\$75,077.20
Nayarit	1	1,402,730.69	1,120,373.61	\$282,357.08
Tabasco	4	1,123,123.83	1,120,373.61	\$2,750.22
Veracruz	10	1,337,449.14	1,120,373.61	\$217,075.53
TOTAL		\$11,674,558.54	\$10,083,362.49	\$1,591,196.05

En acatamiento a la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación **SUP-RAP-124/2013**, se consideró un costo promedio de la pinta de bardas en \$403.00 por lo que el monto disminuyó; sin embargo, se agrega el importe de las Resoluciones del INE, para quedar en \$1,583,824.57, de la siguiente manera:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

ENTIDAD	DISTRITO	TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORÍA CON GASTOS NO REPORTADOS DIPUTADOS (A)	TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA (B)	TOTAL DE GASTOS vs. TOPE DE CAMPAÑA (C) = (B) – (A)
Distrito Federal	16	1,122,139.62	\$1,120,373.61	-1,766.01
Distrito Federal	20	1,834,087.04	1,120,373.61	-713,713.43
Distrito Federal	26	1,148,859.99	1,120,373.61	-28,486.38
Durango	4	1,293,246.40	1,120,373.61	-172,872.79
México	36	1,210,507.46	1,120,373.61	-90,133.85
Michoacán	10	1,195,450.81	1,120,373.61	-75,077.20
Nayarit	1	1,402,730.69	1,120,373.61	-282,357.08
Tabasco	4	1,123,123.83	1,120,373.61	-2,750.22
Veracruz	10	1,337,041.22	1,120,373.61	-216,667.61
TOTAL		\$11,667,187.06	\$10,083,362.49	1,583,824.57

En acatamiento al recurso de apelación **SUP-RAP-124/2013** y como consecuencia de la cuantificación de montos involucrados derivados de procedimientos administrativos sancionadores, se modifica el monto ejercido en exceso para quedar en **\$1'667,009.47**, el cual se integra de la siguiente manera:

ENTIDAD	DISTRITO	TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORÍA CON GASTOS NO REPORTADOS DIPUTADOS (A)	TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA (B)	TOTAL DE GASTOS vs. TOPE DE CAMPAÑA (C) = (B) – (A)
Distrito Federal	16	1,127,885.65	\$1,120,373.61	-\$7,512.04
Distrito Federal	20	1,839,833.07	1,120,373.61	-\$719,459.46
Distrito Federal	26	1,154,606.02	1,120,373.61	-\$34,232.41
Durango	4	1,298,992.43	1,120,373.61	-\$178,618.82
México	36	1,216,253.49	1,120,373.61	-\$95,879.88
Michoacán	10	1,201,196.84	1,120,373.61	-\$80,823.23
Nayarit	1	1,408,476.72	1,120,373.61	-\$288,103.11
Tabasco	4	1,128,869.86	1,120,373.61	-\$8,496.25
Veracruz	10	1,374,257.88	1,120,373.61	-\$253,884.27
TOTAL		\$11,750,371.96	\$10,083,362.49	-\$1,667,009.47

En consecuencia la otrora coalición Movimiento Progresista integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, incumplieron con lo establecido en el artículo 229, numeral 1, en relación al 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el Acuerdo CG433/2011, al rebasar el tope de gastos fijado para las entonces campañas de nueve candidatos a Diputados Federales en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012, por un importe total de **\$1'667,009.47**

12. Modificaciones a la Resolución CG190/2013 en lo relativo a la otrora coalición Movimiento Progresista, considerando 9.4; en relación al considerando 11 del presente acatamiento.

Por cuestión de método se dividen en apartados los temas relacionados con las modificaciones a la resolución de mérito de la otrora coalición Movimiento Progresista, como a continuación se presenta.

A. Modificaciones a la resolución CG190/2013 en lo relativo a la otrora coalición Movimiento Progresista por lo que hace a la determinación del costo promedio – Aportación de personas desconocidas- en relación al apartado D, considerando 11 del presente acatamiento. (SUP-RAP-124/2013; Apartado A, Tema 2, Sección de ejecución).

Toda vez que se actualizaron disminuciones en los montos involucrados de las **conclusiones 42, 132, 219 y 394** del dictamen consolidado, en atención a las consideraciones establecidas en el **apartado D**, del presente acatamiento, lo procedente es modificar los incisos **g), ac) y aj)**, **considerando 9.4** de la resolución CG190/2013, únicamente por lo que hace a la individualización de las sanción respectiva.

Consecuente con lo precedente en un primer momento se realiza la modificación correspondiente al inciso g), **conclusiones 42 y 132**, las cuales se encuentran agrupadas para su análisis en la resolución materia de modificación, toda vez que se advirtió la existencia de aportaciones no identificadas, vulnerando con ello lo establecido en el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Visto lo anterior, en un segundo momento esta autoridad se avocara a realizar las modificaciones conducentes respecto de las **conclusiones 219 y 394**, estableciéndose en cada una de ellas las situaciones concretas que se presentan.

En este contexto, respecto de las **conclusiones 41 y 42-2** [agrupadas en el inciso g) referido] la primera queda intocada toda vez que no es materia de análisis en el presente acatamiento y la segunda en orden quedó sin efectos de conformidad con lo establecido en el recurso de apelación **SUP-RAP-124/2013**, tema que se aborda en el **apartado A** del acatamiento de mérito.

Visto lo precedente, a continuación se realizan las modificaciones referidas.

g) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Monitoreo de Anuncios Espectaculares colocados en la Vía Pública

Presidente

Conclusiones 42 y 132

Individualización de la sanción

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que vulneran el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método y para facilitar el análisis y sanción de las mismas, se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada caso se presenten.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.

g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades de los Partidos Políticos Nacionales coaligados de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

En relación con las irregularidades identificadas en las conclusiones **42 y 132** del Dictamen Consolidado, se identificó que la otrora Coalición omitió presentar documentación o aclaración respecto a espectaculares con propaganda electoral en beneficio de su entonces candidato a la Presidencia de la República. Dicho de

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

otra manera, la otrora coalición no presentó documentación comprobatoria que amparara el origen de los recursos que fueron aplicados al pago de espectaculares con propaganda electoral aludida, deparándole así un beneficio que se traduce en una aportación de persona no identificada al no tener certeza del origen de dicho recursos.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones de la otrora Coalición, toda vez que omitió rechazar aportaciones de entes desconocidos vulnerando lo dispuesto en el artículo 77, numeral 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: La otrora Coalición omitió rechazar aportaciones de personas no identificadas consistente en la colocación y difusión de anuncios espectaculares, mantas y pinta de bardas, obteniendo un beneficio ilícito, conducta prohibida por la normatividad electoral.

Descripción de la irregularidad observada
42. Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el Instituto Federal Electoral, se localizaron 486 anuncios en pinta de bardas que corresponden al candidato a la Presidencia de la República, que no fueron localizados en la documentación soporte presentada por la coalición, por un monto de \$168,454.00.
132. Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el Instituto Federal Electoral, se localizaron 567 anuncios espectaculares genéricos y 228 anuncios espectaculares mixtos colocados en la vía pública que contienen propaganda electoral en beneficio del candidato a la Presidencia de la República, Senadores y Diputados que no fueron localizados en la documentación soporte presentada por la coalición, por un monto de \$5,595,969.77

Como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de conductas realizadas por la otrora Coalición, por lo que para efectos de su exposición cabe referirnos a lo señalado en la columna (“Descripción de la Irregularidad observada”) del citado cuadro, siendo lo que en ella se expone el modo de llevar a cabo las violaciones al código electoral.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas a la otrora coalición Movimiento Progresista, surgieron en el marco de la revisión de los informes de campaña de ingres o gastos correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012.

Lugar: Las irregularidades se actualizaron en las oficinas de la autoridad electoral, ubicadas en Avenida Acoxpa número 436, Colonia Ex hacienda de Coapa, Tlalpan, C.P. 14300, Ciudad de México.

c) Comisión intencional o culposa de la falta

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica de la otrora coalición Movimiento Progresista para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de vulneración alguna de la otrora Coalición para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas

Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse varias faltas sustantivas no solo se ponen en peligro los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, sino que se presenta un daño directo y efectivo al bien jurídico tutelado por la norma consistente en **acreditar el debido origen de los recursos o aportaciones de personas no permitidas por la ley al no conocer el origen de la aportación**, ya que se imposibilita la rendición de cuentas; esto es, al omitir rechazar el ingreso de recursos de entes no identificados, en desatención a lo dispuesto en el sentido de que esos ingresos deben provenir de fuente permitida por la ley, para evitar que los partidos, como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados.

Bajo esta tesitura, tales conductas traen consigo la falta de certeza en el origen de los recursos, impidiendo garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, la otrora Coalición en cuestión viola los valores antes establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.

En las conclusiones **42** y **132** la otrora Coalición en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra señala:

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 77

(...)

3. Los partidos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, con excepción de las obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o la vía pública.”

(...)”

Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos obligados, al establecer con toda claridad que los partidos políticos y coaliciones no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene como finalidad inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control veraz y detallado de las aportaciones que reciban los sujetos obligados. Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al ente político y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad electoral y evitar que los partidos políticos y las coaliciones, como instrumentos de acceso al poder público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del estado democrático.

Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar, garantiza la equidad de la contienda electoral entre partidos, al evitar que un partido de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a otros partidos o coaliciones. Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el órgano fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica, necesariamente, registrar detalladamente y entregar toda la documentación soporte que sirva a esta autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus operaciones se están sufragando con recursos de procedencia lícitas.

En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los artículos analizados se traduce en una vulneración del principio certeza sobre el origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del

financiamiento de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los ingresos que percibió.

Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese entendido, la prohibición impuesta a los partidos políticos y a las coaliciones de recibir aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador, atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los institutos políticos y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así como la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos contrarios al Estado de derecho.

De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se les atribuye una contribución a favor de los partidos políticos.

En ese entendido, el sujeto obligado se vio beneficiado por **aportaciones de personas no identificadas**, violentando con ello la certeza y transparencia en el origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir financiamiento de carácter privado.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría conocer a cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes prohibidas para el financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una de las finalidades del sistema de rendición de cuentas, que es el que los entes

políticos se encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de aportaciones de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto.

Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad y administración de los partidos políticos y coaliciones, conducen a la determinación de que la fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que reciben por concepto de financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y destino.

De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos privados que hayan recibido los partidos políticos, de determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.

Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que en las aportaciones de origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del ente político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos al que se encuentran sujetos.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de resultado.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En ese entendido, las irregularidades imputables a la otrora Coalición, se traducen en infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico

tutelado, consistente en garantizar la certeza en el origen de los recursos con los que cuenten los partidos políticos para el desarrollo de sus fines.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues la otrora coalición cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO** al vulnerar el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Calificación de la falta

Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

- Que se trata de una falta sustantiva o de fondo, toda vez que la otrora coalición omitió rechazar aportaciones en especie de personas no identificadas.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, esto es, salvaguardar que el origen de los recursos con los que cuenten las coaliciones para el desarrollo de sus fines sea de conformidad con la legislación electoral, es decir, que exista un debido origen de los recursos.
- Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la materia.
- Que la conducta fue singular con la especificidad de que se materializó a través de 2 conductas:
- **Conclusión 42**, que el monto involucrado que asciende a un importe de **\$168,454.00** (ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)
- **Conclusión 132**, que el monto involucrado que asciende a un importe de **\$5'595,969.77** (cinco millones quinientos noventa y cinco mil novecientos sesenta y nueve pesos 77/100 M.N.)

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta cometida.

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por la otrora Coalición Movimiento Progresista se califica como **GRAVE ORDINARIA**.

Lo anterior es así, en razón que, con la comisión de la falta sustantiva o de fondo se acreditó la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, toda vez que la otrora coalición omitió rechazar varias aportaciones provenientes de personas no identificadas.

En tales condiciones, para determinar la sanción y su graduación se debe partir no sólo del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino en concurrencia con el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual se realizó a través de la valoración de la irregularidad detectada.

En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades realizadas por la otrora Coalición y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

Debe considerarse que el hecho de que la otrora coalición tolere o reciba ingresos de entes no identificados impidió que la autoridad electoral tuviera certeza respecto de que el origen de los recursos sea conforme a la normatividad electoral. Por lo tanto, no debe perderse de vista que las conductas descritas, vulneran directamente los principios de certeza, equidad e imparcialidad en la rendición de cuentas.

En este tenor, las conductas realizadas por la otrora coalición Movimiento Progresista son sustantivas y el resultado lesivo es significativo, toda vez que no presentó la documentación soporte que acreditara el origen de los anuncios espectaculares monitoreados; por lo que no identificó a los aportantes.

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades que nos ocupan, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que la otrora coalición Movimiento Progresista no es reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

Ahora bien, toda vez que se han analizado las conductas observadas en las conclusiones **42** y **132** las cuales vulneran la prohibición establecida en el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados, por cuestión de método y para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la imposición de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada caso se presenten.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante **SUP-RAP-454/2012** que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

En esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos integrantes de la Coalición cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se les impone; así, mediante el Acuerdo **INE/CG623/2016** emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, se asignó como financiamiento público

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2017, los montos siguientes:

Partido	Monto económico para actividades ordinarias
Partido de la Revolución Democrática	\$455,159,108.00
Partido del Trabajo	\$217,254,999.00
Movimiento Ciudadano	\$313,331,759.00

Lo anterior, aunado al hecho de que los partidos políticos integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista se encuentran legal y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos coaligados infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al **Partido de la Revolución Democrática** por este Consejo General; así como, los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones.

Número	Resolución de la Autoridad Electoral	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de septiembre de 2017	Montos por saldar
1.	INE/CG771/2015	\$3,273,599.91	\$1,684,654.31	\$1,588,945.60
2.	INE/CG810/2016	\$63,016,065.36	\$42,768,867.76	\$20,247,197.60

Del cuadro anterior se advierte que al mes de septiembre de dos mil diecisiete, el partido en cita tiene un saldo pendiente de **\$21'836,143.20** (veintiún millones ochocientos treinta y seis mil ciento cuarenta y tres pesos 20/100 M.N.).

De igual forma obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al **Partido del Trabajo**

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

por este Consejo General; así como, los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones.

Número	Resolución de la Autoridad Electoral	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de septiembre de 2017	Montos por saldar
1.	INE/CG771/2015	\$9,129,077.75	\$6,105,112.10	\$3,023,965.65

Del cuadro anterior se advierte que al mes de septiembre de dos mil diecisiete, el partido en cita tiene un saldo pendiente de **\$3'023,965.65** (tres millones veintitrés mil novecientos sesenta y cinco pesos 65/100 M.N.).

Por lo que hace al partido **Movimiento Ciudadano**, se advierte el registro de sanciones que han sido impuestas por este Consejo, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones.

Número	Resolución de la Autoridad Electoral	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de septiembre de 2017	Montos por saldar
1.	INE/CG771/2015	\$2,117,315.37	\$1,652,090.94	\$465,224.43
2.	INE/CG244/2016	\$2,875,000.00	\$1,582,615.84	\$1,292,384.16

Del cuadro anterior se advierte que al mes de septiembre de dos mil diecisiete, el partido en cita tiene un saldo pendiente de **\$1'757,608.59** (un millón setecientos cincuenta y siete mil seiscientos ocho pesos 59/100 M.N.).

De lo anterior se desprende que, aun cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica; por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la Resolución de mérito.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la otrora coalición Movimiento Progresista se integró con miras a lograr un propósito común para contender en el Proceso Electoral Federal de 2011-2012 debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los partidos políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición previeron el monto de recursos que cada uno aportaría al mismo.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En esta tesitura, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil once, aprobó mediante acuerdo **CG391/2011** la conformación de la coalición total denominada Movimiento Progresista integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, para postular candidatos a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores de la República y Diputados Federales por el Principio de Mayoría Relativa -Cláusula Segunda-; así también, en dicho convenio se fijó el porcentaje de participación de los partidos integrantes de la Coalición -cláusula séptima-, la cual se transcribe a continuación:

“(…)

SÉPTIMA.- Que de conformidad con lo que establece en el artículo 98, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos coaligados convienen en aportar en efectivo la totalidad de los recursos que reciban por concepto de gastos de campaña, de conformidad con lo siguiente:

“(…)”

En este sentido los recursos aportados en efectivo para la campaña correspondieron al 100% (cien por ciento) de cada uno de los partidos político integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista, resultando lo siguiente:

Partido	Financiamiento campaña PEF 2011-2012	Financiamiento campaña 50% Presidencial	Porcentaje (%)
PRD	225,745,363.72	112,872,681.86	50
PT	118,098,139.85	59,049,069.92	26
MC	103,060,128.93	51,530,064.46	24
Total	446,903,632.50	223,451,816.24	100

En consecuencia, el criterio de distribución de las sanciones pecuniarias impuestas a los partidos integrantes de la otrora coalición multicitada será el siguiente:

Partido de la Revolución Democrática	50%
Partido del Trabajo	26%
Movimiento Ciudadano	24%

Es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una Coalición deben ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, ‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Ahora bien, para fijar la sanción se debe tomar en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, tal y como se establece en el artículo 43, numeral 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 354, numeral 1, inciso a) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las

sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos nacionales, así como a los principios constitucionales que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada falta analizada.

Conclusión 42

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, entonces integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a la otrora coalición en comento, consistió en omitir rechazar una aportación consistente en anuncios espectaculares provenientes de entes no identificados contraviniendo expresamente lo establecido en el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, que la comisión de la falta, derivó de la revisión a los Informes de Campaña presentados por la otrora coalición Movimiento Progresista en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- Que los partidos integrantes de la otrora coalición conocían los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como el contenido del oficio de errores y omisiones emitido por la autoridad fiscalizadora durante la revisión de los informes de campaña correspondientes al proceso electoral en comento.
- Que la otrora Coalición no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$168,454.00** (ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por la otrora Coalición.

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

Así, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de Derecho.

Esto es, la intervención estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.

Por ello, la consecuencia del ilícito debe tomar en cuenta la necesidad de cumplir con una función equivalente a la restitución o reparación del beneficio obtenido, así como los que derivaron de su comisión, con la finalidad de que no se mantengan como parte del patrimonio del autor del ilícito, para que no se vea beneficiado de alguna forma por su comisión.

Incluso, considerar lo contrario, derivaría en un fraude a la ley, al permitir que una conducta ilícita sirviera como medio para que el que la cometa pueda obtener un

beneficio, no obstante que fuera sancionado por la autoridad competente, conforme a las leyes aplicables al caso.

Por lo que, tomando en consideración las particularidades previamente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una **amonestación pública** sería poco idónea para disuadir la conducta infractora como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una **reducción de la ministración mensual** del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como ente político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia del procedimiento de mérito.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidad de Medida y Actualización) es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad,

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es clasificable como **grave ordinaria**, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de **omitir rechazar una aportación proveniente de una persona no identificada** y las normas infringidas, la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o inhíba el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse a los partidos políticos integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al **200%** (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$336,908.00** (trescientos treinta y seis mil novecientos ocho pesos 00/100 M.N.)

Cabe señalar que la actualización de la sanción a imponer (**Unidad de Medida y Actualización**) se realiza de conformidad con lo establecido en el considerando 3 del presente acuerdo.

En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al **50%** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 2230 (dos mil doscientos treinta) Unidades de Medida y Actualización, vigente en el ejercicio 2017, misma que asciende a la cantidad de **\$168,342.70** (ciento sesenta y ocho mil trescientos cuarenta y dos pesos 70/100 M.N.).

Por otra parte, este Consejo General impone al **Partido del Trabajo** en lo individual el **26%** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a **1,160** (mil ciento

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

sesenta) Unidades de Medida y Actualización, vigente en el ejercicio 2017, misma que asciende a la cantidad de **\$87,568.40** (ochenta y siete mil quinientos sesenta y ocho 40/100 M.N.).

Finalmente este Consejo General impone a **Movimiento Ciudadano** en lo individual el **24%** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a **1,070** (mil setenta) Unidades de Medida y Actualización, vigente en el ejercicio 2017, misma que asciende a la cantidad de **\$80,774.30** (ochenta mil setecientos setenta y cuatro pesos 30/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 132

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, entonces integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a la otrora coalición en comento, consistió en omitir rechazar una aportación consistente en anuncios espectaculares provenientes de entes no identificados contraviniendo expresamente lo establecido en el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, que la comisión de la falta, derivó de la revisión a los Informes de Campaña presentados por la otrora coalición Movimiento Progresista en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- Que los partidos integrantes de la otrora coalición conocían los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como el contenido del oficio de errores y omisiones emitido por la autoridad fiscalizadora durante la revisión de los informes de campaña correspondientes al proceso electoral en comento.
- Que la otrora Coalición no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$5'595,969.77** (cinco millones quinientos noventa y cinco mil novecientos sesenta y nueve pesos 77/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por la otrora Coalición.

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

Así, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de Derecho.

Esto es, la intervención estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.

Por ello, la consecuencia del ilícito debe tomar en cuenta la necesidad de cumplir con una función equivalente a la restitución o reparación del beneficio obtenido, así como los que derivaron de su comisión, con la finalidad de que no se mantengan como parte del patrimonio del autor del ilícito, para que no se vea beneficiado de alguna forma por su comisión.

Incluso, considerar lo contrario, derivaría en un fraude a la ley, al permitir que una conducta ilícita sirviera como medio para que el que la cometa pueda obtener un

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

beneficio, no obstante que fuera sancionado por la autoridad competente, conforme a las leyes aplicables al caso.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia del presente procedimiento.

Asimismo, la sanción contenida en la fracción V consistente en la cancelación del registro como partido político se estima aplicable cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el ente político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es clasificable como **grave ordinaria**, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de **omitir rechazar una aportación proveniente de una persona no identificada** y las normas infringidas, la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o inhiba el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse a los partidos políticos integrantes de la otrora coalición en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al **200%** (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$11'191,939.54** (once millones ciento noventa y un mil novecientos treinta y nueve pesos 54/100 M.N.)

En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al **50%** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la consistente en una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$5'595,969.77** (cinco millones quinientos noventa y cinco mil novecientos sesenta y nueve pesos 77/100 M.N.).

Por otra parte, este Consejo General impone al **Partido del Trabajo**, en lo individual lo correspondiente al **26%** del monto total de la sanción, por lo que la

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

sanción que se impone a dicho instituto político es la consistente en una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$2'909,904.28** (dos millones novecientos nueve mil novecientos cuatro pesos 28/100 M.N).

Finalmente, este Consejo General impone a **Movimiento Ciudadano** en lo individual lo correspondiente al **24%** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la consistente en una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$2'686,065.49** (dos millones seiscientos ochenta y seis mil sesenta y cinco pesos 49/100 M.N).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 219

Por lo que hace a la conclusión 219, la misma se modifica en la parte conducente de la resolución **CG190/2013, considerando 9.4, inciso ac)**, por lo que hace a la individualización de la sanción al modificarse el monto involucrado.

Sin embargo, es trascendente señalar que en el inciso **ac)** se agruparon adicionalmente las conclusiones 201, 203, 218, 257, 259, 274 las cuales no se encuentran vinculadas a la actualización del costo promedio y no fueron materia de modificación en el recurso de apelación SUP-RAP-124/2013, consecuentemente quedan intocadas.

Visto lo anterior a continuación se presenta la individualización de la sanción de la conclusión en cita, en atención a la modificación del monto involucrado.

ac) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, adicionalmente se estableció las siguientes conclusión sancionatoria, infractora del artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Monitoreo de Anuncios Espectaculares colocados en la Vía Pública

Senadores

Conclusión 219.

Individualización de la sanción

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera directamente lo establecido en el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se procede a la individualización de la sanción, atendiendo a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades de los Partidos Políticos Nacionales coaligados de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la conclusión **219** del Dictamen Consolidado, se identificó que la otrora Coalición omitió presentar documentación o aclaración respecto de muros y bardas con propaganda electoral en beneficio de su entonces candidato a la Presidencia de la República. Dicho de otra manera, la otrora coalición no presentó documentación comprobatoria que amparara el origen de los recursos que fueron aplicados al pago de la propaganda electoral aludida, deparándole así un beneficio que se traduce en una aportación de persona no identificada al no tener certeza del origen de dicho recursos.

En el caso a estudio, se actualiza una falta toda vez la otrora coalición omitió rechazar aportaciones de entes desconocidos vulnerando lo dispuesto en el

artículo 77, numeral 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: La otrora Coalición omitió rechazar aportaciones de personas no identificadas consistente en la colocación y difusión muros y bardas, obteniendo un beneficio ilícito, conducta prohibida por la normatividad electoral.

Descripción de la irregularidad observada
219. Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el Instituto Federal Electoral, se localizaron 158 anuncios en pinta de bardas que corresponden a candidatos a Senadores de la República, que no fueron localizados en la documentación soporte presentada por la coalición, por un monto de \$63,674.00

Tiempo: La irregularidad atribuida a la otrora coalición Movimiento Progresista, surgió en el marco de la revisión de los informes de campaña de ingresos o gastos correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la autoridad electoral, ubicadas en Avenida Acoxpa número 436, Colonia Ex hacienda de Coapa, Tlalpan, C.P. 14300, Ciudad de México.

c) Comisión intencional o culposa de la falta

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica de la otrora coalición Movimiento Progresista para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de vulneración alguna de la otrora Coalición para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas

Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse varias faltas sustantivas no solo se ponen en peligro los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, sino que se presenta un daño directo y efectivo al bien jurídico tutelado por la norma consistente en el **acreditar del debido origen de los recursos o aportaciones de personas no permitidas por la ley al no conocer el origen de la**

aportación, ya que se imposibilita la rendición de cuentas; esto es, al omitir rechazar el ingreso de recursos de entes no identificados, en desatención a lo dispuesto en el sentido de que esos ingresos deben provenir de fuente permitida por la ley, para evitar que los partidos, como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados.

Bajo esta tesitura, tal conducta trae consigo falta de certeza en el origen de los recursos, impidiendo garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, en consecuencia se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, la otrora Coalición en cuestión vulnera los valores señalados, afectando la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.

Así en la conclusión **219** la otrora Coalición en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra señala:

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 77

(...)

3. Los partidos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, con excepción de las obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o la vía pública.”

(...)”

Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos obligados, al establecer con toda claridad que los partidos políticos y coaliciones no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene como finalidad inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control veraz y detallado de las aportaciones que reciban los sujetos obligados. Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al ente político y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad electoral y evitar que los partidos políticos y las coaliciones, como instrumentos de acceso al poder público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del estado democrático.

Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar, garantiza la equidad de la contienda electoral entre partidos, al evitar que un partido de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a otros partidos o coaliciones. Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el órgano fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica, necesariamente, registrar detalladamente y entregar toda la documentación soporte que sirva a esta autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus operaciones se están sufragando con recursos de procedencia lícitas.

En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los artículos analizados se traduce en una vulneración del principio certeza sobre el origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del financiamiento de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los ingresos que percibió.

Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese entendido, la prohibición impuesta a los partidos políticos y a las coaliciones de recibir aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador, atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los institutos políticos y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así como la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos contrarios al Estado de derecho.

De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la

documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se les atribuye una contribución a favor de los partidos políticos.

En ese entendido, el sujeto obligado se vio beneficiado por **aportaciones de personas no identificadas**, violentando con ello la certeza y transparencia en el origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir financiamiento de carácter privado.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría conocer a cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes prohibidas para el financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una de las finalidades del sistema de rendición de cuentas, que es el que los entes políticos se encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de aportaciones de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto.

Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad y administración de los partidos políticos y coaliciones, conducen a la determinación de que la fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que reciben por concepto de financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y destino.

De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos privados que hayan recibido los partidos políticos, de determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.

Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que en las aportaciones de origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del

ente político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos al que se encuentran sujetos.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de resultado.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la

hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En ese entendido, la irregularidad imputable a la otrora Coalición, se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, consistente en garantizar la certeza en el origen de los recursos con los que cuenten los partidos políticos para el desarrollo de sus fines.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues la otrora coalición cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO** al vulnerar el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Calificación de la falta

Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

- Se trata de una falta sustantiva o de fondo, toda vez que la otrora coalición omitió rechazar aportaciones en especie de personas no identificadas.
- Con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, esto es, salvaguardar que el origen de los recursos con los que cuenten las coaliciones para el desarrollo de sus fines sea de

conformidad con la legislación electoral, es decir, que exista un debido origen de los recursos.

- Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la materia.
- Que la conducta fue singular.
- Que el monto involucrado asciende a un importe de **\$63,674.00** (sesenta y tres mil seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta cometida.

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por la otrora Coalición Movimiento Progresista se califica como **GRAVE ORDINARIA**.

Lo anterior es así, en razón que, con la comisión de la falta sustantiva o de fondo se acreditó la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, toda vez que la otrora coalición omitió rechazar aportaciones provenientes de personas no identificadas.

En tales condiciones, para determinar la sanción y su graduación se debe partir no sólo del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino en concurrencia con el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual se realizó a través de la valoración de la irregularidad detectada.

En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades realizadas por la otrora Coalición y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

Debe considerarse que el hecho de que la otrora coalición tolere o reciba ingresos de entes no identificados impidió que la autoridad electoral tuviera certeza respecto de que el origen de los recursos sea conforme a la normatividad electoral. Por lo tanto, no debe perderse de vista que las conductas descritas, vulneran directamente los principios de certeza, equidad e imparcialidad en la rendición de cuentas.

En este tenor, la conducta realizada por la otrora coalición Movimiento Progresista es sustantivas y el resultado lesivo es significativo, toda vez que no presentó la documentación soporte que acreditara el origen de la pinta de muros (bardas) monitoreados; por lo que no se identificó a los aportantes.

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades que nos ocupan, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que la otrora coalición Movimiento Progresista no es reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

En esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos integrantes de la Coalición cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se les impone; así, mediante el Acuerdo **CG623/2016** emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, se asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2017, los montos siguientes:

Partido	Monto económico para actividades ordinarias
Partido de la Revolución Democrática	\$455,159,108.00
Partido del Trabajo	\$217,254,999.00
Movimiento Ciudadano	\$313,331,759.00

Lo anterior, aunado al hecho de que los partidos políticos integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista se encuentran legal y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos coaligados infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al **Partido de la Revolución Democrática** por este Consejo General; así como, los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Número	Resolución de la Autoridad Electoral	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de septiembre de 2017	Montos por saldar
1.	INE/CG771/2015	\$3,273,599.91	\$1,684,654.31	\$1,588,945.60
2.	INE/CG810/2016	\$63,016,065.36	\$42,768,867.76	\$20,247,197.60

Del cuadro anterior se advierte que al mes de septiembre de dos mil diecisiete, el partido en cita tiene un saldo pendiente de **\$21'836,143.20** (veintiún millones ochocientos treinta y seis mil ciento cuarenta y tres pesos 20/100 M.N.).

De igual forma obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al **Partido del Trabajo** por este Consejo General; así como, los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones.

Número	Resolución de la Autoridad Electoral	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de septiembre de 2017	Montos por saldar
1.	INE/CG771/2015	\$9,129,077.75	\$6,105,112.10	\$3,023,965.65

Del cuadro anterior se advierte que al mes de septiembre de dos mil diecisiete, el partido en cita tiene un saldo pendiente de **\$3'023,965.65** (tres millones veintitrés mil novecientos sesenta y cinco pesos 65/100 M.N.).

Por lo que hace al partido **Movimiento Ciudadano**, se advierte el registro de sanciones que han sido impuestas por este Consejo, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones.

Número	Resolución de la Autoridad Electoral	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de septiembre de 2017	Montos por saldar
1.	INE/CG771/2015	\$2,117,315.37	\$1,652,090.94	\$465,224.43
2.	INE/CG244/2016	\$2,875,000.00	\$1,582,615.84	\$1,292,384.16

Del cuadro anterior se advierte que al mes de septiembre de dos mil diecisiete, el partido en cita tiene un saldo pendiente de **\$1'757,608.59** (un millón setecientos cincuenta y siete mil seiscientos ocho pesos 59/100 M.N.).

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

De lo anterior se desprende que, aun cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica; por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la Resolución de mérito.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la otrora coalición Movimiento Progresista se integró con miras a lograr un propósito común para contender en el Proceso Electoral Federal de 2011-2012 debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los partidos políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición previeron el monto de recursos que cada uno aportaría al mismo.

En esta tesitura, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil once, aprobó mediante acuerdo **CG391/2011** la conformación de la coalición total denominada Movimiento Progresista integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, para postular candidatos a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores de la República y Diputados Federales por el Principio de Mayoría Relativa -Cláusula Segunda-; así también, en dicho convenio se fijó el porcentaje de participación de los partidos integrantes de la Coalición -cláusula séptima-, la cual se transcribe a continuación:

“(…)
SÉPTIMA.- Que de conformidad con lo que establece en el artículo 98, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos coaligados convienen en aportar en efectivo la totalidad de los recursos que reciban por concepto de gastos de campaña, de conformidad con lo siguiente:
“(…)”

En este sentido los recursos aportados en efectivo para la campaña correspondieron al 100% (cien por ciento) de cada uno de los partidos político integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista, resultando lo siguiente:

Partido	Financiamiento campaña PEF 2011-2012	Financiamiento campaña 50% Presidencial	Porcentaje (%)
PRD	225,745,363.72	112,872,681.86	50%
PT	118,098,139.85	59,049,069.92	26%
MC	103,060,128.93	51,530,064.46	24%
Total	446,903,632.50	223,451,816.24	100

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En consecuencia, el criterio de distribución de las sanciones pecuniarias impuestas a los partidos integrantes de la otrora coalición multicitada será el siguiente:

Partido de la Revolución Democrática	50%
Partido del Trabajo	26%
Movimiento Ciudadano	24%

Es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una Coalición deben ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, **‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’**.

Ahora bien, para fijar la sanción se debe tomar en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, tal y como se establece en el artículo 43, numeral 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 354, numeral 1, inciso a) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos nacionales, así como a los principios constitucionales que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada falta analizada.

Conclusión 219

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, entonces integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- Por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a la otrora coalición en comento, consistió en omitir rechazar una aportación consistente en pinta de muros (bardas) provenientes de entes no identificados contraviniendo expresamente lo establecido en el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, que la comisión de la falta, derivó de la revisión a los Informes de Campaña presentados por la otrora coalición Movimiento Progresista en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012.
- Que los partidos integrantes de la otrora coalición conocían los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como el contenido del oficio de errores y omisiones emitido por la autoridad fiscalizadora durante la revisión de los informes de campaña correspondientes al proceso electoral en comento.
- Que la otrora Coalición no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$63,674.00** (sesenta y tres mil seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por la otrora Coalición.

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

Así, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de Derecho.

Esto es, la intervención estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso,

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.

Por ello, la consecuencia del ilícito debe tomar en cuenta la necesidad de cumplir con una función equivalente a la restitución o reparación del beneficio obtenido, así como los que derivaron de su comisión, con la finalidad de que no se mantengan como parte del patrimonio del autor del ilícito, para que no se vea beneficiado de alguna forma por su comisión.

Incluso, considerar lo contrario, derivaría en un fraude a la ley, al permitir que una conducta ilícita sirviera como medio para que el que la cometa pueda obtener un beneficio, no obstante que fuera sancionado por la autoridad competente, conforme a las leyes aplicables al caso.

Así pues, tomando en consideración las particularidades previamente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como partido político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia del presente procedimiento.

Bajo esta tesitura la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (Ahora Unidad de Medida y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es clasificable como **grave ordinaria**, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de **omitir rechazar una aportación proveniente de una persona no identificada** y las normas infringidas, la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o inhiba el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse a los partidos políticos integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al **200%** (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$127,348.00** (ciento veintisiete mil trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Cabe señalar que la actualización de la sanción a imponer (Unidad de Medida y Actualización) se realiza de conformidad con lo establecido en el considerando 3 del presente acuerdo.

En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al **50%** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a **843** (ochocientos cuarenta y tres) **Unidades de Medida y Actualización**, vigente en el ejercicio 2017, misma que asciende a la cantidad de **\$63,638.07** (sesenta y tres mil seiscientos treinta y ocho pesos 07/100 M.N.).

Por otra parte, este Consejo General impone al **Partido del Trabajo** en lo individual el **26%** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a **438** (cuatrocientos cuarenta y cinco) **Unidades de Medida y Actualización**, vigente en el ejercicio 2017, misma que asciende a la cantidad de **\$33,064.62** (treinta y tres mil sesenta y cuatro pesos 62/100 M.N.).

Finalmente este Consejo General impone a **Movimiento Ciudadano** en lo individual el **24%** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a **404** (trescientos ochenta y nueve) **Unidades de Medida y Actualización**, vigente en el ejercicio 2017, misma que asciende a la cantidad de **\$30,497.96** (treinta mil cuatrocientos noventa y siete pesos 96/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 394

Diputados Federales

Por lo que hace a la conclusión **394**, la misma se modifica en la parte conducente de la resolución **CG190/2013, considerando 9.4, inciso aj)**, por lo que hace a la individualización de la sanción al modificarse el monto involucrado.

Sin embargo, es trascendente señalar que en el inciso aj) se agrupó adicionalmente la conclusión 398 la cual no se encuentra vinculada a la actualización del costo promedio y no fueron materia de modificación en el recurso de apelación **SUP-RAP-124/2013**, consecuentemente queda intocada.

Visto lo anterior a continuación se presenta la individualización de la sanción de la conclusión en cita, en atención a la modificación del monto involucrado.

aj) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, adicionalmente se estableció las siguientes conclusión sancionatoria, infractora del artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Monitoreo de Espectaculares

Diputados Federales

Conclusión 394

Individualización de la sanción

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera directamente lo establecido en el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se procede a la individualización de la sanción, atendiendo a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.

- d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades de los Partidos Políticos Nacionales coaligados de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe

hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la conclusión **394** del Dictamen Consolidado, se identificó que la otrora Coalición omitió presentar documentación o aclaración respecto de la colocación de anuncios espectaculares, muros y propaganda utilitaria con propaganda electoral en beneficio de su entonces candidato a la Presidencia de la República. Dicho de otra manera, la otrora coalición no presentó documentación comprobatoria que amparara el origen de los recursos que fueron aplicados al pago de la propaganda electoral aludida, deparándole así un beneficio que se traduce en una aportación de persona no identificada al no tener certeza del origen de dicho recursos.

En el caso a estudio, se actualiza una falta toda vez la otrora coalición omitió rechazar aportaciones de entes desconocidos vulnerando lo dispuesto en el artículo 77, numeral 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: La otrora Coalición omitió rechazar aportaciones de personas no identificadas consistente en la colocación y difusión muros y bardas, obteniendo un beneficio ilícito, conducta prohibida por la normatividad electoral.

Descripción de la irregularidad observada
394. Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el Instituto Federal Electoral, se localizaron 132, anuncios espectaculares, 176 muros y 6 propaganda utilitaria que contienen propaganda electoral en beneficio del candidato a la Presidencia de la República y Diputados que no fueron localizados en la documentación soporte presentada por la coalición, por un monto de \$1'334,960.63".

Tiempo: La irregularidad atribuida a la otrora coalición Movimiento Progresista, surgió en el marco de la revisión de los informes de campaña de ingresos o gastos correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la autoridad electoral, ubicadas en Avenida Acoxpa número 436, Colonia Exhacienda de Coapa, Tlalpan, C.P. 14300, Ciudad de México.

c) Comisión intencional o culposa de la falta

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica de la otrora coalición Movimiento Progresista para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de vulneración alguna de la otrora Coalición para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas

Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse varias faltas sustantivas no solo se ponen en peligro los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, sino que se presenta un daño directo y efectivo al bien jurídico tutelado por la norma consistente en el **acreditar del debido origen de los recursos o aportaciones de personas no permitidas por la ley al no conocer el origen de la aportación**, ya que se imposibilita la rendición de cuentas; esto es, al omitir rechazar el ingreso de recursos de entes no identificados, en desatención a lo dispuesto en el sentido de que esos ingresos deben provenir de fuente permitida por la ley, para evitar que los partidos, como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados.

Bajo esta tesitura, tal conducta trae consigo falta de certeza en el origen de los recursos, impidiendo garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, en consecuencia se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, la otrora Coalición en cuestión vulnera los valores señalados, afectando la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.

Así en la conclusión **394** la otrora Coalición en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra señala:

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

*“Artículo 77
(...)”*

*3. Los partidos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, con excepción de las obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o la vía pública.”
(...)”*

Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos obligados, al establecer con toda claridad que los partidos políticos y coaliciones no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene como finalidad inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control veraz y detallado de las aportaciones que reciban los sujetos obligados. Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al ente político y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad electoral y evitar que los partidos políticos y las coaliciones, como instrumentos de acceso al poder público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del estado democrático.

Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar, garantiza la equidad de la contienda electoral entre partidos, al evitar que un partido de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a otros partidos o coaliciones. Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el órgano fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica, necesariamente, registrar detalladamente y entregar toda la documentación soporte que sirva a esta autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus operaciones se están sufragando con recursos de procedencia lícitas.

En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los artículos analizados se traduce en una vulneración del principio certeza sobre el origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del financiamiento de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los ingresos que percibió.

Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese entendido, la prohibición impuesta a los partidos políticos y a las coaliciones de recibir aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador, atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los institutos políticos y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así como la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos contrarios al Estado de derecho.

De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se les atribuye una contribución a favor de los partidos políticos.

En ese entendido, el sujeto obligado se vio beneficiado por **aportaciones de personas no identificadas**, violentando con ello la certeza y transparencia en el origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir financiamiento de carácter privado.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría conocer a cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes prohibidas para el financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una de las finalidades del sistema de rendición de cuentas, que es el que los entes políticos se encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de aportaciones de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto.

Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad y administración de los partidos políticos y coaliciones, conducen a la determinación de que la fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que reciben por concepto de financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y destino.

De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos privados que hayan recibido los partidos políticos, de determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.

Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que en las aportaciones de origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del ente político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos al que se encuentran sujetos.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de resultado.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En ese entendido, la irregularidad imputable a la otrora Coalición, se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, consistente en garantizar la certeza en el origen de los recursos con los que cuenten los partidos políticos para el desarrollo de sus fines.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues la otrora coalición cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO** al vulnerar el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Calificación de la falta

Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

- Se trata de una falta sustantiva o de fondo, toda vez que la otrora coalición omitió rechazar aportaciones en especie de personas no identificada.
- Con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, esto es, salvaguardar que el origen de los recursos con los que cuenten las coaliciones para el desarrollo de sus fines sea de conformidad con la legislación electoral, es decir, que exista un debido origen de los recursos.
- Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la materia.
- Que la conducta fue singular.
- Que el monto involucrado asciende a un importe de **\$1'334,960.63** (un millón trescientos treinta y cuatro mil novecientos sesenta pesos 63/100 M.N.)

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta cometida.

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por la otrora Coalición Movimiento Progresista se califica como **GRAVE ORDINARIA**.

Lo anterior es así, en razón que, con la comisión de la falta sustantiva o de fondo se acreditó la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, toda vez que la otrora coalición omitió rechazar aportaciones provenientes de personas no identificadas.

En tales condiciones, para determinar la sanción y su graduación se debe partir no sólo del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino en concurrencia con el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual se realizó a través de la valoración de la irregularidad detectada.

En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades realizadas por la otrora Coalición y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

Debe considerarse que el hecho de que la otrora coalición tolere o reciba ingresos de entes no identificados impidió que la autoridad electoral tuviera certeza respecto de que el origen de los recursos sea conforme a la normatividad electoral. Por lo tanto, no debe perderse de vista que las conductas descritas, vulneran directamente los principios de certeza, equidad e imparcialidad en la rendición de cuentas.

En este tenor, la conducta realizada por la otrora coalición Movimiento Progresista es sustantivas y el resultado lesivo es significativo, toda vez que no presentó la documentación soporte que acreditara el origen de la colocación de anuncios espectaculares, pinta de muros (bardas) y propaganda utilitaria monitoreada; por lo que no se identificó a los aportantes.

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades que nos ocupan, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que la otrora coalición Movimiento Progresista no es reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

En esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos integrantes de la Coalición cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se les impone; así, mediante el Acuerdo **CG623/2016** emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, se asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2017, los montos siguientes:

Partido	Monto económico para actividades ordinarias
Partido de la Revolución Democrática	\$455,159,108.00
Partido del Trabajo	\$217,254,999.00
Movimiento Ciudadano	\$313,331,759.00

Lo anterior, aunado al hecho de que los partidos políticos integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista se encuentran legal y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos coaligados infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al **Partido de la Revolución Democrática** por este Consejo General; así como, los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones.

Número	Resolución de la Autoridad Electoral	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de septiembre de 2017	Montos por saldar
1.	INE/CG771/2015	\$3,273,599.91	\$1,684,654.31	\$1,588,945.60
2.	INE/CG810/2016	\$63,016,065.36	\$42,768,867.76	\$20,247,197.60

Del cuadro anterior se advierte que al mes de septiembre de dos mil diecisiete, el partido en cita tiene un saldo pendiente de **\$21'836,143.20** (veintiún millones ochocientos treinta y seis mil ciento cuarenta y tres pesos 20/100 M.N.).

De igual forma obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al **Partido del Trabajo** por este Consejo General; así como, los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones.

Número	Resolución de la Autoridad Electoral	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de septiembre de 2017	Montos por saldar
1.	INE/CG771/2015	\$9,129,077.75	\$6,105,112.10	\$3,023,965.65

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Del cuadro anterior se advierte que al mes de septiembre de dos mil diecisiete, el partido en cita tiene un saldo pendiente de **\$3'023,965.65** (tres millones veintitrés mil novecientos sesenta y cinco pesos 65/100 M.N.).

Por lo que hace al partido **Movimiento Ciudadano**, se advierte el registro de sanciones que han sido impuestas por este Consejo, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones.

Número	Resolución de la Autoridad Electoral	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de septiembre de 2017	Montos por saldar
1.	INE/CG771/2015	\$2,117,315.37	\$1,652,090.94	\$465,224.43
2.	INE/CG244/2016	\$2,875,000.00	\$1,582,615.84	\$1,292,384.16

Del cuadro anterior se advierte que al mes de septiembre de dos mil diecisiete, el partido en cita tiene un saldo pendiente de **\$1'757,608.59** (un millón setecientos cincuenta y siete mil seiscientos ocho pesos 59/100 M.N.).

De lo anterior se desprende que, aun cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica; por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la Resolución de mérito.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la otrora coalición Movimiento Progresista se integró con miras a lograr un propósito común para contender en el Proceso Electoral Federal de 2011-2012 debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los partidos políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición previeron el monto de recursos que cada uno aportaría al mismo.

En esta tesitura, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil once, aprobó mediante acuerdo **CG391/2011** la conformación de la coalición total denominada Movimiento Progresista integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, para postular candidatos a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores de la República y Diputados Federales por el Principio de Mayoría Relativa -Cláusula Segunda-; así también, en dicho convenio se fijó el porcentaje de participación de los partidos integrantes de la Coalición -cláusula séptima-, la cual se transcribe a continuación:

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

“(…)

SÉPTIMA.- Que de conformidad con lo que establece en el artículo 98, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos coaligados convienen en aportar en efectivo la totalidad de los recursos que reciban por concepto de gastos de campaña, de conformidad con lo siguiente:

“(…)”

En este sentido los recursos aportados en efectivo para la campaña correspondieron al 100% (cien por ciento) de cada uno de los partidos político integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista, resultando lo siguiente:

Partido	Financiamiento campaña PEF 2011-2012	Financiamiento campaña 50% Presidencial	Porcentaje (%)
PRD	225,745,363.72	112,872,681.86	50
PT	118,098,139.85	59,049,069.92	26
MC	103,060,128.93	51,530,064.46	24
Total	446,903,632.50	223,451,816.24	100

En consecuencia, el criterio de distribución de las sanciones pecuniarias impuestas a los partidos integrantes de la otrora coalición multicitada será el siguiente:

Partido de la Revolución Democrática	50%
Partido del Trabajo	26%
Movimiento Ciudadano	24%

Es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una Coalición deben ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, **‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’**.

Ahora bien, para fijar la sanción se debe tomar en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, tal y como se establece en el artículo 43, numeral 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 354, numeral 1, inciso a) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos nacionales, así como a los principios constitucionales que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada falta analizada.

Conclusión 394

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, entonces integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a la otrora coalición en comento, consistió en omitir rechazar una aportación consistente en la colocación de anuncios espectaculares, pinta de muros (bardas) y propaganda utilitaria provenientes de entes no identificados contraviniendo expresamente lo establecido en el artículo 77, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, que la comisión de la falta, derivó de la revisión a los Informes de Campaña presentados por la otrora coalición Movimiento Progresista en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012.
- Que los partidos integrantes de la otrora coalición conocían los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como el contenido del oficio de errores y omisiones emitido por la autoridad fiscalizadora durante la revisión de los informes de campaña correspondientes al proceso electoral en comento.
- Que la otrora Coalición no es reincidente.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$1'334,960.63** (un millón trescientos treinta y cuatro mil novecientos sesenta pesos 63/100 M.N.)
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por la otrora Coalición.

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las circunstancias particulares del caso.

Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación **SUP-RAP-461/2012** que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de Derecho.

Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención de la coalición infractora, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Ahora bien, la sanción contenida en la fracción V consistente en la cancelación del registro como partido político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencial del presente procedimiento.

En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que las sanciones previstas en las citadas fracciones II y III consistentes en multas de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización) y una reducción de ministración mensual, son las idóneas para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación **SUP-RAP-62/2008**.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es clasificable como **grave ordinaria**, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de **omitir rechazar una aportación proveniente de una persona no identificada** y las normas infringidas, la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o inhíba el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al partido en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al **200%** (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$2'669,921.26** (dos millones seiscientos sesenta y nueve mil novecientos veintiún pesos 26/100 M.N.)

En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al **50%** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la consistente en una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$1'334,960.63** (un millón trescientos treinta y cuatro mil novecientos sesenta pesos 63/100 M.N.).

Por otra parte, este Consejo General impone al **Partido del Trabajo**, en lo individual lo correspondiente al **26%** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente **9,195** (nueve mil ciento noventa y cinco) Unidades de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México para el ejercicio dos mil dieciséis, misma que asciende a la cantidad de **\$694,130.55** (setecientos noventa y cuatro mil ciento treinta pesos 55/100 M.N.).

Finalmente, este Consejo General impone a **Movimiento Ciudadano** en lo individual lo correspondiente al **24%** del monto total de la sanción por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente **8,487** (ocho mil cuatrocientos ochenta y siete) Unidades de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México para el ejercicio dos mil dieciséis, misma que asciende a la cantidad de **\$640,683.63** (seiscientos cuarenta mil seiscientos ochenta y tres pesos 63/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

B. Modificaciones a la resolución CG190/2013 en lo relativo a la otrora coalición Movimiento Progresista por lo que hace al tope de gastos de la campaña Presidencial en relación al apartado E, considerando 11 del presente acatamiento. (SUP-RAP-118/2013; SUP-RAP-120/2013; SUP-RAP-124/2013; SUP-RAP-164/2013; SUP-RAP-166/2013 y SUP-RAP-168/2013; Apartado A, Tema 3, Sección de ejecución).

Toda vez que se han consolidado las cifras finales, de los informes de campaña de ingresos y gastos correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012, y en cumplimiento con lo ordenado en las ejecutorias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se individualiza el monto ejercido en exceso y se impone la sanción que en derecho corresponde a los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, entonces integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista.

Bajo esta tesitura, las modificaciones se realizan bajo dos elementos, el primero de ellos respecto de las cifras de gastos totales y finales determinadas por auditoría.

El segundo elemento, se refiere a la individualización de la sanción respecto de la conclusión relacionada con el monto ejercido en exceso y consecuente rebase al tope de gastos de campaña del entonces candidato al cargo de Presidente de la República de la otrora coalición Movimiento Progresista, en cumplimiento a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional en los recursos de apelación siguientes:

Sentencia Autoridad Jurisdiccional	Resolución Autoridad Responsable	Tema	Impacto conclusiones
SUP-RAP-118/2013 MC	CG190/2013 Informes de Campaña, PEF 2011-2012.	Individualización de la sanción rebase de topes de campaña.	157, 277 y 378
SUP-RAP-120/2013 PT			
SUP-RAP-124 PRD-PT			
SUP-RAP-166/2013 MC			
SUP-RAP-168/2013 PT	CG242/2013 Informes Anuales 2012.		De conformidad con lo establecido en el Apartado B del presente acatamiento (SUP-RAP-164/2013), la afectación se advierte en la conclusión 157 de la resolución CG190/2013.

Al respecto, la autoridad jurisdiccional determinó que en caso de acreditar el rebase de topes, la responsable debe individualizar la sanción respectiva, considerando (de manera descriptiva) además de la cantidad ejercida en exceso y la reincidencia, lo siguiente:

- El porcentaje aportado por cada uno de los partidos políticos en términos del convenio de coalición;
- La gravedad de la conducta en atención al bien jurídico tutelado;
- Distinguir el grado de participación de cada uno de los integrantes de la COA
- De forma particular la actividad de quien operó como responsable del órgano de finanzas al administrar los recursos de la coalición;
- Circunstancias de tiempo, modo y lugar.
- Capacidad económica (particularmente el financiamiento ordinario que reciben).

En este sentido, la autoridad responsable debe, en primer término, señalar de manera clara y precisa los elementos que va a tomar en cuenta para realizar la individualización de la sanción, en segundo lugar, determinar la forma en que los aplicara y, finalmente, establecer de manera fundada y motivada, la imposición de la sanción en cada caso concreto.

Visto lo procedente, a continuación se presentan las modificaciones correspondientes:

Conclusión 157

Presidente

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Toda vez que en la conclusión analizada en la conclusión **157** se actualiza una conducta que vulnera el artículo 229, numeral 1 en relación al 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo procedente es determinar las sanciones que conforme a derecho se han de imponer a los entes infractores.

Toda vez que en la conclusión analizada se establece que la otrora coalición Movimiento Progresista, vulneró lo dispuesto en el artículo 229, numeral 1 en relación al 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo procedente es determinar las sanciones que conforme a derecho se han de imponer a los entes infractores.

A continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos en comento:

“Artículo 229

*1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
(...)”*

“Artículo 342

*1. Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código:
(...)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(...)”*

Ahora bien, previo a la individualización de las sanciones que en derecho correspondan a los entonces partidos integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista, es trascendente señalar que de conformidad con el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el caso de infracciones en materia de topes de gasto de campaña la sanción a imponer será con un tanto igual al del monto ejercido en exceso, tal como se advierte a continuación:

“Artículo 354

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme lo siguiente:

a) Respecto de los partidos políticos:

I. ...

*II. Con una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. **En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso.** En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior.
(...)”*

[Énfasis añadido]

Bajo esta tesitura el Código de la materia estableció un régimen sancionador acorde a los sujetos, conductas y sanciones, previendo en todo caso la relevancia de imponer sanciones acorde al origen de la infracción, por lo que al actualizarse

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

la conducta infractora como lo es el rebase al tope de gasto de campaña⁴⁵ fijado para cada cargo de elección por la autoridad administrativa electoral, de conformidad con el artículo en comento la sanción a imponer debe corresponder a un tanto igual al ejercido en exceso.

En este contexto la autoridad electoral acreditó de manera objetiva y material que la otrora coalición Movimiento Progresista excedió el tope de campaña fijado para la elección Presidencial.

Objetiva en cuanto a la existencia de ingresos y gastos que la autoridad electoral acreditó beneficiaron al entonces candidato Presidencial y material en atención a la consolidación del gasto, lo cual representó se acumularan los montos económicos reportados y los no reportados o en su caso aquellos que representaron un beneficio económica a la entonces candidatura en cita, mismos que al dictaminarse por auditoría actualizaron un rebase al tope fijado para la elección en comento.

En el caso en comento, la autoridad electoral acreditó que la otrora coalición excedió el tope de gastos de campaña fijado para la elección presidencial por un importe de **\$48'737,712.60** (cuarenta y ocho millones setecientos treinta y siete mil setecientos doce pesos 60/100 M.N.) vulnerando con ello lo establecido en los artículos transcritos en párrafos precedentes.

Visto lo anterior, de conformidad con lo establecido con el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la sanción que debe imponerse a la otrora coalición Movimiento Progresista, es la consistente en una sanción económica por **\$48'737,712.60** (cuarenta y ocho millones setecientos treinta y siete mil setecientos doce pesos 60/100 M.N.), la cual representa el monto ejercido en exceso.

Lo anterior, conforme a lo siguiente:

CAMPAÑA	TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORÍA CON GASTOS NO REPORTADOS PRESIDENTE (A)	TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA (B)	TOTAL DE GASTOS vs. TOPE DE CAMPAÑA (C) = (B) – (A)
Presidente	\$384,849,796.76	\$336,112,084.16	\$48'737,712.60

⁴⁵ “El tope de gasto de campaña es un mecanismo para fiscalizar el uso de recursos económicos, materiales y humanos con la finalidad de propiciar equidad entre los diversos participantes en la contienda electoral.” ¿Cómo sancionar el rebase de topes de gastos de campaña? UN EJEMPLO DE LO QUE NO FUNCIONA; Ana Laura Magaloni Kerpel y Karla Prudencio Ruíz, SERIE DE COMETNARIOS A LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL, número 61; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, primera edición 2014. P.13

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Ahora bien, resulta oportuno precisar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, párrafo 1 y 98, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos tienen derecho a formar coaliciones para participar en las elecciones; teniendo en tal caso la obligación de manifestar en el convenio de coalición, que se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones, **como si se tratara de un solo partido.**

Consecuentemente al actualizarse un rebase al tope de gastos, la responsabilidad resulta imputable a la otrora coalición, aun cuando la sanción se impone a los partidos políticos que la integraron.

En este sentido se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente **SUP-RAP-166/2013**, señalando que las violaciones cometidas por la Coalición, necesariamente y por ficción de la ley son atribuibles a ésta, ya sea que la falta la cometa uno o varios de los institutos políticos que la conforman, en tanto la infracción se refracta a cada uno de sus integrantes, puesto que no puede señalarse como responsable directo sólo a uno de ellos, ya que la conformación del ente jurídico colectivo admite esa forma de intervención conjunta y este hecho presupone un marco punitivo específico o particular por voluntad del legislador.

Al respecto, la Sala Superior en forma reiterada ha sostenido que el Consejo General en la aplicación de sanciones derivadas de infracciones a la normatividad electoral, debe considerar la calidad y características del sujeto infractor, las circunstancias particulares del caso concreto y las condiciones específicas de cada partido político integrante de la coalición.

Bajo las consideraciones expuestas, a cada uno de los integrantes de la coalición, le es imputable la conducta irregular como presupuesto de la sanción, y no como forma de intervención punible referida expresamente a la participación individual de los partidos políticos coaligados.

Precisado lo anterior, resulta que para fijar la sanción a los **partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano** entonces integrantes de la otrora Coalición, la autoridad administrativa electoral debe atender a las características particulares del caso como son las circunstancias de modo, tiempo y lugar; bien jurídico tutelado; se trata de integrantes de una

coalición; el porcentaje de participación de cada uno de ellos conforme al convenio de coalición y la capacidad económica.⁴⁶

Al respecto resulta relevante destacar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el alcance y significado del artículo 279, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización vigente en dos mil doce, corresponde a su integridad y al sistema normativo en que se inserta, por lo que señaló que si bien la intención del legislador ordinario fue sancionar la violación al rebase de los topes de gastos de campaña con un monto igual al ejercido en exceso; la sanción que por esa cantidad se aplica a los integrantes de una coalición necesariamente debe atender a los lineamientos previstos en el artículo 355, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales⁴⁷, para fijar la cuantía de manera individualizada a cada uno de los institutos políticos coaligados.

Así, el órgano jurisdiccional determinó que la expresión “equivalentes” contenida en el precepto reglamentario referido, a la luz de una interpretación sistemática con los artículos 342, 354 y 355 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de los párrafos 1 y 2, del propio artículo 279, permite concluir que la locución de mérito no puede entenderse como igualdad o paridad. Por el contrario, debe considerarse ***vinculada directamente con las condiciones particulares de cada partido político integrante de la coalición; es decir, la responsabilidad del sujeto y su situación específica, las condiciones objetivas y subjetivas de la conducta sancionada y del sujeto infractor.***

Conforme a lo expuesto y atento al origen de la conducta se procede a individualizar la sanción que en derecho corresponda a los entonces partidos integrantes de la de la otrora coalición Movimiento Progresista, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

⁴⁶ De conformidad con lo establecido en los recursos de apelación SUP-RAP-118/2013, SUP-RAP-120/2013, SUP-RAP-166/2013, SUP-RAP-168/2013, SUP-RAP-172/2013, SUP-RAP-173/2013, SUP-RAP-174/2013, SUP-RAP-175/2013, SUP-RAP-177/2013, SUP-RAP-178/2013 emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

⁴⁷ Artículo 355...5. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes: a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; c) Las condiciones socioeconómicas del infractor; d) Las condiciones externas y los medios de ejecución; e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. 6. Se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el presente Código incurra nuevamente en la misma conducta infractora al presente ordenamiento legal...”

Bajo esta tesis, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones que en derecho correspondan de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado como **SUP-RAP-05/2010**.⁴⁸

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) Calificación de la falta

i) Trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

Una falta sustancial en materia de fiscalización trae consigo entre otras cuestiones, la falta de transparencia en el manejo de los recursos – origen, monto-, la omisión en la rendición de cuentas –destino y aplicación-, la inequidad de recursos en las contiendas e implica también el incumplimiento de las normas en la materia.

Bajo esta tesis, en el análisis de la conclusión **157** se establece que la otrora coalición Movimiento Progresista, vulneró lo dispuesto en el artículo 229, numeral 1 en relación al 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que a la letra señalan:

⁴⁸ Al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-05/2010**, la máxima autoridad jurisdiccional señaló que para calificar la falta se debe considerar lo siguiente: a) Valor protegido o trascendencia de la norma; b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto; c) La naturaleza de la acción u omisión; d) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron; e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta; f) su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido; g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma y h) La capacidad económica del ente infractor.

“Artículo 229

*1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
(...)”*

“Artículo 342

*1. Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código:
(...)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(...)”*

De los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.

Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.

En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los postulados que formulen.

Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.

Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.

ii) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación de las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

Bajo esta tesitura, los bienes jurídicos tutelados por la norma infringida son los principios de equidad que rigen al sistema mixto de financiamiento, así como la legalidad de su actuar.

En el presente caso las irregularidades imputables al ente político se traducen en infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico tutelado.

iii) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación a la conducta identificada en la conclusión **157** se identificó que el actuar del ente infractor fue positivo⁴⁹, toda vez que con su actuar excedió el tope de gastos de campaña fijado para la elección presidencial.

Visto lo anterior, la falta corresponde a una acción toda vez que el artículo 229, numeral 1 en relación al 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, contiene una norma prohibitiva,

⁴⁹ De conformidad con el recurso de apelación **SUP-RAP-98/2003** emitido por la Sala Superior del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación en la acción el ente infractor realiza una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo.

consistente en la obligación de no exceder el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad⁵⁰, por lo que en el caso concreto el actuar del sujeto obligado actualizó la conducta prohibida por la norma.

iv) Circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Modo: De la consolidación de ingresos y gastos totales dictaminados por la autoridad electoral en la revisión del informe de campaña y en cumplimiento a las ejecutorias de mérito, se determinó que la otrora coalición Movimiento Progresista, excedió el tope de gastos fijado para la campaña Presidencial, por un monto de **\$48'737,712.60** (cuarenta y ocho millones setecientos treinta y siete mil setecientos doce pesos 60/100 M.N.).

Tiempo: La irregularidad atribuida surgió durante la revisión del informe de campaña Presidencial en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012; así como de la revisión a los ingresos y gastos realizada a las cifras del informe de campaña en cumplimiento a las ejecutorias de mérito en relación a la sección de ejecución del presente acatamiento.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la autoridad electoral ubicadas en Avenida Acoxta número 436, Colonia Ex hacienda Coapa, Tlalpan, C.P. 14300, Ciudad de México.

v) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica de los sujetos obligados para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

VI) Singularidad o pluralidad de la falta.

En el caso que nos ocupa existe **singularidad** en la falta pues los sujetos obligados cometieron una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**.

⁵⁰ El tope máximo de gastos de campaña para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores de la República y Diputados Federales en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012, fue establecido en los Acuerdos CG432/2011 (en cumplimiento al resolutivo segundo del CG382/2011) y CG433/2011, aprobados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil once, mismo que consistió en **\$336'112,084.16** (trescientos treinta y seis millones ciento doce mil ochenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) para Presidente de la República.

Calificación de la falta

En atención a los elementos precedentes esta autoridad electoral considera que la infracción debe calificarse como **Grave Ordinaria**.

B) Imposición de la sanción

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.⁵¹

Bajo esta tesitura no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser aplicada entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, **“COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE”**⁵².

Al respecto, debe considerarse que la coalición se integró con miras a lograr un propósito común de contender en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los partidos políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición previeron el monto de recursos que cada uno aportaría.

⁵¹ Al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-454/2012**, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estimó que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral deberá ser acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

⁵² Tesis XXV/2002, consultable en las páginas 1010-1012 de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tesis, Volumen 2, Tomo I.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

De conformidad con la cláusula séptima del Convenio de la Coalición Movimientos Progresista que estableció: “**SÉPTIMA.-** Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 98, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos coaligados convienen en aportar en efectivo **la totalidad de los recursos que reciban por concepto de gastos de campañas**, de conformidad con lo siguiente: a) Adicionalmente a los recursos a que se refiere el párrafo anterior, los partidos políticos coaligados podrán realizar aportaciones en efectivo o en especie en los términos que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás ordenamientos en la materia, previo acuerdo de la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición. (...)”, por lo que, para determinar el porcentaje de participación se considera el financiamiento para gastos de campaña asignado a cada partido coaligado – aportado- y el monto total de financiamiento obtenido, como a continuación se desprende:

Integrantes de la Coalición “Movimiento Progresista”	Aportación de cada Partido Político Coaligado (A)	Monto total del financiamiento obtenido por los partidos coaligados (B)	Porcentaje de participación de cada partido coaligado A respecto de B
PRD	\$225,745,363.72	\$446,903,632.50	50%
PT	\$118,098,139.85		26%
MC	\$103,060,128.93		24 %

Del porcentaje antes mencionado válidamente se puede concluir que el Partido de la Revolución Democrática participó en la formación de la otrora coalición con una aportación equivalente al **50%** (cincuenta por ciento), mientras que el Partido del Trabajo aportó un **26%** (veintiséis por ciento), finalmente el Partido Movimiento Ciudadano participó en la formación de coalición con una aportación equivalente al **24%** (veinticuatro por ciento) del monto total de los recursos con aras de formar e integrar la coalición para los cargos de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores y Diputados.

Finalmente, respecto del elemento de la “*actividad del partido político que operó como responsable del órgano de finanzas al administrar los recursos de la otrora coalición*”, cabe señalar que en la cláusula **SÉPTIMA, inciso c) del Convenio de Coalición Electoral Total** que para la elección de Presidente de la República, Senadores y Diputados por el principio de mayoría relativa, del Congreso de la Unión, celebran los partidos políticos nacionales de la Revolución Democrática, del

Trabajo y Movimiento Ciudadano, se advierte que *el Partido de la Revolución Democrática fue designado como el responsable del órgano de finanzas*, de conformidad con lo entonces dispuesto por el artículo 161, párrafo 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalización.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al Recurso de Apelación **SUP-RAP-166/2013**, determinó que la circunstancia que la Ley de la materia establezca determinados derechos para los partidos políticos coaligados, constituyen **aspectos relacionados únicamente con la forma en que participan en un proceso electoral**, en consecuencia, esos **aspectos devienen ajenos para determinar la responsabilidad de la entidad coaligada en caso de que a través de alguno de sus miembros incurra en alguna falta**.

Bajo esas consideraciones normativas, el máximo órgano jurisdiccional señaló en la sentencia referida que, **no es una eximente de responsabilidad el hecho de que la administración de los recursos de la coalición haya quedado a cargo de uno de los partidos políticos**, máxime cuando la decisión del nombramiento del administrador se lleva a cabo por los propios institutos políticos que se coaligan.

Al efecto resulta aplicable la tesis emitida por la Sala Superior de rubro **“SANCIONES. EN SU DETERMINACIÓN, LAS AGRAVANTES O ATENUANTES DERIVADAS DE UNA CONDUCTA IMPUTABLE A UN PARTIDO POLÍTICO, NO PUEDEN AFECTAR LA ESFERA JURÍDICA DE OTROS SUJETOS O ENTES DISTINTOS A AQUEL, AUN CUANDO INTEGREN UNA COALICIÓN.”**⁵³

⁵³ Tesis CXXXIII/2002, consultable en las páginas 1798-1780 de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tesis, Volumen 2, Tomo II, cuyo contenido es el siguiente: “...Conforme a los artículos 82, párrafo 1, inciso w); 269 y 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para la determinación y, en su caso, la aplicación de las sanciones derivadas de infracciones a la normatividad electoral, el Consejo General del Instituto Federal Electoral debe tomar en cuenta las circunstancias particulares de cada caso concreto y para cada partido político, contando con una **amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción**. Sin embargo, dicha calificación de las agravantes o atenuantes de una conducta no puede realizarse en forma arbitraria o caprichosa, es decir, debe contener los acontecimientos particulares que en cada supuesto específico se suscitan, así como los razonamientos lógicos, motivos y fundamentos en que se apoya, pero sobre todo, no puede afectar la esfera jurídica de sujetos o entes distintos a aquel, que haya realizado o tipificado la conducta o circunstancia que merezca ser agravada o atenuada, puesto que, **el perjuicio o beneficio que se otorgue por la autoridad responsable, en la determinación y en su caso, la aplicación de una sanción, exclusivamente le concierne a quien la haya generado**, siendo imposible extender sus efectos a quienes no se les pueda imputar directamente la realización de cada acontecimiento, **aun cuando el partido político al cual se le deba agravar o atenuar su sanción, pertenezca a una coalición de partidos**. Lo anterior es así, porque conforme a la doctrina, las conductas agravantes son una serie de circunstancias modificativas que determinan una mayor gravedad de la culpabilidad, puesto que ponen de manifiesto un riesgo mayor del sujeto o ente que las ejecuta; por ello, las agravantes se pueden clasificar en objetivas y subjetivas, siendo las primeras, es decir las objetivas, las que denotan peligrosidad del hecho, bien sea por la facilidad de comisión en atención a los medios, sujetos, circunstancias, o por la especial facilidad para resultar impune; y las

En consecuencia, la participación de los partidos políticos entonces coaligados como órgano responsable de la administración de las finanzas de la otrora Coalición, no puede considerarse una circunstancia determinante, y menos aún modificativa, de la responsabilidad.

Reincidencia

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el partido político no es reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada.

- Que los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano integraron la otrora coalición Movimiento Progresista en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012, siendo el responsable financiero de la otrora coalición el Partido de la Revolución Democrática de conformidad con el convenio de coalición total aprobado por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil once, mediante resolución CG391/2011.
- Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales invocadas, por lo que al incumplir con sus obligaciones en materia de topes **se acreditó la vulneración a los valores y principios sustanciales** protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que los partidos entonces coaligados decidieron participar con la totalidad de los recursos obtenidos del financiamiento público obtenidos para las campañas electorales
- Que el porcentaje aportado por cada uno de los partidos políticos entonces coaligados correspondió a: **PRD 50%; PT 26% y MC 24%.**

segundas, esto es las subjetivas, las que incluyen la premeditación o la reincidencia, mismas que revelan una actitud aún más reprobable en el ejecutante; por su parte, las conductas atenuantes son igualmente circunstancias modificativas de la responsabilidad, que son definidas necesariamente por el efecto sobre la determinación de la sanción, puesto que son aquellas que inciden en el grado en que finalmente se impondrá dicha sanción, y que lo hacen en sentido reductor o atenuatorio de la misma, sin llegar al extremo de excluirla, ya que se estaría hablando de otra figura jurídica, la de eximentes."

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- Que se tomaron en cuenta las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** las cuales acreditaron la infracción atribuible a los sujetos obligados, consistente en exceder el tope de gastos de campaña.
- Que la conducta fue **singular**.
- Que la falta se calificó como **grave ordinaria**.
- Que el monto ejercido en exceso corresponde a **\$48'737,712.60** (cuarenta y ocho millones setecientos treinta y siete mil setecientos doce pesos 60/100 M.N.).
- Que no son reincidentes los sujetos obligados.

Bajo esta tesitura se considera que la sanción a imponer a los **partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano como entonces integrantes de la otrora Coalición Movimiento Progresista** es la prevista en la fracción II, numeral 1, inciso a) del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en un monto igual al ejercido en exceso, considerando los elementos objetivos y subjetivos señalados en párrafos precedentes.

En consecuencia, este Consejo General concluye que debe imponerse en lo individual al **Partido de la Revolución Democrática** el correspondiente al **50%** del monto total ejercido en exceso; por lo que la sanción que se impone al instituto político es la consistente en una sanción económica por un importe de \$24'368,856.30 (veinticuatro millones trescientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta y seis pesos 30/100 M.N.) la cual deberá de ser pagada en una sola exhibición.

Respecto de dicho monto, debe tomarse en cuenta que esta autoridad ha cobrado el monto de \$769,903.93 (Setecientos sesenta y nueve mil novecientos tres pesos 93/100 M.N.) a ese partido político con motivo de la Conclusión 73 del CG242/2013, la cual sancionó parte del rebase al tope de gastos de campaña, lo que se dejó sin efectos en el Considerando 11, apartado B del presente. En ese sentido, a fin de generar congruencia y no sancionar indebidamente un monto que ha sido cobrado por la autoridad, únicamente se cobrará por la presente infracción el monto de **\$23'598,952.37** (veintitrés millones quinientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos 37/100 M.N.).

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En consecuencia, este Consejo General concluye que debe imponerse en lo individual al **Partido del Trabajo** el correspondiente al **26%** del monto total ejercido en exceso; por lo que la sanción que se impone al instituto político es la consistente en una **sanción económica** por un importe de **\$12'671,805.27** (doce millones seiscientos setenta y un mil ochocientos cinco pesos 27/100 M.N.) la cual deberá de ser pagada en una sola exhibición.

En consecuencia, este Consejo General concluye que debe imponerse en lo individual al **partido Movimiento Ciudadano** el correspondiente al **24%** del monto total ejercido en exceso; por lo que la sanción que se impone al instituto político es la consistente en una **sanción económica** por un importe de **\$11'697,051.02** (once millones seiscientos noventa y siete mil cincuenta y un pesos 02/100 M.N.) la cual deberá de ser pagada en una sola exhibición.

Capacidad económica.

La sanción que ahora se impone en forma alguna afecta la capacidad económica del ente infractor, toda vez que la autoridad administrativa electoral considera para ello, el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago, ambos en el ejercicio en que se impone la sanción respectiva; así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos coaligados infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al **Partido de la Revolución Democrática** por este Consejo General; así como, los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Número	Resolución de la Autoridad Electoral	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de septiembre de 2017	Montos por saldar
1.	INE/CG771/2015	\$3,273,599.91	\$1,684,654.31	\$1,588,945.60
2.	INE/CG810/2016	\$63,016,065.36	\$42,768,867.76	\$20,247,197.60

Del cuadro anterior se advierte que al mes de septiembre de dos mil diecisiete, el partido en cita tiene un saldo pendiente de **\$21'836,143.20** (veintiún millones ochocientos treinta y seis mil ciento cuarenta y tres pesos 20/100 M.N.).

De igual forma obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al **Partido del Trabajo** por este Consejo General; así como, los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones.

Número	Resolución de la Autoridad Electoral	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de septiembre de 2017	Montos por saldar
1.	INE/CG771/2015	\$9,129,077.75	\$6,105,112.10	\$3,023,965.65

Del cuadro anterior se advierte que al mes de septiembre de dos mil diecisiete, el partido en cita tiene un saldo pendiente de **\$3'023,965.65** (tres millones veintitrés mil novecientos sesenta y cinco pesos 65/100 M.N.).

Por lo que hace al partido **Movimiento Ciudadano**, se advierte el registro de sanciones que han sido impuestas por este Consejo, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones.

Número	Resolución de la Autoridad Electoral	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de septiembre de 2017	Montos por saldar
1.	INE/CG771/2015	\$2,117,315.37	\$1,652,090.94	\$465,224.43
2.	INE/CG244/2016	\$2,875,000.00	\$1,582,615.84	\$1,292,384.16

Del cuadro anterior se advierte que al mes de septiembre de dos mil diecisiete, el partido en cita tiene un saldo pendiente de **\$1'757,608.59** (un millón setecientos cincuenta y siete mil seiscientos ocho pesos 59/100 M.N.).

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

De lo anterior se desprende que, aun cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica; por tanto, los partidos infractores estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la Resolución de mérito.

C. Modificaciones a la resolución CG190/2013 en lo relativo a la otrora coalición Movimiento Progresista por lo que hace a los topes de gasto de las campañas a Senadores de la República en relación al apartado F, considerando 11 del presente acatamiento. (SUP-RAP-118/2013; SUP-RAP-120/2013; SUP-RAP-124/2013; Apartado A, Tema 3, Sección de ejecución).

Toda vez que se han consolidado las cifras finales, de los informes de campaña de ingresos y gastos correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012, y en cumplimiento con lo ordenado en las ejecutorias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se individualiza el monto ejercido en exceso y se impone la sanción que en derecho corresponde a los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, entonces integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista.

Bajo esta tesitura, las modificaciones se realizan bajo dos elementos, el primero de ellos respecto de las cifras de gastos totales y finales determinadas por auditoría.

El segundo elemento, se refiere a la individualización de la sanción respecto de la conclusión relacionada con el monto ejercido en exceso y consecuente rebase al tope de gastos de campaña de los entonces candidatos a Senadores de la República de la otrora coalición Movimiento Progresista, en cumplimiento a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional en los recursos de apelación siguientes:

Sentencia Autoridad Jurisdiccional	Resolución Autoridad Responsable	Tema	Impacto conclusiones
SUP-RAP-118/2013 MC	CG190/2013 Informes de Campaña, PEF 2011-2012.	Individualización de la sanción rebase de topes de campaña.	157, 277 y 378
SUP-RAP-120/2013 PT			
SUP-RAP-124 PRD-PT			
SUP-RAP-166/2013 MC	CG242/2013 Informes Anuales 2012.		De conformidad con lo establecido en el Apartado B del presente acatamiento (SUP-RAP-164/2013), la afectación se advierte en la conclusión 157 de la resolución CG190/2013.
SUP-RAP-168/2013 PT			

Al respecto, la autoridad jurisdiccional determinó que en caso de acreditar el rebase de topes, la responsable debe individualizar la sanción respectiva, considerando (de manera descriptiva) además de la cantidad ejercida en exceso y la reincidencia, lo siguiente:

- El porcentaje aportado por cada uno de los partidos políticos en términos del convenio de coalición;
- La gravedad de la conducta en atención al bien jurídico tutelado;
- Distinguir el grado de participación de cada uno de los integrantes de la COA
- De forma particular la actividad de quien operó como responsable del órgano de finanzas al administrar los recursos de la coalición;
- Circunstancias de tiempo, modo y lugar.
- Capacidad económica (particularmente el financiamiento ordinario que reciben).

En este sentido, la autoridad responsable debe, en primer término, señalar de manera clara y precisa los elementos que va a tomar en cuenta para realizar la individualización de la sanción, en segundo lugar, determinar la forma en que los aplicara y, finalmente, establecer de manera fundada y motivada, la imposición de la sanción en cada caso concreto.

Visto lo procedente, a continuación se presentan las modificaciones correspondientes:

Conclusión 277

Senadores

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Toda vez que en la conclusión analizada en la conclusión **277** se actualiza una conducta que vulnera el artículo 229, numeral 1 en relación al 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo procedente es determinar las sanciones que conforme a derecho se han de imponer a los entes infractores.

Toda vez que en la conclusión analizada se establece que la otrora coalición Movimiento Progresista, vulneró lo dispuesto en el artículo 229, numeral 1 en relación al 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales, lo procedente es determinar las sanciones que conforme a derecho se han de imponer a los entes infractores.

A continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos en comento:

“Artículo 229

*1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
(...)”*

“Artículo 342

*1. Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código:
(...)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(...)”*

Ahora bien, previo a la individualización de las sanciones que en derecho correspondan a los entonces partidos integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista, es trascendente señalar que de conformidad con el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el caso de infracciones en materia de topes de gasto de campaña la sanción a imponer será con un tanto igual al del monto ejercido en exceso, tal como se advierte a continuación:

“Artículo 354

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme lo siguiente:

a) Respecto de los partidos políticos:

I. ...

*II. Con una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. **En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso.** En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior.
(...)”*

[Énfasis añadido]

Bajo esta tesitura el Código de la materia estableció un régimen sancionador acorde a los sujetos, conductas y sanciones, previendo en todo caso la relevancia de imponer sanciones acorde al origen de la infracción, por lo que al actualizarse la conducta infractora como lo es el rebase al tope de gasto de campaña⁵⁴ fijado para cada cargo de elección por la autoridad administrativa electoral, de conformidad con el artículo en comento la sanción a imponer debe corresponder a un tanto igual al ejercido en exceso.

En este contexto la autoridad electoral acreditó de manera objetiva y material que la otrora coalición Movimiento Progresista excedió el tope de campaña fijado para las elecciones de Senadores en los estados de Baja California y Campeche

Objetiva en cuanto a la existencia de ingresos y gastos que la autoridad electoral acreditó beneficiaron a los entonces candidatos a senadores y material en atención a la consolidación del gasto, lo cual representó se acumularan los montos económicos reportados y los no reportados o en su caso aquellos que representaron un beneficio económica a la entonces candidatura en cita, mismos que al dictaminarse por auditoría actualizaron un rebase al tope fijado para la elección en comento.

En el caso en comento, la autoridad electoral acreditó que la otrora coalición excedió el tope de gastos de campaña fijado para la elección de Senadores por un importe de **\$641,321.04** (seiscientos cuarenta y un mil trescientos veintiún pesos 04/100 M.N.) vulnerando con ello lo establecido en los artículos transcritos en párrafos precedentes.

Visto lo anterior, de conformidad con lo establecido con el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la sanción que debe imponerse a la otrora coalición Movimiento Progresista, es la consistente en una sanción económica por **\$641,321.04** (seiscientos cuarenta y un mil trescientos veintiún pesos 04/100 M.N.), la cual representa el monto ejercido en exceso.

⁵⁴ “El tope de gasto de campaña es un mecanismo para fiscalizar el uso de recursos económicos, materiales y humanos con la finalidad de propiciar equidad entre los diversos participantes en la contienda electoral.” ¿Cómo sancionar el rebase de topes de gastos de campaña? UN EJEMPLO DE LO QUE NO FUNCIONA; Ana Laura Magaloni Kerpel y Karla Prudencio Ruiz, SERIE DE COMETNARIOS A LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL, número 61; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, primera edición 2014. P.13

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Lo anterior, conforme a lo siguiente:

ENTIDAD	FORMULA	CANDIDATO	TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORÍA CON GASTOS NO REPORTADOS SENADORES (A)	TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA (B)	TOTAL DE GASTOS vs. TOPE DE CAMPAÑA (C) = (B) – (A)
Baja California Sur	1	Cota Montaña Leonel Efraín	2,406,820.96	\$2,240,747.23	\$166,073.73
Campeche	1	Sansores San Román Layda Elena	2,715,994.54	2,240,747.23	\$475,247.31
TOTAL					\$641,321.04

Ahora bien, resulta oportuno precisar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, párrafo 1 y 98, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos tienen derecho a formar coaliciones para participar en las elecciones; teniendo en tal caso la obligación de manifestar en el convenio de coalición, que se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones, **como si se tratara de un solo partido.**

Consecuentemente al actualizarse un rebase al tope de gastos, la responsabilidad resulta imputable a la otrora coalición, aun cuando la sanción se impone a los partidos políticos que la integraron.

En este sentido se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente **SUP-RAP-166/2013**, señalando que las violaciones cometidas por la Coalición, necesariamente y por ficción de la ley son atribuibles a ésta, ya sea que la falta la cometa uno o varios de los institutos políticos que la conforman, en tanto la infracción se refracta a cada uno de sus integrantes, puesto que no puede señalarse como responsable directo sólo a uno de ellos, ya que la conformación del ente jurídico colectivo admite esa forma de intervención conjunta y este hecho presupone un marco punitivo específico o particular por voluntad del legislador.

Al respecto, la Sala Superior en forma reiterada ha sostenido que el Consejo General en la aplicación de sanciones derivadas de infracciones a la normatividad electoral, debe considerar la calidad y características del sujeto infractor, las circunstancias particulares del caso concreto y las condiciones específicas de cada partido político integrante de la coalición.

Bajo las consideraciones expuestas, a cada uno de los integrantes de la coalición, le es imputable la conducta irregular como presupuesto de la sanción, y no como forma de intervención punible referida expresamente a la participación individual de los partidos políticos coaligados.

Precisado lo anterior, resulta que para fijar la sanción a los **partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano** entonces integrantes de la otrora Coalición, la autoridad administrativa electoral debe atender a las características particulares del caso como son las circunstancias de modo, tiempo y lugar; bien jurídico tutelado; se trata de integrantes de una coalición; el porcentaje de participación de cada uno de ellos conforme al convenio de coalición y la capacidad económica.⁵⁵

Al respecto resulta relevante destacar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el alcance y significado del artículo 279, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización vigente en dos mil doce, corresponde a su integridad y al sistema normativo en que se inserta, por lo que señaló que si bien la intención del legislador ordinario fue sancionar la violación al rebase de los topes de gastos de campaña con un monto igual al ejercido en exceso; la sanción que por esa cantidad se aplica a los integrantes de una coalición necesariamente debe atender a los lineamientos previstos en el artículo 355, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales⁵⁶, para fijar la cuantía de manera individualizada a cada uno de los institutos políticos coaligados.

Así, el órgano jurisdiccional determinó que la expresión “equivalentes” contenida en el precepto reglamentario referido, a la luz de una interpretación sistemática con los artículos 342, 354 y 355 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de los párrafos 1 y 2, del propio artículo 279, permite concluir que la locución de mérito no puede entenderse como

⁵⁵ De conformidad con lo establecido en los recursos de apelación SUP-RAP-118/2013, SUP-RAP-120/2013, SUP-RAP-166/2013, SUP-RAP-168/2013, SUP-RAP-172/2013, SUP-RAP-173/2013, SUP-RAP-174/2013, SUP-RAP-175/2013, SUP-RAP-177/2013, SUP-RAP-178/2013 emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

⁵⁶ Artículo 355...5. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes: a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; c) Las condiciones socioeconómicas del infractor; d) Las condiciones externas y los medios de ejecución; e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. 6. Se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el presente Código incurra nuevamente en la misma conducta infractora al presente ordenamiento legal...”

igualdad o paridad. Por el contrario, debe considerarse ***vinculada directamente con las condiciones particulares de cada partido político integrante de la coalición; es decir, la responsabilidad del sujeto y su situación específica, las condiciones objetivas y subjetivas de la conducta sancionada y del sujeto infractor.***

Conforme a lo expuesto y atento al origen de la conducta se procede a individualizar la sanción que en derecho corresponda a los entonces partidos integrantes de la de la otrora coalición Movimiento Progresista, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

Bajo esta tesitura, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones que en derecho correspondan de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado como **SUP-RAP-05/2010**.⁵⁷

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) Calificación de la falta

i) Trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

Una falta sustancial en materia de fiscalización trae consigo entre otras cuestiones, la falta de transparencia en el manejo de los recursos – origen, monto-

⁵⁷ Al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-05/2010**, la máxima autoridad jurisdiccional señaló que para calificar la falta se debe considerar lo siguiente: a) Valor protegido o trascendencia de la norma; b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto; c) La naturaleza de la acción u omisión; d) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron; e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta; f) su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido; g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma y h) La capacidad económica del ente infractor.

, la omisión en la rendición de cuentas –destino y aplicación-, la inequidad de recursos en las contiendas e implica también el incumplimiento de las normas en la materia.

Bajo esta tesitura, en el análisis de la conclusión **277** se establece que la otrora coalición Movimiento Progresista, vulneró lo dispuesto en el artículo 229, numeral 1 en relación al 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que a la letra señalan:

“Artículo 229

*1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
(...)”*

“Artículo 342

*1. Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código:
(...)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(...)”*

De los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.

Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.

En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se

privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los postulados que formulen.

Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.

Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.

ii) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación de las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

Bajo esta tesitura, los bienes jurídicos tutelados por la norma infringida son los principios de equidad que rigen al sistema mixto de financiamiento, así como la legalidad de su actuar.

En el presente caso las irregularidades imputables al ente político se traducen en infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico tutelado.

iii) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación a la conducta identificada en la conclusión **277** se identificó que el actuar del ente infractor fue positivo⁵⁸, toda vez que con su actuar excedió el tope de gastos de campaña fijado para la elección de Senadores.

Visto lo anterior, la falta corresponde a una acción toda vez que el artículo 229, numeral 1 en relación al 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, contiene una norma prohibitiva, consistente en la obligación de no exceder el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad⁵⁹, por lo que en el caso concreto el actuar del sujeto obligado actualizó la conducta prohibida por la norma.

iv) Circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Modo: De la consolidación de ingresos y gastos totales dictaminados por la autoridad electoral en la revisión del informe de campaña y en cumplimiento a las ejecutorias de mérito, se determinó que la otrora coalición Movimiento Progresista, excedió el tope de gastos fijado para la campaña de Senadores por un monto de **\$641,321.04** (seiscientos cuarenta y un mil trescientos veintiún pesos 04/100 M.N.).

Tiempo: La irregularidad atribuida surgió durante la revisión del informe de campaña para Senadores en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012; así como de la revisión a los ingresos y gastos realizada a las cifras del informe de campaña en cumplimiento a las ejecutorias de mérito en relación a la sección de ejecución del presente acatamiento.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la autoridad electoral ubicadas en Avenida Acoxta número 436, Colonia Exhacienda Coapa, Tlalpan, C.P. 14300, Ciudad de México.

⁵⁸ De conformidad con el recurso de apelación **SUP-RAP-98/2003** emitido por la Sala Superior del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación en la acción el ente infractor realiza una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo.

⁵⁹ El tope máximo de gastos de campaña para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores de la República y Diputados Federales en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012, fue establecido en los Acuerdos CG432/2011 (en cumplimiento al resolutivo segundo del CG382/2011) y CG433/2011, aprobados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil once, mismo que consistió en **\$2,240,747.23** (dos millones doscientos cuarenta mil setecientos cuarenta y siete pesos 23/100 M.N.) en el caso de las candidaturas a Senadores en las entidades federativas de Baja California Sur y Campeche.

v) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica de los sujetos obligados para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

vi) Singularidad o pluralidad de la falta.

En el caso que nos ocupa existe **singularidad** en la falta pues los sujetos obligados cometieron una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**.

Calificación de la falta

En atención a los elementos precedentes esta autoridad electoral considera que la infracción debe calificarse como **Grave Ordinaria**.

B) Imposición de la sanción

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.⁶⁰

Bajo esta tesitura no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser aplicada entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior

⁶⁰ Al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-454/2012**, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estimó que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral deberá ser acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, **“COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE”⁶¹**.

Al respecto, debe considerarse que la coalición se integró con miras a lograr un propósito común de contender en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los partidos políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición previeron el monto de recursos que cada uno aportaría.

De conformidad con la cláusula séptima del Convenio de la Coalición Movimientos Progresista que estableció: **“SÉPTIMA.-** *Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 98, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos coaligados convienen en aportar en efectivo la totalidad de los recursos que reciban por concepto de gastos de campañas, de conformidad con lo siguiente: a) Adicionalmente a los recursos a que se refiere el párrafo anterior, los partidos políticos coaligados podrán realizar aportaciones en efectivo o en especie en los términos que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás ordenamientos en la materia, previo acuerdo de la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición. (...)*”, por lo que, para determinar el porcentaje de participación se considera el financiamiento para gastos de campaña asignado a cada partido coaligado – aportado- y el monto total de financiamiento obtenido, como a continuación se desprende:

Integrantes de la Coalición “Movimiento Progresista”	Aportación de cada Partido Político Coaligado (A)	Monto total del financiamiento obtenido por los partidos coaligados (B)	Porcentaje de participación de cada partido coaligado A respecto de B
PRD	\$225,745,363.72	\$446,903,632.50	50%
PT	\$118,098,139.85		26%
MC	\$103,060,128.93		24%
Total			100%

Del porcentaje antes mencionado válidamente se puede concluir que el Partido de la Revolución Democrática participó en la formación de la otrora coalición con una

⁶¹ Tesis XXV/2002, consultable en las páginas 1010-1012 de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tesis, Volumen 2, Tomo I.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

aportación equivalente al **50%** (Cincuenta por ciento), mientras que el Partido del Trabajo aportó un **26%** (veintiséis por ciento), finalmente el Partido Movimiento Ciudadano participó en la formación de coalición con una aportación equivalente al **24%** (Veinticuatro por ciento) del monto total de los recursos con aras de formar e integrar la coalición para los cargos de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores y Diputados.

Finalmente, respecto del elemento de la *“actividad del partido político que operó como responsable del órgano de finanzas al administrar los recursos de la otrora coalición”*, cabe señalar que en la cláusula SÉPTIMA, inciso c) del Convenio de Coalición Electoral Total que para la elección de Presidente de la República, Senadores y Diputados por el principio de mayoría relativa, del Congreso de la Unión, celebran los partidos políticos nacionales de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, se advierte que *el Partido de la Revolución Democrática fue designado como el responsable del órgano de finanzas*, de conformidad con lo entonces dispuesto por el artículo 161, párrafo 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalización.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al Recurso de Apelación **SUP-RAP-166/2013**, determinó que la circunstancia que la Ley de la materia establezca determinados derechos para los partidos políticos coaligados, constituyen ***aspectos relacionados únicamente con la forma en que participan en un proceso electoral***, en consecuencia, esos ***aspectos devienen ajenos para determinar la responsabilidad de la entidad coaligada en caso de que a través de alguno de sus miembros incurra en alguna falta***.

Bajo esas consideraciones normativas, el máximo órgano jurisdiccional señaló en la sentencia referida que, ***no es una exigente de responsabilidad el hecho de que la administración de los recursos de la coalición haya quedado a cargo de uno de los partidos políticos***, máxime cuando la decisión del nombramiento del administrador se lleva a cabo por los propios institutos políticos que se coaligan.

Al efecto resulta aplicable la tesis emitida por la Sala Superior de rubro ***“SANCIONES. EN SU DETERMINACIÓN, LAS AGRAVANTES O ATENUANTES DERIVADAS DE UNA CONDUCTA IMPUTABLE A UN PARTIDO POLÍTICO, NO***

PUEDEN AFECTAR LA ESFERA JURÍDICA DE OTROS SUJETOS O ENTES DISTINTOS A AQUEL, AUN CUANDO INTEGREN UNA COALICIÓN.⁶²

En consecuencia, la participación de los partidos políticos entonces coaligados como órgano responsable de la administración de las finanzas de la otrora Coalición, no puede considerarse una circunstancia determinante, y menos aún modificativa, de la responsabilidad.

Reincidencia

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el partido político no es reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada.

- Que los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano integraron la otrora coalición Movimiento Progresista en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012, siendo el responsable financiero de la otrora coalición el Partido de la Revolución Democrática de conformidad con el convenio de coalición total aprobado por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria

⁶² Tesis CXXXIII/2002, consultable en las páginas 1798-1780 de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tesis, Volumen 2, Tomo II, cuyo contenido es el siguiente: "...Conforme a los artículos 82, párrafo 1, inciso w); 269 y 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para la determinación y, en su caso, la aplicación de las sanciones derivadas de infracciones a la normatividad electoral, el Consejo General del Instituto Federal Electoral debe tomar en cuenta las circunstancias particulares de cada caso concreto y para cada partido político, contando con una **amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción**. Sin embargo, dicha calificación de las agravantes o atenuantes de una conducta no puede realizarse en forma arbitraria o caprichosa, es decir, debe contener los acontecimientos particulares que en cada supuesto específico se suscitan, así como los razonamientos lógicos, motivos y fundamentos en que se apoya, pero sobre todo, no puede afectar la esfera jurídica de sujetos o entes distintos a aquel, que haya realizado o tipificado la conducta o circunstancia que merezca ser agravada o atenuada, puesto que, **el perjuicio o beneficio que se otorgue por la autoridad responsable, en la determinación y en su caso, la aplicación de una sanción, exclusivamente le concierne a quien la haya generado**, siendo imposible extender sus efectos a quienes no se les pueda imputar directamente la realización de cada acontecimiento, **aun cuando el partido político al cual se le deba agravar o atenuar su sanción, pertenezca a una coalición de partidos**. Lo anterior es así, porque conforme a la doctrina, las conductas agravantes son una serie de circunstancias modificativas que determinan una mayor gravedad de la culpabilidad, puesto que ponen de manifiesto un riesgo mayor del sujeto o ente que las ejecuta; por ello, las agravantes se pueden clasificar en objetivas y subjetivas, siendo las primeras, es decir las objetivas, las que denotan peligrosidad del hecho, bien sea por la facilidad de comisión en atención a los medios, sujetos, circunstancias, o por la especial facilidad para resultar impune; y las segundas, esto es las subjetivas, las que incluyen la premeditación o la reincidencia, mismas que revelan una actitud aún más reprobable en el ejecutante; por su parte, las conductas atenuantes son igualmente circunstancias modificativas de la responsabilidad, que son definidas necesariamente por el efecto sobre la determinación de la sanción, puesto que son aquellas que inciden en el grado en que finalmente se impondrá dicha sanción, y que lo hacen en sentido reductor o atenuatorio de la misma, sin llegar al extremo de excluirla, ya que se estaría hablando de otra figura jurídica, la de eximentes."

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil once, mediante resolución CG391/2011.

- Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales invocadas, por lo que al incumplir con sus obligaciones en materia de topes se **acreditó la vulneración a los valores y principios sustanciales** protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que los partidos entonces coaligados decidieron participar con la totalidad de los recursos obtenidos del financiamiento público obtenidos para las campañas electorales
- Que el porcentaje aportado por cada uno de los partidos políticos entonces coaligados correspondió a: **PRD 50%; PT 26% y MC 24%**.
- Que se tomaron en cuenta las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** las cuales acreditaron la infracción atribuible a los sujetos obligados, consistente en exceder el tope de gastos de campaña.
- Que la conducta fue **singular**.
- Que la falta se calificó como **grave ordinaria**.
- Que el monto ejercido en exceso corresponde a **\$641,321.04** (seiscientos cuarenta y un mil trescientos veintiún pesos 04/100 M.N.).
- Que no son reincidentes los sujetos obligados.

Bajo esta tesitura se considera que la sanción a imponer a los **partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano como entonces integrantes de la otrora Coalición Movimiento Progresista** es la prevista en la fracción II, numeral 1, inciso a) del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en un monto igual al ejercido en exceso, considerando los elementos objetivos y subjetivos señalados en párrafos precedentes.

En consecuencia, este Consejo General concluye que debe imponerse en lo individual al **Partido de la Revolución Democrática** el correspondiente al **50%** del monto total ejercido en exceso; por lo que la sanción que se impone al instituto

político es la consistente en una **sanción económica** por un importe de **\$320,660.52** (trescientos veinte mil seiscientos sesenta pesos 52/100 M.N.) la cual deberá de ser pagada en una sola exhibición.

En consecuencia, este Consejo General concluye que debe imponerse en lo individual al **Partido del Trabajo** el correspondiente al **26%** del monto total ejercido en exceso; por lo que la sanción que se impone al instituto político es la consistente en una **sanción económica** por un importe de **\$166,743.47** (ciento sesenta y seis mil setecientos cuarenta y tres pesos 47/100 M.N.) la cual deberá de ser pagada en una sola exhibición.

En consecuencia, este Consejo General concluye que debe imponerse en lo individual al **Partido Movimiento Ciudadano** el correspondiente al **24%** del monto total ejercido en exceso; por lo que la sanción que se impone al instituto político es la consistente en una **sanción económica** por un importe de **\$153,917.04** (ciento cincuenta y tres mil novecientos diecisiete pesos 04/100 M.N.) la cual deberá de ser pagada en una sola exhibición.

Capacidad económica.

La sanción que ahora se impone en forma alguna afecta la capacidad económica del ente infractor, toda vez que la autoridad administrativa electoral considera para ello, el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago, ambos en el ejercicio en que se impone la sanción respectiva; así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos coaligados infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al **Partido de la**

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Revolución Democrática por este Consejo General; así como, los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones.

Número	Resolución de la Autoridad Electoral	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de septiembre de 2017	Montos por saldar
1.	INE/CG771/2015	\$3,273,599.91	\$1,684,654.31	\$1,588,945.60
2.	INE/CG810/2016	\$63,016,065.36	\$42,768,867.76	\$20,247,197.60

Del cuadro anterior se advierte que al mes de septiembre de dos mil diecisiete, el partido en cita tiene un saldo pendiente de **\$21'836,143.20** (veintiún millones ochocientos treinta y seis mil ciento cuarenta y tres pesos 20/100 M.N.).

De igual forma obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al **Partido del Trabajo** por este Consejo General; así como, los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones.

Número	Resolución de la Autoridad Electoral	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de septiembre de 2017	Montos por saldar
1.	INE/CG771/2015	\$9,129,077.75	\$6,105,112.10	\$3,023,965.65

Del cuadro anterior se advierte que al mes de septiembre de dos mil diecisiete, el partido en cita tiene un saldo pendiente de **\$3'023,965.65** (tres millones veintitrés mil novecientos sesenta y cinco pesos 65/100 M.N.).

Por lo que hace al partido **Movimiento Ciudadano**, se advierte el registro de sanciones que han sido impuestas por este Consejo, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones.

Número	Resolución de la Autoridad Electoral	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de septiembre de 2017	Montos por saldar
1.	INE/CG771/2015	\$2,117,315.37	\$1,652,090.94	\$465,224.43
2.	INE/CG244/2016	\$2,875,000.00	\$1,582,615.84	\$1,292,384.16

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Del cuadro anterior se advierte que al mes de septiembre de dos mil diecisiete, el partido en cita tiene un saldo pendiente de **\$1'757,608.59** (un millón setecientos cincuenta y siete mil seiscientos ocho pesos 59/100 M.N.).

De lo anterior se desprende que, aun cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica; por tanto, los partidos infractores estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la Resolución de mérito.

D. Modificaciones a la resolución CG190/2013 en lo relativo a la otrora coalición Movimiento Progresista por lo que hace al tope de gastos de las campañas a Diputados Federales en relación al apartado G, considerando 11 del presente acatamiento. (SUP-RAP-118/2013; SUP-RAP-120/2013; SUP-RAP-124/2013; Apartado A, Tema 3, Sección de ejecución).

Toda vez que se han consolidado las cifras finales, de los informes de campaña de ingresos y gastos correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012, y en cumplimiento con lo ordenado en las ejecutorias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se individualiza el monto ejercido en exceso y se impone la sanción que en derecho corresponde a los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, entonces integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista.

Bajo esta tesitura, las modificaciones se realizan bajo dos elementos, el primero de ellos respecto de las cifras de gastos totales y finales determinadas por auditoría.

El segundo elemento, se refiere a la individualización de la sanción respecto de la conclusión relacionada con el monto ejercido en exceso y consecuente rebase al tope de gastos de campaña de los entonces candidatos a Diputados Federales de la otrora coalición Movimiento Progresista, en cumplimiento a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional en los recursos de apelación siguientes:

Sentencia Autoridad Jurisdiccional	Resolución Autoridad Responsable	Tema	Impacto conclusiones
SUP-RAP-118/2013 MC	CG190/2013 Informes de Campaña, PEF 2011-2012.	Individualización de la sanción rebase de topes de campaña.	157, 277 y 378
SUP-RAP-120/2013 PT			
SUP-RAP-124 PRD-PT			
SUP-RAP-166/2013 MC	CG242/2013 Informes Anuales 2012.		De conformidad con lo establecido en el Apartado B del presente acatamiento (SUP-RAP-164/2013),
SUP-RAP-168/2013 PT			

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Sentencia Autoridad Jurisdiccional	Resolución Autoridad Responsable	Tema	Impacto conclusiones
			la afectación se advierte en la conclusión 157 de la resolución CG190/2013.

Al respecto, la autoridad jurisdiccional determinó que en caso de acreditar el rebase de topes, la responsable debe individualizar la sanción respectiva, considerando (de manera descriptiva) además de la cantidad ejercida en exceso y la reincidencia, lo siguiente:

- El porcentaje aportado por cada uno de los partidos políticos en términos del convenio de coalición;
- La gravedad de la conducta en atención al bien jurídico tutelado;
- Distinguir el grado de participación de cada uno de los integrantes de la COA
- De forma particular la actividad de quien operó como responsable del órgano de finanzas al administrar los recursos de la coalición;
- Circunstancias de tiempo, modo y lugar.
- Capacidad económica (particularmente el financiamiento ordinario que reciben).

En este sentido, la autoridad responsable debe, en primer término, señalar de manera clara y precisa los elementos que va a tomar en cuenta para realizar la individualización de la sanción, en segundo lugar, determinar la forma en que los aplicara y, finalmente, establecer de manera fundada y motivada, la imposición de la sanción en cada caso concreto.

Visto lo procedente, a continuación se presentan las modificaciones correspondientes:

Conclusión 378

Diputados Federales

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Toda vez que en la conclusión analizada en la conclusión **378** se actualiza una conducta que vulnera el artículo 229, numeral 1 en relación al 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo

procedente es determinar las sanciones que conforme a derecho se han de imponer a los entes infractores.

Toda vez que en la conclusión analizada se establece que la otrora coalición Movimiento Progresista, vulneró lo dispuesto en el artículo 229, numeral 1 en relación al 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo procedente es determinar las sanciones que conforme a derecho se han de imponer a los entes infractores.

A continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos en comento:

“Artículo 229

*1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
(...)”*

“Artículo 342

*1. Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código:
(...)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(...)”*

Ahora bien, previo a la individualización de las sanciones que en derecho correspondan a los entonces partidos integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista, es trascendente señalar que de conformidad con el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el caso de infracciones en materia de topes de gasto de campaña la sanción a imponer será con un tanto igual al del monto ejercido en exceso, tal como se advierte a continuación:

“Artículo 354

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme lo siguiente:

a) Respecto de los partidos políticos:

I. ...

*II. Con una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. **En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de***

*simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, **con un tanto igual al del monto ejercido en exceso.** En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior.
(...)*

[Énfasis añadido]

Bajo esta tesitura el Código de la materia estableció un régimen sancionador acorde a los sujetos, conductas y sanciones, previendo en todo caso la relevancia de imponer sanciones acorde al origen de la infracción, por lo que al actualizarse la conducta infractora como lo es el rebase al tope de gasto de campaña⁶³ fijado para cada cargo de elección por la autoridad administrativa electoral, de conformidad con el artículo en comento la sanción a imponer debe corresponder a un tanto igual al ejercido en exceso.

En este contexto la autoridad electoral acreditó de manera objetiva y material que la otrora coalición Movimiento Progresista excedió el tope de campaña fijado para la elección de Diputados Federales.

Objetiva en cuanto a la existencia de ingresos y gastos que la autoridad electoral acreditó beneficiaron a los entonces candidatos a Diputados Federales y material en atención a la consolidación del gasto, lo cual representó se acumularan los montos económicos reportados y los no reportados o en su caso aquellos que representaron un beneficio económica a la entonces candidatura en cita, mismos que al dictaminarse por auditoría actualizaron un rebase al tope fijado para la elección en comento.

En el caso en comento, la autoridad electoral acreditó que la otrora coalición excedió el tope de gastos de campaña fijado para la elección de Diputados Federales por un importe de **\$1'667,009.47** (un millón seiscientos sesenta y siete mil nueve pesos 47/100 M.N.) vulnerando con ello lo establecido en los artículos transcritos en párrafos precedentes.

Visto lo anterior, de conformidad con lo establecido con el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la sanción que debe imponerse a la otrora coalición Movimiento

⁶³ “El tope de gasto de campaña es un mecanismo para fiscalizar el uso de recursos económicos, materiales y humanos con la finalidad de propiciar equidad entre los diversos participantes en la contienda electoral.” ¿Como sancionar el rebase de topes de gastos de campaña? UN EJEMPLO DE LO QUE NO FUNCIONA; Ana Laura Magaloni Kerpel y Karla Prudencio Ruíz, SERIE DE COMETNARIOS A LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL, número 61; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, primera edición 2014. P.13

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Progresista, es la consistente en una sanción económica por **\$1'667,009.47** (un millón seiscientos sesenta y siete mil nueve pesos 47/100 M.N.), la cual representa el monto ejercido en exceso.

Lo anterior, conforme a lo siguiente:

ENTIDAD	DISTRITO	TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORÍA CON GASTOS NO REPORTADOS DIPUTADOS (A)	TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA (B)	TOTAL DE GASTOS vs. TOPE DE CAMPAÑA (C) = (B) – (A)
Distrito Federal	16	1,127,885.65	\$1,120,373.61	\$7,512.04
Distrito Federal	20	1,839,833.07	1,120,373.61	\$719,459.46
Distrito Federal	26	1,154,606.02	1,120,373.61	\$34,232.41
Durango	4	1,298,992.43	1,120,373.61	\$178,618.82
México	36	1,216,253.49	1,120,373.61	\$95,879.88
Michoacán	10	1,201,196.84	1,120,373.61	\$80,823.23
Nayarit	1	1,408,476.72	1,120,373.61	\$288,103.11
Tabasco	4	1,128,869.86	1,120,373.61	\$8,496.25
Veracruz	10	1,374,257.88	1,120,373.61	\$253,884.27
TOTAL		\$11,750,371.96	\$10,083,362.49	\$1,667,009.47

Ahora bien, resulta oportuno precisar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, párrafo 1 y 98, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos tienen derecho a formar coaliciones para participar en las elecciones; teniendo en tal caso la obligación de manifestar en el convenio de coalición, que se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones, **como si se tratara de un solo partido.**

Consecuentemente al actualizarse un rebase al tope de gastos, la responsabilidad resulta imputable a la otrora coalición, aun cuando la sanción se impone a los partidos políticos que la integraron.

En este sentido se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente **SUP-RAP-166/2013**, señalando que las violaciones cometidas por la Coalición, necesariamente y por ficción de la ley son atribuibles a ésta, ya sea que la falta la cometa uno o varios de los institutos políticos que la conforman, en tanto la infracción se refracta a cada uno de sus integrantes, puesto que no puede señalarse como responsable directo sólo a uno de ellos, ya que la conformación del ente jurídico colectivo admite esa forma de intervención conjunta y este hecho presupone un marco punitivo específico o particular por voluntad del legislador.

Al respecto, la Sala Superior en forma reiterada ha sostenido que el Consejo General en la aplicación de sanciones derivadas de infracciones a la normatividad electoral, debe considerar la calidad y características del sujeto infractor, las circunstancias particulares del caso concreto y las condiciones específicas de cada partido político integrante de la coalición.

Bajo las consideraciones expuestas, a cada uno de los integrantes de la coalición, le es imputable la conducta irregular como presupuesto de la sanción, y no como forma de intervención punible referida expresamente a la participación individual de los partidos políticos coaligados.

Precisado lo anterior, resulta que para fijar la sanción a los **partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano** entonces integrantes de la otrora Coalición, la autoridad administrativa electoral debe atender a las características particulares del caso como son las circunstancias de modo, tiempo y lugar; bien jurídico tutelado; se trata de integrantes de una coalición; el porcentaje de participación de cada uno de ellos conforme al convenio de coalición y la capacidad económica.⁶⁴

Al respecto resulta relevante destacar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el alcance y significado del artículo 279, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización vigente en dos mil doce, corresponde a su integridad y al sistema normativo en que se inserta, por lo que señaló que si bien la intención del legislador ordinario fue sancionar la violación al rebase de los topes de gastos de campaña con un monto igual al ejercido en exceso; la sanción que por esa cantidad se aplica a los integrantes de una coalición necesariamente debe atender a los lineamientos previstos en el artículo 355, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales⁶⁵, para fijar la cuantía de manera individualizada a cada uno de los institutos políticos coaligados.

⁶⁴ De conformidad con lo establecido en los recursos de apelación SUP-RAP-118/2013, SUP-RAP-120/2013, SUP-RAP-166/2013, SUP-RAP-168/2013, SUP-RAP-172/2013, SUP-RAP-173/2013, SUP-RAP-174/2013, SUP-RAP-175/2013, SUP-RAP-177/2013, SUP-RAP-178/2013 emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

⁶⁵ Artículo 355...5. *Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes: a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; c) Las condiciones socioeconómicas del infractor; d) Las condiciones externas y los medios de ejecución; e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. 6. Se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable del*

Así, el órgano jurisdiccional determinó que la expresión “equivalentes” contenida en el precepto reglamentario referido, a la luz de una interpretación sistemática con los artículos 342, 354 y 355 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de los párrafos 1 y 2, del propio artículo 279, permite concluir que la locución de mérito no puede entenderse como igualdad o paridad. Por el contrario, debe considerarse ***vinculada directamente con las condiciones particulares de cada partido político integrante de la coalición; es decir, la responsabilidad del sujeto y su situación específica, las condiciones objetivas y subjetivas de la conducta sancionada y del sujeto infractor.***

Conforme a lo expuesto y atento al origen de la conducta se procede a individualizar la sanción que en derecho corresponda a los entonces partidos integrantes de la de la otrora coalición Movimiento Progresista, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

Bajo esta tesitura, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones que en derecho correspondan de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado como **SUP-RAP-05/2010**.⁶⁶

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) Calificación de la falta

i) Trascendencia de las normas transgredidas.

incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el presente Código incurra nuevamente en la misma conducta infractora al presente ordenamiento legal...”

⁶⁶ Al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-05/2010**, la máxima autoridad jurisdiccional señaló que para calificar la falta se debe considerar lo siguiente: a) Valor protegido o trascendencia de la norma; b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto; c) La naturaleza de la acción u omisión; d) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron; e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta; f) su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido; g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma y h) La capacidad económica del ente infractor.

Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

Una falta sustancial en materia de fiscalización trae consigo entre otras cuestiones, la falta de transparencia en el manejo de los recursos – origen, monto-, la omisión en la rendición de cuentas –destino y aplicación-, la inequidad de recursos en las contiendas e implica también el incumplimiento de las normas en la materia.

Bajo esta tesitura, en el análisis de la conclusión **378** se establece que la otrora coalición Movimiento Progresista, vulneró lo dispuesto en el artículo 229, numeral 1 en relación al 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que a la letra señalan:

“Artículo 229

*1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
(...)”*

“Artículo 342

*1. Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código:
(...)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(...)”*

De los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.

Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.

En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los postulados que formulen.

Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.

Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.

ii) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

Bajo esta tesitura, los bienes jurídicos tutelados por la norma infringida son los principios de equidad que rigen al sistema mixto de financiamiento, así como la legalidad de su actuar.

En el presente caso las irregularidades imputables al ente político se traducen en infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico tutelado.

iii) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación a la conducta identificada en la conclusión **378** se identificó que el actuar del ente infractor fue positivo⁶⁷, toda vez que con su actuar excedió el tope de gastos de campaña fijado para la elección de Diputados Federales.

Visto lo anterior, la falta corresponde a una acción toda vez que el artículo 229, numeral 1 en relación al 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, contiene una norma prohibitiva, consistente en la obligación de no exceder el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad⁶⁸, por lo que en el caso concreto el actuar del sujeto obligado actualizó la conducta prohibida por la norma.

iv) Circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Modo: De la consolidación de ingresos y gastos totales dictaminados por la autoridad electoral en la revisión del informe de campaña y en cumplimiento a las ejecutorias de mérito, se determinó que la otrora coalición Movimiento Progresista, excedió el tope de gastos fijado para la campaña de Diputados Federales, por un monto de **\$1'667,009.47** (un millón seiscientos sesenta y siete mil nueve pesos 47/100 M.N.).

Tiempo: La irregularidad atribuida surgió durante la revisión del informe de campaña de Diputados Federales en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012; así como de la revisión a los ingresos y gastos realizada a las cifras del informe de campaña en cumplimiento a las ejecutorias de mérito en relación a la sección de ejecución del presente acatamiento.

⁶⁷ De conformidad con el recurso de apelación **SUP-RAP-98/2003** emitido por la Sala Superior del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación en la acción el ente infractor realiza una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo.

⁶⁸ El tope máximo de gastos de campaña para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores de la República y Diputados Federales en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012, fue establecido en los Acuerdos CG432/2011 (en cumplimiento al resolutivo segundo del CG382/2011) y CG433/2011, aprobados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil once, mismo que consistió en **\$1,120,373.61** (un millón ciento veinte mil trescientos setenta y tres pesos 61/100 M.N.) por lo que hace a Diputados Federales.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la autoridad electoral ubicadas en Avenida Acoxta número 436, Colonia Ex hacienda Coapa, Tlalpan, C.P. 14300, Ciudad de México.

v) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica de los sujetos obligados para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

vi) Singularidad o pluralidad de la falta.

En el caso que nos ocupa existe **singularidad** en la falta pues los sujetos obligados cometieron una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**.

Calificación de la falta

En atención a los elementos precedentes esta autoridad electoral considera que la infracción debe calificarse como **Grave Ordinaria**.

B) Imposición de la sanción

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.⁶⁹

Bajo esta tesitura no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

⁶⁹ Al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-454/2012**, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estimó que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral deberá ser acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser aplicada entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, **“COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE”⁷⁰**.

Al respecto, debe considerarse que la coalición se integró con miras a lograr un propósito común de contender en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los partidos políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición previeron el monto de recursos que cada uno aportaría.

De conformidad con la cláusula séptima del Convenio de la Coalición Movimientos Progresista que estableció: **“SÉPTIMA.-** *Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 98, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos coaligados convienen en aportar en efectivo la totalidad de los recursos que reciban por concepto de gastos de campañas, de conformidad con lo siguiente: a) Adicionalmente a los recursos a que se refiere el párrafo anterior, los partidos políticos coaligados podrán realizar aportaciones en efectivo o en especie en los términos que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás ordenamientos en la materia, previo acuerdo de la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición. (...)*”, por lo que, para determinar el porcentaje de participación se considera el financiamiento para gastos de campaña asignado a cada partido coaligado – aportado- y el monto total de financiamiento obtenido, como a continuación se desprende:

Integrantes de la Coalición “Movimiento Progresista”	Aportación de cada Partido Político Coaligado (A)	Monto total del financiamiento obtenido por los partidos coaligados (B)	Porcentaje de participación de cada partido coaligado A respecto de B
PRD	\$225,745,363.72	\$446,903,632.50	50%
PT	\$118,098,139.85		26%
MC	\$103,060,128.93		24%
Total			100.00%

⁷⁰ Tesis XXV/2002, consultable en las páginas 1010-1012 de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tesis, Volumen 2, Tomo I.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Del porcentaje antes mencionado válidamente se puede concluir que el Partido de la Revolución Democrática participó en la formación de la otrora coalición con una aportación equivalente al **50%** (cincuenta por ciento), mientras que el Partido del Trabajo aportó un **26%** (veintiséis por ciento), finalmente el Partido Movimiento Ciudadano participó en la formación de coalición con una aportación equivalente al **24%** (veinticuatro por ciento) del monto total de los recursos con aras de formar e integrar la coalición para los cargos de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores y Diputados.

Finalmente, respecto del elemento de la *“actividad del partido político que operó como responsable del órgano de finanzas al administrar los recursos de la otrora coalición”*, cabe señalar que en la cláusula **SÉPTIMA, inciso c) del Convenio de Coalición Electoral Total** que para la elección de Presidente de la República, Senadores y Diputados por el principio de mayoría relativa, del Congreso de la Unión, celebran los partidos políticos nacionales de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, se advierte que *el Partido de la Revolución Democrática fue designado como el responsable del órgano de finanzas*, de conformidad con lo entonces dispuesto por el artículo 161, párrafo 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalización.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al Recurso de Apelación **SUP-RAP-166/2013**, determinó que la circunstancia que la Ley de la materia establezca determinados derechos para los partidos políticos coaligados, constituyen **aspectos relacionados únicamente con la forma en que participan en un proceso electoral**, en consecuencia, esos **aspectos devienen ajenos para determinar la responsabilidad de la entidad coaligada en caso de que a través de alguno de sus miembros incurra en alguna falta**.

Bajo esas consideraciones normativas, el máximo órgano jurisdiccional señaló en la sentencia referida que, **no es una eximente de responsabilidad el hecho de que la administración de los recursos de la coalición haya quedado a cargo de uno de los partidos políticos**, máxime cuando la decisión del nombramiento del administrador se lleva a cabo por los propios institutos políticos que se coaligan.

Al efecto resulta aplicable la tesis emitida por la Sala Superior de rubro **“SANCIONES. EN SU DETERMINACIÓN, LAS AGRAVANTES O ATENUANTES DERIVADAS DE UNA CONDUCTA IMPUTABLE A UN PARTIDO POLÍTICO, NO**

PUEDEN AFECTAR LA ESFERA JURÍDICA DE OTROS SUJETOS O ENTES DISTINTOS A AQUEL, AUN CUANDO INTEGREN UNA COALICIÓN.⁷¹

En consecuencia, la participación de los partidos políticos entonces coaligados como órgano responsable de la administración de las finanzas de la otrora Coalición, no puede considerarse una circunstancia determinante, y menos aún modificativa, de la responsabilidad.

Reincidencia

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el partido político no es reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada.

- Que los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano integraron la otrora coalición Movimiento Progresista en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012, siendo el responsable financiero de la otrora coalición el Partido de la Revolución Democrática de conformidad con el convenio de coalición total aprobado por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria

⁷¹ Tesis CXXXIII/2002, consultable en las páginas 1798-1780 de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tesis, Volumen 2, Tomo II, cuyo contenido es el siguiente: "...Conforme a los artículos 82, párrafo 1, inciso w); 269 y 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para la determinación y, en su caso, la aplicación de las sanciones derivadas de infracciones a la normatividad electoral, el Consejo General del Instituto Federal Electoral debe tomar en cuenta las circunstancias particulares de cada caso concreto y para cada partido político, contando con una **amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción**. Sin embargo, dicha calificación de las agravantes o atenuantes de una conducta no puede realizarse en forma arbitraria o caprichosa, es decir, debe contener los acontecimientos particulares que en cada supuesto específico se suscitan, así como los razonamientos lógicos, motivos y fundamentos en que se apoya, pero sobre todo, no puede afectar la esfera jurídica de sujetos o entes distintos a aquel, que haya realizado o tipificado la conducta o circunstancia que merezca ser agravada o atenuada, puesto que, **el perjuicio o beneficio que se otorgue por la autoridad responsable, en la determinación y en su caso, la aplicación de una sanción, exclusivamente le concierne a quien la haya generado**, siendo imposible extender sus efectos a quienes no se les pueda imputar directamente la realización de cada acontecimiento, **aun cuando el partido político al cual se le deba agravar o atenuar su sanción, pertenezca a una coalición de partidos**. Lo anterior es así, porque conforme a la doctrina, las conductas agravantes son una serie de circunstancias modificativas que determinan una mayor gravedad de la culpabilidad, puesto que ponen de manifiesto un riesgo mayor del sujeto o ente que las ejecuta; por ello, las agravantes se pueden clasificar en objetivas y subjetivas, siendo las primeras, es decir las objetivas, las que denotan peligrosidad del hecho, bien sea por la facilidad de comisión en atención a los medios, sujetos, circunstancias, o por la especial facilidad para resultar impune; y las segundas, esto es las subjetivas, las que incluyen la premeditación o la reincidencia, mismas que revelan una actitud aún más reprobable en el ejecutante; por su parte, las conductas atenuantes son igualmente circunstancias modificativas de la responsabilidad, que son definidas necesariamente por el efecto sobre la determinación de la sanción, puesto que son aquellas que inciden en el grado en que finalmente se impondrá dicha sanción, y que lo hacen en sentido reductor o atenuatorio de la misma, sin llegar al extremo de excluirla, ya que se estaría hablando de otra figura jurídica, la de eximentes."

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil once, mediante resolución CG391/2011.

- Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales invocadas, por lo que al incumplir con sus obligaciones en materia de topes se **acreditó la vulneración a los valores y principios sustanciales** protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que los partidos entonces coaligados decidieron participar con la totalidad de los recursos obtenidos del financiamiento público obtenidos para las campañas electorales
- Que el porcentaje aportado por cada uno de los partidos políticos entonces coaligados correspondió a: **PRD 50%; PT 26% y MC 23%**.
- Que se tomaron en cuenta las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** las cuales acreditaron la infracción atribuible a los sujetos obligados, consistente en exceder el tope de gastos de campaña.
- Que la conducta fue **singular**.
- Que la falta se calificó como **grave ordinaria**.
- Que el monto ejercido en exceso corresponde a **\$1'667,009.47** (un millón seiscientos sesenta y siete mil nueve pesos 47/100 M.N.).
- Que no son reincidentes los sujetos obligados.

Bajo esta tesitura se considera que la sanción a imponer a los **partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano como entonces integrantes de la otrora Coalición Movimiento Progresista** es la prevista en la fracción II, numeral 1, inciso a) del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en un monto igual al ejercido en exceso, considerando los elementos objetivos y subjetivos señalados en párrafos precedentes.

En consecuencia, este Consejo General concluye que debe imponerse en lo individual al **Partido de la Revolución Democrática** el correspondiente al **50%** del monto total ejercido en exceso; por lo que la sanción que se impone al instituto

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

político es la consistente en una sanción económica por un importe de **\$833,504.73** (ochocientos treinta y tres mil quinientos cuatro pesos 73/100 M.N.) la cual deberá de ser pagada en una sola exhibición.

En consecuencia, este Consejo General concluye que debe imponerse en lo individual al **Partido del Trabajo** el correspondiente al **26%** del monto total ejercido en exceso; por lo que la sanción que se impone al instituto político es la consistente en una sanción económica por un importe de **\$433,422.46** (cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos veintidós pesos 46/100 M.N.) la cual deberá de ser pagada en una sola exhibición.

En consecuencia, este Consejo General concluye que debe imponerse en lo individual al **partido Movimiento Ciudadano** el correspondiente al **24%** del monto total ejercido en exceso; por lo que la sanción que se impone al instituto político es la consistente en una sanción económica por un importe de **\$400,082.27** (cuatrocientos mil ochenta y dos pesos 27/100 M.N.) la cual deberá de ser pagada en una sola exhibición.

Capacidad económica.

La sanción que ahora se impone en forma alguna afecta la capacidad económica del ente infractor, toda vez que la autoridad administrativa electoral considera para ello, el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago, ambos en el ejercicio en que se impone la sanción respectiva; así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos coaligados infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al **Partido de la**

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Revolución Democrática por este Consejo General; así como, los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones.

Número	Resolución de la Autoridad Electoral	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de septiembre de 2017	Montos por saldar
1.	INE/CG771/2015	\$3,273,599.91	\$1,684,654.31	\$1,588,945.60
2.	INE/CG810/2016	\$63,016,065.36	\$42,768,867.76	\$20,247,197.60

Del cuadro anterior se advierte que al mes de septiembre de dos mil diecisiete, el partido en cita tiene un saldo pendiente de **\$21'836,143.20** (veintiún millones ochocientos treinta y seis mil ciento cuarenta y tres pesos 20/100 M.N.).

De igual forma obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al **Partido del Trabajo** por este Consejo General; así como, los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones.

Número	Resolución de la Autoridad Electoral	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de septiembre de 2017	Montos por saldar
1.	INE/CG771/2015	\$9,129,077.75	\$6,105,112.10	\$3,023,965.65

Del cuadro anterior se advierte que al mes de septiembre de dos mil diecisiete, el partido en cita tiene un saldo pendiente de **\$3'023,965.65** (tres millones veintitrés mil novecientos sesenta y cinco pesos 65/100 M.N.).

Por lo que hace al partido **Movimiento Ciudadano**, se advierte el registro de sanciones que han sido impuestas por este Consejo, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones.

Número	Resolución de la Autoridad Electoral	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de septiembre de 2017	Montos por saldar
1.	INE/CG771/2015	\$2,117,315.37	\$1,652,090.94	\$465,224.43
2.	INE/CG244/2016	\$2,875,000.00	\$1,582,615.84	\$1,292,384.16

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Del cuadro anterior se advierte que al mes de septiembre de dos mil diecisiete, el partido en cita tiene un saldo pendiente de **\$1'757,608.59** (un millón setecientos cincuenta y siete mil seiscientos ocho pesos 59/100 M.N.).

De lo anterior se desprende que, aun cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica; por tanto, los partidos infractores estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la Resolución de mérito.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

13. Modificaciones al Dictamen Consolidado CG242/2013 en lo relativo al Partido Revolucionario Institucional correspondientes a faltas formales y fondo. (SUP-RAP-162/2013; Apartado B, Sección de ejecución).

La Sala Superior determinó en el caso de la conclusión **41** del Dictamen Consolidado de la revisión de los informes Anuales del ejercicio 2012 que el Partido Revolucionario Institucional sí justificó el objeto partidista por concepto de “Servicios de desayuno” por un importe de \$22,968.00; en lo que atañe a la conclusión **79**, determinó subsanar lo referente a la contratación de servicios con 11 de los 12 proveedores y únicamente sancionar la contratación con uno de ellos al no demostrar el objeto partidista de los gastos, por último, se determinó fundado el agravio en virtud de que en la conclusión **77** la falta se calificó de carácter sustancial o de fondo cuando en realidad debió de ser de carácter formal por lo que procedió a revocar la sanción impuesta al Partido Revolucionario Institucional, por tanto se modifican las conclusiones para quedar en los siguientes términos:

Conclusión	Determinación original	Determinación final
41	\$544,984.46	\$522,016.46
77	Falta sustancial	Falta de forma
79	\$1,810,817.12	\$50,000.00

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En congruencia con lo anterior, se procede a modificar el dictamen consolidado del Partido Revolucionario Institucional como a continuación se plantea, emitiéndose pronunciamiento únicamente respecto de aquellas cuestiones señaladas por la Sala Superior, por lo que aquellos apartados que no fueron revocados no serán referidos:

Conclusión 41

Respecto de la observación que originó la conclusión 41 del Dictamen Consolidado relacionada a la cuenta “Servicios Generales”, se localizó una póliza por concepto de “Congresos”, que presenta como soporte documental factura de proveedores y copia de cheque; sin embargo, el partido omitió indicar el objeto partidista del gasto.

En consecuencia, toda vez que el Partido Revolucionario Institucional presentó un Memorándum y una fotografía respecto a una de las pólizas, estos no indican a que evento corresponden, por lo que no se justifica el gasto; por tal razón; la observación quedó no subsanada por un importe de \$544,984.46.

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes.

En estricto acatamiento a lo señalado por la Sala Superior, esta autoridad considera justificado el gasto por concepto de “servicio de desayunos” por un importe de \$22,968.00, por tal razón la observación quedó no subsanada por un importe de \$522,016.46. **(Conclusión 41)**

Al respecto, el monto involucrado de la observación corresponde a un importe de **\$522,016.46 (Quinientos veintidós mil dieciséis pesos 46/100 MN).**

Conclusión 79

Cabe destacar que la conclusión 79 del Dictamen Consolidado se relaciona con gastos por concepto de propaganda utilitaria que presentan como soporte documental facturas de proveedores y contratos de prestación de servicios los cuales no corresponden a los gastos reportados.

En consecuencia, al omitir presentar 12 contratos de prestación de servicios, así como las pólizas con su respectivo soporte documental por un importe de

\$1,810,817.12, el partido incumplió con lo establecido en el artículo 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Visto lo anterior, se modifica la parte final de la observación para quedar en los términos siguientes.

En este sentido, en congruencia con las consideraciones y razonamientos realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la ejecutoria de mérito, esta autoridad considera que el Partido Revolucionario Institucional cumplió con los requisitos establecidos respecto de los 11 de los 12 contratos de prestación que le fueron observados y sus pólizas con soporte documental, al existir coincidencia entre las pólizas contables, los importes de los cheques, y el contenido y monto de las facturas, con las cantidades estipuladas en los respectivos contratos de prestación de servicios, su modo de pago, así como de lo establecido y detallado en el respectivo anexo 1 de cada uno de los contratos, donde se especificaron las cantidades y objetos que el proveedor se obligó a elaborar.

De los anterior existen las muestras correspondientes, mismas que obran en copia simple en el expediente que se resuelve, sin embargo, en lo que corresponde a omitir presentar el contrato de prestación de servicios, así como las pólizas con su respectivo soporte documental de un proveedor, el partido en comento incumplió con lo establecido en el artículo 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización por un importe de **\$50,000.00. (Conclusión 79)**

Al respecto, el monto involucrado de la observación corresponde a un importe de **\$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 MN).**

Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado del Partido Revolucionario Institucional

41. El partido reportó gastos por concepto de eventos; de los cuales no justificó el objeto partidista por un importe de \$522,016.46 (\$39,775.04, \$9,147.42, \$288,724.00, \$89,250.00, \$58,000.00 y \$37,120.00).
79. En la cuenta de Gastos de Propaganda, el partido reportó un gasto en el que omitió el contrato de prestación de servicios con su respectivo soporte documental por un importe de \$50,000.00.

14. Modificaciones a la Resolución INE/CG242/2013 en lo relativo al Partido Revolucionario Institucional contemplado en el considerando 2.2, inciso a), b) y c) en relación al considerando 13 del presente acatamiento. (SUP-RAP-162/2013; Apartado B, Sección de ejecución).

A continuación se procederá a modificar la resolución **INE/CG242/2013** en lo tocante a su considerando **2.2** inciso **a), b) y c)**, así como al correlativo resolutivo **SEGUNDO**, derivado de los ajustes realizados en el dictamen consolidado del partido político a la conclusión **79**, así como a lo resuelto por la Sala Superior en relación a la conclusión **41**, es decir, dejar de considerar al partido como reincidente por esa conducta; y atendiendo al cambio de la conclusión **77** que se sancionaba como falta sustantiva para sancionarse como formal.

Para tal efecto, en torno a las faltas formales se considerarán los montos de aquellas que no tuvieron modificación derivado del **SUP-RAP-162/2013**, ya que las mismas quedaron firmes, pero la imposición de la sanción debe tomar en cuenta la totalidad de las conductas al realizarse el análisis conjunto de las mismas por su naturaleza, lo que se sanciona en los siguientes términos.

9.2 Partido Revolucionario Institucional

De la revisión llevada a cabo al dictamen referido y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el Partido Revolucionario Institucional son las siguientes:

(...)

a) 58 faltas de carácter formal: conclusiones **5, 6, 7, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 80, 96, 97 y 99**. Ahora bien, respecto a las conclusiones **5, 6, 7 y 67**, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso, respectivamente. Por lo que se refiere a la conclusión **44** se ordena dar vista al Instituto Electoral del estado de Guerrero; así mismo, por lo que se refiere a la conclusión **99** se ordena dar vista a los Institutos Electorales de Chiapas, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.

b) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **41, 57 y 74**.

c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **76** y **79**.

d) Se deja sin efectos con motivo del SUP-RAP-162/2013.

(...)

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, mismas que tienen relación con el apartado de ingresos y egresos, las cuales se analizarán por temas.

(...)

Conclusión 77

“En la cuenta de Gastos de Propaganda, el partido expidió una doble factura por la existencia de un error en el domicilio al capturarla por primera vez, situación que no fue aclarada de manera oportuna.”

(...)

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.

- f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político nacional, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como **(1)** se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el Partido

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Revolucionario Institucional, y en la columna **(2)** se indica si se trata de una omisión o una acción.

Descripción de la Irregularidad observada (1)	Acción omisión (2)
(...)	
<i>77. En la cuenta de Gastos de Propaganda, el partido expidió una doble factura por la existencia de un error en el domicilio al capturarla por primera vez, situación que no fue aclarada de manera oportuna.</i>	Omisión
(...)	

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: Tal como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de conductas realizadas por el partido político, por lo que para efectos de su exposición cabe referirnos a lo señalado en la columna (1) del citado cuadro, siendo lo que en ella se expone, el modo de llevar a cabo las violaciones al código electoral.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el procedimiento de revisión correspondiente del Informe Anual de los Ingresos y Gastos del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente al ejercicio 2012.

Lugar: Las irregularidades se actualizaron en las oficinas de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, ubicadas en Avenida Acoxta número 436, Colonia Exhacienda Coapa, Delegación Tlalpan, C.P. 14300, México, Distrito Federal.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del Partido Revolucionario Institucional para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su puesta en peligro.

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), **por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público**⁷².

(...)

En las conclusiones en comento el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 283 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala:

(...)

“Artículo 283

1. Los partidos deberán asegurarse que el sistema:

- a) Refleje en sus registros información veraz y comprobable que permita verificar la aplicación de recursos;*
- b) Facilite el reconocimiento de los rubros de gasto;*
- c) Refleje un registro congruente y ordenado de las operaciones, y*
- d) Permita medir la eficacia y eficiencia del gasto.”*

⁷² En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:

“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen una mera falta formal, **porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos**, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.

En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad **por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público**, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”

(...)

De la valoración en conjunto de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que el partido, realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la fusión de la fiscalización.

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.

En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara.

Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia los artículos referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o privado del sujeto obligado.

En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos del sujeto obligado, de conformidad con los preceptos previamente citados, tales como la realización de operaciones aritméticas incorrectas; informar de manera extemporánea la apertura de cuentas bancarias; presentación de cheques; cifras reportadas en el formato correspondiente que no coinciden contra los saldos reportados en la balanza de comprobación, entre otros.

Esto es, se trata de diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los

requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político, derivadas de la revisión del Informe de los Ingresos y Gastos de Campaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí mismas constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño

material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de resultado.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación

de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en diversas conductas infractoras imputables al ente político, las cuales pusieron en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control y cotejar lo reportado por el ente en relación a los informes de aquellos candidatos que participaron en el proceso electoral para ganar un cargo de elección popular.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado infractor cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter FORMAL.

Calificación de la falta

Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

- Se trata de diversas faltas formales, al incumplir con diversas normas que ordenan un debido registro contable, la entrega de formatos debidamente requisitados, la presentación en tiempo los informes, la entrega del informe en el Sistema Integral de Fiscalización, de documentación soporte de ingresos y egresos del ente político infractor, de diferencias en el registro contable, entre otras, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos en la materia.
- Con la actualización de faltas formales no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de entes políticos, sino únicamente su puesta en peligro.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que las infracciones deben calificarse como **LEVES**

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta cometida.

Este Consejo General estima que la falta de forma cometida por el sujeto obligado debe calificarse como **LEVE**.

Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político, adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.

En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades que desplegó el sujeto obligado, y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con su obligación de presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos, dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los entes se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo el principio del adecuado control en la rendición de cuentas, en tanto que no es posible verificar que el sujeto obligado, hubiese cumplido con la totalidad de obligaciones a que estuvo sujeto.

Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los entes políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos.

De la revisión al Informe en comentó del ente político, se advierte que el mismo incumplió con su obligación de presentar documentación comprobatoria soporte.

Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en diversas faltas que impidieron que la autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que el ente utilizó diversos recursos.

No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el sujeto obligado presentó conductas que implican una contravención a lo dispuesto por los ordenamientos electorales, tal y como se ha señalado en el apartado de calificación de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta.

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no es reincidente respecto de la conducta que aquí se han analizado.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga, ya que mediante el acuerdo CG623/2016 aprobado por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral el pasado veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se le asignó un total de \$1,004,337.987 (Mil cuatro millones trescientos

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

treinta y siete mil novecientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el año 2017.

En este tenor, es oportuno mencionar que el Partido Revolucionario Institucional está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral.

Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, obran dentro de los archivos de la autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Revolucionario Institucional, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual a deducir	Saldo
INE/CG198/2017-SEGUNDO-a)	FEDERAL	\$139,581.01	\$0.01	\$0.00
INE/CG808/2016-PRIMERO-a	FEDERAL	\$21,181.60	\$0.55	\$0.04
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-1	FEDERAL	\$38,404.44	\$38,404.44	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-2	FEDERAL	\$40,015.86	\$40,015.86	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-3	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-4	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-5	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-6	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-7	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-8	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-9	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-10	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-11	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-12	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual a deducir	Saldo
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-13	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-14	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-15	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-16	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-17	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-18	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-19	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-20	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-21	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-22	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-23	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-24	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-25	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
Total:		\$1,232,787.05	\$1,072,025.00	\$0.04

De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un saldo pendiente de \$.04 (cero pesos 04/100 M.N.) por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.

De lo anterior se desprende que, aun cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica; por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la Resolución de mérito.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 354, numeral 1, inciso a) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“I. Con amonestación pública;

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;*
- III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;*
- IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;*
- V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”*

En este contexto, del análisis realizado a la(s) conducta(s) infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **LEVE**.
- Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
- Que el sujeto obligado, conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.
- Que el sujeto obligado, no es reincidente.
- Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.

Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado.

En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto involucrado, toda vez que las características mismas de la infracción, en ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracciones relacionadas con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.

Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la comisión intencional o culpable de la falta; la trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la conducta infractora.

De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

recursos con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa electoral.

Así pues, tomando en consideración las particularidades previamente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como ente político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia del procedimiento de mérito.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medida y Actualización) es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad,

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquella que guarde proporción a la falta y las circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos objetivos que rodean las faltas formales se llegó a la conclusión de que las mismas son clasificables como leves, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa y la ausencia de reincidencias, el conocimiento de las conductas sancionadas y las normas infringidas, la pluralidad de conductas; por lo que el objeto de la sanción a imponer es evitar o fomentar el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción II, inciso a) del artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a **2288 (Dos mil doscientos ochenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización** vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de **\$172,721.12 (Ciento setenta y dos mil setecientos veintiún pesos 12/100 M.N.).^[1]**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del

^[1] La multa impuesta en la presente resolución corresponde a los DSMGVDF para el ejercicio 2012, actualizándose al valor a la Unidad de Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2017 publicado en el Diario Oficial de la Federación el día nueve de enero del presente año, mismo que corresponde a \$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.).

artículo 38, numeral 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 41, (...).

Conclusión 41

“41. El partido reportó gastos por concepto de eventos; de los cuales no justificó el objeto partidista por un importe de \$522,016.46 (\$39,775.04, \$9,147.42, \$288,724.00, \$89,250.00, \$58,000.00 y \$37,120.00).”

(...)

II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que violentan el artículo 38, numeral 1, inciso o), del código de la materia, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método y para facilitar el análisis y sanción de las mismas, se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.

g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

En relación con las irregularidades identificadas en las conclusiones 41 (...), del Dictamen Consolidado, se identificó que el partido político omitió justificar el objeto partidista, respecto de diversos gastos realizados durante el ejercicio 2012, por concepto de eventos, transporte y propaganda.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones del partido político, toda vez que reportó gastos por concepto de eventos, transporte y propaganda, omitiendo justificar el objeto partidista de los gastos erogados por servicios funerarios, boletos de avión, coffe break, compra de urnas y mamparas, traslado de alumnos, capacitación a comisionados, pago de tenencia de 2 equipos de transporte, y compra de pintura vinílica, brochas, rodillos y 600 kgs de carne de res, violentando lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso o), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: El partido omitió presentar documentación comprobatoria que justificara el objeto partidista de erogaciones por concepto de servicios funerarios, boletos de avión, coffe break, compra de urnas y mamparas, traslado de alumnos, capacitación a comisionados, pago de tenencia de 2 equipos de transporte, y compra de pintura vinílica, brochas, rodillos y 600 kgs de carne de res. De ahí que el partido contravino lo dispuesto por la normatividad electoral aplicable.

Descripción de las Irregularidades observadas
<i>41. El partido reportó gastos por concepto de eventos; de los cuales no justificó el objeto partidista por un importe de \$522,016.46. (\$39,775.04, \$9,147.42, \$288,724.00, \$89,250.00, \$58,000.00 y \$37,120.00).</i>
(...)

Como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de conductas realizadas por el Partido Revolucionario Institucional, por lo que para efectos de su exposición cabe referirnos a lo señalado en la columna (“Descripción de las Irregularidades observadas”) del citado cuadro, siendo lo que en ella se expone el modo de llevar a cabo las violaciones al artículo 38, numeral 1, inciso o), del código electoral.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron del estudio a través del procedimiento de revisión del Informe Anual de los Ingresos y Gastos de los partidos políticos durante el ejercicio 2012.

Lugar: Las irregularidades se actualizaron en las oficinas de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, ubicadas en Avenida

Acoxpa número 436, Colonia Exhacienda de Coapa, Delegación Tlalpan, C.P. 14300, México, Distrito Federal.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del Partido Revolucionario Institucional, para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas sustanciales por no justificar el objeto partidista de diversas erogaciones, no se tiene certeza sobre el uso debido de los recursos.

Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, impide garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido político en cuestión viola los valores antes establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.

Al efecto, es importante destacar que el artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga la calidad de entidades de interés público a los partidos políticos y coaliciones, remitiendo a la legislación secundaria la determinación de las reglas de su injerencia en los procesos electorales.

De igual forma, ese precepto establece que dichos institutos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos,

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Por su parte, la Base II de la aludida disposición constitucional establece que la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, por lo tanto, tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que se establezcan en la ley, pero, además, en la propia ley, se deben señalar las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

De igual forma, en la apuntada base constitucional señala que el financiamiento público para los partidos políticos que conserven su registro, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de las actividades siguientes:

- a) Ordinarias permanentes;
- b) Tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, y
- c) Las relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales (actividades específicas).

En concordancia con lo expuesto, el artículo 36, numeral 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como derecho de los partidos políticos, el recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el artículo 78 del citado ordenamiento legal, en concordancia con la Base II del citado artículo 41 constitucional, dispone que los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en el mismo código, precisando los rubros o conceptos del mismo, y que evidencian el destino que debe darse a los mismos, en los siguientes términos: para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, para gastos de campaña, y por actividades específicas como entidades de interés público.

De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos, pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades:

a) Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en:

- Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la divulgación de su ideología y de su plataforma política), a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la integración de la representación nacional, así como a incrementar constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser realizadas de manera permanente y,
- Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y participe en la vida democrática del país.

b) Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que se desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que serán postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su plataforma electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus candidatos registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección popular.

Por su parte, el artículo 38, numeral 1, inciso o) del código comicial, impone la obligación a los partidos políticos de aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma legislación electoral⁷³, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 36 del mismo ordenamiento legal antes aludido.

⁷³ Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, el artículo 77, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que tendrá las siguientes modalidades: **1)** financiamiento público; **2)** financiamiento por la militancia; **3)** financiamiento de simpatizantes; **4)** autofinanciamiento y, **5)** financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

De lo anterior, se sigue que respecto del financiamiento público y privado de los partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas en las normas constitucional y legal antes citadas.

Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental.

Es por ello, que el artículo 41 de la Carta Magna otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y de campaña.

Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado en cuanto al destino de los mismos, en tanto que por definición, el financiamiento de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede ser corresponder con los fines señalado por la ley.

Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.

Expuesto lo anterior es de advertir que en las conclusiones **41, (...)**, el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso o), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra señala:

“(…)

Artículo 38

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

(...)

o) Aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas en este Código, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del párrafo 1 de artículo 36 de este Código;

(...).”

Esta norma prescribe que **los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad (público y privado) exclusivamente** para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar gastos de campaña, así como para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual el destino que pueden tener los recursos obtenidos por los partidos políticos nacionales por cualquier medio de financiamiento, precisando que dichos institutos políticos están obligados a utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de campaña, así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 36 del mismo código.

La naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental.

Es por ello, que el artículo 41 de nuestra Ley Suprema otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y de campaña.

Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra

limitado en cuanto al destino de los mismos, en tanto que por definición, el financiamiento de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede corresponder con los fines señalados por la ley.

Por tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.

En ese sentido, las faltas consistentes en la omisión de justificar el objeto partidista de diversos gastos realizados por concepto de eventos, transporte y propaganda, derivadas de la revisión del Informe Anual de los Ingresos y Gastos de los partidos políticos correspondientes al ejercicio 2012, por sí mismas constituyen una mera falta sustantiva o de fondo, porque con esa infracción se acredita la vulneración directa al bien jurídico tutelado de uso adecuado de los recursos de los partidos.

La realización de erogaciones por concepto de servicios funerarios, boletos de avión, coffe break, compra de urnas y mamparas, traslado de alumnos, capacitación a comisionados, pago de tenencia de 2 equipos de transporte, y compra de pintura vinílica, brochas, rodillos y 600 kgs de carne de res, aun y cuando el partido atendió las solicitudes de información de la autoridad electoral, todas sus manifestaciones se tornan en dichos, ya que no anexó documentación o evidencia alguna que acreditara el objeto partidista de dichos gastos, lo anterior, es así pues no justificó el gasto erogado actividad que por las circunstancias en que fue efectuada en el caso particular le corresponda llevar a cabo a un partido político nacional, ni mucho menos por sus características resulta idónea para atender los fines que le son conferidos constitucional y legalmente.

Cabe mencionar, que al momento de dar contestación a los requerimientos de la autoridad, el partido se limitó a presentar contratos y pólizas respectivas de gastos, sin embargo en dicha documentación no se acreditó el objeto partidista pues no vinculó el gasto con las actividades del partido, pues si bien acredita la erogación con contratos y pólizas, no motivó ni justificó el objeto partidista o en su caso, aportó elementos probatorio en los que se advierta alguna muestra, que permitiera a la autoridad verificar la aplicación de dicho gasto, limitándose a

señalar y presentar contratos de las operaciones, sin vincular dichos gastos a las actividades ordinarias del partido.

En consecuencia, al **omitir justificar el objeto partidista, respecto de diversos gastos realizados durante el ejercicio 2012, por concepto de eventos, transporte y propaganda**, el Partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso o), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de resultado.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación de las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el Partido Revolucionario Institucional incumplió con las obligaciones contenidas en el artículo 38, numeral 1, inciso o), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al haber destinado recursos de su financiamiento a un fin ajeno a los encomendados constitucionalmente.

En este punto, es importante recordar que el fin de la norma citada consiste en garantizar que los partidos políticos adecuen sus actividades a los fines que constitucionalmente tienen encomendados, a saber, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

En efecto, de conformidad con la normativa electoral, los partidos políticos para lograr sus cometidos, pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades:

a) Las políticas permanentes, y

b) Las específicas de carácter político electoral.

Dentro de las actividades contempladas en el primer rubro se encuentran las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la divulgación de su ideología y de su plataforma política), a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la integración de la representación nacional, así como a incrementar constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser realizadas de manera permanente.

Asimismo, dentro de este concepto de actividades que en forma permanente deben desarrollar los partidos políticos, deben tomarse en cuenta las relacionadas con actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y participe en la vida democrática del país.

Por otra parte, las que específicamente se relacionan con los comicios, son aquellas que se desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que serán postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su plataforma electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus candidatos registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección popular.

En este orden de ideas, se concluye que el valor jurídico tutelado y vulnerado en el caso concreto consiste en evitar que los partidos políticos desvíen su actividad de los fines que constitucionalmente tienen encomendados, garantizando con ello, el uso adecuado de los recursos con los que contó durante un ejercicio determinado.

Por lo tanto, en el caso concreto, las irregularidades imputables al Partido Revolucionario Institucional se traducen en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del aludido bien jurídico, es decir, la falta se actualiza al destinar recursos para el pago de servicios funerarios, boletos de avión, coffe break, compra de urnas y mamparas, servicio de desayuno y banquete completo, traslado de alumnos, capacitación a comisionados, pago de tenencia de 2 equipos de transporte, y compra de pintura vinílica, brochas, rodillos y 600 kgs de carne de res, sin que se acreditara el objeto partidista del mismo, lo que constituye la aplicación del financiamiento para fines ajenos.

En este sentido, toda vez que la norma transgredida funge como baluarte para evitar el mal uso de los recursos públicos, dicha norma es de gran trascendencia.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

El Partido Revolucionario Institucional cometió pluralidad de irregularidades que se traducen en la existencia de diversas **FALTAS DE FONDO**, en las que se viola el mismo valor común.

Cabe señalar que en el caso, existe pluralidad en las faltas cometidas en virtud de que del análisis integral del informe presentado por el Partido Revolucionario Institucional se advierte que en el apartado relativo al Informe de Anual del ejercicio 2012, inciso b), conclusiones 41, (...), se cometieron diversas irregularidades en las que se vulneró el mismo precepto normativo, en consecuencia se trata de una diversidad de faltas, las cuales, aun cuando derivan de conductas distintas, vulneran el mismo bien jurídico tutelado, esto es, el uso adecuado de los recursos de los partidos.

En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 342, numeral 1, incisos a) y l), del código electoral federal, lo procedente es imponer una sanción.

Calificación de la falta

Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

- Se trata de diversas faltas sustantivas o de fondo, toda vez que el Partido Revolucionario Institucional destinó recursos a actividades distintas a las encomendadas legal y constitucionalmente para el uso de los recursos. Lo anterior, en razón de que el partido omitió presentar documentación comprobatoria que justificara el objeto partidista de erogaciones por concepto de servicios funerarios, boletos de avión, coffe break, compra de urnas y mamparas, traslado de alumnos, capacitación a comisionados, pago de tenencia de 2 equipos de transporte, y compra de pintura vinílica, brochas, rodillos y 600 kgs de carne de res; al igual que se cometieron diversas irregularidades en las que se vulneró el mismo precepto normativo, tal y como se observa en las conclusiones 41, (...) de este apartado.

- Con la actualización de las faltas sustantivas que ahora se analizan, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, esto es, un uso adecuado de los recursos de los partidos políticos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVES ORDINARIAS**

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta cometida.

Este Consejo General estima que las faltas de fondo cometidas por el Partido Revolucionario Institucional, se califican como **GRAVES ORDINARIAS**

Lo anterior es así, en razón de que se trata de faltas de fondo o sustantivas en las que se vulnera directamente el principio del uso adecuado de los recursos de los partidos políticos, toda vez que el Partido Revolucionario Institucional, reportó gastos sin justificar el objeto partidista de éstos, considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de relevancia para el buen funcionamiento de la actividad fiscalizadora y el correcto manejo de los recursos de los partidos políticos.

En ese contexto, el Partido Revolucionario Institucional, debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de las irregularidades, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades que desplegó el Partido Revolucionario Institucional y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

En este orden de ideas, se precisa que el hecho de que un partido político utilice recursos obtenidos por cualquier forma de financiamiento para actividades ajenas a las señaladas en la Constitución, como son promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y,

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; vulnera el bien jurídico relativo a evitar que los partidos políticos desvíen su actividad de los fines que constitucionalmente tienen encomendados.

Debe considerarse que la descrita situación, vulnera el principio de certeza en el correcto uso de recursos públicos, toda vez que tiene la obligación de aplicar los recursos con los que cuenta para los fines señalados por la norma.

En ese tenor, las faltas cometidas por el Partido Revolucionario Institucional, son sustantivas y el resultado lesivo es significativo, toda vez que omitió presentar documentación comprobatoria que justificara el objeto partidista de diversos gastos realizados durante el ejercicio 2012, por concepto de eventos, transporte y propaganda, situación que, como ya ha quedado expuesto, vulnera el principio de uso debido de los recursos.

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido Revolucionario Institucional **no es reincidente** respecto de las conductas que aquí se han analizado.

III. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga, ya que mediante el acuerdo CG623/2016 aprobado por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral el pasado veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se le asignó un total de \$1,004,337.987 (Mil cuatro millones trescientos treinta y siete mil novecientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el año 2017.

En este tenor, es oportuno mencionar que el Partido Revolucionario Institucional está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y el Código Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral.

Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, obran dentro de los archivos de la autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Revolucionario Institucional, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual a deducir	Saldo
INE/CG198/2017-SEGUNDO-a)	FEDERAL	\$139,581.01	\$0.01	\$0.00
INE/CG808/2016-PRIMERO-a	FEDERAL	\$21,181.60	\$0.55	\$0.04
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-1	FEDERAL	\$38,404.44	\$38,404.44	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-2	FEDERAL	\$40,015.86	\$40,015.86	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-3	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-4	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual a deducir	Saldo
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-5	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-6	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-7	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-8	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-9	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-10	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-11	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-12	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-13	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-14	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-15	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-16	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-17	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-18	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-19	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-20	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-21	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-22	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-23	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-24	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-25	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
Total:		\$1,232,787.05	\$1,072,025.00	\$0.04

De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un saldo pendiente de \$.04 (cero pesos 04/100 M.N.) por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.

De lo anterior se desprende que, aun cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica; por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la Resolución de mérito.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 354, numeral 1, inciso a) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

Así las cosas, corresponde seleccionar una de las sanciones establecidas en el artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, finalmente, para cada uno de los supuestos contemplados en este apartado, pues se debe establecer la graduación concreta idónea para cada supuesto, a partir de los mínimos y máximos previstos para cada sanción aplicable.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de

modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos nacionales, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada falta analizada.

Conclusión 41

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, se desprende lo siguiente:

- La falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**.
- Con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- El partido político conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual.
- El partido político nacional no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$522,016.46 (quinientos veintidós mil dieciséis pesos 46/100 M.N.).

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- Que se trató de diversas irregularidades, es decir, se actualizó una pluralidad de conductas cometidas por el partido político.

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

La Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de Derecho.

Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.

En atención a esto último, la Sala Superior sostiene que la selección y cuantificación de la sanción concreta por parte de la autoridad electoral debe realizarse de forma tal, que pueda considerarse superior a cualquier beneficio obtenido, pues si éstas produjeran una afectación insignificante o menor en el infractor, en comparación con la expectativa de la ventaja a obtener con el ilícito, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime si en una primera sanción no resintió un menoscabo o, incluso, a pesar de ello conservó algún beneficio.

Por ello, la consecuencia del ilícito debe tomar en cuenta la necesidad de cumplir con una función equivalente a la restitución o reparación del beneficio obtenido, así como los que derivaron de su comisión, con la finalidad de que no se mantengan como parte del patrimonio del autor del ilícito, para que no se vea beneficiado de alguna forma por su comisión.

Incluso, considerar lo contrario, derivaría en un fraude a la ley, al permitir que una conducta ilícita sirviera como medio para que el que la cometa pueda obtener un beneficio, no obstante que fuera sancionado por la autoridad competente, conforme a las leyes aplicables al caso.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

De modo que, concluye la Sala Superior, ciertamente, en principio, es totalmente apegado a Derecho que las sanciones relacionadas con ilícitos derivados de ingresos o actos que finalmente se traduzcan en un beneficio para el infractor, sean sancionadas con un monto económico superior al involucrado.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que la sanción contenida en el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del partido político nacional infractor, una amonestación pública, sería poco idónea para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Las sanciones contempladas en las fracciones IV y V no son aplicables a la materia competencia del presente procedimiento.

Asimismo, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción prevista en la fracción VI consistente en la cancelación del registro como partido político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el Partido Revolucionario Institucional se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

De este modo una vez que se determinó el beneficio patrimonial obtenido, que en el caso fue de \$522,016.46 (quinientos veintidós mil dieciséis pesos 46/100 M.N.), y considerando la gravedad de la falta que fue grave ordinaria, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta y la norma (artículo 38, numeral 1, inciso o), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales), la pluralidad de conductas, la ausencia de dolo, la no

reincidencia de la conducta, y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas en un futuro, es que se determinó el monto al que deberá ascender la sanción impuesta.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al Partido Revolucionario Institucional debe ser mayor al monto del beneficio obtenido, en razón **de la trascendencia de las normas trasgredidas**, debido a que omitió presentar documentación comprobatoria que justificara el objeto partidista respecto de diversos gastos realizados durante el ejercicio 2012, por concepto de eventos, transporte y propaganda, lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al partido político, con una sanción económica equivalente al **cien por ciento** sobre el monto involucrado.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción II, inciso a) del artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a **6915 (Seis mil novecientos quince)** Unidades de Medida y Actualización⁷⁴ vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de **\$522,013.35 (Quinientos veintidós mil trece pesos 35/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del artículo 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, conclusiones: 76 y 79

(...)

⁷⁴ La multa impuesta en la presente resolución corresponde a los DSMGVDF para el ejercicio 2012, actualizándose al valor a la Unidad de Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2017 publicado en el Diario Oficial de la Federación el día nueve de enero del presente año, mismo que corresponde a \$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.).

Conclusión 79

“En la cuenta de Gastos de Propaganda, el partido reportó un gasto en el que omitió el contrato de prestación de servicios con su respectivo soporte documental por un importe de \$50,000.00”

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que violentan el artículo 149 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método y para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un sujeto obligado, y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

En relación con las irregularidades identificadas en las conclusiones (...) 79 del Dictamen Consolidado, se identificó que el Partido Revolucionario Institucional, omitió presentar una póliza con su respectivo soporte documental (...); asimismo, reportó gastos de la cuenta Gastos de Propaganda, en los que omitió el contrato de prestación de servicios con su respectivo soporte documental, por un importe de \$50,000.00, respecto de diversos gastos realizados durante el ejercicio 2012.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones del partido político, consistentes en haber incumplido con su obligación de comprobar los

gastos realizados durante el ejercicio 2012, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 149 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: El Partido Revolucionario Institucional reportó diversos egresos relativos a gastos realizados durante el ejercicio 2012; sin embargo, no presentó la documentación comprobatoria que acredite el gasto realizado y por tanto no se comprobó la erogación y el destino de los recursos públicos; según se especifica a continuación:

Descripción de la Irregularidad observada
(...)
79. <i>En la cuenta de Gastos de Propaganda, el partido reportó un gasto en el que omitió el contrato de prestación de servicios con su respectivo soporte documental por un importe de \$50,000.00.</i>

Como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de conductas realizadas por el Partido Revolucionario Institucional, por lo que para efectos de su exposición cabe referirnos a lo señalado en la columna (“Descripción de la Irregularidad observada”) del citado cuadro, siendo lo que en ella se expone el modo de llevar a cabo las violaciones al artículo 149 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron del estudio a través del procedimiento de revisión del Informe Anual, de los Ingresos y Gastos de los partidos políticos durante el ejercicio 2012.

Lugar: Las irregularidades se actualizaron en las oficinas de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, ubicadas en Avenida Acoxta número 436, Colonia Exhacienda de Coapa, Delegación Tlalpan, C.P. 14300, México, Distrito Federal.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del ente político para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del

citado ente para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por la omisión de presentar ante la autoridad fiscalizadora, la documentación comprobatoria de los gastos realizados a lo largo del ejercicio 2012.

Así las cosas, una falta sustancial de esta naturaleza trae consigo la falta de comprobación, o bien, impide garantizar el uso de los recursos, por consecuencia, se vulnera el principio de certeza en el uso de los recursos como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido vulneró el valor antes establecido y afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva, en razón de que al no comprobar los gastos erogados, la autoridad carece de certeza de que efectivamente se hayan realizado, pues no aportó la documentación comprobatoria que acredite lo manifestado por el partido.

En las conclusiones (...) **79** el instituto político, en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 149 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala:

(...)

“Artículo 149

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que expida a nombre del partido, agrupación, organizaciones de observadores u organización de ciudadanos, la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, con excepción de lo señalado en los artículos 164, 166 al 168 del Reglamento.”

(...)

El numeral primero del presente ordenamiento, tutela el principios de certeza en uso de los recursos que deben de prevalecer, al establecer con toda claridad que

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

los partidos políticos tiene las siguientes obligaciones: registrar contablemente sus egresos, soportar todos los egresos con documentación original que se expedirá a nombre del sujeto obligado, por parte de la persona a quien el partido efectuó el pago y entregar la documentación antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables, entre otras.

Ahora bien, dicho precepto legal, regula diversas obligaciones por parte de los institutos políticos, sin embargo por lo que respecta a la norma vulnerada en el presente apartado, es de señalarse que el (partido o coalición) deberá presentar la documentación comprobatoria que acredite que el egreso realizado posee un destino acorde con el objeto del partido político, esto con la finalidad de inhibir conductas ilícitas y contar con la transparencia del origen de los recursos utilizados para las actividades de los entes políticos.

En este tenor, es que se establece la obligación de los institutos políticos a presentar de manera clara y veraz la documentación que acredite la relación comercial entre los proveedores y/o prestadores de servicios, lo cual permite que exista un control de los egresos realizados por el ente político. Dicho de otra manera con la presentación de la documentación reconoce el gasto realizado y permite un estudio del mismo para verificar que no existe ilicitud en el objeto, motivo o fin del mismo.

Por lo que respecta a las conductas que se estudian, se debe señalar que si bien, puede asimilarse con un egreso no reportado, la diferencia principal radica en que del egreso no comprobado, la autoridad electoral tiene conocimiento, pues, fue reportado ante la autoridad fiscalizadora, pero en su caso no se comprobó dicho gasto en su totalidad o el partido no presentó la información soporte que permitiera considerar esa información como válida, pues, no se cuenta con elementos que permita determinar o validar el gasto; por tal motivo es que la conducta aquí estudiaba vulneró el principio de certeza en el uso de los recursos.

Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como obligación de los partidos políticos nacionales de rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera tal que tenga por objeto acreditar lo reportado, es inhibir conductas ilícitas que tengan por objeto y/o resultado de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con ello,

establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas infractoras que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

En ese entendido, el Partido Revolucionario Institucional tuvo un egreso no comprobado en tanto que la obligación de comprobar los gastos e ingresos emana del Reglamento de Fiscalización, el cual tutela la certeza en el uso de los recursos públicos de los partidos políticos, mismos que tienden a evitar que por la omisión de comprobar los gastos realizados, se presenten conductas que vayan en contra de la normatividad electoral.

De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el ejercicio en revisión se dio a los recursos que hayan recibido los partidos políticos, de determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.

Ahora bien, no se pasa por alto que la comprobación de los gastos realizados por el citado partido, trae aparejada la omisión por parte del mismo, respecto a la identificación de los egresos. Así, es que los egresos no comprobados son un incumplimiento directo del partido del deber de certeza del uso y aplicación de los recursos al que se encuentran sujetos.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el Partido Revolucionario Institucional, se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 149 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela de del principio de certeza en el uso de los recursos de los partidos políticos tutelados por la Carta Magna.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de resultado.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación de las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro

en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por las conductas señaladas en las conclusiones (...) 79, es la certeza en el uso de los recursos principio que debe imperar en la conducta de los partidos políticos en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades imputables al partido político nacional, se traducen en infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico tutelado, consistente en cumplir con su obligación de comprobar los gastos ejercidos durante el periodo fiscalizado.

Por lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en **dos⁷⁵ faltas de fondo** cuyo objeto infractor concurre directamente en tener certeza del destino de los recursos del Partido Revolucionario Institucional.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

Cabe señalar que en el caso, existe pluralidad en las faltas cometidas, en virtud de que del análisis integral de los informes presentados por el Partido Revolucionario Institucional, se advierte que en el inciso c), conclusiones (...) 79, se cometieron diversas irregularidades en el que se vulneró el mismo precepto normativo, en consecuencia se trata de una diversidad de faltas, las cuales, aun cuando derivan de conductas distintas, vulneran el mismo bien jurídico tutelado, esto es, la certeza en el uso de los recursos públicos.

En consecuencia, al actualizarse una pluralidad de conductas y que las faltas adquieren el carácter SUSTANTIVO o de FONDO, el partido en comento

⁷⁵ Toda vez que en la resolución se analizó también la conclusión 76, sin embargo al quedar intocada no se menciona en el presente acatamiento.

transgredió lo dispuesto en el artículo 149, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización.

En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 342, numeral 1, inciso I) del código electoral federal, lo procedente es imponer una sanción.

Calificación de la falta

Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

- Se trata de diversas faltas sustantivas o de fondo, toda vez que el Partido Revolucionario Institucional impidió a la autoridad fiscalizadora tener certeza sobre el uso y de los recursos erogados al no presentar la documentación comprobatoria que acredite el gasto realizado y por tanto no se comprobó la erogación y el destino de los recursos.
- Se cometieron diversas irregularidades en las que se vulneró el mismo precepto normativo, tal y como se observa en las conclusiones (...) 79 de este apartado, por lo que se incurrió en pluralidad de conductas
- Con la actualización de las faltas sustantivas se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, esto es, la certeza en el uso de los recursos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVES ORDINARIAS**.

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta cometida.

Este Consejo General estima que las faltas de fondo cometidas por el Partido Revolucionario Institucional se califican como **GRAVES ORDINARIAS**.

Lo anterior es así, en razón de que se trata de faltas de fondo o sustantivas en las que se vulnera directamente el principio de certeza en el uso de los recursos del partido, toda vez que el partido político omitió comprobar los gastos realizados durante el ejercicio 2012, considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de relevancia para el buen funcionamiento de la actividad

fiscalizadora y la correcta comprobación del uso de los recursos de los partidos políticos.

En ese contexto, el Partido Revolucionario Institucional debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

Debe considerarse que el hecho de que el partido no cumpla con su obligación de comprobar con la documentación soporte los gastos que realizó durante un periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera certeza respecto de éstos. Por lo tanto, no debe perderse de vista que las conductas descritas vulneran directamente el principios de certeza en el uso de los recursos con que cuenta el partido político.

En ese tenor, las faltas cometidas por el partido político son sustantivas y el resultado lesivo es significativo, toda vez que omitió presentar aquella documentación soporte que justificara egresos realizados durante el ejercicio 2012, situación que, como ya ha quedado expuesto, vulnera los principios de certeza en el uso de los recursos.

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido Revolucionario Institucional no es reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga, ya que mediante el acuerdo CG623/2016 aprobado por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral el pasado veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se le asignó un total de \$1,004,337.987 (Mil cuatro millones trescientos treinta y siete mil novecientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el año 2017.

En este tenor, es oportuno mencionar que el Partido Revolucionario Institucional está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral.

Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En este sentido, obran dentro de los archivos de la autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Revolucionario Institucional, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual a deducir	Saldo
INE/CG198/2017-SEGUNDO-a)	FEDERAL	\$139,581.01	\$0.01	\$0.00
INE/CG808/2016-PRIMERO-a	FEDERAL	\$21,181.60	\$0.55	\$0.04
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-1	FEDERAL	\$38,404.44	\$38,404.44	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-2	FEDERAL	\$40,015.86	\$40,015.86	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-3	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-4	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-5	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-6	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-7	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-8	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-9	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-10	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-11	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-12	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-13	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-14	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-15	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-16	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-17	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-18	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-19	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-20	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-21	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-22	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-23	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-24	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
INE/CG315/2017-VIGESIMO SEPTIMO-25	FEDERAL	\$43,200.18	\$43,200.18	\$0.00
Total:		\$1,232,787.05	\$1,072,025.00	\$0.04

De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un saldo pendiente de \$.04 (cero pesos 04/100 M.N.) por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tengan la obligación de pagar la sanción

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.

De lo anterior se desprende que, aun cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica; por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la Resolución de mérito.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 354, numeral 1, inciso a) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

Así las cosas, corresponde seleccionar una de las sanciones establecidas en el artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales y, finalmente, para cada uno de los supuestos contemplados en este apartado, pues se debe establecer la graduación concreta idónea para cada supuesto, a partir de los mínimos y máximos previstos para cada sanción aplicable.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos nacionales, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada falta analizada.

(...)

Conclusión 79

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, se desprende lo siguiente:

- La falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**.
- Con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

- El partido político conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual.
- El partido político nacional no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
- Que se trató de diversas irregularidades, es decir, se actualizó una pluralidad de conductas cometidas por el partido político.

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

La Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de Derecho.

Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.

En atención a esto último, la Sala Superior sostiene que la selección y cuantificación de la sanción concreta por parte de la autoridad electoral debe realizarse de forma tal, que pueda considerarse superior a cualquier beneficio obtenido, pues si éstas produjeran una afectación insignificante o menor en el infractor, en comparación con la expectativa de la ventaja a obtener con el ilícito, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime si en una primera sanción no resintió un menoscabo o, incluso, a pesar de ello conservó algún beneficio.

Por ello, la consecuencia del ilícito debe tomar en cuenta la necesidad de cumplir con una función equivalente a la restitución o reparación del beneficio obtenido,

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

así como los que derivaron de su comisión, con la finalidad de que no se mantengan como parte del patrimonio del autor del ilícito, para que no se vea beneficiado de alguna forma por su comisión.

Incluso, considerar lo contrario, derivaría en un fraude a la ley, al permitir que una conducta ilícita sirviera como medio para que el que la cometa pueda obtener un beneficio, no obstante que fuera sancionado por la autoridad competente, conforme a las leyes aplicables al caso.

En síntesis, con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que las sanciones que por este medio se imponen atienden a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En este sentido, la sanción contenida en el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción I del ordenamiento citado, no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención de los partidos políticos infractores, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Así las cosas, tomando en consideración lo antes expuesto, se tiene que las sanciones aludidas en las fracciones III de dicho precepto resulta excesiva para ser impuesta al Partido Revolucionario Institucional, toda vez que, dado el estudio de sus conductas infractoras, quebrantarían el fin específico de los entes políticos que es el desarrollo de la vida democrática en una sociedad.

Las sanciones contempladas en las fracciones IV y V no son aplicables a la materia competencia del presente procedimiento.

Asimismo, la sanción contenida en la fracción VI consistente en la cancelación del registro como partido político se estima aplicable cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el Partido Revolucionario Institucional se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos objetivos que rodean a la falta de fondo, debido a que el partido no presentó en la cuenta de Gasto de Propaganda un contrato de prestación de servicios, con su respectivo soporte documental, por un importe \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N), se llegó a la conclusión de que las mismas son clasificables como graves ordinarias, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta y la norma consiste en el artículo 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, la pluralidad de la conducta, la ausencia de reincidencia y dolo por tanto, el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evitar o fomentar el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al Partido Revolucionario Institucional debe ser mayor al monto del beneficio obtenido, en razón **de la trascendencia de las normas trasgredidas**, esto en razón de que el partido no presentó en la cuenta de Gastos

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

de Propaganda un contrato de prestación de servicios con su respectivo soporte documental, lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al partido político, con una sanción equivalente al 100% (ciento por ciento) sobre el monto involucrado.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción II, inciso a) del artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente **662 (Seiscientos sesenta y dos) Unidades de Medida y Actualización** vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de **\$49,974.38 (Cuarenta y nueve mil novecientos setenta y cuatro pesos 38/100 M.N.)**⁷⁶.

15. Comparativo de sanciones. A continuación se detallan las sanciones originalmente impuestas al **Partido Revolucionario Institucional en la Resolución CG190/2013**, en el **Punto Resolutivo SEGUNDO**, así como las modificaciones procedentes en términos de lo razonado en el presente acuerdo.

CG/190/2013 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL			
Conclusiones	Partido Político	Sanción original	Sanción final
Faltas formales	PRI	\$134,009.50	\$133,692.79

16. Comparativo de sanciones. A continuación se detallan las sanciones originalmente impuestas a los **partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México entonces integrantes de la otrora coalición Compromiso por México en la Resolución CG190/2013**, en el **Punto Resolutivo TERCERO**, así como las modificaciones procedentes en términos de lo razonado en el presente acuerdo.

CG/190/2013 COALICIÓN "COMPROMISO POR MÉXICO"			
Conclusiones	Partido Político	Sanción original	Sanción final
Faltas formales	PRI	\$261,786.00	\$257,043.45
	PVEM	\$65,446.50	\$64,241.99
32	PRI	\$3,501,698.30	\$2,511,461.71

⁷⁶ La multa impuesta en la presente resolución corresponde a los DSMGVDF para el ejercicio 2012, actualizándose al valor a la Unidad de Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2017 publicado en el Diario Oficial de la Federación el día nueve de enero del presente año, mismo que corresponde a \$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.).

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

CG/190/2013 COALICIÓN "COMPROMISO POR MÉXICO"			
	PVEM	\$875,424.58	\$627,865.43
45	PRI	\$1,453,060.38	\$21,362,917.42
	PVEM	\$363,259.24	\$5,340,729.35
50.3	PRI	-	\$2,751,066.12
	PVEM	-	\$687,766.53
228 BIS	PRI	-	\$51,198,202.54
	PVEM	-	\$12,799,550.63

17. Comparativo de sanciones. A continuación se detallan las sanciones originalmente impuestas a los **partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano entonces integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista en la Resolución CG190/2013**, en el Punto Resolutivo **CUARTO**, así como las modificaciones procedentes en términos de lo razonado en el presente acuerdo.

COA MOVIMIENTO PROGRESISTA				
Conclusión Monto involucrado		Conducta	Sanción original	Sanción en acatamiento
42		Aportación no identificada Determinación de costo promedio por barda.	\$506,306.59	\$336,908.00
Original	Acatamiento		PRD. Multa 4062 DS \$253,182.46	PRD. Multa 2230 UMA \$168,342.70
\$253,203.50	\$168,454.00		PT Multa 2112 DS \$131,640.96	PT Multa 1160 UMA \$87,568.40
			MC Multa 1949 DS \$121,481.17	MC Multa 1070 UMA \$80,774.30
			\$11,272,127.16	\$11,191,939.54
132			PRD. Reducción 0.44% \$5'636,063.58	PRD. Reducción 50% 5'595,969.77
Original	Acatamiento		PT Reducción 0.54% 2'930,753.06	PT Reducción 50% 2'909,904.28
\$5'636,063.58	\$5'595,969.77		MC Reducción 0.52% 2'705,310.52	MC Reducción 50% 2'686,065.49
219			\$191,353.10	\$127,348.00
Original	Acatamiento		PRD.	PRD.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

COA MOVIMIENTO PROGRESISTA				
Conclusión Monto involucrado		Conducta	Sanción original	Sanción en acatamiento
\$95,708.50	\$63,674.00		Multa 1,535 DS \$95,676.55	Multa 843 UMA \$63,638.07
			PT Multa 798 DS \$49,739.34	PT Multa 438 UMA \$33,064.62
			MC Multa 737 DS \$45,937.21	MC Multa 404 UMA \$30,497.96
394			\$2,741,289.26	\$2'669,921.26
Original	Acatamiento		PRD. Reducción 0.11% \$1,370,644.63	PRD. Reducción 50% 1'334,960.63
\$1'370,644.63	\$1'334,960.63		PT Reducción 0.13% \$712,735.21	PT Multa 9195 UMA \$694,130.55
			MC Reducción 0.13% \$657,909.42	MC Multa 8487 UMA \$640,683.63
157		Rebase de topes Presidencial	\$46,307,148.98	\$48,737,712.60
Original	Acatamiento		PRD. Reducción 1.22% \$15,435,716.32	PRD Sanción económica \$23,598,952.37 ⁷⁷
\$46,307,148.98	\$48,737,712.60		PT Reducción 2.82% \$15,435,716.32	PT Sanción económica \$12,671,805.27
			MC Reducción 2.99% \$15,435,716.32	MC Sanción económica \$11,697,051.02
277		Rebase de topes 2 Senadores	\$616,857.16	\$641,321.04
Original	Acatamiento		PRD. Sanción económica \$205,619.05	PRD Sanción económica \$320,660.52
\$616,857.16	\$641,321.04		PT Sanción económica	PT Sanción económica

⁷⁷ Cifra después de haber descontado el monto de \$769,903.93 que fue cobrado al partido político.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

COA MOVIMIENTO PROGRESISTA				
Conclusión Monto involucrado		Conducta	Sanción original	Sanción en acatamiento
			\$205,619.05	\$166,743.47
			MC Sanción económica \$205,619.05	MC Sanción económica \$153,917.04
378		Rebase de topes de 9 Diputados Federales	\$1'591,196.05	\$1'667,009.47
Original	Acatamiento		PRD. Sanción económica \$530,398.68	PRD Sanción económica \$833,504.73
\$1'591,196.05	\$1'667,009.47		PT Sanción económica \$530,398.68	PT Sanción económica \$433,422.46
			MC Sanción económica \$530,398.68	MC \$400,082.27

18. Comparativo de sanciones. A continuación se detallan las sanciones originalmente impuestas al **Partido Revolucionario Institucional en la Resolución CG242/2013**, en el Punto Resolutivo **SEGUNDO**, así como las modificaciones procedentes en términos de lo razonado en el presente acuerdo.

CG/242/2013 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL			
Conclusión	Partido Político	Sanción original	Sanción final
Faltas formales	PRI	\$169,896.87	\$172,721.12
41	PRI	\$899,141.41	\$522,013.35
77	PRI	\$146,101.52	Se incluye en formales
79	PRI	\$1,991,898.83	\$49,974.38

19. Determinación de sanciones Partido Revolucionario Institucional. De conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en los **considerandos 7 y 8** del Acuerdo de mérito, se modifican las sanciones relacionadas con las faltas formales del Partido **Revolucionario Institucional correspondientes a la Resolución CG190/2013**, Punto Resolutivo **SEGUNDO**, para quedar como a continuación se establece:

a) **68** faltas de carácter formal: **7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 53, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101 y 102** una multa consistente en **1771 (Mil setecientos setenta y uno)** Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de **\$133,692.79 (Ciento treinta y tres mil seiscientos noventa y dos pesos 79/100 M.N.)**.

20. Determinación de sanciones otrora coalición compromiso por México. De conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en los **considerandos 9 y 10** del Acuerdo de mérito, se modifican las sanciones relacionadas con las faltas formales y las **conclusiones 32 y 45** y se crean dos nuevas conclusiones identificadas como **50.3 y 228 bis** de la **otrora coalición Compromiso por México correspondientes a la Resolución CG190/2013**, Punto Resolutivo **TERCERO**, para quedar como a continuación se establece:

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el **considerando 9.3** de la presente Resolución, se imponen a los **Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México**, integrantes de la **otrora Coalición Compromiso por México**, las siguientes sanciones:

a) **142** faltas de carácter formal: conclusiones **7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 50, 52, 53, 54, 62, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217 y 218**.

I. **Partido Revolucionario Institucional:** una multa consistente en **3405 (Tres mil cuatrocientos cinco)** Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de **\$257,043.45 (Doscientos cincuenta y siete mil cuarenta y tres pesos 45/100 M.N.)**.

- II. Partido Verde Ecologista de México:** una multa consistente en **851 (Ochocientos cincuenta y un)** Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de **\$64,241.99 (Sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta y un pesos 99/100 M.N.)**.

(...)

- e).** Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (...), **32**, (...) **45**, (...).

(...)

Conclusión 32

- I. Partido Revolucionario Institucional:** una reducción del **50% (cincuenta)** de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$2,511,461.71 (Dos millones quinientos once mil cuatrocientos sesenta y un pesos 71/100 M.N.)**.
- II. Partido Verde Ecologista de México:** una reducción del **50% (cincuenta)** de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$627,865.43 (Seiscientos veintisiete mil ochocientos sesenta y cinco pesos 43/100 M.N.)**.

(...)

Conclusión 45

- I. Partido Revolucionario Institucional:** una reducción del **50% (cincuenta)** de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$21,362,917.42 (Veintiún millones trescientos sesenta y dos mil novecientos diecisiete pesos 42/100 M.N.)**.

- II. Partido Verde Ecologista de México:** una reducción del **50% (cincuenta)** de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$5,340,729.35 (Cinco millones trescientos cuarenta mil setecientos veintinueve pesos 35/100 M.N.)**.

(...)

- p)** Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **50.1, 50.2 y 50.3**

(...)

Conclusión 50.3

- I. Partido Revolucionario Institucional:** una reducción del **50% (cincuenta)** de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$2,751,066.12 (dos millones setecientos cincuenta y un mil sesenta y seis pesos 12/100 M.N.)**.

- II. Partido Verde Ecologista de México:** una reducción del **50% (cincuenta)** de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$687,766.53 (seiscientos ochenta y siete mil setecientos sesenta y seis pesos 53/100 M.N.)**.

(...)

- y)** Falta de carácter sustancial o de fondo: **conclusión 228 bis**.

- I. Partido Revolucionario Institucional:** una reducción del **50% (cincuenta)** de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$51,198,202.54 (Cincuenta y un millones ciento noventa y ocho mil doscientos dos pesos 54/100 M.N.)**.

II. Partido Verde Ecologista de México: una reducción del 50% (cincuenta) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$12,799,550.63 (Doce millones setecientos noventa y nueve mil quinientos cincuenta pesos 63/100 M.N.).**

21. Determinación de sanciones otrora coalición Movimiento Progresista. De conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en los **considerandos 11 y 12** del Acuerdo de mérito, se modifican las sanciones relacionadas con las conclusiones **42, 132, 219, 394, 157, 277 y 378** de la **otrora coalición Movimiento Progresista correspondientes a la Resolución CG190/2013**, Punto Resolutivo **CUARTO**, para quedar como a continuación se establece:

CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **9.4** de la presente Resolución, se imponen a los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrantes de la **otrora Coalición Movimiento Progresista**, las siguientes sanciones:

g) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión (...) **42**, (...)

Conclusión 42

I. Partido de la Revolución Democrática: una multa consistente en **2,230** (dos mil doscientos treinta) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a **\$168,342.70 (ciento sesenta y ocho mil trescientos cuarenta y dos pesos 70/100 M.N.).**

II. Partido del Trabajo: una multa consistente en **1,160** (mil ciento sesenta) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a **\$87,568.40 (ochenta y siete mil quinientos sesenta y ocho pesos 40/100 M.N.)**

III. Movimiento Ciudadano: una multa consistente en **1,070** (mil setenta) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a **\$80,774.30 (ochenta mil setecientos setenta y cuatro pesos 30/100 M.N.).**

(...)

Conclusión 132

I. **Partido de la Revolución Democrática:** una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$5'595,969.77 (cinco millones quinientos noventa y cinco mil novecientos sesenta y nueve pesos 77/100 M.N.)**.

II. **Partido del Trabajo:** una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$2'909,904.28 (dos millones novecientos nueve mil novecientos cuatro pesos 28/100 M.N.)**.

III. **Movimiento Ciudadano:** una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$2'686,065.49 (dos millones setecientos ochenta y seis mil sesenta y cinco pesos 49/100 M.N.)**.

ac) Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (...) **219**, (...).

Conclusión 219

I. **Partido de la Revolución Democrática:** una multa consistente en **843** (ochocientos cuarenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a **\$63,638.07 (noventa y cinco mil seiscientos setenta y seis pesos 55/100 M.N.)**.

II. **Partido del Trabajo:** una multa consistente en **438** (cuatrocientos treinta y ocho) Unidades de Medida y Actualización equivalentes a **\$33,064.62 (treinta y tres mil sesenta y cuatro pesos 62/100 M.N.)**.

III. **Movimiento Ciudadano:** una multa consistente en **404** (cuatrocientos cuatro) Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a **\$30,497.96 (treinta mil cuatrocientos noventa y siete pesos 96/100 M.N.)**.

aj) Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **394** y (...)

Conclusión 394

I. **Partido de la Revolución Democrática:** una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1'334,960.63 (un millón trescientos treinta y cuatro mil novecientos sesenta pesos 63/100 M.N.)**.

II. **Partido del Trabajo:** una multa consistente en **9,195** (nueve mil ciento noventa y cinco) Unidades de Medida y Actualización equivalentes a **\$694,130.55 (seiscientos noventa y cuatro mil ciento treinta pesos 55/100 M.N.)**.

III. **Movimiento Ciudadano:** una multa consistente en **8,487** (cuatrocientos cuatro) Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a **\$640,683.63 (seiscientos cuarenta mil seiscientos ochenta y tres pesos 63/100 M.N.)**.

w) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **157**.

Conclusión 157

I. **Partido de la Revolución Democrática:** una **sanción económica** consistente en **\$23'598,952.37 (veintitrés millones quinientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos 37/100 M.N.)** la cual deberá de ser pagada en una sola exhibición.

II. **Partido del Trabajo:** una **sanción económica** consistente en **\$12'671,805.27 (doce millones seiscientos setenta y un mil ochocientos cinco pesos 27/100 M.N.)** la cual deberá de ser pagada en una sola exhibición.

III. **Movimiento Ciudadano:** una **sanción económica** consistente en **\$11'697,051.02 (once millones seiscientos noventa y siete mil cincuenta**

y un pesos 02/100 M.N.) la cual deberá de ser pagada en una sola exhibición.

ae) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **277**

Conclusión 277

I. Partido de la Revolución Democrática: una **sanción económica** consistente en **\$320,660.52 (trescientos veinte mil seiscientos sesenta pesos 52/100 M.N.)** la cual deberá de ser pagada en una sola exhibición.

II. Partido del Trabajo: una **sanción económica** consistente en **\$166,743.47 (ciento sesenta y seis mil setecientos cuarenta y tres pesos 47/100 M.N.)** la cual deberá de ser pagada en una sola exhibición.

III. Movimiento Ciudadano: una **sanción económica** consistente en **\$153,917.04 (ciento cincuenta y tres mil pesos novecientos diecisiete pesos 04/100 M.N.)** la cual deberá de ser pagada en una sola exhibición.

al) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **378**

I. Partido de la Revolución Democrática: una **sanción económica** consistente en **\$833,504.73 (ochocientos treinta y tres mil quinientos cuatro pesos 73/100 M.N.)** la cual deberá de ser pagada en una sola exhibición.

II. Partido del Trabajo: una **sanción económica** consistente en **\$433,422.46 (cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos veintidós pesos 46/100 M.N.)** la cual deberá de ser pagada en una sola exhibición.

III. Movimiento Ciudadano: una **sanción económica** consistente en **\$400,082.27 (cuatrocientos mil ochenta y dos pesos 27/100 M.N.)** la cual deberá de ser pagada en una sola exhibición.

22. Determinación de sanciones Partido Revolucionario Institucional. De conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en los **considerandos 13 y 14** del Acuerdo de mérito, se modifican las sanciones relacionadas con las **faltas formales y las conclusiones 41 y 79** del Partido

Revolucionario Institucional correspondientes a la Resolución CG242/2013, **Punto Resolutivo SEGUNDO**, para quedar como a continuación se establece:

SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 2.2 de la presente Resolución, se impone al Partido Revolucionario Institucional, las siguientes sanciones:

a) 58 faltas de carácter formal: conclusiones **5, 6, 7, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 80, 96, 97 y 99.** Una multa equivalente a **2288 (Dos mil doscientos ochenta y ocho)** Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de **\$172,721.12 (Ciento setenta y dos mil setecientos veintiún pesos 12/100 M.N.)**

b) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **41, 57 y 74.**

Conclusión 41

Una multa equivalente a **6915 (Seis mil novecientas quince)** Unidades de Medida y Actualización⁷⁸ vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de **\$522,013.35 (Quinientos veintidós mil trece pesos 35/100 M.N.)**

(...)

c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (...) **79.**

(...)

Conclusión 79

Una multa equivalente a **662 (Seiscientos sesenta y dos)** Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma

⁷⁸ La multa impuesta en la presente resolución corresponde a los DSMGVDF para el ejercicio 2012, actualizándose al valor a la Unidad de Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2017 publicado en el Diario Oficial de la Federación el día nueve de enero del presente año, mismo que corresponde a \$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.)

que asciende a la cantidad de **\$49,974.38 (Cuarenta y nueve mil novecientos setenta y cuatro pesos 38/100 M.N.)**

23. Cobro de las sanciones. El financiamiento para actividades ordinarias de los partidos políticos es de vital importancia para llevar a cabo diversas actividades que están estrechamente vinculadas con los fines de los partidos políticos, como son la participación del pueblo en la vida democrática, el contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, **hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.**

Al respecto, la Sala Superior ha sustentado el criterio de que cualquier afectación al financiamiento de los partidos políticos es determinante para el resultado de las elecciones, cualquiera que sea la etapa del procedimiento electoral que se esté desarrollando, las que se rigen por el principio de definitividad.

En la resolución incidental del SUP-RAP-35/2012 y acumulados, la Sala Superior consideró que el comprometer los recursos financieros de los partidos políticos en el porcentaje que implican las sanciones, inclusive el destinado para sus actividades ordinarias, es razón suficiente para considerar que la afectación a su patrimonio puede vulnerar el principio de equidad, y en dado caso, ser determinante para el desarrollo de las elecciones.

Es decir, el razonamiento de la Sala Superior fue en el sentido de considerar que la negación o merma del financiamiento público, puede constituir una causa o motivo decisivo para que un partido político no lleve a cabo sus actividades, o no las pueda llevar a cabo de la manera más adecuada.

Al respecto, es importante señalar que a pesar de que los partidos políticos tienen destinado un financiamiento especial para gastos de campaña, lo cierto es que el financiamiento ordinario indirectamente también tiene repercusión en la elección, ya que si un instituto político no puede llevar a cabo libremente sus actividades ordinarias, como pudiera ser el mantenimiento de su infraestructura e instalaciones, difícilmente podrá participar de forma equitativa en la elección.

Considerando lo anterior, en el caso que nos ocupa nos encontramos ante una situación similar, pues al imponer y aplicar sanciones económicas que derivan de un proceso electoral federal, como lo es el celebrado en 2011-2012, cuya ejecución ha sido demorada por la naturaleza de los procesos de revisión, análisis

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

y discusión de la autoridades implicadas; se estaría vulnerando el principio de equidad en la contienda, lo que provocaría que los sujetos obligados sancionados, vieran afectada su participación en el procedimiento electoral federal 2017-2018.

Lo anterior, toda vez que la finalidad de legislador es que los partidos políticos tengan con el financiamiento adecuado para participar en los procedimientos electorales, ya que una afectación sustancial al financiamiento de los partidos políticos, durante el proceso electoral federal, puede afectar la equidad en la contienda y, en consecuencia, puede llegar a ser determinante para el resultado de la elección.

Por ello, el cobro de las sanciones relacionadas con el proceso electoral federal 2011-2012, tendrá efectos a partir del mes siguiente al de la jornada electoral del proceso electoral federal 2017-2018, es decir, agosto de dos mil dieciocho.

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se dejan sin efecto las sanciones impuestas a los **partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano** en la Resolución **CG242/2013**, aprobada por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil trece, relativa a la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2012, por lo que hace a los **Considerandos 2.3, inciso h); 2.4, inciso c) y 2.6, inciso e)** en relación a los Puntos Resolutivos, **TERCERO, CUARTO y SEXTO, conclusiones 73, 33 y 41**, respectivamente, para los efectos precisados en el **Considerando 11, apartado B** del presente Acatamiento.

SEGUNDO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado y la Resolución **CG190/2013**, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el quince de julio de dos mil

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

trece, relativa a la revisión de los Informes de Campaña de Ingresos y Gastos de los Candidatos a los cargos de Presidente, Senadores y Diputados Federales correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012, por lo que hace al **Partido Revolucionario Institucional** en los términos precisados en los **Considerandos 7, 8 y 19** del presente Acuerdo.

TERCERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado y la Resolución **CG190/2013**, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el quince de julio de dos mil trece, relativa a la revisión de los Informes de Campaña de Ingresos y Gastos de los Candidatos a los cargos de Presidente, Senadores y Diputados Federales correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012, por lo que hace a la **otrora coalición Compromiso por México** en los términos precisados en los **Considerandos 9, 10 y 20** del presente Acuerdo.

CUARTO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado y la Resolución **CG190/2013**, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el quince de julio de dos mil trece, relativa a la revisión de los Informes de Campaña de Ingresos y Gastos de los Candidatos a los cargos de Presidente, Senadores y Diputados Federales correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012, por lo que hace a la **otrora coalición Movimiento Progresista** en los términos precisados en los **Considerandos 11, 12 y 21** del presente Acuerdo.

QUINTO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado y la Resolución **CG242/2013**, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil trece, relativa a la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2012, por lo que hace al **Partido Revolucionario Institucional** en los términos precisados en los **Considerandos 13, 14 y 22** del presente Acuerdo.

SEXTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que cada una de las sanciones impuestas en el presente Acuerdo hayan quedado firmes, contado lo anterior a partir del mes de agosto de dos mil dieciocho por las razones expuestas en el **Considerando 23** del presente Acuerdo; los recursos obtenidos de las sanciones

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

económicas impuestas, serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables.

SÉPTIMO. Infórmese a la **Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación**, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a las sentencias emitidas en los expedientes **SUP-RAP-118/2013; SUP-RAP 119/2013; SUP-RAP-120/2013; SUP-RAP-121/2013; SUP-RAP-122/2013 y SUP RAP-123/2013 ACUMULADOS; SUP-RAP-124/2013; SUP-RAP-162/2013; SUP-RAP-164/2013; SUP RAP-166/2013; SUP-RAP-168/2013; SUP-RAP-171/2013; SUP-RAP-32/2014; SUP-RAP-33/2014 y SUP-RAP-35/2014 ACUMULADOS** relacionadas con la **Sección de Ejecución** referida en la sentencia SUP-RAP-124/2013, remitiéndole para ello las constancias atinentes.

OCTAVO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

NOVENO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 5 de septiembre de 2017, por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; asimismo no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-124/2013 Y OTROS**

Se aprobó en lo particular el Punto de Acuerdo Tercero en los términos del Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por siete votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; asimismo no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera.

Se aprobó en lo particular por lo que hace a que las sanciones involucradas sean descontadas al mes siguiente de que concluya la Jornada Electoral del 2018, de las prerrogativas de los partidos políticos, por siete votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; asimismo no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**